



CODIGO CIVIL

de la República Oriental del Uruguay

Ley N° 16.603 del 19/10/94

Prólogo a cargo del Dr. Américo Plá Rodríguez

Concordado y actualizado



**DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES
Y PUBLICACIONES OFICIALES**

PROLOGO

Se ha querido que estas palabras preliminares de la publicación del Código Civil no fueran escritas por un civilista, sino por un cultor de otra disciplina jurídica, pero que por haber ejercido un cargo universitario representativo de carácter general durante más de 4 años, puede invocar una visión panorámica de todo el derecho.

Pese a la circunstancia señalada, no cabe duda que la primera consideración a formular es que después de la Constitución, el Código Civil es el texto normativo de mayor importancia en el ordenamiento nacional.

Por su magnitud, por la amplitud de su aplicación, por la trascendencia de sus preceptos, por la venerable antigüedad de sus orígenes es el cuerpo jurídico de mayor significación a nivel legal.

Pero cabe destacar algo más profundo: el funcionamiento de todo el derecho se basa en la estructura normativa del derecho civil que se refleja en su Código. Tanto por lo que tiene que ver con las personas, y la familia como lo relacionado con el nacimiento de los vínculos jurídicos, como la normativa del patrimonio surgen nociones básicas sin cuyo conocimiento y adecuado cumplimiento no se puede circular por ninguna especialidad jurídica, por alejada o distante que parezca.

Si uno ignora una determinada rama del derecho, carece del conocimiento de la misma. Si uno ignora el derecho civil no puede conocer bien ninguna rama del derecho.

Y el símbolo de ese papel central que juega el derecho civil, lo constituye sin duda alguna, el Código Civil.

Por eso todo el proceso de codificación iniciado a principio del siglo XIX comienza en el Código Civil napoleónico que es el monumento histórico que influye en toda la civilización occidental y extiende su influencia por diversos caminos al mundo entero.

Un Código significa el instrumento ideal para regular toda una rama de la normativa jurídica en forma sistemática y completa. No sólo sirve para perfeccionar el conjunto de normas sino también para facilitar su conocimiento y su aplicación.

Supone y exige un esfuerzo técnico de primera magnitud para abarcar todos los temas con un criterio básico y sistemático. Pero la magnitud del esfuerzo y la armonía interior que circula por todos sus artículos y capítulos -que es una de sus principales riquezas- constituye también un peligro que puede convertirse en defecto. Es evidente que esa armonía de conjunto ofrece una resistencia al cambio, porque cualquier modificación puede romper la armonía del conjunto.

Y el derecho civil -como todo el derecho- está en estrecho contacto con la vida real, por lo que recibe el influjo histórico pero también el aporte impaciente de la realidad que refleja los cambios sociales, la aparición de nuevos hechos, la influencia de nuevas realidades. Si ello es siempre así, mucho más lo es en una época de tan acelerado ritmo histórico como la que estamos viviendo.

Código Civil

El Código Civil uruguayo fue preparado por Tristán Narvaja y revisado por una Comisión integrada por el autor del proyecto y por los Drs. Manuel Herrera y Obes, Florentino Castellanos, Joaquín Requena y Antonio Rodríguez Caballero que fue designada en 1866.

Basta pensar en todo lo que ha ocurrido en el país y en el mundo en estos 132 años para comprender que ese Código tuvo que sufrir diversas modificaciones y actualizaciones. La sabiduría de los cuerpos gubernamentales y legislativos consistió en realizar periódicamente ajustes y actualizaciones y confiarlos a personas de gran nivel técnico que por su capacidad y prestigio pudieron realizar su labor sin desmedro mayor de su armonía interior ni merma de la claridad y perfección verbal de cada una de sus normas.

Esos ajustes no siguieron un ritmo determinado ni se ajustaron a un esquema único en todas las ocasiones.

Uno de los primeros puntos que debe resolverse es si conviene confiar esa labor de armonización a una sola persona o a un equipo de varias personas. A favor de la primera solución militan razones de brevedad y sencillez. A favor de la segunda, la utilidad del intercambio de opiniones y perspectivas.

El 21 de abril de 1911, el Poder Ejecutivo optó por la primera solución, fundándola de la siguiente manera: “Que el nombramiento de una Comisión de jurisconsultos para llenar ese cometido ofrecería más inconvenientes que ventajas, por cuanto la pluralidad de personas no sólo sería obstáculo para la pronta conclusión de la tarea, sino que también lo sería para la unidad de criterio que debe presidir su ejecución. Es, por tanto, preferible, en este caso especial, la designación de una sola persona, de notoria competencia, que cumpla su cometido a la mayor brevedad”. En consecuencia, se encargó al profesor de Derecho Civil de la Universidad de la República, doctor Sergio del Castillo, la preparación de los originales para una edición del Código Civil, a cuyo texto deberá incorporarse, debidamente correlacionadas, todas las reformas adoptadas con posterioridad a la sanción del referido Código. Por ley 4.845 del 28 de abril de 1914 se aprueban las reformas introducidas al Código Civil por el Dr. Sergio del Castillo.

Setenta y dos años después, la ley 15.821 del 14 de agosto de 1986 opta por la otra solución: el nombramiento de una Comisión integrada por once miembros designados por la Suprema Corte de Justicia, dos por el Colegio de Abogados del Uruguay, dos por la Asociación de Escribanos del Uruguay, dos por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y tres por el Poder Ejecutivo uno de los cuales en carácter de Presidente.

Por resolución del 18 de marzo de 1988 se nombró a los Drs. Rafael Robatto, Eduardo Piaggio Soto y Daniel Bervejillo designados por el Poder Ejecutivo; Raúl Alonso De Marco y Manuel Mercant por la Suprema Corte de Justicia; los Drs. Eduardo Vaz Ferreira y Santiago Carnelli por el Colegio de Abogados; los Escribanos Eugenio Cafaro y Walter Pardías por la Asociación de Escribanos

del Uruguay y a los Drs. Jorge Gamarra y Enrique Arezo Píriz por la Facultad de Derecho.

Pese al esfuerzo, la laboriosidad y la disciplina de los integrantes, así como el nivel de prestigio de los mismos, se produjo uno de los riesgos que el PE en 1912 había previsto: surgió una división de opiniones que los miembros no pudieron superar presentando sobre un tema determinado - los artículos 2005, 2006 y 2007 referentes a la devolución de los bienes aportados por la esposa- tres soluciones distintas. Se presentaron los tres dictámenes para que el Parlamento resolviera. Aunque en el conjunto de los temas abordados por el Código parecería una discrepancia menor, no lo fue así por cuanto, pese a los esfuerzos realizados, no se llegó a un informe conjunto.

Comparando las fechas de los dos esfuerzos de actualización, llegamos casi a los 80 años, lo que significa una distancia muy larga para una época tan dinámica como la transcurrida en ese período. Esto requiere un esfuerzo muy difícil que desborda y supera la simple tarea de sustituir algunos textos por otros.

En el ilustrativo informe presentado por la Comisión Nacional instalada en 1988 se detallan los principales problemas planteados.

El primero es el de mantener o cambiar la numeración anterior. Se decidió mantener la misma numeración para facilitar la comparación con todas las referencias previas al momento de la actualización.

El segundo es el de fijar criterios generales sobre algunas modificaciones que se reiteran a lo largo del articulado: ajustar las denominaciones de organismos estatales que han cambiado de nombre; sustituir las referencias a escribanos por actuarios; eliminar las menciones individualizadas a determinados Juzgados o Registros incorporando, en cambio las expresiones “respectivo” o “competente”; sustituir las referencias a los demás códigos por expresiones genéricas como ley procesal, ley comercial, etc; suprimir las referencias extra código o de disposiciones derogadas; mantener las remisiones del texto a otros artículos del propio código.

El tercero fue la sustitución de las referencias del texto vigente a determinadas cantidades en pesos por otras expresadas en unidades reajustables.

El cuarto fue acompañar el Código Civil al espíritu de las disposiciones de los Pactos ratificados por la República, como por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El quinto fue el tema de la corrección monetaria. Dado el nominalismo estructural sobre el que se asienta el Código Civil y la legislación en general pero la importancia que ha adquirido la desvalorización en ciertos institutos como la colación, las recompensas y los alimentos forzosos, la Comisión prefirió encontrar soluciones puntuales en determinadas normas; sin perjuicio de advertir la necesidad de abordar en la futura etapa de una reforma a fondo del Código, tan acuciante cuestión.

Dada la gran cantidad de opciones que la Comisión debió decidir es muy probable que pueda discreparse con alguna de ellas. O dicho de otra manera: que no haya unanimidad de opiniones favorables en todas las opciones.

Código Civil

Pero lo que no cabe duda es que esta indispensable labor de actualización se realizó con seriedad, con meticulosidad y con un espíritu de respeto hacia la voluntad legislativa. Todos tenemos que agradecer a sus miembros la gran labor cumplida.

Una última palabra sobre la propia publicación.

El art. 4 de la ley 16.603 del 19 de octubre de 1994 cometió al Ministerio de Educación y Cultura la publicación de la edición oficial del Código Civil, con el informe de la Comisión Nacional que lo elabora así como las publicaciones ajenas al texto que contenía la edición oficial hoy corregida, la que se efectuará con cargo al Tesoro Nacional.

El art. 6 de la misma ley agrega: “El Poder Ejecutivo, previo informe de la Comisión Nacional designada por la ley 15.821 de 14 de agosto de 1986, podrá efectuar la corrección de los errores u omisiones numéricos o formales que se comprueban en la presente ley, dando cuenta a la Asamblea General”.

Por resolución del PE del 21 de noviembre de 1995 se aprobó el texto oficial del Código Civil (ley 16.603) con las correcciones efectuadas por la Comisión Nacional designada por la ley 15.821. Y el art. 2 comete al Ministerio de Educación y Cultura a través de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, la publicación de la edición oficial del Código Civil, con el informe de la Comisión Nacional que lo elaboró, así como las publicaciones ajenas al texto que contenía la edición oficial.

En cumplimiento de la referida resolución, se publica esta edición que además del texto tiene los antecedentes de la aprobación primitiva del Código, de las reformas que se le introdujeron, de la actualización de 1914 y del informe preparado por la Comisión Nacional. A ello se agrega un Apéndice Normativo compuesto por nueve normas legales y un Índice Alfabético de gran utilidad.

Dada la complejidad del proceso de aprobación del texto del Código, esta labor de publicación es particularmente delicada porque debe ser fiel, prolija y clara.

La Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales ha merecido la confianza necesaria como para cumplir esta tarea de responsabilidad que si lo es en caso de cualquier ley, lo es mucho más en un Código de esta extensión y complejidad y con este peculiar proceso de aprobación.

Creemos que la actuación que ha tenido dicha Dirección justificaba esa confianza y ahora que vemos realizada la labor encomendada lo podemos confirmar. Todos los uruguayos debemos estar agradecidos por esta tarea.

AMÉRICO PLÁ RODRÍGUEZ

**PRIMERA
PARTE**

**DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SANCIÓN
DEL CÓDIGO CIVIL Y SUS MODIFICACIONES**

**DOCUMENTOS RELATIVOS A LA
SANCION DEL CODIGO CIVIL
Y SUS MODIFICACIONES**

- I -

DECRETO DE 1866

Se encarga a la Comisión Codificadora, la revisión del proyecto de Código Civil del Dr. Eduardo Acevedo, corregido por el Dr. Tristán Narvaja; y la redacción de un proyecto de ley general de procedimientos.

GOBIERNO PROVISORIO

Montevideo, marzo 20 de 1866.

Habiendo concluido sus trabajos la comisión nombrada para la revisión del Código de Comercio y que ha sido promulgado debidamente; considerando la necesidad y conveniencia de completar los trabajos de legislación con la promulgación de un Código Civil que comprenda en un solo texto todas las disposiciones vigentes, con las correcciones que la práctica y el estudio de los jurisconsultos aconsejen; y considerando al mismo tiempo que es de la mayor urgencia simplificar el procedimiento de los juicios, tanto civiles como criminales y mercantiles, el Gobierno Provisorio en Consejo de Ministros, ha acordado:

Código Civil

Artículo 1º - La Comisión nombrada con fecha 5 de junio del año p. pdo., (1) a la que se agregará el Dr. don Joaquín Requena, procederá a la revisión del proyecto de Código Civil del doctor don Eduardo Acevedo y corregido por el doctor don Tristán Narvaja, presentando a la brevedad posible sus trabajos concluidos para su examen y correspondiente aprobación y promulgación.

- (1) La integraban los doctores Manuel Herrera y Obes, Florentino Castellanos, Tristán Narvaja, y Antonio Rodríguez Caballero y tenía por cometido revisar el proyecto de Código de Comercio del Dr. Eduardo Acevedo, cuya sanción legislativa se difería desde 1859. Habiéndose expedido a comienzos de 1866, el Gobierno Provisional promulgó de inmediato aquel Código y le asignó la tarea a que se refiere este decreto.

2º - La misma Comisión queda encargada de la redacción de un proyecto de ley general de procedimientos en los distintos juicios, tanto civiles como mercantiles y criminales, eliminando en lo posible de la legislación vigente las trabas que se oponen a la más pronta y eficaz administración de justicia. Dicho proyecto será igualmente presentado en oportunidad al Gobierno para los fines a que se refiere el artículo primero.

3º - Los miembros de la Comisión nombrada gozarán mientras dure su cometido, de la misma dotación acordada a los anteriores.

4º - Comuníquese, publíquese y dése al Registro competente.

VIDAL. - D. Zorrilla. - C. de Castro. - L. Batlle. - A. M. Márquez.

- II -

INFORME DE LA COMISION DE CODIFICACION DE 1867

COMISION DE CODIGOS

Excmo. Señor:

La Comisión de Codificación, nombrada por V. E., tiene el honor la singular

Informe de la Comisión de 1867

satisfacción de presentar a V. E. el proyecto de Código Civil Oriental, compuesto por el doctor don Tristán Narvaja, revisado, discutido y aprobado **artículo por artículo** por la Comisión.

Interesada ésta en corresponder a los patrióticos deseos de V. E. y anhelando también, por su parte, la adquisición de una reforma tan visiblemente reclamada por el país, se consagró sin demora a sus trabajos, pero apenas había terminado el examen y aprobación del primer libro del proyecto, cuando un accidente deplorable vino a interrumpir temporalmente sus tareas.

El doloroso fallecimiento del doctor don Florentino Castellanos, que privó a la Comisión de uno de sus miembros más distinguidos por su experiencia, su templanza y su ilustración, no pudo menos que dominar el ánimo de sus colegas, amigos y compañeros; pero, haciendo un esfuerzo en obsequio al interés público, volvieron a sus tareas, que por el enlace y conexión que tienen entre sí, les han ofrecido más de una ocasión de recordar al compañero perdido y de apoyar en sus ideas, que les eran conocidas, las que prevalecían en la Comisión.

Aunque ésta deseaba presentar el proyecto durante el Gobierno Provisorio de V.E., convencida de que obras de esta clase requieren muchos años de tiempo, como lo muestra la experiencia respecto de diferentes Códigos, habría tenido que abandonar aquel pensamiento si no hubiese mediado el empeño y extraordinaria asiduidad del autor del proyecto.

Para apreciarlos en toda su importancia basta confrontar este trabajo con los demás de su clase, y se conocerá que, lejos de haber servido de norma alguno de ellos, lo que facilitaría la obra, se han utilizado todos, tomando las disposiciones más adaptables al país y más análogas al sistema que se seguía. Este sólo punto basta para suscitar graves dificultades, y con razón ha dicho el inminente jurisconsulto argentino Vélez Sársfield: “que un sólo artículo de un Código puede decidir de todo el sistema que deba observarse en su composición o hacer imposible guardar un orden cualquiera”.

Sin embargo, el Código Civil Oriental, extraído de los distintos cuerpos de derecho que heredamos de España, y de todos los Códigos vigentes o en proyecto de los pueblos cultos, mantiene la unidad y la lógica en su sistema y bastante claridad en su método.

Los Códigos de Europa, los de América, y con especialidad el justamente elogiado de Chile, los más sabios comentadores del Código Napoleón, el proyecto del doctor Acevedo, el del señor Goyena, el del señor Freitas, el del doctor Vélez Sársfield han sido los antecedentes sobre que se ha elaborado la obra que hemos revisado, discutido y aprobado. El proyecto del señor Freitas (incluso aún) es el trabajo más notable de codificación, por su extensión y por el estudio y meditación que revela, y el mismo doctor Vélez Sársfield dice: “que de él ha tomado muchísimos artículos”; pero el autor del proyecto del Código Oriental, doctor Narvaja y la Comisión revisora, aunque tributan el homenaje de su respeto a la reputación científica de estos jurisconsultos, solamente han tomado de sus trabajos lo que podía acomodarse a su sistema, prefiriendo también la sencillez del Código al cuidado de legislar para casos que pueden ser resueltos por las disposiciones generales o conexas del Código.

La Comisión, de acuerdo con el autor del proyecto, se ha dedicado especialmente a procurar que guardase armonía con el Código de Comercio, en cuanto lo permite la naturaleza diversa de las materias, y ha procurado reducir a disposiciones legales varios puntos que corrían como doctrina, y resolver las graves cuestiones que debaten los jurisconsultos, optando por las opiniones más ajustadas a los principios, a la equidad y a nuestras costumbres. Sobre este particular el proyecto contiene artículos muy notables.

Los estrechos límites asignados por su naturaleza a este Informe, y la urgencia con que debe ser elevado a la consideración de V.E. impiden a la Comisión detenerse en la enumeración detallada y extensamente fundada de las reformas que contiene el proyecto de Código; indicará, pues, sucintamente las más trascendentales y algunas de las razones que las ha motivado.

§ I

El Título Preliminar comprende esas máximas de derecho que, consagradas por los pueblos civilizados, son como los prolegómenos de todos los Códigos modernos, y está destinado a reparar las graves omisiones y defectos de que adolece la legislación que aún nos rige, y que no siempre pudo ser suplida por la jurisprudencia.

Informe de la Comisión de 1867

Empieza el Libro Primero, cuyo objeto son las personas, por proclamar la supresión de toda diferencia **entre ciudadanos y extranjeros con respecto a la adquisición y goce de los derechos civiles**. Este pensamiento ha precedido de hecho, y como principio a la formación del proyecto; pues, que en nuestra joven República, desde los primeros albores de su independencia, y con excepción de los **derechos políticos** (de que el proyecto no se ocupa ni debía ocuparse), nunca se hizo distinción de personas por razón del lugar de su nacimiento.

Más era preciso consignar de un modo expreso, en el futuro Código, este hermoso principio que refleja fielmente, la liberalidad de nuestras costumbres, en armonía con las leyes e instituciones generales del país.

Así, no era necesario decir que la odiosa ficción llamada **muerte civil**, no mancha las páginas del proyecto del Código Oriental.

La misma liberalidad se advierte en el Título II que trata **del domicilio**, sobre cuya materia se dan reglas claras y simples, evitando la confusión que las leyes de Partidas y de Recopilación hicieron del domicilio civil o vecindad, con la **naturaleza** o ciudadanía.

El sabio jurisconsulto Goyena, refiriéndose a la legislación vigente aún entre nosotros, ha dicho: “Parece imposible que el estado civil de las personas, y los medios de probarlo, no estuviesen sujetos a reglas fijas, y sin embargo, no se encuentre una sola ley precisa o concreta a esto”.

El Título III del proyecto viene a llenar vacío tan deplorable, y además se encuentran en él consignadas las bases fundamentales del futuro derecho sobre los registros del estado civil, cuyas disposiciones de pormenor deja el artículo 45 para una ley especial, siguiendo el ejemplo de algunos de los más acreditados Códigos modernos.

La Comisión, de acuerdo con el autor del proyecto sobre tan importante y delicada materia, ha creído que, sin perjuicio de la interferencia que compete a la autoridad política para asegurar la autenticidad de las actas del estado civil en general, era menester dejar en manos de los párrocos los registros concernientes a los católicos; encargando a funcionarios del orden judicial en cada departamento, los relativos a individuos disidentes.

A esta separación conduce naturalmente la otra que se hace en el Título V, **Del Matrimonio**, y de que se hablará en seguida.

Por lo demás, el sistema que mantiene los registros en manos del clero, es el que se sigue hoy todavía en la mayor parte de los Estados de Europa. Aún en aquellos países en que el catolicismo fue abolido o dejó de reinar como religión del Estado, los legisladores hubieron de creer que fuera del clero heterodoxo, y aún del católico, no hallarían fácilmente personas más hábiles y seguras a quienes encomendar las delicadas funciones de oficiales del estado civil. Baste citar el ejemplo de Inglaterra.

Sin detenerse la Comisión en el Título IV, **De los ausentes**, que viene a llenar otro vacío en la actual legislación pasará al ya citado Título V, **Del Matrimonio**, siquiera con el objeto de dar una idea sucinta de su importancia y novedad.

Los individuos de las creencias religiosas distintas de la católica se encuentran en la República en una situación bien desfavorable, pues las leyes vigentes no reconocen ni atribuyen efectos civiles, sino al matrimonio celebrado con arreglo a las prescripciones del Concilio Tridentino. Semejante estado de cosas debía cesar, por justicia, en nombre del progreso y de la libertad; pero es preciso no olvidar que estas mismas consideraciones y las conveniencias sociales mejor entendidas se aúnan para exigir que, proveyendo a los disidentes del medio de legitimar sus enlaces, se respete al mismo tiempo la creencia católica, que es la de gran mayoría del país, aún cuando esta creencia no fuese, como es, la religión del Estado. De ahí la acertadísima separación que V.E. verá que hace el proyecto, del matrimonio católico y del civil otorgado por la ley a los individuos disidentes del culto católico, **sin excepción**.

Es el principio adoptado primeramente por el señor Freitas en su proyecto de Código Civil para el Imperio del Brasil, y después por el señor Vélez Sársfield en el suyo para la República Argentina. Sin embargo, la Comisión no puede menos de observar que los desenvolvimientos que ese principio recibe en el proyecto de Código Oriental, y la reglamentación del matrimonio civil, sin menoscabo alguno de las prerrogativas de la Iglesia, hacen del Título V, que nos ocupa, uno de los más notables de toda la obra, y que acaso contiene, permítasenos decirlo, una solución de las graves dificultades que en todos los

pueblos modernos ha suscitado y sigue suscitando la cuestión de la secularización del matrimonio.

Corresponde también a este Título otra importante reforma, que es la supresión de las **reservas o reservaciones de bienes**, a que estaba sujeto el viudo o viuda que pasaba a segundas nupcias. Esta institución, que tuvo su origen en los tiempos de decadencias de Roma, y no pudo aclimatarse en España sino cuando, corrompido el estudio del derecho, se tomaron los Códigos Bizantinos como el único depósito de justicia y de ciencia, queriendo que preponderasen sobre las tradiciones y las leyes patrias; la institución de las reservas, decimos, incompatible con los principios de derecho y economía pública, a más de ser contraria a la ley de las familias, ha sido justamente relegada a la historia.

Los Títulos VI a XI, comprensivos de las materias más interesantes del Código Civil **la paternidad y filiación - la adopción - la patria potestad - la habilitación de edad - la tutela - y la curaduría** han sido objeto de numerosas reformas; pero consistiendo éstas, en su mayor parte al menos, en los pormenores que la sola lectura del proyecto puede dar a conocer, la Comisión se limitará a indicar y motivar las principales.

Son importantes las excepciones que el proyecto hace a la regla **Is pater est...**, de conformidad con la jurisprudencia francesa y la doctrina de los autores modernos de más nota.

En este proyecto no se conoce otra legitimación de hijos naturales que la que produce el subsiguiente matrimonio de los padres. Es en efecto, un **anacronismo** la legitimación por cédula o rescripto del soberano, aunque éste sea el Poder Legislativo.

La legislación actual sobre las pruebas de la filiación natural, no sólo es un manantial perenne de dudas, sino que da lugar a graves injusticias en sus aplicaciones: la reforma en este punto es urgentísima, la que propone el proyecto (Sección, Segunda, cap. II Título VI), es radical y acertada a juicio de la Comisión. Para cerrar la puerta a una muchedumbre de pleitos escandalosos, que un sabio jurisconsulto español ha llamado justamente **oprobio de la justicia y desolación de la sociedad**, el proyecto exige que el reconocimiento del hijo natural se haga precisamente por escritura pública entre vivos, o por

testamento; y proclamando el principio prohibitivo de la indagación de la paternidad, menos en el caso de raptó, admite la indagación de la maternidad, con ciertas precauciones.

Esta diferencia que hace el proyecto entre la filiación paterna y la materna, tiene un fundamento que es obvio. La paternidad es un misterio de la naturaleza encubierto además por las costumbres, en el que no puede penetrar la justicia humana sino a riesgo de equivocarse con frecuencia; pero la maternidad no suele ser un hecho tan misterioso, y deja tras sí algunas pruebas concluyentes; no hay, pues, tanto peligro de error en indagarla. De aquí la doctrina del Código Francés, que es la misma del proyecto, y a juicio de la Comisión, la más fundada y razonable, y cuyos inconvenientes son menores que los de otros sistemas conocidos.

El proyecto mantiene la adopción, y lo mismo hace en el suyo el respetable jurisconsulto brasileño señor Freitas. La adopción será innecesaria, será indiferente, pero no podemos conceder que sea perjudicial ni que deba suprimirse. Supóngasela despojada del interés y de los grandes efectos que producía en Roma: ¿es o no verdad que puede producir algunos? y entonces, ¿por qué abolir lo que sin causar daño puede en un caso ser útil?. Las instituciones se recomiendan por su historia pero no todas las veces a expensas de su pasado; la razón histórica abandona con frecuencia muchas de sus obras; la justicia es una razón de siempre, y nunca desampara las creaciones del derecho.

A la objeción que suele hacerse de que la adopción no está en nuestras costumbres, se ha anticipado a contestar un ilustre orador francés, observando la diferencia esencial que hay entre las leyes imperativas y las de simple facultad. “Cuando, dice, se quiere dictar leyes puramente preceptivas, entonces conviene en cuanto sea posible, ver los hombres tales como son. Mas no debemos ser tan rigurosos con aquellas otras leyes que no son más que facultativas, ya que podemos mirar los hombres tales como deberían ser, complaciéndonos con la idea de que de esta suerte los conduciremos mejor al término a que se desea llegar. Semejantes leyes deben ser miradas como las compañeras de las costumbres, y lejos de aumentar su corrupción, como pretenden algunos de los que no han meditado en la diferencia que acabo de hacer, las mejoran y purifican”.

Por lo demás, la adopción que organiza el proyecto, difiere esencialmente de la francesa, y más bien se asemeja a la adopción prusiana; debiendo notarse que por el proyecto no se iguala la ficción con la realidad o la adopción con la filiación legítima y natural. Así, la adopción no tendrá los inconvenientes que han hecho que algunos la rechacen, y será indudablemente más benéfica y moral.

Una de las grandes omisiones cometidas por los legisladores de la ex metrópoli, consisten en no haber fijado el término de la patria potestad cuando el hijo no sale de ella por el matrimonio o por la emancipación.

Para llenar este lamentable vacío, declara el proyecto, que la potestad de los padres se acabará también con la mayor edad de los hijos, **sin perjuicio de lo dispuesto en el título Del Matrimonio.**

En seguida, el proyecto reproduce dos importantes innovaciones que habían sido propuestas por el ilustre jurisconsulto oriental doctor Acevedo, arrebatado temprano a la ciencia y a su país. Es la primera la que fija **a los veintiún años cumplidos la mayor edad**, que el derecho romano y de las Partidas retrasaron a los veinticinco.

Habiendo de ser la mayoría el término de la patria potestad y de la tutela, no convenía ciertamente a los intereses del individuo, ni al interés general de la sociedad, que aquélla se prolongase hasta los veinticinco años, como lo convencen los elocuentes discursos 35 y 36 al artículo 388, y los 38 y 39 al artículo 488 del Código Francés; encontrándose también en ellos desvanecidas las objeciones sacadas de la inexperiencia y fogosidad de la juventud, así como desenvueltas las causas que en los pueblos modernos han acelerado y perfeccionado su educación.

Otra razón más tuvieron los legisladores franceses, y que, siendo perfectamente aplicable a nosotros, cumple no pasarla en silencio, a saber: que es lógico hacer coincidir la mayoría política con la civil.

En esto el proyecto conviene no sólo con el Código Francés, sino también con el de las dos Sicilias, el de Cerdeña, la legislación inglesa y la de los Estados Unidos.

La segunda innovación tiene por objeto restablecer la autoridad natural y legítima de la madre, **declarando que ella sucede al padre en la patria potestad, con todos sus derechos y obligaciones.**

No todos los Códigos modernos han creído que debían reparar la injusticia hecha por las leyes romanas a la madre, y algunos hay que conceder esa reparación de un modo incompleto, a medias. El proyecto proclama el principio con todas sus consecuencias.

Durante el matrimonio, y, mejor dicho, ejerciendo el marido el patrio poder, es forzosamente pasivo el rol de la mujer: con que tenga la intervención propia de su estado, logre hacerse escuchar e influya, como no puede menos, con su consejo, basta: libre de otra responsabilidad, queda expedita para los quehaceres domésticos y declina sobre su marido el peso de otras atenciones. Pero ¿qué derecho hay para alejarla, postergándola quizás a un extraño, el día que sea viuda, o también sin eso, el día que su marido incurra en la pérdida o suspensión de la patria potestad? ¿Tienen las madres menos cariño que los padres por sus hijos? El señor Goyena, en sus **Concordancias**, hace estas mismas preguntas y recuerda muy oportunamente la admirable ley goda (1ª, tít. 3º, lib. 4, Fuero Juzgo). El señor doctor Vélez Sársfield con su acostumbrada lucidez, funda también la resolución del proyecto que nos ocupa.

La **reunión de la tutela y curaduría de los menores** es otra novedad del proyecto. El Fuero Juzgo y el Real hablan únicamente de tutores. Las romanizadas leyes de Partidas establecieron una diferencia desconocida hasta entonces, y que, a más de no fundarse en razón alguna, ocasiona confusión y dudas sobre si los púberes pueden o no ser obligados a recibir curador, sobre la validez o nulidad de sus actos en uno y otro caso, sobre ser necesaria en unos la restitución, por reputarse válidos, y en otros no, por reputarse nulos.

Los Códigos modernos excluyen casi unánimemente la distinción romana de tutores y curadores dentro de la menor edad. En fin, el haberse acertado ésta por el proyecto, y franqueado los medios legales de la emancipación y habilitación de edad, son otros motivos más que justifican aquel desvío del derecho romano y patrio.

Así el proyecto deja la curaduría únicamente para los mayores de edad incapaces de administrar por sí mismo sus bienes; no contándose entre esto, bien entendido, **los pródigos**, cuya interdicción no se admite, por incompatible con el estado de nuestras costumbres, y por ser opuesta al principio de la libertad individual, consignado en la Constitución de la República.

Por lo demás, el proyecto mantiene la triple tutela **-testamentaria, legítima y dativa-** que no ha menester entre nosotros carta de naturaleza. Conviene en esto con el Código de Chile, cuya autoridad es grande sin duda, y con el ejemplo respetable de los proyectos Freitas y Vélez Sársfield.

La simple lectura de los Títulos X y XI del Proyecto de Código Oriental convence que se ha legislado cuidadosamente la gestión de la tutela y la curaduría, conservando en cuanto era posible, y sin perjuicio de las innovaciones, el espíritu y la contextura de la legislación vigente.

La Comisión, de buen grado descendería a ciertos detalles, pero teme que su informe pueda parecer un comentario, y no es llamada a hacerlo.

§ II

El Libro Segundo, que trata de los **bienes y del dominio o propiedad** contiene seis títulos, cuatro de los cuales son comunes a todos los códigos modernos.

Estos cuatro títulos comprenden las materias siguientes: 1º de la división de los bienes; 2º del dominio; 3º del usufructo, uso y habitación; 4º de las servidumbres.

El Título I es notable, no sólo por los principios que consagra, sino también por la solución que en él se da a varias cuestiones que la ciencia ha traído modernamente al debate. Baste hacer mención de la que versa sobre **la propiedad de las aguas corrientes**. El artículo 430 número 3º, caracterizando los ríos y arroyos navegables o flotables, prueba no haberse tenido en vista la época actual o cualquiera otra determinada, al decir **en que la navegación o flote sea posible natural o artificialmente**, y que, por el contrario, se ha sabido apreciar esta observación de Foucart (“Elementos de derecho administrativo”, tomo 3º) “que un país cuya legislación no pusiere en el dominio público sino las aguas corrientes navegables en una época dada, luchará con las mayores dificultades para desenvolver más tarde su sistema de navegación, y no lo podrá hacer sino con inmensos sacrificios”.

En el Título II, al lado del derecho de dominio, cuyos caracteres esenciales se fijan, hace figurar el proyecto la expropiación por causa de utilidad pública, como limitación de ese derecho. Casi todas las disposiciones sobre el particular son tomadas de la ley vigente, promulgada por V. E. en 18 de octubre de 1866.

Una de las materias más incompletas de nuestras leyes, y sobre la cual apenas tenemos otra cosa que opiniones de autores, algunas contradictorias, y decisiones del derecho romano, es la relativa a las desmembraciones del dominio, llamadas usufructo, uso y habitación. El Título III tiene por objeto llenar ese vacío.

Debe decirse lo mismo, y con más razón, respecto del Título IV, en que se trata extensamente de la materia de servidumbres. Aunque tiene por base la legislación francesa, la varía en algunos particulares siendo, además, de notarse que adopta el principio del Código Sardo, o sea **la servidumbre legal de acueducto**, en el interés de la agricultura y de la industria.

El proyecto añade los títulos de la **posesión** y la **reivindicación**; materias una y otra, íntimamente unidas con la propiedad. En favor de este método, a más del sentir de algunos respetables jurisconsultos, puede invocarse el ejemplo del Código de Chile. “Se equivocaría extrañamente, dice Belime “*Traité du droit de la possession*”), quien creyese que las acciones posesorias corresponden a la materia procesal, porque el legislador se ha ocupado de ellas en el Código de Procedimientos. Estas acciones entran en los dominios del derecho civil, como la prescripción, como el derecho de propiedad, como la reivindicación, de la cual ellas son muchas veces el auxiliar indispensable”.

El influjo saludable que en el terreno de la práctica tendrán los Títulos V y VI del proyecto, una vez elevado éste a ley de la República, no es dudoso para la Comisión.

Particularmente la materia de posesión dejará de ser lo que es entre nosotros -un laberinto- debido a los vicios de la ley y a las sutilezas de los comentadores. De éstos ha dicho el señor Savigny “que hay algunos que, o dan en la desesperación, o se pierden en lamentaciones, a causa de las dificultades casi invencibles que encuentran para tratar de la posesión”.

En efecto, después de siglos, no se ha llegado a fijar la verdadera significación de las palabras **posesión civil y natural**.

Algunos entienden por posesión **civil**, la que se funda en título, y por **natural**, la que carece de él.

Según otros, posesión civil es la del dueño que posee por medio de su arrendatario, especie de posesión que, separada del hecho de la detentación, no consiste sino **in jure**; por el contrario, posee naturalmente aquél que retiene el fundo por sí mismo.

Posesión natural llaman algunos autores al hecho ordinario de retener con ánimo de dueño, y reservan el nombre de posesión civil para aquél que, dejando de cultivar la heredad que posee, retiene, sin embargo, la posesión por una ficción del derecho, porque tiene el designio de conservarla, aunque no posea ya **actu**, por hechos visibles y exteriores.

Otros califican de posesión civil la que produce efectos civiles, es decir, según ellos, la prescripción y los interdictos; mientras que reputan poseedores naturales a los arrendatarios, los depositarios y los demás tenedores por otro, que en realidad no poseen verdaderamente.

El proyecto repudia esa división romana -en posesión civil y natural- y toda la terminología de las escuelas que no tiene otro fundamento que un orden de cosas que dejó de existir hace más de mil años. Según el sistema que sigue el proyecto, toda posesión propiamente dicha, produce efectos civiles más o menos; la posesión **animus domini** es siempre una posesión civil. Son cosas distintas: la mera tenencia, la posesión, el derecho de posesión y el derecho de poseer.

En cuanto a las disposiciones de pormenor que contiene el proyecto en sus Títulos V y VI, han sido tomadas de las mejores fuentes, y esta Comisión las considera adecuadas a las circunstancias y necesidades del país.

§ III

En el Libro Tercero se considera el dominio con respecto a los diferentes modos de adquirirlo, y el artículo 667 enumera éstos diciendo que son: **la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción.**

Como se ve, el proyecto resuelve en el mismo sentido que el artículo 712

francés, la cuestión debatida por algunos escritores, en cuanto a la naturaleza del derecho de accesión. En la mayor parte de los Códigos se sigue la teoría contraria, y la accesión es mirada como un efecto del derecho de propiedad, lejos de contarse entre las causas legales de su adquisición. Sin embargo, pudiendo decirse que esa cuestión es más bien especulativa, ya que no se duda que en la realidad material de las cosas, la unión con la principal confiere la propiedad de la accesoria; y, por otra parte, hallándose de acuerdo la teoría del Código Francés con la doctrina casi unánime de nuestros tratadistas, no se debe extrañar la preferencia que a dicha teoría se da en el proyecto.

Además, éste se ha guardado bien de incurrir en el grave defecto de clasificación que se puede reprochar al Código Francés, a saber: que aceptando la accesión como uno de los modos de adquirir el dominio, trate, sin embargo, de ella en el Libro Segundo, en vez de hacerlo en el Tercero.

El proyecto resuelve otra cuestión que es verdaderamente de trascendencia: la que versa sobre la necesidad de la tradición. El derecho romano consideró insuficientes las convenciones para transmitir por sí solas el dominio de las cosas, distinguiendo cuidadosamente **el título y el modo**; el contrato sin la tradición no transfería el dominio. La doctrina romana pasó al Código de las Partidas, sin que en tan largo espacio haya ocurrido nada que decir de esas leyes, nada que oponer a aquella teoría.

El Código Civil de Francia, por el contrario, abandonó el principio de la tradición, mirándole como una de tantas sutilezas del derecho romano; el artículo 711 establece **que la propiedad se transmite por el efecto de las obligaciones**; y conforme a esta regla, los artículos 1138 y 1583, declaran que el comprador o contratante se **hace propietario** desde el momento del contrato, sin ser necesaria la tradición.

No siendo la propiedad un hecho sino un derecho, un producto de la ley, sin duda que puede establecerse en un Código que esta propiedad se transfiera por la sola voluntad de las partes en virtud de la ley, y sin hecho alguno exterior; éste es un sistema; pero ¿será verdadero?, y después ¿será preferible al de nuestra legislación actual?

En cuanto a lo primero, no puede haber verdad en un sistema que desconoce

la esencia de la obligación: que de un modo de obligarse hace un modo de adquirir: **naturam invertit**. En efecto, la convención o la obligación que de ella nace, no liga sino a las personas, ella compele a **dar, hacer, o no hacer**; no constituye, pues, sino una deuda y un crédito, y no afecta ni puede afectar sino a las personas. Es contra la naturaleza de la obligación que transfiera algo, pues que ella es la causa de la traslación que debe hacerse; es contra su naturaleza el sustituir una persona a otra, porque su naturaleza propia es dar el derecho de exigir la sustitución; luego ella es impotente para hacerla. La dación de una cosa o la prestación del hecho es la ejecución, la consumación de aquello a que uno se ha obligado, y la idea de la obligación implica la de un tiempo futuro. Mas si desde que la obligación existe, y porque ella existe ha cumplido su fin, aunque no haya mediado intervalo de tiempo alguno, ni siquiera un instante de razón, la obligación nace, y se extingue **uno et eodem actu**. El medio y el fin son una misma cosa; hay, según se expresa el Código Francés, una parte acreedora y a la vez propietaria de una misma cosa; ideas contradictorias en sí mismas y hasta en los términos.

Aunque así no fuera, deberíamos mantener el sistema que nos rige, y según el cual se requiere la tradición para que se transmita la propiedad. Este es un derecho para todos, derecho que se manifiesta públicamente entonces por medio del signo externo que regularmente le acompaña y le indica, a saber: el poder y la posesión. Interesa a la sociedad que las transmisiones se hagan públicas. Y se sabe cuánto contribuye la tradición para obtener ese resultado.

Es verdad que la innovación del Código Francés ha sido aceptada por los Códigos de las dos Sicilias, de Cerdeña, de Luisiana, del Cantón de Vaud, de Haití, acaso también por los de algunos otros Estados del mismo orden. Pero no ha sido admitida en Prusia, ni en Holanda, ni en Austria, esos países clásicos del derecho, ilustrados por tantos y tan profundos jurisconsultos, antiguos y modernos; bien al contrario, puede decirse que la teoría francesa ha sido condenada deliberada y unánimemente por los Códigos Holandés y Austríaco, promulgados mucho tiempo después del Código Napoleón. En cuanto a Prusia, baste transcribir el artículo 3º, título 10, parte 1ª, de su Código, que dice: “La venta es un contrato por el cual una de las partes se obliga a ceder la propiedad de una cosa, y la otra a pagarla. La adquisición de la propiedad no es perfecta sino por la tradición real”.

La Comisión cree oportuno agregar que después de aprobado el título **De la tradición**, ha visto con placer confirmadas sus ideas por el jurisconsulto argentino doctor Vélez Sársfield (libro 28, sección 1ª).

Por lo que cumple al propósito de la Comisión, juzga suficiente exponer el resultado del examen que ha hecho de las materias que encierra el Libro Tercero.

En ese Libro, y con especialidad en los Títulos IV y V que se refieren a la grave y trascendental materia de **sucesiones**, nuestra legislación aparece purgada de sus numerosos vicios y defectos. Debe agregarse que el proyecto procede con circunspección y en armonía con su plan general; pues destruye **todo lo menos posible**, y edifica generalmente sólo donde destruir debía, reformando, separando y ordenando con adecuado método nuestro derecho secular. La Comisión se limitará a indicar algunas de las disposiciones dominantes, prefiriendo tomar éstas de los títulos citados.

Según el proyecto: No hay testamento alguno verbal. Todo testamento solemne debe otorgarse ante escribano público. Se reconocen varias clases de testamento menos solemne. No se puede testar por medio de apoderado. Todo fideicomiso es nulo. Toda sustitución fuera de la llamada vulgar, es considerada fideicomisaria y es nula. Se aumenta la porción disponible. La porción legitimaria no es menoscabada por ninguna mejora. El hijo natural, en su caso, es contado entre los legitimarios o herederos forzosos. El cónyuge supérstite, marido o mujer, si es pobre, tiene la asignación forzosa que se llama porción conyugal. A falta de testamento y de descendencia legítima, concurren los ascendientes legítimos, el hijo natural y el cónyuge. A falta de testamento, y no habiendo descendientes ni ascendientes legítimos, son llamados a concurrir el hijo natural, el cónyuge, los hermanos legítimos y el hijo adoptivo del difunto, si lo hubiere. Los herederos suceden al difunto por el hecho de su muerte, no sólo en la propiedad sino también en la posesión. El Estado, sin embargo, es obligado a pedir que se le de la posesión.

§ IV

Pasando al Libro Cuarto del Proyecto, diremos, desde luego, que han evitado cuidadosamente los vicios del método introducido por el Código Napoleón.

El Libro Cuarto se divide en dos partes: la 1ª abraza toda la materia de las obligaciones en general; y la 2ª **la de las obligaciones que nacen de los contratos**. En la primera parte se trata separadamente y en otros tantos títulos: 1º **de las causas eficientes de las obligaciones**; 2º **de las diversas especies de obligaciones**; 3º **del modo de extinguirse las obligaciones**; 4º **del modo de probarse las obligaciones**. Sábese que las causas eficientes, o sea las fuentes de las obligaciones -materia de que se ocupa el Título I-son: Los **contratos**, los **cuasi contratos**, los **delitos**, los **cuasi delitos** y **algunas veces la ley**.

Las principales novedades del proyecto, son: 1º la supresión del beneficio de restitución **in integrum**; 2º las de las acciones rescisorias por lesión enorme o enormísima; 3º las restricciones con que se admite en lo civil la prueba testifical. De todas ellas pasa a ocuparse brevemente la Comisión.

Suprimidas por el proyecto las antiguas diferencias entre la tutela y la curaduría, y sujetos los menores a una tutela necesaria, y, además, caucionada, mientras no llegan a la mayor edad, se emancipan u obtienen habilitación, ningún objeto legítimo podría tener el beneficio de restitución **in integrum**. Los actos practicados por el menor, sin la intervención del tutor, son declarados **nulos, absoluta o relativamente**; son asimismo nulos los que practique el tutor sin la autorización o sin las formalidades requeridas por la ley; en una y otra hipótesis es la acción de nulidad que corresponde al menor, y nada tiene que ver con esos actos nulos la restitución **in integrum** que supone actos válidos aunque lesivos. Mas en este sentido especial de la restitución, el proyecto justamente la rechaza, como un privilegio irracional, como una protección exagerada de los incapaces, cuya utilidad no compensa los males que causa a la sociedad. En efecto, inutiliza los pactos celebrados legalmente, impide la seguridad del dominio y retrae a terceras personas de contratar con los tutores, quedando los huérfanos excluidos en cierto modo de la sociedad civil. Estas razones son incontestables, y la experiencia de lo que sucede entre nosotros las confirma plenamente.

El derecho vigente admite como el romano, la rescisión en los contratos por causa de lesión enorme o enormísima, y éste es otro de los puntos que la Comisión, de acuerdo con el autor del proyecto, ha creído digno de reforma. Es de interés público que las convenciones lícitas sean siempre eficaces, no

sólo por el respeto que merecen la promesa hecha y la palabra empeñada, sino también porque la seguridad del dominio contribuye, en gran manera, al desenvolvimiento de la riqueza y a la mejora de la condición material de la sociedad. El hombre debe contratar con prudencia, y si no lo hace y se perjudica, la ley no debe prestarle auxilio, como no haya mediado delito o cuasi delito de parte del otro contrayente, o algún otro vicio radical en el contrato. Dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones, si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores o nuestras imprudencias.

Cuando la ciencia económica enseña de un modo incontestable que el precio convencional se determina por la libre transacción del vendedor y el comprador, y ese precio es el verdadero, y justo de las cosas, expresión de su valor en el cambio en el instante en que el contrato se celebra; cuando este principio se encuentra consignado expresamente en una ley del Fuero Juzgo (7, tít. 3, libro 5); cuando se observa en los asuntos mercantiles por disposición del Código Oriental, y no ofrece inconveniente alguno, ¿por qué no aceptaríamos en lo civil, como justo, como acertado y bueno ese principio? ¿Se puede preferir que continúe esa multitud de litigios temerarios o notoriamente maliciosos a que da lugar la extraña teoría de lesión enorme y enormísima? Ciertamente que no; y tenemos por mucho más conforme a la moral, la sencilla consignación de esta regla; cada cosa en venta vale la cantidad en la que se vende; no habiendo vicios en ella, y no mediando error, ni dolo, ni coacción.

El derecho actual, como es sabido, admite la prueba testimonial, en la mayor parte de los contratos, y manda fallar por ella acerca de las obligaciones más trascendentales, sin tener en cuenta que es una de las más inseguras y expuestas al error.

Justo y necesario era, cuando estaba poco generalizado el uso de la escritura, admitir en todo caso la prueba de testigos; pero cuando no solamente es general el arte de escribir, sino que, además, hay escribanos en todos los pueblos, ¿por qué no ha de exigir el legislador que se prueben las obligaciones del modo más fehaciente y menos sujeto al error o al dolo? Si el respeto al juramento está perdido, si con la corrupción de las costumbres no hay hecho, por falso o absurdo que sea, que no pueda probarse con testigos, ¿por qué no ha de excluir la ley este género de prueba en todos aquellos casos en que los contrayentes pudieron proporcionarse otra mejor? Es de interés público que

se contraigan las obligaciones en la forma más adecuada, para que el obligado no pueda eludir su cumplimiento, y en el caso de que trate de hacerlo, probarle del modo menos sujeto a error o malicia, la verdad de su compromiso. Así es que el proyecto propone, de acuerdo con casi todos los Códigos modernos, que no se admita prueba de testigos en demanda cuyo valor ascienda a doscientos pesos, ni para acreditar una cosa diferente del contenido de los instrumentos públicos, ni para justificar lo que se hubiere dicho antes, al tiempo o después de su otorgamiento. De esta regla, sin embargo, se establecen algunas excepciones, cuya justicia es reconocida generalmente.

La Comisión no cuenta, por supuesto, entre las novedades del proyecto, el sistema hipotecario, debido al Gobierno Provisorio de V.E., y reforma que por sí sola puede hacer la gloria de una administración, aun en los países más adelantados. El proyecto se limita a reproducir las disposiciones de la ley vigente de 26 de mayo de 1865, sobre **hipotecas, privilegios y graduación de acreedores**.

El Título Final contiene el precepto de que deben ser juzgados por las disposiciones del Código, los asuntos pendientes a la época en que se haga obligatorio, a no ser que en el mismo Código se encuentre prescripción expresa en contrario. Es la misma disposición del artículo 1.770 del Código de Comercio, y el proyecto en ese punto es también conforme con el Decreto dictado por V.E. al promulgar dicho Código. De manera que esta especie de retroactividad del Código es un punto ya resuelto por V.E.

El malogrado doctor Acevedo formuló un artículo igual en su proyecto del Código Civil, prefiriendo la disposición de la ley 12, título 1º del Fuero Juzgo, la cual manda que todos los pleitos pendientes se fallen por las leyes nuevas, “y teniendo presente, dice aquel jurisconsulto oriental, la notoria ventaja que resulta de la uniformidad de las leyes y los inconvenientes de que por muchos años siguieron los Tribunales aplicando simultáneamente las leyes antiguas y las modernas”.

El doctor Acevedo, que había consignado la regla de la no retroacción, no creyó ser por eso contradictorio. Esta regla tiene su excepción, que depende de la voluntad del legislador, fundada en la equidad y la justicia. “La voluntad del legislador, dice el señor Gutiérrez Fernández, en sus **estudios**

fundamentales del derecho civil, es siempre respetable: si se le concede la probidad, hay que admitir que sólo dará a su obra efectos anteriores, cuando no haya inconvenientes o sean menores que las ventajas”.

La ley romana que consignó la regla, consignó en ella excepción: **Leges et constitutiones futuris certum est dare formana negotiis, non ad facta proeterita revocari, nisi nominatim de proeterito tempore et adhuc pendetibus negotiis cautum sit.**

Por lo demás, Excmo. Señor, los magistrados del Poder Judicial podrán, en lo sucesivo dictan sus fallos con conciencia tranquila y segura, porque la ley reduce sus preceptos a un solo volumen de posible estudio y de fácil consulta; mientras que en el día hay muchos casos en que no cabe quedar satisfechos del acierto, porque es menester recurrir por los motivos determinantes, a una docena de Códigos que, aparte el mérito de algunos, adolecen de todos los defectos de la época en que se dieron y de las contradicciones y omisiones que todos conocen. La redacción clara y sencilla del proyecto, con evidentes mejoras en las disposiciones legales dispersas en aquellos Códigos; la decisión y aclaración de multitud de puntos dudosos o controvertibles, en que la mala fe encontraba una fuente inagotable de litigios que son otras tantas causas de enemistad y de ruina para las familias; la extirpación consiguientes de abusos y malas prácticas arraigadas en el foro, son beneficios notorios e incalculables que la Patria y la Justicia deberán al Gobierno Provisorio de V.E., desde el día en que el nuevo Código empiece a regir como ley de la República.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Montevideo, diciembre 31 de 1867.

Manuel Herrera y Obes. - Antonio Rodríguez Caballero.- Joaquín Requena.- Tristán Narvaja.

A S.E. el señor Gobernador Provisorio, Brigadier General don Venancio Flores.

PROMULGACION Y VIGENCIA

LEY N° 917*

El Brigadier General don Venancio Flores, Gobernador Provisorio de la República Oriental del Uruguay.

A LA NACION

En mi constante anhelo por el progreso material y moral del país, no podía pasar inapercibida la reforma de los Códigos vigentes, tanto tiempo ha reclamada por todos, y el Decreto de 26 de mayo de 1865 llenó en parte esa necesidad. A él debe ya la República su nuevo Código de Comercio, que rivaliza con los más adelantados, por la liberalidad y acierto de sus disposiciones.

Pero mayor era y más urgente, la necesidad de un Código Civil en armonía con los adelantos de la ciencia, con el estado de nuestras costumbres y con la liberalidad de nuestras instituciones fundamentales; y merced al estudio, laboriosidad y civismo de uno de los más distinguidos abogados del foro de la República, esa necesidad puede también ser llenada satisfactoriamente.

Compuesto el proyecto de Código Civil, ha sido examinado, discutido y aprobado, artículo por artículo, por una Comisión de juriconsultos de los más acreditados, **asociados al autor del proyecto** por nombramiento del Gobierno.

La Comisión se ha expedido con recomendable celo, y ha presentado el proyecto con el informe en que consigna las principales razones que han motivado las reformas más trascendentales, a que el Gobierno ha prestado su entero asentimiento.

* No forma parte del texto original. Le corresponde éste número de ley de acuerdo a la ordenación efectuada por ARMAND UGON en la "Compilación de Leyes y Decretos", 1825-1930 por él realizadas. En 1930 la numeración fue oficializada, pasando desde el día 19 de junio a ser publicadas numeradas en forma correlativa por el "Diario Oficial".

El proceso por el cual se llegó a oficializar lo referente a leyes y decretos, comenzó con los decretos de 18 de marzo y 8 de mayo de 1929, donde se establece la necesidad de que la compilación de leyes y decretos se realice por la Administración Pública.

El 25 de junio se establecen las normas, por las cuales el "Diario Oficial" queda encargado de la publicación de leyes y decretos siguiendo a esos efectos con la numeración que le hicieran saber al Ministro de Instrucción, los doctores Armand Ugón, J. C. Cerdeiras Alonso, L. Arcos Ferrand y C. Goldaracena.

Código Civil

En tal estado, he creído no deber retardar los beneficios innegables que el Código producirá, y quiero hacer su publicación y promulgación como el empleo más digno y conveniente de la facultad discrecional que la Nación me ha conferido, y al ejercerla en tan precioso momento y para tan importante objeto, creo hacer el más grande servicio al país.

Hame cabido la fortuna de impulsar tan interesante obra y la de anunciar a la República que a más del Código de Comercio, tiene desde hoy su Código Civil que será la mejor de sus garantías.

El buen procedimiento en los juicios es otra de las necesidades urgentes de la República. Nadie deja de sentir y lamentar las irregularidades y demoras de los procesos, clamando por un nuevo método que los haga sencillos y breves; y la misma Comisión de Jurisconsultos está encargada de redactar el Código de Procedimientos y de conformar las prácticas a la nueva legislación. No dudo que la Comisión a de desempeñar con igual dedicación y patriotismo.

Por tanto, en acuerdo de Ministros,

DECRETO:

Artículo 1º - El Código Civil Oriental se publicará y registrá en todo el territorio de la República, desde el 19 de abril del corriente año, con derogación de las leyes anteriores.

Art. 2º - Los Tribunales de Justicia y demás magistrados de la República, reglarán por el Código, desde el día señalado inclusive, el juzgamiento y decisión de las causas y negocios comunes, **citando el artículo en que se apoyen.**

Art. 3º - Mientras no se publique el Código de Procedimientos, los juicios se reglarán por las leyes vigentes en cuanto no se opongan a lo que esté definido y resuelto por el Código Civil.

Art. 4º - No podrá reimprimirse este Código, dentro o fuera de la República, sino de conformidad con la resolución del Gobierno de fecha 17 de setiembre último.

Art. 5º - El Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Gobierno,

Promulgación y Vigencia

queda encargado de la impresión, publicación y circulación del Código, y del cumplimiento de este Decreto, del que se dará cuenta al Cuerpo Legislativo, se comunicará a quien corresponda e insertará en el Registro Competente.

Dado en el despacho del Gobierno Provisorio, a los 23 días del mes de enero del año 1868.

VENANCIO FLORES. - Alberto Flangini. - Lorenzo Batlle. - Antonio M. Márquez.

LEY N° 919

MINISTERIO DE GOBIERNO

Montevideo, febrero 4 de 1868.

Considerando que la impresión del Código Civil promulgado por decreto de 23 de enero próximo pasado, no podrá terminarse antes de la época fijada, por haber sobrevenido la falta de operarios, causada por la enfermedad reinante, según lo ha comunicado la Comisión en nota del 1° del corriente, el Gobernador Provisorio en Consejo de Ministros ha acordado y decreta:

Artículo 1° - Transfiérese al 18 de julio próximo el día prefijado en el artículo 1° del citado decreto del 23 de enero, para que empiece a regir en toda la República el Código Civil en la forma prescripta por dicho decreto.

Art. 2° - Comuníquese, etc.

VENANCIO FLORES.- Alberto Flangini. - Lorenzo Batlle. - Antonio M. Márquez.

LEY N° 928

CAMARA DE SENADORES

Montevideo, abril 29 de 1868.

Tengo el honor de remitir al Poder Ejecutivo la ley que la honorable Asamblea General ha sancionado en esta fecha aprobando los actos del Gobierno provisorio que presidió el Sr. Brigadier General don Venancio Flores.

Dios guarde al P.E. muchos años.

P. VARELA, Presidente. - Juan A. de la Bandera, Secretario.

Al Poder Ejecutivo

El Senado y la Cámara de Representantes, etc., etc.,

DECRETAN:

Artículo 1° - Reconócese como válidos los actos del Gobierno Provisorio Dictatorial que invistió el Brigadier General don Venancio Flores, desde el 20 de febrero de 1865 hasta el 15 de febrero de 1868.

Art. 2° - Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones del Senado, en Montevideo, a 29 de abril de 1868.

P. VARELA, Presidente. - Juan A. de la Bandera, Secretario.

Promulgación y Vigencia

MINISTERIO DE GOBIERNO

Montevideo, abril 30 de 1868.

Avísese recibo, comuníquese a quienes corresponda y publíquese.

Rúbrica de S.E. - Regúnaga.

LEY N° 987

CAMARA DE REPRESENTANTES

El Senado y la Cámara de Representantes, etc., etc., han sancionado y

DECRETAN:

Artículo 1°. - El Código Civil de la República, promulgado por decreto del Gobierno Provisorio de 23 de enero último, empezará a regir el día 1° de enero próximo.

Art. 2°. - Queda sin efecto el decreto de 4 de febrero último.

Art. 3°. - Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones, en Montevideo, a 29 de julio de 1868.

EUSEBIO CABRAL, Presidente. - Carlos M. de Nava, Secretario.

MINISTERIO DE GOBIERNO

Montevideo, 4 de agosto de 1868.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese a quienes corresponde y publíquese.

BATLLE. - Antonio Rodríguez Caballero.

- IV -

MODIFICACIONES SANCIONADAS EN 1893

DECRETO NOMBRANDO COMISION (6 de noviembre de 1889)
MINISTERIO DE JUSTICIA, CULTO E INSTRUCCION PUBLICA

Montevideo, noviembre 6 de 1889.

Debiendo procederse a la brevedad posible a la reimpresión oficial y completa del Código Civil, de acuerdo con las disposiciones del artículo 5° de la ley de 26 de abril de 1882, y artículo 28 de la de 22 de marzo de 1875,

El Presidente de la República

DECRETA:

Artículo 1° - Comisionese en carácter honorífico a los jurisconsultos señores Alfredo Vázquez Acevedo, Marcelino Izcua Barbat, Luis Piñeyro del Campo,

Nombramiento de la Comisión de 1889

Juan Pedro Castro y Eduardo Vargas, para dirigir los trabajos de reimpresión, corrección y complementación del Código Civil.

Art. 2º - Encárgase de la Secretaría de dicha Comisión al señor Oficial Mayor del Ministerio de Justicia.

Art. 3º - Comuníquese.

TAJES. - Martín Berinduague.

INFORME DE LA COMISION DE CORRECCION, COMPLEMENTACION Y REIMPRESION DEL CODIGO CIVIL DE 21 DE JULIO DE 1892

Montevideo, julio 21 de 1892.

Excmo. Señor:

Los que suscriben, a quienes el Superior Gobierno confió la corrección, complementación y reimpresión del Código Civil de acuerdo con la letra y espíritu de las leyes dictadas con posterioridad a él, tienen la satisfacción de hacer saber a V. E. que han terminado la primera y más laboriosa parte de su honroso cometido.

Adjuntan a esta nota, en cuatro volúmenes, una copia del referido Código, con las modificaciones que a su juicio deben introducirse en él, así como también la relación de las numerosas disposiciones corregidas, con el fundamento de la corrección al margen; habiéndose omitido tan sólo en el anexo algunas modificaciones de forma, que por su insignificancia no requerían especial mención.

En el curso de sus tareas, ha encontrado la Comisión algunas disposiciones que, a su juicio, reclaman reforma legislativa; pero, buenas o malas, se ha limitado a incorporarlas en su forma actual, considerando que su cometido no la faculta para proponer modificaciones a la legislación vigente, siendo él más modesto y debiendo ceñirse sus funciones, de acuerdo con el decreto que creó esta Comisión y el de fecha 17 de marzo de 1890 que le fue oportunamente comunicado, a lo que concretamente se indica en el párrafo primero de esta nota.

No es posible, sin embargo, prescindir de la sanción legislativa antes de proceder a la impresión del adjunto proyecto, pues por más que en él se respeten las leyes vigentes, a cuya letra o espíritu han tratado los infrascriptos de ajustarse estrictamente, ese proyecto representa un trabajo de interpretación que carecería de autoridad y sería frecuentemente discutido si el legislador no lo declarara auténtico y generalmente obligatorio (artículo 12, Título Preliminar del mismo Código). Acordada que sea esa sanción, podrá en seguida procederse a la nueva impresión del Código, cuyo trabajo también están encargados de dirigir los infrascriptos.

Deben éstos hacer observar a V. E. que en su proyecto han prescindido de las disposiciones relativas al registro de las capellanías y enfiteusis (ley 19 de diciembre de 1890, artículos 11 a 13 y decreto reglamentario de 15 de junio del corriente año), por considerar que ese registro de gravámenes, constituido de acuerdo con la legislación anterior al Código Civil, debe quedar regido por una ley especial, puesto que el Código no legisla respecto de aquellos derechos.

Considera conveniente la Comisión hacer constar que ha prescindido como debía hacerlo, de incorporar en su proyecto disposiciones de otros Códigos vigentes o leyes que se ocupan de materias especiales, y que, por consiguiente, la aprobación legislativa de aquél no importará en manera alguna modificar o derogar las disposiciones de carácter especial que con las del Código Civil puedan estar en pugna, pues las primeras deben continuar vigentes como hasta ahora, en virtud del sabio aforismo romano aceptado por los más eminentes jurisconsultos: **legi speciali per generalem non derogatur.**

No terminará esta nota la Comisión sin justificar su tardanza en expedirse, la que ha sido ocasionada por varias circunstancias y muy a su pesar.

Desde luego ha influido para ello, además de la falta de personal auxiliar, pues de un solo empleado, y en el último tiempo, ha dispuesto la Comisión, la

Informe de la Comisión - 21 de Julio de 1892

delicadeza, del trabajo que se le confió y las dificultades a él anexas; pues sabe V. E. cuántas leyes y cuántos códigos se han promulgado con posterioridad al Civil, muchas de cuyas leyes y todos cuyos Códigos, sin excluir el Militar, y muy especialmente el de Procedimiento y el Rural, introdujeron modificaciones o derogaciones parciales al derecho común que aquél consagraba, razón por la cual ha debido la Comisión revisar escrupulosamente las Colecciones Legislativas desde el año 1868 en adelante, así como también los distintos cuerpos de leyes con que se ha enriquecido nuestra legislación desde aquella fecha.

Dará a V. E. idea de la labor de nuestra obra el anexo a que nos hemos referido, del cual resulta ser ciento cincuenta y tantos los artículos suprimidos, corregidos o incorporados, y próximamente doscientos aquellos cuyas referencias han debido ponerse de acuerdo con la nueva numeración, tarea que, aunque de suyo mecánica, ha requerido, como comprenderá V. E. especial cuidado, y ha ocasionado repetidos trabajos por las sucesivas modificaciones que dicha numeración ha sufrido en el curso de nuestras tareas: un sólo artículo suprimido o agregado obligaba, no solamente a modificar la numeración de todos los demás posteriores, sino también a revisar todo el Código en busca de las disposiciones que, por contener referencias, debían ser nuevamente corregidas.

Debe agregarse, además, que habiendo desde un principio cada miembro de la Comisión tomado para sí la tarea de proyectar las reformas en una parte del Código, no ha podido dejar de trastornar y aun de paralizar durante algún tiempo la labor común, primero la larga enfermedad y luego el fallecimiento de uno de sus más ilustrados elementos, el doctor don Marcelino Izcua Barbat, a cuya memoria y a cuya cooperación es justicia que los infrascritos tributen una palabra de recuerdo y aprecio.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Martín Berinduague. - L. Piñeyro del Campo. - Eduardo Vargas. - Juan P. Castro.

Al Excmo. Señor Ministro de Gobierno.

MINISTERIO DE GOBIERNO

Montevideo, julio 25 de 1892.

Con Mensaje, elévese a la consideración del Honorable Cuerpo Legislativo, agradézcase por nota a la Comisión el patriótico servicio que ha prestado a la legislación de la República y publíquese.

HERRERA Y OBES. - Francisco Bauzá.

PODER EJECUTIVO

Montevideo, 25 de julio de 1892.

A la Honorable Asamblea General

La Comisión a quien el Gobierno confió la corrección, complementación y reimpresión del Código Civil, ha terminado la parte más esencial y laboriosa de su cometido, confeccionando en los cuatro volúmenes que el Poder Ejecutivo tiene el honor de adjuntar a Vuestra Honorabilidad, la copia del referido Código y las modificaciones que a su juicio deben introducirse en él.

La comisión conceptúa que antes de proceder a la impresión de ese Cuerpo de Leyes, es indispensable la sanción legislativa, dada la índole y forma de las modificaciones introducidas y como el Poder Ejecutivo participa de esa misma opinión y abriga los mismos propósitos, se dirige en este sentido a Vuestra Honorabilidad, para lo cual declara comprendido entre los asuntos que motivaron la actual convocatoria extraordinaria el adjunto proyecto de Código Civil.

Informe de la Comisión - 21 de Julio de 1892

Ofrece el Poder Ejecutivo a Vuestra Honorabilidad las consideraciones de su mayor aprecio.

JULIO HERRERA Y OBES. - Francisco Bauzá.

LEY N° 2.247

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General etc.,

DECRETAN:

Artículo 1° - Apruébanse las reformas introducidas al Código Civil por la Comisión nombrada en el decreto de 6 de noviembre de 1889 y que constan del anexo elevado al Poder Ejecutivo en 21 de julio próximo pasado.

Art. 2° - Procédase a la reimpresión de dicho Código, con cargo a Rentas Generales.

Art. 3° - Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Representantes, en Montevideo, a 16 de setiembre de 1893.

MIGUEL HERRERA Y OBES, Presidente. - Manuel García y Santos, Secretario - Redactor.

MINISTERIO DE GOBIERNO

Montevideo, setiembre 19 de 1893.

Cúmplase, acúsesse recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional,

HERRERA Y OBES. - Francisco Bauzá.

- V -

MODIFICACIONES SANCIONADAS EN 1914

DECRETO DESIGNANDO AL DR. SERAPIO DEL CASTILLO

MINISTERIO DE JUSTICIA
E INSTRUCCION PUBLICA

Montevideo, 21 de abril de 1911.

Decreto:

Considerando: Que es de interés general que se haga una edición oficial del Código Civil, incorporando al texto de sus disposiciones las reformas que fueron objeto de leyes especiales;

Que las innovaciones sancionadas modifican las disposiciones del Código en varios de sus capítulos principales, como ser: la patria potestad, la filiación ilegítima, la disolución del matrimonio, el orden de llamamiento en las sucesiones intestadas y otras de menor importancia;

Que esas reformas deben ser correlacionadas en el texto del Código Civil, de modo que sus disposiciones sean más fácilmente conocidas y aplicadas por los Jueces, los Fiscales y miembros del Foro, sin los inconvenientes de tener que consultar en cada caso leyes sueltas;

Que el nombramiento de una Comisión de Jurisconsultos para llenar ese cometido ofrecería más inconvenientes que ventajas, por cuanto la pluralidad de personas no sólo sería obstáculo para la pronta conclusión de la tarea, sino que también lo sería para la unidad de criterio que debe presidir su ejecución. Es, por tanto, preferible, en este caso especial, la designación de una sola persona, de notoria competencia, que cumpla su cometido a la mayor brevedad;

Que es a fin de que los beneficios que produzca sean aprovechados cuanto antes.

Por estas consideraciones,

El Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo 1º - Encárgase al profesor de Derecho Civil de la Universidad de la República, doctor don Serapio del Castillo, la preparación de los originales para una edición oficial del Código Civil, a cuyo texto deberá incorporarse, debidamente correlacionadas, todas las reformas adoptadas con posterioridad a la sanción del referido Código.

Art. 2º - El cometido que se confiere por el artículo anterior, deberá ser cumplido dentro del término de un año, a contar desde la fecha de esta resolución, y comprenderá las leyes ya sancionadas sobre la materia, y las que se promulguen hasta el vencimiento de este término, debiendo entregarse los originales con las anotaciones, referencias, etc., al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública dentro del plazo prefijado.

Art. 3º - En caso de que el Poder Ejecutivo resolviera dentro de los seis meses siguientes a la entrega de los originales aludidos en el artículo anterior, hacer una edición oficial del Código Civil, quedará encargado igualmente el

doctor don Serapio del Castillo de revisar y corregir las pruebas que se den a la imprenta para la referida edición.

Art. 4º - Las erogaciones que determine el cumplimiento de este decreto se imputarán al rubro de Eventuales de este Ministerio.

Art. 5º - Comuníquese, publíquese e insértese en el L. C.

BATLLE Y ORDOÑEZ. - J. Blengio Rocca.

COMUNICACION ELEVANDO EL TEXTO REFORMADO

Montevideo, abril 16 de 1912.

Excmo. señor Ministro de Instrucción Pública.

doctor Juan Blengio Rocca.

Excmo. Señor:

Tengo el honor de comunicar a V. E. que he terminado la tarea que me confió el Poder Ejecutivo por decreto de 21 de abril del año pasado.

Además de refundir en el Código Civil, conservando su redacción original cuando ha sido posible y respetando siempre su espíritu, las leyes sobre materia civil promulgadas después del 19 de setiembre de 1893, he hecho en el texto del Código las modificaciones indispensables para encuadrar en él las leyes nuevas y otras también indispensables para aclararlo, complementarlo o rectificar errores evidentes de ediciones anteriores; he eliminado del Código las disposiciones derogadas por las leyes nuevas, o inútiles por los motivos que expongo por separado, y he agregado al texto, en la forma usual, buena

Comunicación elevando el Texto Reformado

cantidad de referencias a disposiciones del mismo Código y de otros cuerpos de leyes, que aumentarán considerablemente la utilidad de la nueva edición.

Acompaño a esta comunicación:

1º - Una copia en prueba impresa del Código Civil con las reformas introducidas en el texto de la edición anterior.

Van subrayadas en el texto todas las novedades que contiene.

2º - Una relación de las disposiciones nuevas o modificadas, con exposición de motivos y fuentes de las que tienen mayor importancia.

3º - Una relación de las disposiciones del antiguo texto eliminadas del nuevo, con exposición de los motivos de su eliminación.

4º - Una copia del texto de las leyes posteriores a 1893, que han sido total o parcialmente incorporadas al proyecto de nueva edición, con indicación marginal de la colocación que se ha dado en ésta a cada disposición.

Para mi trabajo he tenido a la vista el texto auténtico de las leyes nuevas emanado del Ministerio del Interior, he consultado a los autores e informantes de algunas de esas leyes y he puesto a contribución varios trabajos anteriores, entre los cuales me han sido especialmente útiles los comentarios del doctor Alvaro Guillot, las observaciones del doctor Victoriano M. Martínez a la edición de 1893 y el libro del doctor Eugenio Lagarmilla sobre las “Acciones en materia civil”.

Dios guarda a V. E. muchos años.

Serapio del Castillo.

**INFORME DE LA COMISION DE CODIGOS DE LA CAMARA
DE REPRESENTANTES**

En el proyecto del Dr. Serapio del Castillo, sobre modificaciones al Código Civil ya sancionado por el Senado.

Comisión de Códigos, H. Cámara:

La incorporación al Código Civil de toda la legislación de esa materia últimamente sancionada, ordenada por el profesor de Derecho Civil en la Universidad de la República, doctor don Serapio del Castillo, por encargo del Poder Ejecutivo, debe ser aprobada por V. H. como lo fue ya por el H. Senado.

En 1892 una Comisión nombrada por el Poder Ejecutivo, refundió en el Código Civil todas las leyes dictadas hasta esa fecha, con posterioridad a la promulgación de ese cuerpo de leyes; pero la labor legislativa en materia civil ha sido tan intensa y tan fecunda después de aquella época, que existen muchas leyes sueltas publicadas en colecciones legislativas o en folletos, que hacen engorrosa y difícil la compulsión del Código Civil, derogado o ampliado en muchísimas materias generalmente importantes y que reclaman su incorporación definitiva a la Legislación Codificada.

Existen tres leyes de divorcio, y el Poder Ejecutivo ha pasado un mensaje corrigiendo la últimamente sancionada; leyes de inembargabilidad de determinados bienes; prohibición de la cesión de ciertos derechos creditorios y limitación de la cesión de una determinada cuota-parte; leyes que han modificado fundamentalmente el régimen de la patria potestad; el derecho hereditario, en cuanto al cónyuge, a los hijos naturales, y el grado de parentesco hasta el cual se hereda; otras que derogan capítulos enteros del Código, como el relativo a los hijos adulterinos, la disminución de la tasa del interés legal; y otras que sería prolijo enumerar, de tal suerte que, puede afirmarse, cuando se consulta el texto del Código, nunca se está seguro de que no haya una ley posterior que lo modifique, a menos que se haya tenido la prolijidad de ir anotando pacientemente al margen, toda la legislación dictada en los últimos veinte años.

Informe de la Comisión de la Cámara de Representantes

Por esto era indispensable la incorporación al texto del Código de todas las modificaciones y ampliaciones de la legislación civil, que es la tarea que por encargo del Poder Ejecutivo ha realizado el señor doctor del Castillo.

Todas las modificaciones aprobadas por el Senado deben ser aceptadas por V. H. con las modificaciones que se indicarán, y además, deben sancionarse otras que pondrán al día, la legislación civil dentro del Código.

En el proyecto de ley aparecen subrayadas todas las ediciones que se proponen al texto redactado por el doctor del Castillo.

El doctor del Castillo ha propuesto a la Comisión las siguientes modificaciones que ella acepta:

1° - Agregar al artículo 806 una frase que figura en la Ley de Escribanos determinando precisamente la forma en que el escribano ha de cerciorarse de la identidad del testador que, no conociendo el castellano, desea otorgar testamento cerrado. En esta importante materia todas las formalidades deben observarse, so pena de nulidad (artículo 830), de manera que es conveniente incorporar al Código Civil este requisito omitido por la Comisión de 1892, que figuraba, sin embargo, en el artículo 44, inciso 4° de la Ley de Escribanos de 31 de diciembre de 1878, que se trasladó casi textualmente al Código Civil.

2° - Suprimir en el artículo 901 las palabras “por sentencia” en atención a que pudiendo perderse la patria potestad de pleno derecho (artículo 284) convenía el texto de la ley aquella circunstancia.

3° - Agregar al artículo 788 una referencia al artículo 1.289, a fin de aclarar el contenido de aquel artículo.

La Comisión, por su parte, aconseja las modificaciones siguientes, que el señor doctor del Castillo ha aceptado:

1° - Variar la redacción del artículo 14 para ponerlo en armonía con la ley de 28 de octubre de 1907 (artículo 9°) que establece que la Alta Corte de Justicia, en el ejercicio de sus funciones, se comunicará directamente con los otros Poderes del Estado.

2º - Debe agregarse igualmente al texto del Código (artículo 91, número 2) el requisito especial del informe médico aprobado judicialmente, para justificar que el sordomudo que contrae matrimonio es capaz de otorgar su consentimiento.

3º - Sancionada últimamente la ley que admite el divorcio por la sola voluntad de la mujer, la Comisión ha creído conveniente incorporarla al artículo 187 del Código. Pero al hacerlo, ha tenido en cuenta los errores con que fue sancionada y que tiende a subsanar el mensaje del Poder Ejecutivo, remitido recientemente al Poder Legislativo. Uno de los errores, el que establecía una referencia equivocada a la disposición legal que establecía la causa del divorcio, se subsana por el solo hecho de la incorporación de la ley al Código, y el otro, con la modificación que observará V. H. en la redacción propuesta en el inciso 3 del número 3, en el cual queda salvado el error de que la ley pudiera permitir la no comparecencia de la mujer a la última audiencia.

4º - Debe mantenerse la redacción del artículo 210 del Código, como lo dio la ley de 19 de diciembre de 1910, que es más propia que la originaria del Código.

5º - Mantener la antigua redacción del artículo 360 del Código Civil, por considerar infundada la opinión, según la cual este precepto había sido derogado por el Código Penal.

Así, como bajo el imperio del Código Civil, habrá dos clases de actos de los guardadores contemplados en la ley, unos que pueden ejecutarse con autorización judicial (artículo 360 y otros del Código actual) y otros que son prohibidos absolutamente al tutor, aun cuando el Juez indebidamente los autorice (artículo 412).

Estos últimos son actos delictuosos, incuestionablemente; los primeros, no; porque por amplios que se supongan los términos de la ley penal, siempre estarán amparados por el criterio del artículo 1º del Código Penal, por cuanto la intención delictuosa estaría excluida por la autorización judicial, y por lo mismo, exenta de responsabilidad penal.

Por lo demás, es necesario que subsista el precepto del antiguo artículo 360 en el Código Civil. Un ejemplo explicará su conveniencia. En una sucesión

que permanece en la indivisión, muertos los padres, heredan los hijos, entre los cuales hay menores. Uno de los hermanos mayores de edad, es el tutor legítimo de los menores, y ese tutor no podría arrendar, por ejemplo, a sus otros hermanos mayores de edad, el campo hereditario que corresponde a todos proindiviso. Compréndese desde luego, la conveniencia de que pueda hacerse tal contrato, para los mayores, porque les permite arrendar lo mismo en lo cual tienen una parte indivisa como propietarios, y para los menores, porque la conservación de esa indivisión hará que puedan obtener de sus hermanos mayores un precio mejor por el campo arrendado y un cuidado mayor por parte de sus coherederos en la cosa arrendada, que lo que podría ofrecer un extraño, interesado tan solo en obtener del bien arrendado el mayor lucro posible.

Este caso, que sin duda debe haberse presentado a cuantos curiales ocupan banca en esta Cámara, demuestra acabadamente la conveniencia de mantener en la ley tal precepto, porque para evitar los fraudes, siempre posibles, que a su amparo pudieran cometerse, se exige la autorización judicial, que sólo será concedida cuando se demuestre la evidente ventaja para el patrimonio de los menores en la realización de contratos semejantes. Y esto, previa intervención del Ministerio Público, llamado a ejercer el contralor consiguiente en gestiones de esta índole.

6° - Se propone, además, la supresión del inciso 9° del artículo 412 en atención a que se establece en el artículo 407 la redacción del artículo 360 actual, y en el artículo 437 se suprime la comunicación a los Jueces de Paz del Departamento, del auto que nombre curador interino a un incapaz, porque esa comunicación, que no figura en el Código vigente, carece de objeto.

7° - Dada la importancia de la ley de 26 de mayo de 1869, debe figurar su artículo 1° entre las referencias del artículo 1194 del Código. Se trata de la salida del dominio del Fisco de toda la parte de Montevideo donde la propiedad vale más, la ciudad vieja, delimitada por la antigua muralla, y claro que este precepto debe de ir mencionado a continuación del que incorporó al Código a la ley de 1835, cuando declaró al abrigo de las pretensiones del Fisco todos los terrenos poseídos por particulares desde antes del año 1795.

Y como referencia también en este artículo debe figurar la ley de 3 de mayo de 1909, que en su artículo 2° declaró igualmente al abrigo de las

pretensiones del Fisco, parte del terreno (117 manzanas) en que se hallaba dividido el pueblo de Castillos, en Rocha. (1)

8° - La ley de 26 de junio de 1908 que prohibió la embargabilidad de los sueldos, pensiones, etc., y que impide la cesión de esos mismos derechos, reclama un puesto dentro de la Sección 1ª del Capítulo 8° del Título 2° de la parte 2ª del libro IV del Código Civil. Y ese puesto le corresponde como inciso del artículo 1.766, final del Capítulo expresado, porque, dada la regla de que todos los derechos creditorios pueden cederse, debe figurar expresamente la excepción de cuales no pueden cederse o en que forma y hasta cuánto pueden ser cedidos.

9° - La Comisión aconseja también sustituir la denominación del Fiscal de lo Civil, por Ministerio Público en los pocos artículos, quince en total, que escaparon a lo que constituye una regla en el Código Civil, permitiendo así que futuras organizaciones del Ministerio Público, no influyan de ninguna manera en la impropiedad que podría resultar de la conservación de esas denominaciones en los textos legales.

Las modificaciones que aprobó el Senado, las acepta también vuestra Comisión, inspirándose, principalmente, en los motivos que expuso la Comisión informante de aquella rama del Poder Legislativo en el informe que se reimprime en el repartido de este asunto.

Se ha agregado un artículo final fijando la justa retribución de la labor del doctor del Castillo; considera la Comisión que no es equitativo que el Estado use de las actividades y de la preparación de los ciudadanos sin fijarles la compensación que les corresponda, y mucho más cuando esa labor es reclamada en materia de legislación codificada, en la cual tan delicado es siempre incorporar reformas o reglamentar instituciones nuevas, por más de que la labor se sujete a los límites que demarcan las leyes que la organizaron.

En el repartido han de publicarse las relaciones de las reformas e innovaciones introducidas al Código, así como las supresiones que en el mismo se hacen, los cual junto con los motivos expuestos por la Comisión, dan una idea suficientemente clara de todas las modificaciones proyectadas, lo que no obstará sin embargo, a que la Comisión amplíe en lo necesario los motivos expuestos, si V. H. lo juzgare del caso.

(1) La citada ley del 3 de mayo de 1909, declara salidos del dominio fiscal, los terrenos de 77 y no de 117 manzanas de la villa Castillos

Informe de la Comisión del Senado

Por las consideraciones que anteceden, vuestra Comisión aconseja la sanción del Código Civil con las modificaciones detalladas en el artículo 2º.

Sala de la Comisión, octubre 16 de 1913.

Juan A. Canón. - Ricardo J. Areco. - Eduardo Martínez García. - Carlos M. Prando. - Toribio Vidal Belo. - Pedro Díaz.

INFORME Y PROYECTO DE LA COMISION DE LEGISLACION DEL SENADO

Relativamente a las modificaciones del Código Civil

Redactadas por el doctor Serapio del Castillo

Honorable Senado:

La iniciativa del Poder Ejecutivo para una revisión de nuestro Código Civil, con el objeto de refundir en su texto, las disposiciones de la materia contenida en las leyes promulgadas en los últimos veinte años, da satisfacción a la necesidad generalmente sentida de devolver al Código la unidad, claridad y facilidad de manejo que la sucesiva promulgación de esas leyes le habían ido quitando poco a poco.

La iniciativa del Poder Ejecutivo se ha hecho carne en el proyecto de nueva edición que fue sometido a Vuestra Honorabilidad con Mensaje del 26 de abril.

Penetrada de la conveniencia de que esa edición salga a luz lo más pronto posible, Vuestra Comisión prestó a su estudio, desde el primer momento, la mayor dedicación, y a no mediar la prolongada enfermedad que tuvo alejado de sus tareas a uno de sus miembros, hace ya tiempo que hubiera sometido este informe a Vuestra Honorabilidad.

Una compulsión minuciosa del nuevo texto, que es fácil hacer teniendo a la vista el ejemplar impreso, remitido por el Poder Ejecutivo, en el cual están señaladas todas las novedades que contiene el proyecto, y examinadas esas novedades a la luz de los informes que suministraran los tres anexos que acompañan el ejemplar impreso, permite a Vuestra Comisión afirmar, que, tanto en la incorporación al proyecto de nuevo Código, de las disposiciones contenidas en las leyes de materia civil, promulgadas después de la revisión practicada en 1892, como en las modificaciones del antiguo texto del Código y de las leyes que se le incorporan, ha procedido el autor con la mayor prudencia, respetando hasta donde le ha sido posible los textos primitivos, y consultando siempre su espíritu.

El autor del proyecto ha introducido también en el texto del Código, algunas reformas, que, si bien no estaban comprendidas en ninguna ley posterior al Código citado, estaban indicadas por sus comentaristas más autorizados y son de carácter fundamental, según lo hace resaltar el autor para cada caso, en el anexo número 1.

Vuestra Comisión, encuentra esas reformas perfectamente justificadas.

En el mismo anexo número 1, expone el doctor del Castillo los motivos por los cuales al eliminar el texto de los artículos sobre expropiación, no ha incluido en el mismo, la ley sobre esta materia últimamente dictada.

Vuestra Comisión encuentra también justificado ese temperamento.

Considera Vuestra Comisión, de acuerdo con el autor del proyecto, que, además de las reformas ya incluidas en el texto impreso, debe proponer algunas otras que sean indispensables para remediar incongruencias, contradicciones o vacíos que el autor ha notado al revisar el texto impreso, o que, habiéndolas notado antes no se consideró suficientemente facultado para hacerlas por el mandato que le confirió el Poder Ejecutivo.

Son las siguientes:

“En el artículo 286”, propone, de acuerdo con el autor, que sean sustituidas las palabras “malos tratamientos dados por los padres a”, con estas otras: “La conducta de los padres con”.

Informe de la Comisión del Senado

Esta reforma que ha sido indicada por varios funcionarios de los que tienen a su cargo lo relativo a la protección de menores, hace posible el ejercicio de la facultad que el artículo 286 confiere a los Jueces, en muchos casos en que, sin haber propiamente lo que en general se entiende por malos tratamientos, concurren circunstancias que indican al magistrado la conveniencia de poner alguna limitación al ejercicio de la patria potestad.

“En el artículo 443”. La Comisión, de acuerdo con el doctor del Castillo, propone que este artículo sea refundido en el 442, como segundo inciso del mismo, y que con el número 443 se incluya en el texto la siguiente disposición:

“Los directores de los asilos de incapaces mayores de edad, son curadores legítimos de los asilados, mientras no tengan otro curador”.

“Cuando el Director tenga noticia de que el asilado tiene bienes de alguna consideración, o hijos menores bajo su potestad, debe comunicarlo al Juzgado del último domicilio del asilado, o al del lugar del asilo, para que provea a la curatela del incapaz”.

Esta disposición es la aplicación a los incapaces mayores de edad, de lo que el artículo 351 dispone para los menores. La falta de esa disposición produce en la práctica considerables dificultades que los funcionarios de la Asistencia Pública y los señores Fiscales han señalado por repetidas veces.

“En el artículo 848”. Debe suprimirse la palabra: “incapacidad” por la misma razón que se tuvo para suprimir la palabra “incapaz”, en el artículo 1024.

“En el artículo 875 y en el 1031”. El artículo 875 del proyecto debe ser sustituido por este otro: “Artículo 875. - Tendrá derecho a porción conyugal, aun el cónyuge separado (artículo 148), a menos que por sentencia se haya declarado culpable de la separación. El cónyuge divorciado no tendrá derecho a porción conyugal”. Y el artículo 1031 del proyecto debe ser sustituido por este otro: “Artículo 1031. - El cónyuge separado (art. 148), no tendrá parte alguna en la herencia **ab intestato** de su mujer o marido, si por sentencia hubiese sido declarado culpable de la separación. El cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia **ab intestato** del otro cónyuge”.

Estas dos modificaciones que el doctor Del Castillo no se ha creído facultado para introducir en el nuevo texto, porque no están expresamente formuladas en las dos leyes sobre divorcio, parecen a Vuestra Comisión, impuestas por esas leyes, y las propone de acuerdo con el autor del proyecto de nueva edición.

Después de elevado el proyecto a Vuestra Honorabilidad, fue sancionada en junio del corriente año, la ley que declara hábiles para contraer matrimonio a los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito.

La Comisión, de acuerdo con el autor del proyecto, propone que el artículo 1º de esa ley sea incorporado al artículo 91, inciso 1º del proyecto y el artículo 2º, con la indispensable modificación de forma, al artículo 98, número 6.

Además de las modificaciones acordadas con el autor del proyecto, Vuestra Comisión opina que debe ser aprovechada esta oportunidad para poner de acuerdo el artículo 893 con el 1025, dentro del espíritu de la reforma que al derecho de sucesión de los hijos naturales aportó la ley de 12 de julio de 1909.

El autor del proyecto puso de acuerdo ambas disposiciones, modificando el 893 (868 anterior) en el sentido de reducir el derecho del hijo natural en concurrencia con el legítimo a su legítima rigurosa, sin opción a los aumentos que ese artículo prevé.

Vuestra Comisión entiende que se encuadra mejor en el espíritu de la reforma, modificar el 1025 en el sentido que la porción del hijo natural pueda aumentarse como la del hijo legítimo, y en los mismos casos que respecto de éste prevé el 893.

Y a ese propósito responden las modificaciones que os propone a los artículos 893 y 1025 del proyecto.

Vuestra Comisión ha creído también que debía aprovechar esta oportunidad para subsanar un olvido, padecido cuando se sancionó la ley que acuerda la legítima a los hijos naturales reconocidos en concurrencia con los hijos legítimos, y que a su juicio importa una enorme injusticia. Nos referimos al derecho de representación de que están excluidos los hijos naturales. Esa exclusión se justificaba dentro del Código, por la

Informe de la Comisión del Senado

situación desventajosa en que se encontraban los hijos ilegítimos, pero no puede mantenerse después de la ley de junio de 1910, porque en buena lógica, si los hijos naturales reconocidos concurren a la herencia de sus padres con los hijos legítimos, es justo que también gocen del derecho de representación para recibir la herencia que le hubiera correspondido si hubiesen sido legítimos, puesto que no puede discutirse su filiación, desde que está garantida por el reconocimiento. Producido éste, no puede alegarse por nadie que el hijo natural no esté unido a la familia por lo mismos vínculos de sangre.

En su consecuencia, os proponemos la modificación de los artículos 885, inciso 2º, agregándole “o natural”; 1019, donde hay que agregar “o naturales reconocidos”; y en el 1021, “o natural reconocido”.

Por estas consideraciones os aconsejamos la sanción del proyecto de Ley adjunto.

Sala de Comisiones, Montevideo, 26 de diciembre de 1912.

Ricardo J. Areco. - Francisco Accinelli. - Adolfo H. Pérez Olave.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Apruébanse las reformas introducidas al Código Civil por el doctor Serapio del Castillo, y que constan en el ejemplar remitido por el Poder Ejecutivo el 26 de abril de 1912, con las siguientes modificaciones:

Se agregará al artículo 91, como segundo inciso del número 2, el siguiente: “Los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, son hábiles para contraer matrimonio, siempre que se compruebe que pueden otorgar consentimiento”.

Se agregará al artículo 98, como inciso 2 del número 6, el siguiente: “El consentimiento del sordomudo contrayente que no pueda darse a entender

por escrito, será expresado por su representante legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 y siguientes”.

En el artículo 286 se sustituirán las palabras “malos tratamientos dados por los padres” con estas otras: “La conducta de los padres con”.

En el artículo 442 del proyecto de nueva edición se refunde como inciso el 443, y como artículo 443 se agrega el siguiente:

“Artículo 443 - Los Directores de los asilos de incapaces mayores de edad, son curadores legítimos de los asilados mientras no tengan otro curador.

Cuando el Director tenga noticia de que el asilado tiene bienes de alguna consideración, o hijos menores bajo su potestad, debe comunicarlo al Juzgado del último domicilio del asilado o del lugar del asilo, para que provea a la curatela del incapaz”.

En el artículo 848 se suprime la palabra “incapacidad”.

En el artículo 875 se sustituye por este otro:

“Artículo 875. - Tendrá derecho a porción conyugal, aun el cónyuge separado (artículo 148), a menos que por sentencia haya sido declarado culpable de la separación”.

“El cónyuge divorciado no tendrá derecho a porción conyugal”.

El artículo 1031 del proyecto se sustituye por este otro:

“Artículo 1031. - El cónyuge separado (artículo 148) no tendrá parte alguna en la herencia **ab intestato** de su mujer o marido, si por sentencia hubiese sido declarado culpable de la separación”. El cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia **ab intestato** del otro cónyuge”

En el artículo 893, inciso último, se suprimen las palabras “al hijo natural ni”.

En el artículo 1025, inciso 2º, después de descendientes legítimos debe agregársele “o naturales” y en el inciso 3º debe suprimirse la palabra “rigurosa”.

Informe de la Comisión del Senado

En el artículo 885, inciso 2º, se agregará, después de descendencia legítima, “o natural”.

En el artículo 1019 se agregará al final: “naturales desconocidos o declarados tales”.

En el artículo 1021, inciso 1º, debe agregarse después de las palabras descendencias legítima, “o natural”.

Art. 2º - A contar desde la promulgación de esta ley, solamente se considerarán auténticas las ediciones del Código Civil que se ajusten estrictamente al texto del ejemplar remitido por el Poder Ejecutivo y modificaciones a que se refiere el artículo 1º.

Art. 3º - Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir con cargo a Rentas Generales, hasta la cantidad de tres mil pesos en la adquisición de ejemplares del nuevo Código Civil o en la edición oficial del mismo.

Art. 4º - Quedan derogadas: la ley de 1º de julio de 1896 (Seguros de Vida), el artículo 3º de la ley de 28 de marzo de 1900, sobre creación del Registro General de Poderes; la ley de 1º de julio de 1905 sobre interés legal, sin perjuicio de la modificación del artículo 712 del Código de Comercio; la ley de 12 de julio de 1909 sobre reformas al orden sucesorio; la ley de 19 de julio de 1909 sobre derecho a la sucesión a los colaterales; la ley de 19 de diciembre de 1910; el Título de la ley de 24 de febrero de 1911, sobre protección de menores, con excepción de los artículos 15 y 37; la ley de 4 de julio de 1912 sobre matrimonio de sordomudos.

Art. 5º - Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, Montevideo, 26 de diciembre de 1912.

Areco. - Accinelli. - Pérez Olave.

LEY N° 4.845

PODER LEGISLATIVO

El Senado y al Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1° - Apruébanse las reformas introducidas al Código Civil por el doctor Serapio del Castillo, que constan en el ejemplar remitido por el Poder Ejecutivo el 26 de abril de 1912, con las modificaciones que se expresan en el artículo siguiente.

Art. 2° - Los artículos que se expresan a continuación, quedan redactados en la siguiente forma:

(Aquí se transcriben, los artículos 14, 91, 98, 150, 187, 210, 233, 238, 277, 281, 286, 303, 317, 318, 319, 333, 384, 395, 407, 409, 412, 437, 442, 443, 788, 806, 848, 875, 885, 893, 901, 1019, 1021, 1025, 1031, 1194, 1766, que no se transcriben por estar ya incorporados en el texto del Código).

Art. 3° - Desde la promulgación de esta ley, sólo se considerarán auténticas las ediciones del Código Civil que se ajusten estrictamente al texto del ejemplar remitido por el Poder Ejecutivo y a las modificaciones contenidas en el artículo 2°.

Art. 4° - Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir con cargo a Rentas Generales, hasta la cantidad de tres mil pesos en la adquisición de ejemplares del nuevo Código Civil, o en la edición oficial del mismo.

Art. 5° - Quedan derogadas: la ley de 1° de julio de 1896 (seguros de vida); el artículo 3° de la ley de 28 de marzo de 1900, sobre creación del Registro General de Poderes; la ley de 10 de julio de 1905 sobre interés legal, sin perjuicio de la modificación del artículo 712 del Código de Comercio; la ley de 28 de octubre de 1907 sobre divorcio, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 51 de la misma; la ley de 11 de julio de 1910 sobre divorcio; la ley de

Sanción de la Reforma de 1914

12 de julio de 1909 sobre reformas al orden sucesorio; la ley de 19 de julio de 1910 sobre derecho de la sucesión de los colaterales; la ley de 19 de diciembre de 1910; el Título I de la ley de 24 de febrero de 1911, sobre protección de menores, con excepción de los artículos 15 y 37; la ley de 4 de julio de 1912, sobre el matrimonio de sordomudos, y los artículos 1º y 2º de la ley de 25 de noviembre de 1913.

Art. 6º - Destínase de Rentas Generales la cantidad de tres mil pesos, que se entregarán al doctor Serapio de Castillo en retribución del trabajo que le encomendó el decreto de 21 de abril de 1911.

Art. 7º - Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, en Montevideo, a 20 de abril de 1914.

BLAS VIDAL, Presidente . - M. Magariños Solsona, Primer Secretario.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA

Montevideo, 28 de abril de 1914.

Cúmplase, acútese recibo, comuníquese, insértese en el Registro de Leyes de este Ministerio y con la copia correspondiente remítase al del Interior.

BATLLE Y ORDOÑEZ. - Baltasar Brum.

Ley 15.821

CODIGO CIVIL

Se crea una Comisión Nacional para la elaboración de un texto actualizado y se deroga el decreto ley 15.574.(*)

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1°.- Derógase el decreto ley 15.574 de 15 de junio de 1984.

Art. 2°.- Créase una Comisión Nacional para la elaboración de un texto actualizado del Código Civil con el objeto de publicar una nueva edición del mismo, que incorpore las modificaciones legislativas posteriores a su última edición oficial.

Art. 3°.- Elaborado el nuevo texto, para lo que la Comisión dispondrá del plazo de un año a contar desde su instalación, el mismo será sometido a la aprobación legislativa.

Art. 4°.- La Comisión estará integrada por once miembros designados dos por la Suprema Corte de Justicia, dos por el Colegio de Abogados del Uruguay, dos por la Asociación de Escribanos del Uruguay, dos por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y tres por el Poder Ejecutivo uno de los cuales en carácter de Presidente.

Art. 5°.- Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes en Montevideo, a 5 de agosto de 1986. - **Luis Ituño**, Presidente. - Héctor S. Clavijo, Secretario.

Ministerio de Educación y Cultura.

Montevideo, 14 de agosto de 1986.

Cúmplase, acúsase recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.- **TARIGO.- ADELA RETA.**

EXPOSICION DE MOTIVOS

INFORME DE LA COMISION NACIONAL CREADA POR LA LEY No. 15.821 de 14 de agosto de 1986.

- I -

- 1.- La ley No. 15.821 de 14 de agosto de 1986 dispuso en su artículo 2o. la creación de “una Comisión Nacional para la “elaboración de un texto actualizado del Código Civil con el “objeto de publicar una nueva edición del mismo, que incorpore “las modificaciones legislativas posteriores a su última edición “oficial”.-

De acuerdo al artículo 4o. la Comisión debía integrarse por dos miembros designados por la Suprema Corte de Justicia, dos por el Colegio de Abogados del Uruguay, dos por la Asociación de Escribanos del Uruguay, dos por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y tres por el Poder Ejecutivo, uno de estos últimos en carácter de Presidente.-

Por Resolución del Ministerio de Educación y Cultura de fecha 18 de marzo de 1988 se designó a los doctores RAFAEL ROBATTO CALCAGNO -en calidad de Presidente de la Comisión- EDUARDO PIAGGIO SOTO y DANIEL BERVEJILLO como miembros del Poder Ejecutivo.- Por su parte, la Suprema Corte de Justicia nombró a los doctores RAUL ALONSO DE MARCO y MANUEL MERCANT; el Colegio de Abogados del Uruguay a los doctores EDUARDO VAZ FERREIRA y SANTIAGO CARNELLI y como miembros alternos a los doctores CARLOS DE CORES y ARTURO CAUMONT; la Asociación de Escribanos del Uruguay a los Escribanos EUGENIO CAFARO y WALTER PARDIAS y como integrante alternativo a la Escribana TERESA GNAZZO y la Facultad de Derecho a los doctores JORGE GAMARRA y ENRIQUE AREZO PIRIZ.-

El día 13 de mayo de 1988, la Señora Ministra de Educación y Cultura doctora ADELA RETA dio posesión de sus cargos a los miembros designados.-

La Comisión se abocó de inmediato a la misión encomendada, designando tres Sub-comisiones para examinar las distintas materias componentes del Código. Dichas Sub-comisiones, en un trabajo preliminar estudiaron y revisaron el articulado de las áreas asignadas a cada una de ellas; y completada esa labor, se ingresó a su análisis por la Comisión en pleno.-

- 2.- Múltiples fueron los problemas que debió enfrentar la Comisión para el desarrollo y culminación de su trabajo. Entre ellos y el primero en considerar, estuvo referido a que el Código Civil, luego de las reformas aprobadas por la Ley No. 4.845 de 28 de abril de 1914, obra del doctor SERAPIO DEL CASTILLO y con las modificaciones introducidas en el Parlamento, careció de edición oficial. Tal situación determinó que la Comisión, amparada en los artículos 3o. y 4o. de la precitada ley, tomara como base de trabajo la edición de la “Librería Nacional A. Barreiro y Ramos” del año 1914, que se consideró auténtica, aun cuando no fue posible realizar el cotejo con el texto oficial aludido en los artículos 1o. y 3o. de la misma, en mérito a que la búsqueda de éste, realizada por los integrantes de la Comisión, resultó infructuosa.

Otra temática a la que se vio enfrentada la Comisión fue la de delimitar precisa y correctamente el ámbito de la misión encomendada, ya que como se advertía exactamente en el Informe de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores al dictaminar sobre el Proyecto de Ley que recibiera aprobación legislativa y se convirtiera en Ley No. 15.821, “la tarea a realizar no se reduce únicamente a una adecuación “instrumental, sino que dada la importancia de los textos de que “se trata, su compilación requiere ser hecha con fineza y “escrupulosidad que exceden en trascendencia a una simple tarea de “adecuación.” (Informe de fecha 10 de mayo de 1985).-

Debe además destacarse como circunstancia que complicó y provocó dilaciones en el trabajo de la Comisión, la sanción del Código General del Proceso (Ley No. 15.982) promulgado el 18 de octubre de 1988, que introdujo -no obstante su naturaleza procesal -múltiples y complejas modificaciones al Código Civil, lo que obligó a un análisis revisivo de normas ya estudiadas con anterioridad a la sanción de aquel nuevo cuerpo normativo.-

Exposición de motivos

Estas aclaraciones permiten explicar y justificar la dilatoria en la labor desarrollada por la Comisión, que debió oportunamente solicitar prórroga en el plazo de un año -que fuera fijado por la ley de su creación- para finiquitar la misión encomendada, prórroga que le fuera concedida hasta el 31 de marzo de 1991, por Ley No. 16.132 de 17 de setiembre de 1990.-

Con fecha 13 de mayo del corriente año ocurrió el lamentable fallecimiento del distinguido integrante de esta Comisión, Profesor Escribano EUGENIO CAFARO, razón por la cual se vio impedido de suscribir la presente Exposición.-

- I I -

Una de las cuestiones más debatidas en la Comisión fue la planteada respecto a la conveniencia de mantener la actual numeración de los artículos del Código o cambiarla a consecuencia de la derogación de ciertos textos y agregación de otros, según se hiciera en las anteriores actualizaciones de 1893 y 1914.-

Por reducida mayoría prevaleció la opinión favorable al mantenimiento de la actual numeración, aplicando para el caso de que la incorporación de nuevas disposiciones así lo hiciera indispensable, el método seguido en la reciente Ley No. 16.081 de 18 de octubre de 1989, modificativa del artículo 881 del Código.

Se entendió por dicha mayoría que el cambio dificultaría sin mayores ventajas el manejo de la jurisprudencia y doctrina de derecho civil contenidas en los centenares de volúmenes publicados en más de tres cuartos de siglo y se tuvieron presentes asimismo las dificultades suscitadas por los necesarios cambios de remisiones internas del Código (cerca de mil en el actual texto) que la solución desechada habría de provocar.-

Se optó así por seguir el ejemplo de las más importantes reformas de los Códigos Civiles extranjeros. En efecto, en Francia, a pesar de las múltiples

Código Civil

reformas operadas en el siglo pasado y en el presente, se mantiene la numeración original del año 1804.

En Italia, la radical reforma del Derecho de Familia efectuada en el año 1975 (separación de cuerpos y divorcio, régimen patrimonial de bienes en el matrimonio, filiación, etc.) se realizó declarando derogados ciertos textos y modificando otros, pero sin alterar la numeración.

En Argentina también el Código Civil fue objeto de numerosas reformas en todas las materias, sin cambio de numeración, modificando unos artículos y derogando o agregando otros (Art.264 bis, Art.264 ter, Art.264 quater, etc.).

Lo mismo la reforma alemana de los regímenes matrimoniales del año 1958. Tampoco cambió la numeración la ley suiza de 1984, por la que se introdujeron en el Código fundamentales reformas en lo concerniente a los efectos del matrimonio, al régimen matrimonial de bienes, a las sucesiones, etc.-

En nuestro caso, el criterio de no cambiar la numeración resulta especialmente justificado si se tiene en cuenta que no se reforma el Código (a diferencia de las citadas leyes extranjeras) sino que sólo se trata de actualizar, sin modificarla, la legislación vigente en la materia. (Artículo 1o. Ley No. 15.821 citada).-

Por otra parte, cabe tener presente que si se optara por el cambio de la numeración, la nueva habría de durar pocos años, ya que en muchos temas el Código requiere urgentes reformas, según se indica en otro lugar de la presente Exposición de Motivos.-

- III -

Las correcciones del actual texto propuestas por la Comisión y su fundamento legal se indican en notas al pie de cada artículo en el proyecto acompañado; no obstante se estima conveniente señalar aquí las modificaciones de carácter general efectuadas (las que no están contenidas en las referidas notas particulares).-

Exposición de motivos

En primer lugar, se han actualizado las menciones a organismos estatales, adecuándolas a su presente denominación. Así se ha puesto “Intendencia Municipal” en lugar de “Junta Económico Administrativa”, “Suprema Corte de Justicia” donde dice “Alta Corte de Justicia”, “Instituto Nacional del Menor” en vez de “Consejo de Protección de Menores” o “Consejo del Niño”, etc.-

La misma solución se ha seguido respecto a las numerosas referencias a “Escribano” contenidas en el texto vigente, sustituyéndolas en su caso por la actual denominación de los funcionarios de que se trata, es decir “Actuarios”.-

A su vez, se han eliminado del texto propuesto las menciones individualizadas a determinados Juzgados o Registros, incorporándose en cambio las expresiones “respectivo” o “competente”, con el doble objetivo de excluir referencias superadas por la organización judicial o registral vigente y de evitar que eventuales cambios futuros de dichas organizaciones puedan envejecer prematuramente la adecuación efectuada. (Se ha hecho excepción en algún caso al criterio indicado cuando media un texto legal reciente que individualiza el órgano interviniente: véase por ejemplo el artículo 267).-

Del mismo modo y por similares razones y salvo el caso de ser necesaria la individualización de una determinada norma, se han eliminado las referencias a los demás Códigos (Código de Procedimiento Civil, de Comercio, Penal, Rural), incorporándose las expresiones “ley procesal”, “ley comercial” o “legislación mercantil”, etc.-

Las referencias extracódigo -ya fueren a normas constitucionales, legales o reglamentarias- contenidas entre paréntesis en múltiples artículos y provenientes en su mayoría de la compilación efectuada en el año 1914, han sido totalmente eliminadas.

La Comisión consideró unánimemente que además de las referencias actuales a disposiciones derogadas, tales como aquellas relativas a la Constitución de 1830 (artículos 1, 22, 492), al Código rural de 1875 y al Código de Procedimiento Civil -que necesariamente debían excluirse- es conveniente eliminar referencias que recargan innecesariamente el texto legal y que eventualmente podrían comprometer la actualidad de la compilación que se intenta, de modificarse las normas objeto de las referencias.-

Código Civil

Corresponde anotar que en cambio se han mantenido las remisiones del texto a otros artículos del propio Código Civil, modificando las mismas cuando ello resultaba de otras adecuaciones normativas e incluso corrigiendo en algunos casos (artículos 116, 118, 488 y 1611) referencias que son notoriamente equivocadas.-

Cabe precisar asimismo que si bien -siguiendo el criterio de las compilaciones de 1893 y 1914- no se han incorporado normas de leyes especiales que tratan temas afines al Código (por ejemplo, legitimación adoptiva, propiedad horizontal, prenda agraria e industrial, arrendamientos urbanos y rurales, registros públicos) se ha hecho referencia en el texto a la existencia de dicha legislación (artículos 213, 491, 1664 No.1, 1777, 2321, etc.).

Se estima ello conveniente para completar el panorama legislativo al lector del Código y para dejar bien establecido que la aprobación del nuevo texto no importa modificación o derogación tácita de la aludida legislación especial.-

- I V -

Una modificación de carácter general de los textos del Código que importa a la vez una adecuación y una reforma legislativa es la sustitución de las referencias del texto vigente a determinadas cantidades en pesos por otras expresadas en unidades reajustables por la mitad de la suma en pesos. (Por ejemplo en el artículo 310, conforme al actual texto, el menor habilitado no puede contraer deudas que pasen del valor de mil pesos: se establece que no podrán contraer deudas que pasen de 500 unidades reajustables.).-

Es claro que la millonaria desvalorización de la unidad monetaria nacional aludida en el texto vigente del Código operada desde 1914 ha superado las previsiones posibles del legislador, tergiversándose así sus propósitos y restando eventualmente toda significación a las disposiciones correspondientes, por lo que el mero traslado de las cantidades establecidas a la nueva unidad monetaria

Exposición de motivos

-mil veces inferior a la anterior- creada por el Decreto Ley No. 14.316 sería insuficiente e incluso absurdo.-

La Comisión ha entendido entonces que a pesar de la limitación de sus funciones debía proponer una reforma que reafirmara el objetivo perseguido por el Codificador en las presentes circunstancias fácticas, llegando en definitiva, tras cuidadosa deliberación, a la propuesta adelantada precedentemente.

La introducción de la unidad reajutable sigue el criterio adoptado recientemente en el Código General del Proceso y en diversas actualizaciones realizadas en los últimos años (V. para el Código Penal artículo 216 de la Ley No. 15.903 de 10 de noviembre de 1987); la expresión numérica en unidades reajustables que se propone se reputa razonable, salvo mejor opinión legislativa (en el caso del artículo 310 al que se hace referencia ut supra el menor habilitado o emancipado no podría contraer deudas superiores a unos N\$6.500.000, según el actual valor de la unidad reajutable.).-

- V -

La Comisión, en su prolongado trabajo de compilación integral de nuestro Código Civil, se enfrentó con disposiciones que, si bien técnicamente están vigentes, se entendió que su supresión, en algún caso o su nueva redacción, en otros, era altamente aconsejable a fin de acompasar nuestro Código Civil al espíritu de las disposiciones de los Pactos ratificados por la República, v.g.: Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por la Ley No. 15.737 de 8 de marzo de 1985 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 (Protocolo Facultativo).-

En otros casos, las propuestas de modificaciones se imponían para resolver invencibles dificultades de interpretación, a las que se podía poner punto final, v.g. artículo 1956.

También existían razones prácticas para otras modificaciones, ya que los textos actuales, a través de la larga vigencia del cuerpo legal, han demostrado ser perjudiciales a aquellos valores que, precisamente, se dirigían a proteger, v.g.: artículo 441.-

También la Comisión, en algún caso excepcional, encontró necesario suprimir algunas disposiciones; es el caso de los numerales 8o. y 9o. con excepción del último inciso del artículo 285, ya que, el No.8 genera confusas situaciones que conllevan a la pérdida de la patria potestad de personas que no han abandonado culpablemente a sus hijos.

Y, en el No.9 la expresión “riesgo cierto en la formación corporal, intelectual y “moral del menor”, puede crear dificultades en la valoración de tales criterios con la consiguiente inseguridad en las relaciones familiares.-

Debe destacarse que la Comisión ha vacilado en formular tales propuestas. En efecto, la Comisión ha sido consciente de que su labor se limitaba a compilar y actualizar el Código Civil y, por lo mismo, dichas propuestas no se encuentran asignadas en la Ley que organizó sus cometidos.

Sin embargo, la gran mayoría de sus integrantes ha estimado que debía llevarse a conocimiento del legislador la existencia de normas cuya adecuación reclama una reforma legislativa.

Ciertamente, en los inicios del trabajo de la Comisión las propuestas de reforma legislativa eran muy abundantes; finalmente se han limitado a veinte las disposiciones que se estiman de urgente consideración por los poderes públicos.-

Así, en lo relativo al Capítulo I del Título XI del Libro Primero, la Comisión se ha limitado a introducir las modificaciones mínimas al texto, de acuerdo a la ley procesal y se ha evitado insertar aquellas modificaciones que suponen una alteración sustancial de la naturaleza del instituto de la incapacidad, sin las precisiones normativas exigibles para la caracterización de la figura, de lo que sería en Derecho Comparado, una verdadera inhabilitación.

No obstante, se estima pertinente advertir al Poder Legislativo sobre la conveniencia de efectuar un replanteo del tema y se propone la suspensión de la vigencia del artículo 447-2 del Código General del Proceso, hasta que se realice un estudio global de dicha materia.-

Igualmente la Comisión, si bien entendió que el cambio de las costumbres y los avances tecnológicos hacían necesario un reexamen de otras disposiciones del Derecho de Familia (filiación, etc.), tanto como de otras ramas del Derecho Civil,

Exposición de motivos

consideró en definitiva conveniente no efectuar propuestas al respecto, desde que tal problemática excedía el marco de sus atribuciones al requerir la adopción de criterios de política legislativa.- Entrando en el análisis de las normas que se propone ajustar en su redacción, dejando de lado el caso ya referido (artículo 285 números 8 y 9), se mencionan las siguientes disposiciones:

- 1.- ARTICULO 209. Se propone regular la situación de los hijos del matrimonio declarado nulo, por lo dispuesto en el artículo 174 por entender que no puede recaer sobre la condición legal de los hijos, la invalidez del matrimonio.-
- 2.- ARTICULO 210. Se propone modificar su texto, por razones de justicia y a fin de adecuarlo al espíritu del Pacto de San José de Costa Rica ratificado por Ley No. 15.737 de 8 de marzo de 1985.-
- 3.- ARTICULO 230. Se propone agregar, luego de legítimos “o naturales”, por las razones referidas en el caso del artículo anterior. (artículo 210 Código Civil).-
- 4.- ARTICULO 237. Se aconseja su derogación por las razones referidas anteriormente.-
- 5.- ARTICULO 284-1. Se propone su inclusión en el artículo 285, como supuestos de pérdida de la patria potestad a instancia de parte.-
- 6.- ARTICULO 395. En el actual texto legal sólo se prevén los bienes muebles preciosos o que tengan valor de afección; eso excluye del contralor jurisdiccional todo el universo mobiliario que la tecnología y los avances del presente siglo han colocado en una trascendencia patrimonial nunca vista antes. Así, los vehículos, camiones, complejos electrónicos, computadoras altamente sofisticadas han adquirido una creciente importancia que supera a la de los inmuebles. Al establecer la preceptividad del contralor jurisdiccional para enajenar o gravar bienes muebles de un valor superior a las 500 unidades reajustables, se asegura una efectiva protección al pupilo y al interdicto, sin afectar el comercio jurídico.-
- 7.- ARTICULO 416. La presentación por parte del tutor (y el curador en general) cada tres años del estado de situación en que se encuentra el

patrimonio del pupilo (o interdicto), ya había sido reducido a un año, para, más adelante volver a los tres años. Hoy, sin embargo, la celeridad de la vida comercial hace necesario un contralor menos dilatado en el tiempo. La disposición proyectada no altera la trienalidad de la presentación; en principio, simplemente faculta al Juez y al Fiscal, atento a las circunstancias particulares del caso, para reducir ese plazo como garantía de eficiente contralor sobre la administración del patrimonio de menores y de interdictos.-

- 8.- ARTICULO 441 INCISO 1o. Se evita la preceptividad de la curatela legítima. La experiencia indica que cuando existe un estado de separación de hecho o de conflictividad entre los esposos resulta altamente peligroso confiar la curatela, necesariamente, a quien no guarda afecto a su cónyuge.-
- 9.- ARTICULO 442 INCISO 2o. Se incorpora a los hijos naturales reconocidos como posibles curatelados por sus padres. Se busca conciliarlo con el espíritu del Pacto de San José de Costa Rica.-
- 10.- ARTICULO 442-1. Se procura flexibilizar el régimen de la curatela legítima, en protección de los incapaces.-
- 11.- ARTICULO 842 No. 2. Se elimina “varón y” a fin de que también sea susceptible de incurrir en esa causal de indignidad la mujer, ya que su estado cultural actual no justifica esta discriminación.-
- 12.- ARTICULO 900 No.3. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 consigna que deben equipararse los derechos de la mujer, por lo que, esta norma establece una discriminación contra la mujer, desde que el ejercicio de la prostitución no es privativa de ésta.-
- 13.- ARTICULO 1956. La redacción que se aconseja elimina la ambigüedad del actual texto legal en cuanto al cotejo de la entidad de las cuotas en la copropiedad, sin referencia alguna a su costo.-
- 14.- Finalmente, se incorpora -como artículo 2018- una norma interpretativa

Exposición de motivos

relativa a la derogación del instituto de la renuncia a los gananciales operada por la Ley No. 10.783 (artículos 1o. y 2o.). A su vez, el inciso 2o. proyectado evita el efecto retroactivo absoluto de la norma interpretante, salvaguardando el comercio jurídico y, en especial, obviando la observación de títulos antecedentes inmobiliarios en cuyas procedencias exista una renuncia a los gananciales.-

La modificación de los valores en materia de colación, los alimentos forzosos y de recompensas se examina en el capítulo siguiente.-

- V I -

El tema de la corrección monetaria ha sido uno de los que mayores dificultades ha planteado a la Comisión.-

El conflicto ya señalado entre disposiciones caídas en desuso cuya “actualización” suponía una reforma y cuyo mantenimiento no cumplía ningún objetivo, se hizo en este tema, de una magnitud considerable, habiendo existido en la Comisión discrepancias sobre la incidencia del Decreto-Ley No. 14.500 de 8 de marzo de 1976 en el Derecho de familia y sucesorio.-

El Código Civil, como es sabido y como es propio de la legislación del siglo XIX, se adhiere a una concepción nominalista por la cual las sumas debidas deben satisfacerse en la misma especie, salvo acuerdo en contrario y por su valor nominal y no por el valor real o de cambio.-

Coincidente con esta concepción, es especialmente en sede de alimentos forzosos, colación y de recompensas donde la inflación ha distorsionado totalmente la finalidad de estos institutos, ya que, pasados algunos años, el valor de los alimentos, de la donación y el de la recompensa es devorado por la inflación y, a la época de su liquidación, normalmente muchos años después, ha prácticamente desaparecido.

Es cierto que en materia de sociedad conyugal y, por ello, con referencia a las recompensas el cónyuge acreedor de la misma no tiene porqué aguardar muchos años para percibirla, pudiendo, si así lo desea, provocar la disolución de la sociedad

conyugal (artículo 6o. de la Ley No. 10.783 de 18 de setiembre de 1946) y, como operación de la liquidación, obtener el cobro de su recompensa.

En todo caso, de común acuerdo, los esposos pueden restablecer la sociedad conyugal. (artículo 1996 Código Civil).-

Sin embargo, además de que esta solución puede no resultar siempre viable o práctica, obligaría a sucesivas disoluciones (y los consiguientes restablecimientos de la sociedad conyugal) para evitar la pérdida del valor de la recompensa y el costo de tales disoluciones gravaría, innecesariamente el crédito a cobrar.

Por otra parte, en materia de colación los coherederos forzosos no donatarios, no pueden, siquiera, contar con un mecanismo que anticipe la liquidación de la donación, ya que si se lo acordare sería absolutamente nulo por ilicitud de su objeto (artículo 1285 Código Civil).-

Esta situación de injusticia originó discrepancias doctrinarias y jurisprudenciales. La solución de este acuciente problema no está comprendida dentro de los cometidos de esta Comisión.

Por otra parte, a diferencia de las propuestas legislativas efectuadas en el Capítulo anterior, que no suponían una modificación sustancial de la estructura y de los principios rectores originales del Código Civil, en sede de alimentos forzosos, recompensas y colación se hacía necesario adoptar criterios de política legislativa y económica de gran trascendencia.-

En función de ello se estimó conveniente limitar la propuesta de reforma en materia de corrección monetaria a aquellos temas en los que el mantenimiento de la redacción del Código presenta cotidianamente problemas y advertir, a un tiempo, la necesidad de abordar también en la etapa ya anunciada de reforma de éste, tan acuciente cuestión.-

La Comisión no pretende, de acogerse la propuesta que se analiza en este Capítulo, alterar el nominalismo estructural sobre el que se asienta el Código Civil y la legislación en general.

Pero, como ocurre con el Decreto-Ley No. 14.500 de 8 de marzo de 1976, la ley acude a resolver situaciones especialmente afectadas por el nominalismo legal y cuya urgencia hace necesaria la intervención del legislador.-

En consecuencia y dada la importancia del problema de la desvalorización en estos institutos, como son: la colación, las recompensas y los alimentos forzosos, la Comisión tomó soluciones puntuales en determinadas normas,

Exposición de motivos

sugiriendo una reforma sobre los artículos 1108 inciso 1o., 871, 889 inciso 2o., 1968, 1969 inciso 3o., 2003 y 2008 inciso 4o. -cuyo texto se indica al pie de cada uno-.

Se advierte que esto es sin perjuicio de aspirar una solución global para la generalidad de los casos y aquellas situaciones que puedan haber quedado sin contemplar, entre ellas las de los artículos 71, 211, 269, 425, 427, 493, 507, 512, 602, 684, 695, 700, 734, 751, 997, 1100, 1135, 1156, 1308, 1312, 1319, 1482, 1706, 1955 inciso 6o., 1957, 1959, 1965 y 2363.-

Asimismo se encontró necesario redactar una disposición transitoria (que se incluiría como incisos segundo y tercero del artículo 2391-1) que resuelva el problema de la vigencia en el tiempo de aquellas modificaciones.-

- VII -

Corresponde precisar finalmente, que una situación especial se planteó en relación a los artículos 2006 y 2007, en tanto lo inconciliable de las tres interpretaciones formuladas, impidió llegar a una conclusión que recogiese al menos la mayoría absoluta de las opiniones de los integrantes de la Comisión, a pesar de las múltiples deliberaciones llevadas a cabo a tal objeto.-

Se indica a consecuencia, en el lugar de los referidos artículos las tres interpretaciones formuladas y se acompaña a la presente Exposición por separado, la fundamentación de cada una de las interpretaciones aportadas por los Dres. Vaz Ferreira; Arezo; y Escs. Cafaro, Pardías y Dres. Carnelli y Bervejillo -respectivamente- con las adhesiones correspondientes.-

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL

ARTS. 2006 Y 2007

** INTERPRETACION “A”

ARTICULO 2006.-

Se liquidarán y pagarán los capitales de los cónyuges y las deudas, cargas y obligaciones de la sociedad.

Cuando el caudal no alcanzare para cumplir todo lo dispuesto en este artículo, se observará lo determinado sobre *los créditos privilegiados y graduación de acreedores.*

ARTICULO 2007.-

DEROGADO en virtud de los Arts. 1º y 2º Ley 10.783 de 18.9.46

“Si en la liquidación de la sociedad conyugal los acreedores sociales pueden considerarse privilegiados respecto a los cónyuges acreedores de recompensas.”

Para responder a esta cuestión, basta leer las dos primeras líneas del artículo 2368 del Código Civil:

“Privilegio es un **favor especial** con que **la ley** mira ciertos créditos personales en concurso de acreedores”.

“Favor **especial**”: es decir, de interpretación estricta con que “la ley” mira ciertos créditos; es decir, que sólo los puede determinar la ley, no la imaginación de ningún intérprete.

El texto del Código es suficientemente claro, pero, ya que desde hace décadas se intenta desconocerlo, citaremos algunas indiscutidas opiniones doctrinarias.

García Goyena p. ej. (cuyo capítulo “De los privilegios” es citado por Narvaja como antecedente en esta materia) decía anotando su Art. 1923:

“Que concede la ley: por la calidad favorable del mismo crédito,

como acabo de decir, no por consideración a la persona del acreedor. **Todo Privilegio es una exorbitancia y desvío del derecho común; así, pues, no puede proceder sino de la ley:** el simple convenio de los particulares “no bastaría a darlo.”

Es decir: que el privilegio de los acreedores sociales contra los cónyuges sólo podría admitirse, en el derecho vigente, si algún texto legal se lo concediera. Nunca nadie dijo cuál es ese texto.

En el régimen del Código Civil, el artículo 2371 número 3, concedía un privilegio a la mujer casada sobre los bienes del marido y del texto del artículo 2005 surgía un privilegio de la mujer contra los acreedores por deudas, cargas y obligaciones de la sociedad. Este privilegio ha quedado tácitamente derogado, pero nunca se sancionó un texto legal que diga p. ej.: “Los acreedores por deudas, cargas y obligaciones de la sociedad conyugal son privilegiados respecto a las recompensas adeudadas a la mujer.”

Que el privilegio sólo puede fundarse en un texto legal expreso, es una verdad elemental que siempre admitió la más autorizada doctrina.

Se transcribe p.ej. de una obra contemporánea de nuestro Código, la de Rodiere y Pont “*Traité du contrat de mariage et des droits respectifs des époux relativement a leurs biens*”, t. 2 N° 1088, p. 360: “El privilegio es un derecho excepcional y absolutamente exorbitante. Por lo mismo no podría ser establecido por vía de analogía y **no existe sino a condición de encontrarse escrito en un texto positivo y formal. Entre los principios admitidos, no hay ninguno más cierto que éste.**”

Podría continuarse con las citas, todas en el mismo sentido. Por ejemplo: Planiol, *Traité élémentaire*, t. II N° 2544: “Primera idea del privilegio.- Propiamente hablando, el privilegio es **una disposición de la ley que favorece a un acreedor** (es Planiol quien escribe esto en bastardilla)... De ello resulta que un privilegio **no puede ser establecido sino por la ley**. Es la idea que expresa todavía la palabra “**privilegio**”: **ley hecha en un interés privado**. En consecuencia los privilegios son de interpretación estricta y no existen sin un texto que los acuerde expresamente.”

En este sentido, existe absoluta unanimidad doctrinaria. Así como en Derecho Penal es verdad incontrovertida que no hay delito sin ley que lo prevea, que no hay pena sin ley, en Derecho Civil no se discute que no hay privilegio sin ley que lo conceda.

Con esto no queremos decir que la palabra “privilegio” sea sacramental. En ciertos casos la ley no habla de privilegios sino de preferencias. O, como

ocurría en los artículos 2005 a 2007, disponiendo en qué orden se debía pagar las deudas. Pero se trata siempre de privilegios concedidos por textos legales.

Puede entonces preguntarse en qué texto legal se funda actualmente el pretendido privilegio de los acreedores de de la sociedad respecto a los créditos por recompensas.

En la fundamentación de la interpretación “B” no se cita ninguno. Simplemente, teniendo en cuenta la equiparación de las facultades de ambos cónyuges, se da por derogado el artículo 2005 y se traslada a la mujer al 2007. Con idénticos fundamentos pudo considerarse derogado el 2007 y ubicar al marido en el 2005.

En cuanto a la posición del Dr. Gatti, se basaba en un grueso, evidente e inexplicable error. Para demostrarlo, basta transcribir lo que decía intentando refutar la posición de Vaz Ferreira:

“Supongamos que el marido, que tiene un capital propio de \$ 200.000 y ha adquirido durante el matrimonio a título oneroso, un inmueble de \$ 200.000 y tiene además deudas por \$ 400.000, enajena sus bienes propios. En tal supuesto no solamente ha sustraído de la prenda de sus acreedores \$ 200.000 eliminando la posibilidad de que éstos puedan cobrarse íntegramente sus créditos de \$ 400.000, sino que ese hecho, la enajenación del bien, que disminuye la garantía de los acreedores, le da aún la posibilidad de concurrir con éstos a repartirse proporcionalmente los \$ 200.000 que quedan de bienes gananciales!”

Argumentación sin sentido.

Que enajenando bienes se pueda burlar a los acreedores, es algo que puede hacer cualquier persona, casada o soltera, si los acreedores no han pedido garantías y no prospera la acción pauliana.

Pero en el párrafo transcrito no se advirtió que la concurrencia del marido al reparto de los gananciales nunca perjudica a los acreedores sino que en muchos casos los favorece, pues el crédito del marido contra la masa ganancial es un bien que integra la prenda común de los acreedores y al hacerlo efectivo el marido, los acreedores (que normalmente ya le habrán trabado un embargo genérico) se cobrarán inmediatamente sobre lo que por concepto de recompensa haya obtenido el marido. Es decir, repetimos, que no sufrirán ninguna clase de daño.

Es lamentable que cuando, en la década del 50, en las deliberaciones de la Comisión organizada por el Decano Couture para proyectar la coordinación de las disposiciones del Código Civil con las de la ley de derechos civiles de la

Exposición de motivos

mujer, el citado argumento de Gatti haya sido aceptado por algunos miembros de la Comisión, lo que impidió llegar a un acuerdo.

Hacemos notar que en tales divergencias influían, no sólo las maneras de razonar, sino también las diferencias de puntos de vista originadas por la diversidad de especializaciones.

Algunos integrantes de la Comisión, vinculados a actividades bancarias, tendían a pensar, con total sinceridad, en los problemas del crédito y de los acreedores (en la mayoría de los casos: instituciones bancarias).-

Otros centrábamos nuestra atención en los problemas de familia. En el caso particular de Vaz Ferreira, como profesor de Derecho de Familia y Defensor de Menores en el Poder Judicial, dio siempre primordial importancia al interés de la familia. Se han conocido numerosos casos en que la esposa fue propietaria de algunos bienes y en que el marido contrajo importantes deudas e indujo a la mujer a vender sus propiedades. En tales situaciones consideramos inícuo que el privilegio que se concediera a los bancos acreedores impidiera a la mujer recuperar, en su beneficio y en ciertos casos en el de sus hijos menores, siquiera una cuota de lo perdido.-

Pero estas son consideraciones secundarias. Lo decisivo es que el pretendido privilegio no surge de ningún texto legal.-

Se ha leído atentamente la fundamentación de la interpretación “B”. En su mayor parte sólo tiene interés histórico, en cuanto se refiere al Código Civil y a su reforma por la ley de derechos civiles de la mujer. Sólo en los tres párrafos finales entra, dice, “en el meollo de la cuestión” y afirma que “Derogado, entonces, el artículo 2005, quedan los “acreedores sociales como los primeros en cobrar”, que “El inciso 2º del artículo 2006 está derogado en la dote” y que “primero se pagan las deudas y las cargas y las obligaciones de la sociedad (artículo 2006, inciso 1º)” (citas textuales). Es decir: que afirma la derogación del 2005, la derogación del inciso 2º del artículo 2006 en cuanto a la dote y la vigencia del inciso 1º del artículo 2006 pero con la supresión de las palabras “después de la dote de la mujer”.-

Este planteamiento nos resulta inaceptable. Los artículos 2005, 2006 y 2007 constituían un conjunto de normas inescindiblemente ligadas entre sí e inobjetables dentro del régimen del Código. Su derogación sólo puede interpretarse como total, no puede pensarse que alguna parte del artículo 2006 sobreviva aislada y mutilada.

No dudamos, pues, que actualmente no subsiste ningún privilegio, porque ningún texto lo concede a ningún crédito.-

La redacción propuesta es entonces la que se cita ut supra. Fuera de las razones de técnica jurídica que imponen esta redacción (imposibilidad de admitir privilegios que no se funden en textos legales) entendemos que la negación de todo privilegio a los acreedores es la mas justa y la que da mejor solución a problemas que frecuentemente se plantean en la práctica. Suele p. ej. suceder que la mujer, inducida por el marido, vende un inmueble propio sin subrogarlo por otro y que el marido, por malos negocios o por gastador, contrae deudas y cae en la insolvencia. Si se optara por conceder un privilegio a los acreedores, en muchos casos el capital propio de la mujer quedaría totalmente perdido. La negación del privilegio permitirá salvar al menos un porcentaje de dicho capital propio, en perjuicio de los acreedores, pero en beneficio de la esposa y en muchos casos de los hijos menores.-

En el planteamiento de la Interpretación “B” influye un grave error de interpretación de las normas de nuestro viejo régimen legal. Dice p. ej. textualmente “que el pago de la dote de la mujer no se hacía a expensas de los acreedores de la sociedad, sino que la mentada situación privilegiada de la dote “no suponía que en su pago de desplazara a los acreedores de la sociedad ni se hiciera en desmedro del resto del pasivo social (deudas, cargas y obligaciones de la sociedad) administrados por el marido”: “Y, aún en el concurso, podía suceder que el crédito dotal que gozaba de un privilegio de tercer grado se viera desplazado por acreedores con mejor privilegio”.

En estos y en otros párrafos se advierte una total confusión entre lo dispuesto por los artículos 2025 y 2371. Tal confusión es posiblemente provocada por la remisión del art. 2005 al 2371: esta remisión, que hace valer la interpretación “B” para negar que las recompensas adeudadas a la mujer fueran privilegiadas, no se encontraba en el texto de Narvaja ni en la edición oficial de 1893, es una de las tantas remisiones carentes de sentido agregadas por del Castillo. Es sabido que estas remisiones se hicieron en algunos casos para remitirse de un texto a otro concordante, en otros para señalar diferencias de soluciones o por cualquier otro motivo y que por lo tanto no se les puede dar en ningún sentido fuerza obligatoria.

Los artículos 2005 y 2371 se referían a créditos diferentes.

El primero: a las recompensas adeudadas a la mujer, a créditos de la mujer contra la sociedad conyugal, pagaderos con gananciales.

El segundo: a créditos de la mujer contra el marido, pagaderos con bienes de éste.-

Para aclarar lo expuesto con un ejemplo supondremos que, bajo la vigencia

Exposición de motivos

del régimen del Código Civil, a la disolución de la sociedad conyugal existían gananciales por valor de 100, que durante la sociedad el marido había enajenado los bienes de la mujer por valor de 200, que había contraído otras deudas a cargo de la sociedad no favorecidas por un privilegio por valor de 400 y que los bienes propios del marido valían 250.

No existía ninguna duda de que debía cumplirse ante todo el art. 2005: “En primer lugar se pagará la dote de la mujer”. Es decir: que la totalidad de los gananciales, 100 correspondían a la mujer, nada a los acreedores.-

Y se configuraba lo previsto por el art. 2006, el caudal ganancial no alcanzaba para pagar la dote de la mujer y las deudas y cargas y obligaciones de la sociedad. Entonces y recién entonces, correspondía aplicar el segundo inciso del art. 2006 en su remisión a “lo determinado sobre los créditos privilegiados y graduación de acreedores”. En el ejemplo que hemos tomado, ya no existen gananciales, pues los que existían por valor de 100 fueron agotados en el pago a la mujer de la mitad de la recompensa adeudada. Sobre los 250 que constituyen los bienes propios intentarán cobrarse, en concurso, la mujer, 100 y los acreedores 400. Si, como hemos supuesto, ningún acreedor es privilegiado, la mujer cobraría 100 (completando así los 200 que por recompensas se le adeudaban) y los 150 restantes propios del marido se repartirían a prorrata entre los acreedores por 400.

Podía ocurrir, al contrario, que todos los créditos fueran privilegiados en primer grado (expensas funerales, gastos de enfermedad, honorarios de abogados, atrasos de impuestos, etc.): entonces la mujer no cobraría nada.-

Es decir: que en el sistema del Código dos textos daban privilegio a la mujer: el art. 2005 (“En primer lugar...”) sobre los gananciales y el 2371 sobre los bienes del marido.-

Es lógico admitir que tales privilegios fueron derogados por el cambio de régimen matrimonial; pero no tiene ningún fundamento la interpretación conforme a la cual actualmente todos los créditos, incluidos los que nunca gozaron de ningún privilegio, ahora, a consecuencia de la ley de derechos civiles de la mujer, pasarían a ser privilegiados respecto a las recompensas debidas a cualquiera de los cónyuges.-

Todos estamos de acuerdo en que son privilegiados respecto a las recompensas las expensas funerales del deudor difunto, los gastos de enfermedad de que haya fallecido el deudor, los gastos de subsistencia del deudor y su familia durante el último año y en su caso todos los privilegiados conforme a los arts. 2369 y siguientes. Pero es inadmisibile

la innovación propuesta en la fórmula “B” conforme a la cual serían privilegiados respecto a las recompensas todos los créditos sin distinción. Si p. ej. el marido ha contraído deudas bancarias para dilapidar el dinero en el juego y otros vicios y la mujer ha vendido sus bienes para mantener a la familia (esto no es imaginación: lo hemos visto más de una vez en la práctica) los créditos de los bancos serían privilegiados respecto a las recompensas adeudadas a la mujer. Tal privilegio no tiene ninguna base legal (pues no resulta de ningún texto) ni tiene el menor fundamento de justicia o equidad. Sería una reforma que (a diferencia de las otras propuestas) no tendería a mejorar sino a empeorar el sistema vigente.-

En cuanto a la interpretación “C” (que en dos oportunidades obtuvo en la Comisión el voto mayoritario): la consideramos muy preferible a la “B” en cuanto puede evitar que en casos como el expuesto las dilapidaciones de un cónyuge puedan tener como consecuencia la pérdida total del capital propio del otro, en perjuicio suyo y de la familia. Pero, desde que significaría la creación de un nuevo privilegio, esta interpretación sólo podría plantearse como reforma legislativa.-

DR. EDUARDO VAZ FERREIRA

****ADHIRIENDO A LA FUNDAMENTACION DEL DR. EDUARDO VAZ FERREIRA, SIN COMPARTIR TODAS LAS CONSIDERACIONES FORMULADAS,**

DR. RAUL ALONSO DE MARCO

****INTERPRETACION “B”**

ARTICULO 2006.- En primer lugar se liquidarán y pagarán las deudas y las cargas y obligaciones de la sociedad.

Cuando el caudal no alcanzare para cumplir todo lo dispuesto en este artículo, se observará lo determinado sobre los *créditos privilegiados y graduación de acreedores*.

ARTICULO 2007.- Seguidamente se liquidará y pagará el capital de los cónyuges hasta donde alcance el caudal inventariado de acuerdo a las reglas de la presente Sección.

1.- La Ley No. 10.783 de 18 de setiembre de 1946 modificó y derogó diversos artículos del Código Civil, especialmente, en sede de liquidación de la sociedad conyugal.

Este dictamen se limita a ilustrar acerca de la incidencia de la referida ley en cuanto a los artículos 2005, 2006 y 2007.

2.- Para ello y habida cuenta que la ley No. 10.783 operó la derogación tácita del texto civil originario, es necesario conocer la operatividad de la sociedad conyugal antes de dicha ley y en qué forma ésta derogó tácitamente al anterior texto del Código Civil. La derogación tácita, presupone, claro está, que la nueva ley sea inconciliable con el texto anterior. No puede, pues, admitirse una derogación que no sea inconciliable con el régimen del Código Civil y, menos aún, si cabe, una modificación de la operatividad de la liquidación de la sociedad conyugal divorciada del nuevo texto legal (Ley No. 10.783).

3.- La Ley No.10.783 (“de Derechos Civiles de la Mujer”) resulta claro que no introdujo modificación alguna al régimen de liquidación de la sociedad conyugal, sino en lo que fuera, necesariamente inconciliable con el nuevo texto, en especial el artículo 1o., en cuanto dispone que “la mujer y el hombre tienen igual capacidad civil.”

4.- Es más, en la única disposición en la que alude a la liquidación de la sociedad conyugal (artículo 6o. inciso 2o.) se remite a las reglas del Código Civil. Comencemos, entonces, con una rápida reseña del régimen anterior a 1946.-

5.- En el régimen originario del Código Civil existían, durante la vigencia de la sociedad conyugal, tres masas de bienes: a) los dotales (hoy, propios de la mujer), b) los maritales (hoy, propios del marido) y, c) los gananciales. La administración de las tres masas correspondía, ordinariamente, al marido: los maritales y gananciales (artículo 1970 Código Civil) y los dotales (artículo 2033 Código Civil).-

6.- La administración unipersonal hacía al marido responsable del pasivo social y del personal con sus bienes maritales y los gananciales (1975 Código Civil). Aun cuando la mujer fuera administradora extraordinaria de la sociedad conyugal, sus actos y contratos se “miraban como celebrados por el marido” (artículo 1982 Código Civil).-

7.- Entrando, ahora, a la sistemática legal, la dote de la mujer era el crédito de ésta contra el marido. Esa fue la enseñanza unánime (Conf.: Joaquín SECCO ILLA: “Capitulaciones Matrimoniales y Sociedad Legal”, en Revista Jurídica, Centro de Estudiantes de Derecho, Mdeo. Año III, Setiembre 1929, No.29. especialmente págs. 160 y ss.). Tal crédito (dote) gozaba de un tratamiento especial y privilegiado “lato sensu”, en cuanto al art. 2005 Código Civil disponía: “En primer lugar se liquidará y pagará la dote de la mujer, según las reglas que para su restitución están determinadas en el Capítulo III de este Título, con las modificaciones que resultarán de las disposiciones siguientes (Artículo 2371, número 3)”.-

8.- Al respecto cabe hacer notar que, siempre bajo el régimen anterior a la vigencia de la ley No. 10.783 de 18 de setiembre de 1946, la dote, si bien la ley disponía su liquidación y pago “ en primer lugar”, agregaba a continuación algo muy importante “con las modificaciones que resultarán de las disposiciones siguientes” y se remitía, precisamente, al artículo 2371, No.3 Código Civil que establecía que en caso de concurso de acreedores del marido, la esposa tenía un privilegio “strictu sensu” de tercer grado; que, a su vez , de acuerdo al artículo 2378 Código Civil son “créditos que se refieren indistintamente unos a otros, según las fechas de las causas.-”

9.- También, entre las “modificaciones que resultarán de las disposiciones siguientes” al artículo 2005 Código Civil, se encuentra la disposición medular del artículo 2006, del inciso 2º que, luego de expresar que: “después de la dote

Exposición de motivos

de la mujer, se pagarán las deudas y las cargas y las obligaciones de la sociedad” (inciso 1º), y dispone: “Cuando el caudal no alcanzare para cumplir **todo** lo dispuesto en este artículo **y el anterior**, se observará lo determinado sobre los créditos privilegiados y graduación de acreedores.” (inciso 2º).

10.- De manera, pues, que el pago de la dote de la mujer no se hacía a expensas y en desmedro de los acreedores de la sociedad, sino que la mentada situación privilegiada de la dote no suponía que en su pago se desplazara a los acreedores de la sociedad y se hiciera en desmedro del resto del pasivo social (deudas, cargas y obligaciones de la sociedad) administrados por el marido. En suma, entonces, “el primer orden de pago” (art. 2005 ab-initio Código Civil) no era preclusivo y autónomo del pago a los acreedores sociales (como lo son los grados de privilegio dentro del concurso civil o la quiebra), ya que, en caso de que no alcanzare el activo para satisfacer, a la vez, el crédito dotal y el crédito de los acreedores sociales debían todos (esposa y acreedores) concurrir al concurso del marido.

11.- Y, aun en el concurso, podía suceder que el crédito dotal que gozaba de un privilegio de tercer grado (precedente Parágrafo N° 8) se viera desplazado por acreedores con mejor privilegio, pero, en cualquier caso, el crédito dotal era un crédito más que debía soportar el marido (el pasivo social administrado por éste) y al que respondía con sus gananciales y propios sin limitación alguna, ya que el beneficio de emolumento (art. 2014 Código Civil), como la renuncia a los gananciales para liberarse (art. 2018 Código Civil) eran institutos reservados exclusivamente a la mujer o sus herederos.-

12.- Finalmente, el artículo 2007 Código Civil disponía: “Seguidamente se liquidará y pagará el capital del marido hasta donde alcance el caudal inventariado, haciendo las rebajas que correspondan por las mismas reglas que respecto de la dote se determinan en la Sección III del Capítulo siguiente”. En otras palabras, el marido, el deudor en suma, cobraba, si quedaba caudal y en la medida en que lo hubiese, sus créditos por recompensas. Si quedaba remanente, el resto componía el fondo de gananciales (art. 2008, inc. 1o. Código Civil).-

13.- En síntesis, pues, el régimen originario de liquidación de la sociedad conyugal era muy simple. La dote y los acreedores sociales cobraban en primer

lugar (ya que las expresiones de los artículos 2005 y 2006 ab-initio se desvanecen ante el contundente inc.2o. del art.2006 Código Civil). Y si restaba caudal, y en cuanto quedare, permitía al marido cobrar sus créditos contra la sociedad. El resto componía el fondo líquido de gananciales (antes como después de la ley No.10.783) “se dividirá entre marido y mujer o sus respectivos “herederos” (artículo 2010 Código Civil).

14.- La Ley No.10.783 de 18 de setiembre de 1946 no modificó, insistimos, el sistema de liquidación de la sociedad conyugal por lo que régimen de liquidación por masa única (y no doble como sostenía GATTI) es el vigente. Pero alteró la estructura interna de las masa que de tres pasaron a ser cinco (y no cuatro como sostiene VAZ FERREIRA), a saber: a) propios del marido, ex maritales; b) propios de la mujer, ex dotales; c) gananciales administrados por el marido; d) gananciales administrados por la mujer, y e) gananciales administrados por ambos.-

15.- Claro está que tanto las actuales cinco masas como las anteriores tres son de existencia eventual, según las circunstancias de cada caso. Cuando se habla de tres y de cinco masas se alude al número máximo que pueden darse, pero que, obviamente, no tienen porqué darse en todas las sociedades conyugales.-

16.- A partir de la Ley No.10.783 y en aplicación del principio de igualdad entre ambos cónyuges, que quiere decir que la mujer dejó de ser incapaz relativa (art.1280, inc.1o. Código Civil) y se los igualó en el estatuto de capacidad que, antes de 1946, tenía el hombre y, en principio, la mujer soltera (ya que la incapacidad relativa era sólo para la mujer casada). Como consecuencia, la mujer (casada) vio desaparecer todos aquellos institutos que, hasta 1946, se inspiraban en una protección o contrapeso a los poderes casi omnímodos del marido, como ser: separación judicial de bienes (arts.1985 y ss. Código Civil), beneficio de inventario o emolumento (art. 2014 Código Civil), renuncia a los gananciales (art. 2018 Código Civil) y el régimen dotal mismo como todo lo que anejo: potestad marital, relativa inalienabilidad de los bienes dotales, etc. y su situación especial en cuanto a la liquidación y cobro de los bienes dotales.-

Exposición de motivos

17.- Cuando decimos que desaparecieron institutos anteriores a 1946, aludimos a que fueron derogados tácitamente tal como funcionaban antes. En algún caso la Ley No.10.783 lo sustituyó expresamente: separación de bienes (arts.6o y 7o.); otros los hizo extensivos a ambos esposos (beneficio de inventario o emolumento); a otros los derogó (renuncia a los gananciales) y, sin asomo de duda, legítima, eliminó el régimen dotal y sus connotaciones aludidas en el número anterior.-

18.- Desde la Ley No.10.783 la esposa, bajo el régimen legal, administra sus propios y los gananciales que adquiere y coadministra los adquiridos por ambos; como el marido, por su parte, administra sus propios, los gananciales que adquiere y coadministra los gananciales adquiridos por ambos (siempre a título oneroso). Cada cónyuge, conjunta o separadamente, también, contraen deudas con cargo al fondo social (acreedores sociales), sin perjuicio, por supuesto, de contraer también deudas personales.-

19.- Sin entrar, siquiera remotamente a analizar el funcionamiento de la sociedad conyugal, punto ajeno al tema en examen, sí cabe aludir a que hoy tanto el marido como la mujer pueden obligar al fondo ganancial o social (de ahí parte GATTI para sostener la proyección de la duplicidad de la administración al tiempo de la liquidación). Pero el fondo social, una vez disuelta la sociedad conyugal, responde a todo el pasivo social, sea cual sea el cónyuge que se obligó, esto es, se liquida por masa única, ya que ninguna norma de la Ley No.10.783 innovó en la materia ni la supervivencia del sistema de liquidación por masa única es inconciliable con la igualdad de capacidad de los cónyuges, como, acertadamente, opina VAZ FERREIRA.-

20.- Corresponde, ahora, entrar en el meollo de la cuestión, es decir, como quedan los artículos 2005 a 2007, al desaparecer el régimen dotal y sus consecuencias. No parece dudoso que, desaparecida la dote, el artículo 2005 Código Civil queda enteramente derogado. La mujer casada, igualada en su capacidad con el hombre, que administra, coadministra y obliga a la sociedad legal al igual que su cónyuge, está, ineludiblemente, en idéntica situación jurídica que éste, frente a los acreedores sociales, por lo que es abiertamente ilegal,

sostener que los créditos de los cónyuges por recompensas (que hasta 1946 el marido sólo cobraba si alcanzaba el caudal inventariado luego de satisfechos los acreedores sociales) (artículo 2007 Código Civil) se encuentren en el primer lugar junto a los acreedores sociales como ocurría con la dote que, como se dijera (Parágrafos Nos.8 a 11) tampoco se hacía en desmedro de los acreedores sociales la satisfacción de la misma, antes de 1946.-

21.- Derogado, entonces, el artículo 2005 quedan los acreedores sociales como los primeros en cobrar. Y ello resulta, como creemos haberlo explicitado y demostrado, con lo dicho antes, del impacto de la Ley No.10.783 con el Código Civil. Es totalmente inconciliable con la igualdad de los cónyuges, ambos como deudores del pasivo social, admitir que los acreedores sociales se encuentren equiparados con los esposos. A ello se puede agregar que hasta 1946, el marido, único administrador de la sociedad legal y que podía obligarla, respondía por el total de las deudas de la sociedad (artículo 2015 Código Civil). Hoy, tal responsabilidad total la tiene cada cónyuge por las deudas que él contrae, punto que no se discute. La situación jurídica de la mujer casada como la del marido es idéntica frente al pasivo social: primero se pagan las deudas y las cargas y las obligaciones de la sociedad (artículo 2006, inciso 1o.). El inciso 2o. del artículo 2006 está derogado, en la dote. Seguidamente se liquidará y pagará el capital del marido y de la mujer hasta donde alcance el caudal inventariado. Y nada más.-

22.- Es por ello que estimamos que el proyecto de ajuste de los artículos 2005 (derogado), 2006 y 2007 es el que se indica al comienzo de esta exposición y el que se practica, sosegadamente, en la práctica profesional.-

DR. ENRIQUE AREZO PIRIZ

****ADHIRIENDO A LA FUNDAMENTACION PRECEDENTE,**

DR. RAFAEL ROBATTO CALCAGNO DR.EDUARDO PIAGGIO SOTO

DR. MANUEL MERCANT

POSICION DEL PROF.HUGO GATTI RESPECTO A
LOS ARTS.2005, 2006 Y 2007 DEL CODIGO CIVIL

“Paridad de derechos de los cónyuges y acreedores”.-

Según la fórmula del Dr.Vaz Ferreira, conforme a los arts.2005 y 2006, se deben pagar las recompensas y capitales de los cónyuges y las deudas y cargas de la sociedad en un plano de absoluta paridad y cuando el caudal no alcance, se observará lo dispuesto sobre créditos privilegiados y graduación de acreedores.-

Las ideas al respecto las aclara en su Tratado.-

Dice: “El pago de las recompensas debidas a la comunidad se hace normalmente por colación, o sea por imputación a la parte que el deudor debe recibir en la partición: se trata a la parte que el deudor debe recibir en la partición: se trata de una operación de la partición y se rige por los principios de ésta... (No.387 p.746).-

“En cambio, la recompensa debida por la comunidad se pagan en la liquidación, que es una operación previa a la partición y ajena a la misma (p.747).”

Más adelante, refiriéndose al orden de pago, dice “que según el C.C. debían pagarse: primero las recompensas debidas a la mujer, después las deudas de la sociedad y después las recompensas debidas al marido...Actualmente, administrando cada cónyuge sus propios, deben considerarse derogados los privilegios que el Código concedía a la mujer..Pero en cambio puede dudarse en qué condiciones concurren a la liquidación ambos cónyuges con los acreedores, si ambos tienen el privilegio de que antes gozaba la mujer o si los acreedores tienen contra ambos cónyuges el privilegio que antes podían invocar contra el marido o si cónyuges y acreedores concurren en igualdad de condiciones sin existir privilegios de los unos ni de los otros”.-

“Entendemos, dice, que la solución correcta es la que **admite la equiparación de los créditos por recompensa con los demás créditos que son de cargo de la sociedad, porque el orden de prioridad que establecen los Arts.2005 a 2007 está evidentemente derogado**, y porque ninguna otra disposición legal da preferencia a los créditos por recompensa respecto a los otros ni viceversa tampoco y el privilegio es un derecho excepcional y exorbitante que sólo existe a condición de encontrarse escrito en un texto positivo formal. Y salvo algún caso de una deuda privilegiada

(expensas, funerales del deudor difunto, gastos de la enfermedad de que ha fallecido el deudor), entendemos, agrega, que los **bienes gananciales deben distribuirse a prorrata entre los cónyuges que ejercen sus recompensas y los demás acreedores de la sociedad**” (No.392, págs.755-756).

Y aclara con un ejemplo: supóngase que al disolverse la sociedad no existen ni bienes propios ni deudas personales que existen gananciales por valor de \$100.000 y que existen deudas contraídas por el marido contra la sociedad, también por 100.000 pesos y que cada uno de los cónyuges tiene (con motivo, por ejemplo, de haber enajenado bienes propios durante la sociedad) derecho a recompensas por 50.000 pesos. Si se admitiera que los acreedores tienen privilegio contra los cónyuges que reclaman la restitución de sus propios, los acreedores por deudas del marido se cobrarían la totalidad de sus créditos y los propios enajenados quedarían definitivamente perdidos. Si se admitiera que los créditos por recompensa tienen privilegio contra los demás créditos de cargo de la sociedad, cada uno de los cónyuges empezaría a recibir las recompensas que se le adeuda (\$50.000) y en la masa ganancial no quedaría nada para los acreedores, pero mientras la mujer conservaría en este caso íntegros (como ocurría en el régimen del C.C.) los \$50.000 que ha percibido (porque como veremos al tratar el beneficio de emolumento con lo que uno de los cónyuges ha percibido a título de recompensa no responde a las deudas comunes contraídas por el otro cónyuge), la parte del marido se consumiría con pagar un porcentaje de sus créditos a los acreedores por deudas contraídas por él. Y finalmente, si se admite, como creemos correcto, concluye Vaz Ferreira, que los acreedores y los cónyuges están equiparados por la ley, se llega a la conclusión de que todos ellos deben cobrar cada uno el 50% de sus créditos y que la mujer conserva definitivamente los \$25.000 que ha percibido, mientras que sobre los \$25.000 que ha percibido el marido todavía podrían cobrarse los acreedores comunes, quienes llegarían a hacer efectivo en el total el 75% de sus créditos (No. 392 págs. 756-757).-

Crítica.- Reputamos inadmisibles esta solución de Vaz Ferreira. Evidentemente ha desaparecido el privilegio de la mujer de cobrar en primer término la dote, porque al desaparecer el estatuto dotal, desaparecieron, también, todas las garantías y privilegios inherentes al mismo, que se explicaban precisamente por el régimen de administración omnimoda que centralizaba en manos del marido todos los bienes del matrimonio, es decir el capital marital, los gananciales y la dote.-

Pero creemos que no puede admitirse la paridad que proclama Vaz Ferreira **entre los créditos por recompensa de los cónyuges contra el haber de la sociedad y los acreedores sociales.**

Esta tesis es contraria a la opinión del propio Vaz Ferreira de que están vigentes las disposiciones sobre sociedad conyugal, es contraria al régimen de administración y responsabilidad instaurado por la ley 10.783 y es arbitraria e injusta para los acreedores, violándose así los principios fundamentales que gobiernan las relaciones entre acreedores y deudores.-

1) **Es contraria a la opinión de Vaz Ferreira, de que subsisten las disposiciones sobre liquidación de la sociedad conyugal consignadas en el C.C.** Es lógico, desde luego, que se proclame la desaparición del privilegio o preferencia que se le atribuía a la dote, pero no tiene ningún asidero afirmar que los capitales de los cónyuges o mejor dicho el cobro de las recompensas que la sociedad le deba a los cónyuges se coloque en un pie de absoluta paridad con el pago de las deudas sociales. El propio Vaz Ferreira admite que el Art. 2015 está vigente, es decir, que tanto el marido como la mujer deben responder por las deudas que contrajeron y la fórmula que él propone en los Arts. 2005-2006 son contrarias a ese principio general. Es también contraria al Art. 4 de la ley que impone a los cónyuges la obligación de pagar con sus bienes propios y los gananciales cuya administración le corresponde, a sus acreedores.-

2) No se trata acá de privilegios de los acreedores frente a los cónyuges, sino que se trata pura y simplemente de las relaciones entre acreedor y deudor. La responsabilidad por las deudas consignada en el Art. 4 de la ley y robustecida en el Art. 2016 del C.C., no puede atenuarse o modificarse **por un acto voluntario del propio deudor.** Si un artículo debe estar vigente, evidente e indiscutiblemente, es el que manda pagar primero las deudas, cargas y obligaciones de la sociedad (Art. 2006) y luego de abonadas esas deudas, cargas y obligaciones de la sociedad, recién podrán los cónyuges cobrarse sus respectivas recompensas.-

No se ha percibido que actualmente se da, con relación a la mujer y al marido respecto a la responsabilidad por las deudas, la misma situación que antes se daba exclusivamente con relación al marido. El marido

respondía con sus bienes propios y los gananciales de todas las deudas contraídas por él, tanto durante la vigencia de la sociedad como después de disuelta (Arts. 1975 y 2015) y es por eso que el marido retiraba su capital propio, es decir, cobraba el capital marital en especie o por vía de recompensa (Art. 2007) **después de pagada la dote y después de pagados los acreedores sociales.** Y para que no quedara ninguna duda de su responsabilidad, todavía el Art. 2015 preveía el caso de que ya hubiera hecho la partición de los gananciales y hubiera acreedores impagos, **estableciendo categóricamente la obligación ilimitada del marido.** No era posible que el marido que era totalmente responsable e ilimitadamente responsable con sus bienes propios y gananciales frente a los acreedores sociales, pudiera ver limitada su responsabilidad por la circunstancia de que se había disuelto la sociedad conyugal.-

Actualmente se da frente a la mujer y al marido la misma situación jurídica: cada uno responde con sus bienes propios y los gananciales cuya administración le corresponda, por las deudas personales y sociales que él ha contraído. Y tanto es así, que el propio Vaz Ferreira, en el Art. 2019 de su proyecto, consigna esta responsabilidad equiparando a cada cónyuge, con evidente acierto, con lo que antiguamente establecía el Art. 2015 con relación al marido.-

3) Por último, la tesis es absolutamente arbitraria, contraria a los principios generales del derecho y totalmente injusta para los acreedores. No creemos que se pueda invocar un principio no ya legal, sino de equidad, en virtud del cual un hecho voluntario del deudor que disminuye la prenda de sus acreedores, haga nacer en favor del deudor un derecho de crédito, por el importe de la enajenación realizada, en virtud del cual puede concurrir con sus propios acreedores a pagarse sus propios bienes.-

Supongamos que el marido, que tiene un capital propio de \$200.000 y ha adquirido durante el matrimonio a título oneroso, un inmueble de \$200.000 y tiene además deudas por \$400.000, enajena sus bienes propios. En tal supuesto no solamente ha sustraído de la prenda de sus acreedores \$200.000 eliminando la posibilidad de que éstos puedan cobrarse íntegramente sus créditos de \$400.000, sino que ese hecho, la enajenación del bien, que disminuye la garantía de los acreedores, le da aún la posibilidad de concurrir con éstos a repartirse proporcionalmente los \$200.000 que quedan de bienes gananciales!.

**INTERPRETACION “C”

ARTICULO 2006.-

Después de liquidarse y pagarse el capital propio de cada cónyuge se pagarán las deudas y las cargas y las obligaciones de la sociedad.

Cuando el caudal no alcanzare para cumplir todo lo dispuesto en este artículo se observará lo determinado sobre los *créditos privilegiados* y *graduación de acreedores*.

ARTICULO 2007.-

Derogado.

1.- Como lo expresa VAZ FERREIRA (Tratado de la Sociedad Conyugal No. 392, p. 755-756) el orden de pago es: “primero las “recompensas debidas a la mujer, después las deudas de la “sociedad y después las recompensas debidas al marido...”

Es decir que la mujer tenía un beneficio de pago en primer lugar y además, respecto del crédito por dote, contaba con un privilegio de tercer grado. (Artículo 2371 num. 3 Código Civil).

Por ello no debe confundirse el beneficio de pago que establecían los artículos 2005 y siguientes con el crédito privilegiado que tenía, en tercer grado la dote en caso de concurso. O, en otras palabras, en las normas sobre liquidación de la sociedad conyugal no se consagra para el pago de las recompensas a la mujer un privilegio, sino un beneficio de pago, consistente en que debe ser satisfecho antes que otros créditos (los sociales y las recompensas debidas al marido).-

¿Este sistema de liquidación con tres órdenes de pago, primero la mujer, después los acreedores sociales y finalmente el marido, está modificado por la Ley 10.783?

Expresamente no ha sido derogado. Mas aún, el inciso 2o. del artículo 6o. de la Ley 10.783, consagra expresamente su vigencia al disponer: “...Se aplicarán, en lo pertinente, las “disposiciones de la Sección VI, Capítulo II, Título VII, Parte II, Libro IV del Código Civil y lo preceptuado en el artículo 157 del mismo Código...”

Esto último significa que la Ley 10.783 específicamente mantuvo el sistema de liquidación de la sociedad conyugal consagrado en el Código Civil.-

La oración “...en lo pertinente...” en nada modifica esa conclusión, por cuanto significa, en la medida que no sea incompatible o inconciliable con el sistema de igualdad jurídica que consagra esa nueva normativa.-

2.- El artículo 10 del Código Civil, en cuanto a la derogación tácita, entiende que se configura cuando la nueva norma es inconciliable con la anterior, entendiendo por tal, cuando ambas normas versando sobre la misma materia, la nueva “pugna” con la antigua.-

¿Puede afirmarse que haya incompatibilidad o que sea inconciliable el sistema de liquidación de la sociedad conyugal establecido en el Código Civil por el que se establecían tres órdenes sucesivos de pago y un beneficio a la mujer de cobrar primero?

Entendemos que no.-

Primero, porque la igualdad en la capacidad de obrar que consagró la Ley 10.783, no conlleva inexorablemente, como consecuencia fatal y necesaria, que desaparezcan beneficios que la ley estableció en favor de la mujer.-

Es decir, que la situación de ventaja que establecía el Código Civil, cual es cobrar antes que los acreedores de la sociedad conyugal, no es incompatible jurídicamente con la atribución otorgada por la Ley 10.783, de otra ventaja, cual es la igualdad de la capacidad de ejercicio.-

Para que opere la derogación tácita es menester que haya inconciabilidad jurídica entre ambas ventajas (cobrar primero y la igual capacidad de obrar) y, evidentemente, ello no sucede. No son inconciliables entre sí, el beneficio de la mujer de cobrar antes que los acreedores de la sociedad conyugal, con el nuevo beneficio instituido por la Ley 10.783 de igualar su capacidad de ejercicio con el hombre.-

Y, como se expresó, la ventaja de cobrar antes que los acreedores sociales que el Código Civil consagraba en beneficio de la mujer y la ventaja de igualar su capacidad de ejercicio con el del hombre, no coliden entre sí.-

3.- El beneficio que el Código Civil estableció para la mujer de cobrar antes que otros acreedores, es un mecanismo de protección a la misma que la realidad social, económica y jurídica exige mantener.-

Si bien la Ley 10.783 consagró LEGALMENTE la igualdad jurídica de la mujer y el hombre, persiste, en los hechos, una desigualdad social y económica en desmedro de la mujer que impone la necesidad de mantener el beneficio referido. Si bien los poderes jurídicos del marido sobre los bienes de la mujer

Exposición de motivos

han cesado por virtud de la Ley 10.783, de hecho, la mujer está sometida a la potestad marital, lo que implica actuación discrecional y muchas veces abusiva sobre los bienes de la esposa. Así, por ejemplo es un fenómeno cotidiano que el marido requiera la venta a la mujer de sus bienes propios para el pago de deudas contraídas por él. Mantener el beneficio para la mujer de cobrar antes que los acreedores de la sociedad conyugal que establece el Código Civil significa la posibilidad de recomponer la mujer, para sí y sus hijos, en definitiva para la familia, el patrimonio del que dispuso, fácticamente, el hombre.-

Jurídicamente en la actualidad, luego de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, se establece un nuevo administrador que es autónomo en su administración, puesto que de acuerdo al artículo 4o. cada administrador responde con sus bienes propios y gananciales que administra. Ello significa que el riesgo por la mala administración se mantiene, lo que hace coherente mantener al otro cónyuge la misma ventaja que antes, que le permita cobrar prioritariamente a los acreedores sociales, atemperando de esa manera la equivocada o errónea administración del otro.-

4o.- ¿La desaparición de la dote, puede alterar la conclusión antedicha?

Entendemos que no.-

No cabe duda que la dote está derogada por los artículos 1o. y 2o. de la Ley 10.783.-

Pero de ello ¿cabe concluir, que se altera el orden de pago por virtud del cual, cobra primero la esposa (ahora ambos cónyuges) y luego los acreedores de la sociedad conyugal?

Consideramos que no.-

Desaparecida la dote, una interpretación exclusivamente semántica, sin considerar el contexto, la situación y el “telos” de la disposición consagrada en el artículo 2006 del Código Civil conduciría a la pérdida para la mujer del beneficio de cobrar primero su capital propio, y ello sería así, por cuanto el artículo 2006 del Código Civil expresa que: “...Después de la dote de la mujer se pagarán las deudas y las cargas y las obligaciones de la “sociedad...”, lo que significaría, que si no existe más la dote, la mujer no puede cobrar primero, sino que cobraría en un pie de igualdad con los demás acreedores de la sociedad conyugal, como lo postulan en esta Comisión los Dres. Vaz Ferreira y Alonso De Marco o después de pagados los acreedores sociales, como lo afirman en la misma los Dres. Arezo, Robatto, Mercant y Piaggio.-

No obstante entendemos que ello no es así, por cuanto la interpretación de

una ley no cabe hacerla, exclusivamente, siguiendo un método que tome sólo en cuenta el significado de las palabras individuales o de las frases, sino que y además, debe efectuar una interpretación hermenéutica y teleológica de la norma, estudiando el contexto, su situación y su “telos”, esto es, el propósito que persigue. No la ley o norma concreta, sino la directiva jurídica que la misma contiene.-

El artículo 2006 del Código Civil, a nuestro criterio, consagra una directiva jurídica que persigue un claro propósito social, cual es el de proteger el patrimonio propio de la mujer, que aportado como dote, era administrado, antes de la Ley 10.783, por su marido.-

Si bien ha desaparecido la contribución que como dote efectuaba antes de la citada ley la mujer y su administración por el marido, persisten todavía las contribuciones económicas, ya no como dote, que efectúa la mujer y de las que, de hecho, dispone discrecionalmente el marido.-

Ello sucede, cuando la mujer enajena un bien propio con la finalidad de pagar deudas sociales contraídas por su marido.-

En consecuencia, si permanece la posibilidad de la contribución económica de un cónyuge a la sociedad conyugal, se mantiene la finalidad social de tutelar el patrimonio del cónyuge contribuyente, de la misma manera que cuando la contribución se efectuaba como dote.-

Pero, desde que esa contribución económica la puede efectuar cualquiera de los cónyuges y no solamente la mujer, corresponde equiparar ese beneficio de cobro prioritario, a ambos, aplicando al hombre y la mujer en forma igualitaria el mismo régimen tuitivo.-

El propósito social contenido en la prescripción normativa contenida en el artículo 2006 de tutelar la integridad del patrimonio personal de la mujer, que aportado durante el régimen del Código Civil como dote, podía perderlo por la mala administración del marido, es todavía en la actualidad, una imperiosa necesidad que incluye al marido por darse hoy el protagonismo a la mujer como administradora de parte del patrimonio social.-

La realidad social y económica de nuestro país, en los últimos tiempos, ha mostrado la quiebra o concurso de patrimonios familiares administrados exclusivamente por el hombre pero a cuya formación contribuyó, muchas veces de manera importante y significativa, la mujer, quien vendiendo bienes propios volcó su precio al patrimonio de la sociedad conyugal. La pérdida de éste, por la mala administración del marido quien, no jurídicamente, pero sí fácticamente, era quien la ejercitaba, no puede arrastrar al patrimonio de quien se limitó a

aquella contribución pecuniaria, no participando en la administración que condujo a la ruina societaria.-

5.- De admitirse las otras interpretaciones que se postulan en la Comisión, significaría que la mujer, en un caso, cobraría su crédito en un plano de igualdad con los demás acreedores de la sociedad conyugal y en la otra, recuperaría su aporte económico, luego de satisfechos los acreedores de la sociedad conyugal, es decir, con el remanente, si queda, después de pagadas las deudas y obligaciones contraídas por su marido, de la que fuera ajena totalmente por no participar en la administración.-

Entendemos, por el contrario, que la mujer -e igual beneficio corresponde extender al marido por virtud de la igualdad jurídica que consagra la Ley 10.783- que ha contribuído económicamente con bienes propios a la formación del patrimonio de la sociedad conyugal, deben ser pagados antes que los acreedores de la sociedad, manteniendo su preferencia de cobro por su aporte, aunque ésta no sea, después de la Ley 10.783, bajo el título de dote.-

De esta manera la mujer se encontrará actualmente, después de la vigencia de la Ley 10.783, tan protegida como antes de la misma.-

Las otras dos interpretaciones expuestas en la Comisión, implican que la mujer, después de la vigencia de la ley denominada de “Derechos Civiles de la Mujer”, dejaría de tener un beneficio (cobrar primero) que antes tenía. Es decir, se la igualó a la mujer en la capacidad de obrar con el hombre, pero se la habría privado de beneficios o ventajas legalmente asignadas no por la incapacidad relativa que tenía, si no por su situación social y económica en la sociedad.-

Afirmamos que a partir de la Ley 10.783 la situación jurídica de la mujer no puede estar, por virtud de la misma, peor que durante la vigencia del Código Civil, lo que así sería, si se la privara del beneficio de cobrar primero sus aportes económicos a la sociedad conyugal.-

6.- Puede sostenerse válidamente entre nosotros, el criterio de que los bienes propios deben restituirse en primer lugar, a la disolución de la sociedad conyugal, porque está de acuerdo con los antecedentes tenidos en cuenta por nuestro codificador. En efecto Narvaja al redactar el artículo 2005 tuvo en cuenta a Florencio García Goyena, quien al comentar el artículo 1343 (norma similar española, al nuestro) sigue a Febrero e indica que en esta sociedad a semejanza de la convencional, para saber si hay utilidades o pérdidas sean de

separar previamente del cúmulo, de todo el caudal, los bienes, capital o fondo que cada socio puso o su importe y las deudas contraídas durante ella.-

7.- La solución que aquí se propugna mantiene en un mismo plano los acreedores sociales y a los propios de cada uno de los cónyuges, ya que al pagarse recompensas, los acreedores propios de cada cónyuge obtienen de esa forma la garantía de hacer efectivos sobre ellos, sus créditos. En aquella interpretación que propone el pago prioritario de los acreedores sociales, se privilegia a éstos en desmedro de los cónyuges y de los acreedores personales de éstos.-

En definitiva, a criterio de los firmantes, la lectura que debe efectuarse de las normas de liquidación debe ser la que se indicó al comienzo, de modo que los cónyuges se harán las restituciones **antes** de pagar las deudas sociales y siempre que el caudal alcanzare. De no ser así, los cónyuges y los acreedores sociales irán a concurso entre ellos, por lo que todos cobrarán a prorrata de sus respectivos créditos, porque el privilegio que la dote tenía en el régimen del Código Civil en el concurso de acreedores ya no existe.-

DR. EUGENIO CAFARO

DR. SANTIAGO CARNELLI

ESC. WALTER PARDIAS

DR. DANIEL BERVEJILLO

**SEGUNDA
PARTE**

CÓDIGO CIVIL

LEY N° 16.603

APRUÉBANSE LAS MODIFICACIONES DISPUESTAS AL TEXTO DEL CÓDIGO CIVIL.

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1°.- Apruébase, con las modificaciones dispuestas en los artículos 2° y 3° de la presente ley, el texto del Código Civil elaborado por la Comisión Nacional designada por la ley N° 15.821, de 14 de agosto de 1986, y que consta en anexo elevado por el Poder Ejecutivo así como las reformas por él introducidas, declarándose el mismo "Texto Oficial".

Artículo 2°.- Sustitúyense los artículos 209, 210, 230, 285, 395, 416, 441, 442, 442.1, 842, 871, 889, 900, 1108, 1956, 1968, 1969, 2003, 2006, 2008, 2018 y 2391.1, proyectados de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la presente ley, por los siguientes:

"ARTICULO 209.- Anulado el matrimonio, la situación de los hijos se regulará por lo dispuesto en el artículo 174".

"ARTICULO 210.- No obstante la mala fe por parte de ambos cónyuges, los hijos serán considerados siempre hijos legítimos".

"ARTICULO 230.- La legitimación puede tener lugar aun en favor de hijos fallecidos, que han dejado descendientes legítimos o naturales y en tal caso les aprovecha".

"ARTICULO 285.- Los padres podrán perder la patria potestad a instancia de parte, previa sentencia del Juez competente, en los casos siguientes:

1°) Si fueren condenados a penitenciaría como autores o cómplices de un delito común.

- 2°) Si por dos veces fueren condenados por sustitución, u ocultación, atribución de falsa filiación o paternidad, exposición o abandono de niños; o en el caso de mendicidad establecido por el artículo 348.1 inciso primero, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior.
- 3°) Si fueren condenados por cualquiera de los delitos del artículo 274 del Código Penal, con excepción del caso previsto en el numeral 1° del artículo 284.
- 4°) Si fueren condenados por dos veces a pena de prisión como autores o cómplices de delitos a que hubieren concurrido con sus hijos.
- 5°) Los que fuera de los casos expresados en este artículo y el anterior, excitaren o favorecieren en cualquier forma la corrupción de menores.
- 6°) Si por sus costumbres depravadas o escandalosas, ebriedad habitual, malos tratamientos o abandono de sus deberes, pudieren comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de sus hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la ley penal.
- 7°) Si se comprobare en forma irrefragable que durante un año han hecho abandono culpable de los deberes inherentes a su condición de tales, no prestando a sus hijos los cuidados y atenciones que les deben.

El Ministerio Público y el Juez competente apreciarán la prueba, atendida la situación de los padres y muy especialmente las conveniencias del menor.

Sólo por causas excepcionales acreditadas debidamente el Juez podrá conceder a los padres la readquisición de los derechos de que hubieren sido privados por la causal expresada en el presente numeral 7°).

Es aplicable a los casos de este artículo lo dispuesto en cuanto a los derechos y obligaciones de los padres y demás, en la última parte del artículo 284".

"ARTICULO 395.- No podrá el tutor, sin previo decreto judicial, enajenar los bienes raíces del menor ni constituir sobre ellos ningún derecho real ni enajenar o empeñar los bienes muebles preciosos o los que tengan un valor de

afección o cuyo valor exceda las 500 unidades reajustables ni podrá el Juez autorizar esos actos, sino por causa de absoluta necesidad o evidente utilidad y oyendo antes al Ministerio Público.

La autorización para enajenar o gravar los bienes, a que refiere este artículo, deberá recaer, en cada caso, sobre fincas u objetos especialmente designados".

"ARTICULO 416.- Durante su cargo, el tutor está obligado a presentar al Juez, dentro de los treinta días últimos de cada trienio, un estado de la situación en que se encuentra el patrimonio del menor. El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, podrá disponer que dicho estado sea presentado en un período menor.

El Ministerio Público, a quien ese estado debe comunicarse, podrá pedir, si lo creyese conveniente, que el tutor exhiba los libros de la administración y hacer las observaciones que le sugiere su celo por los intereses del menor; teniendo presente lo dispuesto en la Sección II, Capítulo III de este Título.

La aprobación que el Juez diese al esta presentado por el tutor será en cuanto haya lugar y sin perjuicio de repararse cualquier agravio del menor, al tiempo de la formal rendición de cuentas".

"ARTICULO 441.- El marido es el curador legítimo de su mujer declarada incapaz y ésta lo es de su marido.

El cónyuge curador tendrá la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. (Artículos 1979 y 1984)".

"ARTICULO 442.- Los hijos mayores de edad, son curadores de su padre o madre, viudos o divorciados, declarados incapaces. Si hubiere dos o más hijos, el Juez elegirá el que debe ejercer la curaduría.

Los padres son de derecho curadores de sus hijos legítimos o naturales reconocidos, solteros, viudos o divorciados, que no tengan hijos mayores de edad que puedan desempeñar la curaduría. El Juez determinará cual de ellos ejercerá el cargo".

Código Civil

"ARTICULO 442.1.- El Tribunal por motivos fundados podrá apartarse del orden de la curatela legítima, o aun prescindir de ella, así como regular los modos de su ejercicio".

"ARTICULO 842.- Son indignos y como tales no pueden adquirir por testamento: (Artículo 1012).

1°) El condenado en juicio por homicidio intencional o tentativa del mismo contra la persona de cuya herencia se trata, contra el cónyuge y contra los descendientes del mismo.

2°) El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del difunto no la denuncia dentro de sesenta días a la justicia cuando ésta no ha procedido ya de oficio sobre ella.

Si los homicidas fueren ascendientes o descendientes o hermanos del heredero o cónyuge cesará en éste la obligación de denunciar.

3°) El que voluntariamente acusó o denunció al difunto de un delito capital.

4°) El pariente que, sabiendo ser heredero presuntivo del difunto y hallándose éste demente y abandonado, no cuida de recogerle o hacerle recoger en un establecimiento público.

5°) El que para heredar estorbó, por fuerza o fraude, que el difunto hiciera testamento o revocara el ya hecho o sustrajo éste o forzó al difunto para testar.

Las causas de indignidad, expresadas en este artículo, comprenden también a los legatarios".

"ARTICULO 871.- Los alimentos que el difunto debía por ley a ciertas personas y que en razón de la indigencia de éstas eran exigibles antes de abrirse la sucesión gravan, por una cuantía que se determinará en unidades reajustables, la masa hereditaria; excepto el caso en que el testador haya impuesto ese gravamen a uno o más partícipes en la sucesión".

"ARTICULO 889.- Para fijar la porción legitimaria se atenderá al valor de los bienes que hayan quedado a la muerte del testador, previas las deducciones indicadas en el Título VI de este Libro y sin comprender las deudas y cargas impuestas en el testamento. (Artículos 893 y 1043).

Al valor líquido de los bienes hereditarios se agregará imaginariamente el que tenían todas las donaciones del mismo testador de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1108 y siguientes. (Artículos 1100, 1613 y 1639)".

"ARTICULO 900.- Son además justas causas de desheredación de los hijos y descendientes:

- 1º) Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra al padre o ascendiente que le deshereda.
- 2º) Haberle negado los alimentos, sin motivo legítimo.
- 3º) Haber sido declarado por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, culpable de un delito y condenado como tal a la pena de cinco años de penitenciaría o a otra pena de mayor gravedad".

"ARTICULO 1108.- La colación se hace no de las mismas cosas donadas, sino del justiprecio en unidades reajustables que tenían al tiempo de la donación.

El aumento o deterioro posterior y aun su pérdida total, causal o culpable, serán a cargo o riesgo del donatorio".

"ARTICULO 1956.- La propiedad de las cosas que uno de los cónyuges poseía con otra persona pro indiviso y de que durante el matrimonio se hiciera dueño por cualquier título oneroso, pertenecerá pro indiviso a dicho cónyuge y a la sociedad en proporción a las respectivas cuotas".

"ARTICULO 1968.- La sociedad debe el precio, en unidades reajustables, de cualquiera cosa del marido o de la mujer que se haya vendido, siempre que no se haya invertido en subrogarla por otra propiedad (Artículo 1958) o en un negocio personal del cónyuge cuya era la cosa vendida".

"ARTICULO 1969.- Se debe compensar a la sociedad siempre que se tome de los gananciales alguna suma, sea para pagar deudas u obligaciones

personales de uno de los cónyuges, como el precio de cosas que le pertenezcan o la redención de servidumbres, sea para la cobranza de sus bienes propios; y, en general, siempre que alguno de los cónyuges saca provecho personal de los bienes de la sociedad.

Cada cónyuge deberá asimismo compensar a la sociedad los daños y perjuicios que le hubiere causado con dolo o culpa grave.

El provecho personal y los daños y perjuicios a que refiere este artículo se calcularán en unidades reajustables al tiempo de obtener el provecho o causar el daño".

"ARTICULO 2003.- El inventario comprenderá numéricamente y se traerán a colación, determinadas en unidades reajustables, las cantidades que, habiendo sido satisfechos por la sociedad, sean rebajables del capital de la mujer y del marido.

También se traerá a colación, en unidades reajustables, el importe de las donaciones y enajenaciones que deban considerarse ilegales o fraudulentas con arreglo al artículo 1974. Exceptúanse los casos en que proceda la colación real".

"ARTICULO 2006.- Se liquidarán y pagarán los capitales de los cónyuges y las deudas, cargas y obligaciones de la sociedad.

Cuando el caudal no alcanzare para cumplir todo lo dispuesto en este artículo, se observará lo determinado sobre los créditos privilegiados y graduación de acreedores".

"ARTICULO 2008.- Hechas las reducciones determinadas en los artículos anteriores, el resto del caudal compondrá el fondo de gananciales.

Las pérdidas o deterioros ocurridos en las especies o cuerpos ciertos, pertenecientes a cualquiera de los cónyuges, deberá sufrirlas el dueño, salvo que procedan de dolo o culpa grave del otro cónyuge, en cuyo caso deberá éste resarcirlas.

Los bienes propios existentes, muebles o inmuebles, los conservará cada cónyuge en el estado en que se hallaren.

Si durante el matrimonio hubiesen sido enajenados, se restituirá el precio en unidades reajustables que se les dio al tiempo de ser aportados; y si entonces no se estimaron, se entregará el precio en unidades reajustables de enajenación. (Artículo 1947).

A falta de convenio de los interesados los créditos de los capitales propios deberán pagarse siempre en dinero. Las restituciones que deban hacerse en dinero, si éste no existe, se harán en el término de seis meses, vencidos los cuales empezarán a deberse los intereses de ley".

"ARTICULO 2018.- (Disposición especial). Declárase derogada desde la vigencia de la ley N° 10.783, de 18 de setiembre de 1946, la Sección VII del presente Capítulo II del Título VII, Parte Segunda del Libro IV.

Las renunciaciones de gananciales efectuadas con posterioridad a dicha ley y hasta la vigencia de la presente disposición, son válidas siempre que no hubiera recaído sentencia ejecutoriada en contrario".

"ARTICULO 2391.1.- Las modificaciones incorporadas al texto del Código se registrarán, en cuando a su vigencia, por las leyes respectivas.

Los artículos 1108 inciso primero, 871, 889 inciso segundo, 1968, 1969 inciso tercero, 2003 y 2008 inciso cuarto, en la redacción dada por la presente ley, se aplicarán a las sucesiones que se abran y a las sociedades conyugales que se disuelvan con posterioridad a la vigencia de ésta.

Se exceptúan los casos en los que resulte de aplicación el artículo 1112, siempre que la enajenación del donatario haya tenido lugar con anterioridad a esa fecha".

Artículo 3°.- Deróganse los artículos 237 y 2007 del Código Civil.

Artículo 4°.- Cométese al Ministerio de Educación y Cultura la publicación de la edición oficial del Código Civil, con el informe de la Comisión Nacional que lo elabora, así como las publicaciones ajenas al texto que contenía la edición oficial hoy corregida, la que se efectuará con cargo al Tesoro Nacional.

Código Civil

Artículo 5°.- Este Código entrará en vigencia a los doce meses de su promulgación.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo, previo informe de la Comisión Nacional designada por la ley N° 15.821, de 14 de agosto de 1986, podrá efectuar la corrección de los errores u omisiones numéricos o formales que se comprueben en la presente ley, dando cuenta a la Asamblea General.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 11 de octubre de 1994. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ, Presidente. - Juan Harán Urioste, Secretario.

Ministerio de Educación y Cultura.

Montevideo, 19 de octubre de 1994.

Cúmplase, acúsesse recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos. **LACALLE HERRERA.** - **ANTONIO MERCADER.**

RESOLUCION 1.222/995

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 21 de noviembre de 1995.

Visto: la ley 16.603, de 19 de octubre de 1994 que aprueba las modificaciones dispuestas al texto del Código Civil;

Resultando: que su artículo 6° dispone que el Poder Ejecutivo, previo informe de la Comisión Nacional designada por la ley 15.821, podrá efectuar la corrección de los errores u omisiones numéricos o formales que se comprueben en la misma, dando cuenta a la Asamblea General.

Atento: a lo expuesto y a lo dispuesto por el artículo 6° de la ley 16.603, de 19 de octubre de 1994,

El Presidente de la República

RESUELVE:

1°.- Apruébase el texto oficial del Código Civil (ley 16.603), con las correcciones efectuadas por la Comisión Nacional designada por la ley 15.821.

2°.- Cométese al Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, la publicación de la edición oficial del Código Civil, con el informe de la Comisión Nacional que lo elaboró, así como las publicaciones ajenas al texto que contenía la edición oficial.

3°.- Dése cuenta a la Asamblea General. SANGUINETTI - SAMUEL LICHTENSZTEJN.

CODIGO CIVIL

TITULO PRELIMINAR

DE LAS LEYES

1.- Las leyes sólo son obligatorias en virtud de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo determinará la forma de la promulgación; y desde que ésta pueda saberse, las leyes serán ejecutadas en todo el territorio de la República.

La promulgación se reputará sabida diez días después de verificada en la Capital.

2.- La ignorancia de las leyes no sirve de excusa.

3.- Las leyes obligan indistintamente a todos los que habitan en el territorio de la República.

4.- DEROGADO por Ley No. 10.084 del 3.12.41 (*)

() Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986. La referencia se entiende realizada a la Ley N° 10.084 de fecha 3 de diciembre de 1941, artículo 1.*

5.- DEROGADO por Ley No. 10.084 del 3.12.41 (*)

() Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986. La referencia se entiende realizada a la Ley N° 10.084 de fecha 3 de diciembre de 1941, artículo 1.*

6.- La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados.

En los casos en que las leyes orientales exigieren instrumento público para pruebas que han de rendirse y producir efecto en la República, no valdrán las

escrituras privadas, cualquiera sea la fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas.

7.- Las leyes no tienen efecto retroactivo (Artículos 2390 a 2392).

8.- La renuncia general de las leyes no surtirá efecto.

Tampoco surtirá efecto la renuncia especial de leyes prohibitivas: lo hecho contra éstas será nulo, si en las mismas no se dispone lo contrario. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 17.243 de fecha 29 de junio de 2000, artículo 27 y Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera y Normas Concordantes y Complementarias (TOCAF), aprobado por Decreto N° 194/997 de fecha 10 de junio de 1997, Título I, Capítulo III, Sección II, artículo 33.*

9.- Las leyes no pueden ser derogadas, sino por otras leyes; y no valdrá alegar, contra su observancia, el desuso ni la costumbre o práctica en contrario.

La costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remite a ella. (Artículo 594, inciso 2°).

10.- La derogación de las leyes puede ser expresa o tácita.

Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.

Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.

La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley.

La derogación de una ley puede ser total o parcial.

11.- No pueden derogarse por convenios particulares, las leyes en cuya observancia están interesados el orden público y las buenas costumbres. (*)

(*) *Ver: artículos 1286 y 1594 de esta norma.*

12.- Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley, de un modo generalmente obligatorio.

Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren.

13.- La interpretación auténtica o hecha por el legislador, tendrá efecto desde la fecha de la ley interpretada; pero no podrá aplicarse a los casos ya definitivamente concluidos.

14.- La Suprema Corte de Justicia, siempre que lo crea conveniente, dará cuenta al Poder Legislativo de las dudas y dificultades que hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que note en ellas, a fin de estimular, sea la interpretación de las leyes preexistentes, sea la sanción de nuevas leyes.

15.- Los Jueces no pueden dejar de fallar en materia civil, a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes.

16.- Cuando ocurra un negocio civil, que no pueda resolverse por las palabras ni por el espíritu de la ley de la materia, se acudirá a los fundamentos de las leyes análogas; y si todavía subsistiere la duda, se ocurrirá a los principios generales de derecho y a las doctrinas más recibidas, consideradas las circunstancias del caso.

17.- Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu.

Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su sanción.

18.- Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal.

19.- Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso.

20.- El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

LIBRO PRIMERO**De las personas****TITULO I****DE LAS DIFERENTES PERSONAS CIVILES**

21.- Son personas todos los individuos de la especie humana.

Se consideran personas jurídicas y por consiguiente capaces de derechos y obligaciones civiles, el Estado, el Fisco, el Municipio, la Iglesia y las corporaciones, establecimientos y asociaciones reconocidas por la autoridad pública. (*)

(*) *Ver: artículo 835 nral. 2º de esta norma.*

22.- Son ciudadanos los que la Constitución del Estado declara tales. Los demás son extranjeros.

La ley oriental no reconoce diferencia entre orientales y extranjeros, en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este Código.

23.- Las personas son además, domiciliadas o transeúntes.

TITULO II**DEL DOMICILIO DE LAS PERSONAS**

24.- El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.

El domicilio *civil* es relativo a una sección determinada del territorio del Estado.

25.- El lugar donde un individuo está de asiento o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su *domicilio civil* o *vecindad*.

26.- No se presume el ánimo de permanecer ni se adquiere consiguientemente domicilio en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico o por otras circunstancias aparece que la residencia es accidental, como la del viajero o la del que ejerce una comisión temporal o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante.

27.- Al contrario, se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el hecho de abrir en él tienda, almacén, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimiento durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un cargo concejil o un empleo fijo, de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circunstancias análogas.

28.- El domicilio no se muda por el hecho de residir voluntariamente el individuo largo tiempo en otra parte o forzosamente o por vía de pena, con tal que conserve su familia y el asiento principal de sus negocios en aquel domicilio.

29.- Los eclesiásticos obligados a una residencia determinada, tienen su domicilio en ella.

30.- Cuando concurren en varias secciones territoriales, con respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio, se entenderá que en todas ellas lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones exclusivamente, ésta sola será para tales casos el domicilio del individuo.

31.- La mera residencia hará las veces de domicilio, respecto de las personas que no lo tuvieran en otra parte.

32.- Se podrá en un contrato establecer de común acuerdo un domicilio especial para los actos judiciales y extrajudiciales a que diera lugar el mismo contrato.

33.- El domicilio conyugal se fijará de común acuerdo entre los esposos.

34.- El menor no emancipado o habilitado, así como el mayor a quien se ha nombrado curador, no tiene otro domicilio que el de sus padres, tutores o curadores. (*)

(*) *Ver: artículo 367 de esta norma.*

35.- Los mayores de edad que sirven o trabajan en casa de otros, tendrán el mismo domicilio de la persona a quien sirven o para quien trabajan, si viven en la misma casa.

36.- El domicilio del difunto, siendo en territorio nacional, determina el lugar en que debe radicarse la testamentaría, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley procesal. (*)

(*) *Ver: artículo 367 de esta norma.*

37.- El domicilio de las corporaciones, establecimientos y asociaciones reconocidas por la autoridad pública, es el lugar donde está situada su dirección o administración, si en sus estatutos o en la autorización que se les dio, no tuvieren su domicilio señalado.

38.- Las reglas de este Título se entenderán sin perjuicio de lo que por disposiciones especiales se estableciere, con relación a objetos particulares de gobierno, policía y administración.

TÍTULO III

DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

39.- El estado civil es la calidad de un individuo en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones.

40.- El estado civil de casados, de padres o hijos legítimos, se probará por las respectivas partidas de matrimonio o nacimiento, extraídas de los Registros Civiles correspondientes. La edad y la muerte se probarán por las partidas de nacimiento y defunción.

Para que toda partida o testimonio extraído de los Registros Parroquiales produzca efectos en juicio o fuera de él, con el fin de comprobar un estado civil anterior al 1º de julio de 1879, es necesario que sea autorizado por un certificado del Director General del Registro

del Estado Civil, cuyas resultancias se tomarán por base para apreciar la fuerza probatoria de aquel instrumento.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo que establezca la ley respecto al valor probatorio de los certificados de las partidas. (*)

(*) *Ver: artículo 43 de esta norma.*

41.- Las disposiciones sobre los Registros del Estado Civil y los deberes que a su respecto incumben a los funcionarios públicos encargados de ellos son objeto de leyes especiales.

42.- El estado civil de padre o madre o hijo natural se probará por las respectivas partidas del Registro de Estado Civil o por la escritura pública entre vivos o por el testamento que al efecto se hubiese otorgado o por sentencia ejecutoriada que establezca la filiación natural. (*)

(*) *Ver: artículo 43 de esta norma.*

43.- Estando en debida forma los testimonios de los registros mencionados en los artículos 40 y 42, se presume la verdad de ellos; salvo, sin embargo, a los interesados el derecho de impugnar, en todo o en parte, las declaraciones contenidas en esos documentos o la identidad de la persona de que esos documentos traten.

44.- La falta de los referidos testimonios podrá suplirse, en caso necesario, por otros documentos auténticos, por declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de que se trata y, en defecto de estas pruebas, por la posesión notoria de ese estado civil. (*)

(*) *Ver: artículo 233 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Código del Niño (aprobado por Ley N° 9.342 de fecha 6 de abril de 1934), artículo 114.1, en la redacción dada por la Ley N° 16.707 de fecha 12 de julio de 1995, artículo 25.

45.- La posesión notoria del estado de matrimonio consiste principalmente en haberse tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus relaciones domésticas y sociales; y en haber sido cada uno recibido en ese carácter por los deudos y amigos del otro y por el vecindario de su domicilio en general.

46.- La posesión notoria del estado de hijo legítimo consiste en que sus padres

le hayan tratado como tal, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente y presentándole en ese carácter a sus deudos y amigos; y en que éstos y el vecindario de su domicilio en general, le hayan reputado y reconocido como hijo legítimo de tales padres. (*)

(*) *Ver: artículo 233 de esta norma.*

47.- Para que la posesión notoria se reciba como prueba del estado civil, deberá haber durado diez años continuos, por lo menos. (*)

(*) *Ver: artículo 233 de esta norma.*

48.- La posesión notoria del estado civil se probará por un conjunto de testimonios fidedignos, que la establezcan de un modo irrefragable (*); particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la respectiva partida o la pérdida o extravío del libro o registro, en que debiera encontrarse. (**)

(*) *En el Diario Oficial N° 24.177 de fecha 21 de noviembre de 1994 y en la edición oficial, dice: “irrefragable”, debe decir: “irrefragable”.*

(**) *Ver: artículo 233 de esta norma.*

49.- En falta absoluta de prueba de la edad por documentos o declaraciones que fijen la época del nacimiento y cuando su determinación fuese indispensable, se decidirá por el aspecto físico del individuo, a juicio de facultativos nombrados por el Juez.

TÍTULO IV

DE LOS AUSENTES (*)

(*) *Ver: artículo 1122 de esta norma.*

CAPÍTULO I

DE LA PRESUNCION DE AUSENCIA (*)

(*) *Ver: artículo 70 de esta norma.*

50.- La ley sólo considera ausente para los efectos de este Título, al individuo

cuya residencia actual se ignora o de quien no se tienen noticias y cuya existencia es por consiguiente dudosa.

51.- El ausente a los ojos de la ley ni está vivo ni está muerto.

A los que tienen interés en que esté vivo, toca probar la existencia, como el fallecimiento, a los que tienen interés en que haya muerto. (*)

(*) *Ver: artículo 74 de esta norma.*

52.- Si hay necesidad real de proveer a la administración de todos o parte de los bienes dejados por un ausente presunto, que no tiene apoderado bastante, se proveerá por el Juez del lugar en que se hallen situados los bienes, a solicitud de los interesados o del Ministerio Público.

Sólo se llaman interesados, a los efectos de este artículo, a los que tienen interés existente y actual en provocar las medidas que solicitan, como los acreedores, socios, comuneros y coherederos. (*)

(*) *Ver: artículos 53, 75 y 451 de esta norma.*

53.- El Juzgado, a solicitud de cualquiera de los interesados, nombrará persona hábil para representar a los ausentes en los inventarios, particiones y liquidaciones en que tengan interés.

En el caso de este artículo o del anterior, el cónyuge ausente será representado por el que esté presente. (*)

(*) *Ver: artículos 75 y 451 de esta norma.*

54.- El Ministerio Público queda especialmente encargado de vigilar los intereses de las personas que se presumen ausentes y será oído en todos los negocios que les conciernan.

Los parientes y amigos del ausente pueden estimular al Ministerio Público, participándole el perjuicio que sufren los intereses del ausente.

CAPITULO II

DE LA DECLARACION DE AUSENCIA

55.- Cuando se haya dejado de ver a una persona en el lugar de su domicilio

y en cuatro años no se hayan recibido noticias suyas, podrán los interesados solicitar ante el Juez competente del último domicilio conocido, la declaración de ausencia.

Los interesados a los efectos de este artículo, son los herederos presuntivos y todos los demás que tienen en los bienes del ausente derechos que se subordinan a la condición de su fallecimiento. (*)

(*) *Ver: artículo 68 de esta norma.*

56.- Si el ausente había dejado apoderado, la declaración de ausencia no podrá reclamarse hasta pasados seis años, contados desde la ausencia o las últimas noticias; y eso, aun en el caso de que el mandato hubiese caducado antes de vencidos los seis años. (*)

(*) *Ver: artículo 68 de esta norma.*

57.- Si después que una persona recibió una herida grave en la guerra o naufragó la embarcación en que navegaba o le sobrevino otro peligro semejante, no se ha sabido más de ella y han transcurrido desde entonces dos años, podrá solicitarse la declaración de ausencia.

Los dos años serán contados desde el día de la acción de guerra, naufragio o peligro o no pudiendo ser determinado ese día, desde un término medio entre el principio y fin de la época en que pudo ocurrir el suceso. (*)

(*) *Ver: artículos 61 y 68 de esta norma.*

58.- El que solicite la declaración de ausencia, tendrá que justificar los extremos en que la funde, con arreglo a los artículos precedentes, a lo menos, por una información, con citación del Ministerio Público. (*)

(*) *Ver: artículos 62 y 68 de esta norma.*

59.- El Juzgado, tan luego como se le presente la solicitud, ordenará su publicación en los periódicos de acuerdo a lo dispuesto por la ley procesal. (*)

(*) *Ver: artículo 60 de esta norma.*

60.- La declaración de ausencia no podrá decretarse por el Juez hasta

pasado un año desde la primera publicación, con arreglo al artículo anterior. Decretada que sea, el Juez mandará que se publique por los periódicos.

CAPITULO III

DE LOS EFECTOS DE LA AUSENCIA (*)

(*) *Ver: artículos 1037 y 1998 nral. 4º de esta norma.*

SECCION I

DE LOS EFECTOS DE LA AUSENCIA, RELATIVAMENTE A LOS BIENES QUE EL AUSENTE POSEIA

61.- Declarada la ausencia, si hubiese testamento cerrado, se abrirá a solicitud de los interesados o del Ministerio Público.

Los herederos testamentarios, con citación de los herederos ab intestato o a falta de testamento, los que fueren herederos ab intestato del ausente a la fecha de la desaparición o de las últimas noticias o del suceso de que habla el artículo 57, podrán pedir la posesión interina de los bienes que tenía el ausente, ofreciendo fianza idónea para garantía de su administración.

Los legatarios y demás que tienen derechos eventuales que se hacen exigibles con la muerte, podrán también ejercerlos provisoriamente, dando fianzas.

62.- El cónyuge presente, cuando no tenga la calidad de heredero, podrá oponerse a la misión en posesión interina, solicitada por los que tuvieren esa calidad, y conservar la administración de los bienes del cónyuge ausente. (Artículos 58 y 1979).

Si prefiere la disolución provisoria de la sociedad, podrá ejercer sus derechos legales y convencionales, con obligación de afianzar, por lo que toca a las cosas sujetas a restitución. (*)

(*) *Ver: artículos 64 y 68 de esta norma.*

63.- La posesión interina sólo dará a los que la obtengan, la administración de los bienes del ausente, con calidad de rendirle cuentas, si volviese o nombrare apoderado.

64.- Los que hubieren obtenido la misión en posesión interina o el cónyuge en el caso del artículo 62, deberán proceder inmediatamente a un inventario formal, con citación del Ministerio Público, de todos los bienes raíces, muebles y acciones del ausente.

65.- Los que hayan obtenido la posesión provisoria podrán exigir para su garantía, que se proceda por peritos designados por el Juzgado, a un reconocimiento del estado de los bienes raíces.

Los gastos que se ocasionen saldrán de los bienes del ausente.

66.- Si el ausente volviere o nombrare apoderado, los poseedores interinos no tendrán que devolverle sino el quinto de los frutos o rentas, quedando a su beneficio los cuatro quintos. (*)

(*) *Ver: artículo 69 de esta norma.*

67.- Los que no tengan sino posesión interina, no podrán enajenar ni hipotecar los bienes raíces del ausente.

Si conviniera a los intereses del ausente la enajenación de los muebles, podrá procederse a ella, con la venia judicial.

68.- Si la ausencia ha continuado por ocho años contados desde que se hizo la declaración, en los casos de los artículos 55 y 56 o por cinco años en el caso del artículo 57 o si han pasado ochenta años contados desde el nacimiento del ausente, quedarán sin efecto las fianzas; los interesados podrán solicitar la partición de los bienes y pedir que la posesión interina se declare definitiva.

Al efecto deben dirigirse al mismo Juzgado que declaró la ausencia y les otorgó la misión en posesión.

El Juez, en la forma del artículo 58, declarará si la ausencia ha continuado sin interrupción o no; y, según el resultado, dará la posesión definitiva, si hubiese lugar.

No podrá impedir los efectos definitivos de esa declaración el cónyuge que administra, por haber usado del derecho que le acuerda el artículo 62. (*)

(*) *Ver: artículo 1984 de esta norma.*

69.- Desde el día del fallecimiento probado del ausente, quedará expedita la

herencia a los herederos testamentarios o a falta de testamento, a los que, en la época de la muerte, fuesen herederos *ab intestato*.

Si otros hubieren obtenido la posesión, sea provisoria, sea definitiva, de los bienes del ausente, tendrán que restituirlos, salvo los frutos, conforme al artículo 66.

70.- Si el ausente vuelve o se acredita su existencia, durante la posesión provisoria, cesarán los efectos de la declaración de ausencia, sin perjuicio, si el caso lo exigiere, de las medidas conservatorias prescritas en el capítulo I del presente Título, para la administración de sus bienes.

71.- Si el ausente vuelve o si se acredita su existencia, aun después de la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que se encuentren, el precio de los que se hubiesen enajenado o las cosas adquiridas con el precio en unidades reajustables de las que se hubiesen vendido; pero no podrá reclamar frutos ni rentas. (*)

(*) *Ver: artículo 72 de esta norma.*

72.- Los descendientes del ausente podrán asimismo dentro de quince años contados desde la posesión definitiva, solicitar la restitución de sus bienes, en la forma expresada en el artículo anterior.

73.- Después del auto de declaración de ausencia, cualquiera persona que tenga algo que demandar al ausente, tendrá que dirigirse a los que han obtenido la administración o posesión de los bienes.

SECCION II

DE LOS EFECTOS DE LA AUSENCIA, CON RELACION A LOS DERECHOS EVENTUALES QUE PUEDEN COMPETIR AL AUSENTE

74.- Cuando se reclame un derecho que recaiga en individuo cuya existencia no sea legalmente reconocida, conforme a lo establecido en el artículo 51, deberá probarse que ese individuo existía en la época en que el derecho recayó en él. (*)

(*) *Ver: artículo 76 de esta norma.*

75.- Si se verifica herencia a que sea llamado individuo que se presume ausente, se procederá en la forma de los artículos 52 y 53. (Artículos 1071 y 1124).

Si ya ha tenido lugar la declaración de ausencia, la sucesión corresponderá exclusivamente a los que habían de concurrir con él o a los que habían de entrar en su representación o en su defecto. (*)

(*) *Ver: artículo 76 de esta norma.*

76.- Las disposiciones de los dos artículos precedentes se entienden sin perjuicio de las acciones de petición de herencia, y otras que competan a los ausentes y a sus sucesores universales o singulares.

77.- Mientras que el ausente no se presente o no se deduzcan acciones a su nombre, los poseedores de la herencia harán suyos los frutos percibidos de buena fe. (Artículo 694).

SECCION III

DE LOS EFECTOS DE LA AUSENCIA, RELATIVAMENTE AL MATRIMONIO

78.- La presunción que resulta de la ausencia, por larga que sea, no basta para disolver el matrimonio.

Sin embargo, sólo el cónyuge ausente, por sí o por apoderado que presente prueba acabada de su existencia, podrá atacar la validez del matrimonio contraído por el otro cónyuge.

79.- Pasados seis meses después de la desaparición del padre o madre ausentes, sin haberse recibido noticias suyas, se proveerá de tutor a los hijos menores cuando el otro padre no exista o no esté en ejercicio de la patria potestad.

80.- Lo mismo sucederá en el caso de que cualquiera de los cónyuges se haya ausentado, dejando hijos menores de un matrimonio precedente.

TÍTULO V**DEL MATRIMONIO (*)**

(*) *Ver: artículo 280 nral. 2º y artículo 283 de esta norma.*

CAPITULO I**DE LOS ESPONSALES**

81.- Los esponsales o sea la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, es un hecho privado, que la ley somete enteramente al honor y conciencia del individuo y que no produce obligación alguna en el foro externo.

No se puede alegar esta promesa ni para pedir que se efectúe el matrimonio ni para demandar indemnización de perjuicios.

82.- Tampoco podrá pedirse la multa que por parte de uno de los esposos se hubiese estipulado a favor del otro, para el caso de no cumplirse lo prometido.

Pero si se hubiese pagado la multa, no podrá pedirse su devolución. (Artículos 1441 y 1445).

CAPITULO II**DE LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO**

83.- El matrimonio civil es obligatorio en todo el territorio del Estado, no reconociéndose, a partir del 21 de julio de 1885, otro legítimo que el celebrado con arreglo a este capítulo y con sujeción a las disposiciones establecidas en las leyes de Registro del Estado Civil y su reglamentación. (*)

(*) *Ver: artículo 84 de esta norma.*

84.- Efectuado el matrimonio civil a que se refiere el artículo 83, los contrayentes podrán libremente solicitar la ceremonia religiosa de la Iglesia a

que pertenezcan, pero ningún ministro de la Iglesia Católica o pastor de las diferentes comuniones disidentes en el país, podrá proceder a las bendiciones nupciales sin que se le haya hecho constar la celebración del matrimonio civil, por certificado expedido en forma por el Oficial del Estado Civil y si lo efectuase sin dicha constancia incurrirá en la pena de seis meses de prisión y en caso de reincidencia un año de prisión.

Exceptúase de la disposición que antecede, los matrimonios *in extremis*, que no producirán, sin embargo, efectos civiles. (*)

(*) *Ver: artículo 85 de esta norma.*

85.- Si al acto a que se refiere la excepción del inciso último del artículo precedente, fuere llamado el Oficial del Estado Civil, éste procederá previa presentación de certificado médico que acredite el peligro de muerte de uno de los contrayentes, a efectuar el contrato civil de matrimonio, con anotación de las circunstancias especiales que lo motivan.

En los puntos de la República donde no resida médico, suplirá el certificado de éste la declaración de dos testigos de respetabilidad. (*)

(*) *Ver: artículo 99 de esta norma.*

86.- En el mismo día y, si no fuese posible, en el siguiente a la celebración del contrato, el Oficial del Estado Civil fijará y publicará edictos anunciando el acto practicado, llenando las demás formalidades prevenidas en los números 1 a 4 del artículo 92.

87.- Llenados estos requisitos y corrido el término de la publicación, el Oficial del Estado Civil pasará los antecedentes al Juez Letrado competente del domicilio de los contrayentes, quien no teniendo reparo que hacer al procedimiento seguido y no habiéndose interpuesto oposición justificada, declarará válido el contrato de matrimonio civil celebrado *in extremis*.

Tratándose de viudo o viuda, divorciado o divorciada, el Juez Letrado exigirá que acredite la presentación de la declaración jurada prescripta por el artículo 113.

88.- Todos los matrimonios efectuados civilmente durante la vigencia de las leyes anteriores, aunque hayan tenido lugar entre personas católicas, que por razones de conciencia o cualesquiera otras prefirieron el acto civil con

prescindencia de la ceremonia religiosa establecida por las leyes canónicas o eclesiásticas, se declaran válidos y legítimos ante las leyes civiles; considerándose que esos matrimonios producen todos sus efectos legales desde el día de su celebración.

89.- Los hijos que procedan de dichos matrimonios se declaran legítimos, cualquiera que sea la anotación que a su respecto arrojen los libros parroquiales de la Iglesia.

90.- El acto de matrimonio producirá los efectos civiles que le atribuye este Código si fuere celebrado con sujeción a las siguientes disposiciones.

91.- Son impedimentos dirimientes para el matrimonio:

1º.- La falta de edad requerida por las leyes de la República; esto es, catorce años cumplidos en el varón y doce cumplidos en la mujer. (*)

2º.- La falta de consentimiento en los contrayentes.

Los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito son hábiles para contraer matrimonio, siempre que se compruebe que pueden otorgar consentimiento. La comprobación se hará por informe médico aprobado judicialmente.

3º.- El vínculo no disuelto de un matrimonio anterior. (**)

4º.- El parentesco en línea recta por consanguinidad o afinidad, sea legítimo o natural. (***)

5º.- En la línea transversal, el parentesco entre hermanos legítimos o naturales.

6º.- El homicidio, tentativa o complicidad en el homicidio contra la persona de uno de los cónyuges, respecto del sobreviviente.

7º.- La falta de consagración religiosa, cuando ésta se hubiere estipulado como condición resolutoria en el contrato y se reclamase el cumplimiento de ella en el mismo día de la celebración del matrimonio. (****)

(*) **Ver:** artículo 280 de esta norma.

(**) **Ver:** artículo 202 de esta norma.

(***) **Ver:** artículo 197 de esta norma.

(****) **Ver:** artículos 94, 200 y 204 de esta norma.

92.- El expediente informativo que debe preceder al matrimonio para acreditar los novios hallarse desimpedidos y haber cumplido los demás requisitos civiles del caso, se instruirá ante el Oficial del Estado Civil del domicilio de cualquiera de los contrayentes.

El mismo funcionario publicará el proyectado matrimonio por medio de la prensa y edicto, que permanecerá fijado en la puerta de la oficina por espacio de ocho días y contendrá:

1°.- Los nombres y apellidos de los novios.

2°.- La nacionalidad de cada uno de ellos, su edad, profesión y domicilio.

3°.- Si alguno de ellos fuese viudo o ambos lo fuesen, los nombres de los cónyuges fallecidos, según lo que conste de la partida de óbito que debe presentarse o de otra prueba subsidiaria.

4°.- Intimación a los que supieren algún impedimento para el matrimonio proyectado que lo denuncien o hagan conocer la causa. (*)

(*) *Ver: artículos 93 y 204 de esta norma.*

93.- Si son diversos los domicilios de los contrayentes, se pasará oficio deprecatorio al otro Oficial del Estado Civil que corresponda, para que también haga fijar en las puertas de la oficina el edicto de que habla el artículo precedente.

En este caso, el Oficial del Estado Civil en cuya oficina debe celebrarse el matrimonio, no podrá pasar adelante sin haber recibido la contestación del otro Oficial, avisándole que, hecha la publicación, no ha habido denuncia de impedimento o acompañándole la denuncia si se le hubiese presentado. (*)

(*) *Ver: artículo 204 de esta norma.*

94.- Las denuncias de impedimentos (artículo 91) serán dadas por escrito al Oficial del Estado Civil, quien mandará agregarlas al expediente con noticia de los novios y remitirá al Juzgado Letrado competente para su trámite y posterior resolución.

Al Ministerio Público incumbe dar esas denuncias, si tuviere prueba de cualquier impedimento.

95.- DEROGADO por el art. 544-1 del Código Gral. del Proceso y art. 69 Ley 15.750 de 24.6.85 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

96.- Siempre que se declare improcedente la denuncia del impedimento, será condenado el denunciante en las costas, costos, daños y perjuicios.

Exceptúase el caso de haberse dado la denuncia por el Ministerio Público o agente de éste.

97.- Juzgada improcedente la denuncia o no habiendo aparecido alguna, el Oficial del Estado Civil procederá a celebrar el matrimonio en público, *pro tribunali*, a presencia de cuatro testigos, parientes o extraños, recibiendo la declaración de cada novio, *de que quieren ser marido y mujer*. Acto continuo declarará el Oficial del Estado Civil, *a nombre de la ley, que quedan unidos en matrimonio legítimo*; y levantará en forma de acta la partida de matrimonio, dando copia a los contrayentes, si la pidieren.

98.- En el acta o partida de matrimonio se enunciará:

1º.- El nombre, edad, profesión, lugar del nacimiento y domicilio de cada uno de los contrayentes.

2º.- El nombre, profesión y domicilio de sus padres.

3º.- El consentimiento de los padres, ascendientes, tutores o curadores, conforme a los artículos 105 y siguientes.

4º.- La circunstancia de haber precedido al matrimonio el edicto y publicación del caso.

5º.- La denuncia, si la ha habido, con la sentencia sobre ella recaída, declarándola improcedente, o la constancia de no haberse denunciado impedimento alguno.

6º.- La declaración de los contrayentes de recibirse por esposos y la de su unión por el Oficial del Estado Civil.

El consentimiento del sordomudo contrayente que no pueda darse a entender por escrito, será expresado por su representante legal, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 105 y siguientes.

7º.- Los nombres, edad, profesión y domicilio de los testigos.

99.- Por causas que a su juicio sean bastantes podrá el Oficial del Estado Civil, celebrar el matrimonio fuera de su oficina, pero en el caso del artículo 85 deberá necesariamente concurrir donde fuere solicitado.

100.- El matrimonio puede celebrarse por medio de apoderado con poder especial en forma.

101 a 104.-

SUPRIMIDA LA "SECCION II - DEL MATRIMONIO CELEBRADO O DISUELTO EN PAIS EXTRANJERO" (arts. 101 a 104 incl.) por los arts. 2395, 2396 y 2404 del Apéndice del Código). (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

CAPITULO III**DE LOS REQUISITOS CIVILES PREVIOS
AL MATRIMONIO EN GENERAL**

105.- No se procederá a la celebración de matrimonio alguno, sin el asenso o licencia de la persona o personas, cuyo consentimiento sea necesario, según las reglas que van a expresarse o sin que conste que el respectivo contrayente no ha menester para casarse el consentimiento de otra persona o que ha obtenido el de la justicia en subsidio. (*)

(*) *Ver: artículo 204 de esta norma.*

106.- Los hijos legítimos que no hayan cumplido dieciocho años de edad necesitan para casarse el consentimiento expreso de sus padres y a falta de ambos el del ascendiente o ascendientes en grado más próximo.

En igualdad de votos contrarios, preferirá el favorable al matrimonio.

(*) (**)

(*) *La redacción de este artículo fue dada por Ley N° 16.719 de fecha 11 de octubre de 1995, artículo 2.*

(**) *Ver: artículos 109 y 204 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.719 de fecha 11 de octubre de 1995, artículo 3.

107.- A falta de dichos padres o ascendientes, será necesario al que no haya

cumplido dieciocho años el consentimiento expreso de su tutor o curador especial.(Artículo 308). (*) (**)

(*) *La redacción de este artículo fue dada por Ley N° 16.719 de fecha 11 de octubre de 1995, artículo 2.*

(**) *Ver: artículos 109 y 204 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.719 de fecha 11 de octubre de 1995, artículo 3.

108.- Se entenderá faltar el padre, madre u otro ascendiente, no sólo por haber fallecido, sino por estar demente o fatuo o por hallarse ausente del territorio de la República y no esperarse su pronto regreso o por ignorarse el lugar de su residencia.(*)

(*) *Ver: artículo 204 de esta norma.*

109.- Los hijos naturales reconocidos que no hayan cumplido la edad de dieciocho años, según el artículo 106, están obligados a obtener el consentimiento del padre o madre que los haya reconocido con las formalidades legales; y de los dos si ambos los han reconocido y viven, siendo de aplicación para este último caso lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 106.

A falta de dichos padres se aplicará lo dispuesto en el artículo 107.

A los efectos de este artículo y de los anteriores se entenderá faltar el padre y la madre si han perdido la patria potestad pero no si les ha sido simplemente limitada, salvo resolución expresa. (*) (**)

(*) *La redacción de este artículo fue dada por Ley N° 16.719 de fecha 11 de octubre de 1995, artículo 2.*

(**) *Ver: artículo 204 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.719 de fecha 11 de octubre de 1995, artículo 3.

110.- Cuando el consentimiento para el matrimonio se niegue por la persona o personas que deben prestarlo, habrá recurso ante el Juzgado competente, para que declare irracional el disenso. (*)

(*) *Ver: artículo 204 de esta norma.*

111.- No se procederá a la celebración del matrimonio entre el tutor o

curador ni sus descendientes, con la persona que ha tenido en guarda, mientras que fenecida la guarda, no haya recaído la aprobación judicial de las cuentas de su cargo. (*)

(*) *Ver: artículo 204 de esta norma.*

112.- Tampoco se procederá a la celebración del matrimonio de la viuda o divorciada, hasta los trescientos y un días después de la muerte del marido o de la separación personal, según el caso, bien que si hubiese quedado encinta, podrá casarse después del alumbramiento.

Esta disposición es aplicable al caso en que la separación de los cónyuges se verifique por haberse declarado nulo el matrimonio.

No obstante la mujer que se encuentre en las situaciones previstas precedentemente podrá contraer nuevo matrimonio antes del lapso prefijado y siempre que hubieren transcurrido noventa días naturales desde que se consumó su viudez, la separación personal o se ejecutorió la sentencia de nulidad respectiva, si acreditare que no se encuentra embarazada mediante certificación de médico especialista, la que se agregará al expediente respectivo. (*)

(*) *Ver: artículos 190 y 204 de esta norma.*

113.- No permitirá la autoridad civil el matrimonio del viudo o viuda, divorciado o divorciada, que tratare de volver a casarse, sin que presente en el expediente matrimonial, declaración jurada de que no tiene hijos bajo su patria potestad o de que sus hijos no tienen bienes o de que, si los tuvieren, han hecho de ellos inventario ante Juez competente.

Igual declaración deberá formular el padre o madre naturales respecto de sus hijos reconocidos o dados por reconocidos. (*)

(*) *Ver: artículo 204 de esta norma.*

114.- DEROGADO por la Ley No. 10.783. (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

115.- El funcionario público que bajo cualquier forma infringiera las disposiciones que le incumban relativamente al matrimonio incurrirá en la misma pena que el artículo 162 del Código Penal establece. (*)

(*) *Ver: artículo 204 de esta norma.*

CAPITULO IV

DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO

SECCION I

DE LOS DEBERES DE LOS ESPOSOS PARA CON SUS HIJOS Y DE SU OBLIGACION Y LA DE OTROS PARIENTES A PRESTARSE RECIPROCAMENTE ALIMENTOS (*)

(*) *Ver: artículo 250 nral. 2º de esta norma.*

116.- Por el mero hecho del matrimonio, contraen los cónyuges la obligación de mantener y educar a sus hijos, dándoles la profesión u oficio conveniente a su estado y circunstancias. (Artículo 250).

Los padres *no tienen obligación* de dar a sus hijos los medios de formar un establecimiento. (*)

(*) *Ver: artículos 117 y 148 de esta norma.*

117.- En defecto o imposibilidad de los padres, se extiende la obligación expresada en el artículo precedente a los abuelos y demás ascendientes, sean legítimos o naturales. (*)

(*) *Ver: artículos 148 y 388 de esta norma.*

118.- La obligación de alimentar es recíproca entre los ascendientes y descendientes. (*)

(*) *Ver: artículos 148 y 284 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 17.066 de fecha 24 de diciembre de 1998, artículo 6 y Decreto N° 320/999 de fecha 1º de octubre de 1999 (Reglamentación Técnica de los Alojamientos Privados para Adultos Mayores, artículo 6).

119.- Los yernos o nueras deben igualmente y en las mismas circunstancias, alimentar a sus suegros y éstos a aquéllos; pero esa obligación cesa:

1º.- Cuando el suegro o suegra, yerno o nuera, pasa a segundas nupcias.

2º.- Cuando ha fallecido aquel de los cónyuges que producía la afinidad y los hijos nacidos de su unión con el otro.

Subsistirá, sin embargo, la obligación en este caso cuando el cónyuge sobreviviente no tenga ascendientes, descendientes ni hermanos en condiciones de prestar alimentos y prueba que observa buena conducta. (*)

(*) *Ver: artículo 148 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 17.066 de fecha 24 de diciembre de 1998, artículo 6 y Decreto N° 320/999 de fecha 1° de octubre de 1999 (Reglamentación Técnica de los Alojamientos Privados para Adultos Mayores, artículo 6).

120.- La obligación de alimentar se extenderá a los hermanos legítimos, en caso de que por vicio corporal, debilidad de la inteligencia u otras causas inculpables, no puedan proporcionarse los alimentos. (*)

(*) *Ver: artículos 148 y 388 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 17.066 de fecha 24 de diciembre de 1998, artículo 6; Texto Ordenado de las Normas Legales y Reglamentarias Vigentes en Materia de Funcionarios Públicos (TOFUP), aprobado por Decreto N° 200/997 de fecha 18 de junio de 1997, Título XXIV, Capítulo IV, artículo 1045 y Decreto N° 320/999 de fecha 1° de octubre de 1999 (Reglamentación Técnica de los Alojamientos Privados para Adultos Mayores, artículo 6).

121.- Bajo la denominación de alimentos se comprende, no sólo la casa y comida, sino el vestido, el calzado, las medicinas y salarios de los médicos y asistentes, en caso de enfermedad.

Se comprende también la educación cuando el alimentario es menor de veintiún años. (*) (**)

(*) *La redacción del inciso segundo de este artículo fue dada por Ley N° 16.719 de fecha 11 de octubre de 1995, artículo 4.*

(**) *Ver: artículos 129, 148, 260 y 277 de esta norma.*

122.- Los alimentos han de ser proporcionados al caudal de quien los da y a las necesidades de quien los recibe.

El Juez, según las circunstancias del caso, reglará la forma y cuantía en que hayan de prestarse los alimentos. (*)

(*) *Ver: artículo 148 de esta norma.*

123.- Cuando el que suministra los alimentos o el que los recibe, llega a un

estado tal, que el uno ya no puede darlos o el otro no los necesita en todo o en parte, puede solicitarse la exoneración o reducción de la cuota señalada. (*)

(*) *Ver: artículo 148 de esta norma.*

124.- El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte ni venderse o cederse de modo alguno ni renunciarse. (Artículo 2155). (*)

(*) *Ver: artículo 148 de esta norma.*

125.- El que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él. (Artículo 1510). (*)

(*) *Ver: artículo 148 de esta norma.*

126.- No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse y el derecho de demandarlas transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse, sin perjuicio de la prescripción que compete al deudor y de la limitación establecida en el artículo 1766 inciso 2º. (Artículo 1222). (*)

(*) *Ver: artículo 148 de esta norma.*

SECCION II

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE MARIDO Y MUJER (*)

(*) *Ver: artículo 305 de esta norma.*

127.- Los cónyuges se deben fidelidad mutua y auxilios recíprocos.

128.- DEROGADO por art. 1o. Ley No. 10.783 de 18.9.46 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

129.- El deber de convivencia es recíproco entre marido y mujer.

Ambos contribuirán a los gastos del hogar (artículo 121) proporcionalmente a su situación económica.

130.- Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los

cónyuges, según las reglas que se expondrán en el Título VII Parte II del Libro IV de este Código.

DEROGADO el inc. 2o. por el art. 2397, que fue incorporado por la ley 10.084 del 3.12.41, pero vigente para matrimonios anteriores a dicha ley. (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986. La referencia se entiende realizada a la Ley N° 10.084 de fecha 3 de diciembre de 1941, artículo 1.*

131 a 144.-

DEROGADOS por arts. 1o. y 2o. Ley No. 10.783 de 18.9.46 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

CAPITULO V

DE LA SEPARACION DE CUERPOS Y DE LA DISOLUCION DEL MATRIMONIO

145.- Los juicios de separación de cuerpos, disolución y nulidad de matrimonio, se regirán privativamente por las leyes y las judicaturas civiles, con absoluta prescindencia de las autoridades eclesiásticas. (*)

(*) *Ver: artículo 147 de esta norma.*

146.- Los efectos civiles de dichos juicios, esto es, todo lo que concierne a los bienes de los cónyuges, a su libertad personal, a la crianza y educación de los hijos, se rigen por las leyes y judicaturas civiles.

Es Juez competente para entender en ellos el Juez de Familia o quien hiciera sus veces, del domicilio del demandado. Si se ignorase el domicilio de éste, o no lo tuviera en la República, será Juez competente el del último domicilio que se le hubiere conocido.

147.- De acuerdo con el artículo 145, en todas las cuestiones relacionadas con los matrimonios, incumbe conocer a los Tribunales ordinarios, los cuales resolverán los casos, de conformidad a las leyes civiles de la República.

SECCION I

DE LA SEPARACION DE CUERPOS (*)

(*) *Ver: artículo 189 de esta norma.*

148.- La separación de cuerpos sólo puede tener lugar:

1º.- Por el adulterio de cualquiera de los cónyuges.

2º.- Por la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, pronunciada la sentencia criminal condenatoria. (*)

3º.- Por sevicias o injurias graves del uno respecto del otro. Estas causales serán apreciadas por el Juez teniendo en cuenta la educación y condición del cónyuge agraviado.

4º.- Por la propuesta del marido para prostituir a la mujer.

5º.- Por el conato del marido o el de la mujer para prostituir a sus hijos y por la connivencia en la prostitución de aquéllos. (**)

6º.- Cuando hay entre los cónyuges riñas y disputas continuas, que les hagan insoportable la vida común.

7º.- Por la condenación de uno de los esposos a pena de penitenciaría por más de diez años. (*)

8º.- Por el abandono voluntario del hogar que haga uno de los cónyuges, siempre que haya durado más de tres años.

9º.- Por la separación de hecho, ininterrumpida y voluntaria de por lo menos uno de los cónyuges durante más de tres años, sea cual fuere el motivo que la haya ocasionado.

10º.- Por la incapacidad de cualquiera de los cónyuges cuando haya sido declarada por enfermedad mental permanente e irreversible (artículos 431 y siguientes en cuanto sean aplicables) y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que haya quedado ejecutoriada la sentencia que declaró la incapacidad.

b) Que, a juicio del Juez, apoyado en dictamen pericial, la enfermedad mental sea de tal naturaleza que racionalmente no pueda esperarse el restablecimiento de la comunidad espiritual y material propia del estado de matrimonio.

Ejecutoriada la sentencia, el cónyuge o ex cónyuge en su caso deberá contribuir a mantener la situación económica del incapaz, conjuntamente con todos los demás obligados por ley a la prestación alimenticia según las disposiciones aplicables (artículos 116 y siguientes). (***)

(*) *Ver: artículo 153 de esta norma.*

(**) *Ver: artículo 172 de esta norma.*

(***) *Ver: artículos 187 nral. 1º, 875 y 1031 de esta norma.*

149.- La acción de separación de cuerpos no podrá ser intentada, sino por el marido o por la mujer; pero ninguno de los cónyuges podrá fundar la acción en su propia culpa.

150.- Si alguno de los cónyuges fuere menor de edad, no podrá comparecer en juicio ni como demandante ni como demandado, sin la asistencia de un curador especial que elegirá la parte o nombrará el Juez en su defecto, con la intervención del Ministerio Público.

151.- DEROGADO por la Ley 16.077 de 11.10.89 (*)

() Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986. La referencia se entiende realizada a la Ley N° 16.077 de fecha 11 de octubre de 1989, artículo 1.*

152.- Presentada al Juzgado cualquier demanda que no se funde clara y terminantemente en alguna de las causales establecidas en la ley, el Juez la desechará de plano.

153.- Si la demanda se funda en una de las causas establecidas en los números 2 y 7 del artículo 148, deberá presentarse la sentencia condenatoria ejecutoriada y probarse que la acción no ha prescrito.

SECCION II

DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES A QUE PUEDE DAR LUGAR LA DEMANDA (*)

() Ver: artículo 189 de esta norma.*

154.- En todos los casos, al proveer sobre la demanda o antes de ella en caso de urgencia apreciada por el Juez, a instancia de parte, el Juzgado decretará la separación provisoria de los cónyuges.

En la audiencia preliminar se resolverá lo relativo a las pensiones alimenticias, al régimen de tenencia y de visitas de los hijos menores o incapaces y la cuestión de cuál de los cónyuges habrá de permanecer en el hogar conyugal, así como las expensas necesarias para el juicio al cónyuge que las necesitare y no tuviere derecho a auxiliatoria de pobreza.

El Juzgado fijará dichas cantidades, teniendo en consideración las circunstancias del caso. (*)

() Ver: artículos 205 y 219 de esta norma.*

155.- Mientras no se hagan efectivas las litis expensas, podrá el cónyuge diferir el pago de tributos y demás gastos judiciales. Todo sin perjuicio de imputarse al haber del cónyuge deudor al tiempo de liquidarse la sociedad conyugal, las sumas que debió abonar por los conceptos expresados y las condenas que estableciere la sentencia definitiva. (*)

(*) *Ver: artículo 205 de esta norma.*

156.- DEROGADO por art. 1o. Ley No. 10.783 de 18.9.46 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

157.- Decretada la separación provisional, el Juez a instancia de parte mandará que se proceda a la facción del inventario de los bienes del matrimonio, así como todas las medidas conducentes a garantizar su buena administración, pudiendo separar al marido o a la mujer de la administración o exigirle fianza. (*)

(*) *Ver: artículos 205 y 1989 de esta norma.*

158.- Serán nulas todas las obligaciones contraídas por el marido o la mujer a cargo de la sociedad conyugal, así como las enajenaciones que se hagan de los bienes de esa sociedad, toda vez que fueren en contravención de las providencias judiciales, que se hubieren dictado e inscrito en el Registro respectivo. (*)

(*) *Ver: artículo 205 de esta norma.*

159.- Mientras dure el juicio de separación, la situación de los hijos menores será determinada de acuerdo con lo que prescriben los artículos 171 y siguientes. (*)

(*) *Ver: artículo 205 de esta norma.*

SECCION III

DE LAS EXCEPCIONES A LA ACCION DE SEPARACION, PRUEBAS Y RECURSOS (*)

(*) *Ver: artículo 189 de esta norma.*

160.- Cesa la acción de separación cuando ha habido reconciliación entre los cónyuges después de los hechos que dieron mérito a la acción, aun cuando ésta ya hubiera sido intentada.

Si la reconciliación tuvo lugar después de deducida la demanda, se restituirá todo al estado de cosas anterior a ella.

161.- Producida la reconciliación, el cónyuge demandante podrá nuevamente iniciar la acción, ya por causa superviniente -en cuyo caso podrá hacer uso de las anteriores para apoyarla- ya por causa anterior que hubiera sido ignorada por el actor al tiempo de la reconciliación. Si la causa que dio mérito a la sentencia de separación fuera el adulterio de la mujer, no podrá el marido, después de la conciliación, entablar acción fundándose en la misma causal.

La ley presume la reconciliación cuando ambos cónyuges cohabitan, después de haber cesado la habitación común.

162.- La excepción de compensación no es admisible en este juicio.

163.- La reconciliación anterior a la demanda debe oponerse con la contestación de ésta, como excepción previa; pero si fuere posterior a la contestación a la demanda, podrá oponerse en cualquier estado del juicio y se sustanciará en incidente por separado. Si el demandante niega que haya habido reconciliación, la prueba incumbe al demandado.

164.- Esta acción se prescribe a los seis meses de conocer el cónyuge el hecho que le da mérito; en caso de ignorancia, a los tres años de producido el hecho.

Si el hecho ha continuado o se ha reproducido, el término para la prescripción se contará desde que cesó o dejó de reproducirse.

La excepción sólo podrá oponerse por cualquiera de los cónyuges, en cualquier estado del juicio y hasta que los autos estén en situación de dictarse sentencia.

165.- En todos los juicios de separación intervendrá necesariamente el Ministerio Público desde su iniciación.

166.- Todas las especies de pruebas serán admitidas en estos juicios; pero la confesión o juramento de los cónyuges no será bastante para que la separación sea decretada.

Queda excluido el testimonio de los descendientes y ascendientes de los cónyuges; la circunstancia de otro parentesco no constituye tacha legal.

167.- En los autos no se dictará sentencia definitiva si antes no se acredita que se ha resuelto la situación de los hijos menores de edad o incapaces, en cuanto a su guarda, régimen de visitas y pensión alimenticia.

El tiempo que transcurra como consecuencia de lo dispuesto en el inciso precedente, no se computará a los efectos de la perención de la instancia.

168.- De la sentencia que pronunciare el Juez Letrado de Familia o quien hiciera sus veces, habrá recurso para el Tribunal de Apelaciones competente.

169.- Las sentencias dictadas en los juicios de separación, nunca pasan en autoridad de cosa juzgada, para el efecto de impedir que los cónyuges separados se reconcilien.

SECCION IV

EFECTOS DE LA SEPARACION DE CUERPOS (*)

(*) *Ver: artículo 189 de esta norma.*

170.- Comienzan entre los cónyuges los efectos de la separación desde el día en que pasare en autoridad de cosa juzgada la sentencia pronunciada en el juicio respectivo.

171.- DEROGADO por art. 151 Código del Niño y art. 350 del Código Gral. del Proceso (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986. La referencia se entiende realizada a las Leyes N° 9.342 y N° 15.982, de fechas 6 de abril de 1934 y 18 de octubre de 1988 respectivamente.*

172.- En todo tiempo podrán los cónyuges celebrar acuerdos relativos a la situación de los hijos, salvo que la separación personal fuera motivada por la causal comprendida en el inciso 5° del artículo 148. (*)

(*) *Ver: artículos 173 y 252 de esta norma.*

173.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez, de oficio o a instancia de cualquiera de los cónyuges, proveerá sobre la situación de los menores, teniendo en cuenta el interés de éstos y con arreglo a lo dispuesto en los artículos siguientes.

En todo caso se oirá al Ministerio Público.

174.- Salvo motivo grave, a juicio del Juez, los hijos que tengan menos de cinco años serán confiados a la madre.

En cuanto a los que tengan más de cinco años, el Juez proveerá contemplando las razones que expusieran los padres y la opinión del Fiscal. (*)

(*) *Ver: artículo 209 de esta norma.*

175.- DEROGADO por art. 151 Código del Niño y 350 Código Gral. del Proceso (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986. La referencia se entiende realizada a las Leyes N° 9.342 y N° 15.982 de fechas 6 de abril de 1934 y 18 de octubre de 1988 respectivamente.*

176.- Ambos cónyuges quedan solidariamente obligados al sostén y educación de sus hijos.

177.- Las convenciones que celebren los cónyuges y las resoluciones judiciales a que se refieren los artículos anteriores, sólo podrán recaer válidamente sobre la tenencia de los hijos, que podrán ser confiados a uno, a ambos cónyuges o a un tercero o repartida entre ellos, pero todos los demás derechos y deberes de la patria potestad corresponderán a los cónyuges con arreglo a las disposiciones del Título VIII de este Libro. (*)

(*) *Ver: artículo 275 de esta norma.*

178.- Cualquiera que sea la persona a quien se confíen los hijos, el padre y la madre conservan el derecho de vigilar su educación.

179.- El cónyuge que diere causa a la separación, perderá todo lo que se le hubiere dado o prometido por su consorte o por cualquiera otra persona, en consideración al matrimonio; el cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo prometido en su provecho. (Artículos 875 y 1031).

Si la separación fuera pronunciada contra los dos cónyuges, en caso de reconvencción, perderán ambos las ventajas referidas, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. (*)

(*) *Ver: artículo 180 de esta norma.*

180.- Las revocaciones impuestas por el artículo anterior serán inscritas de oficio en el Registro correspondiente y sólo después de la inscripción producen efectos contra terceros de buena fe.

181.- Por la separación de cuerpos se disuelve la sociedad legal de bienes, debiendo observarse lo dispuesto en el Título respectivo del Libro Cuarto.

182.- DEROGADO por artículo 4o. Decreto-Ley 14.766 del 18.4.78. (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

183.- El marido queda siempre en la obligación de contribuir a la congrua y decente sustentación de la mujer no culpable de la separación, con una pensión alimenticia que se determinará teniendo en cuenta las facultades del obligado y las necesidades de la mujer, de manera que ésta conserve en lo posible la posición que tenía durante el matrimonio. Cesará esta obligación si la mujer lleva una vida desarreglada. (*)

El cónyuge que se encuentre en la indigencia, tiene derecho a ser socorrido por su consorte, en lo que necesite para su modesta sustentación, aunque él sea el que ha dado motivo a la separación; pero en este caso, el

Juez, al reglar la asignación, tomará en cuenta la conducta actual del cónyuge que reclama el socorro.

(*) *Ver: artículo 194 de esta norma.*

184.- En las cuestiones a que diere lugar la separación de bienes, como efecto de la de cuerpos, se determinará la competencia del Juez por las reglas del procedimiento civil. (*)

(*) *Ver: artículo 212 de esta norma.*

185.- Transcurridos tres años de una sentencia de separación personal, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la conversión en divorcio basándose en la sentencia.

Solicitada la conversión, debe concederla el Juez, de acuerdo a la ley procesal.

SECCION V

DE LA DISOLUCION DEL MATRIMONIO

186.- El matrimonio se disuelve:

1°.- Por la muerte de uno de los cónyuges.

2°.- Por el divorcio legalmente pronunciado.

187.- El divorcio sólo puede pedirse:

1°.- Por las causas enunciadas en el artículo 148 de este Código.

2°.- Por el mutuo consentimiento de los cónyuges.

En este caso será necesario que los cónyuges comparezcan personalmente en el mismo acto ante el Juez Letrado de su domicilio, a quien expondrán su deseo de separarse. El Juez propondrá los medios conciliatorios que crea convenientes y si éstos no dieren resultado, decretará desde luego la separación provisoria de los cónyuges y las medidas provisionales que correspondan.

De todo se labrará acta que el Juez firmará con las partes y al final de la que fijará nueva audiencia con plazo de tres meses a fin de que comparezcan nuevamente los cónyuges a manifestar que persisten en sus

propósitos de divorcio. También se labrará acta de esta audiencia y se citará nuevamente a las partes que comparezcan en un nuevo plazo de tres meses, a fin de que hagan manifestación definitiva de su voluntad de divorciarse. Si así lo hicieren se decretará el divorcio, pero si los cónyuges no comparecieren a hacer la manifestación, se dará por terminado el procedimiento. (*)

3°.- Por la sola voluntad de la mujer.

En este caso la solicitante deberá comparecer personalmente ante el Juez Letrado de su domicilio, a quien expondrá su deseo de disolver el matrimonio. El Juez hará constar en acta este pedido y en el mismo acto fijará audiencia para celebrar un comparendo entre los cónyuges en el que se intentará la conciliación y se resolverá la situación de los hijos, si los hubiere, se fijará la pensión alimenticia que el marido debe suministrar a la mujer mientras no se decrete la disolución del vínculo y se resolverá sobre la situación provisoria de los bienes. Si no comparece el cónyuge contra quien se pide el divorcio, el Juez resolverá, oídas las explicaciones del compareciente, sobre la situación de los hijos y la pensión alimenticia decretando en todos los casos la separación provisoria de los cónyuges y fijando nueva audiencia con plazo de seis meses a fin de que comparezca la parte que solicita el divorcio a manifestar que persiste en sus propósitos. También se labrará acta de esta audiencia y se señalará una nueva, con plazo de un año, para que la peticionante concurra a manifestar que insiste en su deseo de divorciarse.

En esta última audiencia el Juez citará a los cónyuges a un nuevo comparendo e intentará de nuevo la conciliación entre ellos y comparezca o no el esposo, decretará siempre el divorcio, en caso de no conciliarse, sea cual fuere la oposición de éste.

Siempre que la que inició el procedimiento dejara de concurrir a alguna de las audiencias o comparendos prescriptos en este numeral, se la tendrá por desistida.

El divorcio por esta sola voluntad no podrá solicitarse sino después de haber transcurrido dos años de la celebración del matrimonio.

Cada cónyuge tendrá derecho, desde el momento que se decrete la separación provisoria, a elegir libremente su domicilio.

Cuando al cónyuge que no ha pedido el divorcio no se le pudiera citar personalmente o estuviera ausente del país, el Juez lo citará por edictos y si no compareciese vencido el término del emplazamiento, se le nombrará defensor de oficio. (*)

(*) *Ver: artículo 189 de esta norma.*

188.- Para la ley es nula toda renuncia o reserva que se establezca en las capitulaciones matrimoniales, respecto de la facultad de pedir el divorcio. (*)

(*) *Ver: artículos 1409 nral. 5º y 1939 de esta norma.*

189.- Lo dispuesto en las cuatro secciones anteriores rige en materia de divorcio, sin perjuicio de lo que se dispone especialmente en esta Sección.

En los casos previstos por los numerales 2º y 3º del artículo 187, se cumplirá también con lo previsto por el artículo 167.

190.- Disuelto legalmente el matrimonio, los cónyuges quedan facultados para contraer nueva unión.

Los cónyuges divorciados podrán volver a unirse entre sí, celebrando nuevo matrimonio; pero una vez realizado éste, el cónyuge demandante en el primer matrimonio no podrá deducir acción de divorcio que se funde en una causa de la misma naturaleza de la que sirvió para decretar el divorcio anterior.

No es aplicable al caso del inciso anterior lo dispuesto por el artículo 112 de este Código.

191.- Ejecutoriada la sentencia de divorcio, no podrá la mujer usar el apellido de su marido.

192.- La acción de divorcio se extingue absolutamente por la muerte de uno de los cónyuges.

193.- Ejecutoriada una sentencia de divorcio, será inmediatamente comunicada por el Juez de la causa a fin de que sea anotado al margen de las actas de matrimonio. En caso de matrimonio cuya celebración no se hubiere realizado civilmente o hubiese sido realizado en el extranjero por cuyas razones no estuviera registrado, se tomará nota en un libro especial.

194.- Cesa la obligación que impone al marido el artículo 183 inciso 1º de este Código, si la mujer contrae nuevas nupcias.

195.- El derecho sucesorio entre padres e hijos se ejercerá con arreglo al derecho común.

196.- DEROGADO por art. 1o. Ley No. 10.783 de 18.9.46 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

197.- Después del divorcio la afinidad que había creado el matrimonio sólo continúa como impedimento dirimente a los efectos del artículo 91 número 4° de este Código y tal como existía al pasar la sentencia en autoridad de cosa juzgada.

CAPITULO VI**SECCION I****DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO**

198.- Corresponde al Juzgado Letrado del domicilio de los cónyuges o del demandado en su caso, conocer de la nulidad de los matrimonios.
(*)

(*) *Ver: artículo 207 de esta norma.*

199.- No puede decirse de nulidad del matrimonio contraído sin el consentimiento libre de los cónyuges, sino por el contrayente, cuyo consentimiento no ha sido libre.

Si el vicio del consentimiento proviniese de violencia o de error sobre la persona, no será admisible la demanda de nulidad, cuando haya mediado cohabitación continuada por sesenta días, desde que el cónyuge adquirió su libertad absoluta o conoció el error de que había sido víctima.

200.- De los matrimonios contraídos con alguno de los impedimentos dirimientes de los números 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 91, puede decirse de nulidad, según el caso, por los mismos cónyuges, por cualquier interesado o por el Ministerio Público.

Esta disposición es aplicable al caso del matrimonio clandestino, esto es, que no se haya contraído públicamente, en presencia del funcionario competente y de acuerdo con las disposiciones de este Código.

201.- No podrá, sin embargo, decirse de nulidad del matrimonio contraído por individuos, de los cuales uno o los dos eran impúberes al tiempo de la celebración:

1°.- Cuando han pasado ciento ochenta días, desde que ambos cónyuges fueron legalmente púberes.

2°.- Cuando la mujer ha concebido antes de la pubertad legal o antes de vencerse los ciento ochenta días sobredichos.

202.- Si en el caso del número 3 del artículo 91, los cónyuges se excepcionan con la nulidad del primer matrimonio, debe juzgarse previamente sobre la calidad de ese matrimonio.

203.- En todo juicio de nulidad, aunque se siga a instancia de parte interesada, intervendrá el Ministerio Público.

Al Ministerio Público se le dará la voz del pleito, por rebeldía o abandono de los litigantes, hasta que recaiga sentencia que pase en autoridad de cosa juzgada.

204.- Si la nulidad es de las de que hablan los incisos 1, 3, 4, 5 y 6 del artículo 91, el Ministerio Público no sólo puede, sino que debe pedir que ella se pronuncie y obtener la separación, sin perjuicio de las penas impuestas por la ley.

Si el matrimonio no ha sido precedido del edicto requerido por los artículos 92 y 93 o se ha faltado a lo que respectivamente disponen los artículos 105 a 114 del Capítulo III de este Título, el Ministerio Público hará condenar al Oficial del Estado Civil de conformidad con el artículo 115 y a los contrayentes o a aquellos bajo cuya potestad obraron, en una multa proporcionada a sus facultades.

Esta disposición penal se entenderá aun en el caso de declararse válido el matrimonio.

205.- Durante el juicio de nulidad, el Juzgado decretará las medidas provisorias a que hubiere lugar, según los artículos 154 y siguientes.

206.- La sentencia será apelable para ante el superior inmediato, en la forma prescrita para las demás causas de su competencia.

SECCION II

EFECTOS DE LA DECLARACION DE NULIDAD

207.- Ejecutoriada la sentencia declarando la nulidad del matrimonio, el Juez a que se refiere el artículo 198 deberá dar los avisos que correspondan para que se haga la anotación en los libros respectivos.

208.- El matrimonio nulo, si ha sido celebrado con las solemnidades de la ley, produce los mismos efectos civiles que el válido, tanto respecto de los hijos, como del cónyuge que de buena fe y con justa causa de error lo contrajo; pero dejará de producir efectos civiles desde que falta la buena fe por parte de ambos cónyuges.

209.- Anulado el matrimonio, la situación de los hijos se regulará por lo dispuesto en el artículo 174.

210.- No obstante la mala fe por parte de ambos cónyuges, los hijos serán considerados siempre hijos legítimos. (*)

(*) *Ver: artículo 222 de esta norma.*

211.- La nulidad producirá, respecto de los bienes del matrimonio, los efectos siguientes:

1°.- Si hubo buena fe de parte de ambos cónyuges, cobrará cada uno sus bienes, incluso la mitad de gananciales y conservará las donaciones y ventajas pactadas al contraer el matrimonio.

2°.- Si hubo mala fe en los dos, se practicará lo mismo, salvo que las donaciones y ventajas pactadas serán nulas.

3°.- Si la mala fe estuvo de parte de uno solo, éste recobrará sus bienes propios, mas perderá la mitad de gananciales y todas las donaciones y ventajas matrimoniales. (*)

(*) *Ver: artículo 1949 de esta norma.*

212.- Lo dispuesto en el artículo 184 es aplicable al caso de haberse declarado nulo el matrimonio.

TITULO VI**DE LA PATERNIDAD Y FILIACION****CAPITULO I****DE LOS HIJOS LEGITIMOS**

213.- Se considerarán legítimos únicamente los hijos que procedan de matrimonio civil y los legitimados adoptivamente.

DEROGADO el inc. 2o. por Ley No. 15.855 de 25.3.87 (*)

() Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

214.- Viviendo los cónyuges de consuno, la ley considera al marido, padre de la criatura concebida durante el matrimonio.

215.- Se considera la criatura concebida durante el matrimonio, cuando nace fuera de los ciento ochenta días después de contraído o dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio. (*)

() Ver: artículos 216 y 222 de esta norma.*

216.- Sin embargo de lo dispuesto en el artículo precedente, el marido no podrá desconocer la paternidad de la criatura nacida antes de transcurridos ciento ochenta días de la celebración del matrimonio, en los siguientes casos:

1°.- Si el marido tuvo conocimiento de la preñez antes del matrimonio.

2°.- Si se probase que, estando presente, consintió que se expresara su apellido en la partida de nacimiento o bautismo.

3°.- Si la criatura no ha nacido viable, esto es, de vida y que haya vivido veinticuatro horas naturales. (*)

() Ver: artículo 835 nral. 1° de esta norma.*

217.- El marido podrá desconocer la criatura, si prueba que durante el tiempo transcurrido desde el tricentésimo día, hasta el centésimo octogésimo, antes del nacimiento de esa criatura, le era físicamente imposible tener acceso con su mujer. (*)

(*) *Ver: artículo 1604 de esta norma.*

218.- No podrá el marido desconocer la criatura, alegando su impotencia natural.

Tampoco podrá desconocerla por causa de adulterio, aunque sea confesado por la mujer, a menos que el nacimiento le haya sido ocultado, en cuyo caso podrá probar todos los hechos conducentes a justificar que no es hijo suyo. (*)

(*) *Ver: artículo 1604 de esta norma.*

219.- En los casos de divorcio, separación de cuerpos y nulidad de matrimonio, el marido podrá desconocer la criatura nacida trescientos días después que se realizó de hecho la separación provisoria, conforme al artículo 154 o la definitiva por sentencia que cause ejecutoria.

Pero, en tal caso, podrán proponerse todos los hechos conducentes a probar la paternidad del marido. (*)

(*) *Ver: artículo 1604 de esta norma.*

220.- En los casos en que el marido tiene derecho para desconocer la criatura, deberá hacerlo en juicio, dentro de dos meses contados desde que tuvo noticia del nacimiento de aquélla. (*)

(*) *Ver: artículos 221 y 1604 de esta norma.*

221.- Si el marido muere antes de hacer su reclamación, pero dentro del término hábil para deducirla, sus herederos tendrán cuatro meses para interponer la demanda, negando la paternidad del difunto. Este término comenzará desde el día en que el hijo haya sido puesto en posesión de los bienes del marido.

La acción se dirigirá en este caso y en el del artículo anterior, contra un curador *ad hoc* dado al hijo, si fuese menor. La madre será citada, pero no obligada a parecer en el juicio.

No hay lugar a demanda, cuando el padre hubiese reconocido al hijo en su testamento o en otro instrumento público. (*)

(*) *Ver: artículo 1604 de esta norma.*

222.- La legitimidad del hijo, cuya madre no fuere dudosa, puede ser contestada:

O por no haber habido matrimonio entre sus padres.

O por ser nulo o haberse anulado el matrimonio.

O por haber sido adulterina la concepción del hijo nacido *dentro* de los ciento ochenta días de la celebración del matrimonio.

O por haber nacido *fuera* de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio. (Artículo 215).

La contestación de legitimidad pertenece a cualquiera persona que tenga interés actual en deducirla. (**)

DEROGADO el inc. 4o. en virtud del nuevo texto del art. 210 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

(**) *Ver: artículo 1604 de esta norma.*

223.- La mujer que, muerto el marido, se creyese embarazada, debe denunciarlo a los que serían herederos del difunto, si no existiera el hijo póstumo.

Los interesados pueden pedir todas las medidas que fuesen necesarias para asegurarse de que el parto es efectivo y ha tenido lugar dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio. (*)

(*) *Ver: artículos 274 y 1604 de esta norma.*

224.- La filiación de que el hijo está en posesión, aunque sea conforme a la partida de nacimiento o bautismo, puede ser contestada en razón de parto supuesto o por haber habido sustitución del verdadero hijo o, en general, por no ser la mujer la madre propia del hijo que pasa por suyo. (*)

(*) *Ver: artículo 1604 de esta norma.*

225.- Durante la vida del hijo, sólo a él compete la acción para reclamar su filiación legítima. Sus herederos y descendientes podrán continuar la acción intentada por él o intentarla cuando el hijo hubiese muerto en la menor edad.

Esta acción deberá ser dirigida contra el padre y madre conjuntamente y, por fallecimiento de éstos, contra sus herederos. (*)

(*) *Ver: artículo 1604 de esta norma.*

226.- El derecho de reclamar la filiación o de contestarla o de contestar la legitimidad, no se extingue ni por prescripción ni por renuncia expresa o tácita; pero los derechos pecuniarios ya adquiridos pueden renunciarse y prescribirse. (*)

(*) *Ver: artículo 1604 de esta norma.*

CAPITULO II

DE LOS HIJOS NATURALES

SECCION I

DE LA LEGITIMACION DE LOS HIJOS NATURALES

227.- Son hijos naturales los nacidos de padres que, en el acto de la concepción, no estaban unidos por matrimonio.

No tienen, sin embargo, la calidad legal de hijos naturales, sino cuando son reconocidos o declarados tales, con arreglo a lo dispuesto en la Sección siguiente.

Los hijos naturales nacidos durante el matrimonio de los padres no podrán ser reconocidos por ninguno de éstos hasta tanto no se disuelva ese matrimonio, a no ser que el reconocimiento se haga en testamento cerrado o se verifique después de sentencia judicial que haga lugar al desconocimiento de la paternidad del marido.

Tampoco se admitirá el reconocimiento de hijo ilegítimo, aun después de disuelto el matrimonio, cuando ese reconocimiento se pretenda hacer a favor de una persona que tenga la posesión notoria de hijo legítimo, sin perjuicio de las acciones que para contestar esa filiación admite el derecho común.

228.- Los hijos naturales pueden solamente legitimarse por subsiguiente matrimonio válido de sus padres.

229.- En los casos de legitimación de hijos naturales por subsiguiente matrimonio válido de sus padres, la inscripción de los mismos como legítimos se hará en idéntica forma a la de los hijos nacidos durante el matrimonio, en el Registro de Nacimientos. El acta de matrimonio de los padres, la de inscripción del hijo legítimo y la anotación en la libreta de Organización de Familia deberán extenderse sin mención ni referencia alguna a la legitimación, de manera que nada las diferencie de las comunes de matrimonio ni de las de inscripción ni anotación de hijos legítimos.

Presentada la partida de matrimonio respectiva y la de reconocimiento del hijo natural, el Oficial del Estado Civil efectuará la inscripción en la forma establecida en el inciso anterior. Realizada ésta, quedarán sin valor las partidas y constancias preexistentes, sean de nacimiento o de reconocimiento y prohibida su exhibición, así como la expedición de testimonio, salvo en los casos en que se dispusiere lo contrario, con citación e intervención de los interesados.

En el caso de simple inscripción de hijo natural no reconocido, la presentación de la partida de matrimonio deberá ser hecha por los padres.

En lo demás se estará a lo dispuesto por la ley 12.689 de 29 de diciembre de 1959.

230.- La legitimación puede tener lugar aun en favor de hijos fallecidos, que han dejado descendientes legítimos o naturales y en tal caso les aprovecha.

231.- Los hijos legitimados por subsiguiente matrimonio gozan de los mismos derechos que si hubieran nacido en el matrimonio.

232.- La legitimación no tiene efecto retroactivo. Surte sus efectos desde que existe el matrimonio que la produce.

SECCION II

DEL RECONOCIMIENTO DE LOS HIJOS NATURALES Y DE LA INVESTIGACION DE LA FILIACION NATURAL

233.- El reconocimiento de un hijo natural puede hacerse expresa o tácitamente. El reconocimiento expreso debe hacerse por escritura pública o por

testamento o ante el Oficial del Estado Civil en el acto de la inscripción del nacimiento o después de verificada.

Cuando se efectúe el reconocimiento ante el Oficial del Estado Civil, si la persona que lo hace no fuese de conocimiento del funcionario, deberá justificar su identidad con dos testigos de conocimiento de éste, todo lo cual deberá constar en el acta.

Cuando se haga el reconocimiento después de la inscripción del nacimiento, deberá acompañarse la partida respectiva.

El reconocimiento tácito es el que resulta de la constatación, ante el Juez competente, de la posesión notoria del estado de hijo natural de conformidad con los artículos 44, 46, 47 y 48 de este Código en lo que fueren aplicables.

234.- El hijo natural podrá ser reconocido por su padre y su madre de común acuerdo o por uno solo de ellos.

En el segundo caso, el reconocimiento no tendrá efecto, sino relativamente al que lo ha practicado.

235.- El menor que no sea casado, emancipado o habilitado de edad, no podrá reconocer válidamente a un hijo natural.

236.- Cuando el padre o la madre reconozca separadamente un hijo natural, no podrá revelar en el acto del reconocimiento el nombre de la persona con quien lo hubo, a menos que ésta ya lo hubiese reconocido.

237.- DEROGADO por Ley 16.603 de 19.10.94 (*)

() Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986. La referencia se entiende realizada a la Ley N° 16.603 de fecha 19 de octubre de 1994, artículo 3.*

238.- El que fuere reconocido como hijo natural, podrá quitar al reconocimiento sus efectos legales toda vez que lo repudie dentro del año en que tuvo conocimiento del hecho, si es mayor de edad y dentro del mismo plazo y condición al llegar a la mayoría de edad. Sin perjuicio de este derecho, podrá impugnar el reconocimiento del padre o la madre, lo propio que todos los que

en ello tengan interés actual, así como podrán también, todos los que se hallen en esta condición, oponerse a las reclamaciones de parte del hijo.

Podrá el hijo o el Fiscal respectivo, en su caso, pedir en cualquier tiempo se quite al reconocimiento, los efectos legales, únicamente en lo que se refiere a la patria potestad, cuando haya mediado la causal que establece el artículo 285, inciso 7º de este Código.

239.- El reconocimiento del hijo natural, sea hecho por escritura pública o por testamento, es irrevocable y no admite condiciones, plazos o cláusulas de cualquier naturaleza, que modifiquen sus efectos regulares, sin ser necesaria la aceptación por parte del hijo ni la notificación a éste, sin perjuicio de lo que al respecto establece la Ley de Registro de Estado Civil.

240.- Si alguno fuese reconocido como hijo natural por más de un hombre como su padre, o por más de una mujer como su madre, no habrá prueba de paternidad o de maternidad, mientras que uno de estos reconocimientos contradictorios no fuese excluido por sentencia que cause ejecutoria.

Se atenderá en tal caso el reconocimiento que tuviese a favor más presunciones o probabilidades.

241.- La paternidad ilegítima puede ser judicialmente declarada:

1º.- Si ha habido rapto o violación, cuando la época de la concepción coincida con el rapto o violación.

2º.- En el caso en que el marido haya desconocido la paternidad del hijo, obteniendo sentencia ejecutoriada a su favor.

3º.- Cuando el padre haya reconocido por escrito la paternidad que se reclama.

4º.- Cuando el pretendido padre haya vivido en concubinato notorio con la madre durante el período de la concepción.

5º.- Cuando el padre haya provisto al mantenimiento, educación y vestido del hijo, de manera pública y continuada por un año, por lo menos, invocando su calidad de padre.

6º.- En el caso de seducción de la madre, cumplida con abuso de autoridad o con promesa de matrimonio, en época contemporánea de la concepción y siempre que para el segundo caso exista principio de prueba por escrito.

Sin perjuicio de las excepciones del derecho común, el demandado podrá excepcionarse contra la acción, probando:

A) Que durante el período legal de la concepción la madre observaba notoriamente costumbres deshonestas o mantenía comercio con otro individuo.

B) Que durante el período de la concepción le ha sido físicamente imposible tener acceso con la madre.

La acción no pertenece sino al hijo, pero durante su menor edad sólo podrá ser deducida por la madre o por su representante legal, salvo que esté habilitado de edad. Si la madre es menor, se la proveerá de curador especial. La madre sólo podrá iniciar la acción dentro de los dos años de producido el alumbramiento y el tutor dentro de los seis meses de su nombramiento. En los casos de los números 4º y 5º estos plazos empezarán a correr desde la cesación de los hechos a que se refieren y en el caso del número 2º, desde que quede ejecutoriada la sentencia que haga lugar al desconocimiento de la paternidad. Si la acción no ha sido intentada durante la menor edad del hijo, éste podrá deducirla dentro de los cinco años de su mayor edad.

Cuando el demandado sea absuelto, si el Juez establece que el actor ha procedido con intención dolosa, se pasarán los autos al Juzgado competente en materia penal que corresponda.

Cuando el presunto hijo o su representante legal ejercite conjuntamente con la acción que este artículo le acuerda, la de petición de herencia, el Actuario, bajo la pena de 100 unidades reajustables de multa lo comunicará dentro de quince días al Registro correspondiente para la inscripción que corresponda, que producirá los efectos enunciados en el artículo 685. Si entre los demandados hubiese herederos, testamentarios o de los llamados a la herencia por el artículo 1025 o cónyuge con derecho a gananciales o a porción conyugal, cualquiera de ellos podrá obtener que se limite la interdicción a un bien o lote de bienes hereditarios cuyo valor cubra ampliamente la legítima del actor, quien sólo sobre ese bien o lote podrá perseguir el pago de su haber hereditario en caso de que le sea reconocida la filiación invocada y sin perjuicio de la acción personal que le corresponda por restitución de frutos. Cuando por la naturaleza de los bienes sea imposible separar parte de ellos para garantizar la efectividad del derecho hereditario invocado, cualquiera de los demandados a que se refiere el párrafo anterior podrá pedir que en vez de limitarse la interdicción se cancele totalmente, constituyendo garantía hipotecaria o prendaria que asegure al actor el pago de su legítima y de sus intereses. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 45 nral. 8º.*

242.- Se admite la investigación de la maternidad, cuando no se trate de atribuir el hijo a una mujer casada.

Si la demandada negare ser suyo el hijo, será admitido el demandante a probarlo con testimonios fehacientes que establezcan el hecho del parto y la identidad del hijo.

La partida de nacimiento o bautismo no hace por sí sola prueba alguna.

242-1.- El padre o madre naturales declarados judicialmente tales de acuerdo a los artículos anteriores quedan obligados en los términos del artículo 277.

TITULO VII

DE LA ADOPCION

243.- La adopción se permite a toda persona que tenga más de treinta años de edad, cualquiera sea su estado civil y siempre que tenga por lo menos veinte años más que el adoptado.

244.- El tutor no puede adoptar al menor hasta que hayan sido aprobadas judicialmente las cuentas del cargo.

245.- Nadie puede ser adoptado por más de una persona, a no ser por dos cónyuges.

Ninguno de los cónyuges puede adoptar o ser adoptado sin el consentimiento del otro, salvo que estuviere impedido de manifestar su voluntad o que exista sentencia de separación de cuerpos.

Realizada la adopción, la separación o divorcio ulterior de los cónyuges no les exime de sus obligaciones con respecto al adoptado, si fuese menor, aun cuando fueran privados del ejercicio de la patria potestad o de su tenencia.

246.- No valdrá la adopción de los hijos ilegítimos hecha por el padre o por la madre.

247.- Para la adopción de una persona mayor de dieciocho años se requiere su expreso consentimiento.

Cuando el adoptado sea un demente o sordomudo que no sepa darse a entender por escrito, prestará el consentimiento su representante legal.

Si se trata de un menor de edad que tenga padre y madre, es necesario el consentimiento de ambos padres. Si uno ha muerto o está impedido de manifestar su voluntad el consentimiento del otro es suficiente.

Si los padres están divorciados o separados basta el consentimiento de aquel que tenga la guarda del menor.

Cuando el menor no tenga padres en ejercicio de la patria potestad o ambos estén impedidos de manifestar su voluntad, deberá prestar el consentimiento su representante legal.

El consentimiento deberá ser otorgado en la escritura pública de adopción, pudiendo en el extranjero efectuarse ante los agentes diplomáticos o consulares uruguayos. (*)

(*) *Ver: artículo 248 de esta norma.*

248.- La adopción ha de ser necesariamente hecha por escritura pública, aceptada por el adoptado o sus representantes legales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, debiendo ser inscrita dentro de treinta días contados desde el otorgamiento de la escritura en un libro especial que llevará al efecto la Dirección General del Registro de Estado Civil y deberá constar, además, al margen del acta de nacimiento.

La omisión de la inscripción será penada con multa al escribano autorizante de la escritura, de 12 a 50 unidades reajustables, a más de no surtir efecto la adopción hasta después de ser inscrita.

Una vez inscrita surtirá efecto desde la fecha de su otorgamiento.

Cuando se trate de la adopción de un menor de edad, ningún escribano podrá autorizar la escritura respectiva sin previa autorización del Instituto Nacional del Menor en que se acredite:

1°.- La idoneidad moral y la capacidad del adoptante probada por todos los medios de investigación que el Instituto Nacional del Menor juzgue necesarios.

2°.- Que el adoptante ha tenido durante dos años bajo su protección y cuidado al adoptado.

249.- El adoptado continúa perteneciendo a su familia natural donde conserva todos sus derechos.

Los padres que consienten la adopción pierden la patria potestad que pasa al adoptante.

En caso de interdicción, de desaparición comprobada judicialmente, de muerte del adoptante o de revocación de la adopción, producida durante la menor edad del adoptado, la patria potestad pasa de pleno derecho a los padres de éste.

249-1.- La adopción confiere el apellido del adoptante al adoptado agregando éste a su apellido propio el del primero. Si el adoptante y el adoptado tienen el mismo apellido patronímico no se modificará el apellido del adoptado. Si el adoptado es un hijo natural el nombre del adoptante se le puede conceder pura y simplemente, previo consentimiento de las partes, en el acta misma de adopción, quedando anulado el apellido propio del adoptado.

250.- La adopción sólo establece relaciones jurídicas entre el adoptante y el adoptado y no entre cualquiera de ellos y la familia del otro.

No produce otros efectos que los declarados expresamente en este Código y son:

1°.- Obligación del adoptado de respetar y honrar al adoptante.

2°.- Obligación recíproca de prestarse alimentos; no obstante los ascendientes y descendientes del adoptado no están obligados a suministrar alimentos a éste mientras los pueda obtener del adoptante, observándose en cuanto sea aplicable, lo dispuesto en la Sección I Capítulo IV del Título V.

3°.- Derecho a heredarse sin testamento en los casos y con la distinción que se determina en el Título *De la Sucesión Intestada*.

251.- La revocación de la adopción cuando existan motivos graves puede solicitarse por el adoptante o el adoptado ante el Juzgado competente, con apelación ante el Tribunal respectivo.

La revocación hace cesar para el porvenir todos los efectos de la adopción.

TÍTULO VIII

DE LA PATRIA POTESTAD (*)

(*) *Ver: artículos 1280 y 1939 de esta norma.*

CAPÍTULO I

DE LA PATRIA POTESTAD EN LOS HIJOS LEGÍTIMOS (*)

(*) *Ver: artículo 275 de esta norma.*

252.- La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que la ley atribuye a los padres en la persona y en los bienes de sus hijos menores de edad.

La patria potestad será ejercida en común por los padres, sin perjuicio de las resoluciones judiciales que priven, suspendan o limiten su ejercicio o lo confieran a uno de ellos y de los convenios previstos en el artículo 172.

Cuando no se obtenga el acuerdo de los padres, cualquiera de ellos podrá recurrir ante el Juez competente.

253.- Cualquiera de los padres podrá solicitar la intervención del Juez Letrado competente para corregir o prevenir los actos o procedimientos del otro que considere perjudiciales para la persona o bienes del menor, con arreglo a lo determinado en los artículos 288 y siguientes de este Código.

254.- DEROGADO por resultar inconciliable con la igualdad preconizada por la Ley No. 10.783 (*)

() Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

255.- Si el progenitor que ha perdido la patria potestad contrajere nuevo matrimonio, su cónyuge podrá pedir al Juez, en caso de nacer hijos, que se le otorgue la patria potestad exclusiva sobre éstos, de acuerdo a la ley procesal.

()*

() Ver: artículo 299 de esta norma.*

256.- Los hijos, cualquiera que sea su estado, edad y condición deben honrar y respetar a su padre y a su madre.

257.- Los hijos menores de edad no pueden, sin permiso de sus padres, dejar la casa paterna o aquella en que sus padres los han puesto; debiendo en todos los casos ser auxiliada la autoridad doméstica por la pública, al efecto de hacer volver los hijos al poder y obediencia de sus padres.

258.- Los padres dirigen la educación de sus hijos y los representan en todos los actos civiles.

259.- Los padres pueden exigir de los hijos que están en su poder, que les presten los servicios propios de su edad, sin que ellos tengan derecho a reclamar recompensa alguna.

260.- Si el hijo de menor edad ausente de la casa paterna, no pudiese ser atendido por sus padres con lo que necesita por razón de alimentos (Artículo 121), las suministraciones que con ese objeto se le hagan por cualquier persona, se juzgarán hechas con autorización de aquéllos.

El que haga las suministraciones deberá dar noticia de ellas a los padres lo más pronto posible.

Toda omisión voluntaria en ese punto, hará cesar la responsabilidad de los padres.

261.- Los padres tienen la facultad de corregir moderadamente a sus hijos y cuando esto no bastare, podrán ocurrir aun verbalmente al Juez competente para su internación en un establecimiento destinado a ese objeto. El Juez, atendiendo las circunstancias del caso, dispondrá lo que estime conveniente. (*)

(*) *Ver: artículo 384 de esta norma.*

262.- Los empleados públicos menores de edad son considerados como mayores en lo concerniente a sus empleos.

263.- Los hijos no pueden demandar a sus padres sino por sus intereses propios y previa licencia del Juez, quien, al otorgarla, proveerá al hijo de curador *ad litem*.

264.- No es necesaria la intervención paterna para proceder criminalmente contra los hijos, pero los padres serán obligados a suministrarles los auxilios que necesiten para su defensa.

265.- La patria potestad no se opone a la facultad de testar de que goza el hijo, en llegando a la edad establecida en el Título *De la sucesión testamentaria*. (Artículo 831, inciso 1°).

266.- Los padres tienen el usufructo de todos los bienes de sus hijos legítimos que estén bajo su patria potestad, con excepción de los siguientes:

1°.- De los bienes que los hijos adquieran por sus servicios civiles, militares y eclesiásticos.

2°.- De los que adquieran por su trabajo o industria.

3°.- De los que adquieran por caso fortuito.

4°.- De los adquiridos por los hijos a título de donación, herencia, o legado, cuando el donante o testador ha dispuesto expresamente que el usufructo corresponda al hijo.

5°.- De las herencias o legados que hayan pasado al hijo por indignidad del padre o madre o por haber sido estos desheredados.

Los bienes comprendidos bajo los números 1° y 2°, forman el peculio *profesional o industrial del hijo*; aquellos en que el hijo tiene la propiedad y los padres el derecho de usufructo, forman el peculio *adventicio ordinario* y los comprendidos bajo los números 3°, 4° y 5° el peculio *adventicio extraordinario*. (*)

(*) *Ver: artículo 495 de esta norma.*

267.- Los padres son los administradores legales de los bienes de los hijos que están bajo su potestad, tengan o no el usufructo de los mismos. Podrán acordar que la referida administración sea ejercida por uno solo de ellos, sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley.

Los convenios que se celebren al efecto, sus modificaciones o su rescisión, se inscribirán en la respectiva sección del Registro correspondiente, sin cuyo requisito no surtirán efecto alguno contra terceros.

En caso de desacuerdo entre los padres, cualquiera de ellos podrá ocurrir ante el Juez competente, observándose el trámite del proceso extraordinario y la resolución que recaiga se comunicará al Registro respectivo dentro del quinto día de quedar ejecutoriada a los fines previstos en el inciso anterior.

El hijo tendrá la administración del peculio *profesional o industrial*, para cuyos efectos se le considera como emancipado o habilitado de edad. (Artículo 249 del Código del Niño).

Tampoco tienen los padres la administración de los bienes donados o dejados por testamento a los hijos bajo condición de que aquéllos no los administren.

268.- La condición de que no administre alguno de los padres impuesta por el donante o testador, no se entiende que le priva del usufructo ni la que le priva del usufructo se entiende que le quita la administración, a menos que se exprese lo uno y lo otro por el donante o testador.

269.- Los padres tienen, relativamente a los bienes del hijo, en que la Ley les concede el usufructo, las obligaciones de todo usufructuario, excepto la de afianzar.

Respecto de aquellos bienes en que no se les concede el usufructo y sí, la administración, son responsables para con el hijo de la propiedad y los frutos. (*)

(*) *Ver: artículos 495 y 515 nral. 1º de esta norma.*

270.- En los noventa días subsiguientes al fallecimiento del padre o de la madre, el sobreviviente debe hacer inventario judicial de los bienes del matrimonio y determinarse en él los bienes que correspondan a los hijos, so pena de no tener el usufructo de los bienes de los hijos menores.

271.- Prohíbese a los padres:

1º.- Enajenar los bienes raíces de los hijos o las rentas constituidas sobre la deuda nacional, si no es por causas de necesidad o utilidad evidente de dichos hijos y previa autorización del Juez, con audiencia del Ministerio Público.

2º.- Constituir, sin igual autorización, derechos reales sobre los bienes de los hijos o transferir derechos reales que pertenecen a los hijos sobre los bienes de otros.

3º.- Comprar por sí mismos ni por interpuesta persona, bienes de cualquier clase de sus hijos, aunque sea en remate público.

4º.- Constituirse cesionarios de créditos, derechos o acciones contra los hijos, a no ser que las cesiones resulten de una subrogación legal.

5º.- Hacer remisión voluntaria de los derechos de los hijos.

6º.- Hacer transacciones privadas con sus hijos, sobre la herencia del cónyuge premuerto o sobre herencia en que sean con ellos coherederos o legatarios.

7º.- Obligar a sus hijos como fiadores de ellos o de terceros.

Los actos de los padres contra las prohibiciones de este artículo, son nulos.

272.- No valdrán tampoco las enajenaciones que los padres hicieren, sin previa autorización judicial, de los ganados de cualquier clase que forman los establecimientos rurales, salvo las ventas que pueden hacer los usufructuarios que tienen el usufructo de rebaños.

272-1.- Para contratar sociedad comercial o adquirir participaciones, cuotas sociales o acciones en sociedades comerciales por sus hijos o si éstos las

recibieren por herencia, legado o donación o para celebrar o participar con ellos en esta clase de sociedades, los padres estarán a lo establecido en la ley comercial. (*)

(*) *Ver: artículo 394-1 de esta norma.*

273.- El Juez, a instancia de los parientes o del Ministerio Público podrá quitar a uno o ambos padres la administración de los bienes de los hijos, probándose que es ruinoso al haber de éstos.

En el caso de que le fuere quitada a ambos padres, el Juez encargará la administración a un curador especial (artículo 458) y éste entregará a los padres el sobrante de rentas de aquellos bienes en que la ley les da el usufructo, deducidos los gastos de administración.

274.- Si alguno falleciere, dejando encinta a su mujer, conservará ésta la administración de los bienes como si ya hubiera nacido la criatura; y aunque no nazca viable o resulte que la mujer no ha estado embarazada, no será obligada a restituir a los que fueren herederos (artículo 223) lo que hubiere consumido por razón de alimentos o en gastos del parto.

CAPITULO II

DE LA PATRIA POTESTAD EN LOS HIJOS NATURALES

275.- Reconocidos legalmente los hijos naturales, se verifica a su respecto la patria potestad en los términos expresados en el anterior capítulo, con las excepciones de los artículos siguientes.

La tenencia de los hijos naturales reconocidos por el padre y la madre se registrará por lo dispuesto en el artículo 177.

276.- La ley no concede a los padres naturales el usufructo de los bienes de sus hijos.

No hacen más que administrarlos, con la obligación de rendir cuentas.

277.- Incumbe al padre o madre que ha reconocido al hijo natural, la obligación alimentaria y las demás prestaciones establecidas en el artículo 121.

278.- La persona casada que antes de su matrimonio o durante éste, ha reconocido un hijo natural habido de otro que su cónyuge, no puede traerlo a su casa, sin el consentimiento de su consorte.

279.- La acción de reclamar alimentos es recíproca entre padres e hijos naturales y tendrá lugar siempre que unos u otros se hallaren en circunstancias de no poder proveer a sus necesidades.

En defecto o imposibilidad de los padres, se extiende la obligación de alimentos en favor del menor o incapaz, a sus ascendientes. (*)

(*) *Ver: artículo 284 de esta norma.*

CAPITULO III

DE LOS MODOS DE ACABARSE, PERDERSE O SUSPENDERSE LA PATRIA POTESTAD (*)

(*) *Ver: artículo 328 nral. 2º de esta norma.*

280.- La patria potestad se acaba:

1º.- Por la muerte de los padres o de los hijos.

2º.- Por la mayor edad de los hijos, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título *Del Matrimonio*.

Se fija la mayor edad en los dieciocho años cumplidos.

3º.- Por el matrimonio legítimo de los hijos.

Los menores que contrajeran matrimonio con anterioridad a los dieciocho años (inciso primero del artículo 91) requerirán autorización judicial para realizar los actos a que refieren los artículos 309 y 310 hasta que hayan cumplido dicha edad. (*) (**)

(*) *La redacción de este artículo fue dada por Ley N° 16.719 de fecha 11 de octubre de 1995, artículo 1.*

(**) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.719 de fecha 11 de octubre de 1995, artículo 3; Decretos Nos. 306/996 de fecha 30 de julio de 1996 y 455/001 de fecha 22 de noviembre de 2001 (Marco Regulatorio de la Asistencia Médica, artículo 190)*

281.- La emancipación debe hacerse por escritura pública en que los padres o el que ejerce la patria potestad en su caso, declaren emancipar al hijo y éste consienta en ello.

No valdrá la emancipación si no es autorizada por el Juez competente, con audiencia del Ministerio Público.

La emancipación, válidamente hecha, es irrevocable.

282.- Por el matrimonio adquieren los hijos el usufructo de todos sus bienes.

En el caso de emancipación, pueden los padres emancipantes reservarse la mitad del usufructo, hasta la mayor edad de los hijos.

283.- El matrimonio y la emancipación producen el efecto de poder ejercer los hijos menores todos los actos de la vida civil, excepto aquellos que por este Código se prohíben a los menores *habilitados de edad*.

Por lo que hace al emancipado, está además sujeto a las restricciones expresadas en el Título *Del matrimonio*. (*)

(*) *Ver: artículo 2116 de esta norma.*

284.- Los padres perderán, de pleno derecho y sin que sea necesario declaración expresa al respecto, la patria potestad sobre sus hijos en los casos siguientes:

1°.- Si fueren condenados por el delito previsto por el artículo 274 inciso 3° del Código Penal contra la persona de cualquiera de sus descendientes.

2°.- Si fueren condenados a pena de penitenciaría como autores o cómplices de un delito contra la persona de uno o varios de sus hijos.

3°.- Si fueren condenados dos veces con pena de prisión, como autores o cómplices de un delito contra la persona de uno o varios de sus hijos.

El Actuario del Juez que hubiere conocido en primera instancia, comunicará de oficio y dentro del término de cinco días al Instituto Nacional del Menor y al Ministerio Público las sentencias ejecutoriadas a que se refiere este artículo, bajo pena de multa de hasta 25 unidades reajustables.

La pérdida de la patria potestad comprende la de todos los derechos a ella inherentes, pero no la de las obligaciones establecidas en los artículos 118 y 279 de este Código.

Tampoco afecta a las relaciones jurídicas emanadas del derecho sucesorio. (*)

(*) *Ver: artículos 285, 288, 352 nral. 8°, 362 y 901 nral. 1° de esta norma.*

285.- Los padres podrán perder la patria potestad a instancia de parte, previa sentencia del Juez competente, en los casos siguientes:

1°.- Si fueren condenados a penitenciaría como autores o cómplices de un delito común.

2°.- Si por dos veces fueron condenados por sustitución, ocultación, atribución de falsa filiación o paternidad, exposición o abandono de niños; o en el caso de mendicidad establecido por el artículo 348-1 inciso 1°, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior.

3°.- Si fueron condenados por cualquiera de los delitos del artículo 274 del Código Penal, con excepción del caso previsto en el numeral 1° del artículo 284.

4°.- Si fueron condenados por dos veces a pena de prisión como autores o cómplices de delitos a que hubieren concurrido con sus hijos.

5°.- Los que fuera de los casos expresados en este artículo y el anterior, excitaren o favorecieren en cualquier forma la corrupción de menores.

6°.- Si por sus costumbres depravadas o escandalosas, ebriedad habitual, malos tratamientos o abandono de sus deberes, pudieren comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de sus hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la ley penal.

7°.- Si se comprobare en forma irrefragable que durante un año han hecho abandono culpable de los deberes inherentes a su condición de tales, no prestando a sus hijos los cuidados y atenciones que les deben.

El Ministerio Público y el Juez competente apreciarán la prueba, atendida la situación de los padres y muy especialmente las conveniencias del menor.

Sólo por causas excepcionales acreditadas debidamente, el Juez podrá conceder a los padres la readquisición de los derechos de que hubieran sido privados por la causal expresada en el presente numeral séptimo. (*)

8°.- Cuando hicieren abandono de sus hijos y a juicio del Instituto Nacional del Menor sea posible la inmediata entrega en tenencia con fines de posterior legitimación adoptiva o adopción.

Para que se configure el abandono será necesario comprobar que los padres rehusan el cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad en términos tales, que hagan presumir fundadamente el abandono definitivo.

9°.- Cuando no se conociere quienes son los padres y éstos no comparecieren a hacerse cargo de sus deberes en el término de quince días, luego que hubieren expuesto al niño, abandonándolo en lugar público o privado.

Es aplicable a los casos de este artículo lo dispuesto en cuanto a los derechos y obligaciones de los padres y demás, en la última parte del artículo 284. (**)

(*) **Ver:** artículos 289 y 901 nral. 1° de esta norma.

(**) **Ver:** artículos 288, 352 nral. 8° y 362 de esta norma.

286.- Cuando la conducta de los padres con sus hijos no bastase, según el criterio de los Jueces, para declarar la pérdida de la patria potestad, podrán limitar ésta hasta donde lo exija el interés bien entendido de los hijos. (*)

(*) *Ver: artículos 288 y 901 nral. 1º de esta norma.*

287.- Son nulos con respecto al menor o menores los actos y contratos de los padres que hubieren perdido la patria potestad, posteriores a las sentencias a que se refieren los artículos precedentes. Los anteriores podrán ser anulados a petición de parte, pero la incapacidad de los padres no podrá retrotraerse a una fecha anterior a la inscripción de la demanda en el Registro respectivo. Son igualmente nulos los actos posteriores a la inscripción de la interdicción provisoria que se decretare, la que, así como su levantamiento, deberán inscribirse.

Deberán inscribirse también, en la forma y plazos establecidos por las leyes que lo rigen, sin lo cual no causarán efectos contra terceros y el Juez así lo dispondrá de oficio, todas las sentencias ejecutoriadas en los casos de los artículos anteriores, que traigan como consecuencia la incapacidad legal de los padres para administrar los bienes de sus hijos, así como los de la limitación o suspensión de la patria potestad y los de rehabilitación en la capacidad.

El Juez o Actuario que no cumpliera con el requisito de ordenar o enviar las respectivas comunicaciones al Registro, será responsable de los daños y perjuicios a que hubiere lugar a favor del menor o menores. (*)

(*) *Ver: artículo 901 nral. 1º de esta norma.*

288.- Es Juez competente para conocer en los juicios sobre pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad, en los casos previstos en los artículos 284-1, 285, 286 y 295, el del domicilio del demandado y cuando el de éste no fuere conocido, el de la residencia del menor. (**)

Redacción actual adecuada al texto del artículo 143 del Código del Niño. (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986. La Referencia se entiende realizada a la Ley Nº 9.342 de fecha 6 de abril de 1934.*

(**) *Ver: artículo 901 nral. 1º de esta norma.*

289.- Sólo podrán deducir la acción para provocar la pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad el padre, la madre, los ascendientes, los colaterales dentro del cuarto grado y el Ministerio Público.

Sin embargo podrán deducirla los tenedores del niño, siempre que promuevan el juicio con fin de legitimarlo adoptivamente, invocando la causal prevista en el numeral 7° del artículo 285 y el Instituto Nacional del Menor en los casos previstos por la ley.

Los padres deberán ser oídos en todos los casos. (*)

(*) *Ver: artículos 341 y 901 nral. 1° de esta norma.*

290.- El Ministerio Público siempre que tenga conocimiento de alguno de los hechos que puedan dar lugar a la pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad, podrá hacer levantar una información sumaria ante el Juez Letrado competente o ante el Juez de Paz del domicilio o residencia del menor. El Juez competente podrá de oficio o a instancia del Ministerio Público, antes o después de recibida la información aludida, tomar las medidas que crea convenientes en defensa de la persona y bienes del menor. (*)

(*) *Ver: artículo 901 nral. 1° de esta norma.*

291.- La demanda formulada con arreglo a la ley procesal, se sustanciará por el procedimiento extraordinario.

La intervención del Ministerio Público será preceptiva y con las mismas facultades de las partes.

Cuando la acción no hubiere sido deducida por el Ministerio Público, no podrá desistirse de ella sin audiencia del mismo, el cual podrá continuarla cuando lo crea procedente. (*)

(*) *Ver: artículos 292, 361 y 901 nral. 1° de esta norma.*

292.- La acción de rehabilitación a que se refiere el artículo 296 de este Código, deberá iniciarse ante el Juez competente y se discutirá conforme a lo establecido en el artículo anterior.

La demanda se seguirá con la persona que ejerza la patria potestad o la tutela del menor. (*)

(*) *Ver: artículo 901 nral. 1° de esta norma.*

293.- DEROGADO por el Código General del Proceso (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

La referencia se entiende realizada a la Ley N° 15.982 de fecha 18 de octubre de 1988.

294.- DEROGADO por los artículos 11, 13 y 15 de la Ley No. 10.783 del 18.9.46 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

295.- Suspéndese la patria potestad:

1°.- Por la prolongada demencia de los padres.

2°.- Por su larga ausencia, con grave perjuicio de los intereses de sus hijos, a que los padres ausentes no proveen.

La suspensión de la patria potestad deberá ser decretada por el Juez, con conocimiento de causa, a solicitud de cualquier pariente del hijo o del Ministerio Público. (*)

(*) *Ver: artículo 901 nral. 1° de esta norma.*

296.- Los padres que hubiesen perdido la patria potestad o a los cuales se les hubiese limitado o suspendido su ejercicio, podrán pedir al Juez su restitución. (*)

(*) *Ver: artículos 344 y 901 nral. 1° de esta norma.*

297.- La tutela a que se refiere el artículo 443 será ejercida en la forma prevista por el artículo 336. (*)

(*) *Ver: artículos 344 y 901 nral. 1° de esta norma.*

298.- DEROGADO por el artículo 142 del Código del Niño (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986. La referencia se entiende realizada a la Ley N° 9.342 de fecha 6 de abril de 1934.*

299.- Desechada la demanda no podrá el accionante volver a intentarla. Pero el otro padre que se encontrare en la situación prevista en el artículo 255, podrá pedir su restitución una vez disuelto el matrimonio y en el caso de separación judicialmente decretada. (*)

(*) *Ver: artículos 344 y 901 nral. 1° de esta norma.*

300.- Los Jueces podrán restituir la patria potestad con todos sus atributos o con las limitaciones que consideren convenientes a los intereses del menor. (*)

(*) *Ver: artículos 344 y 901 nral. 1° de esta norma.*

301.- DEROGADO por artículo 11o. de la Ley No. 10.783 del 18.9.46 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

TITULO IX**DE LA HABILITACION DE EDAD**

302.- El menor, huérfano de padre y madre, cumplidos que sean los dieciocho años, podrá obtener habilitación de edad, pidiéndola al Juzgado Letrado competente de su domicilio y acreditando por sumaria información que se halla en aptitud de dirigir sus negocios.

303.- No podrá el Juzgado conceder la habilitación de edad, sin haber oído sobre ella al tutor del menor que la solicita y al Ministerio Público.

304.- Esta habilitación de edad es irrevocable.

305.- También es irrevocable la habilitación que, sin distinción de sexo y por solo el ministerio de la ley, produce el matrimonio válido de los menores.

Subsistirá, aunque el matrimonio se disuelva en su menor edad por la muerte de uno de ellos, tengan o no hijos.

Lo cual se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección II, Capítulo IV, Título V, *Del Matrimonio*.

306.- La habilitación de edad pone fin a la tutela del menor.

307.- El menor habilitado puede ejecutar todos los actos y contraer todas las obligaciones de que son capaces los mayores de edad, excepto aquellos actos u obligaciones de que una ley expresa lo declare incapaz. (*)

(*) *Ver: artículo 1055 de esta norma.*

308.- Será necesario al menor habilitado que haya de contraer matrimonio, el previo consentimiento de un curador especial. (Artículos 107 y 458).

309.- El menor habilitado no puede estar en juicio sin curador *ad litem*.

310.- Tampoco podrá, sin autorización del Juez y bajo pena de nulidad, vender o hipotecar sus bienes raíces;

Ni hacer donación por acto entre vivos;

Ni aprobar las cuentas de su tutor;

Ni contraer deudas que pasen del valor de 500 unidades reajustables;

Ni vender los fondos o rentas públicas que tuviese ni las acciones de compañías de comercio o de industria;

Ni hacer transacciones ni sujetar sus negocios a juicio arbitral. (Artículo 967). (*)

(*) *Ver: artículos 311, 424, 1995 y 2116 de esta norma.*

311.- La autorización judicial requerida en los casos del artículo anterior, no será dada sino con conocimiento de causa.

312.- Si alguna cosa fuese debida al menor, con cláusula de sólo poder haberla cuando tenga la edad completa, la habilitación no alterará la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.

TÍTULO X**DE LA TUTELA (*)**

(*) *Ver: artículo 431 de esta norma.*

CAPITULO I**DISPOSICIONES GENERALES**

313.- La tutela es un cargo deferido por la ley o en virtud de autorización de la ley, que tiene por objeto la guarda de la persona y bienes del menor que no está bajo patria potestad ni se halla habilitado por alguno de los medios legales para administrar sus negocios.

314.- La tutela es un cargo personal que no pasa a los herederos y del cual nadie puede excusarse sin causa legítima.

315.- La tutela no puede ejercerse conjuntamente por más de una persona.

316.- El tutor representa al menor en todos los actos civiles.

317.- Cualquiera puede denunciar al Juez el hecho que da lugar al nombramiento de un tutor o bien excitar el celo del Ministerio Público, para que pida ese nombramiento.

318.- Mientras no se discierne la tutela, deberá pedir el Ministerio Público o dictar el Juez de oficio todas las providencias que fuesen necesarias para el cuidado de la persona y seguridad de los bienes del menor.

319.- El Ministerio Público es parte legítima en toda causa sobre tutela o sobre el cumplimiento de las obligaciones del tutor.

320.- La tutela es testamentaria, legítima o dativa.

CAPITULO II

DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE TUTELA

SECCION I

DE LA TUTELA TESTAMENTARIA

321.- El padre o la madre, mayor o menor de edad, el que últimamente muera de ambos, puede nombrar tutor en testamento a sus hijos que estén bajo de la patria potestad.

322.- El nombramiento de tutor puede ser hecho por los padres bajo condición o hasta cierto tiempo, de manera que expire la tutela por la conclusión del tiempo fijado o por el cumplimiento de la condición. (*)

(*) *Ver: artículo 419 nral. 3º de esta norma.*

323.- Prohíbense y se tendrán como no escritas, las cláusulas siguientes:

1º.- La que eximiere al tutor de hacer inventario judicial de los bienes del menor.

2º.- La que lo autorizare para entrar en posesión de los bienes del menor, antes de hacerse dicho inventario.

3º.- La que lo eximiere de dar cuentas de su administración, con arreglo a lo prescrito por este Código. (Artículos 373, 374, 415 y 418).

324.- Prohíbese a los padres nombrar dos o más tutores que funcionen a un mismo tiempo como conjuntos; y, si lo hicieren, el nombramiento subsistirá solamente a efectos de que los nombrados sirvan la tutela por el orden de su designación en el caso de muerte, incapacidad, excusa o remoción de alguno de ellos.

325.- El padre o la madre en su caso, pueden nombrar tutor al hijo que desheredasen.

326.- El nombramiento de tutor por los padres es revocable como toda disposición testamentaria. (Artículos 779 y 998).

Será de ningún efecto el nombramiento de tutor, si fuese nulo o fuese revocado el testamento en que se hizo.

327.- La tutela testamentaria debe ser confirmada por el Juez, si hubiere sido legalmente dada y entonces se discernirá el cargo al tutor nombrado. (Artículo 366).

SECCION II

DE LA TUTELA LEGITIMA (*)

(*) *Ver: artículo 335 de esta norma.*

328.- Tiene lugar la tutela legítima:

1º.- Cuando no ha sido nombrado tutor testamentario o cuando por cualquiera causa legal, el nombrado no entrare a ejercer la tutela o viniere a cesar en el cargo.

2º.- En los casos de pérdida o suspensión de la patria potestad, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III, Título VIII de este Libro.

329.- Los llamados a la tutela legítima del menor son:

1º.- Los abuelos y las abuelas. (*)

2º.- Los hermanos y las hermanas.

Los parentescos designados en este artículo se entienden legítimos.

(*) *Ver: artículo 330 de esta norma.*

330.- Para confirmar o dar la tutela, el Juez, oyendo previamente al Ministerio Público, elegirá entre los ascendientes designados en el número 1º del artículo anterior y a falta de éstos por cualquiera causa legal, entre los hermanos, la persona que le pareciere más apta y que mejores seguridades presentare. (*)

(*) *Ver: artículo 331 de esta norma.*

331.- Si durante la menor edad, cesare en su cargo el tutor legítimo, será reemplazado por otro de la misma clase, en la forma del artículo precedente.

332.- DEROGADO por el art. 1o. de la Ley No. 10.783 del 18.9.46 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

SECCION III**DE LA TUTELA DATIVA (*)**

(*) *Ver: artículo 335 de esta norma.*

333.- Cuando un menor no tenga tutor testamentario ni pariente alguno de los llamados a la tutela legítima o cuando el que exista de esta clase, no sea capaz o se haya excusado válidamente o haya sido removido de la tutela, procederá el Juez a nombrar un tutor dativo, oyendo previamente al Ministerio Público, quien podrá proponer dos o más sujetos idóneos, para que entre ellos elija el Juzgado, si lo tuviera a bien.

334.- El nombramiento de tutor dativo será hecho sin condición alguna y para durar hasta que la tutela se acabe.

SECCION IV**DE LA ORGANIZACION DE LA TUTELA EN CASOS DE PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD (*)**

(*) *Ver: artículo 343 de esta norma.*

335.- Declarada la pérdida de la patria potestad de ambos padres o de uno de ellos, si el otro no existiere, la tutela podrá ser organizada en los términos establecidos en las Secciones II y III, pero la persona nombrada para ejercerla no estará obligada a aceptarla. (*)

En caso de aceptación quedará exceptuado el tutor de la obligación impuesta por el artículo 368, salvo que el Juez, en vista de los bienes del menor, creyera conveniente hacerla efectiva.

El Ministerio Público podrá apelar de la resolución del Juez que

establece la tutela en esa forma, debiendo estarse a lo que decida el Superior. (**)

(*) *Ver: artículo 353 de esta norma.*

(**) *Ver: artículo 336 de esta norma.*

336.- Si la tutela no se organizare conforme a lo establecido en el artículo anterior, será ejercida en Montevideo, por el Presidente del Instituto Nacional del Menor y en el interior, por el Jefe Departamental respectivo.

El Instituto Nacional del Menor podrá colocar a sus pupilos en establecimientos o casas particulares, sin perjuicio de retener la tutela. (*)

(*) *Ver: artículo 351 de esta norma.*

337.- Los Jueces, al discernir la tutela, fijarán el monto de la pensión que, en concepto de alimentos, deberán abonar los padres y demás personas obligadas con arreglo a la ley. (*)

(*) *Ver: artículo 338 de esta norma.*

338.- Cuando el Instituto Nacional del Menor hubiere colocado al menor en casa de un particular, éste podrá, pasados tres años, pedir al Juez que se le discierna la tutela previos los trámites establecidos en el artículo anterior.

SECCION V

DE LA ORGANIZACION DE LA TUTELA DE LOS MENORES DESAMPARADOS O SIN PADRES CONOCIDOS

339.- El Instituto Nacional del Menor dará prioridad absoluta al régimen de integración del menor a un medio familiar adecuado. En primer término procurará el reintegro del menor a su familia; si ello no fuera posible, buscará su integración a una familia sustitutiva.

Sólo se dispondrá y mantendrá la internación cuando por circunstancias particulares no pueda acudir al régimen de integración familiar.

340.- Siempre que el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia

de menores abandonados o desamparados, deberá pedir al Juez el depósito de éstos, sin perjuicio de que pueda por sí tomar esta medida.

Depositado el menor, si la residencia de los padres fuere conocida, el Juez los citará para que comparezcan dentro de los términos establecidos por la ley procesal.

341.- Si la parte citada comparece, el Juez, oídas las explicaciones del caso y las observaciones del Instituto Nacional del Menor y si el Ministerio Público no se opusiere, mandará que el menor sea entregado a sus padres.

El Ministerio Público, siempre que se oponga a la entrega del menor o que la parte citada personalmente o a domicilio no comparezca, deberá deducir la acción de que trata el artículo 289.

El Juez, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar en tales casos que el menor continúe en la misma situación hasta que se decida por sentencia la acción respectiva. (*)

(*) *Ver: artículo 342 de esta norma.*

342.- A los padres que residan en el extranjero o que no tengan residencia conocida, se les citará por edictos.

Si se presentaren dentro del término del llamamiento, se seguirá el procedimiento que para los que hubieren comparecido establece el artículo anterior.

343.- Si vencido el término del llamamiento, hecho por edictos, no se presentasen los citados, el Juez discernirá la tutela de acuerdo con lo dispuesto en la Sección IV.

344.- Discernida la tutela, si los padres se presentaren pidiendo la patria potestad, deberán deducir la acción de que tratan los artículos 296 y siguientes, la que será admitida en cualquier tiempo.

SECCION VI

DE LOS MENORES INFRACTORES Y ABANDONADOS

345.- Los menores de 18 años de edad que cometan delitos o faltas y los menores de 21 años de edad que se encuentren en estado de abandono

moral o material, serán puestos a disposición del Juez Letrado de Menores, quien previa la investigación sumaria del caso, dictará sentencia sometiéndolos al régimen de vigilancia y protección de acuerdo con las disposiciones siguientes.

Tratándose de menores sometidos a la jurisdicción del Juez bajo la imputación de haber cometido un delito, será provisto de defensor y el régimen podrá prolongarse hasta los 23 años. En los demás casos no podrá exceder de los 21 años y las diligencias se practicarán sin intervención de defensor, sin perjuicio de la asistencia de los representantes legales de los menores.

No es necesario para la adopción de las medidas previstas en los incisos anteriores que los menores hayan obrado con discernimiento o que tengan la capacidad exigida por la ley penal para delinquir.

El menor en todos los casos será sometido al examen del médico psiquiatra o si no fuere posible, de un médico calificado quien informará al Juez dentro de las 48 horas sobre el estado físico y psíquico del menor.

El médico en caso de duda podrá pedir que el menor se interne en el radio urbano durante 15 días para ser observado convenientemente. (*)

(*) *Ver: artículo 347 de esta norma.*

346.- Para el esclarecimiento de los hechos y los antecedentes personales o de familia del menor, el Juez oírán siempre a éste y a sus padres o tenedores, se trasladará a los lugares que juzgue necesarios y decretará todas las diligencias, informes y exámenes que juzgue oportunos, de los que hará mención en la sentencia respectiva, la que será ampliamente fundada.

A las diligencias sólo podrán asistir además del Fiscal de lo Civil y el defensor, el representante legal del menor, con sus abogados y asistente social, si lo hubiere y las personas debidamente autorizadas por el Juez si lo desean y podrán hacer verbalmente o por escrito las indicaciones que juzguen pertinentes, estando a lo que el Juez resuelva.

Contra las resoluciones interlocutorias del Juez sólo cabrán los recursos de reposición y apelación, con carácter devolutivo, que podrán deducir únicamente el Fiscal o el defensor del menor.

Cuando el Juez lo considere conveniente dispondrá que se eleven los testimonios pertinentes en lugar del expediente, el cual seguirá su curso a pesar de la apelación.

347.- A los efectos del artículo 345 se entenderá por abandono moral la incitación por los padres, tutores o tenedores a la ejecución por parte del menor, de actos perjudiciales a su salud física o moral; la mendicidad o la vagancia por parte del menor; su frecuentación a sitios inmorales o de juego o con gente viciosa o de mal vivir.

Estarán comprendidos en el mismo caso las mujeres menores de 18 años de edad y los hombres menores de 16 que vendan periódicos, revistas u objetos de cualquier clase en calles o en lugares públicos o ejerzan en esos sitios cualquier oficio y los que sean ocupados en oficios perjudiciales a la salud o a la moral.

348.- El Juez Letrado de Menores, siempre que tenga conocimiento de la comisión de delitos de que haya sido víctima algún menor deberá colaborar con la justicia criminal practicando las diligencias que considere convenientes y remitirlas al Juez respectivo.

348-1.- Los que teniendo menores bajo su potestad o tenencia les ordenen, estimulen o permitan que imploren la caridad pública o toleren que otros se valgan de ellos con ese fin, serán castigados con la multa prevista en el artículo 361 del Código Penal, aumentando el máximo en dos tercios.

Los menores quedarán bajo la tenencia del Instituto Nacional del Menor sin perjuicio de lo establecido en los artículos 285 y 360 de este Código.

El juicio se seguirá ante el tribunal competente, de acuerdo al procedimiento establecido para las faltas.

348-2.- El Juez puede colocar al menor en el propio hogar de sus padres o tenedores, determinando en cada caso si aquél quedará bajo la vigilancia del inspector oficial o de algún particular; si estableciera la vigilancia deberá señalar la forma y condiciones de la misma; puede confiar la tenencia del menor a otros parientes o extraños, con o sin vigilancia especial, imponer arrestos escolares, disponer la internación en establecimientos del Instituto Nacional del Menor o en otros públicos o particulares, destinar menores al servicio de las Fuerzas Armadas, cuando aquéllos tengan condiciones y vocación para la carrera militar y en casos especiales, tratándose de menores de más de 18 años de edad, destinarlos al servicio militar, como medida disciplinaria sin fijación de término y bajo la vigilancia del Instituto.

Las autoridades militares o escolares a quienes se solicite su concurso

para el cumplimiento de las resoluciones a que se refiere el inciso anterior, están obligadas a prestarlo, así como facilitar al Juez y al Instituto Nacional del Menor todos los informes que se les pidan con respecto al comportamiento de los menores que se les confíen.

348-3.- Cuando el Juez considere que los padres no son aptos para ejercer la tenencia de los hijos menores y resuelva confiarla a otras personas o establecimientos públicos o privados en cualesquiera de los casos previstos en este Código, determinará en la sentencia la cuota mensual con que deberán contribuir aquéllos, la que deberá fijarse teniendo en cuenta la culpabilidad de los padres y principalmente la capacidad económica de los mismos.

Las sumas con que contribuyan los padres ingresarán al tesoro del Instituto Nacional del Menor, pudiendo ser destinadas en su totalidad o en parte a abonar las pensiones de los hijos.

Para hacer efectiva la contribución señalada por el Juez bastará la orden librada por oficio al habilitado de la oficina en que presten servicios los padres o al patrón, quienes responderán personalmente si no cumplieran la orden respectiva.

Cuando fuere necesario ejecutar bienes de los padres, el juicio se seguirá ante el Juez competente de su domicilio, por el Instituto Nacional del Menor y constituirá título ejecutivo el testimonio de la sentencia respectiva.

348-4.- Cuando el Juez haya recibido la denuncia de abandono resolverá sin más trámite lo que resulte más conveniente a los intereses del menor.

Para el caso de decidir la integración familiar, ésta se realizará a través de las dependencias del Instituto Nacional del Menor o directamente por el magistrado, quien podrá requerir el asesoramiento de los cuerpos técnicos de dicha Institución.

SECCION VII

DE LA TUTELA DE LOS HIJOS NATURALES

349.- El padre o madre que ha reconocido al hijo natural o el sobreviviente, si ambos lo han reconocido, pueden nombrarle tutor en el testamento.

350.- A falta de tutela testamentaria, el Juez nombrará un tutor dativo al hijo natural.

351.- Los expósitos recogidos y educados en los establecimientos dedicados a este objeto, cualquiera que sea su denominación, estarán bajo la tutela de sus superiores, conforme a los respectivos reglamentos, con excepción de lo dispuesto en el artículo 336.

CAPITULO III

DE LAS INCAPACIDADES PARA LA TUTELA Y DE LAS CAUSAS DE EXCUSA Y REMOCION DE LOS TUTORES

SECCION I

DE LAS CAUSAS DE INCAPACIDAD Y DE EXCUSA

352.- Son incapaces de toda tutela:

1°.- Los menores de edad.

2°.- **DEROGADO por art. 147 del Código del Niño (*)**

3°.- Los ciegos.

4°.- Los mudos.

5°.- Los dementes.

6°.- Los que carecen de domicilio en la República.

7°.- Los fallidos o concursados, mientras no hayan satisfecho a sus acreedores.

8°.- El que ha perdido la patria potestad o incurrido en cualquiera de los casos por los cuales puede perderse, según los artículos 284, 284-1 y 285.

9°.- El que no tenga oficio, profesión o modo de vivir conocido o sea notoriamente de costumbres inmorales.

10°.- Los acreedores o deudores del menor, por cantidades que fuesen de consideración, en el concepto del Juez. (**)

11°.- Los que litigan o aquéllos cuyos padres litigan con el menor, por intereses o derechos propios.

12°.- Los que hayan sido removidos de otra tutela anterior.

- 13°.- Los que no saben leer ni escribir.
- 14°.- Los que tienen que ejercer por largo tiempo o por tiempo indefinido un cargo o comisión fuera de la República.
- 15°.- **DEROGADO por art. 3o. del Decreto-Ley No. 14.350 de 29.3.75 (*)**
- 16°.- **DEROGADO por art. 5o. Constitución de la República. (*)**
- 17°.- El padrastro o la madrastra no pueden ser tutores de sus entenados.

() Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986. La referencia del numeral 2° se entiende realizada a la Ley N° 9.342 de fecha 6 de abril de 1934.*

*(**) Ver: artículo 378 de esta norma.*

353.- Pueden excusarse de la tutela (artículo 335, inciso 1°):

1°.- El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales de Apelaciones, los Fiscales y demás personas que ejerzan el Ministerio Público, los Jueces Letrados y los Defensores de Oficio.

2°.- Los Intendentes Municipales y los Jefes de Policía.

3°.- Los administradores o recaudadores de rentas fiscales.

4°.- Los que desempeñan algún empleo público, fuera del Departamento en que se ha de ejercer la tutela o que, en razón de sus empleos, están obligados a alejarse en ciertas épocas.

5°.- Los que tienen su domicilio fuera de dicho Departamento.

6°.- Los pobres que viven de su trabajo diario.

7°.- Los que adolecen de alguna grave enfermedad habitual.

8°.- Los que han cumplido sesenta años.

9°.- El que ya es tutor o curador general de otra persona.

10°.- Los que tengan bajo su patria potestad cinco hijos legítimos.

11°.- Los integrantes en actividad de las Fuerzas Armadas y Policiales. (*)

() Ver: artículos 355 y 356 de esta norma.*

354.- Los tutores que no hicieren saber al Juez las causas de incapacidad que tuvieren al tiempo de deferírseles el cargo o que después les sobrevinieren, además de quedar responsables por todos los perjuicios que resultaren de su

omisión, perderán el derecho a los emolumentos correspondientes al tiempo en que, conociendo la incapacidad, ejercieron el cargo y restituirán lo que a este título hubieren recibido.

355.- Los que para no aceptar la tutela, quieran aprovecharse de las excusas consignadas en el artículo 353, deberán proponerlas al Juez, dentro de los treinta días subsiguientes a la notificación del auto de su confirmación o nombramiento.

356.- Si las causas de excusa del artículo 353 sobrevinieran durante la tutela, serán admisibles en cualquier tiempo que se aleguen.

357.- El juicio sobre las incapacidades o excusas alegadas por el tutor, deberá seguirse con el Ministerio Público.

358.- Si el Juez no reconociere las causas de incapacidad alegadas por el tutor o no aceptare sus excusas y si el tutor no apelare o se confirmare por el Superior el fallo del Juez *a quo*, será el tutor responsable de cualesquiera perjuicios que de su retardo en encargarse de la tutela, hayan resultado al menor.

No tendrá lugar esta responsabilidad, si el tutor, para exonerarse de ella, ofreciere encargarse interinamente de la guarda.

359.- El tutor testamentario que se excusare de la tutela aun con causa legítima o que fuese removido por su mala administración, quedará sujeto a lo que para tales casos se dispone en el Título *De la sucesión testamentaria*. (Artículo 843).

SECCION II

DE LA REMOCION DE LA TUTELA (*)

(*) *Ver: artículo 416 de esta norma.*

360.- Serán removidos de la tutela:

1°.- Los inhábiles para ejercer este cargo, desde que sobrevenga o se averigüe la incapacidad.

2°.- Los que no formen inventario de los bienes del menor, en el término y forma establecidos por la ley o que no lo hubiesen hecho con fidelidad.

3º.- Los que se conduzcan mal en la tutela, respecto a la persona o en la administración de los bienes del menor.

361.- Pueden y deben denunciar las causas de remoción los parientes del menor y aun cualquiera persona del pueblo.

Puede hacerlo el mismo menor, si es adulto, recurriendo al Ministerio Público.

El Juez podrá también promover de oficio la remoción del tutor.

Este será siempre oído y el juicio será seguido por el Ministerio Público en la forma prescrita por el artículo 291.

362.- Denunciada la causa por la cual el tutor debe ser removido, y si ésta fuese legal, debe el Juez nombrar inmediatamente un tutor interino, por el tiempo que dure el juicio de remoción.

En los casos de delito previstos por los artículos 284 y 285, corresponde la suspensión del tutor desde que se le inicia proceso y una sola condena será causa de inhabilidad y de remoción. (*)

(*) *Ver: artículo 369 nral. 2º de esta norma.*

363.- Declarada procedente la remoción, se dará nuevo tutor al menor, si no fuese nombrado el mismo tutor interino. El nuevo tutor exigirá del ex tutor la rendición de cuentas, con pago del alcance y la indemnización de los perjuicios que hubiese causado. (Artículos 421 y 428). Podrá también el ex tutor ser perseguido criminalmente por los delitos que haya cometido en el ejercicio de su cargo y en todos los casos de remoción perderá los derechos y emolumentos, anexos a la tutela. (Artículo 414).

364.- Si la decisión del juicio de remoción fuese favorable al tutor propietario, será éste reintegrado en el ejercicio de sus funciones y exigirá del tutor interino las cuentas de su administración. (*)

(*) *Ver: artículo 365 de esta norma.*

365.- En el caso del artículo precedente, a más del derecho que compete al tutor para que los denunciantes le reembolsen las costas y costos del juicio de remoción, podrá también, según las circunstancias, acusarlos por el delito de injuria, a menos que el juicio haya sido promovido de oficio o por el Ministerio Público.

CAPITULO IV

DE LAS DILIGENCIAS Y FORMALIDADES QUE DEBEN PRECEDER
AL EJERCICIO DE LA TUTELA

366.- Toda tutela debe ser discernida.

Se llama discernimiento el decreto judicial que autoriza al tutor para ejercer su cargo.

367.- Corresponde el discernimiento de la tutela al Juez del domicilio del menor (artículos 34 y 36), el cual será también el competente para dirigir todo lo relativo a la tutela, aunque los bienes estén fuera del lugar que abrace su jurisdicción, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley procesal.

368.- No se discernirá la tutela, sin que antes el tutor preste fianza y juramento que aseguren el buen desempeño del cargo. (Artículo 335, inciso 2°).

En lugar de la fianza, podrá prestarse hipoteca especial, registrada y sujeta a las disposiciones del Título *De la hipoteca* (Artículo 2111).

369.- Están exceptuados de prestar la caución de fianza o de hipoteca:

1°.- Los ascendientes del menor.

2°.- Los tutores interinos (Artículo 362).

Puede también ser relevado de la caución sobredicha, cuando el menor tuviese pocos bienes, el tutor que fuere persona de reconocida probidad y de bastantes facultades en concepto del Juez, para responder de ellos.

370.- La fianza y en su caso la hipoteca, será fijada por el Juez en un valor determinado, el cual deberá siempre corresponder al valor conocido o probable de los bienes del menor, con exclusión de los que fuesen raíces. (Artículo 395). (*)

(*) *Ver: artículo 371 de esta norma.*

371.- Si inventariados los bienes del menor, conforme a los artículos 376 y siguientes o hecha partición de la herencia, en que el menor fuese interesado, resultare que el valor fijado a la caución, según el artículo precedente, fue

excesivo o insuficiente, podrá aquél reducirse a petición del tutor o aumentarse, si el Juzgado lo creyere conveniente.

372.- Los actos del tutor que no han sido autorizados por el decreto de discernimiento son nulos; pero el decreto, una vez obtenido, validará los actos anteriores de cuyo retardo hubiera podido resultar perjuicio al menor.

373.- Discernida la tutela, el Juez señalará, según la naturaleza y situación de los bienes del menor, el tiempo en que el tutor debe hacer el inventario judicial y estimativo del valor de ellos.

Mientras el inventario no esté hecho, el tutor no podrá tomar parte alguna en la administración, sino en cuanto fuese absolutamente necesario. (*)

(*) *Ver: artículo 374 de esta norma.*

374.- Cualesquiera que sean las disposiciones del testamento en que el menor hubiese sido instituido heredero, el tutor no podrá ser dispensado de hacer el inventario de que habla el artículo precedente. (Artículo 323).

375.- Si el Juez lo estimase conveniente, ordenará que asistan a la facción de inventario uno o más parientes del menor u otras personas que tuviesen conocimiento de los negocios o de los bienes de aquél a quien suceda el menor.

376.- El inventario hará relación de los bienes muebles e inmuebles del menor, particularizándolos, uno a uno o señalando colectivamente los que consisten en número, peso o medida, con expresión de la cantidad y calidad; sin perjuicio de hacer las explicaciones del caso, para poner a cubierto la responsabilidad del tutor.

Deberá comprender también los títulos de propiedad, las escrituras públicas y privadas, los gravámenes que afecten los inmuebles, todos los créditos y deudas del menor de que hubiere comprobante o sólo noticia, los libros de comercio o de cuentas y, en general, todo lo perteneciente a la sucesión.

377.- Si después de hecho el inventario, se encontraren bienes de que al hacerlo no se tuvo noticia o por cualquier título acrecieren nuevos bienes al caudal inventariado, se practicará un inventario de ellos con las mismas solemnidades y se agregará al anterior.

378.- Si el tutor es acreedor o deudor del menor, deberá declararlo en el inventario, expresando cantidad para los efectos del número 10, artículo 352.

El Actuario estará obligado a requerirle para ello, haciéndolo anotar en el inventario, so pena de incurrir en la multa de 50 unidades reajustables.

El tutor perderá su crédito si requerido por el Actuario, no lo declarare en el inventario.

379.- Si el tutor alegare que por error se han relacionado en el inventario cosas que no existían o se ha exagerado el número, peso o medida de las existentes o se les ha atribuído una materia o calidad de que carecían, no le valdrá esta excepción; salvo que pruebe no haberse podido evitar el error con el debido cuidado de su parte o sin conocimientos especiales o experimentos científicos.

380.- Los pasajes oscuros o dudosos del inventario se interpretarán a favor del menor, a menos de prueba contraria.

381.- El tutor que sucede a otro, recibirá los bienes por el inventario anterior y anotará en él las diferencias. Esta operación se hará con las mismas solemnidades que el anterior inventario, el cual pasará entonces a ser el inventario del sucesor.

CAPITULO V

DE LA ADMINISTRACION DE LA TUTELA

382.- La administración de la tutela discernida por los Jueces de la República, será rigida exclusivamente por las normas de este Código, si en la República existiesen los bienes del menor y si éste tuviese en ella su domicilio.

383.- DEROGADO por el art. 2398, que fue incorporado por la Ley 10.084 de 3.12.41. (*)

() Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986. La referencia se entiende realizada a la Ley N° 10.084 de fecha 3 de diciembre de 1941, artículo 1.*

384.- El tutor debe cuidar de la persona del menor y administrar sus bienes, como un diligente padre de familia.

El menor debe obediencia y respeto al tutor y éste podrá corregirlo moderadamente.

Si no bastase la corrección moderada, deberá exponerlo verbalmente al Juez, que podrá en este caso, adoptar la medida autorizada por el artículo 261, previo el interrogatorio del tutor y del menor, con asistencia del Ministerio Público. (*)

(*) *Ver: artículo 391 de esta norma.*

385.- El menor debe ser alimentado y educado con arreglo a sus facultades.

386.- El tutor debe procurar el establecimiento del menor, a la edad correspondiente, destinándolo a la profesión de alguna ciencia, arte u oficio.

El tutor es responsable de todo gasto inmoderado en la subsistencia y educación del menor, aunque se saque de las rentas.

Para cubrir su responsabilidad, el tutor podrá pedir al Juez que, atendiendo al patrimonio del menor, a su vocación y demás circunstancias que puedan influir, determine la carrera u oficio a que debe aquél ser dedicado, como también la suma anual que haya de invertirse en sus alimentos y educación.

387.- Si las rentas del menor no alcanzasen para su educación y alimentos, el Juez podrá autorizar al tutor para que emplee una parte del principal, a fin de que el menor no quede sin la educación correspondiente.

388.- Si el menor no tuviese suficientes medios para los gastos de su educación y alimentos, el tutor pedirá autorización al Juez para exigir de los parientes que a ello estén obligados, la prestación de alimentos. (Artículos 117 y 120).

El pariente que diese alimentos al menor, podrá tenerlo en su casa y encargarse de su educación, si el Juez lo permitiese.

389.- Si el menor indigente no tuviese parientes que estén obligados a prestarle alimentos o éstos no se hallaren en circunstancias de dárselos, el tutor, con autorización del Juez, puede ponerlo en otra casa o contratar el aprendizaje de un oficio y los alimentos.

390.- El tutor no podrá ausentarse de la República por más de un año, sin comunicar previamente su resolución al Juez de la tutela, a fin de que él delibere sobre la continuación del cargo o nombramiento de otro tutor.

No podrá tampoco, sin autorización del Juez, mandar al menor ni llevarlo consigo fuera de la República o a diferente Departamento, por más tiempo del arriba expresado.

391.- El tutor es responsable de todo perjuicio causado al menor en la administración de sus bienes, si hubiese culpa que se le pueda imputar. (Artículos 384 y 1344).

392.- Puede el tutor, bajo su responsabilidad, administrar por medio de uno o más apoderados, en los lugares distantes del de su residencia.

393.- En los actos y contratos que ejecute o celebre el tutor *en representación del menor*, deberá expresarse esta circunstancia en la escritura del mismo acto o contrato; so pena de que, omitida esta expresión se reputa ejecutado el acto o celebrado el contrato en representación del menor, si fuese útil a éste y no de otro modo.

394.- Cuando hubiere dinero sobrante del menor, después de cubiertas todas las atenciones y cargas de la tutela, deberá el tutor, dentro de treinta días, prestarlo sobre hipoteca, al interés corriente que se obtenga con esta seguridad en la plaza; y en defecto de hipoteca, podrá colocarlo en los bancos o en rentas públicas.

Podrá también, si lo estimase preferible, emplearlo en la adquisición de bienes raíces con conocimiento y aprobación del Juez de la tutela.

Por la omisión en esta materia, el tutor será responsable de los intereses legales del sobrante, toda vez que éste llegue a la suma de 250 unidades reajustables.

394-1.- Es aplicable a los tutores lo previsto para los padres en el artículo 272-1, en lo pertinente.

395.- No podrá el tutor, sin previo decreto judicial, enajenar los bienes raíces del menor, ni constituir sobre ellos ningún derecho real ni enajenar o empeñar los bienes muebles preciosos o los que tengan un valor de afección o cuyo valor exceda las

500 unidades reajustables ni podrá el Juez autorizar esos actos, sino por causa de absoluta necesidad o evidente utilidad y oyendo antes al Ministerio Público.

La autorización para enajenar o gravar los bienes, a que se refiere este artículo, deberá recaer en cada caso, sobre fincas u objetos especialmente designados. (*)

(*) *Ver: artículos 396 y 398 de esta norma.*

396.- La venta de cualquier parte de los bienes enumerados en el artículo anterior no podrá autorizarse sin que el precio que se fije sea superior al que se establezca según el medio más adecuado que el Juez estime conveniente al caso. (*)

(*) *Ver: artículos 398, 984 y 1756 de esta norma.*

397.- Las enajenaciones y gravámenes hechos contra lo dispuesto en los artículos precedentes, serán de ningún valor. (Artículos 402, 1456 y 1566). (*)

(*) *Ver: artículo 398 de esta norma.*

398.- Las disposiciones de los artículos 395 a 397 no se aplican al caso de expropiación por utilidad pública.

Tampoco será necesaria la autorización de que habla el artículo 395 cuando la enajenación fuese motivada por ejecución de sentencia, en virtud de derecho anterior de tercero.

399.- Sin previo decreto del Juez, no podrá el tutor proceder a la partición de los bienes raíces o hereditarios que el menor posea con otros *pro indiviso*.

Si el Juez, a petición de un comunero o coheredero, hubiese decretado la partición, no será necesario nuevo decreto.

En uno y otro caso, la partición deberá hacerse en la forma prescrita en el Título *De las disposiciones comunes a las sucesiones*. (*)

(*) *Ver: artículos 1117, 1129 y 1130 de esta norma.*

400.- El tutor no podrá repudiar ninguna herencia deferida al menor, sin decreto del Juez, con conocimiento de causa. (Artículo 1056).

Esta disposición se extiende a las donaciones o legados que se hicieren al menor.

401.- También se necesita previo decreto, para proceder a transacciones o compromisos sobre derechos del menor que se valúen en más de 500 unidades reajustables y sobre sus bienes raíces; y en cada caso la transacción o el fallo del compromisario, se someterá a la aprobación judicial, so pena de nulidad. (Artículo 2148). (*)

(*) *Ver: artículo 2150 de esta norma.*

402.- Prohíbese al tutor contraer empréstito alguno a nombre del menor, sin autorización del Juez, con conocimiento de causa.

Sin embargo, la falta de autorización no impedirá que el prestamista pueda reclamar el pago, en cuanto el menor se hubiese hecho más rico. (Artículo 1456).

403.- Los deudores del menor que paguen al tutor, quedan libres de todo nuevo pago. (Artículo 1453).

404.- El tutor cuidará de hacer pagar lo que se deba al menor, inmediatamente que sea exigible el pago y de perseguir a los deudores por los medios legales.

405.- El tutor deberá interrumpir las prescripciones que puedan correr contra el menor. (Artículo 1235 y siguientes). (*)

(*) *Ver: artículo 1243 nral. 1º de esta norma.*

406.- No podrá el tutor dar en arriendo los predios rústicos del menor por más de cinco años ni los urbanos por más de tres ni por más tiempo que el que falte al menor para llegar a la mayor edad.

Si lo hiciere, no será obligatorio el arrendamiento para el menor o para el que le suceda en el dominio del predio, por el tiempo que excediese de los límites aquí señalados.

Aun el arriendo hecho dentro de esos límites, lleva implícita la condición de terminar si, antes del vencimiento del término fijado, el menor contrajera matrimonio u obtuviere habilitación de edad. (*)

(*) *Ver: artículos 1794 y 1983 de esta norma.*

407.- El tutor necesita la previa autorización del Juez para todo acto o contrato en que directa o indirectamente tenga interés cualquiera de sus

parientes legítimos, hasta el cuarto grado o algún hijo natural suyo o alguno de sus socios. (*)

(*) *Ver: artículo 984 de esta norma.*

408.- Cuando el tutor hubiese hecho anticipaciones en beneficio del menor, podrá reembolsarlas con el interés corriente, previa la autorización del Juez.

De la misma autorización habrá menester para hacerse pago de su crédito contra el menor.

409.- Si el menor hubiese heredado algún establecimiento de comercio o de industria, el Juez de la tutela decidirá si ha de continuar o no, tomando en consideración las circunstancias del caso y oyendo al tutor y al Ministerio Público.

410.- Si el Juez resolviese que el establecimiento continúe, autorizará al tutor para que por sí o por los agentes de que se sirva bajo su responsabilidad, dirija las operaciones y trabajos, haga pagos y todos los demás actos de un mandatario, con libre administración.

Pero si hubiese de cesar el establecimiento, el Juez autorizará al tutor para enajenarlo en venta pública o privada, después de tasada o regulada su importancia; y mientras no fuese posible venderlo, para proceder como el tutor lo encontrase ser menos perjudicial al menor.

411.- Si el establecimiento heredado por el menor fuese social y no se hubiese pactado que continúe la sociedad con los herederos del socio fallecido, conforme a lo dispuesto en el Libro Cuarto de este Código *sobre el modo de acabarse la compañía*, el Juez autorizará al tutor, para que de acuerdo con los demás interesados, ajuste la venta o la cesión de la cuota social del menor al socio o socios sobrevivientes o a un tercero con asentimiento de éstos; y si no fuese posible la venta, para inspeccionar o promover la liquidación final y percibir lo que correspondiese al menor.

En el caso de continuar la sociedad, por haberse así pactado, el Juez autorizará al tutor para hacer las veces del socio fallecido y cuyo heredero es el menor.

411-1.- Si la participación o cuota social recibida por el menor por herencia, legado o donación fuere de una sociedad comercial se estará a lo establecido en la ley mercantil.

412.- Son prohibidos absolutamente al tutor, aun cuando el Juez indebidamente los autorice, los actos siguientes:

1°.- Comprar por sí o por interpuesta persona, bienes muebles o inmuebles del menor o venderle o arrendarle los suyos, aunque sea en subasta pública; y si lo hiciere, a más de la nulidad de la compra, el acto será tenido como suficiente para la remoción de la tutela. (*)

2°.- Constituirse cesionario de créditos, derechos o acciones contra el menor, a no ser que las cesiones resulten de una subrogación legal.

3°.- Hacer con el menor contratos de cualquier especie.

4°.- Aceptar herencias deferidas al menor, sin beneficio de inventario. (**)

5°.- Disponer a título gratuito de los bienes del menor, a no ser por vía de socorro en pequeñas cantidades a sus parientes necesitados o cortas dádivas remuneratorias o presentes de uso.

6°.- Hacer remisión voluntaria de derechos del menor.

7°.- Hacer o consentir particiones en que los menores sean interesados, omitiendo la aprobación judicial.

8°.- Obligar a los pupilos como fiadores de obligaciones suyas o de otros.

(*) *Ver: artículo 984 de esta norma.*

(**) *Ver: artículo 1056 de esta norma.*

413.- El tutor tendrá derecho a ser remunerado con el diez por ciento de los frutos líquidos de los bienes del menor, cuando el padre o la madre no hubiesen fijado otra mayor remuneración en el testamento.

414.- No tendrá derecho a remuneración alguna y deberá restituir lo que a ese título haya recibido, el tutor que fuere removido de la tutela por culpa grave. (Artículo 363).

CAPITULO VI

DE LAS CUENTAS DE LA TUTELA

415.- El tutor está obligado a llevar cuenta fiel, exacta y documentada de todos sus actos administrativos, día por día, sin que pueda excusarse de esta

obligación ni aun el testamentario a quien el testador haya exonerado de rendir cuentas.

Sin embargo, podrá excusarse de documentar las partidas de gastos menudos en que un diligente padre de familia no acostumbra recoger recibo.

416.- Durante su cargo, el tutor está obligado a presentar al Juez, dentro de los treinta días últimos de cada trienio, un estado de la situación en que se encuentra el patrimonio del menor. El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, podrá disponer que dicho estado sea presentado en un período menor.

El Ministerio Público, a quien ese estado debe comunicarse, podrá pedir, si lo creyese conveniente, que el tutor exhiba los libros de la administración y hacer las observaciones que le sugiera su celo por los intereses del menor; teniendo presente lo dispuesto en la Sección II, Capítulo III de este Título.

La aprobación que el Juez diese al estado presentado por el tutor, será en cuanto haya lugar y sin perjuicio de repararse cualquier agravio del menor, al tiempo de la formal rendición de cuentas. (*)

(*) *Ver: artículo 417 de esta norma.*

417.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en cualquier tiempo y por motivos que el Juez tuviere por suficientes, el Ministerio Público podrá pedir al tutor la exhibición de los libros de su administración, a los efectos del inciso segundo del sobredicho artículo.

418.- Acabada la tutela, el tutor o sus herederos están obligados a rendir cuentas justificadas de la administración al menor o a los que le representen, en el término que el Juez lo ordene.

Esta obligación no puede ser dispensada ni aun por el menor mismo en su testamento.

419.- Acábase la tutela:

1º.- Por la muerte del tutor, su remoción o excusa superviniente admitida por el Juez.

2º.- Por la muerte, habilitación, mayoría de edad o matrimonio del menor.

3º.- En el caso previsto por el artículo 322.

420.- Sucediendo la muerte del tutor, sus albaceas o sus herederos mayores de edad deberán ponerlo dentro de treinta días en conocimiento del Juez del lugar y proveer entretanto a lo que las circunstancias exijan respecto de los bienes y persona del menor.

421.- Si el tutor entrase en lugar de un tutor anterior, deberá pedir dentro de treinta días, a su predecesor o a sus herederos, la rendición judicial de las cuentas de la tutela y que lo pongan en posesión de los bienes del menor. (Artículo 363).

422.- Los gastos de rendición de cuentas deben ser anticipados por el tutor; pero le serán abonados por el menor.

423.- Las cuentas deben darse en el lugar en que se desempeñe la tutela, si el menor no prefiere el fuero del domicilio del tutor.

424.- Presentada la cuenta por el tutor, será discutida por la persona a quien pase la administración de los bienes.

Si la administración se transfiere a otro tutor o al menor habilitado de edad, no quedará cerrada la cuenta, sino con la aprobación judicial, oído el Ministerio Público. (Artículo 310).

425.- Serán abonables al tutor todos los gastos hechos debidamente, aunque de ellos no haya resultado utilidad al menor, si esto sucediese sin culpa del tutor y aunque éste los haya anticipado de su propio dinero.

426.- Cualquier arreglo que pueda tener lugar entre el tutor y el menor habilitado o llegado a la mayor edad, es nulo, si no ha sido precedido de la rendición de cuentas, verificada treinta días antes del expresado arreglo. (*)

(*) *Ver: artículo 2150 de esta norma.*

427.- El saldo que resultare a favor o en contra del tutor, producirá interés legal desde el día en que su cuenta quedó cerrada.

428.- Contra el tutor que no dé verdadera cuenta de su administración o que fuere convencido de dolo o culpa grave, habrá por parte del menor o de quien

lo represente, el derecho de apreciar bajo de juramento el perjuicio recibido y el tutor podrá ser condenado en la cuantía jurada; salvo que el Juez tuviese a bien moderarla.

429.- Toda acción del menor contra el tutor, en razón de la tutela, se prescribirá por cuatro años, contados desde el día en que el menor haya llegado a la mayor edad.

Por el mismo período se prescribirán las acciones contrarias al tutor contra el menor.

430.- Los que han estado bajo de tutela, acabada ésta, pueden pedir la inmediata entrega de los bienes suyos que están en poder del tutor, sin esperar a la rendición o aprobación de las cuentas.

TITULO XI

DE LA CURADURIA O CURATELA

CAPITULO I

DE LA CURADURIA GENERAL

431.- La curaduría o curatela no se diferencia de la tutela sino en ciertos caracteres. Es un cargo impuesto a alguno, en favor del que no puede dirigirse a sí mismo o administrar sus negocios.

Lo dispuesto en el Título *De la tutela* tendrá lugar en todos los casos de curaduría, en cuanto no se oponga a lo determinado en el presente Título.

432.- Están sujetos a curaduría general los incapaces mayores de edad. Halláanse en este caso los dementes, aunque tengan intervalos lúcidos y las personas sordomudas que no puedan darse a entender por escrito ni mediante lengua de señas según lo establecido en la Ley N° 17.378, de 25 de julio de 2001. En este último caso, la intervención de intérprete de lengua de señas será preceptiva para decidir la curatela. (*) (**)

(*) *La redacción de este artículo fue dada por Ley N° 17.535 de fecha 21 de agosto de 2002, artículo 1.*

(**) *Ver: artículo 444 de esta norma.*

433.- Podrán provocar la declaración de incapacidad y nombramiento de curador al incapaz, cualquiera de sus parientes, el cónyuge o el Ministerio Público.

El Ministerio Público será oído aun en los casos en que el juicio de incapacidad no haya sido provocado por él.

434.- En los juicios de incapacidad, entenderá el Juzgado Letrado competente del domicilio del individuo de que se trate, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley procesal.

435.- En el caso de demencia, deberá el Juez interrogar por sí mismo al supuesto demente y oír el dictamen de dos o más facultativos de su confianza.

436.- En cualquier estado de las diligencias, podrá el Juzgado, si lo estimase conveniente, nombrar un curador interino a la persona y bienes del demandado por incapaz.

437.- El auto que nombre curador interino y todo aquel que suponga cualquier forma de interdicción, a más de publicarse en los periódicos, debe inscribirse en el Registro respectivo, en la forma, plazo y con los efectos que la ley determina.

La misma publicidad deberá darse a la sentencia ejecutoria o que concluya el juicio, ora declare incapaz al demandado, ora deseche la demanda. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 35 nral. 5°.*

438.- Son nulos de derecho los actos y contratos del demandado por incapaz, posteriores a la inscripción de la interdicción respectiva, sea ésta provisoria o definitiva.

Los anteriores podrán ser anulados, cuando la causa de la interdicción existía públicamente en la época en que esos actos o contratos fueron hechos.

439.- Después que una persona ha fallecido, no pueden ser impugnados sus actos *entre vivos*, por causa de demencia, a no ser que ésta resulte de los mismos actos o que se hayan consumado después de intentada la demanda de incapacidad. (Artículo 831).

440.- El curador interino cesará en sus funciones y dará las cuentas al curador propietario, luego que fuese nombrado.

441.- El marido es el curador legítimo de su mujer declarada incapaz y ésta lo es de su marido.

El cónyuge curador tendrá la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. (Artículos 1979 y 1984). (*)

(*) *Ver: artículo 444 de esta norma.*

442.- Los hijos mayores de edad, son curadores de su padre o madre viudos o divorciados, declarados incapaces. Si hubiere dos o más hijos, el Juez elegirá el que debe ejercer la curaduría.

Los padres son de derecho curadores de sus hijos legítimos o naturales reconocidos, solteros, viudos o divorciados que no tengan hijos mayores de edad, que puedan desempeñar la curaduría. El Juez determinará cuál de ellos ejercerá el cargo. (*)

(*) *Ver: artículo 444 de esta norma.*

442-1.- El Tribunal por motivos fundados podrá apartarse del orden de la curatela legítima, o aun prescindir de ella, así como regular los modos de su ejercicio. (*)

(*) *Ver: artículo 444 de esta norma.*

443.- Los Directores de los asilos de incapaces mayores de edad son curadores legítimos de los asilados, mientras no tengan otro curador.

Cuando el Director tenga noticias de que el asilado tiene bienes de alguna consideración o hijos menores bajo su potestad, debe comunicarlo al Juzgado del último domicilio del asilado o al del lugar del asilo, para que provea a la curatela del incapaz. (*)

(*) *Ver: artículo 444 de esta norma.*

444.- En todos los casos en que el padre o madre pueden dar tutor a sus hijos menores de edad, podrán también nombrar curador por testamento a los mayores de edad, dementes o sordomudos (artículo 432); salvo las excepciones de los cuatro artículos anteriores.

445.- A falta de curador legítimo o testamentario, según lo dispuesto en los artículos precedentes, tendrá lugar la curaduría dativa.

446.- El curador de un incapaz que tenga hijos menores, es también tutor de éstos.

447.- El demente no será privado de la libertad personal, sino en los casos en que sea de temer que usando de ella se dañe a sí mismo o cause peligro o notable incomodidad a otros. No podrá tampoco ser trasladado a una casa de dementes ni encerrado ni atado, sino momentáneamente, mientras a solicitud del curador, se obtuviere autorización judicial para cualquiera de estas medidas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley N° 9.581 de 8 de agosto de 1936.

448.- Las rentas de los bienes del incapaz, se emplearán con preferencia en aliviar su condición y en procurar su restablecimiento.

Al mismo objeto y en caso necesario, podrá aplicarse parte del capital, previa autorización del Juez.

449.- Cesando las causas que hicieron necesaria la curaduría, cesa también ésta; pero deberá preceder declaración judicial, que podrá solicitar por sí solo el interdicto, observándose las mismas formalidades que para establecer la interdicción.

450.- El curador de un incapaz tiene derecho a ser relevado de la curaduría, pasados cinco años desde que se encargó de ella.

Los cónyuges, descendientes o ascendientes, no gozarán de este beneficio.

CAPITULO II

CURADURIA DE LOS BIENES (*)

(*) *Ver: artículo 1072 de esta norma.*

451.- Podrá darse curador a los bienes de una persona ausente, cuando haya necesidad imperiosa de esta medida, a juicio del magistrado, concurriendo las demás circunstancias del artículo 52 y la de faltar la representación legal del cónyuge. (Artículo 53).

452.- Se dará curador a los bienes del difunto cuya herencia fuese declarada yacente. (Artículo 1072).

453.- Si hubiese herederos extranjeros del difunto, el curador de los bienes hereditarios será nombrado con arreglo a los tratados existentes con las naciones a que los herederos pertenecieren.

454.- Los curadores de los bienes están sujetos a todas las trabas de los tutores o curadores y además se les prohíbe ejecutar otros actos administrativos que los de mera custodia y conservación y los necesarios para el cobro de los créditos y pago de las deudas de sus representados.

Se les prohíbe especialmente alterar la forma de los bienes, contraer empréstitos y enajenar aun los bienes muebles que no sean corruptibles, a no ser que esta enajenación pertenezca al giro ordinario de los negocios del ausente o que el pago de las deudas lo requiera. (*)

(*) *Ver: artículo 455 de esta norma.*

455.- Sin embargo de lo dispuesto en el artículo precedente, los actos en él prohibidos a los curadores de bienes serán válidos, si justificada su necesidad o utilidad, los autorizase el Juez previamente.

456.- Toca a los curadores de bienes el ejercicio de las acciones y defensas judiciales de sus representados; y las personas que tengan créditos contra los bienes, podrán reclamarlos de los respectivos curadores.

457.- La curaduría de bienes cesa por la extinción o inversión completa de éstos, o por haber cesado los motivos que hicieron deferir la curaduría.

CAPITULO III

CURADURIAS ESPECIALES

458.- Habrá lugar al nombramiento de curadores especiales en los casos siguientes:

1º.- Cuando los intereses de los menores estén en oposición con los de sus padres o madres bajo cuyo poder se encuentran.

2º.- Cuando ambos padres perdieren la administración de los bienes de sus hijos.

3°.- Cuando los hijos adquieren bienes cuya administración no corresponda a sus padres.

4°.- Cuando los intereses de los que están bajo tutela o curaduría general, estuviesen en oposición con los de su tutor o curador.

5°.- Cuando sus intereses estuviesen en oposición con los de otro menor o incapaz, que con ellos se hallare bajo un tutor o curador común.

6°.- Cuando adquieren bienes con la cláusula de ser administrados por persona designada o de no ser administrados por su tutor o curador general.

7°.- Cuando la curaduría fuese para un negocio particular.

8°.- En los casos de los artículos 67 y 81 numeral 3° del Código Penal, si no corresponde la administración al cónyuge del penado.

459.- El curador especial no es obligado a prestar fianza o caución ni a la confección de inventario, sino cuando su nombramiento fuese con administración de bienes.

Los curadores para pleito o *ad litem* son dados por la judicatura que conoce en el pleito.

LIBRO SEGUNDO

De los bienes y del dominio o propiedad

TITULO I

DE LA DIVISION DE LOS BIENES

CAPITULO I

DE LOS BIENES CONSIDERADOS EN SI MISMOS

460.- Bajo la denominación de *bienes* o de *cosas* se comprende todo lo que tiene una medida de valor y puede ser objeto de propiedad.

Los bienes son corporales o incorporeales.

SECCION I

DE LOS BIENES CORPORALES

461.- Los bienes corporales se dividen en muebles e inmuebles.

462.- *Muebles* son las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas por sí mismas como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea por medio de una fuerza externa, como la cosas inanimadas.

Exceptúanse las cosas muebles que se hallan en el caso del artículo 465. (*)

(*) *Ver: artículo 469 de esta norma.*

463.- *Inmuebles o fincas o bienes raíces* son las cosas que no se pueden transportar de un lugar a otro, como las tierras, las minas y los edificios.

Las casas y heredades se llaman *predios o fundos*.

464.- Los árboles y plantas son inmuebles, mientras adhieran al suelo por sus raíces.

Lo son también los frutos pendientes de las mismas plantas o árboles, en cuanto siguen al fundo en todos los cambios de dominio.

465.- Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo de que puedan separarse sin detrimento. Tales son por ejemplo:

Las losas de un pavimento;

Los tubos de las cañerías;

Los utensilios de labranza o minería y los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca, con tal que hayan sido puestos en ella por el dueño de la finca;

Los abonos existentes en ella y destinados por el dueño de la finca a mejorarla;

Las prensas, calderas, cubas y máquinas que forman parte de un establecimiento industrial adherente al suelo y perteneciente al dueño de éste;

Los viveros de animales, con tal que adhieran al suelo o sean parte del suelo mismo o de un edificio.

466.- Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos como las yerbas, maderas y frutos, la tierra o arena, los metales de una mina o las piedras

de una cantera, se reputan muebles, aun antes de su separación, para el efecto de constituir un derecho a favor de otra persona que el dueño.

467.- Las cosas de comodidad u ornato que se fijan en las paredes y pueden removerse fácilmente, se reputan muebles.

Sin embargo, los cuadros o espejos que están embutidos en las paredes, de manera que forman un mismo cuerpo con ellas, se consideran parte del edificio aunque puedan separarse sin detrimento. Lo mismo se aplica a las estatuas colocadas en un nicho construido expresamente en el edificio.

468.- Las cosas que por ser accesorias a bienes raíces se reputan inmuebles, no dejan de serlo por su separación momentánea; pero sí, desde que se separan con el objeto de darles diferente destino.

469.- Cuando por disposición de la Ley o del hombre se use de la expresión *bienes muebles* sin otra calificación, se comprenderá en ella todo lo que se entiende por cosas muebles según el artículo 462.

Cuando se use de la expresión de *muebles sólo* o *muebles de una casa*, no se comprenderá el dinero, los documentos, las colecciones, los libros, las armas, las ropas, los carruajes ni en general otras cosas que las que corresponden al ajuar de la casa. (*)

(*) *Ver: artículo 881-2 de esta norma.*

470.- Los bienes muebles son fungibles o no fungibles.

A los primeros pertenecen aquellas cosas de que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza, sin que se consuman.

Las especies monetarias son fungibles en cuanto perecen para el que las emplea como tales.

SECCION II

DE LOS BIENES INCORPORALES

471.- Los bienes incorporales son derechos reales o personales.

472.- Derecho *real* es el que tenemos en una cosa o contra una cosa sin relación a determinada persona.

El derecho en la cosa supone el dominio o un desmembramiento del dominio. El derecho contra la cosa puede ser constituido meramente por garantía; como sucede respecto de la prenda y la hipoteca. De los derechos reales nacen las acciones de la misma clase.

473.- Derechos personales son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la Ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales.

474.- Los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles, según la naturaleza de la cosa que es su objeto. Así, el derecho de usufructo sobre un inmueble, es inmueble. Así, la acción del comprador para que se le entregue la finca comprada, es inmueble; y la hipoteca, puesto que tiene por objeto una cantidad de dinero, es mueble.

475.- Los hechos que se deben se reputan muebles. La acción para que un artífice ejecute la obra convenida o resarza los daños y perjuicios causados por la inejecución del convenio, entra, por consiguiente, en la clase de los bienes muebles.

CAPITULO II

DE LOS BIENES CON RELACION A LAS PERSONAS

476.- Los bienes son de propiedad nacional o particular.

477.- Los bienes de propiedad nacional cuyo uso pertenece a todos los habitantes del Estado, se llaman *bienes nacionales de uso público o bienes públicos* del Estado.

Los bienes de propiedad nacional cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman *bienes privados del Estado o bienes fiscales*. (Artículos 1193, 1194 y 1668). (*)

(*) *Ver: artículo 485 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera y Normas Concordantes y Complementarias (TOCAF), aprobado por Decreto N° 194/997 de fecha 10 de junio de 1997, Título II, Capítulo I, artículo 68 y Decreto N° 107/999 de fecha 13 de abril de 1999.

478.- Son bienes nacionales de uso público:

1°.- Las calles, plazas y caminos públicos.

2°.- Los puertos, abras, ensenadas y costas del territorio oriental, en la extensión que determinen las leyes especiales.

3°.- Los ríos o arroyos navegables o flotables en todo o parte de su curso. Se entenderán por ríos y arroyos navegables o flotables aquellos cuya navegación o flote sea posible natural o artificialmente.

4°.- Las riberas de esos ríos o arroyos, en cuanto al uso que fuere indispensable para la navegación.

5°.- El agua corriente aun de los ríos no navegables o flotables, en cuanto al uso para las primeras necesidades de la vida, si hubiere camino público que la haga accesible.

6°.- Los puentes, canales y demás obras públicas, construidas y conservadas a expensas de la Nación. (*)

(*) *Ver: artículo 718 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera y Normas Concordantes y Complementarias (TOCAF), aprobado por Decreto N° 194/997 de fecha 10 de junio de 1997, Título II, Capítulo I, artículos 68 y 72 y Decreto N° 107/999 de fecha 13 de abril de 1999.

479.- El uso y goce que para el tránsito, riego, navegación y cualesquiera otros objetos lícitos, corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en el mar y sus riberas, en los ríos y arroyos y generalmente en todos los bienes nacionales de uso público, estarán sujetos a las disposiciones de este Código y leyes especiales.

480.- Los caminos construidos a expensas de personas particulares en tierras que les pertenecen, no son bienes nacionales, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos.

Es lo mismo de cualesquiera otras construcciones hechas a expensas de particulares y en sus tierras.

481.- Son bienes fiscales todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites del Estado, carecen de otro dueño. (*)

(*) *Ver: artículo 706 de esta norma.*

482.- Los bienes vacantes y los de las personas que mueren sin dejar

herederos, pertenecen también al Fisco; y, en general, es propiedad fiscal todo lo que por leyes especiales está declarado serlo o se declare en adelante. (Artículos 706, 708, 717, 1034, 1035 y 1036).

483.- La administración y enajenación de los bienes fiscales se rigen por leyes especiales; pero están sujetos a prescripción, conforme a lo dispuesto en el Título respectivo del Libro Tercero.

484.- La propiedad y uso de las minas, se rigen también por leyes y reglamentos especiales. (Artículo 748).

485.- Los bienes que no fueren de propiedad nacional (artículo 477) deberán considerarse como bienes particulares, sin hacerse distinción de las personas que tengan la propiedad de ellos, aunque sean personas jurídicas.

TÍTULO II

DEL DOMINIO

486.- El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho de gozar y disponer de una cosa arbitrariamente, no siendo contra la Ley o contra derecho ajeno.

487.- El derecho de gozar y disponer de una cosa comprende:

1°.- El derecho a todos los frutos que provienen de la cosa y a todo lo que se le una accesoriamente. (Artículos 731 y siguientes).

2°.- El de servirse de la cosa, no sólo para los usos a que está generalmente destinada, sino para los otros que estén en la voluntad del dueño.

3°.- El de cambiar la forma de la cosa, mejorándola o empeorándola.

4°.- El de destruir enteramente la cosa, si le conviene o le parece.

5°.- El de impedir a los demás que se sirvan de ella y reivindicarla de cualquier poseedor.

6°.- El de enajenar la cosa en todo o en parte, concediendo a otros los derechos que buenamente quiera.

488.- El ejercicio de esos derechos queda subordinado a las prohibiciones de las leyes o reglamentos y a la imperfección del dominio, resultante de las convenciones o de la voluntad del testador. (Artículos 489 y siguientes, 581, 601, 606, 612, 618, 620 y 715).

489.- El dominio o propiedad se considera como una calidad inherente a la cosa, como un vínculo real que la liga al dueño y que no puede romperse sin hecho suyo.

490.- Aun cuando el *derecho de poseer* está naturalmente ligado a la propiedad, puede, sin embargo, ésta subsistir *sin la posesión y aun sin el derecho de posesión*.

491.- Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de su autor y se regirán por leyes especiales. (Artículo 2363, número 13).

También se regirá por leyes especiales la propiedad horizontal.

492.- Nadie puede ser privado de su propiedad, sea mueble o raíz, sino por causa de pública utilidad, calificada por Ley, previa la correspondiente indemnización, sin perjuicio de lo que al respecto establezcan normas especiales.

TITULO III

DEL USUFRUCTO, USO Y HABITACION

CAPITULO I

DEL USUFRUCTO (*)

(*) *Ver: artículos 868 y 1626 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Decreto N° 252/998 de fecha 16 de setiembre de 1998, artículo 6.

493.- El usufructo es un derecho real que consiste en gozar de la cosa ajena, con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género o de pagar su valor, si la cosa es fungible.

El usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes, el del nudo propietario y el del usufructuario.

Tiene, por consiguiente, una duración limitada, al cabo de la cual pasa al nudo propietario y se consolida con la propiedad.

494.- El título constitutivo del usufructo determina los derechos y obligaciones del usufructuario. La ley no hace más que suplir el silencio del título, a no ser que expresamente declare otra cosa.

SECCION I

DE LOS MODOS DE CONSTITUIRSE EL USUFRUCTO

495.- El usufructo se puede constituir por la Ley, por acto entre vivos, por última voluntad y por prescripción. (Artículos 266, 269, 497, 1619 y 1664).

496.- En el usufructo constituido por acto entre vivos, no se adquiere derecho en la cosa sino por la subsiguiente *tradición*, según las reglas que se dan en el Título III del Libro Tercero.

En el que se deja por acto de última voluntad, se adquiere el derecho en la cosa luego que muere el testador.

497.- El usufructo se adquiere por prescripción, de la misma manera que el dominio y está sujeto a las mismas reglas.

498.- Se prohíbe constituir el usufructo a favor de dos o más personas, para que lo gocen alternativa o sucesivamente.

499.- Se puede constituir el usufructo a favor de dos o más personas que lo gocen simultáneamente por igual o según las cuotas determinadas por el constituyente.

500.- El usufructo puede constituirse puramente, bajo condición, desde o hasta cierto día (Artículos 1406, 1407 y 1433).

Cuando no se fija tiempo alguno para la duración del usufructo, se entenderá constituido por toda la vida del usufructuario.

501.- A favor de un pueblo, de una corporación o de un establecimiento público, no podrá constituirse el usufructo por más de treinta años.

Cesa el usufructo antes de los treinta años, si el pueblo queda yermo, la corporación se disuelve o el establecimiento público es suprimido.

SECCION II

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO

1º

De los derechos del usufructuario

502.- El usufructuario tiene derecho a percibir todos los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes usufructuados.

503.- Son frutos naturales, las producciones espontáneas de la tierra, las crías y demás productos de los animales.

Son frutos industriales, los que producen las heredades o fincas de cualquier clase, a beneficio del cultivo y del trabajo.

Son frutos civiles, los alquileres y arrendamientos de las fincas y heredades y los réditos del dinero. (*)

(*) *Ver: artículo 732 de esta norma.*

504.- Los frutos naturales o industriales, pendientes al tiempo de comenzar el usufructo, pertenecen al usufructuario.

Los pendientes al tiempo de acabar el usufructo, pertenecen al propietario.

Ni uno ni otro tienen que hacer abono alguno por razón de trabajo, semillas u otros gastos semejantes.

Esta disposición no perjudica a los colonos que tengan derecho a percibir alguna parte de frutos, al tiempo de comenzar o acabar el usufructo. (Artículo 1817 inciso 2º).

505.- Los frutos civiles pertenecen al usufructuario, a proporción del tiempo que dure el usufructo.

506.- El usufructo de renta vitalicia da también al usufructuario, mientras dure el usufructo, el derecho de percibir las pensiones que se devenguen, sin quedar obligado a restitución alguna. (Artículo 2191). (*)

(*) *Ver: artículo 527 de esta norma.*

507.- Si el usufructo se constituye sobre cosas fungibles, el usufructuario se hace dueño de ellas y el propietario viene a ser simple acreedor a la entrega de otras especies de igual cantidad y calidad o del valor que éstas tengan al tiempo de terminarse el usufructo.

508.- El usufructuario de cosas muebles, de las que se gastan y deterioran lentamente con el uso, tiene derecho a servirse de ellas según su naturaleza y destino; y al fin del usufructo, no es obligado a restituirlas sino en el estado en que se hallen, respondiendo solamente de aquellas pérdidas o deterioros que provengan de su dolo o culpa.

509.- El goce del usufructuario de una heredad se extiende a sus bosques y arboledas, pero con el cargo de conservarlos en un ser, reponiendo los árboles que derribe y respondiendo de su menoscabo, en cuanto no dependa de causas naturales o accidentes fortuitos.

510.- El usufructuario puede gozar del aumento que sobrevenga por aluvión a la cosa usufructuada, de las servidumbres y, en general, de todos los derechos de que gozaría el propietario. (Artículo 752).

Goza también de las canteras que se están explotando al empezar el usufructo; pero no de las que nuevamente se descubrieren ni del tesoro que se encontrare. (Artículo 721).

511.- El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, aunque sea a título gratuito; pero todos los contratos que como tal usufructuario celebre, se resuelven al fin del usufructo. (Artículo 1794).

512.- No tiene derecho el usufructuario a que se le abonen las mejoras que haya hecho en la cosa usufructuada; pero le será lícito alegarlas en compensación de los deterioros que se le puedan imputar o llevarse los materiales, si puede

separarlos sin detrimento de la cosa que es objeto del usufructo y el propietario no le abonase lo que después de separados valdrían.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las convenciones que hayan intervenido entre el usufructuario y el propietario, relativamente a mejoras o de lo que sobre esta materia se haya previsto en la constitución del usufructo.

513.- Siendo dos o más los usufructuarios, habrá entre ellos derecho de acrecer y durará la totalidad del usufructo hasta la expiración del derecho del último de los usufructuarios. Lo cual se entiende, si el constituyente no hubiese dispuesto que terminando un usufructo parcial, se consolide con la propiedad. (*)

(*) *Ver: artículo 1049 de esta norma.*

2º

De las obligaciones del usufructuario

514.- El usufructuario, antes de entrar en el goce de los bienes, está obligado:

1º.- A formar, con citación del dueño, un inventario solemne de todos ellos, haciendo tasar los muebles y constar el estado de los inmuebles.

2º.- A dar fianza bastante de que cuidará de las cosas como un buen padre de familia y las restituirá al propietario al terminarse el usufructo, no empeoradas ni deterioradas por su negligencia. (Artículo 2111).

Respecto de las cosas fungibles, la fianza será únicamente de restituir otro tanto de la misma especie y calidad.

515.- Cesa la obligación de afianzar:

1º.- En el caso del usufructo legal. (Artículo 269).

2º.- En el del donante que se reserva el usufructo de la cosa donada.

3º.- Cuando el que constituye el usufructo o bien el propietario, exonera expresamente de la fianza al usufructuario.

516.- No dando el usufructuario la fianza a que está obligado, dentro del plazo que el Juez le señale, a instancia del propietario, podrá éste pedir que los bienes raíces se arrienden y se pongan en administración, que los muebles se vendan y que los capitales o sumas de dinero y el precio de los bienes muebles, se pongan a interés con seguridad.

El precio de los arrendamientos, los intereses de los capitales y los productos de los bienes dados en administración, pertenecen al usufructuario, deducción hecha de los gastos.

517.- Si el usufructuario, aunque no haya dado la fianza, reclamare, bajo caución juratoria, la entrega de los muebles necesarios para su uso, el Juez podrá acceder a esta petición, consultando las circunstancias.

518.- El usufructuario podrá en todo tiempo reclamar la administración, dando fianza a que es obligado.

519.- Dada la fianza por el usufructuario, tendrá derecho a todos los frutos de los bienes que se hayan devengado, desde el día en que, conforme al título constitutivo del usufructo, debió comenzar.

520.- No es permitido al usufructuario cambiar el destino de un edificio ni dejar baldía una heredad que ha sido cultivada.

521.- El usufructuario que enajenase o diese a otro en arrendamiento su derecho de usufructo, es responsable del menoscabo que tengan los bienes, por culpa o negligencia de la persona que le sustituye.

522.- El usufructuario de ganados o rebaños es obligado a reponer los animales que mueren o se pierden, pero sólo con las crías de los mismos ganados o rebaños; salvo que la muerte o pérdida fuesen imputables a su hecho o culpa, pues en este caso deberá indemnizar al propietario.

Si el ganado o rebaño perece del todo por efecto de una epidemia u otro caso fortuito, el usufructuario no está obligado a reponer los animales perdidos y cumplirá con entregar los despojos que hayan podido salvarse.

Si el ganado o rebaño perece en parte, también por un accidente y sin culpa del usufructuario, tendrá éste la opción a continuar en el usufructo, reemplazando las reses que faltan o a cesar en él, entregando las que no hayan perecido y los despojos que se hayan salvado de las muertas.

523.- El usufructuario no está obligado sino a los reparos menores y de simple conservación de la cosa.

Los reparos mayores son de cuenta del propietario, que los hará si le

conviene; pero el usufructuario está en la obligación de darle aviso, siempre que sea urgente la necesidad de hacer aquéllos.

Se entiende por reparos mayores, los extraordinarios y que convienen a la utilidad permanente de la finca, como las paredes principales, techos o bóvedas tratándose de edificios. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Decreto N° 123/997 de fecha 12 de marzo de 1997, artículo 5.*

524.- Si el propietario se presta a los reparos mayores, no podrá impedirlos el usufructuario, el cual deberá pagarle sobre los dineros invertidos en ellos y mientras dure el usufructo, el interés medio que produzcan los capitales empleados en fincas de igual naturaleza.

Rehusando el propietario hacer los reparos referidos, podrá el usufructuario para salvar la cosa usufructuada y con ella su usufructo, hacerlos a su costa y el propietario se los reembolsará sin interés, fenecido el usufructo.

525.- El pago de las cargas o contribuciones periódicas y el de las que en el uso se consideran gravámenes de los frutos, son de cuenta del usufructuario durante el tiempo de su goce.

526.- Las contribuciones que durante el usufructo se impongan directamente sobre el capital, son de cargo del propietario.

Si éste las pagase, deberá el usufructuario abonarle los intereses correspondientes a las sumas que en dicho concepto hubiere pagado y si las anticipase el usufructuario, tendrá derecho a recibir su importe sin interés, al fin del usufructo.

527.- El usufructuario universal de toda la herencia debe pagar por entero el legado de renta vitalicia o pensión de alimentos. (Artículo 506).

El usufructuario de una parte alícuota de la herencia, la pagará en proporción a su cuota.

En ambos casos no queda obligado el propietario al reembolso.

El usufructuario de una o más cosas particulares sólo pagará el legado, cuando la renta o pensión fuese constituida determinadamente sobre ellas (Artículos 780, 857, 905 y 1149). (*)

(*) *Ver: artículos 529, 1170 y 1174 de esta norma.*

528.- El usufructuario de una finca hipotecada no está obligado a pagar ni aun los intereses de las deudas para cuya seguridad se constituyó la hipoteca (Artículos 905, 909, 1175 y 1176).

Si la finca se embarga o vende judicialmente para su pago, el propietario responde al usufructuario de lo que pierda por este motivo. (*)

(*) *Ver: artículo 1168 de esta norma.*

529.- Si el usufructo es de una herencia o de una parte alícuota de ella, el usufructuario podrá anticipar las sumas que para el pago de las deudas hereditarias correspondan a los bienes usufructuados y tendrá derecho a exigir del propietario su restitución sin interés al terminar el usufructo.

Negándose el usufructuario a hacer esta anticipación, el propietario podrá hacer que se venda la parte de bienes que baste para el pago de la cantidad que le corresponda satisfacer, según la regla establecida en el párrafo precedente.

Si el propietario hiciere la anticipación de su dinero, deberá el usufructuario abonarle los intereses correspondientes, mientras dure el usufructo. (Artículos 1170 y 527). (*)

(*) *Ver: artículo 910 de esta norma.*

530.- De cualquier modo que se perturben por un tercero los derechos del propietario, el usufructuario está obligado a ponerlo en conocimiento de aquél; y en otro caso, responde de todos los daños que al propietario le resulten, como si hubiesen sido causados por su culpa. (Artículo 667).

531.- El usufructuario es obligado a respetar los arriendos de la cosa fructuaria, contratados por el propietario antes de constituirse el usufructo por acto entre vivos o de fallecer la persona que lo ha constituido por testamento. (Artículo 1792).

En tal caso, el usufructuario sucede en la percepción de la renta o pensión desde que empieza el usufructo.

532.- Las costas, costos y condenas de los pleitos sostenidos sobre el usufructo, son de cuenta del usufructuario.

SECCION III**DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO**

533.- El propietario no puede turbar ni poner obstáculo alguno al goce del usufructuario. (*)

(*) *Ver: artículo 623 de esta norma.*

534.- No puede cambiar ni alterar el estado de la cosa usufructuada ni aun para mejorarla.

Sin embargo, puede aun contra la voluntad del usufructuario, ejecutar todos los actos que tiendan a la conservación de aquélla.

535.- Puede enajenar la nuda propiedad de la cosa, sin que por eso se alteren los derechos del usufructuario.

536.- Cuando a la cosa usufructuada se debe alguna servidumbre, no puede remitirla el propietario, a no ser con consentimiento expreso del usufructuario.

SECCION IV**DE LOS MODOS DE EXTINGUIRSE EL USUFRUCTO**

537.- El usufructo acaba:

1°.- Por la muerte del usufructuario.

2°.- Por conclusión del tiempo por que fue otorgado o cumplimiento de la condición resolutoria.

3°.- Por consolidación del usufructo con la propiedad.

4°.- Por el no uso, durante el tiempo y conforme a las reglas establecidas en el Título *de la prescripción*.

5°.- Por la renuncia del usufructuario.

Los acreedores de éste, podrán, sin embargo, hacer que se anule la renuncia hecha con fraude y en perjuicio suyo. (Artículo 1296).

6°.- Por la destrucción real y completa de la cosa que era objeto del usufructo. (*)

Si la cosa, objeto del usufructo, no sufre más que una destrucción parcial, el derecho continúa sobre lo que de ella haya quedado.

(*) *Ver: artículo 539 de esta norma.*

538.- El usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en llegar a cierta edad, dura el número de años prefijado, aunque el tercero muera antes.

539.- Si la cosa usufructuada no es más que un edificio y éste se destruye por incendio, se arruina de viejo o perece por algún otro accidente, cesará para siempre el usufructo y no tendrá derecho el usufructuario a gozar del solar ni de los materiales. (Artículo 537 número 6).

Si el usufructo ha sido constituido sobre una heredad, de la cual el edificio destruido forme parte, el usufructuario podrá gozar del solar y de los materiales.

540.- El usufructo no se extingue por el mal uso que el usufructuario haga de las cosas usufructuadas; pero si el abuso es grave (artículo 1319) el propietario puede pedir que se le ponga en posesión de los bienes, obligándose bajo de fianza a pagar periódicamente al usufructuario el producto líquido de los mismos, por el tiempo que dure el usufructo y deducido el honorario de administración que el Juez le señale.

CAPITULO II

DEL USO Y DE LA HABITACION (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Decreto N° 252/998 de fecha 16 de setiembre de 1998, artículo 6.*

541.- El derecho de uso es un derecho real que consiste en servirse de la cosa de otro o de exigir una porción de los frutos que ella produce.

El derecho de habitación es también un derecho real y consiste en habitar gratuitamente la casa de otro.

542.- Los derechos de uso y habitación, se constituyen y pierden de la misma manera que el usufructo.

543.- Ni el usuario ni el habitador estarán obligados a prestar fianza.

Sin embargo, el habitador es obligado a inventario; y la misma obligación tiene el usuario, si el uso se constituye sobre cosas que deben restituirse en especie.

544.- Los derechos de uso y de habitación se determinan por el título constitutivo, recibiendo más o menos extensión, según sus disposiciones.

Si el título no se explica en cuanto a la extensión de esos derechos, se entienden de la manera siguiente.

545.- El uso y la habitación se limitan a las necesidades personales del usuario o del habitador.

En las necesidades personales del usuario o del habitador se comprenden las de su familia.

La familia comprende el cónyuge y los hijos legítimos y naturales reconocidos o declarados tales, tanto los que existen al tiempo de constituirse el derecho, como los que sobrevienen después.

Comprende asimismo el número de sirvientes necesarios para la familia.

Comprende, además, las personas que a la misma fecha vivían con el habitador o usuario y a costa de éstos; y las personas a quienes éstos deben alimentos.

546.- En las necesidades personales del usuario o del habitador no se comprenden las de la industria o tráfico en que se ocupa.

Así, el usuario de animales no podrá emplearlos en el acarreo de los objetos en que trafica ni el habitador servirse de la casa para tiendas o almacenes.

Se exceptúa de esta regla el caso en que la cosa sobre que se concede el derecho, por su naturaleza y uso ordinario y por su relación con la profesión o industria del que ha de ejercerla, aparezca destinada a servirle en ellas.

547.- El usuario de una heredad tiene solamente derecho a los objetos comunes de alimentación y combustible.

Está obligado a recibir éstos del dueño o a tomarlos con su permiso.

548.- El usuario y el habitador deben usar de los objetos comprendidos en sus respectivos derechos, con la moderación y cuidado propios de un buen padre de familia; y están obligados a contribuir a las expensas ordinarias de conservación y cultivo, a prorrata del beneficio que reporten.

549.- Los derechos de uso y habitación son intransmisibles a los herederos y no pueden cederse a ningún título, prestarse ni arrendarse. (Artículo 2363 numeral 8°).

Ni el usuario ni el habitador, pueden arrendar, prestar o enajenar objeto alguno de aquellos a que se extiende el ejercicio de su derecho.

Pero bien pueden dar los frutos que les está permitido consumir en sus necesidades personales. (*)

(*) *Ver: artículo 1777 de esta norma.*

TITULO IV

DE LAS SERVIDUMBRES

CAPITULO I

DE LAS SERVIDUMBRES EN GENERAL

550.- Servidumbre *predial*, o simplemente *servidumbre*, es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño.

Se llama predio *sirviente* el que sufre el gravamen y predio *dominante* el que reporta la utilidad.

Con respecto al predio dominante la servidumbre se llama *activa* y con respecto al predio sirviente, *pasiva*.

551.- Las servidumbres son *continuas* o *discontinuas*.

Las primeras son aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin necesidad de un hecho actual del hombre, como las servidumbres de luces y otras de la misma especie.

Las segundas son aquellas que se ejercen a intervalos más o menos largos de tiempo y suponen un hecho actual del hombre, como la servidumbre de tránsito y otras de esta clase.

552.- Son *aparentes*, las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos a su uso y aprovechamiento, como una puerta, una ventana, un cauce, u otras semejantes.

Son servidumbres *no aparentes*, las que no presentan signos exteriores de su existencia, como el gravamen de no edificar en cierto lugar, el de no levantar un edificio sino a una altura determinada y otros parecidos.

553.- Las servidumbres son inseparables del predio a que activa o pasivamente pertenecen.

554.- Las servidumbres son indivisibles: dividido el predio sirviente, no varía la servidumbre que estaba constituida en él, y deben sufrirla aquél o aquéllos a quienes toque la parte en que se ejercía.

Dividido el predio dominante, cada uno de los nuevos dueños gozará de la servidumbre, pero sin aumentar el gravamen del predio sirviente.

Así los nuevos dueños del predio que goza de una servidumbre de tránsito, no pueden exigir que se altere la dirección, forma, calidad o anchura de la senda o camino destinado a ella.

555.- Las servidumbres provienen de la ley o de la voluntad de los propietarios.

556.- Las servidumbres legales tienen por objeto la utilidad general o de un pueblo o de los particulares.

557.- Las servidumbres legales que tienen por objeto el interés de los particulares, pueden ser derogadas o modificadas por la voluntad de éstos.

CAPITULO II

DE LAS SERVIDUMBRES LEGALES

SECCION I

DE LAS SERVIDUMBRES DE AGUAS

558 a 580.-

LOS ARTICULOS 558 A 580 INCLUSIVE (que corresponden a esta Sección I del Cap. II del Título IV del Libro 2o.) HAN SIDO

**DEROGADOS POR EL DECRETO-LEY 14.859 (CODIGO DE AGUAS)
de 15.12.78 (*)**

() Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986. La referencia se entiende realizada al Decreto-Ley N° 14.859 de fecha 15 de diciembre de 1978, artículo 198.*

SECCION II**DE LA SERVIDUMBRE DE PASO**

581.- El propietario de un predio enclavado y que no tiene salida a la calle o camino público, puede reclamar paso por los predios vecinos para la explotación del suyo, pagando el valor del terreno necesario y resarciendo todo otro perjuicio.

582.- La servidumbre de paso debe darse por el punto menos perjudicial al predio sirviente y en cuanto sea conciliable con esta regla, por donde sea menor la distancia del predio dominante a la calle o camino público.

583.- La anchura de la servidumbre de paso será la que baste a las necesidades del predio dominante.

584.- Si las partes no se convienen, se reglará por peritos, tanto el importe de la indemnización, como el ejercicio de la servidumbre.

585.- La acción para reclamar la indemnización el dueño del predio sirviente, es prescriptible; pero aunque prescribiere, subsistirá la servidumbre obtenida.

586.- Si obtenida la servidumbre de paso, en conformidad a los artículos precedentes, deja de ser indispensable para el predio dominante por la adquisición de otros terrenos que le dan un acceso cómodo al camino o por otro medio, el dueño del predio sirviente tendrá derecho para pedir que se le

exonere de la servidumbre, restituyendo lo que, al establecerse ésta, se hubiere pagado por el valor del terreno.

587.- Si se vende o permuta alguna parte de un predio o si se adjudica a cualquiera de los que lo poseían *pro indiviso* y en consecuencia esta parte viene a quedar separada del camino, se entenderá concedida a favor de ella una servidumbre de paso sin indemnización alguna. (Artículo 931).

588.- Si el camino público se pusiere accidentalmente intransitable, sea cual fuere la causa, los propietarios contiguos deberán dar paso por su fundo, durante el tiempo indispensable para la compostura del camino; salvo el derecho a ser indemnizados convencionalmente o a juicio de peritos por la respectiva Intendencia Municipal.

SECCION III

SERVIDUMBRES DE DEMARCACION, CERRAMIENTO Y MEDIANERIA

589.- La ley sujeta a los propietarios colindantes a diferentes obligaciones recíprocas, independientes de toda convención.

590.- Todo propietario tiene derecho a que se fijen los límites que separan su predio de los colindantes y podrá exigir de los respectivos dueños que concurren a ello, haciéndose la demarcación o amojonamiento a expensas comunes.

591.- También tendrá derecho si se ha quitado alguno de los mojones que deslindan su heredad, para pedir que el que lo ha removido lo reponga a su costa y le indemnice de los daños que la remoción le haya causado.

Se entiende por mojón, en general, cualquiera separación natural o artificial que señale el linde o línea divisoria de dos heredades contiguas.

592.- La mensura de un campo, sea o no protestada, no prueba *por sí sola* posesión ni cambia el rol que las partes deban tener respectivamente en el juicio de propiedad. (Artículo 666).

593.- Todo propietario puede cerrar o cercar por todas partes su terreno, sin perjuicio de las servidumbres constituidas a favor de otros predios o por leyes especiales.

594.- En los pueblos, villas, ciudades o sus arrabales, cualquier propietario puede obligar a su colindante a que contribuya a la construcción o refacción de la divisoria entre sus edificios, patios, corrales o jardines.

La altura de la divisoria se determinará por los reglamentos que puedan existir y por la costumbre constante y reconocida.

A falta de reglamentos o de costumbre, la divisoria que se construya o refaccione, tendrá tres metros de altura por lo menos. (*)

(*) *Ver: artículos 595 y 605 de esta norma.*

595.- La disposición del artículo precedente no es aplicable a los terrenos cultivados o incultos que pueda haber en los arrabales, al lado de casas o jardines.

596.- Se entiende por arrabales, la continuidad de casas fuera del radio de una ciudad.

Se acaban los arrabales, cuando cesa la continuidad.

597.- El vecino que no quiera contribuir a los gastos de cerramiento o divisoria, puede librarse de ellos cediendo la mitad del espacio en que ha de levantarse el cerco o pared y renunciando la medianería.

598.- Toda pared divisoria en la población o el campo se presume medianera, si no consta ni hay señal de lo contrario.

Hay señal de no ser medianera, cuando no hay edificios sino de un lado de la pared, sin que existan vestigios de que los haya habido del otro. En tal caso, se presume pertenecer la pared al dueño del edificio.

599.- La compostura y reedificación de la pared medianera son de cargo de los que a ella tienen derecho proporcionalmente al que a cada uno corresponda.

Sin embargo, todo condómino de pared medianera puede eximirse de contribuir a la compostura y reedificación, cediendo la medianería, siempre que la pared medianera no sostenga edificio que le pertenezca.

600.- Para obligar al vecino a la compostura o reedificación, no es necesario que la pared medianera amenace ruina; basta que su estado sea tal que la refacción sea necesaria.

No estando de acuerdo los vecinos en cuanto a la necesidad de la refacción o reedificación, se nombrarán peritos.

601.- El condómino de pared medianera puede edificar contra ella y meter vigas o tirantes en todo el ancho de la pared, menos un decímetro; salvo el derecho que el vecino tiene de reducir esos maderos, sin dislocarlos, a la mitad de la pared, en caso que quiera colocar otros maderos en el mismo paraje o hacer una chimenea.

602.- El condómino puede alzar la pared medianera, en cuanto lo permitan los reglamentos generales o locales, sujetándose a las reglas siguientes:

1°.- La nueva obra será enteramente a su costa.

2°.- Pagará al vecino a título de indemnización por el aumento de peso que va a cargar sobre la pared medianera, la sexta parte de lo que valga la nuevamente levantada.

3°.- Pagará la misma indemnización todas las veces que se trate de reconstruir la pared medianera.

4°.- Será obligado a elevar a su costa las chimeneas del vecino, situadas en la pared medianera.

5°.- Si la pared medianera no es bastante sólida para soportar el aumento de peso, la reconstruirá a su costa, indemnizando al vecino por la remoción y reposición de todo lo que por el lado de éste cargaba sobre la pared o estaba adherido a ella.

6°.- Si reconstruyendo la pared medianera, fuese necesario aumentar su espesor, se tomará este aumento sobre el terreno del que construya la obra nueva.

7°.- El vecino podrá en todo tiempo adquirir la medianería de la parte nuevamente levantada, pagando la mitad del costo total de ésta y el valor de la mitad del terreno sobre que háyase extendido la pared medianera, según el inciso anterior.

603.- Todo propietario colindante tiene el derecho de hacer medianera la pared en todo o en parte, aun sin consentimiento del dueño, abonándole la mitad de su valor actual o la mitad del valor actual de la parte que

quiera hacer medianera y la mitad del valor del terreno en que está edificada la pared. (*)

(*) *Ver: artículo 604 de esta norma.*

604.- El derecho de adquirir la medianería no existe cuando el dueño de la pared ha adquirido servidumbre de no impedir la luz o la vista.

En tal caso, sólo podrá usarse del derecho concedido por el artículo anterior, hasta la altura de las ventanas o balcones de la servidumbre.

605.- El dueño de la pared no puede obligar a la colindante a que le compre la medianería o le abone la mitad de la pared; lo que se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 594.

606.- El condueño no puede hacer en la pared medianera obra alguna que disminuya su espesor ni cargar sin anuencia del otro.

En caso de negativa, se hará determinar por peritos el medio necesario para que la obra nueva no perjudique los derechos del colindante.

607.- Cuando no hay constancia ni señal en contrario, se presumen medianeras las zanjas que existen entre dos heredades.

608.- Hay señal en contrario, cuando la tierra que se ha sacado de la zanja, se encuentra sólo de un lado.

Se considera en tal caso, que la zanja pertenece exclusivamente a aquel de cuyo lado está la tierra.

Exceptúase de la disposición precedente, el caso en que el terreno de cuyo lado se encontrase la tierra, se hubiera poblado mucho después del inmediato.

609.- La zanja medianera debe ser refaccionada a costa de ambos colindantes.

610.- Todo cerco divisorio se reputa medianero, a menos que sólo una de las heredades haya estado cercada o exista título o posesión por el tiempo necesario para prescribir el dominio.

611.- Los árboles del cerco medianero son comunes como el cerco.

Cualquiera de los dos condueños puede pedir que se derriben dichos árboles, probando que de algún modo le dañan; y si por algún accidente se destruyen, no se repondrán sin su consentimiento.

SECCION IV

DE LA DISTANCIA Y OBRAS INTERMEDIAS QUE SE REQUIEREN PARA CIERTAS CONSTRUCCIONES Y PLANTACIONES

612.- Nadie puede construir cerca de una pared, sea o no medianera, pozo, letrina, caballeriza, horno, fogón, artefactos que se muevan por el vapor u otra fábrica de que pueda resultar daño a los edificios o heredades vecinas, sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos generales o locales o sin construir las obras de resguardo necesarias y con sujeción, en el modo, a todas las condiciones que los mismos reglamentos previenen. Esta prohibición se extiende a los depósitos de pólvora, de materias húmedas o infectas y de todo lo que pueda dañar a la solidez, seguridad y salubridad de los edificios.

A falta de reglamentos generales o locales, se recurrirá a juicio pericial.

613.- Cerca de las paredes de una casa ajena, no es permitido plantar árboles a menor distancia que la de quince decímetros ni hortalizas o flores a menos distancia que la de cinco decímetros.

Si los árboles fueren de los que extienden muy lejos sus raíces, el mínimum de la distancia será de cuatro metros.

Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen las plantaciones hechas en contravención de lo dispuesto por este artículo.

614.- Aunque un árbol esté plantado a la debida distancia, si extiende sus ramas sobre suelo ajeno o penetra en él con sus raíces, podrá el propietario del suelo invadido exigir que se corte el excedente de aquéllas y éstas o cortarlo él mismo.

615.- Todo lo concerniente a mantener expedita la navegación de los ríos, la conservación y reparación de los caminos y otras obras públicas, se determina por leyes o reglamentos especiales.

SECCION V

DE LAS LUCES Y VISTAS EN LA PARED DEL VECINO

616.- No se puede abrir ventana o claraboya de ninguna clase en una pared medianera, sin consentimiento del condueño.

617.- El dueño de pared divisoria, no medianera, puede abrir ventanas o claraboyas, con tal que estén guarnecidas por rejas de hierro y de una red de alambre y que disten del piso de la vivienda a que se quiera dar luz, tres metros a lo menos.

El vecino no puede impedir que esas ventanas o claraboyas se abran en pared que no le pertenece; pero lo podrá hacer, si compra la medianería o, no habiendo prescripción, levanta pared en su terreno que cubra dichas ventanas o claraboyas.

618.- No pueden abrirse ventanas ni balcones que den vista a las habitaciones, patios o corrales del predio vecino, cerrado o no, a menos que intervenga una distancia de tres metros.

La distancia se medirá entre el plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana o balcón y el plano vertical de la línea divisoria de los dos predios en el punto en que dichas líneas se estrechen más, si no son paralelas.

SECCION VI

DEL DESAGÜE DE LOS EDIFICIOS

619.- No hay servidumbre legal de aguas pluviales.

Todo propietario debe disponer los techos de su edificio, de manera que las aguas pluviales caigan en su terreno con salida o sin ella a la calle; no puede hacerlas caer en el predio del vecino, sin consentimiento de éste.

SECCION VII

DE LA OBLIGACION DE PREVENIR UN DAÑO QUE AMENAZA

620.- Si un edificio o pared amenazare ruina, podrá el propietario ser obligado a su demolición o a ejecutar las obras necesarias para evitar que se arruine.

Si no cumpliera el propietario, la autoridad podrá hacerlo demoler a costa de aquél.

Lo mismo se observará, cuando algún árbol corpulento amenazare caerse.

CAPITULO III

DE LAS SERVIDUMBRES VOLUNTARIAS

SECCION I

DE LOS QUE PUEDEN CONSTITUIR SERVIDUMBRES

621.- Cada cual podrá constituir en su predio las servidumbres que quiera y adquirirlas sobre los predios vecinos, con la voluntad de sus propietarios, con tal que no se dañe con ellas al orden público ni se contravenga a las leyes.

622.- Se requiere, en el que ha de constituir servidumbre, que tenga la libre administración de sus bienes.

Sin embargo, para otorgarla en testamento, basta que el propietario tenga la edad en que se adquiere la facultad de testar. (Artículo 831).

623.- El que sólo tiene la nuda propiedad de un fundo o sin el usufructo, no puede constituir servidumbre sin consentimiento del usufructuario. (Artículo 533).

624.- Los que sólo tienen dominio resoluble, como el que ha comprado con pacto de retroventa, aquel a quien se ha legado un fundo bajo condición no realizada y otros semejantes, pueden otorgar servidumbre; pero queda sin efecto, desde que se resuelve el derecho del constituyente.

625.- El comprador de un fundo, aunque no se haya verificado la tradición, puede al tiempo del contrato otorgar servidumbre en favor del fundo del vendedor o de un tercero.

626.- El dueño de un fundo hipotecado puede constituir servidumbre; pero si por tal motivo bajase el valor de aquél, de modo que perjudique al acreedor, tendrá derecho éste para hacer que se venda el fundo libre de la servidumbre.

627.- El dueño del predio sirviente puede imponerle servidumbre del mismo género o de diverso, con tal que no perjudique los derechos adquiridos por el dueño del predio dominante.

628.- El comunero proindiviso no puede establecer válidamente servidumbre sin el consentimiento expreso de sus condóminos.

629.- No concediéndose la servidumbre a la persona sino al fundo, pueden adquirirla los poseedores de éste, sean de buena o mala fe.

Pueden igualmente adquirirla los que no gozan de la libre administración de sus bienes y los administradores de bienes ajenos en provecho de éstos.

630.- Puede adquirirse la servidumbre en favor de un fundo que se tiene la esperanza de poseer; pero es una adquisición condicional que desaparece, si la esperanza no se realiza.

SECCION II

COMO SE CONSTITUYEN LAS SERVIDUMBRES

631.- Los predios todos se presumen libres, hasta que se pruebe la existencia de la servidumbre.

632.- Las servidumbres continuas y aparentes a la vez pueden constituirse en virtud de título, es decir, de convención o última voluntad o en virtud de la prescripción adquisitiva, con arreglo a lo determinado en el Título respectivo del Libro Tercero de este Código. (*)

(*) *Ver: artículo 638 de esta norma.*

633.- Las servidumbres discontinuas de todas clases y las continuas no aparentes, sólo pueden constituirse en virtud de título.

La posesión, aun la inmemorial, no basta para establecerlas. (*)

(*) *Ver: artículos 634, 1195 y 1211 de esta norma.*

634.- El título constitutivo de las servidumbres que no pueden adquirirse por sólo la posesión, según el artículo precedente, puede suplirse por el reconocimiento expreso del dueño actual del predio sirviente.

635.- La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos predios, establecido por el propietario de ambos, se considera también como título para que la servidumbre continúe activa y pasivamente, a no ser que al tiempo de separarse la propiedad de los dos predios, se exprese lo contrario en el título de la enajenación de cualquiera de ellos. (*)

(*) *Ver: artículo 643 nral. 1º de esta norma.*

636.- En las servidumbres constituidas por convención, no se adquiere el derecho en la cosa, sino por la subsiguiente tradición o sea el uso del derecho otorgado.

En las otorgadas por última voluntad, se adquiere sin tradición, al instante de la muerte del testador.

637.- Al constituirse una servidumbre, se entienden concedidos todos los derechos necesarios para su uso.

Así, el que concede al vecino el derecho de sacar agua de una fuente situada en su heredad, le concede el derecho de tránsito para venir a ella, aunque no se haya establecido en el título.

SECCION III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DUEÑOS DE PREDIOS DOMINANTES Y SIRVIENTES

638.- La extensión de las servidumbres voluntarias se determina por el título o la prescripción de que habla el artículo 632 y en defecto de aquél o de ésta, por las disposiciones siguientes.

639.- El que goza de una servidumbre puede hacer las obras indispensables para ejercerla; pero a su costa, si no se ha establecido lo contrario; y aun cuando el dueño del predio sirviente se haya obligado a hacerlas o repararlas,

se podrá exonerar de la obligación, abandonando la parte del predio en que deben hacerse o conservarse las obras.

640.- El dueño del predio dominante debe usar de la servidumbre con moderación, conformándose a la naturaleza de su título y sólo para las necesidades de su predio. No puede hacer ni en el predio sirviente ni en el dominante, alteraciones que agraven la condición del primero.

641.- El dueño del predio sirviente tampoco puede alterar, disminuir ni hacer menos cómoda para el predio dominante la servidumbre con que está gravado el suyo.

Sin embargo, si por el transcurso del tiempo llegare a serle más oneroso el modo primitivo de la servidumbre, podrá proponer que se varíe a su costa; y si las variaciones no perjudican al predio dominante, deberán ser aceptadas.

642.- Si al establecerse una servidumbre de tránsito, no se hubiese pactado el ancho que deba tener la senda, carrera o camino, se entenderá que la primera debe tener un metro, cuatro metros la segunda y ocho el tercero.

En la parte en que la senda, carrera o camino haga recodo, los espacios serán dobles respectivamente.

SECCION IV

COMO SE EXTINGUEN LAS SERVIDUMBRES

643.- Las servidumbres se extinguen:

1°.- Por la consolidación o confusión, reuniéndose en una misma persona la propiedad de los predios sirviente y dominante.

Así, cuando el dueño de uno de los predios compra el otro, perece la servidumbre; y si por una nueva venta se separan, no revive, salvo lo dispuesto en el artículo 635.

2°.- Por la remisión o renuncia del dueño del predio dominante.

3°.- Por la resolución del derecho del que ha constituido la servidumbre.

4°.- Por la llegada del día o de la condición, si se ha constituido de uno de estos modos.

5°.- Por el no uso durante diez años.

En las servidumbres discontinuas corre el tiempo desde que han dejado de usarse; en las continuas, desde que se haya ejecutado un acto contrario a la servidumbre. (*)

6°.- Por venir los predios a tal estado, que no pueda usarse de la servidumbre; pero ésta revivirá, si en lo sucesivo el estado de los predios permitiera usar de ella, a no ser que, después de establecida la posibilidad del uso, hayan transcurrido los diez años prescritos por el inciso anterior.

(*) *Ver: artículo 1215 de esta norma.*

644.- El modo de ejercer la servidumbre puede prescribirse como la servidumbre misma y de la misma manera.

645.- Si el predio dominante pertenece a varios *pro indiviso*, el uso que haga uno de ellos de la servidumbre, impide la prescripción con respecto a los demás.

Si entre los condóminos, hay alguno contra quien, por leyes especiales, no haya podido correr la prescripción, por ejemplo, un menor, éste conservará el derecho de todos los demás.

TITULO V

DE LA POSESION (*)

(*) *Ver: artículo 1233 de esta norma.*

CAPITULO I

DE LA NATURALEZA DE LA POSESION Y DE SUS EFECTOS Y VICIOS

646.- La posesión es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho por nosotros mismos con ánimo de dueños o por otro en nombre nuestro. (*)

(*) *Ver: artículos 1195 y 1206 de esta norma.*

647.- La toma de posesión se verifica por la aprehensión efectiva; esto es, haciendo sobre la cosa un acto material de los que sólo corresponden al dueño.

En la posesión transmitida, el principio enunciado admite excepciones según las diversas especies de *tradición* de que se habla en el título respectivo del Libro siguiente. (Artículo 1039). (*)

(*) *Ver: artículo 1206 de esta norma.*

648.- La posesión puede tomarse, no sólo por el que trata de adquirirla para sí, sino por su mandatario o por sus representantes legales. (Artículo 1199).

649.- La posesión da diferentes derechos al que la tiene:

1°.- Se le presume dueño, mientras no se pruebe lo contrario.

2°.- Puede instaurar las acciones posesorias, con sujeción a lo que se dispone en el capítulo siguiente.

3°.- El que ha poseído tranquila y públicamente por un año completo, sin interrupción, adquiere el *derecho de posesión* y se excusa de responder sobre ésta. (Artículo 1196). (*)

4°.- Hace suyos los frutos percibidos hasta el día de la contestación de la demanda, cuando posee de buena fe.

5°.- Puede prescribir el dominio y demás derechos reales, concurriendo las circunstancias requeridas por la Ley.

6°.- Perdida la posesión, puede usar de la acción reivindicatoria, aunque no sea dueño, contra el que posea la cosa con título inferior al suyo.

(*) *Ver: artículo 654 de esta norma.*

650.- Son posesiones viciosas relativamente al despojado: 1°.- la violenta; 2°.- la clandestina.

651.- Posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza. Esta puede ser actual o inminente.

652.- El que en ausencia del dueño se apodera de la cosa y volviendo el dueño lo repele, es también poseedor violento.

Existe el vicio de la violencia, sea que se haya empleado contra el verdadero dueño de la cosa o contra el que la poseía sin serlo o contra el que la tenía en lugar o a nombre de otro.

Lo mismo es que la violencia se ejecute por una persona o por sus agentes y que se ejecute con su consentimiento o que después de ejecutada se ratifique expresa o tácitamente. (Artículo 1198).

653.- Se llama *mera tenencia* la del arrendatario, secuestre, comodatario, acreedor prendario y demás que tienen una cosa en lugar y a nombre de otro. La posesión es de la persona de quien la cosa tienen. (Artículo 1199). (*)

(*) *Ver: artículos 667 y 1195 de esta norma.*

654.- El que ha empezado a tener la cosa como *poseedor*, se presume que continúa en el mismo concepto, mientras no se pruebe lo contrario.

El que ha empezado por la *mera tenencia* de la cosa, se presume continuar como mero tenedor hasta la prueba contraria.

Si alguien prueba haber poseído anteriormente y poseer actualmente, se presume la posesión en el tiempo intermedio, sin perjuicio de la prueba contraria. (Artículos 649, inciso 3º, 663, 1195 y 1196).

655.- Se pierde la posesión de dos modos: por usurpación de un tercero o por el abandono voluntario y formal del poseedor.

656.- La posesión de la cosa mueble no se entiende perdida, mientras se halla bajo el poder del poseedor, aunque éste ignore accidentalmente su paradero.

657.- El que recupera legalmente la posesión perdida, se entenderá haberla tenido durante todo el tiempo intermedio. (*)

(*) *Ver: artículo 1233 nral. 2º de esta norma.*

CAPITULO II

DE LAS ACCIONES POSESORIAS (*)

(*) *Ver: artículo 1802 de esta norma.*

658.- Las acciones posesorias se dirigen a conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos.

659.- Sobre los objetos que no pueden adquirirse por prescripción, como las servidumbres inaparentes o discontinuas, no puede haber acción posesoria.

660.- El heredero tiene y está sujeto a las mismas acciones posesorias que tendría y a que estaría sujeto su autor, si viviese. (Artículos 776 y 1039).

661.- El que ha sido turbado en su posesión o privado injustamente de ella, tiene derecho para pedir que se le ampare o restituya con indemnización de costas, costos, daños y perjuicios. (*)

(*) *Ver: artículos 668 y 669 de esta norma.*

662.- La acción que tiene por objeto conservar la posesión, prescribe al cabo de un año completo, contado desde el acto de la perturbación.

La que tiene por objeto recuperar la posesión expira por igual término, contado desde que el poseedor anterior la ha perdido.

Si la nueva posesión ha sido violenta o clandestina, se contará el año desde que haya cesado la violencia o clandestinidad.

663.- Cuando la acción para conservar la posesión se dirigiese contra el anterior poseedor, deberá probar el que la instaure, que ha poseído tranquila y públicamente a lo menos por un año completo.

Esta misma prueba deberá hacer el que instaure la acción para recuperar la posesión contra el despojante o sucesor de éste que tuviese la calidad de anterior despojado respecto del actor.

Fuera de los casos expresados en este artículo, el que instaure la acción posesoria sólo tendrá que probar que era poseedor en el momento de la perturbación o del despojo.

664.- El reo será siempre citado y si compareciere, se le oirá, pero el juicio no perderá en manera alguna su calidad de extraordinario. (*)

(*) *Ver: artículo 670 de esta norma.*

665.- En los juicios posesorios no se tomará en cuenta el dominio que por una y otra parte se alegue. (*)

(*) *Ver: artículo 670 de esta norma.*

666.- Se debe probar la posesión del suelo por hechos positivos, de aquellos a que sólo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras y otros de igual significación, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión.

667.- El usufructuario, el usuario y el que tiene el derecho de habitación pueden ejercer por sí las acciones y excepciones posesorias, dirigidas a conservar o recuperar el goce de sus respectivos derechos, aun contra el propietario mismo.

Este es obligado a auxiliarlos contra todo turbador o usurpador extraño, siendo requerido al efecto. (Artículo 530).

Las sentencias obtenidas contra el usufructuario, el usuario o el que tiene el derecho de habitación, obligan al propietario; menos si se tratare de la posesión del dominio de la finca o de derechos anexos a él: en este caso no valdrá la sentencia contra el propietario que no haya intervenido en el juicio. (Artículo 653).

668.- La acción para la restitución puede dirigirse no sólo contra el usurpador, sino contra toda persona cuya posesión se derive de la del usurpador por cualquier título.

Pero no serán obligados a la indemnización del artículo 661 sino el usurpador mismo o el tercero de mala fe; y habiendo varias personas obligadas, todas lo serán *in solidum*. (Artículo 1331).

669.- Todo el que violentamente ha sido despojado, sea de la posesión, sea de la mera tenencia y que por poseer a nombre de otro o por no haber poseído el año completo o por otra causa cualquiera, no pudiere instaurar acción posesoria, tendrá, sin embargo, derecho para que se restablezcan las cosas en el estado en que antes se hallaban, sin que para esto necesite probar más que el despojo violento ni se le pueda objetar clandestinidad o despojo anterior.

Este derecho prescribe en seis meses.

Restablecidas las cosas y asegurada la indemnización del artículo 661 o desechada la acción, podrá intentarse por una u otra parte la acción posesoria que corresponda.

670.- Es aplicable al caso de despojo violento lo dispuesto en los artículos 664 y 665.

671.- Los actos de usurpación quedan además sujetos a las disposiciones de la ley penal.

672.- También tiene derecho el poseedor para pedir que se prohíba toda obra nueva que se trate de ejecutar en el suelo de que está en posesión. La acción concedida para esto se llama denuncia de *obra nueva*.

Sin embargo, no podrá denunciar con este fin las obras necesarias para precaver la ruina de un edificio, acueducto, canal, puente, acequia, etc., siempre que se reduzcan a lo estrictamente indispensable y que, terminadas, se restituyan las cosas al estado anterior, a costa del dueño de las obras.

Tampoco tendrá derecho para embarazar los trabajos conducentes a mantener la debida limpieza en los caminos, acequias, cañerías, etc.

673.- Son obras nuevas denunciables las que, construidas en el predio sirviente, embarazan el goce de una servidumbre constituida en él.

Son igualmente denunciables las construcciones que se trata de sustentar en edificio ajeno que no esté sujeto a tal servidumbre.

Se declara especialmente denunciable toda obra voladiza que atraviesa el plano vertical de la línea divisoria de dos predios, aunque no se apoye en el predio ajeno ni dé vista ni vierta aguas lluvias sobre él.

674.- Las Intendencias Municipales y Juntas Locales y Autónomas de los respectivos departamentos y sus localidades tendrán en favor de los caminos, plazas u otros lugares de *uso público*, la acción de denuncia concedida a los dueños de heredades o edificios privados; sin perjuicio de otras facultades que les atribuyan leyes especiales.

675.- Si la acción contra una obra nueva no se dedujere dentro del año, el denunciado será amparado en el juicio posesorio y el denunciante sólo podrá perseguir su derecho en la vía ordinaria.

TITULO VI

DE LA REIVINDICACION

CAPITULO I

DE LA NATURALEZA Y CONDICIONES DE LA REIVINDICACION Y DE LOS EFECTOS QUE PRODUCE

676.- El propietario tiene derecho para perseguir en juicio la propiedad

de su cosa, contra cualquiera que la posea y pretenda retenerla. La acción que le compete en este caso se llama *reivindicación o acción de dominio*. (Artículo 1318).

677.- Pueden reivindicarse las cosas raíces y muebles. (Artículo 1213). (*)

Pueden reivindicarse como el dominio, los otros derechos reales; excepto el derecho hereditario que produce la acción llamada *petición de herencia*.

Se puede reivindicar una cuota determinada *pro indiviso* de una cosa singular. (**)

(*) *Ver: artículo 1212 de esta norma.*

(**) *Ver: artículo 1039 de esta norma.*

678.- Las cosas que tienen un nombre colectivo, como un ganado o una biblioteca, pueden reivindicarse conjuntamente; pero tanto la demanda como la sentencia, se entenderán limitadas a las cosas individuales que pertenecen al reivindicante, de las que forman el cuerpo colectivo.

679.- El reivindicante es obligado a presentar la prueba de su propiedad.

680.- La acción reivindicatoria se dirige contra el actual poseedor.

681.- El mero tenedor de la cosa que se reivindica, sólo es obligado a declarar el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre la tiene.

682.- La acción reivindicatoria no se dirige contra un heredero, sino por la parte que posea en la cosa; pero las prestaciones a que estaba obligado el poseedor por razón de los frutos o de los deterioros que le eran imputables, pasan a los herederos de éste a prorrata de las cuotas hereditarias. (Artículo 1168).

683.- El que dolosamente se da por poseedor de la cosa que se reivindica sin serlo, deberá ser condenado a la indemnización de los daños y perjuicios que de este engaño hayan resultado al actor.

684.- El poseedor de cosa mueble que dolosamente dejase de poseerla, como si la destruyese o la enajenase a persona desconocida para sustraerse a la

reivindicación será condenado a pagar el valor que el dueño jurase tenía la cosa, previa la regulación del Juez, si pareciese excesivo.

685.- Prohíbese al actor ceder sus derechos o acciones respecto de la cosa reivindicada después de notificada la demanda a su contraparte. Tal cesión será nula, no producirá alteración alguna en el orden del juicio ni en sus resultados y responsabilizará al contraventor por los daños y perjuicios.

La misma disposición se aplicará a la enajenación o hipoteca de la cosa reivindicada, siempre que de la demanda se haya tomado razón en el Registro correspondiente.

686.- Si reivindicándose una cosa mueble, temiere el actor que se pierda o deteriore en manos del demandado, podrá pedir el secuestro de ella de acuerdo a lo dispuesto en la ley procesal.

687.- Demandándose el dominio u otro derecho real constituido sobre un inmueble, el demandado seguirá gozando de él, hasta la sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada.

Pero el actor tendrá derecho de provocar las providencias necesarias para evitar todo deterioro del fundo y de las cosas muebles anexas a él y comprendidas en la reivindicación, si hubiere justo motivo de temerlo o las facultades del demandado no ofreciesen suficiente garantía.

CAPITULO II

DE LA RESTITUCION DE LA COSA REIVINDICADA

688.- El Juez en el caso de juzgar contra el demandante, debe de absolver al poseedor; y si juzga contra éste, debe mandar que restituya la cosa que es objeto de reivindicación con sus frutos y accesiones.

Puede el Juez no hacer condena especial en *costas* o imponerla al vencido y aun condenarlo en *costas* y *costos*, según estime que aquél litigó con alguna razón o por culpable ligereza o por malicia que merezca la nota de temeridad, sin perjuicio de lo que dispone la ley procesal.

Se consideran *costas* todos los tributos, incluido el del pago de la vicésima, así como los honorarios de los peritos, depositarios, tasadores y

demás auxiliares del tribunal. Se consideran *costos*, los honorarios de los abogados y de los procuradores. (*)

(*) *Ver: artículo 1467 de esta norma.*

689.- El poseedor vencido restituirá la cosa en el plazo que el Juez le señalare.

690.- Si la cosa fue secuestrada, el actor que se recibe de ella pagará al secuestre los gastos de custodia y conservación, quedándole a salvo el derecho para que el poseedor de mala fe se los reembolse. (Artículos 2272 y 2288).

691.- Si la cosa reivindicada es mueble y está en manos del demandado contra quien se ha dado la sentencia, deberá restituirla en el lugar en que ella se encuentra y el actor deberá enviar a buscarla a su costa.

Con todo, si durante el juicio el demandado hubiese trasladado la cosa a lugar más distante del en que estaba, será obligado a reponerla a su costa en este último lugar.

692.- El poseedor condenado a restituir un inmueble, cumple con dejarlo desembarazado; y si es un edificio, con entregar las llaves al que lo ha obtenido en el juicio.

693.- Se llama poseedor de buena fe, el que lo es en virtud de un título traslativo de dominio, cuyos vicios ignora.

Es poseedor de mala fe, aquel a quien consta que le falta título para poseer o que el que tiene es vicioso o insuficiente. (*)

(*) *Ver: artículos 1204 y 1207 de esta norma.*

694.- El poseedor de buena fe hace suyos los frutos y sólo debe restituir los percibidos después de la contestación a la demanda.

Se entienden percibidos los frutos naturales o industriales, desde que se alzan o separan.

Los frutos civiles se producen día por día y pertenecen al poseedor en esta proporción. (*)

(*) *Ver: artículo 751 de esta norma.*

695.- El poseedor de mala fe está obligado a restituir no solamente todos los frutos percibidos desde su injusta detentación, sino también los que dejó de percibir por su culpa y que un buen padre de familia hubiera percibido. (Artículos 1246 y 1319).

Tratándose de restitución de ganados y procreos se estará a lo que establezcan las leyes especiales sobre la materia.(*)

(* *Ver: artículo 751 de esta norma.*

696.- En toda restitución de frutos, se abonarán al que la hace los gastos ordinarios que ha invertido en la producción de ellos. (Artículo 734). (*)

(* *Ver: artículos 751 y 1551 de esta norma.*

697.- Cuando la demanda de reivindicación tenga por objeto la nuda propiedad de una cosa, no habrá lugar a la restitución de frutos, a menos que después de la demanda se haya extinguido el usufructo.(*)

(* *Ver: artículo 751 de esta norma.*

698.- Las expensas *necesarias* invertidas en la conservación de la cosa, son abonables a todo poseedor de buena o mala fe, quien podrá retener la cosa, hasta que se haya hecho el abono. (Artículo 1709). (*)

(* *Ver: artículos 699 y 751 de esta norma.*

699.- Las expensas *útiles o mejoras* hechas antes de la contestación a la demanda, son abonables al poseedor de buena fe, con el derecho de retención de que habla el artículo precedente; pero el propietario tendrá la elección de pagar el importe de las mejoras o el aumento de valor que por ellas tenga la cosa.

Sólo se entenderá por mejoras o expensas útiles, las que hayan aumentado el valor venal de la cosa.

En cuanto a las hechas después de contestada la demanda, el poseedor de buena fe tendrá el derecho que por el artículo siguiente se le acuerda al poseedor de mala fe.(*)

(* *Ver: artículos 751 y 1709 de esta norma.*

700.- El poseedor de mala fe sólo podrá llevarse los materiales de las mejoras útiles, cuando pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada y el

propietario rehuse pagarle el precio que tendrían dichos materiales después de separados. (Artículo 751). (*)

(*) *Ver: artículos 701 y 1709 de esta norma.*

701.- Las expensas o mejoras *voluptuarias*, esto es, de sólo placer y ornato, no son abonables al poseedor de mala ni de buena fe, que únicamente tendrán con respecto a ellas, el derecho que por el artículo anterior se concede al poseedor de mala fe, respecto de las mejoras útiles. (*)

(*) *Ver: artículos 751 y 1709 de esta norma.*

702.- Se entenderá que la separación de los materiales, permitida por los artículos precedentes, es en detrimento de la cosa reivindicada, cuando hubiere de dejarla en peor estado que antes de ejecutarse las mejoras; salvo en cuanto el poseedor vencido pudiese reponerla en su estado anterior y se allanare a ello. (*)

(*) *Ver: artículos 751 y 1709 de esta norma.*

703.- Las mejoras provenientes de la naturaleza o del tiempo, ceden siempre en beneficio del propietario. (Artículo 731). (*)

(*) *Ver: artículos 751 y 1709 de esta norma.*

704.- El poseedor de mala fe es responsable de los deterioros que por su hecho o culpa ha sufrido la cosa.

El poseedor de buena fe, mientras permanece en ella, no es responsable de esos deterioros, sino en cuanto se hubiere aprovechado de ellos. (Artículos 1343, 1549, 1551 y 1553). (*)

(*) *Ver: artículos 751 y 1709 de esta norma.*

LIBRO TERCERO

De los modos de adquirir el dominio

705.- Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción.

Los títulos de adquirir sólo producen efecto personal, esto es, derecho a la cosa, *ad rem*.

TÍTULO I

DE LA OCUPACION

706.- La ocupación es un modo de adquirir el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional. (Artículos 481 y 482).

Son especies de ocupación la caza y la pesca y también invención o hallazgo.

707.- Los derechos respecto de las cosas arrojadas al mar o que la mar resaca, sea cual fuere su naturaleza, se determinan por leyes especiales.

También está sujeta a leyes especiales la ocupación bélica o aprehensión en guerra nacional.

CAPITULO I

DE LA CAZA Y DE LA PESCA

708.- Por la caza y la pesca se adquiere el dominio de los animales fieros o salvajes.

709.- Se llaman animales *fieros* o *salvajes*, los que viven naturalmente libres e independientes del hombre, ya sean terrestres, acuáticos o volátiles; *mansos*, los que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como los perros, las gallinas, el ganado mayor y menor; y *domesticados*, los que sin embargo de ser fieros por su naturaleza, se han acostumbrado a la domesticidad y reconocen en cierto modo el imperio del hombre.

Estos últimos, mientras conservan la costumbre de volver al amparo del hombre, siguen la regla de los animales mansos y perdiendo esta costumbre, vuelven a la clase de los animales fieros.

710.- No se puede cazar sino en tierras propias o en las ajenas con permiso del dueño. (*)

(*) *Ver: artículo 712 de esta norma.*

711.- Si alguno cazare en tierras ajenas sin permiso del dueño, lo que cace será para el dueño, a quien, además, indemnizará de todo perjuicio. (*)

(*) *Ver: artículo 712 de esta norma.*

712.- Lo dispuesto en los dos artículos precedentes, se extiende a la pesca en los arroyos, estanques, lagunas o charcos de propiedad particular.

713.- Se podrá pescar libremente en el mar territorial, en los ríos y arroyos de uso público.

714.- Los animales fieros, si se escapan del poder de la persona que los aprehendió, permanecerán suyos solamente mientras los persiga y tenga a la vista con ánimo de recobrarlos.

Por los mismos principios, nadie puede ocupar el animal fiero que otro cazador haya herido, mientras éste lo siga y tenga a la vista.

715.- En lo demás, el ejercicio de la caza y de la pesca estará sujeto a las leyes o reglamentos que sobre esta materia se dicten.

No se podrá, pues, cazar o pescar sino en lugares, en temporadas y con armas y procederes que no estén prohibidos.

716.- Los animales mansos están sujetos a dominio, que se adquiere, se conserva y transmite en la misma forma que el dominio de las demás cosas.

CAPITULO II

DEL HALLAZGO O INVENCION

717.- La invención o hallazgo es una especie de ocupación por la cual el que encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie, adquiere su dominio, apoderándose de ella.

718.- Pueden ser objeto del hallazgo las piedras, conchas y otras substancias que se encuentran en las riberas del mar, de los ríos y arroyos de uso público (artículo 478) y que no presentan señales de dominio anterior.

Acerca de la invención o hallazgo de las minas, se estará a lo prevenido en la legislación minera.

719.- También pueden ser objeto de hallazgo las cosas cuya propiedad abandona voluntariamente su dueño, como las monedas que se arrojan para que las haga suyas el primer ocupante.

720.- El descubrimiento de un tesoro es otra especie de invención o hallazgo. Se llama *tesoro* las monedas, joyas u otros objetos preciosos que, elaborados por el hombre, han estado largo tiempo sepultados o escondidos sin que haya memoria ni indicio de su dueño.

721.- El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento.

Sin embargo, esta última no tendrá derecho a su porción sino cuando el descubrimiento sea fortuito o cuando se haya buscado el tesoro con permiso del dueño del terreno.

En los demás casos o cuando sea una misma persona el dueño del terreno y el descubridor, pertenecerá todo el tesoro al dueño del terreno. (*)

(*) *Ver: artículo 722 de esta norma.*

722.- Lo dispuesto en el artículo anterior es igualmente aplicable a los tesoros que se descubran en sitios de propiedad nacional.

723.- Cualquiera podrá pedir al dueño de una finca el permiso para cavar en el suelo para sacar dinero o alhajas que alegare pertenecerle y estar escondidas en él; y si señalare el paraje en que están depositados y diere competente fianza de que probará su derecho sobre ellos y de que abonará daños y perjuicios al dueño de la finca, no podrá éste negar el permiso ni oponerse a la extracción de dichos dineros o alhajas.

724.- No probando el que obtuvo el permiso, su derecho sobre los dineros o alhajas, serán considerados o como bienes *perdidos* o como tesoro encontrado en suelo ajeno, según los antecedentes y señales.

En este segundo caso, deducidos los gastos, se dividirá el tesoro por partes iguales entre el denunciador y el dueño del suelo; pero no podrá éste pedir indemnización de daños y perjuicios, a menos de renunciar su porción.

725.- El que hallare alguna especie mueble al parecer *extraviada* o *perdida* y cuyo dueño se ignore, deberá presentarla al Juez más inmediato del lugar en que se encontrare la especie.

El Juez, recibida información de cómo ha sido hallada, la pondrá en depósito.

726.- Si hechas las publicaciones legales pasare un año sin que se presente persona que justifique su dominio sobre la especie depositada, procederá el Juez a su venta en almoneda; y deduciéndose del producto las expensas de aprehensión, conservación y demás que incidieren, se dividirá el remanente por partes iguales entre la persona que encontró la especie y la Intendencia Municipal del Departamento. (*)

(*) *Ver: artículo 729 de esta norma.*

727.- Si apareciere el dueño antes de la almoneda, le será restituida la especie, pagando las expensas y lo que a título de salvamento le adjudique el Juez al que encontró y denunció aquélla.

Si el dueño hubiese ofrecido recompensa por el hallazgo, el denunciador elegirá entre el premio del salvamento y la recompensa ofrecida.

728.- Vendida en almoneda la especie, se mirará como irrevocablemente perdida para su dueño.

729.- Si la especie fuera corruptible o su custodia o conservación difícil, podrá anticiparse la almoneda, depositándose el precio, que será entregado al dueño, si se presentare en el plazo del artículo 726.

730.- La persona que hallare cosas perdidas y no hiciese presentación de ellas al Juez, perderá su porción en favor de la respectiva Intendencia Municipal y aun quedará sujeta a la acción de daños y perjuicios y, según las circunstancias, a la pena de apropiación indebida.

TITULO II

DE LA ACCESION

731.- La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa viene a serlo de lo que ella produce o de lo que a ella se incorpora natural o artificialmente. (Artículo 487, inciso 1º).

CAPITULO I**DE LA ACCESION RESPECTO DEL PRODUCTO DE LAS COSAS**

732.- Los productos de las cosas son frutos naturales, industriales o civiles. (Artículo 503).

733.- Los frutos, cualquiera que sea su especie, pertenecen al dueño de la cosa, sin perjuicio de los derechos constituidos por las leyes o por un hecho del hombre, como, por ejemplo, al poseedor de buena fe, al usufructuario o al arrendatario.

734.- Los frutos de la cosa pertenecen al dueño, con obligación de abonar las expensas hechas por un tercero, para la producción, recolección y conservación de ellos.

735.- No se consideran frutos naturales o industriales, sino desde que están manifiestos o nacidos.

Respecto de los animales, basta que estén en el vientre de la madre.

El parto de los animales pertenece exclusivamente al dueño de la hembra, salvo que haya estipulación contraria y sin perjuicio de las excepciones que establezcan leyes especiales.

CAPITULO II**DE LA ACCESION RESPECTO DE LAS COSAS MUEBLES**

736.- La accesión respecto de las cosas muebles de distintos dueños, queda subordinada a los principios de la equidad natural.

Las reglas siguientes relativas a las diversas clases de accesión artificial en las cosas muebles, servirán al Juez de ejemplo para resolver los casos imprevistos, según las circunstancias particulares.

SECCION I**DE LA ADJUNCION**

737.- Cuando dos cosas muebles pertenecientes a diversos dueños, han sido

unidas de manera que formen una sola y no puedan separarse sin inconveniente, el todo pertenece al dueño de la cosa principal, pero con obligación de pagar al otro el valor de la accesoria.

Cuando las cosas unidas son separables, de suerte que una pueda subsistir sin la otra, siguen perteneciendo a sus dueños respectivos y deben separarse.

738.- Se reputa principal, entre dos cosas incorporadas, aquella a que se ha unido la otra para adorno o para su uso o perfección.

Sin embargo, cuando la cosa unida es más preciosa que la principal y se empleó sin conocimiento del dueño, puede éste pedir que la cosa unida sea separada para devolversele, aun cuando pudiese resultar algún deterioro a la cosa a que se había adjuntado.

739.- Si de dos cosas unidas para formar un todo, no hay ninguna que pueda mirarse como accesoria de la otra, se reputa principal la más considerable en valor o en volumen, si sus valores son poco más o menos iguales.

SECCION II

DE LA ESPECIFICACION

740.- Si alguien ha empleado materia ajena para formar cosa de una nueva especie, sea que la materia pueda o no volver a su forma primitiva, tiene el dueño derecho para reclamar la cosa que se ha formado, satisfaciendo el valor de la mano de obra.

Pero si la mano de obra fuese de tal naturaleza, que excediese en mucho el valor de la materia, se reputará entonces la industria como la principal y el artesano o artista tendrá derecho de conservar la cosa elaborada, satisfaciendo el precio de la materia.

741.- Cuando una persona ha empleado a la vez materia suya y ajena, para formar cosa de especie nueva y no pueden separarse sin inconveniente, la cosa nueva pertenecerá en común a los dos propietarios: al uno a prorrata del valor de su materia y al otro a prorrata del valor de la suya y de la hechura.

SECCION III**DE LA CONMIXTION**

742.- Cuando se ha formado una cosa por la mezcla de materias áridas o líquidas, pertenecientes a diversos dueños, es necesario distinguir si las cosas pueden separarse sin inconveniente y si alguna de ellas puede considerarse principal respecto de la otra.

Si pueden separarse sin inconveniente, tendrá derecho a pedir la separación el dueño sin cuyo conocimiento se mezclaron.

Si alguna de las materias puede considerarse principal respecto de la otra, el dueño de la principal tendrá derecho a reclamar la cosa resultante de la mezcla, abonando al otro el valor de la materia.

743.- Si las materias no pueden separarse sin inconveniente y ninguna de ellas puede considerarse principal, sus dueños adquieren en común la propiedad de la mezcla, en proporción de la cantidad, calidad y valor de lo perteneciente a cada uno.

SECCION IV**REGLAS COMUNES A LAS TRES ESPECIES DE ACCESION
EN COSAS MUEBLES**

744.- En todos los casos en que el dueño de una materia de que se ha hecho uso sin su conocimiento, tenga derecho a la propiedad de la cosa en que ha sido empleada, podrá renunciar a ésta y pedir que en lugar de la materia propia se le restituya otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud o su valor en dinero.

745.- El que haya tenido conocimiento del uso que de una materia suya se hacía por otra persona, se presumirá haberlo consentido y sólo tendrá derecho a su valor.

746.- Los que hayan empleado a sabiendas materia ajena, sin conocimiento

del dueño, estarán sujetos en todos los casos a perder la materia propia o la industria y a pagar los daños y perjuicios irrogados al dueño; además de la acción criminal a que pudiera haber lugar.

747.- En todos los casos en que la cosa se hace común a los dueños de las materias de que se ha formado, podrá licitarse en provecho de todos.

CAPITULO III

DE LA ACCESION RESPECTO DE LAS COSAS INMUEBLES

748.- El derecho de propiedad no se limita a la superficie de la tierra, sino que se extiende por accesión a lo que está sobre la superficie y a lo que está debajo.

El propietario puede hacer arriba todas las plantaciones y construcciones que juzgue convenientes, salvas las excepciones establecidas por la ley o la convención.

Puede hacer debajo todas las construcciones y excavaciones que juzgue a propósito y sacar de esas excavaciones todos los productos que puedan darle, con las modificaciones de las leyes y reglamentos relativos a minas o policía. (Artículo 484).

749.- Todas las obras, siembras y plantaciones hechas en un terreno, se presumen hechas por el propietario a sus expensas y que le pertenecen, si no se prueba lo contrario.

750.- El que de buena fe edificare en suelo o finca propia, con materiales ajenos, se hará dueño de éstos por el hecho de incorporarlos en la construcción; pero estará obligado a pagar al dueño de los materiales su justo precio u otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud.

Si ha procedido con mala fe, será también obligado al resarcimiento de daños y perjuicios, independientemente de la acción criminal a que hubiere lugar; pero si el dueño de los materiales tuvo conocimiento del uso que se hacía de ellos, sólo estará sujeto a la disposición del inciso anterior.

La misma regla se aplica al que planta o siembra en suelo propio, vegetales o semillas ajenas.

Mientras los materiales no están incorporados en la construcción o los vegetales arraigados en el suelo, podrá reclamarlos el dueño.

751.- El dueño del terreno en que otra persona, sin su conocimiento, hubiere edificado, plantado o sembrado, tendrá el derecho de hacer suyo el edificio, plantación o sementera, mediante las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe en el Título *De la reivindicación* (artículos 694 y siguientes) o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo precio del terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder y al que sembró, a pagarle la renta y a indemnizarle los daños y perjuicios.

Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del terreno, será éste obligado, para recobrarlo, a pagar el valor del edificio, plantación o sementera.

752 a 757.-

LOS ARTICULOS 752 A 757 HAN SIDO DEROGADOS POR EL DECRETO-LEY 14.859 (CODIGO DE AGUAS) del 15.12.78 (*)

() Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986. La referencia se entiende realizada al Decreto-Ley N° 14.859 de fecha 15 de diciembre de 1978, artículo 198.*

TITULO III

DE LA TRADICION (*)

() Ver: artículo 1686 de esta norma.*

758.- La tradición o entrega, es la transferencia que hace una persona a otra, de la posesión de una cosa, con facultad y ánimo de transferirle el dominio de ella. (Artículos 1252, 1335, 1337 y 1680). (*)

() Ver: artículo 1670 de esta norma.*

CAPITULO I**DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE TRADICION**

759.- La tradición es real o ficta.

SECCION I**DE LA TRADICION REAL**

760.- La tradición real es la que se verifica por la aprehensión corporal de la cosa, hecha por el adquirente u otro en su nombre.

761.- Si se trata de un fundo, la tradición se verifica cuando el adquirente se transporta a él por sí mismo o por otro que le represente, para tomar la posesión, consintiéndolo el tradente.

Cuando el inmueble que se ha de entregar es un edificio, se entiende verificada la tradición desde que el tradente saca sus muebles y permite que el adquirente introduzca los suyos.

Si la cosa objeto de la entrega es mueble, se verifica la tradición poniendo la cosa en manos del adquirente o de quien lo represente.

762.- Si la cosa que se ha de entregar hace parte de una heredad, como los árboles en pie o las piedras de una cantera, etc., la tradición se verifica por la separación de estos objetos de la tierra a que adhieren, hecha con consentimiento del tradente.

SECCION II**DE LA TRADICION FICTA**

763.- La tradición se llama *simbólica*, siempre que no se entrega realmente la cosa, sino algún objeto representativo de ella y que hace posible la toma de posesión de la cosa.

764.- La tradición simbólica, puede tener lugar:

1º.- Por la entrega de las llaves del almacén donde se encuentran las cosas muebles que se han de entregar.

2º.- Por la entrega que el vendedor o donante de una finca haga de sus llaves al comprador o donatario, después de haber sacado sus muebles.

3º.- Por la entrega de los títulos de la cosa. Si ésta es un inmueble, el tradente debe, además, dejarlo expedito, para que tome posesión el adquirente.

765.- La tradición por *la vista*, es la que se hace mostrando la cosa que se quiere entregar y dando la facultad de tomar posesión de ella.

Se requiere, en este caso, la presencia del tradente y del adquirente, por sí o por otros.

766.- Cuando el que ha de recibir la cosa que le ha sido vendida, cambiada o donada, la tiene ya en su poder por cualquier otro título no traslativo de dominio, el mero consentimiento de las partes importa tradición.

767.- Importa asimismo tradición ficta equivalente a la real:

1º.- La cláusula en que declara el enajenante que en lo sucesivo tendrá la posesión a nombre del comprador o donatario.

2º.- La cláusula en que declara el donante que retiene para sí el usufructo de la cosa cuya propiedad dona.

3º.- La cláusula por la cual en un contrato de donación o de venta, el donante o vendedor toma en arrendamiento la cosa, del comprador o donatario.

Para que estas cláusulas surtan efecto de tradición real, se necesita que resulten de instrumento público.

768.- La tradición de los derechos se verifica: o por la entrega de los documentos que sirven de título o por el uso del uno y la paciencia del otro, como en las servidumbres.

Sin embargo, la tradición de un crédito cedido no surte efecto, mientras no se denuncie o notifique la cesión al deudor.

El inciso precedente no se refiere a los créditos transmisibles por endoso o al portador o en otra forma, con arreglo a leyes particulares. (*)

(*) *Ver: artículo 1757 de esta norma.*

CAPITULO II

DE LAS CALIDADES QUE SE REQUIEREN PARA ADQUIRIR EL DOMINIO POR LA TRADICION Y DEL EFECTO DE LA TRADICION

769.- Para que se adquiriera el dominio por la tradición, se requiere:

1°.- Que la tradición se haga por el dueño o por su representante.

2°.- Que el que hace la tradición o la consiente, sea capaz de enajenar.

3°.- Que la tradición se haga en virtud de título hábil para transferir el dominio.

4°.- Que haya consentimiento de partes.

En el contrato de venta, además de las cuatro circunstancias indicadas, se requiere que el comprador haya pagado el precio, dado fiador, prenda o hipoteca, u obtenido plazo para el pago. (*)

(*) *Ver: artículo 1670 de esta norma.*

770.- En las ventas forzadas, que se hacen por decreto judicial, a petición de un acreedor, en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente y el Juez, su representante legal.

771.- Invalida la tradición, el error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse o de la persona a quien se hace la entrega o en cuanto al título.

Si el error recae sobre el nombre sólo, es válida la tradición. (*)

(*) *Ver: artículo 1271 nral. 3° de esta norma.*

772.- El error en el título invalida la tradición, sea cuando una sola de las partes supone un título traslativo de dominio, como cuando por una parte se tiene el ánimo de entregar a título de comodato y por otra se tiene el ánimo de recibir a título de donación o sea cuando por las dos partes se suponen títulos traslativos de dominio, pero diferentes, como si por una parte se supone mutuo y por otra donación. (*)

(*) *Ver: artículo 1271 nral. 3° de esta norma.*

773.- Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas.

774.- Se puede pedir la tradición de todo aquello que se deba, desde que no haya plazo pendiente para el pago, salvo que intervenga decreto judicial en contrario.

775.- Por la tradición verificada con las calidades requeridas en este Título, se transfiere al adquirente el dominio de la cosa, tal como lo tenía el tradente.

Cuando la tradición no ha sido hecha o consentida por el verdadero dueño, no se adquiere por ella el dominio; pero habiendo precedido título hábil, servirá para adquirir el dominio por prescripción.

TÍTULO IV

DE LA SUCESION TESTAMENTARIA (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 17.163 de fecha 1° de setiembre de 1999, artículo 13.*

776.- La sucesión o herencia, modo universal de adquirir, es la acción de suceder al difunto y representarle en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte.

Se llama *heredero* el que sucede en esos derechos y obligaciones.

777.- La palabra herencia puede significar también la masa de bienes y derechos que deja una persona después de su muerte, deducidas las cargas.

778.- La sucesión se defiende por la voluntad del hombre manifestada en testamento y a falta de éste, por disposición de la ley.

Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama *testamentaria* y si en virtud de la ley, *intestada o ab intestato*.

La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria y parte intestada. (Artículo 893, número 3 y artículo 1011).

De la sucesión intestada y de las reglas relativas a ella, se trata en el Título V de este Libro.

CAPITULO I

DEL TESTAMENTO

SECCION I

DE LA NATURALEZA Y EFECTOS DEL TESTAMENTO

779.- El testamento es un acto esencialmente revocable (artículos 998 y siguientes), por el cual una persona dispone, conforme a las leyes, del todo o parte de sus bienes, para después de su muerte.

780.- El testador puede disponer a título universal o de *herencia* y a título particular o de *legado*. (Artículo 853).

Sin embargo, aun cuando el testador no haya usado materialmente la palabra heredero, si su voluntad está clara acerca de este concepto, valdrá la disposición como hecha a título universal o de herencia.

781.- No pueden dos o más personas testar en un mismo acto, sea recíprocamente en provecho suyo o de un tercero.

782.- El testamento es un acto personalísimo; su formación no puede dejarse en todo o en parte al arbitrio de un tercero.

Tampoco puede dejarse al arbitrio de un tercero la subsistencia de la institución de heredero o del legado ni la designación de su cantidad; pero sí el repartimiento, cuando la disposición comprende a toda una clase de personas, como parientes, pobres y criados.

783.- Es nula toda disposición captatoria.

Se entenderá por tal aquella en que el testador asigne alguna parte de sus bienes a otro, a condición de que éste le deje por testamento parte de los suyos.

Tampoco valdrá la disposición en que, bajo cualquier nombre o concepto, se deja a uno el todo o parte de los bienes, para que los aplique o invierta con arreglo a instrucciones reservadas que le hubiere comunicado el testador. (Artículo 866, inciso 3).

784.- Las cédulas o papeles a que se refiera el testador en el testamento, no podrán mirarse como parte de éste, aunque el testador lo ordene; ni valdrán más de lo que sin esta circunstancia valdrían.

785.- Toda disposición a favor de persona incierta es nula, a menos que por algún evento pueda resultar cierta.

Valdrán sin embargo, las disposiciones piadosas o donaciones destinadas a objetos de beneficencia; debiendo observarse lo dispuesto en el capítulo II de este Título. (Artículos 836 y 837).

786.- La disposición hecha simple y generalmente a favor de los parientes del testador, se entiende hecha a favor de sus herederos llamados por la ley o según el orden de la sucesión intestada.

787.- Si la persona del heredero o del legatario hubiere sido falsamente designada, la disposición será válida, con tal que no haya duda respecto del instituido.

Lo mismo sucederá, cuando se trate de la indicación de la cosa legada.

788.- La falsedad de la causa o del motivo expresado por el testador no vicia una disposición testamentaria, a no ser que se enuncie dicho motivo en forma condicional o que resulte claramente de los términos del testamento, que el testador ha querido hacer depender la eficacia de la disposición de la existencia del motivo aducido para ella. (Artículos 952, 1289, 1408 a 1410).

789.- El testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza, es nulo en todas sus partes.

790.- El testamento es solemne y menos solemne o especial.

Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere.

El menos solemne o especial es aquel en que pueden omitirse algunas de estas solemnidades, por consideración a circunstancias particulares determinadas expresamente por la ley.

791.- El testamento solemne es *abierto* o *cerrado*.

El testamento *abierto* es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones al Escribano y a los testigos; y testamento *cerrado* es aquel en que no es necesario que el Escribano y los testigos tengan conocimiento de ellas.

792.- El testamento es siempre escrito.

SECCION II

DEL TESTAMENTO SOLEMNE (*)

(*) *Ver: artículo 830 de esta norma.*

793.- El testamento solemne y abierto debe otorgarse ante Escribano público y tres testigos.

794.- El Escribano debe conocer al testador o asegurarse de la identidad de la persona, haciéndolo constar en el instrumento.

Debe leer el testamento al otorgante a presencia de los testigos, haciéndose constar esta lectura y el otorgamiento.

Durante la lectura y el otorgamiento deben estar presentes todos los testigos sin que baste que la lectura se verifique separadamente. (*)

(*) *Ver: artículo 802 de esta norma.*

795.- El testamento debe ser firmado por el testador.

Si declara éste que no sabe o no puede firmar, se hará en el testamento mención especial de su declaración y de su ruego a uno de los testigos que firme por él, sin perjuicio de que el rogado firme también como testigo.

796.- El testamento debe también ser firmado por el Escribano y los testigos.

Si alguno de los testigos no supiera firmar, otro de ellos firmará por él y a ruego suyo, expresándolo así; pero en todo caso, han de firmar al menos dos testigos.

797.- Si un sordo quisiera hacer testamento abierto, deberá leer él mismo en voz inteligible el instrumento a presencia del Escribano y testigos, haciéndose constar esta lectura y su otorgamiento.

798.- El ciego no puede hacer sino testamento abierto, el que será leído en alta voz dos veces: la primera por el Escribano y la segunda por uno de los testigos, elegido al efecto por el testador. Se hará mención especial de esta solemnidad en el testamento. (Artículo 833).

799.- Quien no conozca el castellano, pero se exprese claramente en otro idioma y lo escriba, podrá otorgar testamento abierto en la siguiente forma:

Presentará al Escribano el pliego que contenga su testamento, en el papel de la clase que corresponda al protocolo, firmado de su puño y letra, cuya presentación la hará ante dos intérpretes y tres testigos que conozcan su idioma.

Los intérpretes harán su traducción fiel; y transmitida al testador en presencia de los testigos y del Escribano, si aquél no tuviese observación que hacer, la suscribirá juntamente con los traductores y testigos. El Escribano levantará, a continuación de la traducción, acta de haber presenciado lo ocurrido, la que será firmada por los concurrentes y después de rubricadas por el Escribano cada una de las fojas del testamento original y traducción, lo incorporará todo al Registro de Protocolizaciones. (*)

(*) *Ver: artículo 806 de esta norma.*

800.- Cuando el testamento abierto ha sido otorgado con las solemnidades prevenidas en los artículos anteriores, se le da fe para todos los efectos de derecho, sin necesidad de diligencia alguna judicial.

801.- En el testamento solemne cerrado deben intervenir cinco testigos de los que tres al menos puedan firmar y un Escribano público.

El testador deberá firmar sus disposiciones, sea que estén escritas de su mano o de la de otro a su ruego, salvo el caso del artículo 803.

Cerrará y sellará el pliego que contenga sus disposiciones, o el papel que le sirva de cubierta; y lo presentará al Escribano y testigos, declarando que allí se contiene su última voluntad, escrita y firmada por él o escrita por otro, pero con la firma del testador.

En el sobrescrito o cubierta del testamento, levantará el Escribano un acta en que conste la declaración expresada, firmándola el testador, el Escribano y todos los testigos que puedan hacerlo por sí y los cuales nunca serán menos de tres.

Si el testador por impedimento que le sobrevenga, no pudiese firmar en el sobrescrito o cubierta, se hará mención de la declaración que haya hecho y de su ruego a uno de los testigos para que firme a su nombre.

Por el testigo o testigos que no sepan o que no puedan firmar, deberá hacerlo a ruego suyo y expresándolo así, cualquiera de los tres cuyas firmas son necesarias. (*)

(*) *Ver: artículo 805 de esta norma.*

802.- Lo dispuesto en el inciso último del artículo 794, es aplicable al otorgamiento que se hace constar en la cubierta del testamento cerrado. (*)

(*) *Ver: artículo 805 de esta norma.*

803.- Los que saben leer, pero no escribir o aunque sepan escribir no han podido firmar la expresión de su última voluntad incluso en el pliego, deberán declarar, ante el Escribano y testigos, que la han leído y el motivo que han tenido para no firmarla.

804.- Los que no saben o no pueden leer, no podrán hacer testamento cerrado.

805.- El que no pueda hablar, pero sí escribir, podrá hacer testamento cerrado (artículo 833), observándose lo siguiente:

1°.- El testamento ha de estar enteramente escrito y firmado de su mano, con expresión del lugar, año, mes y día.

2°.- El testador presentará el pliego cerrado al Escribano y testigos y en la cubierta escribirá a presencia de ellos, que aquel pliego contiene su última voluntad.

3°.- El Escribano extenderá en seguida el acta, haciéndose constar que el testador escribió esas palabras a presencia del Escribano y testigos.

En lo demás se observará lo dispuesto en los artículos 801 y 802.

806.- También podrá otorgar testamento cerrado quien se encuentre en las condiciones previstas por el artículo 799, sujetándose a las disposiciones que siguen:

Presentará al Escribano su testamento cerrado y lacrado, escribiendo en el sobre, delante del mismo funcionario y de cinco testigos, de los cuales tres cuando menos deben conocer el idioma del testador y el castellano a la vez, que dicho pliego contiene su última voluntad, escrita por él o por otro (nombrándolo) a su pedido y firmada por él, - declaración que también suscribirá.

Cerciorado el Escribano de la identidad de la persona del otorgante, en caso de no conocer a éste, cuando menos por el testimonio de dos de los cinco testigos, que deben serle también conocidos, levantará acta en la misma cubierta del testamento, haciendo constar que la declaración a que se refiere el anterior inciso, cuyo significado se expresará, ha sido escrita en su presencia y la de los testigos por el otorgante, que manifiesta no entender el castellano. Dará lectura de esta acta a los testigos y transmitido que sea su contenido al testador, lo que hará constar, la suscribirán el otorgante, los testigos y el mismo Escribano.

807.- El testamento cerrado, para recibir ejecución, debe llenar en su apertura las formalidades previstas en la ley procesal. (*)

(*) *Ver: artículo 812 de esta norma.*

808.- Es reprobada toda convención acerca de lo que se deje en un testamento cerrado, antes que se abra solemnemente. (Artículo 1053).

809.- No pueden ser testigos en un testamento solemne otorgado en la República:

- 1°.- **DEROGADO por art. 3o. Ley 8.000 de 14.7.26** (*)
- 2°.- Los menores de 18 años.
- 3°.- Los ciegos.
- 4°.- Los mudos.
- 5°.- Los sordos.
- 6°.- Los que están fuera de la razón.
- 7°.- Los que con arreglo a la ley penal han sido inhabilitados, por sentencia ejecutoriada, para ser testigos en juicio o en instrumento público. (**)
- 8°.- Los amanuenses del Escribano que autorizare el testamento.
- 9°.- Los que no tengan domicilio en el Departamento.
- 10°.- Las personas que no entiendan el idioma del testador.

Para juzgar de la capacidad del testigo, debe atenderse a la época en que se otorgó el testamento. (***)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

En el Diario Oficial N° 24.177 de fecha 21 de noviembre de 1994 y en la edición oficial, dice: "Ley 8.000 de 14.7.26", debe decir: "Ley 8.000 de 14.10.26".

(**) **Ver:** artículo 826 de esta norma.

(***) **Ver:** artículo 810 de esta norma.

810.- Si alguna de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo anterior no se manifestase en el aspecto o comportamiento de un testigo y se ignorase generalmente en el lugar donde el testamento se otorga, fundándose la opinión contraria en hechos positivos y públicos, no se invalidará el testamento por la inhabilidad real del testigo.

Sin embargo, la habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo de los testigos. (*)

(*) **Ver:** artículo 826 de esta norma.

SECCION III

DEL TESTAMENTO MENOS SOLEMNE O ESPECIAL (*)

(*) **Ver:** artículo 830 de esta norma.

811.- El que por efecto de un ataque o accidente repentino, se hallare en peligro inminente de la vida y en paraje donde no hubiere Escribano que autorice su testamento, podrá otorgarlo por escrito ante tres testigos, de los cuales dos por lo menos sepan firmar.

El que se encuentre en una población incomunicada, por razón de peste u otra enfermedad contagiosa, podrá asimismo testar como en el caso del anterior inciso o bien ante un Escribano y dos testigos que sepan firmar.

El testamento otorgado con arreglo a las disposiciones de este artículo,

quedará de todo punto ineficaz pasados ciento ochenta días desde que el testador hubiere salido del peligro de muerte, se hubiere abierto la comunicación o pasado a otro pueblo o lugar donde pudiese hacer testamento solemne. (*)

(*) *Ver: artículos 812 y 1000 de esta norma.*

812.- Cuando el testamento fuere otorgado sin Escribano, en los casos del artículo anterior y el testador muriese dentro del tiempo prefijado en el mismo, será necesario que se proceda a la publicación del testamento en la forma siguiente:

El Juez competente en el caso previsto por el artículo 807, haciendo constar ante todo la muerte del testador, ordenará que comparezcan los testigos a practicar el reconocimiento de las firmas.

Si uno o más de ellos no compareciere, por muerte, enfermedad u otro impedimento, bastará que el testigo instrumental presente reconozca la firma del testador, la suya propia y la de los testigos que no hayan podido comparecer.

En caso necesario y siempre que el Juez lo estimare conveniente, podrán ser abonadas las firmas del testador y de los testigos que no hayan podido comparecer, por declaraciones juradas de otras personas fidedignas.

Los testigos instrumentales depondrán además sobre el día y hora, poco más o menos, en que fue otorgado el testamento y sobre el peligro en que a la sazón se encontraba el testador.

Terminadas las diligencias, pondrá el Juez la rúbrica al principio y fin de cada página del testamento y lo mandará entregar con lo obrado al Actuario para que lo incorpore en el Registro de Protocolizaciones.

813.- En tiempo de guerra, el testamento de los militares y de los demás individuos empleados en un cuerpo de tropas de la República y asimismo el de los voluntarios, rehenes y prisioneros que pertenecieren a dicho cuerpo y de las personas que van acompañando y sirviendo a cualquiera de los antedichos, podrá ser recibido por un capitán o por un oficial de grado superior al de capitán, o por un comisario o un auditor de guerra.

Si el que desea testar estuviere enfermo o herido, podrá ser recibido su testamento por el médico que le asista; y si se hallare en un destacamento, por el oficial que lo mande, aunque sea de grado inferior al de capitán.

En todos los casos de este artículo, será siempre necesaria la presencia de dos testigos, de los que uno, a lo menos, sepa firmar.

814.- Para testar militarmente, será preciso hallarse en una expedición de guerra que esté actualmente en marcha o campaña contra el enemigo o en la guarnición de una plaza actualmente sitiada.

815.- El testamento llevará al pie el *visto bueno* del jefe superior de la expedición o del comandante de la plaza, si no hubiere sido otorgado ante el mismo jefe o comandante y será siempre rubricado al principio y al fin de cada página por dicho jefe o comandante; debiendo éste enseguida remitirlo con la posible brevedad y seguridad al Ministerio que corresponda, el que a su vez, abonando la firma del remitente, lo pasará por el conducto respectivo al Juez competente del último domicilio del testador.

No conociéndose a éste ningún domicilio en la República, será remitido el testamento al Juez competente de la Capital para su incorporación en el Registro de Protocolizaciones de su Oficina Actuarial. (*)

(*) *Ver: artículos 819, 820 y 829 de esta norma.*

816.- Si el que ha testado militarmente, falleciere dentro de los ciento ochenta días subsiguientes a aquel en que hubieren cesado, con respecto a él, las circunstancias que habilitan para otorgar esta clase de testamentos, valdrá el otorgado, como si hubiera sido hecho en la forma ordinaria.

Si el testador sobreviviere a este plazo, caducará el testamento. (*)

(*) *Ver: artículo 1000 de esta norma.*

817.- Los testamentos otorgados en la mar y en el curso de un viaje, podrán ser recibidos, a saber:

A bordo de los buques nacionales de guerra, por el comandante, con el contador o quien haga sus veces.

A bordo de los buques mercantes, bajo bandera oriental, por el capitán o quien haga sus veces, con el sobrecargo si lo hubiere.

En todos los casos, deberán ser recibidos esos testamentos, a presencia de dos testigos tomados de la dotación del buque, prefiriéndose siempre los que sepan leer y escribir, aunque en su defecto bastará que uno de los dos testigos sepa firmar.

En los buques mercantes, si no hubiere sobrecargo, se llamará otro testigo más. (*)

(*) *Ver: artículos 818, 819, 823 y 824 de esta norma.*

818.- En los buques de guerra, el testamento del comandante o contador, y en los mercantes, el del capitán, patrón o sobrecargo, podrán ser recibidos por los que vienen después en el orden del servicio, conformándose por lo demás a las disposiciones del artículo precedente. (*)

(*) *Ver: artículos 819, 823 y 824 de esta norma.*

819.- Los testamentos mencionados en los dos artículos anteriores se harán siempre por duplicado.

Si el buque llega a puerto extranjero, donde haya un agente diplomático o consular de la República, los que hayan autorizado el testamento depositarán uno de los ejemplares, cerrado y sellado, en manos del referido agente, quien lo dirigirá por conducto respectivo al Juzgado que corresponda.

Siempre que sea posible, el agente diplomático o consular examinará los testigos que autorizan el testamento, les hará firmar sus declaraciones y remitirá copia autorizada de ellas con dicho testamento y a los efectos del artículo 815. (*)

(*) *Ver: artículos 823 y 824 de esta norma.*

820.- Al regreso del buque a la República, los dos ejemplares del testamento igualmente cerrados y sellados o el que quedare, si el otro se hubiere entregado en el curso del viaje, serán entregados a la autoridad portuaria correspondiente, la que los elevará al Ministerio respectivo para los efectos del mencionado artículo 815. (*)

(*) *Ver: artículos 823 y 824 de esta norma.*

821.- En el rol del buque, al margen del nombre del testador, se anotará la entrega que se haya hecho de los testamentos, sea al agente diplomático o consular o sea a la autoridad portuaria. (*)

(*) *Ver: artículos 823 y 824 de esta norma.*

822.- No se reputará hecho en el mar el testamento, aunque lo haya sido en el curso del viaje, si en la época del otorgamiento se hallaba el buque en puerto donde hubiere un agente diplomático o cónsul de la República.

En tal caso se observará lo dispuesto en los artículos 828 y 829. (*)

(*) *Ver: artículos 823 y 824 de esta norma.*

823.- Podrán testar en la forma prescrita por el artículo 817 y siguientes, cualesquiera individuos que se hallen a bordo, aunque no hagan parte de la dotación del buque. (*)

(*) *Ver: artículo 824 de esta norma.*

824.- El testamento hecho en el mar, en la forma prescrita por el artículo 817 y siguientes, no será válido, sino en cuanto el testador muera a bordo o dentro de los ciento ochenta días de estar en tierra y en lugar donde haya podido testar según la forma ordinaria. (*)

(*) *Ver: artículo 1000 de esta norma.*

825.- El testamento otorgado en el mar, no podrá contener disposición alguna en favor del comandante, capitán, oficiales o individuos de la tripulación, a no ser parientes del testador. (Artículo 840).

826.- En todos los testamentos de que trata la presente sección, podrá servir de testigo cualquier persona de sano juicio, mayor de 18 años que vea, oiga y entienda al testador y que no tenga la inhabilidad designada en el número 7 del artículo 809, a menos que sea en el caso previsto por el artículo 810.

Esta disposición se entenderá sin perjuicio de lo que acerca de las firmas de los testigos, previene el artículo siguiente.

827.- Deberán asimismo, los antedichos testamentos ser firmados por los otorgantes, autorizantes y testigos.

Si el testador no sabe o no puede firmar, lo hará por él y a su ruego, uno de los testigos, mencionándose expresamente esta circunstancia en el testamento.

Por el testigo que no sepa o no pueda firmar, lo hará otro testigo cuya firma sea necesaria.

SECCION IV

DEL TESTAMENTO OTORGADO POR EL ORIENTAL EN PAIS EXTRANJERO (*)

(*) *Ver: artículo 830 de esta norma.*

828.- El oriental que se hallare en país extranjero, podrá testar por instrumento público, conforme a las leyes de ese país o ante el Agente

Diplomático o Consular de la República, observándose, en este último caso, los requisitos siguientes:

1°.- Podrán autorizar este testamento los Embajadores, Encargados de Negocios, Secretarios de Legación o Agentes Consulares. Se hará mención expresa del cargo que ejerza la persona que autoriza el testamento.

2°.- Los testigos del testamento serán dos por lo menos y orientales o en su defecto, extranjeros domiciliados en la República o en el pueblo donde se otorgue el testamento.

3°.- Se observarán en lo demás las reglas prescritas para el testamento solemne abierto.

4°.- El instrumento llevará el sello de la Embajada, Legación, Consulado o Viceconsulado.

5°.- Deberá ser también rubricado por el autorizante al principio y fin de cada página. (*)

(*) *Ver: artículo 829 de esta norma.*

829.- Otorgado el testamento en la forma prescrita en el artículo anterior, el autorizante remitirá una copia certificada al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República, el cual a su vez, abonando la firma del Agente Diplomático o Consular, pasará dicha copia por conducto respectivo al Juez Letrado que corresponda, para los efectos del artículo 815.

DISPOSICION COMUN A LAS TRES SECCIONES ANTERIORES

830.- Las formalidades a que respectivamente quedan sujetos los diversos testamentos, por las disposiciones de las tres secciones anteriores, deben observarse so pena de nulidad. (Artículo 1560).

CAPITULO II

DE LA CAPACIDAD PARA DISPONER Y ADQUIRIR POR TESTAMENTO (*)

(*) *Ver: artículo 1012 de esta norma.*

831.- No pueden disponer por testamento:

1°.- Los impúberes, esto es, los varones menores de catorce años y las mujeres menores de doce.

Los que hayan cumplido respectivamente esa edad, podrán testar libremente, aunque se hallen bajo la patria potestad. (Artículo 265).

2°.- Los que se hallaren bajo interdicción, por razón de demencia aunque tuvieren intervalos lúcidos.

3°.- Los que, sin estar bajo interdicción, no gozaren actualmente del libre uso de su razón, por demencia, ebriedad u otra causa.

En este caso, el que impugnare la validez del testamento deberá probar que el que lo hizo no gozaba del libre uso de su razón.

4°.- Todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad claramente.

Los individuos no comprendidos en las prohibiciones de este artículo, son hábiles para disponer por testamento. (Artículo 1616). (*)

(*) *Ver: artículos 832 y 1656 de esta norma.*

832.- Es nulo el testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de las causas expresadas en el artículo precedente, aunque ella posteriormente deje de existir.

Por el contrario, el testamento válido no deja de serlo por el hecho de sobrevenir después alguna de dichas causas.

833.- El ciego sólo puede otorgar testamento abierto. (Artículo 798).

El que se halle en el caso del artículo 805 sólo puede otorgar testamento cerrado.

834.- Pueden adquirir por testamento todos los que la ley no declara incapaces o indignos. (Artículo 1617).

835.- Son incapaces:

1°.- El que no estuviere concebido al tiempo de abrirse la sucesión o, aunque concebido, no naciere viable, conforme a lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 216. (*)

2°.- Las asociaciones o corporaciones no permitidas por las leyes. (Artículo 21 inciso 2°). (**)

(*) *Ver: artículo 845 de esta norma.*

(**) *Ver: artículos 1038 y 1617 de esta norma.*

836.- La disposición hecha a favor de un establecimiento de beneficencia sin designarlo, se aplicará al establecimiento de esa clase que el Presidente de la República designe, prefiriendo alguno del Departamento o pueblo del testador. (*)

(*) *Ver: artículos 837 y 1617 de esta norma.*

837.- La disposición universal o de una parte alícuota de los bienes, que el testador haya hecho en **favor de su alma**, sin especificar de otro modo la inversión, se entenderá hecha a favor de un establecimiento de beneficencia y se sujetará a la regla del artículo anterior. (*)

(*) *Ver: artículo 1617 de esta norma.*

838.- Lo que se dejase por el testador a **los pobres** en general sin otra designación, se aplicará a los pobres del domicilio del testador en la época de su muerte.

La calificación y la distribución se hará siempre por el Juez que conozca de la testamentaría, si no hay albaceas.

El inciso anterior es aplicable también al caso de que el testador haya dispuesto a favor de los pobres de una parroquia o pueblo determinado. (*)

(*) *Ver: artículos 1058 y 1617 de esta norma.*

839.- El eclesiástico que ha confesado al testador en su última enfermedad, no puede recibir cosa alguna a virtud del testamento que haya hecho durante esa enfermedad.

Esta prohibición alcanza a los parientes o afines del confesor, dentro del cuarto grado, a las personas que vivan en compañía del dicho confesor y a su iglesia, cabildo, comunidad o instituto.

Exceptúase de las disposiciones precedentes el caso en que el confesor sea pariente o afín del testador dentro del cuarto grado. (*)

(*) *Ver: artículo 1617 de esta norma.*

840.- No valdrá disposición alguna testamentaria en favor del Escribano que autorizare el testamento o de su cónyuge, de cualquiera de sus parientes o

afines dentro del cuarto grado o de los dependientes asalariados de dicho Escribano. La misma prohibición se aplica a las disposiciones en favor de cualquiera de los testigos. (*)

(*) *Ver: artículo 1617 de esta norma.*

841.- Será nula la disposición hecha en favor de un incapaz, bien sea que se disfrace bajo la forma de un contrato oneroso o usando el nombre de una persona interpuesta. (*)

(*) *Ver: artículo 1617 de esta norma.*

842.- Son indignos y como tales, no pueden adquirir por testamento: (Artículo 1012).

1°.- El condenado en juicio por homicidio intencional o tentativa del mismo contra la persona de cuya herencia se trata, contra el cónyuge y contra los descendientes del mismo.

Si algunos de los herederos forzosos incurre en esta causa de indignidad, pierde también su legítima.

2°.- El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del difunto, no la denuncia dentro de sesenta días a la justicia cuando ésta no ha procedido ya de oficio sobre ella.

Si los homicidas fueren ascendientes o descendientes o hermanos del heredero o cónyuge cesará en éste la obligación de denunciar.

3°.- El que voluntariamente acusó o denunció al difunto de un delito capital.

4°.- El pariente que, sabiendo ser heredero presuntivo del difunto y hallándose éste demente y abandonado, no cuida de recogerle o hacerle recoger en un establecimiento público.

5°.- El que para heredar estorbó, por fuerza o fraude, que el difunto hiciera testamento o revocara el ya hecho o sustrajo éste o forzó al difunto para testar.

Las causas de indignidad, expresadas en este artículo, comprenden también a los legatarios. (*)

(*) *Ver: artículos 899 y 1617 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Leyes Nos. 16.713 de fecha 3 de setiembre de 1995, artículos 25 y 26 lit. C), 17.163 de fecha 1° de setiembre de 1999, artículo 16 y Decreto N° 359/995 de fecha 21 de setiembre de 1995, artículo 11 lit. C).

843.- Pierden también todo derecho a lo que se les hubiere dejado en el testamento, el tutor testamentario y el albacea que se excusen de admitir su respectivo encargo o que sean removidos por sospechosos después de haberlo admitido. (Artículos 359 y 989).

No se extiende esta causa de indignidad a los herederos forzosos en cuanto a su legítima ni a los que, desechada por el Juez la excusa, entren a desempeñar el encargo. (*)

(*) *Ver: artículos 968, 969 y 1617 de esta norma.*

844.- Las causas de indignidad no pueden alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que las producen, aunque se ofrezca probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos al tiempo de testar ni después. (*)

(*) *Ver: artículo 1617 de esta norma.*

845.- Para calificar la incapacidad o indignidad, se atenderá solamente al tiempo de la muerte de aquel a quien se trata de heredar.

Si la institución o legado fueren condicionales, se atenderá además al tiempo en que se cumpla la condición.

El heredero y el legatario que mueren antes de cumplirse la condición, aunque sobrevivan al testador, no transmiten derecho alguno a sus herederos.

Es lo mismo del heredero o legatario que muere antes de la época de la viabilidad. (Número 1º artículo 835). (*)

(*) *Ver: artículos 1038 y 1617 de esta norma.*

846.- La indignidad o incapacidad relativas a una persona o cosa, no se extienden a otra cosa o persona. (*)

(*) *Ver: artículo 1617 de esta norma.*

847.- El indigno o incapaz que haya entrado en posesión de los bienes contra lo dispuesto en los artículos anteriores, está obligado a restituirlos, con todos los frutos y rentas que de ellos haya percibido y con las accesiones que hayan tenido los mismos bienes. (*)

(*) *Ver: artículo 1617 de esta norma.*

848.- Si el excluido de la herencia por indignidad, es hijo o descendiente del testador y tiene hijos o descendientes, tendrán éstos derecho a la legítima del excluido, *aun en el caso de haber otros herederos testamentarios*. (Artículos 902, 1011 N° 3 y 1024).

Sin embargo, el excluido no tendrá el usufructo y administración de los bienes que por esta causa hereden sus hijos menores. (*)

(*) *Ver: artículo 1617 de esta norma.*

849.- La incapacidad produce su efecto de pleno derecho. (*)

(*) *Ver: artículo 1617 de esta norma.*

850.- La indignidad no produce efecto alguno si no es declarada en juicio, a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario indigno. (*)

(*) *Ver: artículo 1617 de esta norma.*

851.- La indignidad se purga en diez años de posesión de la herencia o legado. (*)

(*) *Ver: artículo 1617 de esta norma.*

852.- La acción de indignidad no pasa contra terceros de buena fe. (*)

(*) *Ver: artículo 1617 de esta norma.*

CAPITULO III

DE LA INSTITUCION DE HEREDERO

SECCION I

DE LA INSTITUCION DE HEREDERO

853.- El que no tiene asignatarios forzosos (artículo 870) puede disponer en testamento de todos o parte de sus bienes, por los títulos expresados en el artículo 780.

854.- La institución de heredero no es necesaria para la firmeza del testamento.

Tampoco lo es la aceptación de la herencia por el heredero. (*)

En uno y otro caso, se cumplirán las disposiciones testamentarias y en el resto de los bienes de que no hubiere dispuesto el testador, se heredará con arreglo a lo determinado en el Título siguiente.

(*) *Ver: artículo 1051 de esta norma.*

855.- Los herederos instituidos sin designación de partes heredan con igualdad.

856.- Si el heredero o herederos no han sido instituidos en la totalidad de los bienes, sino en una parte o cuota determinada, el remanente pasará a los herederos legítimos, a menos que haya otro u otros coherederos instituidos sin designación de partes.

857.- El heredero instituido en una cosa cierta y determinada es tenido por legatario de ella.

SECCION II

DE LA SUSTITUCION (*)

(*) *Ver: artículo 907 de esta norma.*

858.- La sustitución de heredero en segundo o ulterior grado, para el caso de que el nombrado en grado anterior no quiera o no pueda aceptar la herencia, es la única sustitución reconocida por la ley. (*)

(*) *Ver: artículos 859 y 865 de esta norma.*

859.- Todo testador puede sustituir en los términos del artículo anterior.

La sustitución para uno de los dos casos comprende también al otro, a menos que el testador haya declarado lo contrario.

La sustitución simple y sin expresión de casos, comprende los dos. (*)

(*) *Ver: artículo 865 de esta norma.*

860.- Pueden ser sustituidos dos o más personas a una sola; y al contrario, una sola a dos o más herederos.

861.- El sustituto del sustituto se entiende serlo también del heredero en primer grado.

862.- Cuando el testador sustituye recíprocamente los herederos instituidos en partes designadas, tendrán éstos, en la sustitución, las mismas partes que en la institución, si no apareciere claramente haber sido otra la voluntad del testador.

863.- El sustituto queda sujeto a las mismas cargas y condiciones impuestas al instituido, si no apareciere claramente que el testador quiso limitarlas a la persona del instituido.

864.- El derecho de transmisión excluye al de sustitución y el de sustitución al de acrecimiento. (*)

(*) *Ver: artículo 944 de esta norma.*

865.- Todo fideicomiso es nulo, cualquiera que sea la forma con que se le revista. Toda sustitución, fuera de la señalada en los artículos 858 y 859, se considera fideicomiso. (*)

(*) *Ver: artículo 866 de esta norma.*

866.- Quedan comprendidas en la prohibición del artículo anterior:

1°.- La disposición por la que se declare inalienable toda o parte de la herencia.

2°.- Aquella por la que es llamado un tercero al todo o parte de los que reste de la herencia al morir el heredero.

3°.- La que, bajo cualquier nombre o forma, tenga por objeto dejar a uno el todo o parte de los bienes hereditarios, para que los aplique o invierta según las instrucciones que le hubiere comunicado el testador. (Artículo 783).

867.- La nulidad de la sustitución fideicomisaria no perjudica a la validez de la institución de heredero ni a los derechos del primer llamado.

868.- No se entiende contener sustitución, la disposición en que el testador deja la propiedad a uno y el usufructo a otro u otros, con sujeción a lo dispuesto en el Título *Del usufructo*.

869.- Lo dispuesto en esta Sección se observará igualmente en los legados y donaciones.

CAPITULO IV

DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

870.- *Asignaciones forzosas* son las que el testador es obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aun en perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas.

Estas asignaciones son:

1º.- Los alimentos que se deben por la ley a ciertas personas.

2º.- La porción conyugal.

3º.- Las legítimas.

SECCION I

DE LAS ASIGNACIONES ALIMENTICIAS

871.- Los alimentos que el difunto debía por la ley a ciertas personas y que, en razón de la indigencia de éstas, eran exigibles antes de abrirse la sucesión, gravan, por una cuantía que se determinará en unidades reajustables, la masa hereditaria; excepto el caso en que el testador haya impuesto ese gravamen a uno o más partícipes de la sucesión. (*)

(*) *Ver: artículo 2391-1 de esta norma.*

872.- Los asignatarios de alimentos no están obligados a devolución alguna en razón de las deudas o cargas que graven el patrimonio del difunto, pero podrán rebajarse los alimentos futuros que aparezcan desproporcionados a las fuerzas del patrimonio efectivo.

873.- Si las asignaciones que se hacen a alimentarios forzosos fueren más cuantiosas de lo que en las circunstancias corresponda, se imputará el exceso a la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio.

A la misma porción se imputarán las asignaciones alimenticias, en favor de personas que por la ley no tengan derecho a alimentos.

SECCION II

DE LA PORCION CONYUGAL

874.- La porción conyugal es aquella parte del patrimonio del cónyuge premuerto, que la Ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua sustentación.

875.- Tendrá derecho a la porción conyugal aun el cónyuge separado (artículo 148), a menos que por sentencia haya sido declarado culpable de la separación.

876.- El derecho se entenderá existir al tiempo del fallecimiento del otro cónyuge y no caducará en todo ni en parte por la adquisición de bienes que posteriormente hiciere el cónyuge sobreviviente.

877.- El cónyuge sobreviviente que, al tiempo de fallecer el otro cónyuge, no tuvo derecho a porción conyugal, no la adquirirá después por el hecho de caer en pobreza.

878.- Si el cónyuge tuviere bienes, pero no de tanto valor como la porción conyugal, sólo tendrá derecho al complemento, a título de porción conyugal. (Artículo 893, número 2).

879.- Asimismo se imputará a la porción conyugal todo lo que el cónyuge sobreviviente tuviere derecho a percibir a cualquier otro título en la sucesión del difunto, inclusa su mitad de gananciales. (Artículo 893, número 2).

880.- El cónyuge sobreviviente podrá en todo caso retener lo que posea o se le deba, renunciando la porción conyugal o pedir la porción conyugal abandonando sus otros bienes y derechos. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 45 nral. 4°.*

881.- La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes del difunto, en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes legítimos o naturales reconocidos o declarados tales.

Habiendo tales descendientes, el viudo o viuda será contado entre los hijos a los efectos del artículo 887, inciso 1º y recibirá como porción conyugal la legítima rigorosa de un hijo (artículo 1043, numeral 4º). (*)

(*) *Ver: artículo 893 de esta norma.*

881-1.- Si, una vez pagadas las deudas de la sucesión, quedare en el patrimonio de la misma un inmueble, urbano o rural, destinado a vivienda y que hubiere constituido el hogar conyugal, ya fuere propiedad del causante, ganancial o común del matrimonio y concurrieren otras personas con vocación hereditaria o como legatarios, el cónyuge supérstite tendrá derecho real de habitación en forma vitalicia y gratuita.

En defecto del inmueble que hubiere constituido el hogar conyugal, los herederos deberán proporcionarle otro que reciba la conformidad del cónyuge supérstite. En caso de desacuerdo el Juez resolverá siguiendo el procedimiento extraordinario. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Decreto N° 252/998 de fecha 16 de setiembre de 1998, artículo 12.*

881-2.- Este derecho comprende, además, el derecho real de uso vitalicio y gratuito de los muebles que equiparen dicho inmueble (inciso segundo del artículo 469) ya fueren propiedad del causante, gananciales o comunes del matrimonio.

881-3.- Ambos derechos se perderán si el cónyuge supérstite contrajere nuevas nupcias, viviere en concubinato o adquiriere un inmueble apto para vivienda, de similares condiciones al que hubiera sido su hogar conyugal.

881-4.- Tales derechos se imputarán a la porción disponible; en el supuesto de que ésta no fuere suficiente, por el remanente se imputarán a la porción conyugal y, en último término, a la porción legitimaria.

881-5.- Para que puedan imputarse a la porción legitimaria los derechos reales de habitación y de uso concedidos por este artículo, se requiere que el matrimonio

haya tenido una duración continua y mínima de dos años, salvo que él se hubiere celebrado para regularizar un concubinato estable, singular y público, de igual duración, durante el cual hubieren compartido el hogar y vida en común. (*)

La imputación a la porción legitimaria podrá alcanzar hasta la totalidad de las legítimas rigurosas de los descendientes comunes del causante y del beneficiario de los derechos reales de habitación y de uso referidos. Tratándose de otros legitimarios, tal imputación sólo podrá alcanzar hasta la mitad de las respectivas legítimas rigurosas.

(*) *Ver: artículo 881-6 de esta norma.*

881-6.- En los demás casos, el plazo de duración mínima del matrimonio será de treinta días, con la salvedad de la parte final del inciso primero del numeral anterior, debiendo durar la relación concubinaria no menos de ciento ochenta días.

881-7.- Si, a la apertura de la sucesión, el cónyuge supérstite tuviere otro inmueble propio apto para vivienda, similar al que hubiera sido el hogar conyugal, no tendrá el derecho real de habitación ni el de uso.

881-8.- Si, a la apertura de la sucesión, los cónyuges estuvieren separados de cuerpos, el cónyuge culpable no tendrá los derechos reales referidos. Si estuvieren separados de hecho, el problema de la culpabilidad deberá resolverse con los herederos, por el procedimiento extraordinario.

881-9.- El cónyuge supérstite se considerará legatario legal de los derechos reales recibidos con la responsabilidad que le es propia a éstos.

882.- Si el cónyuge sobreviviente hubiere de percibir en la sucesión del difunto, a título de donación, herencia o legado, más de lo que le corresponde a título de porción conyugal, el sobrante se imputará a la parte de bienes de que el difunto pudo disponer a su arbitrio.

883.- En lo que el viudo o viuda perciba a título de porción conyugal, sólo tendrá la responsabilidad subsidiaria de los legatarios. (Artículo 1175).

Sin embargo, el cónyuge a quien por cuenta de su porción conyugal, haya cabido a título universal alguna parte de la sucesión del difunto, será responsable a prorrata de esa parte, como los herederos en sus respectivas cuotas.

Si se imputare a la porción conyugal la mitad de gananciales, subsistirá en ésta la responsabilidad especial que le es propia, según las disposiciones legales que reglan la sociedad conyugal.

SECCION III

DE LAS LEGITIMAS

884.- Llámase *legítima* la parte de bienes que la Ley asigna a cierta clase de herederos, independientemente de la voluntad del testador y de que éste no puede privarlos, sin causa justa y probada de desheredación.

Los herederos que tienen legítima se llaman *legitimarios* o *herederos forzosos*. (*)

(*) *Ver: artículo 905 de esta norma.*

885.- Tienen legítima:

1°.- Los hijos legítimos, personalmente o representados por sus descendientes legítimos o naturales.

2°.- Los hijos naturales, reconocidos o declarados tales, personalmente o representados por su descendencia legítima o natural.

3°.- Los ascendientes legítimos. (*)

(*) *Ver: artículos 887, 902 y 905 de esta norma.*

886.- Los legitimarios o herederos forzosos concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas de la sucesión intestada. (*)

(*) *Ver: artículo 905 de esta norma.*

887.- Habiendo un solo hijo legítimo o natural reconocido o declarado tal o descendencia con derecho a representarle, la porción legitimaria será la mitad de los bienes; si hay dos hijos, las dos terceras partes; si hay tres o más hijos, las tres cuartas partes. (*)

Dicha porción legitimaria se dividirá por partes iguales entre los legitimarios que concurren. (*)

No habiendo hijos legítimos ni naturales reconocidos o declarados tales ni descendencia con derecho a representarlos, la mitad de la herencia será la legítima de los ascendientes (artículo 885, numeral 3°).

Lo que resta del acervo, deducida la porción legitimaria según lo dispuesto en los precedentes incisos, es la parte de los bienes de que el difunto ha podido disponer en vida o en muerte, a favor de cualquiera, aunque sea extraño.

Lo que cupiese a cada uno de los herederos forzosos en la porción legitimaria, será su legítima *rigorosa*. (**)

(*) **Ver:** artículo 893 de esta norma.

(**) **Ver:** artículos 905, 1626 y 1659 de esta norma.

888.- Toda renuncia o transacción sobre la legítima futura entre aquellos que la deben y sus herederos forzosos, es nula; y los segundos podrán reclamarla cuando mueran los primeros; sin perjuicio de traer a colación lo que hubieren recibido por la renuncia o transacción. (*)

(*) **Ver:** artículo 905 de esta norma.

889.- Para fijar la porción legitimaria, se atenderá al valor de los bienes que hayan quedado a la muerte del testador, previas las deducciones indicadas en el *Título VI de este Libro* y sin comprender las deudas y cargas impuestas en el testamento. (Artículos 893 y 1043).

Al valor líquido de los bienes hereditarios se agregará imaginariamente el que tenían todas las donaciones del mismo testador de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1108 y siguientes. (Artículos 1100, 1613 y 1639). (*)

(*) **Ver:** artículos 890, 905 y 2391-1 de esta norma.

890.- Fijada la porción legitimaria con arreglo al artículo anterior, para la reducción de las donaciones y legados a la porción disponible, se observará lo siguiente:

1°.- No se llegará a las donaciones mientras pueda cubrirse la porción legitimaria reduciendo o dejando absolutamente sin efecto, si necesario fuere, las disposiciones testamentarias.

2°.- La reducción de éstas se hará a prorrata sin distinción alguna.

Con todo, si el testador quiso que se pagara cierto legado con preferencia a otros, no sufrirá reducción sino después de haberse aplicado éstos por entero al pago de las legítimas.

3°.- Si la disposición consiste en un usufructo o renta vitalicia, cuyo valor se tenga por superior a la parte disponible, los herederos forzosos podrán escoger entre ejecutar la disposición o abandonar la parte disponible.

4°.- Cuando haya lugar a la reducción de las donaciones, se hará en orden inverso al de sus fechas, esto es, principiando por las más recientes; y en lo demás se estará a lo dispuesto en el Libro Cuarto, Título *De las Donaciones*. (*)

(*) *Ver: artículos 905, 1101 y 1639 de esta norma.*

891.- Cuando el legado sujeto a reducción consiste en una finca que no admite cómoda división, quedará la finca para el legatario, si la reducción no absorbe la mitad de su valor y en caso contrario para los herederos forzosos; pero aquél y éstos deberán abonarse su respectivo haber en dinero. (*)

(*) *Ver: artículos 892 y 905 de esta norma.*

892.- Si los herederos o legatarios no quieren usar del derecho que se les acuerda en el artículo anterior, podrá usarlo el que de ellos no lo tenía; si éste tampoco quiere usarlo, se venderá la finca en pública subasta, a instancia de cualquiera de los interesados. (*)

(*) *Ver: artículo 905 de esta norma.*

893.- La porción legitimaria se aumenta a beneficio de las legítimas rigurosas (artículo 889):

1°.- Con lo que un heredero forzoso dejare de llevar de su legítima, por indignidad, desheredación o porque la haya repudiado y no tenga descendientes con derecho de representarle.

2°.- Con las deducciones que se hagan a la porción conyugal del cónyuge sobreviviente que tiene otros bienes o que ha de suceder por cualquier otro título según los artículos 878 y 879.

3°.- Con toda aquella porción de que ha podido disponer libremente el testador y no ha dispuesto o si lo ha hecho ha quedado sin efecto (artículos 778, inciso 3°, 1011, inciso 2°). (*)

Aumentadas así las legítimas rigorosas, se llaman *legítimas efectivas*; pero este acrecimiento no aprovecha al cónyuge sobreviviente cuando concorra con hijos legítimos o naturales. (Artículos 881 y 887, incisos 1º y 2º). (**)

(*) *Ver: artículo 1033 de esta norma.*

(**) *Ver: artículo 905 de esta norma.*

894.- La legítima rigorosa no admite gravamen, condición ni sustitución de ninguna especie. (*)

(*) *Ver: artículo 905 de esta norma.*

895.- El que debe una legítima podrá en todo caso señalar las especies en que ha de hacerse su pago; pero no podrá delegar esta facultad a persona alguna ni tasar los valores de dichas especies. (Artículo 1153). (*)

(*) *Ver: artículo 905 de esta norma.*

CAPITULO V

DE LA DESHEREDACION

896.- La desheredación es una disposición testamentaria, por la cual se priva o excluye de su legítima al heredero forzoso.

897.- Para que valga la desheredación se requiere:

1º.- Que se haga en testamento válido.

2º.- Que sea hecha pura y simplemente y del total de la legítima.

3º.- Que se designe al desheredado por su nombre y se exprese clara y específicamente la causa de la desheredación.

4º.- Si el desheredado es un hijo o descendiente, se requiere, además, que haya cumplido dieciocho años.

898.- La causa en que se funda la desheredación deberá ser alguna de las señaladas expresamente en la ley y probarse, además, por las personas a quienes interesare la desheredación, si no se hubiese probado judicialmente en vida del testador.

899.- Todas las causas de indignidad para suceder (artículo 842) lo son también respectivamente de desheredación. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.713 de fecha 3 de setiembre de 1995, artículos 25 y 26 lit. C); Decreto N° 359/995, de fecha 21 de setiembre de 1995, artículo 11 lit. C).*

900.- Son además justas causas de desheredación de los hijos y descendientes:

1°.- Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra al padre o ascendiente que le deshereda.

2°.- Haberle negado los alimentos, sin motivo legítimo.

3°.- **DEROGADO por Ley 16.603 de 19.10.94 (*)**

4°.- Haber sido declarado por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, culpable de un delito y condenado como tal a la pena de cinco años de penitenciaría o a otra pena de mayor gravedad. (**)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

La referencia se entiende realizada a la Ley N° 16.603 de fecha 19 de octubre de 1994, artículo 2.

(**) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.713 de fecha 3 de setiembre de 1995, artículos 25 y 26 lit. C); Decreto N° 359/995 de fecha 21 de setiembre de 1995, artículo 11 lit. C).*

901.- El padre y la madre pueden ser desheredados por sus hijos:

1°.- Cuando han perdido la patria potestad, con arreglo a este Código. (Artículos 284 y siguientes).

2°.- Cuando les negaren los alimentos, sin motivo legítimo.

3°.- Cuando el padre atentó contra la vida de la madre o ésta contra la de aquél y no hubo reconciliación entre los mismos.

Las disposiciones de este artículo se aplican también a los otros ascendientes legítimos. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.713 de fecha 3 de setiembre de 1995, artículos 25 y 26 lit. C); Decreto N° 359/995, de fecha 21 de setiembre de 1995, artículo 11 lit. C).*

902.- Los hijos del descendiente desheredado que sobrevive al testador, ocupan su lugar y derechos de herederos forzosos respecto a la legítima, sin que el padre desheredado tenga el usufructo legal y administración de los bienes que por esta causa hereden. (Artículos 848 y 885).

903.- Los efectos de la desheredación no se extienden a los alimentos necesarios y debidos por la ley.

904.- La desheredación podrá revocarse como las otras disposiciones testamentarias; pero no se entenderá revocada tácitamente por haber intervenido reconciliación; ni el desheredado será admitido a probar que hubo intención de revocarla.

CAPITULO VI

DE LAS MANDAS O LEGADOS

905.- El testador puede gravar con legados no sólo a su heredero, sino también a los mismos legatarios; y si éstos aceptaren, deberán cumplirlos, con tal que no importen más de lo que se les deja.

Lo dicho respecto del heredero se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 884 y siguientes.

906.- El obligado a la entrega de la cosa legada responde en caso de evicción, si la cosa fue indeterminada y correspondía a un género o clase.

907.- Puede también el testador dar sustituto al legatario; y en este caso regirá lo dispuesto en la Sección II, Capítulo III de este Título.

908.- Cuando el testador haya legado alguna especie ajena, será nulo el legado, supiese o no el testador que no le pertenecía.

Valdrá, sin embargo, el legado de una especie propia del heredero o del legatario, si se hubiese hecho en forma de carga o de condición.

909.- Cuando el testador legó una especie empeñada o hipotecada para la seguridad de una deuda exigible del mismo testador, el pago de ésta será de cargo de la herencia, a menos que el testador hubiese impuesto expresamente al legatario el gravamen de pagarla.

Si por no pagarla el heredero, lo hiciere el legatario que no tenga el gravamen de ese pago, quedará subrogado en el lugar y derecho del acreedor para reclamar contra el heredero.

Toda otra carga perpetua o temporal a que esté afecta la especie legada, pasa con ésta al legatario; pero en ambos casos las rentas, intereses o réditos devengados hasta la muerte del testador, son carga de la herencia. (*)

(*) *Ver: artículos 911 y 1168 de esta norma.*

910.- En el legado de usufructo, si ocurriese el caso previsto en el artículo 529, se observará lo dispuesto en el mismo.

911.- La enajenación que de las especies legadas haya hecho el testador en todo o en parte y por cualquier título o causa, deja sin efecto el legado en lo que ha sido objeto de la enajenación, aunque ésta haya sido nula y dichas especies hayan vuelto al dominio del testador; a menos que hayan vuelto por pacto de retroventa puesto por el mismo testador al hacer la enajenación.

Sin embargo, el caso de empeño o hipoteca de la cosa ya legada se regirá por lo dispuesto en el artículo 909.

912.- Pueden legarse no solamente los objetos corporales, sino los derechos y acciones.

913.- El legado de una cosa futura vale con tal que llegue a existir. (Artículos 1283 y 1625, inciso 3º y 1671).

914.- El legado de crédito y el de perdón de una deuda sólo tienen efecto por la parte del crédito o de la deuda existente al tiempo de la muerte del testador.

En el primer caso, el heredero cumple con ceder al legatario todas las acciones que le competirían contra el deudor.

En el segundo, el heredero cumple con dar al legatario carta de pago, si la pidiere.

En ambos casos, el legado comprende los intereses que por el crédito o deuda se debieran al testador. (*)

(*) *Ver: artículo 915 de esta norma.*

915.- Caducan los legados de que habla el artículo anterior, cuando el testador demandó judicialmente al deudor para el pago, aunque éste no se haya realizado.

916.- Si se lega a un deudor lo que debe, sin determinar suma, no se comprenderán en el legado sino las deudas existentes a la fecha del testamento.

917.- Legado el instrumento privado de la deuda, se entiende remitida ésta.

Por el legado hecho al deudor de la cosa recibida en prenda, sólo se entiende remitido este derecho.

918.- Lo que se deja a un acreedor no se entenderá que es a cuenta de su crédito, si no se expresa.

En caso de expresarse, se deberá reconocer la deuda en los términos que lo haya hecho el testador o en que se justifique haberse contraído la obligación; y el acreedor podrá a su arbitrio exigir el pago, en los términos a que estaba obligado el deudor o en los que expresa el testamento.

919.- Si el testador manda pagar lo que cree deber y no debe, la disposición se tendrá por no escrita.

920.- Si en razón de una deuda determinada, se manda pagar más de lo que ella importa, no se deberá el exceso.

921.- Las deudas confesadas en el testamento y de que por otra parte no hubiese un principio de prueba por escrito, se tendrán por legados gratuitos y estarán sujetos a las mismas responsabilidades y deducciones que los otros legados de esta clase.

922.- En los legados alternativos se presume haberse dejado la elección al heredero.

923.- No vale el legado de cosa fungible, cuya cantidad no se determine de algún modo.

Si el legado se hiciera señalando el lugar donde ha de encontrarse la cosa fungible, sin determinar cantidad, se deberá lo que allí se encuentre al tiempo de la muerte del testador.

Si se encontrare menor cantidad que la designada, en caso de que se hubiere hecho alguna designación, sólo se deberá la cantidad existente; y si nada se encontrare, no valdrá el legado.

924.- Si al legar una especie, se designa el lugar en que está guardada y no se encuentra allí, sino en otra parte, se deberá la especie; y si no se encuentra en parte alguna, será nulo el legado.

925.- Si de muchas especies que existen en el patrimonio del testador, se legare una sin decir cuál, será la elección del heredero, quien cumplirá con dar una especie de mediana calidad o valor entre las comprendidas en el legado.

La misma regla se seguirá en los legados de género que no se limitan a lo que existe en el patrimonio del testador, como una vaca, un caballo, etc. (*)

(*) *Ver: artículo 927 de esta norma.*

926.- Si se legó una cosa entre varias que el testador creyó tener y no ha dejado más que una, se deberá la que ha dejado; y si no ha dejado ninguna, no valdrá el legado.

Tampoco valdrá el legado de una cosa indeterminada, de aquellas cuyo valor no tiene límites, como una casa, una hacienda de campo, si no existiere alguna del mismo género entre los bienes del testador.

927.- Siempre que la elección de una cosa entre muchas se diere expresamente al heredero o al legatario, podrá respectivamente aquél o éste ofrecer o elegir a su arbitrio.

Lo mismo podrá hacer un tercero a quien se cometiere la elección; pero si éste no cumpliera su encargo en el tiempo señalado por el testador o en su defecto por el Juez, tendrá lugar la regla del artículo 925.

Hecha una vez la elección, quedará irrevocable, excepto el caso de engaño o dolo.

928.- La especie legada debe entregarse en el estado en que existe al tiempo de la muerte del testador, comprendiendo los utensilios necesarios para su uso, que existan con ella.

Si se lega un carruaje, se entenderán legados los arneses y las bestias de que el testador solía servirse para usarlo y que al tiempo de su muerte existan con él.

929.- En el legado de un predio no se comprenden los terrenos y edificios que el testador le haya agregado después del testamento.

Si lo nuevamente agregado formare con lo demás, al tiempo de abrirse la sucesión, un todo que no pueda dividirse sin grave pérdida y las agregaciones valieren más que el predio en su estado anterior, sólo se deberá al legatario el valor del predio.

Si las agregaciones valieren menos, se deberá todo ello al legatario, con cargo de pagar el valor de dichas agregaciones.

930.- El legado de una medida de tierra, como mil metros cuadrados, no aumenta, en ningún caso, por la adquisición que el testador hiciere de tierras contiguas y si éstas no pudieren separarse, sólo se deberá el valor de la medida legada.

Si se lega un solar y después lo edifica el testador, sólo se deberá el valor del solar.

931.- Cuando se lega parte de un predio, se entiende con las servidumbres que para su goce o cultivo le sean necesarias.

932.- Si se lega un rebaño, se deberán los animales de que se componga al tiempo de la muerte del testador y no más.

933.- Cuando se leguen alimentos voluntarios sin determinar su forma y cuantía, se deberán en la forma y cuantía en que el testador acostumbraba suministrarlos a la misma persona; y a falta de esta determinación, se regularán tomando en consideración la necesidad del legatario, sus relaciones con el testador y las fuerzas del patrimonio, en la parte de que el testador ha podido disponer libremente.

Si el testador no fija el tiempo que haya de durar la contribución de alimentos, se entenderá que debe durar por todo el tiempo de la necesidad del legatario.

El legado de educación durará hasta que el legatario sea mayor de edad.

934.- Siempre que se legue una cantidad determinada para satisfacerse periódicamente, como en cada año, cada mes o en otro tiempo, el legatario podrá exigir la del primer período así que muera el testador y la de los siguientes en el

principio de cada uno de ellos; y no habrá lugar a la devolución, aun cuando el legatario muera antes de concluirse el período a que correspondía la cantidad entregada.

935.- Cuando el testador, en un mismo testamento o en diversos, ha dejado a una misma persona varias veces la misma cosa, aunque sea género o cantidad, se presume que lo ha hecho por error o inadvertencia; y el legatario sólo una vez puede exigir el legado, a no ser que el testador exprese su voluntad de repetirlo.

936.- En los legados puros y simples el legatario adquiere derecho a ellos, desde que muere el testador y lo trasmite a sus herederos. (Artículo 955).

937.- Siendo el legado de una especie cierta, adquiere el legatario su propiedad desde la muerte del testador y hace suyos los frutos pendientes y futuros.

La especie legada correrá desde entonces a riesgo del legatario, para el cual será la pérdida, aumento o deterioro de ella.

938.- El legatario no puede ocupar por su propia autoridad la cosa legada, sino que debe pedir su entrega y posesión al heredero o albacea, cuando éste se halle autorizado para darla.

939.- El heredero debe entregar la misma cosa legada, pudiendo hacerlo y no cumple con dar su estimación.

Los legados en dinero deben ser pagados en esta especie, aunque no lo haya en la herencia.

Los gastos necesarios para la entrega de la cosa legada se mirarán como una parte del mismo legado.

940.- Si no hubiere bienes suficientes para cubrir todos los legados, se sacarán primero los de especie cierta; y los bienes restantes se repartirán después a prorrata entre los legatarios de cantidad de dinero.

Los legados hechos expresamente en recompensa de servicios no estarán sujetos a este descuento.

Tampoco lo estarán aquellos legados que el testador hubiere expresamente querido que fuesen pagados con preferencia.

941.- El legado hecho simplemente a un menor *para tomar estado*, sin expresión de cuál haya de ser, se entregará al legatario así que cumpla la mayor edad.

El hecho a un mayor de edad *para tomar estado* se entenderá para casarse y se le entregará cuando se case.

942.- El legatario puede exigir que el heredero afiance en todos los casos en que pueda exigirlo el acreedor.

943.- Cuando el legatario no pueda o no quiera aceptar el legado o éste por cualquier otra causa no pueda tener efecto, se refundirá en la masa de la herencia, fuera de los casos de sustitución y acrecimiento, conforme a este Código.

944.- El legatario no puede aceptar una parte y repudiar la otra del mismo legado. Pero si murió antes de aceptar o repudiar y dejó herederos, puede cada uno de éstos aceptar o repudiar su parte del legado. (Artículo 864).

945.- Siendo dos los legados, puede el legatario aceptar uno y repudiar otro, pero si uno de ellos fuese oneroso, no podrá repudiar éste y aceptar el otro.

946.- Por la destrucción de la especie legada se extingue la obligación de pagar el legado.

También queda sin efecto el legado de una cosa mueble, si el testador la altera de modo que pierda la forma y denominación anterior.

CAPITULO VII

DE LAS CONDICIONES, PLAZOS Y OBJETO O FIN DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS (*)

(*) *Ver: artículo 1432 de esta norma.*

947.- Lo dispuesto en el Capítulo III, Título II del Libro Cuarto, sobre las obligaciones *condicionales y a plazo* rige también en las últimas voluntades; sin perjuicio de lo que se dispone por los artículos siguientes. (Artículo 1432-1). (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera y Normas Concordantes y Complementarias (TOCAF), aprobado por Decreto N° 194/997 de fecha 10 de junio de 1997, Título I, Capítulo III, Sección II, artículo 39.*

948.- La condición que consiste en un hecho presente o pasado, no suspende el cumplimiento de la disposición: si el hecho existe o ha existido, se mira como no escrita; y si no existe o no ha existido, no vale la disposición.

Lo pasado, presente y futuro se considera en relación al momento de testar, a menos que se exprese otra cosa.

949.- Cuando la condición que se impone como para tiempo futuro, consiste en un hecho que se ha realizado en vida del testador, si éste lo supo al tiempo de testar y el hecho es de los que pueden repetirse, se presumirá que el testador exige su repetición.

Si el testador lo supo al tiempo de testar y el hecho es de aquellos cuya repetición es imposible, se mirará la condición como cumplida.

Si el testador no lo supo, se mirará la condición como cumplida, cualquiera que sea la naturaleza del hecho.

950.- Si la condición impuesta al heredero o legatario, fuese negativa o de *no hacer o no dar*, cumplirán aquéllos con afianzar que no harán o no darán lo que les fue prohibido por el testador; y que, en caso de contravención, devolverán lo percibido con sus frutos e intereses.

951.- La condición de no impugnar el testamento, impuesta al heredero o legatario, no se extiende a las demandas de nulidad por falta de solemnidades ni a las de interpretación de voluntad.

952.- La condición de no contraer primero o ulterior matrimonio se tiene por no puesta y en nada perjudica al heredero o legatario. (Artículo 1410). (*)

(*) *Ver: artículo 953 de esta norma.*

953.- El artículo precedente no se opone a que se provea a la subsistencia de una mujer, mientras permanezca soltera o viuda, dejándole por ese tiempo un derecho de usufructo, de uso o de habitación o una pensión periódica.

954.- Las disposiciones testamentarias a plazo incierto, esto es, para ejecutarse el día incierto en que se realice un hecho futuro necesario, como la muerte de una persona, son condicionales y envuelven la condición suspensiva de existir el heredero o legatario en ese día. (Artículo 1422).

955.- Las disposiciones testamentarias bajo condición suspensiva no confieren al heredero o legatario derecho alguno, mientras no se cumpla la condición, salvo el de implorar las providencias conservatorias necesarias.

Si el heredero o legatario muere antes de cumplirse la condición, no trasmite derecho alguno.

Cumplida la condición, no tendrá derecho a los frutos percibidos en el tiempo intermedio, si el testador no se los hubiere expresamente concedido. (Artículo 936).

956.- Cuando se deja algo a una persona para que lo tenga por suyo con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un *modo* y no una condición suspensiva.

Si pareciere dudosa la intención del testador, se juzgará que la disposición es modal. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera y Normas Concordantes y Complementarias (TOCAF), aprobado por Decreto N° 194/997 de fecha 10 de junio de 1997, Título I, Capítulo III, Sección II, artículo 39.*

957.- El modo no suspende la adquisición del derecho ni su ejercicio.

Lo dejado modalmente puede pedirse desde luego, sin necesidad de dar fianza de restitución para el caso de no cumplirse el modo.

958.- En las disposiciones modales se llama *cláusula resolutoria*, la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos, si no se cumple el modo.

No se entenderá que envuelven cláusula resolutoria, cuando el testador no la expresa. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera y Normas Concordantes y Complementarias (TOCAF), aprobado por Decreto N° 194/997 de fecha 10 de junio de 1997, Título I, Capítulo III, Sección II, artículo 39.*

959.- Si el modo es en beneficio exclusivo de aquel a quien se impone, se mirará como simple declaración de voluntad que no encierra obligación jurídica, salvo que lleve cláusula resolutoria.

960.- Si el hecho que constituye el modo es por su naturaleza imposible, contrario a las buenas costumbres o prohibido por las leyes, no valdrá la disposición.

Si el modo, sin hecho o culpa del gravado, es solamente imposible en la forma prescrita por el testador, deberá cumplirse en otra análoga que no altere la sustancia de la disposición y que en este concepto sea aprobada por el Juez, con citación de los interesados.

Si el modo se hace enteramente imposible, sin hecho o culpa del gravado, subsistirá la disposición sin el gravamen.

961.- Si el testador no determinare suficientemente el tiempo o la forma especial en que ha de cumplirse el modo, podrá hacerlo el Juez, consultando en lo posible la voluntad de aquél y dejando al gravado en el modo, un beneficio que ascienda por lo menos a la quinta parte del valor de lo que se le deje por el testamento.

962.- Si el modo consiste en un hecho tal, que para el fin que el testador se haya propuesto, sea indiferente la persona que lo ejecute, es transmisible a los herederos del gravado por la disposición modal. (*)

(*) *Ver: artículo 963 de esta norma.*

963.- Siempre que haya de llevarse a efecto la cláusula resolutoria, restituyendo lo recibido por no cumplirse el modo, se deberá entregar a la persona en cuyo favor se ha constituido el modo una suma proporcionada al objeto y el resto del valor de la cosa dejado modalmente acrecerá a la herencia, si el testador no hubiere ordenado otra cosa.

Aquel a quien se ha impuesto el modo, no gozará del beneficio que pudiera resultarle de la disposición precedente.

CAPITULO VIII

DE LOS ALBACEAS

964.- *Albaceas o ejecutores testamentarios* son aquellos a quienes el testador da el encargo de hacer ejecutar sus disposiciones.

El testador puede nombrar uno o más albaceas.

965.- No habiendo el testador nombrado albaceas o faltando el nombrado, el encargo de hacer ejecutar las disposiciones del testador pertenece a los herederos.

966.- El que no puede obligarse no puede ser albacea.

La capacidad del albacea se refiere al tiempo de la ejecución del testamento.

La incapacidad sobreviniente pone fin al albaceazgo.

967.- No puede ser albacea el menor, aun habilitado de edad. (Artículo 310).

DEROGADOS los inc. 2o. y 3o. por el art. 1o. de la Ley No. 10.783 del 18.9.46 (*)

() Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

968.- El albacea nombrado puede rehusar libremente este cargo; pero aceptándolo expresa o tácitamente, está obligado a desempeñarlo, excepto en los casos en que es permitido al mandatario exonerarse del suyo.

Si rehusare el cargo, tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 843.

969.- El Juez, a instancia de cualquiera de los interesados en la sucesión, señalará un plazo razonable dentro del cual el albacea acepte el cargo o se excuse de servirlo; y podrá el Juez, en caso necesario, ampliar por una sola vez el plazo.

Si el albacea estuviere en mora de comparecer, caducará su nombramiento, quedando además sujeto a lo que dispone el artículo 843.

970.- El albaceazgo no es transmisible a los herederos del albacea.

971.- Tampoco es delegable el albaceazgo, sin expresa autorización del testador. El albacea, con todo, podrá constituir mandatarios que obren a sus órdenes; bien que será responsable de las operaciones de éstos.

972.- Cuando son dos o más los albaceas y no pueden o no quieren intervenir todos, valdrá lo que bajo su responsabilidad hiciere el menor número, aunque fuese uno solo.

973.- Siendo varios los albaceas en el caso del artículo 986 y habiendo entrado en la tenencia de los bienes, responderán todos solidariamente, a menos que el mismo testador o el Juez de la testamentaría, a petición de cualquiera de dichos albaceas o de los interesados en la sucesión, haya dividido sus atribuciones y que cada uno se haya limitado a las que le incumbían.

974.- Incumbe al albacea velar sobre la seguridad de los bienes; hacer que se guarde bajo llave y sello el dinero, muebles y papeles, mientras no haya inventario solemne y cuidar de que se proceda a este inventario, con citación de los herederos y de los demás interesados en la sucesión; salvo que siendo todos los herederos capaces de administrar sus bienes, determinen unánimemente que no se haga inventario solemne.

975.- Todo albacea será obligado a dar noticia de la apertura de la sucesión y citar a los acreedores conforme a la publicidad prevista en la ley procesal. (*)

(*) *Ver: artículo 977 de esta norma.*

976.- Sea que el testador haya encomendado o no al albacea el pago de sus deudas, será éste obligado a exigir que en la partición de los bienes se señale un lote suficiente para cubrir las deudas conocidas. (Artículos 1131 y 1138). (*)

(*) *Ver: artículo 977 de esta norma.*

977.- La omisión de las diligencias prevenidas en los dos artículos anteriores, hará responsable al albacea de todo perjuicio que ella irroque a los acreedores.

Las mismas obligaciones y responsabilidades recaerán sobre los herederos presentes y capaces o sobre los representantes legítimos de los que no tuvieren capacidad legal. (Artículo 1169).

978.- El albacea encargado de pagar deudas hereditarias, lo hará, precisamente, con intervención de los herederos presentes o del curador de la herencia yacente en su caso.

979.- Aunque el testador haya encargado al albacea el pago de sus deudas, los acreedores tendrán siempre expedita su acción contra los herederos, si el albacea estuviere en mora de pagarles.

980.- El albacea pagará los legados que no se hayan impuesto a determinado heredero o legatario, para lo cual exigirá a los herederos o al curador de la herencia yacente en su caso, el dinero que sea menester y las especies muebles o raíces en que consistan los legados, si el testador no le hubiere dejado la tenencia del dinero o de las especies.

Los herederos, sin embargo, podrán hacer el pago de los dichos legados por sí mismos y satisfacer al albacea con las respectivas cartas de pago; a menos que el legado consista en una obra o hecho encomendado particularmente al albacea y sometido a su juicio.

981.- Si hubiere legados para objetos de beneficencia pública, el albacea dará conocimiento de ellos, con inserción de las respectivas cláusulas, al Fiscal de Hacienda; a quien igualmente denunciará la negligencia de los herederos o legatarios obligados a prestar esos legados.

El Ministerio Fiscal perseguirá judicialmente a los omisos.

De las mandas piadosas como sufragios, misas, fiestas eclesiásticas y otras semejantes, el albacea dará cuenta a la autoridad religiosa respectiva, la que podrá implorar ante la autoridad civil, las providencias judiciales necesarias, para que los obligados a prestar estas mandas, las cumplan.

La autoridad religiosa podrá también proceder espontáneamente a la diligencia antedicha contra el albacea, los herederos o legatarios omisos.

El mismo derecho tendrán también los Municipios, en razón de los legados de utilidad pública en que se interesen los respectivos vecindarios.

982.- Si no hubiere de hacerse inmediatamente el pago de especies legadas y se temiere su pérdida o deterioro por negligencia de los obligados a darlas, el albacea a quien incumbe hacer cumplir los legados, podrá exigirles caución.

983.- Si no hubiere dinero suficiente para el pago de las deudas o legados, el albacea, con anuencia de los herederos presentes, procederá a la venta de los bienes muebles y no alcanzando éstos, a la de los inmuebles; salvo que los herederos podrán oponerse a la venta, entregando al albacea el dinero que necesite al efecto.

984.- Lo dispuesto en los artículos 396, 407 y 412, número 1º, se extenderá a los albaceas.

985.- El albacea no podrá comparecer en juicio en calidad de tal, sino para defender la validez del testamento o cuando le fuere necesario para llevar a efecto las disposiciones testamentarias que le incumban; y en todo caso, lo hará con la intervención de los herederos presentes o del curador de la herencia yacente en su caso.

986.- El testador podrá dar al albacea, la tenencia de cualquiera parte de los bienes o de todos ellos y en este caso, tendrá el albacea las mismas facultades y obligaciones del curador de la herencia yacente; con sólo la diferencia de no estar obligado a rendir caución, sino cuando lo pidieren los herederos o legatarios por justo temor sobre la seguridad de los bienes.

Aunque se haya conferido al albacea la tenencia de los bienes, habrá lugar a las disposiciones de los artículos precedentes.

987.- El testador no podrá ampliar las facultades del albacea ni exonerarle de sus obligaciones, según se hallan definidas en este capítulo.

988.- El albacea es responsable de la culpa o falta de diligencia que se le pueda imputar en el desempeño de su cargo.

989.- El albacea podrá ser removido por culpa o dolo a petición de los herederos.

En caso de dolo se hará indigno de lo que el testador le hubiese legado; y además de indemnizar de cualquier perjuicio a los interesados, restituirá todo lo que haya recibido a título de retribución. (Artículo 843).

990.- Prohíbese al albacea llevar a efecto ninguna disposición del testador, en lo que fuere contraria a las leyes, so pena de nulidad y de considerársele culpable de dolo.

991.- Cuando el testador no haya señalado la remuneración del albacea, se fijará por resolución judicial, habida consideración al caudal hereditario y a lo más o menos laborioso del cargo.

992.- El albaceazgo durará el tiempo cierto y determinado que se haya prefijado por el testador.

Si el testador no hubiere prefijado el tiempo con arreglo al precedente inciso, durará el albaceazgo un año, contado desde el día en que el albacea haya comenzado a ejercer el cargo.

El Juez podrá prorrogar el plazo señalado por el testador o por la ley, si ocurrieren al albacea dificultades graves para evacuar su cargo, dentro de él.

993.- El plazo prefijado por el testador o por la ley o ampliado por el Juez, se entenderá sin perjuicio de la partición de los bienes y de su distribución entre todos los partícipes.

994.- Los herederos podrán pedir la terminación del albaceazgo, desde que el albacea haya evacuado su cargo, aunque no haya expirado el plazo de que hablan los artículos anteriores.

995.- No será motivo para la prolongación del plazo ni del albaceazgo, la existencia de legados cuyo día o condición estuviere pendiente; a menos que el testador haya dado al albacea expresamente la tenencia de las respectivas especies o de la parte de los bienes destinados a cumplirlos; en cuyo caso se limitará el albaceazgo a esta sola tenencia.

Lo dicho se extiende a las deudas cuyo pago se hubiere encomendado al albacea y cuyo día, condición o liquidación estuviere pendiente; y se entenderá sin perjuicio de los derechos concedidos a los herederos por los artículos precedentes.

996.- Terminada la ejecución de su cargo, el albacea dará cuentas justificadas de su administración. No podrá el testador relevarle de esta obligación.

997.- El albacea, examinadas las cuentas por los respectivos interesados y deducidas las expensas legítimas, pagará o cobrará el saldo que en su contra o a su favor resultare, según lo prevenido para los tutores y curadores en iguales casos.

CAPITULO IX

DE LA REVOCACION Y REFORMA DEL TESTAMENTO

SECCION I

DE LA REVOCACION DEL TESTAMENTO

998.- Todo testamento es revocable a voluntad del testador hasta su muerte. (Artículo 779).

La renuncia que de este derecho se hiciere, será nula, así como la cláusula en que el testador se obligare a no usarlo sino bajo ciertas palabras, cláusulas o restricciones.

999.- Un testamento no puede ser revocado expresamente, sino por otro testamento.

1000.- La revocación que de un testamento solemne se hiciere en otro menos solemne o especial, otorgado en los casos previstos por la ley, caducará con este testamento, después del plazo fijado en los artículos 811, 816 y 824 y subsistirá el anterior.

1001.- Si el testamento que revoca otro anterior, es revocado a su vez, no revive por esa revocación el primer testamento, a menos que el testador exprese su voluntad a este respecto.

1002.- Un testamento nulo no puede producir el efecto de revocar los testamentos anteriores.

1003.- La revocación hecha en un testamento posterior, surtirá todos sus efectos, aunque la nueva institución quede sin cumplirse por la incapacidad o indignidad del heredero instituido o su negativa de aceptar la herencia.

1004.- Si alguno hace segundo testamento, e instituye heredero, *expresando* que lo hace por creer que ha muerto el instituido en el primer testamento, cuando realmente vive, subsistirá la primera institución.

1005.- Un testamento no se revoca tácitamente en todas sus partes por la existencia de otro u otros posteriores.

Cuando éstos no revoquen expresamente los anteriores testamentos, dejarán subsistentes las disposiciones que no sean incompatibles o contrarias a ellos.

SECCION II

DE LA REFORMA DEL TESTAMENTO

1006.- Los herederos forzosos a quienes el testador no haya dejado lo que les corresponde por la ley, tendrán derecho a que se *reforme a su favor* el testamento

y podrán intentar la *acción de reforma* (ellos o las personas que les hubieren sucedido en sus derechos), dentro de los cuatro años contados desde el día en que conocieron el testamento del difunto o contados desde el día en que llegaron a la mayor edad, si eran menores a la apertura de la sucesión.

1007.- La acción de reforma da derecho a los herederos forzosos, para reclamar la legítima rigorosa o la efectiva en su caso.

1008.- El haber sido pasado en silencio un heredero forzoso deberá entenderse como una institución en su legítima.

1009.- Contribuirán a formar o integrar lo que en razón de su legítima se debe al demandante, los herederos forzosos del mismo orden y grado.

1010.- La acción de reforma corresponde también, según las mismas reglas, al cónyuge sobreviviente para la integración de la porción conyugal.

TITULO V

LA SUCESION INTESTADA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

1011.- La sucesión intestada tiene lugar:

1°.- Cuando uno muere sin testamento o con testamento nulo o con testamento que perdió después su fuerza, aunque al principio fuese válido.

2°.- Cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en alguna parte de los bienes. (Artículo 893). (*)

3°.- Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero o el instituido muere antes que el testador o es incapaz o indigno o repudia la herencia; fuera de los casos de sustitución y acrecimiento con arreglo a este Código.

Si el descendiente que repudia tuviese hijos o descendientes y hubiese otros herederos testamentarios, regirá lo dispuesto en el artículo 848.

(*) *Ver: artículo 1033 de esta norma.*

1012.- Lo dispuesto en el Capítulo II del Título anterior sobre incapacidad o indignidad para recibir por testamento, tiene lugar respectivamente en las herencias intestadas. (*)

(*) *Ver: artículo 1038 de esta norma.*

1013.- Para reglar la sucesión intestada, la ley sólo considera los vínculos de afecto y de parentesco; no la prerrogativa de la línea, el sexo, la naturaleza ni el origen de los bienes.

1014.- Son llamados a la sucesión intestada, según las reglas que más adelante se determinarán, los parientes legítimos y naturales del difunto, los hijos adoptivos o padres adoptantes, el cónyuge sobreviviente y el Estado.

1015.- El parentesco se mide por líneas y éstas por grados.

Se llama línea recta la serie de personas que ascienden o descienden unas de otras.

Colateral la de las personas que sin descender unas de otras, vienen de un mismo tronco.

Se llama línea recta descendiente, la que liga a una persona con los individuos que de ella descienden.

Línea recta ascendente, la que liga con el tronco a los que de él provienen.

La distancia de los parientes entre sí se mide por grados.

1016.- En todas las líneas hay tantos grados cuantas son las personas, descontando la del tronco.

En la recta se sube únicamente hasta el tronco; así el hijo dista del padre un grado, dos del abuelo, tres del bisabuelo.

En la colateral se sube hasta el tronco común y después se baja hasta la persona con quien se quiere hacer la computación.

De este modo, el hermano dista dos grados del hermano; tres del tío, hermano de su padre o madre; cuatro del primo hermano y así en adelante.

La computación de que trata este artículo rige en todas las materias.

1017.- En la sucesión intestada se hereda ya por derecho propio, ya por derecho de representación.

1018.- La representación es una disposición de la ley por la que una

persona es considerada en el lugar y por consiguiente, en el grado y con los derechos del pariente más próximo que no quisiese o no pudiese suceder.

Se puede representar al que si hubiese querido o podido suceder, habría sucedido por derecho de representación.

1019.- La representación tiene siempre lugar en la línea recta de descendientes, ya sean estos legítimos o naturales reconocidos o declarados tales.

1020.- No hay representación en la línea recta ascendente.

El ascendiente más próximo excluye siempre al más remoto.

Los que están en un mismo grado heredan por partes iguales, aunque sean de distintas líneas.

1021.- En la línea colateral sólo se admite la representación a favor de la descendencia legítima o natural de los hermanos legítimos o naturales, bien sean de padre y madre o de un solo lado.

Se verifica la representación de que trata el anterior inciso, ya sea que los descendientes de los hermanos estén solos y en igualdad de circunstancias, ya concurren con sus tíos. (Artículo 1028). (*)

(*) *Ver: artículo 1030 de esta norma.*

1022.- DEROGADO por el art. 2o. de la Ley No. 15.855 de 25.3.87 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

1023.- Los que suceden por derecho de representación heredan en todos casos por *estirpes*, es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos que representan al padre o madre, toman entre todos y por iguales partes la porción que hubiera cabido al padre o madre representado.

Los que suceden por derecho propio heredan por *cabezas*, esto es, toma cada uno por iguales partes la porción a que la ley los llama; a menos que la misma ley establezca otra división diferente.

1024.- Se puede representar al ascendiente, aunque se haya repudiado su herencia y asimismo se puede representar al ascendiente indigno, al desheredado y al que repudió la herencia del difunto.

CAPITULO II

DEL ORDEN DE LLAMAMIENTO

1025.- La ley llama a la sucesión intestada, en primer lugar, a la línea recta descendente.

Habiendo descendientes legítimos o naturales éstos excluyen a todos los otros herederos, sin perjuicio de la porción conyugal que corresponda al marido o a la mujer sobreviviente.

1026.- A falta de posteridad legítima o natural del difunto lo sucederán sus ascendientes de grado más próximo, sean legítimos o naturales, cuando ha mediado reconocimiento anterior al fallecimiento del causante, y su cónyuge. La herencia se dividirá en dos partes, una para los ascendientes y una para el cónyuge.

Cuando sólo hubiese una de las dos clases llamadas a concurrir por este artículo, ésta llevará toda la herencia. (*)

(*) *Ver: artículos 1027 y 1033 de esta norma.*

1027.- A falta de los llamados por el artículo anterior, sucederán al difunto sus hermanos legítimos o naturales y sus hijos adoptivos; la herencia se dividirá en dos partes: una para los hermanos y otra para los hijos adoptivos y si falta una de estas clases, la otra se llevará toda la herencia.

Entre los hermanos de que habla este artículo, se comprenderán aun los que sólo lo sean por parte de padre o por parte de madre, pero la porción del hermano paterno o materno será la mitad de la porción del hermano carnal. (*)

(*) *Ver: artículo 1032 de esta norma.*

1028.- A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, de cónyuge sobreviviente y de hijos adoptivos, son llamados a la sucesión, el padre o madre adoptante y los colaterales legítimos o naturales del difunto fuera del segundo grado (artículo 1021), según las reglas siguientes:

1°.- El adoptante excluirá a los colaterales de que habla este artículo.

2°.- El colateral o los colaterales de grado más próximo, excluirán siempre a los otros.

3°.- Los derechos de sucesión de los colaterales no se extenderán más allá del cuarto grado, sin perjuicio del derecho de representación.

4°.- Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son parientes del difunto por parte de padre o por parte de madre, gozarán de los mismos derechos que los colaterales de doble conjunción, esto es, los que a la vez son parientes del difunto por parte de padre y por parte de madre. (*)

(*) *Ver: artículo 1032 de esta norma.*

1029.- DEROGADO por el art. 2o. de la Ley No. 15.855 de 25.3.87 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

1030.- Lo dispuesto en los artículos precedentes se entenderá sin perjuicio del derecho de representación a que hubiere lugar. (Artículo 1021).

1031.- El cónyuge separado (artículo 148) no tendrá parte alguna en la herencia *ab intestato* de su mujer o marido, si por sentencia hubiese sido declarado culpable de la separación.

1032.- El derecho de sucederse recíprocamente el adoptante y el adoptado, de que hablan los artículos 1027 y 1028, es personal e intrasmisible.

1033.- En el caso de ser la sucesión parte intestada y parte testamentaria, los que suceden a la vez por disposición del testador y a virtud de la ley, imputarán a la porción que les corresponda *ab intestato* lo que recibieren por testamento, sin perjuicio de retener toda la porción testamentaria si excediere a la otra. (Artículos 893 inciso 3°, 1011 inciso 2° y 1026).

Con todo, prevalecerá la voluntad expresa del testador en lo que de derecho corresponda.

1034.- A falta de todos los que tengan derecho a heredar, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, heredará el Estado. (*)

(*) *Ver: artículo 1035 de esta norma.*

1035.- En el caso del artículo anterior se estará a lo que establecieren las leyes especiales y al procedimiento previsto en la ley procesal. (*)

(*) *Ver: artículos 1036, 1039 y 1072 de esta norma.*

1036.- La falta de las formalidades establecidas en la legislación a que se refiere el artículo anterior, dará lugar a condena por daños y perjuicios. (*)

(*) *Ver: artículo 1039 de esta norma.*

TITULO VI

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LA SUCESION TESTADA O INTESTADA

CAPITULO I

DE LA SUCESION Y DE LOS DERECHOS DE LOS HEREDEROS

1037.- La sucesión, sea testamentaria o intestada, se abre en el momento de la muerte natural de la persona o por la presunción de muerte causada por la ausencia, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III, Título IV del Libro Primero.

1038.- Se requiere que el sucesor a título universal o particular exista (artículos 835, 845 y 1012) en el momento de abrirse la sucesión; salvo que se suceda por derecho de transmisión según el artículo 1040, pues entonces bastará existir al tiempo de abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado.

1039.- Por el hecho solo de abrirse la sucesión, la propiedad y la posesión de la herencia pasa de pleno derecho a los herederos del difunto, con la obligación de pagar las deudas y cargas hereditarias. (Artículo 677).

Lo cual se entenderá sin perjuicio de lo que acerca del Estado se dispone por los artículos 1035 y 1036. (*)

(*) *Ver: artículo 1136 de esta norma.*

1040.- Si el heredero o legatario, cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido.

Pero no se podrá ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. (Artículo 1052 inciso 3°). (*)

(*) *Ver: artículo 1048 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Decreto N° 252/998 de fecha 16 de setiembre de 1998, artículo 12.

1041.- Si dos o más personas llamadas a suceder unas a otras, hubieren fallecido en un desastre común o en cualquiera otra circunstancia, de modo que no se pueda saber cuál de ellas falleció primero, se presumirá que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión de derechos entre ellas.

1042.- Desde el momento de abrirse una sucesión podrán adoptarse las medidas cautelares previstas en la ley procesal tendientes a la comprobación y seguridad de los bienes sucesorios.

1043.- Se llama *acervo líquido* de una sucesión, para ejecutar en él las disposiciones del testador o de la ley, lo que queda en la masa de bienes y derechos del difunto, después de las deducciones siguientes:

1°.- Los gastos judiciales de la publicación del testamento y los demás anexos a la apertura de la sucesión.

2°.- Las deudas hereditarias.

3°.- Las asignaciones alimenticias forzosas.

4°.- La porción conyugal a que hubiere lugar, excepto el caso del inciso 2°, artículo 881.

5°.- Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria.

CAPITULO II

DEL DERECHO DE ACRECER (*)

(*) *Ver: artículo 1655 de esta norma.*

1044.- En las sucesiones intestadas, la parte del que no puede o no quiere aceptar, acrece a los coherederos, salvo el derecho de representación.

1045.- En las sucesiones testamentarias, el derecho de acrecer sólo tiene lugar cuando dos o más son llamados por el testador a una misma herencia o a una porción de ella, sin designación especial de partes a cada uno de los llamados.

En tal caso, la parte del que no quiere o no puede aceptar acrece a la del coheredero o coherederos, llevando consigo todos sus gravámenes, excepto los que suponen una calidad o aptitud personal del coheredero que falta.

El coheredero o coherederos no pueden aceptar su parte propia y repudiar la que se les defiere por acrecimiento ni al contrario.

1046.- La expresión *por partes iguales*, no se tiene por designación para impedir el derecho de acrecer.

1047.- Lo dispuesto en los artículos anteriores se observará igualmente en los legados.

1048.- El derecho de transmisión, establecido por el artículo 1040 excluye el derecho de acrecer.

1049.- En el caso de ser dos o más llamados a un usufructo, un derecho de uso o de habitación, se observará lo dispuesto en el artículo 513.

1050.- El testador podrá, en todo caso, prohibir el acrecimiento.

CAPITULO III

DE LA ACEPTACION Y REPUDIACION DE LA HERENCIA

1051.- La aceptación y repudiación de la herencia son actos libres y voluntarios. (Artículo 854, inciso 2º).

Los efectos de la aceptación y repudiación se retrotraen siempre al día en que se abrió la sucesión. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 45 nral. 6°.*

1052.- No se puede aceptar o repudiar condicionalmente ni desde o hasta cierto día.

La aceptación y repudiación son indivisibles y no pueden hacerse sólo en parte.

Pero si la herencia deferida a una persona se transmite a sus herederos, según el artículo 1040, puede cada uno de los transmisarios aceptar o repudiar su cuota.

1053.- Nadie puede aceptar o repudiar sin estar cierto de haberse abierto la sucesión y de su calidad de heredero. (Artículo 1285).

1054.- DEROGADO por el art. 1o. de la Ley No. 10.783 de 18.9.46 (*)

() Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

1055.- El menor habilitado no puede aceptar la herencia, sino con beneficio de inventario. (Artículo 307).

1056.- La herencia deferida a individuos que están sujetos a tutela o curaduría sólo puede ser aceptada o repudiada válidamente por el tutor o curador; debiendo, además, observarse lo prevenido en el artículo 400 y en el artículo 412 número 4°.

1057.- La herencia deferida a los que se hallen bajo la patria potestad será aceptada o repudiada por los padres, en la forma y con las limitaciones impuestas a los tutores y curadores.

1058.- En el caso del artículo 838 corresponde la aceptación de la herencia a las mismas personas designadas en él para la distribución de las mandas y legados. (*)

() Ver: artículo 1623 de esta norma.*

1059.- Las herencias que recaigan en el Fisco y en las corporaciones o establecimientos capaces de adquirir, se aceptarán por sus representantes legales tan sólo a beneficio de inventario. (*)

() Ver: artículo 1129 de esta norma.*

1060.- Ninguna persona tendrá derecho para que se rescinda su aceptación

o repudiación, a menos que la misma persona o su legítimo representante hayan sido inducidos, por fuerza o dolo a esos actos.

1061.- La herencia puede ser aceptada, pura y simplemente o a beneficio de inventario.

1062.- La aceptación pura y simple puede ser expresa o tácita. Expresa es, cuando se toma el título de heredero; y tácita, cuando el heredero ejecuta un acto que supone necesariamente su intención de aceptar y que no hubiera tenido derecho de ejecutar, sino en su calidad de heredero.

1063.- Se entiende que alguien toma el título de heredero, cuando lo hace en escritura pública o privada, obligándose como tal heredero o en un acto de tramitación judicial.

1064.- Los actos puramente conservatorios, los de inspección y administración provisoria urgente, no son actos que suponen por sí solos la aceptación.

1065.- El que, por cualquier título, enajena su derecho hereditario o bien lo repudia mediante algún precio, se entiende que ha aceptado la herencia.

1066.- Los acreedores del que repudia en perjuicio de los derechos de ellos, pueden hacerse autorizar por el Juez para aceptar por el deudor a beneficio de inventario.

En este caso la repudiación no se rescinde sino en favor de los acreedores y hasta la concurrencia de sus créditos; y en el sobrante subsiste. (Artículo 1296). (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 45 nral. 7°.*

1067.- El heredero que ha sustraído u ocultado maliciosamente cualesquiera efectos de la herencia, pierde la facultad de repudiar ésta y no obstante su repudiación, quedará en la calidad de heredero puro y simple, sin perjuicio de otras penas que por el delito correspondan.

1068.- El que a instancia de un legatario o acreedor hereditario, ha sido judicialmente declarado heredero o condenado como tal, se entenderá serlo respecto de los demás legatarios o acreedores, sin necesidad de nuevo juicio.

La misma regla se aplica a la declaración judicial de haber aceptado pura y simplemente o con beneficio de inventario.

1069.- Por la aceptación pura y simple queda el heredero responsable de todas las obligaciones de la herencia, no sólo con los bienes de ésta, sino también con los suyos propios.

1070.- El derecho de aceptar o repudiar la herencia, no habiendo tercero que inste, se prescribe por el mismo tiempo que las otras acciones reales.

Sin embargo, pasados nueve días desde la muerte de aquel de cuya herencia se trata, cualquiera que tenga interés en ello, podrá instar en juicio para que el heredero declare si acepta o repudia; y deberá el Juez señalar para esa declaración un término que no pase de cuarenta días, contados desde el siguiente al de la notificación al heredero. Se entenderá esto sin perjuicio de lo que se dispone sobre el beneficio de inventario. (*)

El heredero constituido en mora de declarar si acepta o repudia, se entenderá que repudia. (**)

(*) *Ver: artículo 1071 de esta norma.*

(**) *Ver: artículo 1074 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 45 nral. 6°.

1071.- En el caso del inciso segundo del artículo anterior, el heredero ausente y cuya residencia fuera conocida, será emplazado en persona, designándole un término prudencial.

Si la residencia del ausente no fuere conocida, procederá la citación por edictos, con el término que dispone la ley procesal.

Si vencido el plazo, el ausente no hubiese comparecido por sí o por legítimo representante, se le nombrará curador de bienes que lo represente y acepte por él la herencia con beneficio de inventario. (*)

(*) *Ver: artículo 1124 de esta norma.*

1072.- Cuando no hay herederos conocidos o éstos han repudiado la herencia, la misma se reputa *yacente*.

El Juez competente, a instancia de parte interesada o del Ministerio Público y hasta de oficio, nombrará un curador a la herencia; debiendo por lo

demás observarse lo dispuesto en el Capítulo II del Título XI del Libro Primero y en el artículo 1035. (*)

(*) *Ver: artículo 1082 de esta norma.*

1073.- Si son varios los herederos y no hay acuerdo entre ellos sobre la aceptación de la herencia, aceptarán los que quieran y los que no, repudiarán; pero los que acepten lo harán por la totalidad.

Si el desacuerdo recae únicamente sobre el modo de la aceptación, todos ellos serán obligados a aceptar con beneficio de inventario.

1074.- La repudiación de la herencia no se presume de derecho sino en los casos previstos por la ley. (Artículo 1070, inciso 3°).

1075.- La repudiación de la herencia debe hacerse en escritura pública autorizada por Escribano del domicilio del repudiante o del difunto. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 45 nral. 6°.*

1076.- El heredero testamentario que repudia la herencia, pierde el legado que se le haya hecho.

1077.- El que ha repudiado la herencia intestada de un individuo puede, sin embargo, aceptar la herencia de ese mismo individuo que le fuera deferida por testamento que no había llegado a su noticia.

CAPITULO IV

DEL BENEFICIO DE INVENTARIO

1078.- Todo heredero puede pedir formación de inventario, antes de aceptar o repudiar la herencia, aunque el testador se lo haya prohibido.

1079.- El que quiere tomar la calidad de heredero a beneficio de inventario debe manifestarlo por escrito ante el Juez competente del lugar donde se verificó la sucesión. (*)

(*) *Ver: artículo 1080 de esta norma.*

1080.- La manifestación de que trata el artículo anterior no produce efecto sino en cuanto vaya precedida o seguida de un inventario solemne, completo y estimativo de la herencia, con citación de los legatarios, acreedores y demás interesados, en la forma prescrita por las leyes sobre procedimientos y con sujeción a lo que se dispone por los artículos siguientes.

1081.- El heredero tiene para formalizar el inventario noventa días contados desde que manifestó su intención de aprovechar este beneficio.

Si por la situación de los bienes o por ser éstos muy cuantiosos parecieran insuficientes los noventa días, podrá el Juzgado conceder un nuevo plazo que nunca excederá de otros noventa días.

No concluyéndose el inventario en el plazo prefijado por la ley o prorrogado por el Juez, se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente.

1082.- Durante la formación del inventario y hasta la aceptación de la herencia tendrá el heredero el cuidado y la administración provisional de los bienes hereditarios; sin que esté obligado a rendir caución a menos que haya justo motivo de temor sobre la seguridad de esos bienes.

Lo cual se entenderá no habiendo curador de la herencia yacente ni albacea a quien el testador haya dado la tenencia de los bienes. (Artículo 1072). (*)

(*) *Ver: artículo 1093 de esta norma.*

1083.- El heredero no podrá excederse de los actos que sean de pura y simple administración.

Con todo, si existiesen en la herencia algunas cosas muebles que fuesen susceptibles de deteriorarse o de conservación dispendiosa, podrá el heredero, en su calidad de hábil para heredar, pedir se le autorice por el Juez, para proceder a la venta de estos efectos, previa tasación.

La venta debe hacerse en remate y previos los avisos de costumbre. (*)

(*) *Ver: artículos 1096 y 1136 de esta norma.*

1084.- Mientras corren los plazos para el inventario y el prefijado en el artículo 1086 para deliberar, no puede el heredero ser obligado al pago de las deudas hereditarias o testamentarias, pero podrá serlo el albacea, el curador de la herencia yacente o el fiador del difunto en sus casos. (Artículo 1179). (*)

(*) *Ver: artículo 1085 de esta norma.*

1085.- La dilación concedida al heredero por el precedente artículo no obstará a que pueda ser demandado:

1°.- Por una acción reivindicatoria o la de despojo causado por el difunto.

2°.- Por los gastos de sufragios y funeral.

3°.- Por las asignaciones a favor de alimentarios forzosos.

4°.- Por vía de reconvencción en el caso de demandar el heredero a los deudores hereditarios.

1086.- Concluido el inventario, tiene el heredero un plazo de cuarenta días para deliberar sobre la aceptación o repudiación de la herencia.

Los cuarenta días correrán desde el en que se concluyó el inventario; y transcurridos sin que haya deliberado, se considerará aceptada la herencia a beneficio de inventario.

Si declara que la repudia o que la acepta pura y simplemente o con beneficio de inventario, se estará a su voluntad. (*)

(*) *Ver: artículos 1087 y 1088 de esta norma.*

1087.- La declaración del artículo anterior se hará a continuación del mismo expediente de inventario en la forma determinada por las leyes sobre procedimientos.

Esto mismo se observará aunque el heredero repudie o acepte pura y simplemente, mientras corren los plazos para la conclusión del inventario.

1088.- Cuando existe un inventario arreglado a las prescripciones legales, cualquiera que sea la persona que haya cuidado del cumplimiento de esta formalidad, no será obligado el heredero a la formación de nuevo inventario y regirá a su respecto lo que se dispone por el artículo 1086, contándose el término para deliberar desde que manifestó su intención de aprovecharse del inventario existente.

1089.- El heredero que en la confección del inventario omitiere de mala fe hacer mención de cualquiera parte de los bienes, por pequeña que sea o supusiere deudas que no existen, no gozará del beneficio de inventario.

1090.- El que acepta con beneficio de inventario se hace responsable no sólo del valor de los bienes que entonces efectivamente reciba, sino de aquellos que posteriormente sobrevengan a la herencia sobre que recaiga el inventario.

Se agregará una relación estimativa de estos bienes al inventario existente con las mismas formalidades que para hacerlo se observaron.

1091.- Se hará asimismo responsable de todos los créditos como si los hubiese efectivamente cobrado; sin perjuicio de que para su descargo en el tiempo debido justifique lo que sin culpa suya haya dejado de cobrar, poniendo a disposición de los interesados las acciones y títulos insolutos.

1092.- Los efectos del inventario son:

1°.- Que el heredero no queda obligado sino hasta donde alcanzan los bienes hereditarios.

2°.- Que conserva íntegras todas las acciones que tenía contra los bienes del difunto. (Artículo 1547).

1093.- Aceptada la herencia con beneficio de inventario, se entenderá continuar en administración y a cargo del heredero hasta que resulten pagados los créditos y legados. (Artículo 1082).

1094.- El heredero beneficiario no puede ser apremiado en sus bienes propios sino cuando ha dejado de presentar su cuenta, habiéndole sido exigida por dos veces judicialmente.

Presentada la cuenta, no puede ser apremiado en sus bienes propios, sino hasta la suma concurrente del saldo a favor de la herencia.

Los acreedores y legatarios pueden pedir al Juez que señale al heredero un término perentorio para la rendición de su cuenta.

1095.- El heredero beneficiario será responsable por las negligencias que se le puedan imputar en la conservación de las especies o cuerpos ciertos que se deban.

Es también de su cargo el peligro de los otros bienes de la herencia, pero sólo será responsable de los valores en que hubiesen sido tasados.

1096.- Cuando para el pago de los créditos y legados sea necesaria la venta de bienes hereditarios, muebles o inmuebles, debe el heredero pedir autorización judicial.

En la venta de bienes muebles se observará lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 1083.

La venta de los bienes raíces se hará en remate judicial, previa tasación y después de los edictos y publicaciones de costumbre.

Por la contravención a lo dispuesto en este artículo, el heredero perderá el beneficio de inventario. (*)

(*) *Ver: artículo 1136 de esta norma.*

1097.- El heredero beneficiario podrá en todo tiempo exonerarse de sus

obligaciones abandonando a los acreedores y legatarios los bienes de la sucesión que debe entregar en especie y el saldo que reste de los otros y obteniendo de ellos o del Juez la aprobación de la cuenta que de su administración deberá presentarles. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 45 nral. 5°.*

1098.- Consumidos los bienes de la herencia o la parte que de ellos hubiese cabido al heredero beneficiario, en el pago de las deudas y legados, deberá el Juez, a petición de dicho heredero, citar por edictos a los acreedores y legatarios que no hayan sido cubiertos, para que reciban la cuenta exacta y en lo posible documentada de todas las inversiones que se hayan hecho y aprobada la cuenta por ellos y en caso de discordia por el Juez, el heredero beneficiario será declarado libre de toda responsabilidad ulterior.

El heredero beneficiario que opuso a una demanda la excepción de estar ya consumidos en el pago de las deudas y cargas los bienes hereditarios o la porción que le hubiere cabido, deberá probarlo presentando a los demandantes la cuenta de las inversiones de que habla el inciso anterior.

1099.- Pagados los acreedores y legatarios, el heredero beneficiario entra en el libre goce y propiedad de la herencia.

CAPITULO V

DE LA COLACION Y PARTICION (*)

(*) *Ver: artículo 1639 de esta norma.*

SECCION I

DE LA COLACION (*)

(*) *Ver: artículo 1139 de esta norma.*

1100.- La colación consiste en la agregación al cúmulo de la herencia, que hacen los herederos forzosos, de los bienes que recibieron del difunto *cuando vivía* y que deben serles imputados en su respectiva legítima. (Artículo 889, inciso 2°).

La colación sólo se debe por el heredero forzoso a su coheredero.

1101.- Toda donación que se hubiese hecho a un heredero forzoso que tenía entonces la calidad de tal, se imputará a su legítima, a menos que en la respectiva escritura o en acto auténtico posterior se exprese que la donación ha sido hecha de la parte disponible a favor de extraños.

Aun en este último caso, si la donación excediere la cuota disponible, el exceso estará sujeto a reducción. (Artículo 890).

1102.- Lo que se hubiere legado al heredero forzoso se imputará a la parte de libre disposición si el testador no dispusiere expresamente lo contrario.

1103.- La donación hecha a título de legítima, a una persona que no era entonces heredero forzoso, se resolverá, si ésta no adquiriese dicha calidad.

Lo mismo se observará con la donación hecha a título de legítima al que era entonces heredero forzoso, pero después dejó de serlo por incapacidad, indignidad, desheredación o repudiación o por haber sobrevenido otro legitimario de mejor derecho.

Si el donatario que era descendiente legítimo o natural reconocido o declarado tal, ha llegado a faltar, las donaciones imputables a su legítima se imputarán a la de sus descendientes que vienen en su representación. (*)

(*) *Ver: artículo 1104 de esta norma.*

1104.- No se colacionarán o no se imputarán a la legítima de una persona las donaciones que el difunto haya hecho a otra, salvo el caso del artículo anterior, inciso 3°.

1105.- Se debe colacionar lo que se empleó para el pago de las deudas de un heredero forzoso o proporcionarle los medios de establecerse.

1106.- Los gastos de alimentos, educación y aprendizaje, los ordinarios de equipo o de bodas y los regalos de costumbre no deben colacionarse.

1107.- Los gastos que los padres hayan hecho en dar a sus hijos la carrera del foro, de las armas, del estado eclesiástico u otra que prepare para ejercer una profesión que requiera título o para el ejercicio de las artes liberales, se traerán a colación; pero se rebajará de ellos lo que el hijo habría gastado viviendo en la casa y en compañía de sus padres.

Los padres podrán dispensar esta colación, en cuanto no exceda la parte disponible.

1108.- La colación se hace, no de las mismas cosas donadas, sino del justiprecio en unidades reajustables que tenían al tiempo de la donación. (*)

El aumento o deterioro posterior y aun su pérdida total, casual o culpable, serán a cargo y riesgo del donatario.

(*) *Ver: artículo 2391-1 de esta norma.*

1109.- No habiendo sido estimados los bienes al tiempo de la donación, podrá cualquiera de los coherederos pedir que se haga el justiprecio. (Artículo 1135).

1110.- Se contará al colacionante por parte de su haber el importe de lo que ya tiene recibido.

1111.- Los frutos e intereses de los bienes sujetos a colación no se deben a la masa sino desde el día en que se abrió la sucesión.

Para regularlos se atenderá a las rentas e intereses de los bienes hereditarios y de la misma especie que los donados.

1112.- Cuando el inmueble o inmuebles donados excedieren el haber del donatario y éste los hubiese enajenado, los coherederos sólo podrán repetir contra el tercer poseedor por el exceso y previa excusión de los bienes del donatario. (*)

(*) *Ver: artículos 1640 y 2391-1 de esta norma.*

1113.- Aunque los herederos no estén conformes sobre lo que alguno debe traer a colación, se irá adelante en la partición, asegurando previamente con fianza, depósito u otro equivalente el derecho reclamado por aquéllos.

1114.- Las disposiciones de esta Sección se entienden sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente sobre las legítimas.

SECCION II

DE LA PARTICION

1115.- La partición de la herencia podrá siempre pedirse, cualquiera que sea la prohibición del testador o el pacto que haya en contrario, salvo lo que al respecto dispongan leyes especiales.

1116.- Puede pedir la partición cualquiera de los coherederos que tengan la libre administración de sus bienes y el cónyuge sobreviviente por los derechos que puedan corresponderle.

1117.- Los tutores y curadores no podrán sin autorización judicial proceder a la partición de la herencia en que tengan parte sus pupilos o representados. (Artículo 399). (*)

(*) *Ver: artículos 1129 y 1130 de esta norma.*

1118.- DEROGADO por el art. 1o. de la Ley 10.783 de 18.9.46 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

1119.- Si alguno de los coherederos lo fuese bajo de condición suspensiva, no tendrá derecho para pedir la partición mientras pende la condición. Pero los otros coherederos podrán proceder a ella, asegurando competentemente al coheredero condicional lo que cumplida la condición le corresponda.

1120.- Si un heredero vende o cede a un extraño su parte a la herencia indivisa, tendrá éste igual derecho que el heredero o cedente para pedir la partición o intervenir en ella.

1121.- Si falleciere uno de los coherederos antes de hacerse la partición, cualquiera de los herederos del fallecido podrá pedirla; pero formarán en ella una sola persona y no podrán obrar sino todos juntos o por medio de un procurador común.

1122.- En cuanto a la división de la herencia de un ausente, se estará a lo dispuesto en el Título IV del Libro Primero.

1123.- Si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por testamento, se pasará por ella, en cuanto no perjudique a la legítima de los herederos forzosos ni sea contraria a derecho ajeno. (*)

(*) *Ver: artículo 1160 de esta norma.*

1124.- Si alguno de los herederos estuviere ausente, se observará lo dispuesto en el artículo 1071; y en el caso de nombrársele curador para que lo represente

en la partición, administrará éste lo que en ella se le adjudique, según las reglas de la curaduría de bienes. (*)

(*) *Ver: artículo 1129 de esta norma.*

1125.- Antes de procederse a la partición, habrán de decidirse, por sentencia que cause ejecutoria, las controversias sobre derechos a la sucesión por testamento o *ab intestato*, desheredación, incapacidad o indignidad de los herederos.

1126.- Las cuestiones sobre la propiedad de los objetos en que alguien alegue un derecho exclusivo y que, en consecuencia, no deben entrar en la masa partible, serán decididas por el Juez de la causa y no se retardará la partición por ellas.

Decididas a favor de la masa partible, se dividirán entre los partícipes los objetos obtenidos, según corresponda por derecho.

Sin embargo, cuando las cuestiones recayeren sobre una parte considerable de la masa partible, podrá suspenderse la partición hasta que aquéllas se decidan, si el Juez, a petición de los interesados a quienes corresponda más de la mitad de la masa partible, lo ordenase así.

1127.- Si todos los interesados tienen la libre administración de sus bienes y concurren por sí o por legítimo representante, podrán de común acuerdo partir la herencia extrajudicialmente, en el modo y forma en que convengan.(**)

DEROGADO el inc. 2o. por el art. 1o. Ley 10.783 de 18.9.46 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

(**) *Ver: artículo 1132 de esta norma.*

1128.- Toda partición extrajudicial, para que produzca efectos, habrá de reducirse a escritura pública. (Artículo 1664). (*)

(*) *Ver: artículo 1132 de esta norma.*

1129.- En el caso del artículo 1124 el curador del ausente podrá convenir con los demás coherederos en hacer la partición extrajudicialmente (artículos

399 y 1117); pero concluida que se, no podrá llevarse a efecto hasta después de aprobada por el Juez.

Esta disposición se extiende a los representantes legales de que habla el artículo 1059. (*)

(*) *Ver: artículo 1132 de esta norma.*

1130.- Si todos los coherederos o alguno de ellos estuviese bajo tutela o curaduría, podrá también hacerse la repartición (artículos 399 y 1117) extrajudicialmente de común acuerdo entre los coherederos mayores y el tutor o curador; debiendo, sin embargo, ser aprobada por el Juez con previa audiencia del Ministerio Público.

Por falta de este requisito, la partición se entenderá ser provisional. (*)

(*) *Ver: artículo 1132 de esta norma.*

1131.- Aunque la partición se haga extrajudicialmente, si se ha nombrado contador, comprenderá a éste la disposición del artículo 976. (*)

(*) *Ver: artículos 1132 y 1138 de esta norma.*

1132.- Faltando la conformidad de todos los interesados que se requiere por los artículos 1127 y siguientes, la partición debe hacerse *judicialmente* en la forma que a continuación se expresa.

Lo cual se entenderá sin perjuicio de que las partes puedan de común acuerdo separarse de las reglas trazadas por la ley en lo concerniente a alguna de las operaciones de la partición y aun desistir de la vía judicial intentada para terminar aquélla extrajudicialmente.

1133.- La acción de partición y las cuestiones que se susciten en el curso de las operaciones de aquélla son de la competencia de los Jueces que correspondan conforme a la ley procesal.

Ante esos Jueces debe procederse a las subastas, a las acciones de saneamiento de los lotes y a las de rescisión de la partición.

1134.- Toda partición judicial debe ser precedida de un inventario solemne y estimativo de los bienes que se han de partir.

Si el inventario se hubiere hecho entre los interesados en una época anterior al juicio de partición, deberá servir de base a ésta, a menos que alguno de aquéllos se oponga: en este caso, el Juez ordenará nueva tasación.

1135.- La tasación de los bienes raíces se hace por peritos elegidos por las partes o por el Juez en su defecto.

Los peritos deben presentar las bases que les han servido para la tasación; indicar si la cosa admite cómoda división y de qué manera; y fijar para el caso de partición los lotes que puedan formarse y su valor.

La tasación de las cosas muebles debe verificarse por personas inteligentes designadas por los interesados o por el Juez en su defecto.

1136.- Los coherederos tienen derecho a que se haga la partición en los mismos bienes de la herencia, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 1039; pero si hay acreedores que se han opuesto o si la mayoría de los coherederos juzga conveniente la venta de las cosas para atender a las cargas hereditarias, se venderán públicamente en la forma determinada en los artículos 1083 y 1096. (*)

(*) *Ver: artículos 1137 y 1755 de esta norma.*

1137.- Cuando por no admitir una cosa cómoda división o porque disminuirá mucho en la división, no pueda guardarse la debida igualdad en los lotes o adjudicaciones, bastará que cualquiera de los interesados pida su venta pública con arreglo al artículo anterior para que así se haga.

1138.- Después que se hayan tasado los bienes y vendido los que hubieran de venderse, nombrarán las partes un contador o más o los designará el juzgado, si no se acuerdan en el nombramiento.

Se procederá ante el contador o contadores a la rendición de cuentas que puedan deberse los copartícipes, a la formación del cuerpo general, a la composición de los lotes, inclusive el de las deudas que tuviere la herencia (artículo 976) y a las compensaciones que deben hacerse. (Artículo 1131).

Para ser designado contador se requerirá título habilitante de contador, perito mercantil, abogado o escribano público. (*)

(*) *Ver: artículo 1139 de esta norma.*

1139.- El heredero forzoso colacionará, conforme a las reglas de la sección precedente, las donaciones que le hayan sido hechas.

Los coherederos se abonarán recíprocamente en la partición las sumas de que fuesen deudores por razón de lucro, de daño y de gastos. (Artículo 1138).

Las disidencias respecto a estas cuestiones o a las referidas en el inciso 2º del artículo anterior y sobre las que no se haya podido lograr la conciliación, serán resueltas por el tribunal mediante el procedimiento extraordinario.

1140.- Hechas las deducciones a que haya lugar, se procederá en lo que reste de la masa general a la formación de tantos lotes cuantos sean los herederos o las estirpes copartícipes.

1141.- La formación de lotes se hará con la posible igualdad, no sólo en cuanto a la clase, sino también a la calidad de las cosas que se han de aplicar.

Si la cosa divisible es inmueble, debe procurarse en cuanto sea posible aplicarla a cada uno en porciones unidas y no separadas, de modo que cada heredero tenga su cosa con independencia de los otros.

1142.- La desigualdad que no se haya podido evitar en los lotes se compensará en dinero.

1143.- Efectuadas las operaciones a que se refieren los artículos precedentes el contador procederá a la formación de los lotes y a la propuesta de las adjudicaciones respectivas y solicitará al tribunal que convoque a los herederos a audiencia, bajo apercibimiento de que se resolverá con los que concurran.

Si en la audiencia los herederos que concurran no estuvieren conformes con el proyecto de adjudicación, se procederá al sorteo de los lotes entre los presentes y ausentes; de todo lo cual, se levantará acta.

1144.- Las reglas establecidas para las masas partibles, se observarán igualmente en la subdivisión entre los individuos de las estirpes copartícipes.

1145.- El contador procederá a confeccionar la cuenta particionaria la que se presentará en papel común y en duplicado. El tribunal ordenará ponerla de manifiesto por el término de seis días, con noticia de todos los interesados. Pasado el término sin oposición, el tribunal aprobará la cuenta, mandando agregarla a los autos y el duplicado al Registro de Protocolizaciones, con testimonio del auto aprobatorio.

1146.- En caso de no haber conformidad, por oposición formulada en escrito fundado, se dará traslado a los que no se hubieren opuesto y, oído el contador y, en su caso, el Ministerio Público, se resolverá la oposición conforme al procedimiento extraordinario.

1147.- Se entregará a cada uno de los copartícipes los títulos particulares que se hayan adjudicado, estableciéndose en los mismos constancia de ello.

Los títulos de una propiedad dividida quedarán en poder de aquel que tenga la mayor parte, con cargo de exhibirlos a favor de los otros partícipes y de permitirles que tengan traslado de ellos cuando lo pidan.

Si las partes fueren iguales, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente.

1148.- Los títulos comunes a toda la herencia se entregarán al heredero a quien sus copartícipes elijan por depositario, con cargo de exhibirlos y de consentir en el traslado de ellos.

Si no pueden convenir en la elección, la hará el Juzgado.

1149.- Los acreedores hereditarios, reconocidos como tales, pueden oponerse a que se proceda a la partición de la herencia, mientras no se les pague o afiance lo que se les debe.

1150.- La acción para pedir la partición de la herencia expira a los treinta años contra el coheredero que ha poseído el todo o parte de ella en nombre propio o como único dueño.

Si todos los coherederos poseyeren en común la herencia o alguno de ellos en nombre y como cosa de todos, no tiene lugar la prescripción.

SECCION III

DE LOS EFECTOS DE LA PARTICION (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 56.*

1151.- Hecha la partición, cada coheredero se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto en todas las cosas que le hubieren cabido y no haber tenido jamás parte alguna en las otras cosas de la sucesión. (Artículo 2330).

1152.- Los coherederos están obligados recíprocamente al saneamiento por evicción de las cosas que les cupieron en sus respectivos lotes o hijuelas. (*)

(*) *Ver: artículos 1153 y 1154 de esta norma.*

1153.- Cesa la obligación de que habla el artículo anterior, cuando el mismo difunto hizo la partición, salvo lo dispuesto sobre las legítimas. (Artículo 895).

1154.- Cesa también la obligación del artículo 1152, cuando expresamente se pactó lo contrario y cuando la evicción proceda de causa sobreviniente a la partición o por culpa del coheredero que la sufre.

1155.- La obligación recíproca de los coherederos al saneamiento es proporcionada a su respectivo haber hereditario; pero si alguno de ellos resultare insolvente, responderán de su parte los demás coherederos en la misma proporción, deduciéndose la parte que corresponda al que ha de ser indemnizado.

No se eximirá el coheredero de contribuir al saneamiento a pretexto de pérdida que por caso fortuito haya sufrido en los objetos que le cupieron por la partición.

1156.- El saneamiento se hará, atendido el valor que a la cosa evicta se hubiere dado en la partición y no el valor que tenga al tiempo de la evicción.

1157.- La acción de saneamiento entre coherederos prescribirá por cuatro años contados desde el día de la evicción.

1158.- Los coherederos no se garantizan recíprocamente la solvencia posterior del deudor hereditario y sí sólo que éste se hallaba solvente al tiempo de la partición.

La garantía de solvencia no puede ejercerse sino en los tres años siguientes a la partición.

SECCION IV

DE LA NULIDAD O RESCISION DE LA PARTICION

1159.- Lo establecido sobre el dolo y la violencia en materia de obligaciones y contratos, tiene también lugar en las particiones de herencia.

1160.- La partición hecha por el difunto no puede ser impugnada por causa de lesión, salvo la excepción del artículo 1123.

1161.- Todas las demás particiones pueden ser rescindidas por causa de lesión en más de la cuarta parte, atendiendo el valor de las cosas cuando fueron adjudicadas.

1162.- La acción rescisoria por causa de lesión prescribirá en cuatro años contados desde que fue hecha la partición.

1163.- Podrán los coherederos demandados escoger entre asegurar al demandante el suplemento de su haber hereditario o consentir que se proceda a nueva partición.

El suplemento puede hacerse en dinero o en las mismas cosas de que resulta la lesión.

1164.- Si se procede a nueva partición, no alcanzará ésta a los que no han sido perjudicados ni percibido más de lo justo.

1165.- Cesa la acción rescisoria por lesión, cuando después de la partición se transigió sobre dificultades suscitadas acerca de ella.

1166.- La omisión de alguno o algunos objetos en la partición no da derecho para que se rescinda lo ya hecho, sino para que se continúe en los objetos omitidos.

1167.- La partición hecha con un heredero falso es nula y se regirá por lo dispuesto acerca del *error* en la Sección II, Capítulo I, Título I, Libro Cuarto.

SECCION V

DEL PAGO DE LAS DEUDAS HEREDITARIAS

1168.- La obligación de pagar las deudas hereditarias se divide *ipso jure* entre todos los coherederos, aunque hayan aceptado la herencia con beneficio de inventario. (Artículos 528 y 909).

Lo cual se entiende sin perjuicio de que el acreedor, antes de la partición, pueda dirigir su acción contra el cúmulo hereditario.

Hecha la partición, cada heredero responde en proporción de su haber hereditario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1170 y de lo que se previene acerca de las *obligaciones divisibles e indivisibles*, en el Capítulo I, Título II del Libro Cuarto. (Artículo 1384, inciso 2o.).

El heredero beneficiario sólo responde por su cuota en las deudas hereditarias hasta la concurrencia del valor que hereda.

1169.- La insolvencia de uno de los herederos no grava a los otros, excepto en los casos del artículo 977, inciso 2º.

1170.- El heredero usufructuario concurrirá con el heredero propietario al pago de las deudas, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 527 y 529.

1171.- Si el heredero puro y simple fuere acreedor o deudor del difunto, sólo se confundirá con su porción hereditaria la cuota que en este crédito o deuda le quepa y tendrá acción contra sus coherederos a prorrata por el resto de su crédito y les estará obligado a prorrata por el resto de la deuda.

1172.- Si el testador dividiere entre los herederos las deudas hereditarias de diferente modo que el que se prescribe en los artículos precedentes, los acreedores podrán ejercer sus acciones o en conformidad con dichos artículos o en conformidad con las disposiciones del testador. Mas en el primer caso, los herederos que sufrieren mayor gravamen que el que por el testamento se les impuso, tendrán derecho a ser indemnizados por sus coherederos. (*)

(*) *Ver: artículo 1173 de esta norma.*

1173.- La disposición del artículo anterior se aplica al caso en que, por la partición o por convenio de los herederos, se distribuyan entre ellos las deudas de diferente modo que el expresado en los referidos artículos.

1174.- Las cargas testamentarias no se mirarán como cargas de los herederos en común, sino cuando el testador no hubiere gravado con ellas a alguno o algunos de los herederos o legatarios en particular.

Las que tocasen a los herederos en común se dividirán entre ellos como el testador lo hubiese dispuesto y si nada ha expresado sobre la división, se hará a prorrata de sus porciones hereditarias o en la forma prescrita por los referidos artículos. (Artículo 527, inciso 4º). (*)

(*) *Ver: artículo 1177 de esta norma.*

1175.- Los legatarios no responden de las deudas hereditarias, sino cuando al tiempo de abrirse la sucesión no haya habido bienes bastantes para pagarlas.

La acción de los acreedores contra los legatarios es en subsidio de la que tienen contra los herederos.

Llegado el caso, los legatarios contribuirán al pago de las deudas hereditarias a prorrata de los valores de sus respectivos legados y la porción del legatario insolvente no gravará a los otros.

1176.- Si varios inmuebles de la sucesión están sujetos a una hipoteca, el acreedor hipotecario tendrá acción por el total de la deuda contra cada uno de dichos inmuebles, sin perjuicio del recurso del heredero a quien pertenezca el inmueble contra sus coherederos, por la cuota que a ellos toque de la deuda.

Aun cuando el acreedor haya subrogado al dueño del inmueble en sus acciones, contra sus coherederos, no será cada uno de éstos responsable, sino de su cuota en la deuda.

Sin embargo, la porción del insolvente se repartirá entre todos los herederos a prorrata.

1177.- Los acreedores testamentarios no podrán ejercer las acciones a que les da derecho de testamento sino conforme al artículo 1174.

Si en la partición de una herencia se distribuyen los legados entre los herederos de diferente modo, podrán los legatarios entablar sus acciones o en conformidad a esa distribución o en conformidad al artículo 1174 o en conformidad al convenio de los herederos.

1178.- No habiendo juicio pendiente entre los acreedores hereditarios sobre la preferencia de sus créditos, se les pagará a medida que se presenten; y pagados los acreedores hereditarios, se satisfarán los legados.

Sin embargo, no apareciendo muy gravada la herencia, podrán pagarse inmediatamente a los legatarios que ofrezcan caución de cubrir lo que les quepa en la contribución a las deudas.

Aun no será exigible esta caución cuando la herencia esté manifiestamente exenta de cargas que puedan comprometer a los legatarios.

1179.- Los títulos ejecutivos contra el difunto lo son también contra los herederos; pero no podrá hacerse uso de ellos hasta nueve días después de la defunción y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1084.

1180.- El seguro de vida, constituido en favor de los herederos del que lo contrae, cuyo monto no exceda de 10.000 unidades reajustables, es un bien de exclusiva propiedad de los mismos herederos y no responde, en ningún caso, a los créditos que el constituyente quedare debiendo a su fallecimiento.

SECCION VI

DEL BENEFICIO DE SEPARACION

1181.- Los acreedores y legatarios del difunto, aunque lo sean a plazo o bajo condición, podrán pedir que no se confundan los bienes de la herencia con los del heredero; y en virtud de este *beneficio de separación* tendrán derecho a que con aquéllos se les cumplan las obligaciones hereditarias o testamentarias con preferencia a las deudas propias del heredero. (*)

(*) *Ver: artículo 1182 de esta norma.*

1182.- Los acreedores y legatarios podrán usar del derecho que se les concede en el artículo anterior, dentro de tres años, a contar desde la aceptación de la herencia, con tal que los bienes existan en poder del heredero.

1183.- Sin embargo, perderá ese derecho el acreedor o legatario que libremente haya pactado con el heredero o hecho otro acto del que aparezca haber seguido la fe del heredero. (*)

(*) *Ver: artículo 1184 de esta norma.*

1184.- Obtenida la separación de patrimonios por alguno de los acreedores de la sucesión, aprovechará a los demás acreedores de la misma que la invoquen y que no se hallasen en el caso del artículo anterior. (*)

El sobrante, si lo hubiere, se agregará a los bienes del heredero para satisfacer a sus acreedores propios, con los cuales concurrirán los acreedores de la sucesión que no gocen del beneficio.

(*) *Ver: artículo 1185 de esta norma.*

1185.- Los acreedores o legatarios que hayan obtenido la separación o

aprovechándose de ella en conformidad al inciso 1º del artículo precedente, no tendrán derecho contra los bienes del heredero, sino después que se hayan agotado los del difunto; y aun entonces podrán oponerse a este derecho los acreedores del heredero hasta que se les satisfaga el total de sus créditos.

1186.- Los acreedores del heredero no tendrán derecho a pedir a beneficio de sus créditos la separación de patrimonios de que hablan los artículos precedentes.

DISPOSICION TRANSITORIA

1187.- Las sucesiones abiertas antes de la época en que este Código fue obligatorio, se regirán por las leyes entonces en vigor y cuya inteligencia no hubiese ofrecido duda o, en caso de haberla ofrecido, se hubiese resuelto por la jurisprudencia práctica. De otro modo, prevalecerán las disposiciones del Código. (Artículo 2391-1). (*)

(*) *Ver: artículo 2391 de esta norma.*

TITULO VII

DE LA PRESCRIPCION (*)

(*) *Ver: artículo 1447 nral. 8º de esta norma.*

CAPITULO I

DE LA PRESCRIPCION EN GENERAL

1188.- La prescripción es un modo de adquirir o de extinguir los derechos ajenos. (Artículo 1447, inciso 8º).

En el primer caso se adquiere el derecho por la posesión continuada por el tiempo y con los requisitos que la ley señala.

En el segundo, se pierde la acción por el no uso de ella en el tiempo señalado por la ley. Para esta clase de prescripción, la ley no exige título ni buena fe.

1189.- No se puede renunciar de antemano a la prescripción, pero sí a la que ya se ha consumado.

La renuncia puede ser expresa o tácita.

Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor, por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo o el que debe dinero paga interés o pide plazo y en otros casos semejantes. (*)

(*) *Ver: artículo 1234 nral. 2º de esta norma.*

1190.- El que no puede enajenar no puede renunciar a la prescripción.

1191.- La prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, hasta que se halle en situación de dictarse sentencia, en primera o segunda instancia; pero los Jueces no pueden suplir de oficio la excepción que resulta de la prescripción.

1192.- Los fiadores y todas las demás personas que tienen interés en que la prescripción exista, pueden oponerla, aunque el deudor la haya renunciado. (*)

(*) *Ver: artículo 1241 de esta norma.*

1193.- Puede prescribirse todo lo que está en el comercio de los hombres, a no prohibirlo alguna ley especial.

1194.- El Estado, respecto de los bienes susceptibles de propiedad privada, los establecimientos públicos y corporaciones, quedan sujetos a las mismas prescripciones que los particulares y pueden oponerlas como ellos.

El poseedor de un campo u otro terreno que ha poseído por sí o por sus causantes, a título universal o singular, por espacio de treinta años, estará en todos los casos al abrigo de las pretensiones del Fisco, cumpliendo los requisitos establecidos por la legislación especial.

1195.- Lo dispuesto por los artículos 646, 653 y 654, rige igualmente en materia de prescripción. (Artículo 633).

1196.- Para poder prescribir los bienes inmuebles se necesita una posesión

continua y no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y en concepto de propietario. (Artículos 649, inciso 3º y 1233). (*)

(*) *Ver: artículo 1199 de esta norma.*

1197.- La omisión de actos de mera facultad y la mera tolerancia de actos de que no resulta gravamen, no confieren posesión ni dan fundamento a prescripción alguna.

Se llaman actos de *mera facultad* los que cada cual puede ejecutar en lo suyo, sin necesidad del consentimiento de otro.

1198.- Los actos de violencia tampoco pueden servir de fundamento para la posesión ni prescripción.

La posesión útil no principia hasta que ha cesado la violencia. (Artículo 652).

1199.- El que tiene la cosa en lugar o nombre de otro y sus herederos, no puede jamás prescribirla, a menos que se haya mudado su mera tenencia en posesión, sea por causa procedente de un tercero o por la oposición que ellos mismos hayan hecho al derecho del propietario, poseyendo en adelante con las condiciones requeridas por el artículo 1196. (Artículo 648). (*)

(*) *Ver: artículos 1210 y 1214 de esta norma.*

1200.- La persona a quien el mero tenedor de la cosa la hubiere transmitido por un título traslativo de propiedad, podrá prescribirla.

1201.- El tiempo para prescribir la obligación de dar cuentas no empieza a correr sino desde el día en que los obligados cesaron en su respectivo cargo.

El de la prescripción contra el resultado líquido de las cuentas, no corre sino desde el día en que recayó la conformidad de las partes o ejecutoria judicial.

1202.- La prescripción adquirida a favor de un copropietario o comunero aprovecha a los otros.

1203.- El día en que empieza a correr la prescripción se tiene por entero; pero el último debe cumplirse en su totalidad.

CAPITULO II

DE LA PRESCRIPCION CONSIDERADA COMO MEDIO DE ADQUIRIR

SECCION I

DE LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE LOS BIENES INMUEBLES

1º

De la prescripción de diez y veinte años

1204.- La propiedad de bienes inmuebles u otros derechos reales se adquiere por la posesión de diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título. (Artículo 693). (*)

(*) *Ver: artículos 1215 y 1243 de esta norma.*

1205.- Repútase *ausente*, para los efectos de la prescripción, el propietario que reside en país extranjero. Si parte del tiempo estuvo presente y parte ausente, cada dos años de ausencia se contarán por uno solo para completar los diez de presente.

La ausencia que no fuere de un año entero y continuo no será tomada en cuenta para el cómputo del anterior período.

1206.- El poseedor actual puede completar el tiempo necesario para la prescripción, añadiendo a su posesión la de aquel de quien hubo la cosa, bien sea por título universal o particular, oneroso o lucrativo, con tal que uno y otro hayan principiado a poseer de buena fe. (Artículos 646 y 647).

Cuando por falta de buena fe o de justo título en el autor, no pueda el sucesor aprovecharse de la posesión de aquél, podrá, sin embargo, prescribir, siempre que posea por sí, durante todo el tiempo señalado por la ley.

1207.- La buena fe consiste en creer que aquel de quien se recibe la cosa es dueño y puede enajenarla con arreglo a lo dispuesto en el artículo 693.

La buena fe se presume, mientras no se pruebe lo contrario y basta que haya existido al tiempo de la adquisición.

1208.- Entiéndese por justo título el legal y capaz de transferir la propiedad.

El título para la prescripción ha de ser verdadero y válido.

El error, sea de hecho o de derecho, no bastará para subsanar la falta de ninguna de estas dos cualidades.

1209.- El que alegue la prescripción está obligado a probar el justo título: éste nunca se presume.

1210.- Cuando se ha mudado la mera tenencia en posesión conforme al artículo 1199, el poseedor sólo podrá invocar la especie de prescripción de que se trata en el párrafo siguiente.

2º

De la prescripción de treinta años

1211.- La propiedad de los bienes inmuebles y los demás derechos reales se prescribe también por la posesión de treinta años, bien sea entre presentes o entre ausentes, sin necesidad, por parte del poseedor, de presentar título y sin que pueda oponérsele la mala fe: salvo la excepción establecida por el artículo 633.

SECCION II

DE LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE BIENES MUEBLES

1212.- La propiedad de los bienes muebles se prescribe por la posesión no interrumpida de tres años con justo título y buena fe, haya estado el verdadero dueño ausente o presente. (Artículo 677, inciso 1º). (*)

(*) *Ver: artículos 1215 y 1243 de esta norma.*

1213.- Si el poseedor actual de una cosa robada, la ha comprado en feria o mercado o venta pública o a persona que vendía ordinariamente cosas semejantes, el verdadero dueño no puede exigir la entrega, sin pagar el precio desembolsado por el poseedor.

1214.- El poseedor de un bien mueble por seis años no interrumpidos, prescribe la propiedad, sin necesidad de presentar título y sin que pueda oponérsele su mala fe.

Esta disposición es aplicable al caso de haberse mudado la mera tenencia en posesión de alguno de los dos modos indicados en el artículo 1199.

Pero no comprende al que hurtó la cosa ni a sus cómplices o encubridores, los cuales no pueden jamás prescribir y están además sujetos a lo que se disponga por la ley penal. (*)

(*) *Ver: artículo 1215 de esta norma.*

CAPITULO III

DE LA PRESCRIPCION CONSIDERADA COMO MEDIO DE EXTINGUIR LOS DERECHOS

SECCION I

DE LAS PRESCRIPCIONES DE TREINTA, VEINTE Y DIEZ AÑOS

1215.- Toda acción real se prescribe por treinta años, sin distinción entre presentes y ausentes; salvo la excepción determinada en el artículo 643, número 5 y lo que se dispone en los artículos 1204, 1212 y 1214.

En cuanto a la hipoteca, se estará a lo dispuesto en el Título respectivo del Libro Cuarto.

1216.- Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por veinte años, sin perjuicio de lo que al respecto dispongan las leyes especiales.

El tiempo comienza a correr desde que la deuda sea exigible. (*)

(*) *Ver: artículos 1217, 1226 y 1243 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 17.292 de fecha 25 de enero de 2001, artículo 27.

1217.- El derecho de ejecutar por acción personal se prescribe por diez años contados como expresa el artículo anterior.

Transcurridos los diez años, la acción no adquiere el carácter ejecutivo por la confesión judicial del deudor ni por el reconocimiento que haga del documento privado.

1218.- El tiempo de la prescripción en las obligaciones condicionales o a plazo, no principia a correr sino desde el cumplimiento de la condición o vencimiento del plazo.

En la obligación de saneamiento, no corre sino desde que tiene lugar la evicción.

1219.- En las obligaciones con interés o renta, el tiempo para la prescripción del capital empieza a correr desde el último pago del interés o renta.

Esta disposición es aplicable al capital del censo. (*)

(*) *Ver: artículo 1865 de esta norma.*

1220.- Cuando haya recaído sentencia, el tiempo de la prescripción de los derechos por ella declarados correrá desde que causó ejecutoria. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 17.292 de fecha 25 de enero de 2001, artículo 27.*

SECCION II

DE ALGUNAS PRESCRIPCIONES MAS CORTAS

1221.- Por el lapso de cinco años, quedan exonerados los Jueces, abogados y procuradores, de la responsabilidad de los expedientes que han recibido. El tiempo se cuenta desde el recibo.

Se prescribe también por cinco años:

1°.- La obligación de pagar la construcción, compostura, refacción o reedificación de las paredes y cercos divisorios medianeros y los arrimos de obras apoyadas en la división medianera, a partir de la fecha de la conclusión de la obra que origina la obligación.

2°.- La obligación de pagar el impuesto de pavimentación de calles y caminos, a partir de la fecha en que las cuentas respectivas fueran aprobadas por la autoridad correspondiente o en su defecto, desde que la calle o camino fue librado al servicio público.

1222.- Se prescribe por cuatro años la obligación de pagar los atrasos:

1°.- De pensiones alimenticias.

2°.- Del precio de los arriendos, bien sea la finca rústica o urbana.

3°.- De interés de dinero prestado.

4°.- De todo lo que debe pagarse por años o plazos periódicos más cortos. (*)

(*) *Ver: artículos 1226 y 1227 de esta norma.*

1223.- Por el tiempo de dos años se prescribe la obligación de pagar:

1°.- A los abogados, procuradores y toda clase de curiales sus honorarios, derechos y salarios.

El tiempo de la prescripción corre desde que se feneció el proceso por sentencia o conciliación de las partes o desde la cesación de los poderes del procurador o desde que el abogado cesó en su ministerio, ya por convenio con el cliente, ya por resolución de éste *comunicada al primero*.

2°.- A los escribanos, los derechos de las escrituras o instrumentos que autorizaren, corriendo el tiempo para la prescripción desde el día de su otorgamiento.

3°.- A los médicos, cirujanos, obstetrices y boticarios, sus visitas, operaciones y medicinas, corriendo el tiempo desde el suministro de éstas o desde que tuvieron lugar aquéllas.

4°.- A los dueños de colegios o casas de pensionistas, el precio de la pensión de sus discípulos y a los otros maestros el de aprendizaje.

5°.- A los comerciantes y artesanos, el precio de los géneros o artefactos que venden, teniendo el deudor su domicilio dentro de la República.

Si el deudor estuviere domiciliado fuera de la República, la acción se prescribirá por *cuatro años*.

6°.- A los maestros de ciencias y artes, el estipendio que se les paga mensualmente. (*)

(*) *Ver: artículos 1226 y 1227 de esta norma.*

1224.- Se prescribe por un año la obligación de pagar a los oficiales mecánicos que se ajustan por año, el precio de sus trabajos y hechuras. (Artículo 1694). (*)

(*) *Ver: artículos 1225, 1226, 1227 y 2369 nral. 4° de esta norma.*

1225.- Se prescribe por seis meses la obligación de pagar a los posaderos y fonderos la comida y habitación que dieren.

Por igual tiempo se prescribe la acción de las personas indicadas en el artículo anterior, cuando ajustan sus servicios por mes. (*)

(*) *Ver: artículos 1226, 1227 y 2369 nral. 4º de esta norma.*

1226.- En todos los casos de los cuatro artículos anteriores, corre la prescripción aunque se hayan continuado los servicios, trabajo o suministros y sólo dejará de correr cuando haya habido ajuste de cuentas aprobado por escrito, documento privado o público de obligación, o hubiere mediado emplazamiento judicial, en cuyo caso se observará lo dispuesto en el artículo 1216. (*)

(*) *Ver: artículo 2369 nral. 4º de esta norma.*

1227.- La persona a quien se opusiere alguna de las prescripciones comprendidas en los artículos 1222 a 1225, podrá exigir que el que la opone declare bajo juramento que la deuda está realmente pagada.

Este juramento podrá ser también deferido a los herederos y siendo éstos menores de edad, a sus tutores.

En ningún otro caso, fuera de los exceptuados por este artículo, podrá el acreedor deferir el juramento al deudor ni a sus herederos.

SECCION III

DISPOSICIONES GENERALES

1228.- Los delitos y sus penas se prescribirán según se disponga en la ley penal.

La prescripción de los términos y dilaciones judiciales se regirá por lo que dispongan las leyes de procedimientos civiles y criminales.

1229.- En las prescripciones por meses o por años se cuentan unos y otros según el calendario Gregoriano.

Esta disposición se extiende a los plazos señalados por la ley o por las partes en cualquier otra materia, si en la misma ley o en los actos jurídicos no se dispone de distinto modo.

1230.- Lo dispuesto en este Título se entenderá sin perjuicio de las prescripciones determinadas particularmente en otros Títulos de este Código o en leyes especiales.

1231.- Las prescripciones empezadas a la fecha en que este Código sea obligatorio, se determinarán conforme a las leyes antiguas.

Sin embargo, las iniciadas para las que se necesitare todavía, según las leyes antiguas, más de treinta años, contados desde la fecha indicada en el inciso anterior, se consumarán por ese lapso.

CAPITULO IV

DE LAS CAUSAS QUE INTERRUMPEN LA PRESCRIPCION O SUSPENDEN SU CURSO

SECCION I

DE LAS CAUSAS QUE INTERRUMPEN LA PRESCRIPCION

1232.- La prescripción se interrumpe natural o civilmente.

1233.- Se interrumpe naturalmente la prescripción adquisitiva:

1°.- Cuando sin pasar la posesión a otras manos, se hace imposible el ejercicio de los actos posesorios, como en el caso de una heredad que ha sido permanentemente inundada.

2°.- Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona. (Artículo 657).

En el primer caso, la interrupción no produce otro efecto que el de descontarse su duración; pero en el segundo hace perder todo el tiempo de la posesión anterior, a menos que se haya recobrado judicialmente conforme a lo dispuesto en el Título V del Libro Segundo, pues entonces se consideraría no haber habido interrupción.

1234.- Hay interrupción natural de la prescripción extintiva:

1°.- Cuando el dueño de una servidumbre en vía de prescribirse por el no uso, vuelve a ejercer esta servidumbre.

2°.- Cuando el deudor reconoce expresa o tácitamente la obligación. (Artículo 1189, inciso 3°).

En ambos casos, una nueva prescripción comenzará a correr desde la fecha en que se ejercitó la servidumbre o tuvo lugar el reconocimiento.

1235.- Toda prescripción se interrumpe civilmente por el emplazamiento judicial notificado al poseedor o deudor.

El emplazamiento judicial interrumpe la prescripción, aunque sea dado por Juez incompetente o sea nulo por vicio de forma.

Sólo el que ha obtenido el emplazamiento, su causahabiente o sucesor pueden alegar la interrupción. (*)

(*) *Ver: artículo 1236 de esta norma.*

1236.- La citación a juicio de conciliación interrumpe también la prescripción desde el día en que se hace, con tal que dentro de treinta días contados desde la celebración del juicio y no haberse avenido las partes o haberse dado por celebrado en rebeldía, sea seguida de demanda y emplazamiento, con arreglo al artículo anterior. (Artículo 1348).

1237.- El emplazamiento judicial, aunque haya litis contestación, se considera como no hecho y no haber interrumpido la prescripción adquisitiva:

1º.- Si el actor desistiere expresamente de la demanda o se extinguiere la instancia por perención.

2º.- Si el demandado fuere absuelto de la demanda.

1238.- Interrumpida por el emplazamiento la prescripción de las acciones personales, aunque subsidiariamente haya hipoteca, comenzará a contarse nuevamente el término legal de la prescripción, desde que se hizo la última gestión en juicio a instancia de cualquiera de las partes litigantes.

1239.- Cuando la propiedad pertenece en común a varias personas, todo lo que interrumpe la prescripción respecto de una de ellas la interrumpe también respecto de las otras.

1240.- La interpelación hecha conforme a los artículos precedentes a uno de los deudores solidarios o su reconocimiento, interrumpe la prescripción contra todos los demás y aun contra sus herederos.

La interpelación hecha a uno de los herederos de un deudor solidario o el reconocimiento de ese heredero, no interrumpe la prescripción respecto de los demás herederos, a no ser que la obligación sea indivisible.

Esa interpelación o ese reconocimiento no interrumpe la prescripción sino en la parte a que está obligado ese heredero, corriendo respecto de los otros.

1241.- La interpelación hecha al deudor principal o su reconocimiento, interrumpe la prescripción contra el fiador. (Artículo 1192). (*)

(*) *Ver: artículos 1503 y 2125 de esta norma.*

SECCION II

DE LAS CAUSAS QUE SUSPENDEN EL CURSO DE LA PRESCRIPCION

1242.- Las prescripciones de este Código corren contra toda clase de personas, a no ser que la ley disponga expresamente lo contrario.

1243.- Se suspende el curso de las prescripciones de tres, diez y veinte años (artículos 1204, 1212 y 1216) a favor:

1º.- De los menores, de los dementes, de los sordomudos y de todos los que están bajo patria potestad o bajo tutela o curaduría. (Artículo 405).

2º.- De la herencia yacente, mientras no tenga curador. (*)

(*) *Ver: artículo 1244 de esta norma.*

1244.- Cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor o deudor el tiempo anterior a ella, si lo hubo.

Transcurridos treinta años no se tomarán en cuenta las suspensiones determinadas en el artículo anterior.

DEROGADO el inc. 2o. por el art. 1o. de la Ley No. 10.783 del 18.9.46. (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

LIBRO CUARTO

De las obligaciones

PRIMERA PARTE

DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL

TITULO I

DE LAS CAUSAS EFICIENTES DE LAS OBLIGACIONES

1245.- Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. (*)

(*) *Ver: artículo 1333 de esta norma.*

1246.- Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos; ya de un hecho voluntario de la persona que se encuentra obligada, como en los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como sucede en las relaciones de familia o en las relaciones civiles.

Las obligaciones que nacen de la ley se expresan en ella.

CAPITULO I

DE LOS CONTRATOS EN GENERAL

SECCION I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

1247.- Contrato es una convención por la cual una parte se obliga para con

la otra o ambas partes se obligan recíprocamente a una prestación cualquiera, esto es, a dar, hacer o no hacer alguna cosa.

Cada parte puede ser una o muchas personas.

1248.- El contrato se llama unilateral cuando impone obligación a una de las partes solamente; y bilateral o sinalagmático cuando impone a las dos partes obligaciones recíprocas.

1249.- El contrato se llama *gratuito*, cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las dos partes, sufriendo la otra el gravamen; y *oneroso*, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes gravándose cada uno a beneficio del otro.

Todos los contratos bilaterales entran en la clase de los onerosos; pero los contratos unilaterales no siempre son gratuitos.

1250.- El contrato oneroso se llama *conmutativo* cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama *aleatorio*.

1251.- El contrato se llama *principal* cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención; y *accesorio* cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella.

1252.- El contrato se llama *solemne*, cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil (artículo 1578); *consensual* cuando obliga por el simple consentimiento de las partes; y se llama *real* cuando la obligación principal que nace de él supone necesariamente la tradición de la cosa.

Antes de la tradición, la promesa aceptada de entregar o recibir la cosa sobre que versare el contrato, entra en la clase de los contratos consensuales. (*)

(*) *Ver: artículo 1264 de esta norma.*

1253.- La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes.

1254.- El contrato que hiciere una persona a nombre de otra estando facultado por ella o por la ley, producirá respecto del representado, iguales efectos que si hubiese contratado él mismo. (*)

(*) *Ver: artículo 1293 de esta norma.*

1255.- El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su representación voluntaria o legal (artículo 1311), será nulo; a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se haga. (*)

(*) *Ver: artículo 1293 de esta norma.*

1256.- Si contratando alguno a nombre propio, hubiese estipulado cualquier ventaja en favor de tercera persona, aunque no tenga derecho de representarla, podrá esta tercera persona exigir el cumplimiento de la obligación, si la hubiese aceptado y hécholo saber al obligado, antes de ser revocada. (*)

(*) *Ver: artículo 1293 de esta norma.*

1257.- Siempre que uno de los contratantes se compromete a que por una tercera persona, de quien no es legítimo representante, ha de darse, hacerse o no hacerse alguna cosa, esta tercera persona no contrae obligación alguna, sino en virtud de su ratificación; y si ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de daños y perjuicios contra el que hizo la promesa. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Decreto N° 454/001 de fecha 21 de noviembre de 2001.*

1258.- No se admitirá juramento en los contratos; si se hiciere, se tendrá por no puesto.

1259.- Si para la existencia o validez de cierta especie de contratos se exigiere por este Código una forma determinada y que no era requerida por las leyes anteriores, sólo se entenderá afectar esa disposición del Código a los contratos celebrados después de la fecha en que su observancia sea obligatoria.

Lo mismo será tratándose de la prueba de las obligaciones en general.

1260.- Los contratos, ya tengan o no, denominación particular, están sujetos a unos mismos principios generales.

Las reglas particulares a los contratos nominados se establecen en los títulos respectivos y las peculiares a las transacciones mercantiles en la ley comercial.

SECCION II

DE LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA LA VALIDEZ DE LOS CONTRATOS

1261.- Para la validez de los contratos son esenciales los cuatro requisitos siguientes:

1°.- Consentimiento de partes.

2°.- Capacidad legal de la parte que se obliga.

3°.- Un objeto lícito y suficientemente determinado que sirva de materia de la obligación.

4°.- Que sea lícita la causa inmediata de la obligación.

Esto se entenderá sin perjuicio de la solemnidad requerida por la ley en ciertos contratos.

1°

Del consentimiento

1262.- No habrá consentimiento obligatorio sin que la propuesta de una parte haya sido aceptada por la otra.

La propuesta consiste en la manifestación que hace una de las partes de querer constituirse en alguna obligación para con la otra.

En los contratos bilaterales, la primera propuesta importa aceptación anticipada de la segunda; y la aceptación de aquélla importa segunda propuesta.

1263.- La propuesta verbal debe ser inmediatamente aceptada.

No mediando aceptación inmediata, la propuesta verbal se mirará como no hecha, a menos que el que la hizo quiera sostenerla.

1264.- Si el contrato fuese solemne (artículo 1252) sólo se considerará perfecto después de llenadas las formas especialmente requeridas por la ley.

Mientras esas formas no hayan sido llenadas, cualquiera de las partes puede arrepentirse y dejar sin efecto el contrato.

1265.- El contrato ajustado por mensajero o por correspondencia epistolar o telegráfica, se perfecciona en el lugar y en el acto en que la respuesta del que aceptó el negocio llega al proponente.

Hasta ese momento, está en libertad el proponente de retractar su propuesta, a no ser que al hacerla se hubiere comprometido a esperar contestación y a no disponer del objeto del contrato sino después de desechada la oferta o hasta que hubiere transcurrido un plazo determinado.

El que acepta el negocio, tendrá la misma libertad que el proponente, conforme al inciso anterior.

1266.- En caso de respuesta tardía, el proponente que se ha comprometido simplemente o sin plazo a esperar contestación, debe participar su cambio de determinación. De otro modo no podrá excepcionarse, fundado en la tardanza, contra la validez del contrato.

Se considerará tardía una respuesta, cuando no se da dentro de veinticuatro horas viviendo en la misma ciudad.

Residiendo en otra parte el que recibió la oferta, se mirará como tardía la contestación que no se diere dentro de treinta días contados desde que haya transcurrido el tiempo necesario para que las dos comunicaciones llegaran a su destino.

1267.- Se mirará la propuesta como no aceptada, si la otra parte la modificare en cualquier sentido, aunque la modificación consista en aumento o disminución de cantidad o precio.

La modificación de la propuesta primitiva importa una nueva propuesta que viene a ser obligatoria, desde que el individuo que la hizo recibe la contestación del primer proponente en que le avisa que se conforma con la modificación.

1268.- Será de ningún efecto la propuesta, si una de las partes falleciere o perdiere su capacidad para contratar: el proponente antes de haber sabido la aceptación y la otra parte antes de haber aceptado. (*)

(*) *Ver: artículo 1618 de esta norma.*

1269.- El consentimiento no es válido cuando ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. (*)

(*) *Ver: artículo 2162 de esta norma.*

1270.- La ignorancia de la ley o el error de derecho en ningún caso impedirán los efectos legales del contrato.

El error material de aritmética sólo da lugar a su reparación. (*)

(*) *Ver: artículo 2162 de esta norma.*

1271.- El error de hecho es causa de nulidad del contrato:

1°.- Cuando recae sobre la especie de contrato que se celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación.

2°.- Cuando recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en la venta el vendedor entendiere vender cierta cosa determinada y el comprador entendiera que compra otra.

3°.- Cuando la substancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el contrato es distinta de la que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una barra de algún otro metal semejante. (Artículos 771 y 772).

El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el contrato, sino cuando esa calidad es el principal motivo de uno de los contrayentes para contratar y este motivo ha sido conocido de la otra parte. (*)

(*) *Ver: artículo 2162 de esta norma.*

1272.- La violencia es también causa de nulidad y puede ser *física o moral*.

Habrà violencia física cuando para producir el contrato, se empleare una fuerza física irresistible.

Habrà violencia moral cuando se inspire a uno de los contrayentes el temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes o de su cónyuge, descendientes o ascendientes legítimos o ilegítimos. (*)

(*) *Ver: artículo 2162 de esta norma.*

1273.- La violencia moral no afectará la validez del contrato, sino cuando por la condición de la persona, su carácter, hábitos o sexo, pueda juzgarse que ha debido naturalmente hacerle una fuerte impresión.

Tampoco afectará la validez de los contratos el mero temor reverencial. (*)

(*) *Ver: artículo 2162 de esta norma.*

1274.- La violencia física o moral invalidará el contrato, aunque se haya empleado por un tercero que no intervenga en él. (*)

(*) *Ver: artículo 2162 de esta norma.*

1275.- Para que el dolo pueda ser un medio de nulidad, es preciso que haya dado causa al contrato.

Tendrá ese carácter cuando con palabras, o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contrayentes, fuese inducido el otro a celebrar un contrato, que en otro caso no hubiera otorgado. (*)

(*) *Ver: artículo 2162 de esta norma.*

1276.- El dolo incidente no vicia el contrato; pero el que lo comete debe satisfacer cualquier daño que hubiese causado. (Artículo 1319).

Es dolo incidente el que no fue causa determinante del contrato. (*)

(*) *Ver: artículo 2162 de esta norma.*

1277.- La lesión por sí sola no vicia los contratos.

No puede, pues, la lesión servir de fundamento a restitución *in integrum* alguna; sin perjuicio de lo dispuesto sobre la nulidad en el Capítulo VII del Título III de este Libro. (*)

(*) *Ver: artículo 2162 de esta norma.*

2°

De la capacidad de los contrayentes

1278.- Pueden contratar todas las personas que no estuviesen declaradas incapaces por la ley.

1279.- Son absolutamente incapaces los impúberes, los dementes y las personas sordomudas que no puedan darse a entender por escrito ni mediante lengua de señas, según lo establecido en la Ley N° 17.378, de 25 de julio de 2001. En este último caso la intervención del intérprete de lengua de señas es preceptiva para decidir la incapacidad. Los actos en que intervengan personas incapaces no producen ni aun obligaciones naturales y no admiten caución. (*)

(*) *La redacción de este artículo fue dada por Ley N° 17.535 de fecha 21 de agosto de 2002, artículo 2.*

1280.- Son también incapaces los menores adultos que se hallan bajo la patria potestad o que no han obtenido habilitación de edad con arreglo a lo dispuesto en el Título VIII del Libro Primero y los comerciantes fallidos.

Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes.

1281.- Además de las incapacidades declaradas por los artículos precedentes, hay otras especiales que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos.

3°

Del objeto de los contratos

1282.- El objeto de los contratos es el objeto de las obligaciones que por ellos se contrajeren.

Pueden ser objeto de los contratos, las cosas o los hechos que no estén fuera del comercio de los hombres.

1283.- No sólo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan; pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. (Artículos 913, 1625, 1651 y 1671).

La cantidad puede ser incierta con tal que el contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla.

Los hechos han de ser posibles, determinados y en su cumplimiento han de tener interés los contrayentes.

1284.- Los hechos son imposibles física o moralmente.

Es físicamente imposible el hecho que es contrario a la naturaleza.

Es moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público.

1285.- El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de ningún contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. (Artículos 1053 y 1651).

1286.- Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al Derecho Público Oriental. Así la promesa de someterse en la República a una jurisdicción no reconocida por las leyes orientales, es nula por el vicio del objeto. (Artículo 11).

4°

De la causa para obligarse en los contratos

1287.- En todo contrato oneroso, es causa para obligarse cada parte contratante, la ventaja o provecho que le procura la otra parte.

Si el contrato es gratuito, la causa se encuentra en la mera liberalidad del bienhechor.

1288.- La obligación y por consiguiente el contrato que se funda en una causa falsa o ilícita, no puede tener efecto alguno.

La causa es ilícita cuando es prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público.

Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que se creía existir, pero que no existe, tiene una causa falsa; y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral se funda en una causa ilícita.

Habrán también causa ilícita cuando una de las partes prometiére dar algo a la otra por que cumpla con el deber que le impone de antemano la ley o la moral.

1289.- El contrato será válido aunque la causa en él expresada sea falsa con tal que se funde en otra verdadera. (Artículo 788).

1290.- Aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita, mientras el deudor no pruebe lo contrario.

SECCION III**DE LOS EFECTOS JURIDICOS DE LOS CONTRATOS**

1291.- Los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes como a la ley misma.

Todos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan, no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la equidad, al uso o a la ley.

1292.- Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los herederos y demás sucesores de las partes, a menos que lo contrario resulte de una disposición especial de la ley, de una cláusula de la convención o de la naturaleza misma del contrato.

1293.- Los contratos no pueden oponerse a terceros ni invocarse por ellos, sino en los casos de los artículos 1254 a 1256.

1294.- Las partes pueden, por mutuo consentimiento, extinguir las obligaciones creadas por los contratos y retirar los derechos reales que se hubiesen transferido; y pueden también por mutuo consentimiento, revocar los contratos por las causas que la ley autoriza.

1295.- Podrán los acreedores pedir al Juez que los autorice para ejercer todos los derechos y acciones de su deudor. (Artículo 2372).

Exceptúanse los derechos que no ofrezcan un interés pecuniario y actual y aquellos que por su naturaleza o por disposición de la ley no pueden ser ejercidos sino por el deudor o que a lo menos no pueden serlo contra su voluntad por otra persona.

1296.- Podrán también los acreedores pedir a nombre propio que se rescindan o revoquen las enajenaciones otorgadas por el deudor con fraude y en perjuicio de ellos. (Artículo 537 número 5°).

Consiste el fraude en el conocimiento de la insolvencia del deudor.

Si la enajenación fuere a título oneroso, deberán probar los acreedores que medió fraude por parte de ambos contrayentes; si fuere a título gratuito bastará que se pruebe el fraude respecto del deudor.

La acción de que habla este artículo, expira en un año contado desde que el acreedor o acreedores supieren la enajenación. Para las enajenaciones que se inscriban en el Registro respectivo el plazo correrá a partir de la fecha de su inscripción. (*)

(*) *Ver: artículo 1991 de esta norma.*

SECCION IV

DE LA INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS

1297.- Las palabras de los contratos deben entenderse en el sentido que les da el uso general, aunque el obligado pretenda que las ha entendido de otro modo.

1298.- Habiendo ambigüedad en las palabras, debe buscarse más bien la intención común de las partes que el sentido literal de los términos.

1299.- Las cláusulas equívocas o ambiguas deben interpretarse por medio de los términos claros y precisos empleados en otra parte del mismo escrito, cuidando de darles no tanto el significado que en general les pudiera convenir, cuanto el que corresponde por el contexto general.

1300.- Las cláusulas susceptibles de dos sentidos, del uno de los cuales resultare la validez y del otro la nulidad del acto, deben entenderse en el primero.

Si ambos dieren igualmente validez al acto, deben tomarse en el sentido que más convenga a la naturaleza del contrato y a las reglas de la equidad.

1301.- Los hechos de los contrayentes, posteriores al contrato, que tengan relación con lo que se discute, servirán para explicar la intención de las partes al tiempo de celebrar el contrato.

1302.- Las cláusulas ambiguas se interpretan por lo que es de uso y costumbre en el lugar del contrato.

1303.- Las cláusulas de uso común deben suplirse en los contratos, aun cuando no se hallen expresadas en ellos.

1304.- En los casos dudosos que no puedan resolverse según las bases establecidas, las cláusulas ambiguas deben interpretarse a favor del deudor.

Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de su falta de explicación.

1305.- Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado.

1306.- Cuando el objeto de un contrato es un compuesto de diversas partes, la denominación dada al todo comprende todas las partes que lo forman.

1307.- La expresión de un caso se estima hecha por vía de ejemplo, a no ser que aparezca claramente haberse hecho con el objeto de restringir la obligación a ese caso.

CAPITULO II**DE LOS CUASICONTRATOS, DELITOS Y CUASIDELITOS****SECCION I****DE LOS CUASICONTRATOS**

1308.- Todo hecho lícito del hombre que hace mejor la condición de una persona en daño de otro, sin que haya mediado intención de hacer liberalidad, da origen a un cuasicontrato que obliga al que ha mejorado su condición a devolver la suma o la cosa convertida en su provecho.

1309.- El que se encarga de la agencia o administración de los bienes o negocios ajenos sin mandato ni conocimiento del dueño, está obligado a continuar en su encargo con todo lo anejo o dependiente hasta su conclusión o hasta que el mismo dueño o interesado se halle en estado de proveer por sí o bien hasta que puedan proveer sus herederos en caso de que muriese aquél durante la referida agencia.

Las obligaciones del agente oficioso son las mismas que las del mandatario.

1310.- El agente oficioso está obligado a emplear en la gestión todos los cuidados de un buen padre de familia y será responsable de los perjuicios que por su culpa o negligencia resulten al dueño de los bienes o negocios que tomó a su cargo.

Los Tribunales, sin embargo, podrán moderar la indemnización según las circunstancias del caso.

1311.- Por su parte, el dueño de los bienes o negocios oficiosamente administrados con la debida diligencia, está obligado a cumplir las obligaciones contraídas en su nombre por su agente, a indemnizarle de las que haya tomado sobre sí por causa de dicha agencia y a satisfacerle todos los gastos necesarios o útiles que haya hecho, pero no a darle salario.

1312.- El que por error ha hecho un pago tiene derecho de repetir lo pagado, si prueba que no lo debía.

Sin embargo, cuando una persona a consecuencia de un error suyo, ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que a virtud del pago ha suprimido o cancelado de buena fe un título necesario para el cobro de su crédito; pero puede intentar contra el deudor las acciones del acreedor.

1313.- No se podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural de las enumeradas en el Capítulo IV del siguiente Título. (Artículo 2176).

1314.- Se podrá repetir aun lo que se ha pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni siquiera una obligación puramente natural.

1315.- Si el demandado confiesa el pago, el actor debe probar que no era debido; pero si aquél lo niega, corresponde al actor probarlo; y probado, se presumirá indebido.

1316.- El que de buena fe recibe una cantidad indebida está obligado a restituir otro tanto.

Si la ha recibido de mala fe, debe también los intereses corrientes.

El que ha recibido de buena fe una cosa cierta y determinada debe restituirla en especie, si existe; pero no responde de las desmejoras o pérdidas, aunque hayan sido ocasionadas por su culpa, sino en cuanto se haya hecho más rico.

Con todo, desde que sabe que la cosa fue pagada indebidamente, se somete a todas las obligaciones del poseedor de mala fe. (*)

(*) *Ver: artículo 1318 de esta norma.*

1317.- El que de buena fe ha vendido la cosa cierta y determinada que se le dio como debida, es sólo obligado a restituir el precio de venta y a ceder las acciones que tenga contra el comprador que no la haya pagado íntegramente.

Si estaba de mala fe cuando hizo la venta, es obligado como todo poseedor que dolosamente ha dejado de poseer.

1318.- El que pagó lo que no debía, no puede perseguir la especie poseída por un tercero de buena fe a título oneroso; pero tendrá derecho para que el

tercero que la tiene por cualquier título gratuito, se la restituya, si es reivindicable y existe en su poder.

Las obligaciones del donatario que restituye, son las mismas que las de su causante, según el artículo 1316.

SECCION II

DE LOS DELITOS Y CUASIDELITOS

1319.- Todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño, impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido, la obligación de repararlo.

Cuando el hecho ilícito se ha cumplido con dolo, esto es, con intención de dañar, constituye un *delito*; cuando falta esa intención de dañar, el hecho ilícito constituye un *cuasidelito*.

En uno y otro caso, el hecho ilícito puede ser *negativo* o *positivo*, según que el deber infringido consista en hacer o no hacer.

1320.- No son capaces de delito o cuasidelito los menores de diez años ni los dementes; pero serán responsables del daño causado por ellos las personas a cuyo cargo estén, si pudiere imputárseles negligencia. (*)

(*) *Ver: artículo 1326 de esta norma.*

1321.- El que usa de su derecho no daña a otro, con tal que no haya exceso de su parte. El daño que puede resultar no le es imputable.

1322.- Nadie es responsable del daño que proviene de caso fortuito a que no ha dado causa.

1323.- El daño comprende no sólo el mal directamente causado, sino también la privación de ganancia que fuere consecuencia inmediata del hecho ilícito.

1324.- Hay obligación de reparar no sólo el daño que se causa por hecho propio, sino también el causado por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia o por las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado.

Así, los padres son responsables del hecho de los hijos que están bajo su potestad y viven en su compañía.

Los tutores y curadores lo son de la conducta de las personas que viven bajo su autoridad y cuidado.

Lo son, igualmente, los directores de colegios y los maestros artesanos respecto al daño causado por sus alumnos o aprendices, durante el tiempo que están bajo su vigilancia.

Y lo son, por último, los dueños o directores de un establecimiento o empresa, respecto del daño causado por sus domésticos en el servicio de los ramos en que los tuviesen empleados.

La responsabilidad de que se trata en los casos de este artículo cesará cuando las personas en ellos mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 17.011 de fecha 25 de setiembre de 1998, artículo 97.*

1325.- En cuanto a los posaderos, su responsabilidad se regirá por lo dispuesto acerca del *depósito necesario* en el Título XIII, Parte Segunda de este Libro.

1326.- Las personas obligadas a la reparación del daño causado por las que de ellas dependen, tienen derecho a ser indemnizadas sobre los bienes de éstas, si los hubiere y si el que causó el daño lo hizo sin orden ni conocimiento de la persona a quien debía obediencia y era capaz de delito o cuasidelito según el artículo 1320.

1327.- El dueño de un edificio es responsable del daño que ocasione su ruina acaecida por haber omitido las necesarias reparaciones o por haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia.

Si la ruina proviniese de vicio en la construcción, el tercero damnificado sólo puede repetir contra el arquitecto que dirigió la obra, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo II, Título IV, Parte Segunda de este Libro. (Artículo 1844).

1328.- El dueño de un animal es responsable del daño que éste cause aun después que se haya soltado o extraviado, salvo que la soltura, extravío o daño no pueda imputarse a culpa del dueño o de sus dependientes encargados de la guarda o servicio del animal.

Lo que se dispone respecto del dueño es aplicable a toda persona que se sirva de un animal ajeno, salva su acción contra el dueño, si el daño

provino de un vicio del animal que aquel debía conocer o prevenir y de que no le dio conocimiento. (*)

(*) *Ver: artículo 1329 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Decreto N° 82/000 de fecha 29 de febrero de 2000, artículo 6.

1329.- El daño causado por un animal salvaje o feroz será siempre imputable a quien lo tenga bajo su guarda, sea o no su propietario, aunque no le hubiese sido posible evitar el daño y aunque el animal se hubiese soltado sin su culpa.

Lo dispuesto precedentemente no será aplicable a las autoridades y funcionarios de los parques o jardines zoológicos estatales o municipales, respecto de los cuales regirá lo establecido en el artículo anterior. La misma regla se aplicará a los propietarios de parques o jardines zoológicos privados, guardianes de los mismos y dependientes encargados de la guarda de los animales. (*)

(*) *Ver: artículo 1329-1 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Decreto N° 82/000 de fecha 29 de febrero de 2000, artículo 6.

1329-1.- A los efectos del artículo anterior, se consideran animales feroces o salvajes los que no son ordinariamente domesticables o son peligrosos para los seres humanos por su agresividad, costumbres, tamaño o fuerza, tales como: grandes felinos, paquidermos, osos, cocodrilos, ofidios venenosos y boas, primates grandes y medianos, lobos, gatos monteses, jabalíes y similares.

No exime de esta calificación el hecho de que el animal haya sido criado por seres humanos y en régimen de domesticidad. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Decreto N° 82/000 de fecha 29 de febrero de 2000, artículo 6.*

1330.- El daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio, es imputable a todos los que habitan la misma parte del edificio y la indemnización se dividirá entre todos ellos, a menos que se pruebe que el daño se debe a la culpa o dolo de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable ésta sola.

1331.- Si un delito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas responde solidariamente del daño causado.

No es aplicable esta regla cuando el daño proviene de cuasidelito. Sus autores responderán proporcionalmente.

1332.- La acción concedida al damnificado prescribe en cuatro años contados desde la perpetración del hecho ilícito.

TITULO II

DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE OBLIGACIONES (*)

(*) *Ver: artículo 1447 nral. 9º de esta norma.*

CAPITULO I

DE LAS OBLIGACIONES CON RELACION A SU OBJETO (*)

(*) *Ver: artículo 2251 de esta norma.*

SECCION I

DE LA OBLIGACION DE DAR

1333.- La obligación de dar es la que tiene por objeto la entrega de una cosa mueble o inmueble.

El que se ha obligado a entregar una cosa debe verificarlo en el lugar y en el tiempo estipulado; y en defecto de estipulación, en lugar y tiempo conveniente según el arbitrio judicial. (Artículo 1245).

1334.- La obligación de entregar la cosa contiene la de conservarla como buen padre de familia, hasta que la tradición se verifique, so pena de daños y perjuicios.

1335.- La cosa aumenta, se deteriora o perece para el que la tiene que recibir, a no ser en los casos siguientes:

1º.- Si pereciere o se deteriorare por dolo o culpa del que la debe entregar.

2º.- Si se pactare que el peligro sea de cuenta del que la debe entregar.

3º.- Si la cosa fuese de las que es costumbre gustar o probar antes de recibirlas.

4°.- Si el deudor ha caído en mora de entregar la cosa. (Artículos 1438, inciso 2°; 1557 y 1805). (*)

(*) *Ver: artículo 1682 de esta norma.*

1336.- El deudor cae en mora, sea por interpelación judicial o intimación de la protesta de daños y perjuicios, sea por la naturaleza de la convención o por efecto de la misma, cuando en ella se establece que el deudor caiga en mora por sólo el vencimiento del término. (*)

(*) *Ver: artículos 1341 y 1729 nral. 3° de esta norma.*

1337.- Si uno se obliga sucesivamente a entregar a dos personas diversas una misma cosa, el que primero adquiere la posesión de buena fe, ignorando el primer contrato, es preferido, aunque su título sea posterior en fecha, con tal que haya pagado el precio, dado fiador o prenda u obtenido plazo para el pago. (Artículo 1680).

SECCION II

DE LA OBLIGACION DE HACER O DE NO HACER

1338.- Toda obligación de hacer o de no hacer, se resuelve en resarcimiento de daños y perjuicios, en caso de falta de cumplimiento de parte del deudor.

Sin embargo, el acreedor tiene derecho a exigir que se destruya lo que se hubiese hecho en contravención de la obligación y puede obtener autorización judicial para destruirlo a costa del deudor, sin perjuicio del resarcimiento de daños, si hubiere lugar. (*)

(*) *Ver: artículo 1339 de esta norma.*

1339.- En caso de falta de cumplimiento, tratándose de cosa que pueda ser ejecutada por un tercero, puede el acreedor obtener autorización para hacer ejecutar la obligación por cuenta del deudor, si no prefiere compelerle al pago de daños y perjuicios. (Artículo 1338).

El deudor, para librarse de los daños y perjuicios que se le reclaman, puede ofrecerse a ejecutar la cosa prometida, si es tiempo todavía, sin perjuicio del acreedor, pagando los daños ocasionados por la demora.

1340.- Si la obligación es de no hacer, el contraventor debe los daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención.

SECCION III

DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS

1341.- Los daños y perjuicios sólo se deben cuando el deudor ha caído en mora de cumplir su obligación (artículo 1336) o cuando la cosa que se había comprometido a dar o hacer no podía ser dada o hecha, sino en el tiempo determinado que ha dejado transcurrir.

La demanda de perjuicios supone la resolución del contrato. El que pide su cumplimiento no puede exigir otros perjuicios que los de la mora. (*)

(*) *Ver: artículo 1680 de esta norma.*

1342.- El deudor es condenado al resarcimiento de daños y perjuicios, sea en razón de la falta de cumplimiento de la obligación o de la demora en la ejecución, aunque no haya mala fe de su parte, siempre que no justifique que la falta de cumplimiento proviene de causa extraña que no le es imputable. (*)

(*) *Ver: artículos 1680 y 2065 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Decreto N° 78/002 de fecha 6 de marzo de 2002, artículo 6.

1343.- No se deben daños y perjuicios, cuando el deudor no ha podido dar o hacer la cosa a que estaba obligado o ha hecho lo que le estaba prohibido, cediendo a fuerza mayor o por caso fortuito. (Artículo 1549).

No se entienden comprendidos en la regla antedicha, los casos siguientes:
1°.- Si alguna de las partes ha tomado sobre sí especialmente los casos fortuitos o la fuerza mayor.

2°.- Si el caso fortuito ha sido precedido de alguna culpa suya, sin la cual no habría tenido lugar la pérdida o inejecución.

3°.- Si el deudor había caído en mora antes de realizarse el caso fortuito; debiéndose observar lo dispuesto en el Capítulo VI, Título III, Parte Primera de este Libro. (*)

(*) *Ver: artículos 1680 y 1682 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Decreto N° 78/002 de fecha 6 de marzo de 2002, artículo 6.

1344.- Se entiende por culpa la falta del debido cuidado o diligencia. Puede ser *grave* o *leve*.

Sea que el negocio interese a una sola de las partes, ya tenga por objeto la utilidad común de ellas, sujeta al obligado a toda la diligencia de un buen padre de familia, esto es, a prestar la culpa leve.

Esa obligación, aunque regulándose por un solo principio, es más o menos extensa según la naturaleza del contrato o el conjunto de circunstancias, en los casos especialmente previstos por este Código. (*)

(*) *Ver: artículo 1680 de esta norma.*

1345.- Los daños y perjuicios debidos al acreedor, a no ser de los fijados por la ley o convenidos por los contratantes, son en general, de la pérdida que ha sufrido y del lucro de que se le ha privado, con las modificaciones de los artículos siguientes. (*)

(*) *Ver: artículo 1680 de esta norma.*

1346.- El deudor no responde sino de los daños y perjuicios que se han previsto o podido prever al tiempo del contrato, cuando no ha provenido de dolo suyo la falta de cumplimiento de la obligación.

Aun en el caso de que la falta de cumplimiento provenga de dolo del deudor, los daños y perjuicios que no están fijados por la ley o convenidos por los contratantes, no deben comprender, respecto de la pérdida sufrida por el acreedor y el lucro de que se le ha privado, sino lo que ha sido consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento. (*)

(*) *Ver: artículo 1680 de esta norma.*

1347.- Cuando en la convención se hubiere establecido que, si ella no se cumpliere, se pagará cierta suma por vía de daños y perjuicios, no puede darse en su lugar una cantidad ni mayor ni menor. (*)

(*) *Ver: artículo 1680 de esta norma.*

1348.- En las obligaciones que se limitan al pago de cierta suma, los daños y perjuicios provenientes de la demora en la ejecución, no consisten sino en la condenación en los intereses legales, excepto las reglas peculiares al comercio y a las fianzas.

Esos daños y perjuicios se deben sin que el acreedor tenga que justificar pérdida alguna y aunque de buena fe el deudor no se considere tal.

Sólo se deben desde el día de la demanda o la citación a juicio de conciliación seguido de demanda con arreglo al artículo 1236; excepto los casos en que la ley hace correr los intereses *ipso jure* o sin acto alguno del acreedor. (*)

(*) *Ver: artículo 1680 de esta norma.*

SECCION IV

DE LAS OBLIGACIONES ALTERNATIVAS

1349.- La obligación es *alternativa* cuando se deben varias cosas, de manera que el deudor por la entrega o la ejecución de una de ellas, se libra de dar o hacer la otra.

1350.- La elección pertenece siempre al deudor, si no se ha concedido expresamente al acreedor.

Si el que ha de hacer la elección muere sin ejecutarla, ese derecho pasa a sus herederos.

1351.- El deudor puede librarse entregando cualquiera de las dos cosas prometidas; pero no puede obligar al acreedor a recibir parte de una y parte de otra.

1352.- Si una de las dos cosas prometidas no podía ser materia de la obligación, se considera ésta pura y simple, aunque contraída como alternativa.

1353.- La obligación alternativa se convierte en simple si una de las dos cosas prometidas perece, aunque sea por culpa del deudor y no puede ser entregada.

En este caso, el deudor debe entregar la que hubiere quedado, sin que ni él cumpla con ofrecer ni el acreedor pueda exigirle el precio de la otra.

Si ambas han perecido y sólo una por culpa del deudor, debe entregar el precio de la última que ha perecido. (*)

(*) *Ver: artículo 1354 de esta norma.*

1354.- En los casos del artículo precedente, si el acreedor tuviese la elección por haberse así convenido, se observarán las reglas siguientes:

1°.- Si una de las cosas ha perecido sin culpa del deudor, éste cumple con entregar al acreedor la que haya quedado.

2°.- Si pereció por culpa del deudor, podrá el acreedor reclamar a su elección la cosa que haya quedado o el precio de la que pereció.

3°.- Si han perecido las dos cosas por culpa del deudor respecto de las dos o de una de ellas, el acreedor puede reclamar a su arbitrio el precio de cualquiera de las dos.

4°.- Si las dos cosas han perecido sin culpa del deudor, la obligación se extingue.

Los mismos principios se aplican al caso en que hay más de dos cosas comprendidas en la obligación alternativa.

1355.- Si la alternativa consiste en dar o hacer alguna cosa a favor de tal o cual persona, el deudor se libra cumpliendo respecto de una de ellas cual más quisiere; y éstas no pueden obligarle a satisfacer por mitad a las dos.

1356.- Cuando la obligación alternativa consiste en prestaciones anuales, la opción hecha para un año no obliga para los otros.

SECCION V

DE LAS OBLIGACIONES FACULTATIVAS

1357.- Obligación *facultativa* es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa.

1358.- En la obligación facultativa el acreedor no tiene derecho para pedir otra cosa que aquella a que el deudor es directamente obligado y si dicha cosa perece sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora, no tiene derecho para pedir cosa alguna.

1359.- En caso de duda, sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá por alternativa.

SECCION VI

DE LAS OBLIGACIONES DE GENERO (*)

(*) *Ver: artículo 1464 de esta norma.*

1360.- Obligaciones de *género* son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado.

1361.- En la obligación de género el acreedor no puede pedir determinadamente ningún individuo y el deudor queda libre de ella, entregando cualquier individuo del género, con tal que sea de una calidad a lo menos mediana.

1362.- La pérdida de algunas cosas del género no extingue la obligación y el acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajene o destruya, mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe.

SECCION VII

DE LAS OBLIGACIONES CON CLAUSULA PENAL

1363.- La cláusula penal es aquella en cuya virtud una persona para asegurar la ejecución de la convención, se obliga a alguna pena, en caso de falta de cumplimiento.

1364.- La nulidad de la obligación principal trae consigo la de la cláusula penal.

La nulidad de ésta no importa la de la obligación principal.

1365.- La cláusula penal es válida aun cuando se agrega a obligación cuyo cumplimiento no puede exigirse judicialmente, pero que no es reprobada por derecho. (*)

(*) *Ver: artículo 1446 de esta norma.*

1366.- El acreedor, cuyo deudor ha incurrido en mora, puede a su arbitrio exigir la pena estipulada o la ejecución de la obligación principal.

1367.- La cláusula penal es la compensación de los daños y perjuicios que se irrogan al acreedor, por la falta de cumplimiento de la obligación principal.

No puede, pues, pedir a la vez la obligación principal y la pena, a no ser que se haya así pactado expresamente.

Sin embargo, si habiendo optado por el cumplimiento de la obligación, no consiguiera hacerla efectiva, puede pedir la pena.

1368.- Sea que la obligación principal contenga o no, plazo en que deba cumplirse, no se incurre en la pena, sino cuando el obligado a entregar o tomar o a hacer, ha incurrido en mora.

Si la obligación es de no hacer, el obligado incurre en la pena desde el momento que ejecute el acto del cual se obligó a abstenerse.

1369.- Incurre en la pena estipulada el deudor que no cumple dentro del tiempo debido, aun cuando la falta de cumplimiento provenga de justas causas que le hayan imposibilitado de verificarlo.

Sin embargo, si la obligación principal es de entregar una cosa determinada y ésta perece, no tiene lugar la pena en los casos en que el deudor no sea responsable de la obligación principal.

1370.- Cuando la obligación principal se haya cumplido en parte, la pena se pagará a prorrata por lo no ejecutado.

1371.- Cuando la obligación primitiva contraída con cláusula penal, es de cosa indivisible y son varios los deudores por sucesión o por contrato, se incurre en la pena por la contravención de uno solo de los deudores y puede ser exigida por entero del contraventor o de cada uno de los codeudores por su parte y porción, salvo el derecho de éstos para exigir del contraventor que les devuelva lo que pagaron por su culpa.

1372.- Si la obligación indivisible contraída con cláusula penal es a favor de varios contra varios, sea por herencia o por contrato, no se incurre en la pena total, caso de obstáculo puesto por uno de los deudores a alguno de los acreedores, sino que sólo el causante del obstáculo incurre en la pena y se adjudica únicamente al perturbado; ambos proporcionalmente a su haber hereditario o cuota correspondiente.

1373.- Cuando la obligación primitiva con cláusula penal es divisible, sólo se incurre en la pena por aquel de los herederos del deudor que contraviniera a la obligación y sólo por la parte que le toca en la obligación principal, sin que haya acción contra los que la han cumplido.

Esta regla admite excepción, cuando habiéndose agregado la cláusula penal con el fin expreso de que la paga no pudiese verificarse por partes, un coheredero ha impedido el cumplimiento de la obligación en su totalidad.

En tal caso, puede exigirse de él toda la pena.

1374.- Si a la pena estuviere afecto hipotecariamente un inmueble, podrá perseguirse en él toda la pena, salvo el recurso de indemnización contra quien hubiere lugar.

SECCION VIII

DE LAS OBLIGACIONES DIVISIBLES E INDIVISIBLES (*)

(*) *Ver: artículo 1389 de esta norma.*

1375.- La obligación es *divisible* o *indivisible*, según que su objeto sea o no susceptible de división, bien material, bien intelectual. (*)

(*) *Ver: artículo 1384 de esta norma.*

1376.- Aunque la cosa o el hecho, objeto de la obligación, sea divisible por su naturaleza, vendrá a ser indivisible la obligación, si la relación bajo que los contrayentes han considerado dicho objeto impide que éste y por consiguiente la obligación, admita ni división ni ejecución parcial. (*)

(*) *Ver: artículo 1384 de esta norma.*

1377.- La solidaridad no da a la obligación el carácter de indivisible ni *viceversa*.

1º

De los efectos de la obligación divisible

1378.- La obligación que es susceptible de división debe ejecutarse entre deudor y acreedor como si fuese indivisible.

La divisibilidad sólo tiene aplicación, cuando son varios los acreedores o deudores por contrato o por sucesión.

1379.- Cuando en la obligación divisible son varios los acreedores o deudores por contrato, el crédito y la deuda se dividen de pleno derecho y por iguales partes entre todos los individuos enumerados conjuntamente, sea como acreedores o deudores de una misma cosa, a no ser que se disponga de otro modo en el título constitutivo de la obligación.

La insolvencia de uno de los deudores no grava a los otros. (Artículo 2127). (*)

(*) *Ver: artículo 1381 de esta norma.*

1380.- Cuando en la obligación divisible son varios los acreedores o deudores por título de sucesión, no pueden exigir la deuda ni están obligados a pagarla, sino por las partes que les corresponden, como representantes del acreedor o deudor. (*)

(*) *Ver: artículo 1381 de esta norma.*

1381.- El principio establecido en los dos artículos precedentes admite excepción, pero sólo con respecto a los codeudores o herederos del deudor:

1º.- Cuando la deuda es de especie determinada.

2º.- Cuando uno de los deudores o uno de los coherederos del deudor, tuviere a su cargo el pago de toda la deuda, en virtud del título de la obligación o por haberlo así ordenado el testador o determinándose en la partición de la herencia.

3º.- Cuando resulta, sea de la naturaleza de la obligación, sea de la cosa objeto de ella, sea del fin que se han propuesto las partes en el contrato, que la intención de los contrayentes ha sido que la deuda no pueda cubrirse parcialmente.

En el primer caso, el poseedor de la especie debida puede ser perseguido por el todo, salva su acción contra sus codeudores o coherederos. Con esta misma calidad, el encargado del pago en el segundo caso y en el tercero cualquiera de los codeudores o coherederos puede ser reconvenido por el todo de la obligación.

1382.- En caso que la deuda sea hipotecaria o prendaria, sus efectos se

reglarán por lo que se dispone en los Títulos correspondientes de este Libro Cuarto.

1383.- En el caso de una deuda alternativa a elección del acreedor de dos cosas, de las cuales una es indivisible, optando por ésta el acreedor, con conocimiento del deudor, el pago de la obligación quedará sujeto a las reglas del párrafo siguiente.

2°

De los efectos de la obligación indivisible

1384.- Cada uno de los que contrajeron conjuntamente una obligación indivisible (artículos 1375 y 1376) está obligado por el todo, aunque la obligación no se haya contraído solidariamente.

Lo mismo sucederá con respecto a los herederos de aquel que contrajo semejante obligación. (Artículo 1168).

1385.- Cualquiera de los herederos del acreedor puede exigir en su totalidad la ejecución de la deuda indivisible; pero no puede uno solo hacer remisión de la deuda ni recibir en lugar de la cosa, el precio de ella.

Sin embargo, si alguno de los herederos ha remitido la deuda o recibido el precio de la cosa indivisible, su coheredero no puede reclamarla, sin abonar la porción del que ha hecho la remisión o ha recibido el precio.

1386.- El heredero del deudor que es demandado por la totalidad de la obligación, puede pedir término para citar a sus coherederos, a no ser que sea de tal naturaleza la obligación, que sólo pueda ser cumplida por el demandado. En tal caso, sólo éste será condenado, dejándole a salvo la acción contra sus coherederos.

1387.- La prescripción interrumpida respecto de uno de los deudores de la obligación indivisible lo es igualmente respecto de los otros.

CAPITULO II

DE LAS OBLIGACIONES CON RELACION A LAS PERSONAS (*)

(*) *Ver: artículo 2102 de esta norma.*

1388.- En la obligación puede haber un solo deudor y un solo acreedor o más de un deudor o más de un acreedor. Si hubiere más de un deudor o más de un acreedor y una misma cosa fuere el objeto de la obligación, simultáneamente entre ellos, la obligación será *mancomunada*, que también se dice *conjunta*.

1389.- La obligación mancomunada puede ser *simplemente* tal o *solidaria*. No habiendo solidaridad, los efectos de la obligación mancomunada se reglarán como ya está dispuesto en la Sección VIII del Capítulo anterior, sobre las obligaciones divisibles e indivisibles.

SECCION UNICA

DE LAS OBLIGACIONES SOLIDARIAS

1º

Disposiciones generales

1390.- La solidaridad de las obligaciones puede ser *activa* o *pasiva*, según se considere respecto de los acreedores o con relación a los deudores.

La solidaridad activa o entre los acreedores de una misma cosa, es el derecho que cada uno tiene de reclamar el pago en su totalidad.

La solidaridad pasiva o entre los deudores, es la obligación impuesta a cada uno de ellos de pagar solo, por todos, la cosa que deben en común.

1391.- La solidaridad no se presume: es preciso que se declare inequívocamente en la convención o en el testamento.

Sólo cesa esta regla en los casos que tenga lugar de pleno derecho, en virtud de disposición de la ley. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Decreto N° 134/001 de fecha 24 de abril de 2001.*

1392.- Para que la obligación se tenga por solidaria, no es indispensable que se use de esta expresión; y bastará que las palabras de que se sirvan los contrayentes manifiesten de un modo inequívoco la voluntad de estipular en su favor la solidaridad o de someterse a ella; como si dijeren que renuncian al beneficio de división y excusión o que uno de los deudores se obliga por todos o cada uno por el todo.

1393.- La obligación no deja de ser solidaria, cuando debiéndose una sola y misma cosa, ella sea para alguno de los acreedores o para alguno de los deudores obligación pura y simple y para otro, obligación condicional o a plazo o pagadera en otro lugar.

1394.- Aunque uno de los acreedores o uno de los deudores fuese incapaz de adquirir el derecho o contraer la obligación, ésta no dejará de ser válida y solidaria para los otros.

1395.- Si falleciere alguno de los acreedores o deudores, con más de un heredero, ninguno de los coherederos tendrá derecho para exigir o recibir ni será obligado a pagar sino la cuota que le corresponda en el crédito o en la deuda, según su haber hereditario.

2º

De los efectos de la solidaridad activa

1396.- Los efectos de la solidaridad activa son:

1º.- Que cualquiera de los acreedores tiene el derecho de exigir y recibir el pago total del crédito.

2º.- Que el pago hecho a uno de los acreedores libra al deudor respecto de los otros.

3º.- Que cualquier acto que interrumpa la prescripción, respecto de uno de los acreedores, aprovecha a los otros.

Sin embargo, no produce el mismo efecto la suspensión de la prescripción en favor de uno de ellos.

4°.- Que el deudor puede pagar indistintamente a cualquiera de los acreedores, mientras no ha sido judicialmente demandado por alguno de ellos.

5°.- Que la remisión hecha por uno de los acreedores libra al deudor respecto de los otros, si éstos no le habían judicialmente demandado todavía.

1397.- El acreedor que hubiere cobrado el todo o parte de la deuda o que hubiere hecho quita o remisión de ella, responderá a los otros acreedores de la parte que a éstos corresponda, dividido el crédito entre ellos.

El crédito se dividirá entre los acreedores, según lo que hubieren pactado; y en su defecto, por partes iguales.

3°

De los efectos de la solidaridad pasiva

1398.- Los efectos de la solidaridad pasiva son:

1°.- Que el acreedor tiene el derecho de pedir la totalidad del crédito al deudor que eligiere, el cual está obligado a pagarlo por entero.

2°.- Que la demanda deducida contra uno de los deudores no impide al acreedor que demande a los otros.

3°.- Que la demanda deducida contra uno de los deudores, interrumpe la prescripción respecto de todos.

4°.- Que produce el mismo efecto el reconocimiento de la deuda, verificado por uno de los codeudores.

5°.- Que la demanda de intereses contra uno de los deudores, los hace correr respecto de todos.

6°.- Que el pago verificado por uno de los codeudores libra a todos respecto del acreedor.

7°.- Que si la cosa debida ha perecido por culpa de uno o más de los deudores o después de haber incurrido en mora, los otros no quedan exonerados de pagar el precio de la cosa; pero sólo aquéllos responderán de los daños y perjuicios.

Sin embargo, cuando se haya estipulado expresamente el resarcimiento de daños y perjuicios para el caso de inejecución o falta de cumplimiento, la responsabilidad será solidaria, salvo el recurso de los inculpables contra el moroso o culpable.

1399.- El deudor solidario, demandado por el acreedor, puede oponer todas las excepciones que le sean comunes con todos sus codeudores.

Puede oponer también las que le sean personales, pero no las que lo sean a los demás deudores.

1400.- El acreedor que consiente en la división de la deuda, respecto de uno de los deudores, conserva su acción solidaria contra los demás, con deducción de la parte correspondiente al deudor a quien ha exonerado de la solidaridad. (*)

(*) *Ver: artículo 1521 de esta norma.*

1401.- El acreedor que reciba la parte de uno de los deudores, aunque no reserve en el resguardo la solidaridad o sus derechos en general, no se entiende que renuncia a la solidaridad, sino en lo que toca a ese deudor.

No se considera que el acreedor exonera de la solidaridad al deudor, aun cuando reciba de él una suma igual a la parte que le corresponde, si no dice en el resguardo que la recibe *por su parte*.

Lo mismo sucede con la demanda deducida contra uno de los deudores *por su parte*, si éste no se ha conformado con la demanda o no ha intervenido sentencia definitiva.

1402.- El acreedor que recibe separadamente y sin reserva la parte de uno de los deudores en los intereses del crédito, aunque en el resguardo exprese que la recibe por la parte de éste, no pierde la solidaridad, sino relativamente a los intereses vencidos; pero no a los futuros ni al capital, a no ser que el pago separado se haya continuado por diez años.

1403.- Cuando uno de los deudores viene a ser heredero único del acreedor o cuando éste viene a ser heredero único de alguno de los deudores, la confusión extingue el crédito, sólo en la parte correspondiente al acreedor o deudor a quien se hereda.

1404.- La obligación contraída solidariamente respecto al acreedor se divide entre los deudores de la manera que ellos hayan establecido por pacto; y a falta de éste, por partes iguales.

El deudor solidario que pagase íntegra la deuda, sólo puede reclamar contra los otros codeudores por la parte que a cada uno corresponda; y si alguno resultare insolvente, la pérdida se repartirá proporcionalmente entre los otros codeudores y el que hizo el pago.

Sin embargo, en el caso que el acreedor hubiere exonerado de la solidaridad a uno de los deudores, sufrirá personalmente la parte proporcional con que ese deudor debía contribuir a la cuota del insolvente, sin que pueda repetirla contra los otros deudores. (Artículo 1539).

1405.- Si el negocio que ha dado lugar a la deuda solidaria no interesare sino a uno de los codeudores, responderá éste de toda la deuda a sus correos que no serán considerados con relación a él, sino como sus fiadores.

CAPITULO III

DE LAS OBLIGACIONES CON RESPECTO AL MODO DE CONTRAERSE

SECCION I

DE LAS OBLIGACIONES CONDICIONALES

1º

Disposiciones generales

1406.- La obligación es pura, cuando su cumplimiento no depende de condición alguna.

1407.- La obligación es condicional, cuando se contrae bajo condición.

La condición es el suceso futuro e incierto, del cual se hace depender la fuerza jurídica de una obligación.

Un hecho presente o pasado, pero desconocido de las partes, puede ser objeto de una condición en el sentido de quedar subordinada la obligación a la prueba de la existencia de ese hecho.

1408.- La condición de cosa físicamente imposible, contraria a las buenas costumbres o prohibida por las leyes, es nula e invalida la convención que de ella pende.

Se mirará también como imposible la condición que esté concebida en términos ininteligibles. (*)

(*) *Ver: artículo 1410 de esta norma.*

1409.- Son especialmente prohibidas las condiciones siguientes:

1º.- De mudar o no mudar de religión.

2º.- De no contraer absolutamente primero o ulterior matrimonio.

3º.- De abrazar un estado incompatible con el del matrimonio.

4º.- De casarse con determinada persona o con aprobación de un tercero o en cierto lugar o en cierto tiempo.

5º.- De no casarse con determinada persona o divorciarse. (Artículo 188).

6º.- De habitar siempre en lugar determinado o sujetar la elección de domicilio a voluntad de un tercero. (*)

(*) *Ver: artículo 1410 de esta norma.*

1410.- Las reglas de los dos artículos precedentes se aplican aun a las disposiciones testamentarias; sin perjuicio de lo establecido para el caso del artículo 952.

1411.- La condición de no hacer una cosa físicamente imposible no anula la obligación que con ella se contrae, sino que se tiene por no escrita.

1412.- La condición de no ejecutar un acto contrario a la ley o a las buenas costumbres, anula la obligación.

1413.- La obligación contraída bajo de una condición que haga depender absolutamente la fuerza de ella de la voluntad del deudor, es de ningún efecto; pero si la condición hiciere depender la obligación de un hecho que puede o no ejecutar la persona obligada, la obligación es válida.

1414.- Toda condición debe cumplirse de la manera en que verosímilmente han querido los contrayentes que lo fuese.

1415.- Aunque el cumplimiento de la condición dependa en todo o en parte de la voluntad de un tercero, debe cumplirse, para que sea eficaz la obligación.

1416.- El cumplimiento de la condición es indivisible, aunque el objeto de ella sea una cosa divisible.

Cumplida en parte la condición, no hace nacer en parte la obligación.

1417.- Cuando en la obligación se han puesto varias condiciones disyuntivamente, basta que una de ellas se cumpla para que la obligación sea eficaz; pero si las condiciones han sido puestas copulativamente, una sola que deje de cumplirse, la obligación queda sin efecto.

1418.- La obligación contraída bajo condición de verificarse algún suceso para día determinado, caduca, si llega éste sin realizarse aquél. Si no hay tiempo determinado para la realización del suceso, puede cumplirse la condición en cualquier tiempo.

1419.- Contraída la obligación bajo condición de que no se verifique algún suceso en tiempo determinado, queda cumplida si transcurre el tiempo sin verificarse. Se cumple igualmente, si antes del transcurso del tiempo se hace evidente que el suceso no puede realizarse.

Si no hay tiempo determinado, sólo se considera cumplida la condición cuando viene a hacerse evidente que el suceso no puede realizarse.

1420.- La condición se reputa cumplida, cuando ya sea el que la estipuló o aquel que se obligó bajo ella, es el que ha impedido su cumplimiento, a no ser que el obstáculo puesto al cumplimiento de la condición, sólo sea la consecuencia del ejercicio de un derecho.

1421.- La condición cumplida, en las obligaciones de dar, se retrotrae al día en que se contrajo la obligación y se considera ésta como contraída puramente desde el principio.

Si la condición no se realiza, se considera la convención como no celebrada.

1422.- Si alguno de los contrayentes fallece antes del cumplimiento de la condición, sus derechos y obligaciones pasan a sus herederos.

Exceptúase el caso en que la condición sea esencialmente personal o no pueda ser cumplida por los herederos.

La regla del presente artículo no se aplica a las disposiciones testamentarias ni a las donaciones entre vivos. (Artículo 954).

1423.- El acreedor puede, pendiente el cumplimiento de la condición, ejercer todos los actos conservatorios de su derecho.

2º

De la condición suspensiva

1424.- La condición se llama suspensiva si mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho.

Podrá repetirse lo que se hubiere pagado antes de cumplirse la condición suspensiva. (*)

(*) *Ver: artículo 1674 de esta norma.*

1425.- Cuando la obligación se ha contraído bajo condición suspensiva y la cosa cierta y determinada, objeto de la obligación, perece por culpa del deudor, queda éste obligado al precio y al resarcimiento de daños y perjuicios, en caso de realizarse la condición.

Si la cosa perece sin culpa del obligado, la obligación se extingue.

Si la cosa se ha deteriorado sin culpa del obligado o si ha tenido aumento, esos deterioros o aumentos son de cuenta del acreedor.

Si la cosa se ha deteriorado por culpa del deudor, puede optar el acreedor entre resolver la obligación o exigir la cosa en el estado en que se encuentra, con los daños y perjuicios en uno y otro caso. (*)

(*) *Ver: artículos 1428 y 1682 de esta norma.*

1426.- Con relación a terceros poseedores, el efecto retroactivo de la condición suspensiva cumplida, se reglará por lo dispuesto en el párrafo siguiente.

De la condición resolutoria

1427.- La condición se llama resolutoria, cuando por su cumplimiento se extingue un derecho. (*)

(*) *Ver: artículo 1674 de esta norma.*

1428.- La condición resolutoria no suspende la ejecución de la obligación; obliga solamente al acreedor a restituir lo que ha recibido, en caso de verificarse el suceso previsto en la condición.

Los frutos se compensan con los intereses del precio.

Para determinar a quién pertenecen la pérdida, aumentos o deterioros que sobrevienen, pendiente la condición, se atiende a las reglas establecidas en el artículo 1425. (*)

(*) *Ver: artículo 1682 de esta norma.*

1429.- En el caso que la condición resolutoria hubiese sido puesta exclusivamente en favor del acreedor, podrá éste renunciarla; pero será obligado a declarar su determinación, si el deudor lo exigiere.

1430.- Sea la cosa mueble o inmueble, el cumplimiento de la condición no podrá hacer que se resuelvan los derechos conferidos a terceros poseedores de buena fe.

En este caso, a salvo queda al acreedor el derecho de demandar a la persona obligada por el pago de lo equivalente y la indemnización de daños y perjuicios. (*)

(*) *Ver: artículos 1734, 1739, 1747, 1752 y 2329 de esta norma.*

1431.- La condición resolutoria se entiende implícitamente comprendida en todos los contratos bilaterales o sinalagmáticos, para el caso en que una de las partes no cumpla su compromiso.

En tal caso el contrato no se resuelve *ipso jure* como cuando se ha pactado la condición resolutoria. La parte a quien se ha faltado puede optar

entre obligar a la otra a la ejecución de la convención, cuando es posible o pedir la resolución con daños y perjuicios.

La resolución debe reclamarse judicialmente; y según las circunstancias, pueden los Tribunales conceder un plazo al demandado. (Artículo 1740). (*)

(*) *Ver: artículo 1731 de esta norma.*

1432.- Lo dispuesto en el Capítulo VII, Título IV del Libro Tercero sobre las disposiciones testamentarias, es aplicable a las convenciones en lo que no pugne con las reglas de la presente Sección.

1432-1.- En el caso de donaciones onerosas o de disposiciones de última voluntad, que impongan al Estado o a persona pública no estatal un plazo, modo o condición, se estará a lo que dispone la ley especial.

SECCION II

DE LAS OBLIGACIONES A PLAZO

1433.- La obligación es a plazo, cuando el ejercicio del derecho que a ella corresponde está subordinado a un plazo suspensivo o resolutorio. (*)

(*) *Ver: artículo 1674 de esta norma.*

1434.- El plazo suspensivo o resolutorio puede ser cierto o incierto.

Será cierto, cuando fuere fijado para terminar en designado año, mes o día o cuando fuere comenzado desde la fecha de la obligación o de otra fecha cierta.

Incierto será, cuando fuere fijado con relación a un hecho futuro necesario, cuya realización tendrá indudablemente lugar en una época más o menos remota, que es imposible determinar de antemano.

1435.- Cualesquiera que fuesen las expresiones empleadas en la obligación, se entenderá haber plazo y no condición, siempre que el hecho fuese necesario, aunque sea incierto el día de su realización; y se entenderá haber condición y no plazo, cuando el hecho pudiese o no realizarse.

1436.- El plazo se presume siempre estipulado en favor del deudor y del acreedor, a menos que lo contrario resulte de la convención o de las circunstancias especiales del caso.

1437.- El plazo, mientras subsiste, impide la compensación de la deuda.

1438.- Lo que se debe a plazo, fuera de los casos de quiebra o notoria insolvencia, no puede exigirse antes de su vencimiento; pero lo que el deudor, conociendo el plazo, pagare anticipadamente, no lo podrá repetir.

En las obligaciones a plazo los riesgos o peligros de la cosa son de cuenta del acreedor. (Artículo 1335).

1439.- En el plazo nunca se cuenta el día de la fecha; de manera que una obligación a diez días, pactada el primero de enero, no vence el diez, sino el once.

Siendo feriado el día del vencimiento, la obligación será exigible el día inmediato posterior que no fuere feriado.

1440.- La obligación en que por su naturaleza no fuere esencial la designación del plazo o que no tuviera plazo cierto estipulado por las partes o señalado en este Código, será exigible diez días después de la fecha. (*)

(*) *Ver: artículo 2202 de esta norma.*

CAPITULO IV

DE LAS OBLIGACIONES CON RELACION A SUS EFECTOS

SECCION UNICA

DE LAS OBLIGACIONES CIVILES Y DE LAS MERAMENTE NATURALES

1441.- Las obligaciones son civiles o meramente naturales.

Civiles son aquellas que dan derecho para exigir en juicio el cumplimiento.

Naturales las que, procediendo de la sola equidad, no confieren acción para exigir su cumplimiento; pero que cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas.

1442.- Son obligaciones naturales:

1º.- Las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes; como los menores púberes no habilitados de edad.

2º.- Las que procedan de actos o instrumentos nulos por falta de alguna solemnidad que la ley exige para su validez.

3º.- Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción.

4º.- Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba o cuando el pleito se ha perdido por error o malicia del Juez.

5º.- Las que derivan de una convención que reúne las condiciones generales requeridas en materia de contratos; pero a las cuales la ley por razones de utilidad general, les ha denegado toda acción, como las deudas de juego. (Artículo 2118 número 5º).

1443.- La sentencia que rechaza la demanda intentada contra el naturalmente obligado, no extingue la obligación natural.

1444.- La ejecución parcial de una obligación natural no le da el carácter de obligación civil ni el acreedor puede reclamar el pago de lo restante de la obligación.

1445.- El efecto de las obligaciones naturales es que, cuando el pago de ellas se ha hecho voluntariamente por el que tenía capacidad para hacerlo, no puede reclamar lo pagado. (Artículo 2176).

1446.- Las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales constituidas por terceros para seguridad de las obligaciones naturales, valen y puede pedirse el cumplimiento de esas obligaciones accesorias. (Artículos 1365 y 2105).

TITULO III**DE LOS MODOS DE EXTINGUIRSE LAS OBLIGACIONES**

1447.- Los modos generales de extinguirse las obligaciones son:

1°.- La paga.

2°.- La compensación.

3°.- La remisión.

4°.- La novación.

5°.- La confusión.

6°.- La imposibilidad del pago.

7°.- La anulación o declaración de nulidad.

8°.- La excepción que resulta de la prescripción con arreglo a lo dispuesto en el Título VII del Libro Tercero. (Artículo 1188).

9°.- El efecto de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo resolutorio explicados ya en el Título precedente.

CAPITULO I**DE LA PAGA EN GENERAL****SECCION I****DE LA PAGA**

1448.- La paga es el cumplimiento por parte del deudor, de la dación o hecho que fue objeto de la obligación.

1449.- Cuando por el pago debe transferirse la propiedad de la cosa, es preciso para su validez que el que lo hace sea propietario de ella y tenga capacidad de enajenarla.

Sin embargo, si el pago hecho por el que no sea propietario de la cosa o no tenga capacidad de enajenarla, consistiere en dinero u otra cosa fungible, no habrá repetición contra el acreedor que lo haya consumido de buena fe.

1450.- La paga puede hacerse no sólo por el mismo deudor, sino por cualquier interesado en ella, como el correo de deber o el fiador.

La paga puede también hacerse por un tercero, no interesado, que obre consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor.

Puede hacerse igualmente por un tercero, ignorándolo el deudor.

En este caso, el tercero tendrá derecho para repetir contra el deudor lo que hubiere pagado; si pagó contra la voluntad del deudor, no podrá repetir contra éste.

1451.- El tercero que paga, ignorándolo el deudor, no se entenderá subrogado por la ley en el lugar y derechos del acreedor ni podrá compeler a éste a que lo subrogue. (Artículos 1470 y 1526 número 3°).

1452.- La obligación de hacer no puede ser cumplida por un tercero, contra la voluntad del acreedor, cuando éste tiene interés en que sea ejecutada por el mismo deudor.

1453.- Puede hacerse la paga no sólo al acreedor (bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito, aun a título singular) sino también a la persona que lo represente en virtud de un mandato emanado del acreedor mismo o de autorización de la justicia o de la ley.

La paga hecha a persona incompetente es válida, si el acreedor la ratifica o se aprovecha de ella.

1454.- El poder conferido por el acreedor a una persona para demandar en juicio al deudor, no le faculta por sí solo para recibir el pago de la deuda.

1455.- La paga hecha de buena fe al que estaba en posesión del crédito es válida, aunque el poseedor sufra después evicción; como, por ejemplo, si el heredero tenido por sucesor legítimo y sin contradicción fuese después vencido en juicio.

Se considera en posesión al que presenta el título del crédito, si éste es de un pagaré al portador; salvo el caso de hurto o graves sospechas de no pertenecer al portador.

1456.- El pago hecho a una persona incapaz de administrar sus bienes, no es válido sino en cuanto se pruebe que la suma pagada se ha empleado en provecho

del acreedor y en cuanto este provecho se justifique con arreglo a lo dispuesto sobre la **anulación** en el Capítulo VII de este Título. (Artículo 402).

1457.- La paga hecha por el deudor, a pesar de un embargo o retención judicial, no es válida respecto de los acreedores ejecutantes o demandantes. Pueden éstos, según la naturaleza de sus derechos, obligarle a pagar de nuevo, salvo en este caso su recurso contra el acreedor a quien había pagado.

1458.- La paga, para ser legítima, debe hacerse de la misma cosa debida y no de otra ni su valor, a no ser de consentimiento del acreedor. De otro modo no está obligado a recibirla.

Sin embargo, si el deudor no pudiese hacer la entrega en la misma cosa o de la manera estipulada, debe cumplirla en otra equivalente a arbitrio del Juez, pagando los daños y perjuicios que por esa razón puedan irrogarse al acreedor.

Toda obligación contraída a pagar en moneda corriente o sin expresar su especie, se entenderá que es en moneda nacional.

1459.- El deudor no puede obligar al acreedor a recibir por partes el pago de una deuda, aunque sea divisible.

Ni aun basta ofrecer todo el capital, si devenga intereses. Estos son un accesorio que el deudor debe pagar con el capital, sin lo que puede el acreedor negarse a recibirlo. (*)

(*) *Ver: artículo 1460 de esta norma.*

1460.- El artículo precedente no es aplicable al caso en que se trate de diversas deudas, aunque sean todas exigibles.

Cada año de alquileres, arrendamientos y aun de réditos, cuando no se trata de reembolsar el capital, se considera como deuda diversa.

1461.- Si la deuda fuese en parte líquida y en parte ilíquida, podrá exigirse por el acreedor y hacerse por el deudor, el pago de la parte líquida, aun antes de que pueda tener lugar el pago de la que no lo sea.

1462.- Cuando el pago deba hacerse en prestaciones parciales y en períodos

determinados, el recibo o carta de pago correspondiente al último período hace presumir el pago de los anteriores, salvo la prueba en contrario.

Lo cual se entenderá cuando el pago haya debido efectuarse entre los mismos acreedor y deudor.

1463.- El deudor de especie determinada cumple con darla al plazo estipulado, en el estado en que se halle, con tal que no haya incurrido en mora ni el deterioro provenga de su hecho o culpa ni de las personas de que responde.

1464.- Si la deuda es de cosa determinada sólo en cuanto al género, se observará lo dispuesto en la Sección VI, Capítulo I del Título anterior.

1465.- La paga debe ejecutarse en el lugar y tiempo señalado en la convención. Si no se hubiese designado lugar, la paga debe hacerse, tratándose de cosa cierta y determinada, en el lugar en que estaba al tiempo de la obligación la cosa que le sirve de objeto.

Fuera de estos dos casos, el pago debe hacerse en el domicilio que tenga el deudor al tiempo del cumplimiento de la obligación. (Artículo 1728).

1466.- La paga, desde el momento en que se verifica, extingue la obligación principal y las accesorias.

1467.- Los gastos que ocasionare la paga son de cuenta del deudor; pero no se comprenden en esta disposición los judiciales que se hubieren causado, respecto de los cuales el Juez decidirá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 688 y a las leyes del procedimiento.

Si contentándose el deudor con un documento simple de resguardo, el acreedor no supiere firmar, serán de cuenta de éste los gastos para el otorgamiento del resguardo correspondiente.

SECCION II

DE LA SUBROGACION

1468.- La subrogación es una ficción jurídica por la cual una obligación

extinguida por el pago hecho por un tercero, se juzga que continúa a favor de éste, como si formase una misma persona con el acreedor.

1469.- La subrogación tiene lugar convencionalmente o por disposición de la ley.

1470.- La subrogación convencional tiene lugar, independientemente de la voluntad del deudor, cuando el acreedor recibe el pago de manos de un tercero, no interesado (artículo 1451) y le subroga en todos sus derechos, acciones y garantías contra el deudor. Esta subrogación debe verificarse al mismo tiempo que la paga y debe expresarse claramente que se ceden los derechos ya se use o no de la palabra subrogación.

1471.- La subrogación convencional puede hacerse también por el deudor, sin consentimiento del acreedor, cuando toma prestada una suma para pagar su deuda y subroga al prestamista en los derechos del acreedor.

Para que la subrogación sea válida, se requiere que los documentos de empréstito y de resguardo se hagan por escritura pública y en el documento de empréstito se declare que la suma ha sido prestada para verificar el pago y en el resguardo que el pago se ha efectuado con el dinero del nuevo acreedor.

1472.- La subrogación es por disposición de la ley o se verifica *ipso jure*:

1°.- En favor del que siendo acreedor, paga a otro acreedor de preferencia en razón de su privilegio o hipoteca.

2°.- En favor del que estando obligado con otros o por otros al pago de la deuda, tenía interés en cubrirla.

3°.- En favor del que habiendo adquirido un inmueble es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado.

4°.- En favor del heredero beneficiario que paga con su propio dinero la deuda de la herencia.

5°.- En favor del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor.

1473.- La subrogación establecida por los artículos precedentes traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor, así contra el deudor principal y codeudores, como contra los fiadores, con las modificaciones siguientes:

1º.- El subrogado no puede ejercer los derechos y acciones del acreedor, sino hasta la concurrencia de la suma que él ha desembolsado realmente para la liberación del deudor.

2º.- El efecto de la subrogación convencional puede ser limitado a ciertos derechos y acciones por el acreedor o por el deudor que la hace.

3º.- La subrogación legal, establecida en provecho de los que han pagado una deuda a la cual estaban obligados con otros, no los autoriza a ejercer los derechos y acciones del acreedor contra los coobligados, sino hasta la concurrencia de la parte por la cual cada uno de estos últimos era obligado a contribuir para el pago de la deuda. (*)

(*) *Ver: artículo 1757 de esta norma.*

1474.- Si el crédito tiene privilegio u otra garantía particular y el acreedor ha sido pagado sólo en parte, podrá ejercer sus derechos por el resto con preferencia al subrogado que hizo el pago parcial del crédito.

SECCION III

DE LA IMPUTACION DE LA PAGA (*)

(*) *Ver: artículo 2314 de esta norma.*

1475.- La imputación es convencional, cuando se estipula por el deudor en el acto del pago o se indica por el acreedor en el recibo que diese el deudor.

Es legal, cuando se hace por la ley, a falta de la que el deudor y acreedor habrían podido hacer.

1476.- Si varias deudas de una persona en favor de un solo acreedor tuvieren un objeto semejante, el deudor goza de la facultad de declarar al tiempo de hacer el pago, por cuál de ellas quiere que se entienda hecho.

La elección del deudor no podrá ser sobre deuda ilíquida o que no sea de plazo vencido.

1477.- El que debe un capital con intereses no puede, sin consentimiento del acreedor, imputar al capital la paga que verifica.

La paga por cuenta del capital e intereses se imputa a éstos en primer lugar.

Sin embargo, si declarando el deudor que pagaba por cuenta del capital, consintiese el acreedor en recibir bajo esa calidad, no podrá después oponerse a la imputación.

1478.- El pago hecho por error de una deuda que no exista, se imputa *ipso jure* sobre la deuda que existe. Así, el pago verificado por intereses que no son debidos, debe imputarse al capital.

1479.- Cuando el que tiene diversas deudas ha aceptado un recibo en que su acreedor imputa la paga a alguna de ellas especialmente, no puede ya pedir se impute en cuenta de otra, a no ser que haya mediado dolo o, al menos, sorpresa por parte del acreedor.

1480.- No expresándose en el recibo a cuál deuda se haya hecho la imputación, debe imputarse entre las de plazo vencido, a la que por entonces tenía el deudor más interés en pagar, sea porque devengara réditos, porque se hubiese señalado alguna pena, por mediar prenda o hipoteca o por otra razón semejante. Si las demás deudas no son de plazo vencido, se aplicará la paga a la vencida, aunque menos gravosa. Si todas son de igual naturaleza, la imputación se hace a la más antigua y siendo de una misma fecha, a prorrata. (*)

(*) *Ver: artículo 1507 de esta norma.*

SECCION IV

DE LA OBLACION Y CONSIGNACION

1481.- Cuando el acreedor rehusa recibir la suma debida, puede el deudor hacer oblación de la deuda y caso de negarse el acreedor a recibirla, consignar la suma oblada u ofrecida. La consignación, precedida de la oblación, libra al deudor, surte a su respecto efectos de paga y la suma así consignada perece para el acreedor. (*)

(*) *Ver: artículo 1488 de esta norma.*

1482.- Para que la oblación sea válida se requiere:

1°.- Que se haga al acreedor que tenga capacidad de recibir, o al que pueda verificarlo a su nombre.

2°.- Que se haga por persona capaz de pagar.

3°.- Que sea de la totalidad de la suma exigible, de los intereses vencidos, de los gastos liquidados y de una cantidad cualquiera para los ilíquidos, con calidad de complementarla oportunamente.

4°.- Que el plazo haya vencido, si se ha estipulado en favor del acreedor o del acreedor y deudor.

5°.- Que se haya realizado la condición, si la deuda es condicional.

6°.- Que la oblación se verifique en el lugar señalado para el pago y si no lo hubiere por la convención, en el domicilio del acreedor o en el lugar del contrato.

7°.- Que la oblación se haga por medio de Juez de Paz o Alguacil.

1483.- No se requiere para la validez de la consignación que haya sido autorizada por Juez competente; basta:

1°.- Que haya sido precedida de intimación hecha al acreedor con especificación del día, hora y lugar en que se consignará o depositará el dinero.

2°.- Que el deudor se haya desprendido de la suma oblada, entregándola en el lugar señalado por la ley para recibir las consignaciones, con los intereses hasta el día de la oblación legítima. En caso de no haber lugar señalado para recibir las consignaciones, se hará en poder de un vecino de probidad y arraigo, designado por el Juez de Paz del domicilio del acreedor.

3°.- Que se haya levantado un acta ante el Juez de Paz respectivo, de la naturaleza de las especies obladas, de la negativa del acreedor a recibir las o de su no comparecencia y en fin, de la consignación o depósito.

4°.- Que en caso de no comparecencia del acreedor, se le haga saber el acta, intimándole que se haga cargo de la suma consignada.

El Juez de Paz dará un testimonio de lo actuado al deudor, si lo pidiere. (*)

(*) *Ver: artículo 1484 de esta norma.*

1484.- Podrá el deudor, acompañando el testimonio de que habla el inciso final del artículo anterior, pedir al Juez competente que declare bien hechas la oblación y consignación y mande cancelar la deuda.

Obteniéndose por el deudor esta declaración, todos los gastos causados serán de cuenta del acreedor. (*)

(*) *Ver: artículo 1485 de esta norma.*

1485.- Mientras el acreedor no hubiere aceptado la consignación o no hubiere recaído la declaración judicial de que se trata en el artículo precedente, podrá el deudor retirar la cantidad consignada y en este caso queda subsistente la obligación, como si no se hubiese hecho la oblación y consignación.

1486.- Después de aceptada la consignación o después de hecha la declaración judicial, no podrá retirarse la cantidad consignada sin el consentimiento del acreedor. (*)

(*) *Ver: artículo 1487 de esta norma.*

1487.- Si en el caso del artículo anterior, se retirase con consentimiento del acreedor la cantidad consignada, perderá el acreedor toda preferencia por razón de privilegio o hipoteca que tuviese y los codeudores y fiadores quedarán libres.

Si por voluntad de las partes se renovasen las hipotecas precedentes, se inscribirán de nuevo y su fecha será la del día de la nueva inscripción.

1488.- Si la cosa debida es especie cierta y se encuentra en el lugar en que debe ser entregada, se requiere que el deudor haga intimar por el Juez competente al acreedor para que la reciba, notificándose a su persona o a su domicilio real o convencional; y desde entonces la intimación surtirá todos los efectos expresados en el artículo 1481, con tal que llegue a establecerse que ha sido legítima y regularmente hecha, sea por la aceptación del acreedor o por la declaración del Juez.

Si hecha la intimación, el acreedor no recibe la cosa debida, puede ser depositada en otra parte con autorización judicial.

Si la cosa se hallare en otro lugar que aquel en que debe ser entregada, es a cargo del deudor transportarla a donde debe ser entregada y hacer entonces la intimación al acreedor para que la reciba. (*)

(*) *Ver: artículo 1489 de esta norma.*

1489.- Si la cosa debida no es determinada sino por su género, el deudor debe, en la intimación que haga según el artículo anterior, designar precisa e individualmente el objeto que ofrece.

Si la elección perteneciere al acreedor, deberá el deudor hacerle intimar judicialmente que elija; y rehusando elegir aquél, podrá el deudor ser autorizado por el Juez para verificarlo él mismo.

Hecha la elección, el deudor debe hacer la intimación al acreedor para que reciba la cosa, como si se tratase de cuerpo cierto.

SECCION V

DE LA PAGA POR ENTREGA DE BIENES

1490.- Tiene lugar el pago por entrega de bienes, cuando el acreedor recibe voluntariamente por pago de la deuda alguna cosa que no sea dinero en sustitución de lo que se le debía entregar o del hecho que se le debía prestar. (Artículo 1663).

1491.- Si la cosa recibida por el acreedor fuese un crédito a favor del deudor, se juzgará por las reglas de la *cesión de derechos*.

Si se determinare el precio por el cual el acreedor recibe la cosa en pago, sus relaciones con el deudor serán juzgadas por las reglas del contrato de compraventa. (*)

(*) *Ver: artículo 1663 de esta norma.*

1492.- Los representantes legales o voluntarios del acreedor no están autorizados para aceptar pago por entrega de bienes. (*)

(*) *Ver: artículos 1528 y 1663 de esta norma.*

1493.- Si el acreedor fuese vencido en juicio sobre la propiedad de la cosa dada en pago, tendrá derecho para ser indemnizado, como comprador, pero no podrá hacer revivir la obligación primitiva. (*)

(*) *Ver: artículo 1663 de esta norma.*

SECCION VI

DE LA PAGA CON BENEFICIO DE COMPETENCIA

1494.- El *beneficio de competencia* es el que se concede a ciertos deudores, para no ser obligados a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoles en consecuencia lo indispensable para su modesta subsistencia, según su clase y circunstancias y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna. (*)

(*) *Ver: artículo 2364 nral. 4º de esta norma.*

1495.- El acreedor es obligado a conceder este beneficio:

1º.- A sus descendientes o ascendientes.

2º.- A su cónyuge no estando separado de cuerpos por su culpa.

3º.- A sus hermanos.

4º.- A sus consocios; pero sólo en las acciones recíprocas que nazcan del contrato de sociedad.

5º.- Al donante, pero sólo en cuanto se trate de hacerle cumplir la donación prometida.

6º.- Al deudor de buena fe que hizo cesión de bienes y es perseguido en los que después ha adquirido, para el pago completo de la deuda anterior a la cesión; pero sólo le deben este beneficio los acreedores a cuyo favor se hizo. (*)

(*) *Ver: artículos 1630 y 1917 de esta norma.*

1496.- No se puede pedir alimentos y beneficio de competencia a un mismo tiempo. El deudor elegirá.

CAPITULO II

DE LA COMPENSACION

1497.- Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una *compensación* que extingue ambas deudas del modo y en los casos que van a expresarse.

1498.- La compensación se verifica *ipso jure* por el solo ministerio de la ley, aun sin noticia de los deudores; las deudas se extinguen recíprocamente en el instante en que existen a la vez, hasta la suma concurrente de sus cantidades respectivas.

1499.- Para que la compensación de dos deudas se verifique *ipso jure*, se requiere:

1°.- Que el objeto de ambas sea del mismo género.

2°.- Que ambas sean líquidas.

3°.- Que sean actualmente exigibles.

4°.- Que sean personales al que opone y a aquel a quien se opone la compensación.

1500.- Sólo procede la compensación entre deudas de dinero o de cosas fungibles o de las que, no siéndolo, son igualmente indeterminadas, v.gr., un caballo por un caballo.

Aun en las cosas susceptibles de compensación, ambas deudas deben ser de un mismo género que sea de igual calidad y bondad. (*)

(*) *Ver: artículo 2226 de esta norma.*

1501.- La incapacidad personal de las partes no es un obstáculo para la compensación.

Tampoco lo es la diversidad de las causas en que se funden las dos deudas.

La compensación puede renunciarse, como cualquier otra ventaja.

1502.- El crédito se tiene por líquido si se justifica dentro de diez días y por exigible cuando ha vencido el plazo y cumplídose la condición.

1503.- El fiador, no sólo puede compensar la obligación que le nace de la fianza con lo que el acreedor le deba, sino que también puede invocar y probar lo que el acreedor deba al deudor principal, para causar la compensación o el pago de la obligación. Pero el deudor principal no puede invocar como compensable su obligación con la deuda del acreedor al fiador. (Artículos 1241 y 2125).

1504.- El deudor solidario no puede invocar la compensación del crédito del acreedor con la deuda de otro de los codeudores solidarios.

1505.- El deudor que ha aceptado pura y simplemente la cesión que haya hecho el acreedor de sus derechos a otra persona, no puede oponer a ésta la compensación que habría podido, antes de la aceptación, oponer al cedente.

La cesión que no ha sido aceptada por el deudor, pero que se le ha notificado, sólo impide la compensación de los créditos posteriores a la notificación.

La disposición del primer inciso se entenderá salvo los derechos adquiridos por terceros, con arreglo al artículo 1514. (*)

(*) *Ver: artículo 1760 de esta norma.*

1506.- Cuando ambas deudas no sean pagaderas en un mismo lugar, ninguna de las dos partes puede invocar la compensación, a menos que una y otra deuda sean de dinero y el que invoca la compensación tome a su cargo los costos de la remesa.

1507.- Cuando existen varias deudas compensables debidas por las mismas personas, se siguen para la compensación las reglas establecidas en el artículo 1480 para la imputación de la paga.

1508.- No son compensables las obligaciones de ejecutar algún hecho.

1509.- El principio de la compensación no es aplicable a los casos de demandarse la restitución de una cosa que fue objeto de despojo, depósito o comodato. (Artículo 2226).

La ley niega la compensación en dichos casos, aun cuando por haberse perdido la cosa, se tratase de pagarla en dinero.

1510.- No puede oponerse compensación a la demanda de alimentos ni a la indemnización por algún acto de violencia o fraude. (Artículo 125).

1511.- Las deudas y créditos entre particulares y el Fisco son compensables, menos en los casos siguientes:

1º.- Si las deudas de los particulares provinieren de remate de cosas del Estado o de rentas fiscales o si provinieren de contribuciones directas o indirectas o de alcance de otros pagos que deben hacerse en las aduanas, como derechos de almacenaje, depósito, etc.

2º.- En el caso que las deudas de los particulares se hallen comprendidas en la consolidación de los créditos contra el Estado que hubiese ordenado la ley.

1512.- La compensación no tiene lugar en perjuicio de derechos ya adquiridos por un tercero. Así, el que siendo deudor ha venido a ser acreedor, después del embargo trabado en el crédito por un tercero, no puede en perjuicio del ejecutante oponer la compensación.

1513.- Verificada la compensación, se extinguen también las fianzas, prendas y demás garantías y cesa el curso de los intereses, si alguna de las deudas los devengase. (*)

(*) *Ver: artículo 2142 de esta norma.*

1514.- Por el pago que una de las partes hiciere de la deuda compensada ipso jure, no revivirán en perjuicio de tercero las garantías de que gozaba para el cobro de su crédito.

Exceptúase el caso de que una de las partes hiciere el pago, ignorando por justa causa el crédito que podía oponer a la deuda.

Lo dispuesto por este artículo se aplica al que, en vez de pagar la deuda compensada, hubiese aceptado la cesión de ella pura y simplemente.

CAPITULO III

DE LA REMISION

1515.- La remisión de la deuda es la renuncia del acreedor a los derechos que le pertenecen contra el deudor.

1516.- Todo el que tiene facultad de contratar puede hacer remisión de lo que se le adeuda.

1517.- No hay forma especial para hacer la remisión, aunque la deuda conste de un documento público.

La remisión puede ser expresa o tácita. Expresa es, cuando el acreedor

declara que perdona la deuda o pacta con el deudor que nunca la reclamará. Tácita, cuando ejecuta algún acto que haga presumir la intención de remitir la deuda.

1518.- Los hechos que constituyen remisión tácita son:

1º.- La entrega del documento simple o no protocolizado que sirve de título, hecha al deudor por el propio acreedor.

2º.- La rotura o cancelación del referido documento por el acreedor.

Sin embargo, si el acreedor probare que entregó el documento de crédito en pura confianza y sin intención de remitir la deuda o que no fue entregado por él mismo o por otro debidamente autorizado o que lo rompió inadvertidamente, no se entiende que ha habido remisión.

1519.- La entrega del testimonio de un documento protocolizado hace presumir la remisión de la deuda; pero si el acreedor la negare, pertenece al deudor probar que la entrega ha sido voluntaria.

1520.- La entrega del documento simple o del testimonio del título a uno de los deudores solidarios, produce el mismo efecto en favor de sus codeudores.

1521.- La remisión total del crédito hecha en favor de uno de los codeudores solidarios, libra a todos los demás, a no ser que el acreedor se haya reservado expresamente sus derechos contra éstos.

Verificada la remisión con esa reserva, es aplicable lo dispuesto por el artículo 1400. (*)

(*) *Ver: artículo 1523 de esta norma.*

1522.- La devolución voluntaria que hace el acreedor de la cosa recibida en prenda, importa la remisión del derecho de prenda, pero no de la deuda.

1523.- La remisión hecha al deudor principal, libra a los fiadores.

La concedida al fiador, no libra al deudor principal.

La concedida a uno de los fiadores no libra a los otros, sino en el caso del artículo 1521 y conforme a lo que allí se dispone. (*)

(*) *Ver: artículo 2142 de esta norma.*

1524.- Lo que el acreedor ha recibido de un fiador para libertarle de la fianza, debe imputarse en la deuda y aprovecha al deudor principal y a los otros fiadores. (*)

(*) *Ver: artículo 2126 de esta norma.*

CAPITULO IV

DE LA NOVACION

1525.- La novación es la sustitución de una nueva obligación a la antigua que queda extinguida.

1526.- La novación se verifica de tres maneras:

1º.- Entre deudor y acreedor, sin intervención de nueva persona, sustituyéndose nueva obligación en vez de la anterior.

2º.- Sustitúyese en virtud de otro contrato, nuevo acreedor al antiguo, respecto del cual queda exonerado el deudor.

3º.- Sustitúyese nuevo deudor al antiguo que queda exonerado por el acreedor.

Esta tercera especie de novación puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor (artículo 1451). Cuando se efectúa con su consentimiento, el segundo deudor se llama delegado del primero.

1527.- Si la primera obligación había dejado de existir cuando se contrajo la segunda, no se verifica novación. La segunda obligación quedará sin efecto, a no ser que tuviera causa propia.

1528.- La novación sólo puede verificarse entre personas capaces de contratar y de renunciar el derecho introducido a su favor.

Es aplicable a la novación lo dispuesto por el artículo 1492.

1529.- Cuando una de las dos obligaciones, la antigua o la nueva, pende de una condición suspensiva y la otra es pura, no habrá novación mientras esté pendiente la condición o si ésta llegase a faltar o si antes de su cumplimiento se extinguiese la obligación antigua.

Pero si las partes, al celebrar el segundo contrato, convienen en que el primero quede desde luego abolido sin aguardar el cumplimiento de la condición, se estará a la voluntad de las partes.

1530.- La novación no se presume: es necesario que se declare la voluntad de verificarla o que resulte claramente del acto por la incompatibilidad de las obligaciones o en otra manera inequívoca, aunque no se use de la palabra novación.

1531.- La delegación por la que un deudor da a otro que se obligue hacia el acreedor, no produce novación, a no ser que el acreedor haya declarado expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo.

De otro modo, se entenderá que el tercero es solamente diputado para hacer el pago o que dicho tercero se obliga con él solidaria o subsidiariamente, según parezca deducirse del tenor o espíritu del acto.

1532.- El acreedor que ha exonerado expresamente al deudor primitivo pierde toda acción contra él, aunque el delegado llegue a estado de insolvencia, a no ser que el documento contenga reserva expresa de este caso o que la insolvencia sea anterior y pública o a lo menos conocida del deudor primitivo.

1533.- La nulidad relativa del nuevo título, la pérdida o la evicción de la cosa dada en pago, no hacen revivir los derechos que resultaban de la obligación extinguida por la novación.

1534.- De cualquier modo que se haga la novación, quedan por ella extinguidos los intereses de la primera obligación, si no se expresa lo contrario.

1535.- Sea que la novación se opere por la sustitución de un nuevo deudor o sin ella, los privilegios de la primera deuda se extinguen por la novación.

1536.- Las prendas o hipotecas de la primera deuda no pasan a la deuda posterior, aunque la novación se opere dejando el mismo deudor, a menos que éste y el acreedor convengan expresamente en la reserva.

Pero esta reserva no valdrá, si las cosas empeñadas o hipotecadas pertenecieren a terceros que no hayan accedido a la segunda obligación.

Tampoco valdrá la reserva en lo que la segunda obligación tuviere de más

que la primera. Si, por ejemplo, la primera deuda no producía intereses y la segunda los produjere, la hipoteca de la primera no se extenderá a los intereses.

1537.- Si la novación se opera sustituyendo un nuevo deudor, la reserva no puede tener efecto sobre los bienes del nuevo deudor, ni aun con su consentimiento.

Cuando se opera la novación entre el acreedor y uno de sus deudores solidarios, la reserva no puede tener efecto sino relativamente a éste. Las prendas e hipotecas constituidas por los otros codeudores solidarios se extinguen, a pesar de toda estipulación contraria; salvo que éstos accedan expresamente a la segunda obligación.

1538.- En los casos y cuantías en que no puede tener efecto la reserva, podrán, sin embargo, renovarse las prendas e hipotecas con las mismas formalidades que si se constituyesen por primera vez. Su fecha será entonces la de la renovación.

1539.- La novación hecha por el acreedor con alguno de sus deudores solidarios, extingue la obligación de los demás deudores de esta clase respecto del acreedor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1404.

La producida respecto del deudor principal, libra a los fiadores.

Sin embargo, si el acreedor ha exigido en el primer caso la aceptación de los codeudores solidarios o en el segundo la de los fiadores, subsiste el antiguo crédito, siempre que los codeudores o los fiadores rehusen acceder al nuevo arreglo. (*)

(*) *Ver: artículo 2142 de esta norma.*

1540.- Cuando la segunda obligación consiste simplemente en añadir o quitar una especie, género o cantidad a la primera, los codeudores solidarios y subsidiarios podrán ser obligados hasta concurrencia de aquello en que ambas obligaciones convienen.

1541.- La simple mutación de lugar para el pago dejará subsistentes los privilegios, prendas e hipotecas de la obligación y la responsabilidad de los codeudores solidarios y subsidiarios, en todo lo que no diga relación al lugar.

1542.- Por la mera ampliación del plazo de una deuda no se verifica novación; pero cesa la responsabilidad de los fiadores y se extinguen las prendas e hipotecas constituidas sobre otros bienes que los del deudor; salvo que los

fiadores o los dueños de las cosas empeñadas o hipotecadas accedan expresamente a la ampliación.

Tampoco la mera reducción del plazo constituye novación; pero no podrá reconvenirse a los codeudores solidarios o subsidiarios sino cuando expire el plazo primitivo. (Artículo 2146).

1543.- Para que haya novación por sustitución de acreedor, se requiere que sea hecho con consentimiento del deudor el contrato entre el acreedor precedente y el que lo sustituye.

Si el contrato fuese hecho sin consentimiento del deudor, no habrá novación sino cesión de derechos. (*)

(*) *Ver: artículo 1757 de esta norma.*

CAPITULO V

DE LA CONFUSION

1544.- Habrá *confusión* cuando se reúnan en una misma persona, sea por herencia o por otro suceso legal, dos calidades incompatibles cuyo concurso haga imposible la obligación. Si ésta fuese principal, se extinguirán con ella todos sus accesorios. (*)

(*) *Ver: artículo 2142 de esta norma.*

1545.- La confusión que se verifica por la reunión de las calidades de acreedor y de deudor principal aprovecha a los fiadores.

La que se verifica por la reunión de las calidades de acreedor y de fiador o de las calidades de fiador y de deudor principal, si bien extingue la fianza, no lleva consigo la extinción de la obligación principal ni de las demás garantías, si las hubiere.

La que se verifica por la reunión de las calidades de acreedor y de codeudor solidario no aprovecha a los otros codeudores solidarios, sino en la parte en que aquél era deudor. La misma regla tiene lugar en el caso de solidaridad activa.

1546.- La confusión puede ser total o parcial, como el concurso de las dos calidades incompatibles.

1547.- Los créditos y deudas del heredero que acepta con beneficio de inventario, no se confunden con las deudas y créditos hereditarios. (Artículo 1092).

1548.- Si la confusión que se había operado viene a ser revocada por la nulidad legal de su causa, se desvanecen también los efectos que había producido, recobrando las partes interesadas sus derechos anteriores con los privilegios, hipotecas y demás accesorios de la obligación.

Pero revocada la confusión por mero convenio de partes, aunque sea eficaz entre ellas la revocación, no podrá hacer revivir, en perjuicio de tercero, los accesorios de la obligación.

CAPITULO VI

DE LA IMPOSIBILIDAD DEL PAGO

1549.- La obligación, sea de dar o de hacer o de no hacer, se extingue sin responsabilidad de daños y perjuicios, cuando la prestación que forma la materia de ella viene a ser física o legalmente imposible; salvo los casos ya designados en el artículo 1343 y lo que se dispone por los siguientes.

1550.- La cosa cierta y determinada que debía darse, sólo se entenderá que ha *perecido*, en el caso que se haya destruido completamente o que se haya puesto fuera del comercio o que se haya perdido de modo que no se sepa de su existencia. (*)

(*) *Ver: artículo 1682 de esta norma.*

1551.- Si la cosa cierta y determinada perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación de éste subsiste, pero varía de objeto: el deudor es obligado al precio y a los daños y perjuicios.

Con todo, si estando en mora el deudor, la cosa cierta y determinada perece por caso fortuito que prueba el deudor que habría sobrevenido igualmente a dicha cosa en poder del acreedor, sólo deberá los daños y perjuicios de la mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber sobrevenido igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa y los daños y perjuicios de la mora. (Artículo 696). (*)

(*) *Ver: artículo 1682 de esta norma.*

1552.- El deudor tiene que probar el caso fortuito que alega.

Si se ha constituido responsable de todo caso fortuito o de alguno en particular, se observará lo pactado. (*)

(*) *Ver: artículo 1682 de esta norma.*

1553.- Al que ha hurtado o robado una cosa, no le será permitido alegar que ella ha perecido por caso fortuito, aun de los que habrían producido la destrucción o pérdida de la cosa en poder del acreedor. (Artículo 704). (*)

(*) *Ver: artículo 1682 de esta norma.*

1554.- Si la cosa debida se destruye por un hecho voluntario del deudor que inculpablemente ignoraba la obligación, se deberá solamente el precio sin más indemnización. (*)

(*) *Ver: artículo 1682 de esta norma.*

1555.- En el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable. (*)

(*) *Ver: artículo 1682 de esta norma.*

1556.- Cuando la cosa ha perecido sin hecho ni culpa del deudor, pasan al acreedor los derechos y acciones que por razón de ese suceso puedan competir al deudor. (*)

(*) *Ver: artículo 1682 de esta norma.*

1557.- Tratándose de una obligación de dar, su extinción por la imposibilidad de la paga no hace extinguir la obligación recíproca del acreedor.

En las obligaciones de hacer o de no hacer, la extinción es no sólo para el deudor sino también para el acreedor, a quien aquél debe volver todo lo que hubiese recibido por motivo de la obligación extinguida. (Artículo 1335). (*)

(*) *Ver: artículo 1682 de esta norma.*

1558.- Las disposiciones precedentes no se extienden a las obligaciones de género o cantidad que perecen siempre para el deudor. (*)

(*) *Ver: artículo 1682 de esta norma.*

CAPITULO VII

DE LA ANULACION O DECLARACION DE NULIDAD

1559.- Los contratos y obligaciones consiguientes que adolecen del vicio de una *nulidad relativa* se extinguen por la declaración judicial de esa nulidad.

1560.- La nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a su naturaleza y no a la calidad o estado de las personas que en ellos intervienen, son *nulidades absolutas*.

Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas *absolutamente* incapaces.

Cualquiera otra especie de vicio produce *nulidad relativa* y da derecho a la anulación del acto o contrato.

1561.- La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el Juez de oficio, cuando aparece de manifiesto; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral y de la ley; y no puede subsanarse por la ratificación de las partes ni por un lapso que no pase de treinta años.

1562.- La nulidad relativa no puede ser declarada por el Juez sino a instancia de parte ni puede ser alegada por el Ministerio Público ni por otros individuos que aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes o por sus herederos o cesionarios; y puede subsanarse por el transcurso del tiempo o por la ratificación de las partes.

1563.- Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegar la nulidad.

Con todo, la aserción de mayor edad o de no existir la causa de incapacidad, no inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento de nulidad.

1564.- Los actos y contratos de los incapaces en que no se ha faltado a las formalidades y requisitos necesarios, no podrán declararse nulos ni ser atacados sino por las causas por que gozarían de este beneficio las personas que administran libremente sus bienes.

Esta disposición es aplicable también a los actos y contratos de las personas jurídicas.

1565.- La nulidad pronunciada por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada da a las partes derecho para ser repuestas al mismo estado en que se hallarían, si no hubiese existido el acto o contrato nulo, con tal que la nulidad no sea por lo ilícito del objeto o de la causa del contrato, en cuyo caso *no puede repetirse* lo que se ha dado o pagado a sabiendas.

La nulidad judicialmente declarada da también acción reivindicatoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales.

1566.- En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes, en virtud de la sentencia, cada cual es responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos y la posesión de buena o mala fe de las partes, según las reglas generales.

Con todo, si la declaración de nulidad recae sobre un contrato celebrado con una persona incapaz sin los requisitos legales, el que contrató con ella no puede pedir que se le restituya o reembolse lo que pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probase haberse hecho más rica con ello la persona incapaz.

Se entenderá haberse hecho ésta más rica, en cuanto las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas le hubieren sido necesarias y faltando esta circunstancia, en cuanto las cosas subsistan y se quiera retenerlas.

1567.- Cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada en favor de una de ellas no aprovechará a las otras.

1568.- El plazo para pedir la anulación durará cuatro años, contándose, en caso de violencia, desde el día en que hubiere cesado; en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato; y en el caso de incapacidad legal, desde el día en que haya terminado esta incapacidad.

A las personas jurídicas que, por asimilación a los menores, tengan

derecho para pedir la declaración de nulidad, se les duplicará el cuadrienio y se contará desde la fecha del acto o contrato.

Todo lo cual se entiende, ya se alegue la nulidad relativa por vía de acción o de excepción y se observará en los casos en que leyes especiales no hubiesen designado otro plazo.

1569.- Los herederos mayores de edad gozarán del cuadrienio íntegro, si no hubiere principiado a correr en vida de su antecesor y del residuo en caso contrario.

Los herederos menores empezarán a gozar del cuadrienio o su residuo desde que hubieren llegado a la mayor edad.

Sin embargo, en este caso no se podrá pedir la declaración de nulidad pasados treinta años desde la celebración del acto o contrato.

1570.- La ratificación necesaria para subsanar la nulidad, cuando el vicio del acto o contrato es susceptible de este remedio, puede ser *expresa o tácita*.

La expresa debe hacerse con las solemnidades a que por ley está sujeto el acto o contrato que se ratifica.

La tácita consiste en la ejecución voluntaria de la obligación.

1571.- Ni la ratificación expresa ni la tácita valdrán, si no emanan de la parte que tiene derecho de alegar la nulidad y si el que ratifica no es capaz de contratar.

1572.- Las disposiciones de este Capítulo no se extienden a las causas de nulidad del matrimonio, las cuales se gobiernan por leyes especiales.

TÍTULO IV

DEL MODO DE PROBAR LAS OBLIGACIONES Y LIBERACIONES (*)

(*) *Ver: artículo 1619 de esta norma.*

1573.- Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta.

Las reglas concernientes a la prueba instrumental, a la testimonial, a las presunciones, a la confesión de parte y al juramento se determinan en otros tantos capítulos, sin perjuicio de las que sobre las mismas establezcan las leyes de procedimiento. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Decreto N° 78/002 de fecha 6 de marzo de 2002, artículo 3.*

CAPITULO I

DE LA PRUEBA INSTRUMENTAL

SECCION I

DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS

1574.- Instrumentos públicos son todos aquellos que, revestidos de un carácter oficial, han sido redactados o extendidos por funcionarios competentes, según las formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones. Todo instrumento público es un título auténtico y como tal hace plena fe, mientras no se demuestre lo contrario mediante tacha de falsedad.

Otorgado ante Escribano e incorporado en un protocolo o registro público, se llama *escritura pública*.

Se tiene también por escritura pública la otorgada ante funcionario autorizado al efecto por las leyes y con los requisitos que ellas prescriban.

1575.- El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha. En este sentido, la fuerza probatoria del instrumento público será la misma *para todos*.

1576.- El instrumento público produce el efecto de probar plenamente las obligaciones y descargos en él contenidos respecto de los otorgantes y de las personas a quienes dichas obligaciones y descargos se transfieran por título universal o singular. (*)

(*) *Ver: artículo 1577 de esta norma.*

1577.- Para el efecto indicado en el artículo anterior, la fuerza probatoria del instrumento público se extiende aun respecto de lo que no se haya expresado sino en términos *enunciativos*, con tal que tenga relación directa con lo *dispositivo* del acto o contrato: en otro caso, no puede servir la enunciación más que de un principio de prueba por escrito.

En ningún caso la enunciación produce efecto contra tercero. (*)

(*) *Ver: artículos 1581 y 1598 nral. 1º de esta norma.*

1578.- La falta de instrumento público, no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa formalidad; y se mirarán como no ejecutados o celebrados, aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo, bajo una cláusula penal; esta cláusula no tendrá efecto alguno. (Artículos 2147 y 1599 número 4). (*)

Fuera de los casos indicados en este artículo, el instrumento defectuoso por incompetencia del funcionario o por otra falta en la forma, valdrá como instrumento privado, si estuviere firmado por las partes.

(*) *Ver: artículo 1609 de esta norma.*

1579.- Las reglas precedentes son aplicables a los contratos e instrumentos públicos extendidos en país extranjero, según las formas en él establecidas y que se presentan debidamente legalizados, salvo excepción establecida por leyes o tratados.

1580.- Los contradocumentos surten efecto entre los contrayentes y sus herederos; pero no pueden perjudicar a sus sucesores por título singular, los cuales se consideran como terceros.

SECCION II

DE LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS

1581.- El instrumento privado cuyas firmas estén autenticadas por notario o autoridad competente, el reconocido judicialmente por la parte a quien se opone o el declarado por reconocido en los casos y con los requisitos prevenidos por la ley, tiene el mismo valor que la escritura pública respecto de los que aparecen o se reputan haberlo suscrito y de las personas a quienes se han transferido sus obligaciones y derechos por título universal o singular, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1583.

Es aplicable a los instrumentos privados lo dispuesto por el artículo 1577.

1582.- El reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que el cuerpo del instrumento quede también reconocido.

1583.- El documento privado cuyas firmas estén autenticadas por notario o autoridad competente, se presume auténtico mientras no se demuestre lo contrario mediante tacha de falsedad.

Los demás documentos privados emanados de las partes se tendrán por auténticos, salvo que se desconozca su firma si están suscritos o la autoría si no lo están, en las oportunidades que señale la ley procesal o se les impugne mediante tacha de falsedad. (*)

Sin perjuicio de ello, la parte que desee servirse de un documento privado emanado de la contraparte, podrá, si lo creyere conveniente o en los casos en que la ley lo determina, pedir su reconocimiento por el autor o sus sucesores o representantes, en la forma establecida en la ley procesal. La parte contra quien se presente el instrumento privado está en la obligación de declarar si la firma o en su defecto la autoría es o no suya.

(*) *Ver: artículo 1585 de esta norma.*

1584.- En los casos de desconocimiento de las firmas o de manifestación de ignorancia de su autoría, la parte que intenta servirse del documento podrá recurrir, para demostrar su autenticidad, a la pericia caligráfica mediante el cotejo con otros documentos indubitables o a cualquier otro medio de prueba.

1585.- Cuando la parte no sepa o no pueda firmar, lo hará por ella uno de los testigos *simultáneamente presentes* al acto, los cuales no podrán ser menos de dos y deberán saber firmar. En este caso, tratándose de suma o valor de más de 100 unidades reajustables (artículo 1595) si mediare desconocimiento de la parte (Artículo 1583 inciso 2º), servirá el instrumento como principio de prueba por escrito, desde que fuere reconocido por los testigos instrumentales. (*)

(*) *Ver: artículo 1598 nral. 1º de esta norma.*

1586.- La prueba que resulta del reconocimiento judicial de los instrumentos privados es indivisible y tiene la misma fuerza contra aquellos que los reconocen que contra aquellos que los presentaren.

1587.- La fecha de un instrumento privado no se contará respecto de terceros, sino:

1º.- Desde el día de su exhibición en juicio o en cualquiera repartición pública, cuando quedase allí archivado.

2°.- Desde el día del fallecimiento de alguno de los que lo firmaron.

3°.- Desde el día de su transcripción en cualquier registro público. (*)

(*) *Ver: artículo 2380 de esta norma.*

1588.- Los asientos, registros y papeles domésticos únicamente hacen fe contra el que los ha escrito o firmado, pero sólo en aquello que aparezca con toda claridad y con tal que el que quiera aprovecharse de ellos no los rechace en la parte que le fuere desfavorable.

1589.- La nota escrita o firmada por el acreedor a continuación, al margen o al dorso de una escritura que siempre ha estado en su poder, hace fe en todo lo que sea favorable al deudor.

Lo mismo se entenderá de la nota escrita o firmada por el acreedor a continuación, al margen o al dorso del duplicado de una escritura, encontrándose dicho duplicado en poder del deudor.

Pero el deudor que quisiere aprovecharse de lo que en la nota le favorezca tendrá que pasar por lo que en ella fuera desfavorable.

1590.- Las cartas misivas dirigidas a tercero, aunque en ellas se mencione alguna obligación, no serán admitidas para su reconocimiento o verificación judicial, quedando por consecuencia excluidas como medio de prueba, sin perjuicio de las excepciones legales.

SECCION III

DE LAS COPIAS DE ESCRITURAS PUBLICAS

1591.- Las copias en debida forma, sacadas de la matriz, hacen plena fe de su contenido, en juicio y fuera de él. (*)

(*) *Ver: artículo 1592 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 91 nral. 3°.

1592.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando resultare alguna variante entre la matriz y la copia, se estará a lo que contenga la matriz. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 91 nral. 3°.*

1593.- Aunque no exista la matriz, hacen fe:

1°.- Las primeras copias, sacadas de la matriz por el Escribano que las autorizó.

2°.- Las copias ulteriores sacadas por mandato judicial.

3°.- **DEROGADO por Ley 16.603 de 19.10.94 (*)**

Los testimonios por exhibición de escrituras públicas, sacadas de su matriz por el escribano que las autorizó o por aquél a cuyo cargo se encuentre el Protocolo.

A falta de las copias mencionadas, las copias de copias servirán de principio de prueba por escrito o únicamente de meros indicios, según las circunstancias, sin perjuicio de lo que establece la ley procesal. (**)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

(**) *Ver: artículo 1598 nral. 1° de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 91 nral. 3°.

CAPITULO II

DE LA PRUEBA TESTIMONIAL (*)

(*) *Ver: artículo 1883 de esta norma.*

1594.- No se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. (Artículo 11). (*)

(*) *Ver: artículos 1595, 2053 y 2246 de esta norma.*

1595.- Deberá consignarse por escrito *público* o *privado*, toda obligación que tenga por objeto una cosa o cantidad cuyo valor exceda de 100 unidades reajustables. (Artículo 2107).

No se incluirán en esta suma los frutos, intereses u otros accesorios de la cosa o cantidad debida.

Lo dispuesto en este artículo y el anterior es aplicable a cualquier acto por el que se otorgue la liberación o descargo de una obligación de la expresada cuantía. (*)

(*) *Ver: artículos 2053 y 2246 de esta norma.*

1596.- No será admisible a las partes la prueba de testigos para acreditar

una cosa diferente del contenido de los instrumentos, ni para justificar lo que se hubiere dicho antes, al tiempo o después de su otorgamiento, aunque se trate de una suma o valor de menos de 100 unidades reajustables. (*)

(*) *Ver: artículos 2053 y 2246 de esta norma.*

1597.- Al demandante de más de 100 unidades reajustables no se admitirá prueba testimonial, aunque limite su demanda primitiva a una suma menor.

Tampoco se admitirá prueba testimonial en las demandas de menos de 100 unidades reajustables, cuando se declarase que la cosa demandada es parte o resto de un crédito más cuantioso que no está consignado por escrito. (*)

(*) *Ver: artículos 2053 y 2246 de esta norma.*

1598.- La prohibición de la prueba testimonial, de que se trata en los artículos precedentes, no tiene lugar cuando existe un principio de prueba por escrito.

Hay principio de prueba por escrito:

1º.- Cuando concorra alguna de las circunstancias expresadas en los artículos 1577, 1585 y 1593 inciso final.

2º.- Cuando existe algún documento que emana del demandado o de quien lo represente, que haga verosímil el hecho litigioso. (*)

(*) *Ver: artículos 2053 y 2246 de esta norma.*

1599.- Exceptúan también los casos en que la falta de prueba escrita no se puede imputar de modo alguno a la persona, por resultar de la fuerza de las cosas.

Esta excepción tiene lugar:

1º.- En las obligaciones que se forman sin convención, toda vez que el reclamante no haya podido procurarse una prueba escrita.

2º.- En los depósitos necesarios y en los verificados por los viajeros en las posadas; todo, según la calidad de las personas y las circunstancias del hecho. (Artículo 2274).

3º.- En las obligaciones contraídas en casos de accidentes imprevistos, en que no se hubiera podido extender documento.

4º.- En el caso de haber perdido el acreedor el documento que le servía de título, a consecuencia de un caso fortuito o que provenga de una fuerza mayor. (*)

(*) *Ver: artículos 2053 y 2246 de esta norma.*

CAPITULO III

DE LAS PRESUNCIONES

1600.- Las presunciones son consecuencias conjeturales que la ley o el magistrado sacan de un hecho conocido a otro desconocido.

1601.- La presunción legal es la inherente a actos o hechos determinados por una disposición especial de la ley. Tales son entre otros:

1º.- Los actos que la ley declara nulos, presumiéndolos verificados en fraude de sus disposiciones, por la sola calidad de las personas.

2º.- Los casos en que la ley declara el dominio o la liberación, como el resultado de ciertas circunstancias determinadas.

3º.- La autoridad que la ley atribuye a la cosa juzgada.

Las demás presunciones legales establecidas por este Código se encuentran indicadas en sus lugares respectivos.

1602.- Toda presunción legal exime a la persona en cuyo favor existe, de probar el hecho presumido por la ley.

Sin embargo, el que invoca la presunción legal debe probar la existencia de los hechos que sirven de base a la ley para establecer aquélla.

1603.- Las presunciones legales son *absolutas* o *simples*.

Son *absolutas* aquellas en que se funda la ley para anular ciertos actos o para acordar una excepción perentoria contra la demanda. Las demás son *simples*.

1604.- No es admisible la prueba contra las presunciones absolutas de la ley.

Esta disposición se entiende sin perjuicio de los casos especiales en que la ley misma haya reservado expresamente la prueba contra la presunción que produce una excepción perentoria.

Así, la presunción de paternidad del marido podrá ser atacada en la (*) circunstancias particulares de los artículos 217 y siguientes.

Las presunciones legales simples podrán siempre ser destruidas por una prueba contraria.

(*) *En el Diario Oficial N° 24.177 de fecha 21 de noviembre de 1994 y en la edición oficial, dice: "la circunstancias", debe decir: "las circunstancias".*

1605.- Las presunciones *judiciales* o que no se han establecido por la ley, quedan confiadas a las luces y a la prudencia del magistrado, que no debe admitir sino las que sean *graves*.

En los casos en que la ley rechaza la prueba testimonial, no tienen lugar las presunciones judiciales, a no ser que el acto sea atacado por causa de fraude o dolo.

CAPITULO IV

DE LA CONFESION DE PARTE

1606.- La confesión de la parte es judicial o extrajudicial.

1607.- La confesión judicial es la que hace en juicio la parte por sí o por medio de apoderado especial o de sus representantes legales y relativamente a un hecho personal de la misma parte o de su conocimiento.

1608.- La confesión judicial hace prueba contra la parte que la realiza. Cesa de hacer fe cuando constare haber sido determinada por error, violencia o dolo.

1609.- La confesión judicial, aunque no haya un principio de prueba por escrito, tiene lugar en todos los casos, menos los comprendidos en el artículo 1578, inciso 1º o cuando se tratare de hechos respecto de los cuales la ley exige otro medio de prueba o recayere sobre derechos indisponibles.

1610.- La confesión extrajudicial y puramente verbal es ineficaz siempre que no sea admisible la prueba testimonial. En el caso de serlo, el valor de la confesión queda sujeto al criterio judicial.

CAPITULO V

DEL JURAMENTO JUDICIAL

1611.- En los juicios sobre obligaciones civiles, procedentes de delito, o cuasidelito o dolo, puede el Juez deferir el juramento al demandante, con las circunstancias y efectos siguientes:

1°.- El delito, cuasidelito o dolo han de resultar debidamente probados.

2°.- La duda del Juez ha de recaer sobre el número o valor real y de afección de las cosas o sobre el importe de los daños o perjuicios.

3°.- El Juez no estará obligado a pasar por la declaración jurada del demandante sino que podrá moderarla según su prudente arbitrio.

1612.- El juramento ha de hacerse por la parte o por el apoderado especial o su representante legal.

SEGUNDA PARTE

DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DE LOS CONTRATOS

TITULO I

DE LAS DONACIONES (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 17.163 de fecha 1° de setiembre de 1999, artículo 12.*

CAPITULO I

DE LA NATURALEZA DE LA DONACION Y DE SUS DIFERENTES ESPECIES (*)

(*) *Ver: artículo 1651 de esta norma.*

1613.- La donación entre vivos es un contrato por el cual el donante, ejerciendo un acto de liberalidad, se desprende desde luego e irrevocablemente del objeto donado en favor del donatario que lo acepta.

1614.- Las donaciones hechas para después de la muerte del donante quedan sujetas a las reglas establecidas para las últimas voluntades.

1615.- La donación entre vivos puede ser simple, onerosa y remuneratoria.

Se requiere en la donación onerosa que el modo o gravamen impuesto al donatario y apreciable en dinero no sea equivalente al valor del objeto donado. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera y Normas Concordantes y Complementarias (TOCAF), aprobado por Decreto N° 194/997 de fecha 10 de junio de 1997, Título I, Capítulo III, Sección II, artículo 39.*

1616.- Puede donar entre vivos toda persona que la ley no haya declarado inhábil.

Son inhábiles para donar los que no tienen la libre administración de sus bienes; salvo en los casos y con los requisitos que las leyes prescriben. (Artículos 831 y 1656, inciso 2).

1617.- Toda persona legalmente capaz de recibir por testamento, lo es en iguales términos y con las mismas limitaciones para recibir por donación. (Artículos 834 y siguientes).

1618.- La capacidad del donante debe ser juzgada respecto al momento en que se hizo la donación; salvo los casos indicados en el artículo 1268.

La capacidad del donatario será juzgada respecto al momento de aceptar la donación. Si ésta fuese condicional, esto es, bajo una condición suspensiva, se atenderá además al tiempo en que la condición se cumpliera.

CAPITULO II

DEL MODO DE HACERSE LAS DONACIONES

1619.- No valdrá la donación entre vivos de cualquier clase de bienes inmuebles, si no es otorgada por escritura pública. (Artículo 1664). (*)

En las donaciones de bienes muebles se observará lo dispuesto en el Título *Del modo de probar las obligaciones*.

(*) *Ver: artículo 1621 de esta norma.*

1620.- Mientras la donación no ha sido aceptada y se ha hecho conocer la aceptación al donante, podrá éste revocarla a su arbitrio.

1621.- Las donaciones de que habla el inciso 1° del artículo 1619 deben ser

aceptadas por el donatario en la misma escritura. Si estuviere ausente, por otra escritura de aceptación que se hará saber en forma auténtica al donante.

1622.- El donatario debe aceptar por sí mismo o por medio de quien tenga su poder especial para el caso o poder general para la administración de sus bienes.

1623.- Los que tienen facultad para aceptar herencias y mandas hechas a individuos que están sujetos a la patria potestad, tutela o curaduría, a los pobres (artículo 1058) y a cualquiera persona jurídica, podrán también aceptar en su nombre respectivamente las donaciones que se les hicieren.

1624.- DEROGADO por el art. 1o. de la Ley 10.783 del 18.9.46 (*)

() Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

CAPITULO III

DE LOS LIMITES Y EFECTOS DE LA DONACION

1625.- Nadie puede hacer donación de todos sus bienes, aunque la limite a los presentes.

Pero si el donante se reservase lo suficiente para su congrua manutención, a título de alimentos, usufructo u otro semejante, será válida la donación.

En todos los casos será nula respecto de los bienes futuros. (Artículos 913, 1283 y 1651).

En los bienes presentes se comprenden todas las cosas o valores, con relación a los cuales el donante puede conferir desde luego un derecho cierto.

1626.- Prohíbese donar entre vivos más de aquello de que pudiera disponerse libremente por última voluntad. (Artículo 887).

Se podrá donar la propiedad a una persona y el usufructo a otra u otras, con las limitaciones prescritas por regla general en el Capítulo I, Título III del Libro Segundo. (*)

() Ver: artículo 1639 de esta norma.*

1627.- En caso de que el donante se haya reservado la facultad de disponer a su arbitrio de alguna cosa comprendida en la donación o de una cantidad fija sobre los bienes donados, si muere sin disponer de dicha cosa o cantidad, pertenecerá a sus herederos, sean cuales fueren las cláusulas en contrario.

1628.- Podrá pactarse la reversión en favor de sólo el donante para cualquiera caso y circunstancias; pero no en favor de otra persona sino en los mismos casos y con iguales limitaciones que determina este Código para la sustitución testamentaria. El derecho de reversión nunca se presume.

1629.- El donante no queda obligado al saneamiento de las cosas donadas si no lo hubiese estipulado. (Artículo 1952).

Con todo, si se ha impuesto al donatario un gravamen pecuniario o apreciable en dinero, tendrá siempre derecho para que se le reintegre lo que haya invertido en cubrirlo, con los intereses corrientes que no resultaren compensados por los frutos de la cosa donada.

1630.- El donante reconvenido para el cumplimiento de la donación goza del beneficio de competencia. (Artículo 1495).

CAPITULO IV

DE LA RESCISION, REVOCACION Y REDUCCION DE LAS DONACIONES

1631.- No se resuelve la donación entre vivos por que después de ella le hayan nacido al donante uno o más hijos legítimos o naturales, a no ser que esta condición resolutoria se haya expresado en la escritura de donación.

1632.- La donación onerosa es rescindible cuando el donatario estuviere en mora de cumplir las obligaciones que se le han impuesto. En este caso, tendrá derecho el donante o para que se obligue al donatario al cumplimiento o para que se rescinda la donación.

Ejercitándose la acción rescisoria, será considerado el donatario como poseedor de mala fe para la restitución de las cosas donadas y los frutos, siempre que, sin causa grave, hubiese dejado de cumplir la carga impuesta.

Pero se abonará al donatario lo que haya invertido en el desempeño de su obligación y de que se aprovechare el donante. (*)

(*) *Ver: artículo 1633 de esta norma.*

1633.- La acción rescisoria concedida por el artículo anterior terminará en cuatro años desde el día en que el donatario haya sido constituido en mora de cumplir la obligación impuesta.

En lo demás que no se oponga a lo dispuesto en este artículo y el anterior, se observarán las reglas ya dadas sobre la condición resolutoria.

1634.- La donación simple puede ser revocada a instancia del donante por causa de ingratitud, en los casos siguientes:

1º.- Si el donatario cometiere algún delito contra la persona, honra o bienes del donante.

2º.- Si el donatario imputare al donante alguno de los delitos que den lugar al procedimiento de oficio, aunque lo pruebe, a menos que el delito se hubiese cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o hijos constituidos bajo su potestad.

Ni la donación onerosa ni la remuneratoria se pueden revocar por causa de ingratitud.

1635.- La acción revocatoria por ingratitud se prescribe por un año contado desde que pudo el donante conocer el hecho ofensivo.

1636.- No se transmitirá esta acción a los herederos del donante si éste, pudiendo, no la hubiere dejado intentada.

Tampoco podrá ejercitarse contra el heredero del donatario, a no ser que, a la muerte de éste, se hallare intentada contra él.

1637.- También cesa la acción revocatoria cuando ha mediado remisión expresa o tácita de la ofensa.

La ejecución voluntaria de la donación por parte del donante o sus herederos en una época en que tenían ya conocimiento de la ofensa, importará remisión tácita de ella.

1638.- La revocación por ingratitud será sin perjuicio de las enajenaciones

hechas por el donatario y de los derechos reales que hubiere constituido sobre la cosa donada antes de interponerse la demanda revocatoria.

En caso de revocación, será condenado el donatario a la restitución del valor de las cosas enajenadas con arreglo al tiempo de la demanda; y si las entregase en especie, pero gravadas, a la indemnización del donante por el menos valor de ellas.

Además, será condenado a la devolución de los frutos, desde el día de la demanda.

1639.- Las donaciones que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1626 tengan el carácter de inoficiosas, hecho el cálculo general de los bienes del donante al tiempo de su muerte podrán reducirse en cuanto al exceso, a instancia *de los herederos forzosos* ya sea que éstos hayan aceptado la herencia pura y simplemente o con beneficio de inventario.

Para la reducción de las donaciones se estará a lo dispuesto en los artículos 889 y 890 y en el Capítulo V, Título VI del Libro Tercero.

1640.- Si las donaciones no cupieren todas en la porción disponible, se suprimirán o reducirán las más recientes por el orden posterior de la fecha de su otorgamiento en lo que resultare exceso.

La insolvencia del donatario ocurrida en vida del donante gravará proporcionalmente a los otros donatarios y al heredero. (Artículo 1112).

En este caso no entrará en el cálculo general de bienes el valor de la donación hecha al insolvente; sin perjuicio de que si viniere después a mejor fortuna sea obligado a reintegrar a los otros donatarios y al heredero de lo que les hizo perder el estado de insolvencia.

1641.- La donación onerosa que impone al donatario un gravamen pecuniario o apreciable en dinero, sólo es reducible hasta concurrencia de la liberalidad contenida en ella.

Las donaciones remuneratorias siguen la regla de las simples.

1642.- La reducción no obstará para que las donaciones tengan efecto durante la vida del que las hizo y pertenezcan los frutos al donatario.

1643.- Se extinguirá en todos casos la acción de reducción por el transcurso de cuatro años, contados desde que se abrió la sucesión del donante.

CAPITULO V

DE LAS DONACIONES POR CAUSA DE MATRIMONIO

SECCION I

DISPOSICIONES GENERALES

1644.- Donaciones *por causa de matrimonio* son las que se hacen en consideración a éste y antes de celebrarse, en favor de los esposos o de uno de ellos.

1645.- En cuanto no se halle especialmente determinado en este capítulo, las donaciones por causa de matrimonio se sujetarán a las reglas generales de las donaciones.

1646.- Las donaciones por causa de matrimonio no pueden ser atacadas ni anuladas por falta de aceptación expresa.

1647.- En toda donación por causa de matrimonio se subentiende la condición de celebrarse éste.

1648.- En el caso de declararse nulo el matrimonio, subsistirán las donaciones hechas en favor del cónyuge o cónyuges que procedieron de buena fe.

Si uno solo de los cónyuges procedió de mala fe, las donaciones que le hubieren sido hechas recaerán en sus hijos.

Cuando fue común a ambos cónyuges la mala fe, quedarán sin efecto las donaciones.

1649.- Las donaciones por causa de matrimonio no podrán ser revocadas por ingratitud.

1650.- Estas donaciones podrán hacerse con la condición de que el donatario pague la deudas del donante sin determinarlas o con otras condiciones dependientes de la voluntad de éste; y en tal caso tendrá aquél opción para cumplir la condición y el pago de las deudas o para renunciar la donación.

SECCION II

DE LAS DONACIONES POR CAUSA DE MATRIMONIO HECHAS
PARA DESPUES DE LA MUERTE DEL DONANTE

1651.- Los principios establecidos en los artículos 1285 y 1625 admiten excepción respecto de las donaciones por causa de matrimonio, las cuales pueden hacerse del todo o parte de los bienes que el donante dejare a su muerte.

En todos los casos el donante ha de ser capaz de hacer donación con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo I de este Título.

1652.- El donante no podrá revocar esta clase de donaciones ni enajenar a título gratuito los objetos comprendidos en ellas, si no es en pequeños valores para recompensa de servicios o por otras justas consideraciones.

En cuanto a disponer de dichos bienes por título oneroso, conservará la facultad de hacerlo, sean cuales fueren las cláusulas o estipulaciones en contrario.

1653.- Las donaciones de que se trata subsistirán aun en el caso de que el donante sobreviva al donatario, siempre que éste dejare hijos o descendientes del matrimonio en cuya consideración hubieren sido otorgadas. (*)

Si no hubiere dejado hijos o descendientes o éstos fuesen de otro matrimonio posterior, el donante podrá revocar la donación por acto entre vivos o por testamento. (**)

(*) *Ver: artículo 1654 de esta norma.*

(**) *Ver: artículo 1658 de esta norma.*

1654.- Lo dispuesto en el primer inciso del artículo anterior se entenderá para el caso de que el donante no hubiere excluido expresamente a los hijos o descendientes del donatario.

En todos los casos, el donatario que sobrevive al donante podrá disponer libremente de los bienes donados.

1655.- El derecho de acrecer, regulado por lo que se determina en el Capítulo II, Título VI del Libro III, en cuanto no se oponga a las disposiciones de la presente Sección, tiene lugar entre los esposos a quienes se hubiere donado conjuntamente alguna cosa. (*)

(*) *Ver: artículo 1953 de esta norma.*

SECCION III**DE LAS DONACIONES MATRIMONIALES DE UN ESPOSO A OTRO**

1656.- Los esposos pueden hacerse donaciones recíprocamente o uno de ellos al otro, antes de contraer matrimonio, de los bienes presentes o de los que dejaren a la muerte.

En caso de ser alguno de ellos menor de edad (artículos 831 y 1616), les bastará que concurren al otorgamiento la persona o personas de cuyo consentimiento necesita el menor para contraer matrimonio; debiendo observarse lo dispuesto en el Capítulo I, Título VII *De la sociedad conyugal*. (*)

(*) *Ver: artículo 1659 de esta norma.*

1657.- Toda donación de un cónyuge a otro, durante el matrimonio será nula.

No se comprende en esta regla los regalos módicos que los casados acostumbran a hacerse en ocasiones de regocijo para la familia.

1658.- Lo dispuesto en el artículo 1653 se aplica a las donaciones matrimoniales o entre esposos, si son de los bienes que el donante dejare al morir.

1659.- Las donaciones entre esposos (artículo 1656) no pueden exceder de la medida fijada en el artículo 887.

1660.- Se tendrá por simulada y por consiguiente nula la donación hecha durante el matrimonio, por uno de los cónyuges a los hijos que el otro cónyuge tenga de diverso matrimonio o a las personas de quienes éste sea heredero presuntivo al tiempo de la donación.

TITULO II**DE LA COMPRAVENTA****CAPITULO I****DISPOSICIONES GENERALES**

1661.- La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero.

1662.- Si el precio, esto es, lo que el comprador da por la cosa vendida, consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se calificará el contrato por la intención manifiesta de los contrayentes; y no constando ésta, se tendrá por permuta si es mayor el valor de la cosa y por venta en el caso contrario.

1663.- Cuando las cosas se entregan en pago de lo que se debe (artículos 1490 a 1493) el acto tendrá los mismos efectos que la compraventa; pero la deuda que así fuese cubierta será juzgada por las reglas generales *del pago*.

1664.- La compraventa queda perfecta desde que las partes convienen en la cosa y en el precio; salvas las excepciones siguientes:

1º.- La venta de bienes inmuebles, servidumbres, censos y la de una sucesión hereditaria no se consideran perfectas ante la ley mientras no se haya otorgado escritura pública.

Será, además, necesaria su inscripción en el Registro respectivo para que surta efecto.

Esta disposición relativa al Registro es también aplicable a las escrituras públicas de división de bienes raíces entre condueños o socios, de permuta y donaciones de toda clase de inmuebles, a las escrituras o instrumentos públicos de partición hereditaria, de cesión de derechos hereditarios y a toda escritura pública que importe traslación de dominio, a cualquier título que sea.

No obstante, la promesa de compraventa de inmuebles hecha en instrumento privado da acción para reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios en caso de no cumplimiento. Los contratos previstos en la Ley N° 8.733 de 17 de junio de 1931 y sus ampliatorias, quedan sujetos a las normas respectivas.

2º.- Si los contratantes estipularen que la venta de otras cosas que las enumeradas en el inciso anterior no se considere perfecta hasta el otorgamiento de la escritura pública o privada, podrá cualquiera de las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado de común acuerdo la entrega de la cosa vendida. (*)

(*) *Ver: artículos 1665 y 1770 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 45 nrales. 4º y 5º.

1665.- Las cantidades que con el nombre de señal o arras, se suele entregar en las ventas, se entiende siempre que lo han sido por cuenta del precio y en signo de ratificación del contrato, sin que pueda ninguna de las partes retractarse perdiendo las arras.

Quando el vendedor y comprador convengan en que mediante la pérdida

de las arras o cantidad anticipada, les sea lícito arrepentirse y dejar de cumplir lo estipulado, deberán expresarlo así por cláusula especial del contrato.

Todo lo cual se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.

1666.- El precio debe ser determinado por los contrayentes y en ningún caso por uno solo de ellos.

Podrá hacerse la determinación del precio por cualesquiera medios o indicaciones que lo fijen.

Si se trata de cosas fungibles y se vende al *corriente de plaza*, se entenderá el del día de la entrega, a menos de expresarse otra cosa. (*)

(*) *Ver: artículo 1779 de esta norma.*

1667.- También podrá dejarse el precio al arbitrio de tercera persona determinada.

Si ésta no quisiere o no pudiere señalarlo, no habrá venta.

En caso de señalar el precio, quedará éste fijado irrevocablemente. (*)

(*) *Ver: artículo 1779 de esta norma.*

1668.- Pueden venderse todas las cosas que están en el comercio de los hombres, salvas las prohibiciones o restricciones que resulten de leyes especiales.

1669.- La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por la prescripción.

1670.- La compra de cosa propia no vale: el comprador tendrá derecho a que se le restituya lo que hubiere dado por ella. (Artículos 758 y 769).

1671.- La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir; salvo que se estipule lo contrario o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte. (Artículo 1283).

1672.- Si al tiempo de celebrarse la venta se había perdido la cosa en su totalidad, el contrato es nulo y puede el comprador repetir el precio.

Si la pérdida ha sido parcial, el comprador que la ignoraba puede optar entre desistir del contrato o reclamar la parte existente, haciendo que por tasación se determine el precio.

En uno y otro caso, el que vendió a sabiendas responde de los daños y perjuicios al comprador de buena fe.

La repetición concedida al comprador, en el primer caso de este artículo, no lo exime de responder por los daños y perjuicios, cuando sabía la pérdida de la cosa ignorándola el vendedor.

1673.- Los gastos de escritura y demás accesorios a la venta serán de cargo del comprador, a menos de pactarse otra cosa.

1674.- La venta puede ser pura o bajo condición suspensiva o resolutoria.

Puede hacerse a plazo para la entrega de la cosa o del precio.

Puede tener por objeto dos o más cosas alternativas.

Bajo todos estos respectos se rige por las reglas generales de los contratos en lo que no fueren modificadas por las de este Título. (Artículos 1424, 1427 y 1433).

CAPITULO II

DE LAS INCAPACIDADES ESPECIALMENTE RELATIVAS AL CONTRATO DE COMPRAVENTA

1675.- Es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados de cuerpos.

1676.- Los tutores, curadores y los padres no pueden en ninguna forma vender bienes de ellos para los que están bajo su guarda o potestad.

1677.- Se prohíbe a los administradores de establecimientos públicos vender los bienes que administran y cuya enajenación no está comprendida en sus atribuciones administrativas, a no ser con autorización expresa de la autoridad competente.

1678.- Es prohibida la compra, aunque sea en remate público, por sí o por interpuestas personas:

1º.- A los padres, de los bienes de los hijos que están bajo su potestad.

2º.- A los tutores y curadores, bienes de las personas que estén a su cargo ni comprar bienes para éstos, sino en los casos y por el modo ordenado por las leyes.

3º.- A todo empleado público, los bienes que se venden por su ministerio, sean aquéllos públicos o particulares.

4°.- A los Jueces, Actuarios, alguaciles y procuradores de las partes, los bienes en cuyo litigio han intervenido y que se vendan a consecuencia del litigio. (*)

(*) *Ver: artículo 1781 de esta norma.*

1679.- Los mandatarios, los síndicos de concursos y los albaceas están sujetos en cuanto a la compra o venta de las cosas que hayan de pasar por sus manos en virtud de estos encargos, a lo dispuesto en el Título *Del mandato*.

CAPITULO III DE LOS EFECTOS INMEDIATOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

1680.- En el caso de venderse sucesivamente una misma cosa a dos personas, se estará a lo dispuesto en los artículos 1337, 1341 y siguientes. (Artículo 2078).

1681.- La venta de cosa ajena, ratificada después por el dueño, confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta.

Lo mismo sucede si el vendedor adquiere el dominio de la cosa ajena después de entregada al comprador y por consiguiente, si el vendedor la vendiere a otra persona después de adquirido el dominio, subsistirá el dominio de ella transferido al primer comprador.

1682.- Desde que está perfecto el contrato de venta, la pérdida, deterioro o mejora de la cosa vendida se regula por lo dispuesto en los artículos 1335, 1343, 1550 y siguientes.

Si la venta es condicional, se aplicarán las reglas de los artículos 1425 y 1428.

1683.- Si las cosas fungibles que suelen venderse a peso, cuenta o medida, se venden en masa o formando un solo todo y por un solo precio, como el trigo de cierto granero por mil pesos, la pérdida, deterioro o mejora pertenecerá al comprador, aunque la cosa no se haya pesado, contado ni medido.

No concurriendo las dos circunstancias sobredichas -de venderse en masa y por un solo precio- la venta de las cosas fungibles se entiende que es a

peso, cuenta o medida y hasta que se verifique la correspondiente operación, no se transfiere al comprador el riesgo o provecho de la cosa vendida.

1684.- Si en el contrato se hubiere fijado día para el peso, cuenta o medida y el vendedor o el comprador no compareciere en él, será el omiso obligado a resarcir al otro los daños y perjuicios que de su negligencia resultaren; y el contrayente que no faltó a la cita podrá, si le conviniere, desistir del contrato.

1685.- Si se estipula que se vende a prueba, se entiende reservarse el comprador la facultad de rescindir libremente la convención, si no le conviniere la cosa de que se trata. La pérdida, daño o mejora pertenecerá entretanto al vendedor.

Aunque no se estipule expresamente, se entiende hacerse a prueba la venta de todas las cosas que se acostumbra vender de ese modo.

Así, en uno como en otro caso, retardándose por el comprador el acto de la prueba más de tres días después de la interpelación hecha por el vendedor, se considerará el contrato sin efecto.

CAPITULO IV

DE LAS OBLIGACIONES DEL VENDEDOR

1686.- Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos, la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida. (Artículos 758 y 769).

La tradición se verifica conforme a las reglas establecidas en el Título III del Libro Tercero. (*)

(*) *Ver: artículo 1696 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 17.250 de fecha 11 de agosto de 2000, artículo 34.

SECCION I

DE LA ENTREGA DE LA COSA VENDIDA

1687.- La entrega debe hacerse en el lugar convenido y si no hubiere lugar

designado, en el lugar en que se encontraba la cosa vendida a la época del contrato.

Si se hubieren designado para la entrega dos localidades alternativamente, sin indicar de cuál de los interesados será la elección, se entenderá que ésta corresponde al vendedor.

1688.- El vendedor debe entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato o a la época prefijada en él.

Si por hecho o culpa suya ha retardado la entrega, podrá el comprador a su arbitrio pedir el cumplimiento o la resolución del contrato y en ambos casos con derecho para ser indemnizado de los daños y perjuicios según las reglas generales.

Todo lo cual se entiende si el comprador ha pagado o está pronto a pagar el precio o estipulado pagar a plazo.

Pero si después del contrato se hallare el comprador en estado de insolvencia o estuvieren sus intereses comprometidos de tal manera que el vendedor corra riesgo inminente de perder el precio, no se podrá exigir la entrega, aunque se haya estipulado plazo para el pago de aquél, sino afianzando pagar al vencimiento del plazo. (Artículo 1735). (*)

(*) *Ver: artículo 1730 de esta norma.*

1689.- El vendedor debe entregar la cosa vendida tal cual se hallaba al tiempo del contrato, es decir, no deteriorada por una causa que le sea imputable. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 17.250 de fecha 11 de agosto de 2000, artículo 34.*

1690.- La obligación de entregar la cosa comprende la de sus accesorios.

1691.- La venta de un predio *determinado* puede hacerse:

1°.- Sin indicación de la superficie que contiene y por un solo precio, como la venta del terreno comprendido entre tales límites por veinte mil pesos.

2°.- Sin indicación de la superficie, pero a razón de un precio la medida.

3°.- Con indicación de la superficie, pero bajo un cierto número de medidas a tomarlas en un terreno de mayor extensión.

4°.- Venta de un predio determinado con indicación de la superficie por un precio cada medida, haya o no indicación del precio total.

5°.- Venta de un predio determinado con indicación de la superficie, pero por un precio único y no a tanto la medida.

6°.- Venta de uno o más predios con indicación de superficie, pero bajo la convención que no se garantiza el contenido y que la diferencia, sea más sea menos, no producirá en el contrato variación alguna. (*)

(*) *Ver: artículo 1692 de esta norma.*

1692.- En los casos de los números 1° y 6° del artículo anterior, la venta es perfecta y pura desde su otorgamiento en la forma de ley, sin que los contratantes puedan hacerse cargo alguno en razón de la cabida que se encuentre.

En los casos de los números 2° y 3° del mismo artículo, la venta es condicional, como subordinada a la operación de mensura del predio, que debe practicarse.

En el caso del número 4° del sobredicho artículo, el vendedor es obligado a dar la superficie indicada en el contrato. Resultando una superficie menor, el vendedor debe completarla, si la otra parte lo exige. Pero si esto no es posible, o si el comprador no lo exige, debe el vendedor rebajar proporcionalmente el precio.

Si por el contrario, resultare mayor superficie que la expresada en el contrato, el comprador tendrá la opción entre pagar el excedente al vendedor, al mismo precio estipulado o devolverle ese exceso de superficie donde conviniere al comprador.

En fin, en el caso del número 5° del citado artículo, no habrá lugar a suplemento de precio a favor del vendedor por el exceso de la superficie ni respecto del comprador por resultar menor superficie, sino cuando la diferencia entre la superficie real y la expresada en el contrato es de un vigésimo en relación al valor de la totalidad de los objetos vendidos.

Es indiferente que se trate de un solo terreno o de varios de diversas calidades.

Es asimismo indiferente que la superficie se indique por aproximación, diciendo tantas medidas *poco más o menos*. (*)

(*) *Ver: artículos 1693 y 1694 de esta norma.*

1693.- Si en un mismo contrato se han vendido dos o más terrenos por un solo precio, con indicación especial de la superficie de cada uno, en vez de la indicación única de toda la superficie y se encontrase menos cabida en un terreno

y más en otro, se verificará la compensación hasta la suma concurrente; y la acción complementaria o disminutoria a que hubiere lugar, seguirá la regla establecida en el artículo precedente. (*)

(*) *Ver: artículo 1694 de esta norma.*

1694.- Las acciones que nacen de los dos artículos precedentes se prescriben al año, contado desde el día de la entrega.

1695.- Los gastos de la entrega de la cosa vendida son de cuenta del vendedor y los de la conducción o transporte de cargo del comprador, como otra cosa no se hubiere estipulado.

SECCION II

DEL SANEAMIENTO

1696.- Por el saneamiento expresado en el artículo 1686, el vendedor responde al comprador:

1°.- De la posesión pacífica de la cosa vendida.

2°.- De los defectos ocultos que tuviere, llamados *vicios redhibitorios*.

1°

Del saneamiento en caso de evicción

1697.- Hay evicción de la cosa comprada, cuando el comprador es privado del todo o parte de ella por sentencia judicial.

1698.- El vendedor es obligado a sanear al comprador todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta, aunque nada se haya estipulado a ese respecto en el contrato.

1699.- Los contrayentes pueden por estipulaciones particulares hacer más extensiva la obligación de derecho o disminuir sus efectos; y hasta pueden convenir en que el vendedor no quedará obligado al saneamiento.

Sin embargo, aunque se diga que el vendedor no se obliga a sanear, queda siempre obligado al saneamiento que resulta de sus hechos personales posteriores al contrato y de los anteriores que no hubiere declarado al comprador: la convención en contrario es nula. (*)

(*) *Ver: artículo 1700 de esta norma.*

1700.- Aunque se haya estipulado conforme a lo prescrito en el artículo precedente que el vendedor no se compromete al saneamiento, queda obligado siempre en caso de evicción a restituir el precio, a no ser que se verifique el caso del artículo siguiente o que, habiéndose declarado expresamente al tiempo de la venta un riesgo especial de evicción, lo haya tomado sobre sí el comprador.

1701.- Si el comprador de cualquier modo conocía el peligro de la evicción antes del contrato, nada puede reclamar del vendedor por los efectos de la evicción que suceda, a no ser que ésta hubiese sido expresamente convenida.

1702.- En las transacciones, habrá lugar a la evicción o saneamiento respecto a las cosas no comprendidas en la cuestión sobre la cual se transigió; pero no en cuanto a los derechos litigiosos o dudosos que una de las partes reconoció a favor de la otra. (Artículo 2160).

1703.- Cuando la evicción resultare de una prescripción comenzada antes de venderse la cosa y cumplida después, los jueces apreciarán todas las circunstancias del caso y resolverán si el vendedor debe o no sanear la evicción.

1704.- La obligación de saneamiento es indivisible y puede demandarse y oponerse a cualquiera de los herederos del vendedor; pero la condenación hecha a éstos sobre restitución del precio de la cosa o de los daños y perjuicios causados por la evicción, es divisible entre dichos herederos.

La misma regla se aplica a los vendedores que por un solo acto de venta hayan enajenado la cosa.

1705.- El comprador a quien se demanda en razón de la cosa vendida, deberá hacer citar al vendedor para que comparezca a defenderla.

Esta citación se hará de acuerdo a lo que establece la ley procesal. (*)

(*) *Ver: artículos 1713 nral. 2º y 1716 de esta norma.*

1706.- Cuando se ha prometido el saneamiento en general o nada se ha estipulado a ese respecto, si la evicción se verifica, puede el comprador reclamar del vendedor:

1°.- La devolución del precio pagado por él.

2°.- La de los frutos, cuando tiene que restituirlos al verdadero dueño.

3°.- Las costas y costos de la demanda de saneamiento y los causados en la demanda primitiva. (Artículo 1715).

4°.- Los gastos del contrato.

5°.- Los demás daños y perjuicios ocasionados y no comprendidos en los números 2°, 3° y 4°.

1707.- El vendedor está obligado a la restitución de todo el precio, aunque al tiempo de la evicción la cosa vendida valga menos o se halle deteriorada por caso fortuito o negligencia del comprador.

Sin embargo, si el comprador ha reportado de los deterioros algún género de lucro, tiene el vendedor derecho de retener su importe al devolver el precio.

1708.- Si al tiempo de la evicción se viere que había aumentado el valor de la cosa vendida, sin que haya tenido parte en ello el comprador, está obligado el vendedor a pagarle aquel tanto que importa más sobre el precio de la venta.

Sin embargo, en esta disposición no se comprende el caso en que el aumento de valor nazca de circunstancias imprevistas y extraordinarias, como la apertura de un canal, el establecimiento de un pueblo, etc.

1709.- Las reglas sentadas en los artículos 698 y siguientes se observarán entre el comprador y el demandante respecto de las tres clases de mejoras y el vendedor de buena fe no tendrá que responder de ellos.

El vendedor de mala fe será responsable de lo que importen dichas mejoras, en cuanto el comprador, sea cual fuese el motivo, no haya sido pagado por el demandante.

1710.- Si el comprador ha perdido, a consecuencia de la evicción, una parte de la cosa vendida, de tal entidad con relación al todo, que sin ella no la hubiera comprado, puede exigir la rescisión del contrato; pero con la obligación de devolver la cosa libre de los gravámenes a que entretanto la haya sujetado.

Si la parte evicta no fuere de tanta importancia o si prefiere el comprador reclamar su importe, deberá abonársele proporcionalmente al precio de venta con las indemnizaciones a que haya lugar, según los artículos precedentes.

Esto mismo se observará, cuando se hubiese comprado dos o más cosas conjuntamente, si apareciere que el comprador no habría comprado la una sin la otra. (*)

(*) *Ver: artículo 1714 de esta norma.*

1711.- En las ventas forzadas hechas por autoridad de la justicia, el vendedor no es obligado por causa de la evicción que sufiere la cosa vendida, sino a restituir el precio que haya producido la venta.

1712.- El saneamiento no puede reclamarse hasta que haya recaído sentencia judicial que cause ejecutoria y por la cual se condene al comprador a la pérdida de la cosa comprada o de una parte de ella.

1713.- No tiene lugar el saneamiento por causa de evicción:

1º.- Cuando sin consentimiento del vendedor, compromete el comprador el negocio en árbitros, antes o después de principiado el pleito.

2º.- Cuando habiéndosele emplazado, no hace citar al vendedor con arreglo al inciso 2º del artículo 1705.

3º.- Si por su culpa perdió la posesión de la cosa.

4º.- Si dejó de oponer en juicio la prescripción, pudiendo haberse servido de esta defensa.

5º.- Si perdió el pleito por razón de su contumacia o rebeldía.

6º.- Si consintió la sentencia condenatoria apelable, no estando delante el vendedor o no habiéndosele notificado a éste.

1714.- La acción de saneamiento se prescribe en cuatro años contados desde la sentencia de evicción.

A la misma prescripción está sujeta la acción rescisoria del artículo 1710.

1715.- Cuando el comprador venciere en la demanda de que pudiera resultar una evicción, no tendrá ningún recurso contra el vendedor ni aun por razón de los gastos que hubiese hecho. (Artículo 1706, número 3º).

1716.- El que ha sufrido evicción de la cosa comprada, podrá intentar contra

la persona de quien su vendedor insolvente la hubiese adquirido, la acción de saneamiento que contra dicha persona competiría al vendedor si la cosa hubiese sido evicta en poder de éste.

Lo cual se entenderá habiendo sido citado el enajenante primitivo con arreglo al inciso 2º del artículo 1705 y sin que pueda el comprador reclamar mayor precio que el que dio por la cosa a su vendedor.

1717.- Si la finca se halla gravada, sin haberse hecho mención de ello en la escritura, con alguna carga o servidumbre no aparente de tal naturaleza que haya lugar a presumir que el comprador no la hubiese adquirido si la hubiera conocido, puede optar entre la rescisión del contrato o la indemnización respectiva.

En ambos casos, la acción se prescribe por un año contado desde el día en que el comprador haya descubierto la carga o servidumbre.

2º

Del saneamiento por defectos o vicios redhibitorios (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 17.250 de fecha 11 de agosto de 2000, artículo 34.*

1718.- El vendedor responde de los defectos o vicios ocultos de la cosa vendida, mueble o inmueble, siempre que la hagan impropia para el uso a que se la destina o que disminuyan de tal modo este uso que a haberlos conocido el comprador, no la hubiera comprado o no habría dado tanto precio por ella.

Pero no es responsable de los defectos manifiestos o que están a la vista ni tampoco de los que no lo están, si eran conocidos del comprador o éste ha podido fácilmente conocerlos en razón de su profesión u oficio. (*)

(*) *Ver: artículo 1720 de esta norma.*

1719.- El vendedor debe sanear los vicios ocultos, aunque los ignorase, no habiendo estipulación en contrario.

La estipulación en términos generales de que el vendedor no responde por vicios redhibitorios de la cosa, no le exime de responder por el vicio oculto de que tuvo conocimiento y de que no dio noticia al comprador.

Es lo mismo si el vendedor debiese conocer el vicio en razón de su oficio o arte. (*)

(*) *Ver: artículos 1720 y 1721 de esta norma.*

1720.- En los casos de los dos artículos anteriores el comprador puede optar entre rescindir la venta abonándosele los gastos causados por ella o rebajar una cantidad proporcional del precio a juicio de peritos.

El ejercicio de una de estas acciones excluye necesariamente el de la otra. (*)

(*) *Ver: artículos 1721 y 1722 de esta norma.*

1721.- Si el vendedor conocía o debía conocer (artículo 1719) los vicios ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador, tendrá éste a más de la opción del artículo precedente, el derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios, si optare por la rescisión del contrato.

1722.- Vendiéndose dos o más cosas juntamente, sea que se haya ajustado un precio por el conjunto o por cada una de ellas, sólo habrá lugar a las acciones concedidas en el artículo 1720 respecto de la cosa viciosa y no respecto del conjunto; a no ser que aparezca que el comprador no hubiera comprado éste sin aquélla o si la venta fuese de un rebaño o piara y el vicio fuese contagioso.

1723.- Si la cosa vendida perece por efecto del vicio inherente a ella, sufrirá la pérdida el vendedor, quedando además obligado según las reglas de los artículos precedentes.

Si la cosa viciosa ha perecido por caso fortuito o por culpa del comprador, le quedará sin embargo a éste el derecho que hubiere tenido a la rebaja del precio.

1724.- Incumbe al comprador probar que el vicio existía al tiempo de la venta y no probándolo se juzga que el vicio nació después.

1725.- No tiene lugar el saneamiento de los vicios ocultos en las ventas forzadas hechas por autoridad de la justicia.

1726.- Las acciones a que dé lugar el saneamiento de los vicios ocultos, según las disposiciones precedentes, se extinguen a los seis meses contados desde la entrega de la cosa vendida. (*)

(*) *Ver: artículo 1727 de esta norma.*

1727.- Lo dispuesto en este párrafo es aplicable a la venta de animales y ganados, con la modificación siguiente:

El término para ejercer el comprador las acciones de que habla el artículo precedente será el establecido por la ley especial.

CAPITULO V

DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPRADOR

1728.- La principal obligación del comprador es pagar el precio de la cosa comprada, en el lugar y en la época determinados por el contrato.

Si no hubiese convenio a este respecto, debe hacer el pago en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida.

Si la venta ha sido *a crédito* o si el uso del país acuerda algún término para el pago, el precio debe abonarse en el domicilio del comprador. (Artículo 1465). (*)

(*) *Ver: artículo 1731 de esta norma.*

1729.- El comprador debe intereses del precio de la venta, mientras no verifique el pago del capital en los casos siguientes:

1º.- Si así se hubiere convenido.

2º.- Si la cosa vendida a dinero de contado produce frutos o renta. (Artículo 1735).

3º.- Si el comprador se hubiere constituido en mora. (Artículo 1336).

1730.- Si el comprador es perturbado o tiene fundado temor de serlo por alguna acción real, puede suspender el pago del precio, hasta que el vendedor haya hecho cesar la perturbación o el peligro; a no ser que este último afiance o que se haya estipulado que, no obstante cualquier contingencia, el comprador verifique el pago. (Artículo 1688).

El vendedor que por falta de fianza no puede tomar el precio tiene derecho de obligar al comprador a que lo deposite. El comprador puede también solicitar el depósito para librarse de los intereses, cuando éstos se debieren.

Si el comprador ha pagado, antes de la perturbación de que habla el primer inciso, no puede pedir la restitución del precio ni que se le afiance las resultas del juicio.

1731.- Si el comprador estuviese constituido en mora de pagar el precio en el tiempo y lugar indicados en el artículo 1728, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de la venta, con indemnización de daños y perjuicios. (Artículo 1431). (*)

(*) *Ver: artículos 1732 y 1738 de esta norma.*

1732.- La cláusula de no transferirse el dominio sino en virtud del pago del precio, no producirá otro efecto que el de la opción enunciada en el artículo precedente; y pagando el comprador el precio, subsistirán en todo caso las enajenaciones que hubiere hecho de la cosa o los derechos que hubiere constituido sobre ella en el tiempo intermedio.

1733.- La resolución de la venta por no haberse pagado el precio dará derecho al vendedor para que se le restituyan los frutos, ya en su totalidad, si ninguna parte del precio se le hubiere pagado, ya en la proporción que corresponda a la parte del precio que no hubiere sido pagada.

El comprador, a su vez, tendrá derecho a que se le restituya la parte que hubiere pagado del precio.

Tratándose de abonar expensas al comprador y deterioros al vendedor, se considerará al primero como poseedor de mala fe, a menos que pruebe haber sufrido en su fortuna menoscabos inculpables que le hayan impedido cumplir lo pactado. (*)

(*) *Ver: artículo 1739 de esta norma.*

1734.- Mas la resolución del contrato no da derecho contra terceros poseedores *de buena fe*; debiendo observarse en este caso lo dispuesto en el artículo 1430.

Si en la escritura de venta de un inmueble aparece haberse pagado el precio, no se admitirá prueba en contrario, sino la de nulidad o falsificación de la escritura y solo en virtud de esta prueba, habrá acción contra terceros poseedores. (*)

(*) *Ver: artículos 1739, 1747 y 1752 de esta norma.*

1735.- Las obligaciones del comprador suponen la entrega de la cosa por parte del vendedor. Si éste no la verificare, cesan aquéllas, a no ser que se hubiera señalado plazo para la entrega. (Artículo 1688).

CAPITULO VI

DE LOS PACTOS ACCESORIOS AL CONTRATO DE VENTA

1736.- Puede agregarse al contrato de venta cualesquiera pactos accesorios lícitos; y se regirán por las reglas generales de los contratos.

Aquí se trata de las cláusulas resolutorias llamadas *pacto comisorio*, *pacto de mejor comprador* y *retroventa*.

SECCION I

DEL PACTO COMISORIO

1737.- Por el pacto comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta.

1738.- El pacto comisorio no priva al vendedor de la elección de acciones que le concede el artículo 1731.

1739.- Los efectos de la resolución serán los determinados en el artículo 1733.

En relación a terceros, el pacto comisorio sólo será eficaz, si constare del respectivo título o escritura. (Artículo 1430 y 1734). (*)

(*) *Ver: artículos 1747 y 1752 de esta norma.*

1740.- Aunque se haya estipulado que por no pagarse el precio al tiempo convenido se resolverá *ipso facto* el contrato de venta, podrá hacerlo subsistir el comprador, pagando el precio, lo más tarde, a las veinticuatro horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda. El Juez no podrá acordar plazo alguno al demandado. (Artículo 1431).

1741.- El pacto comisorio se prescribe en el plazo prefijado por las partes, si no excediere de tres años, contados desde la fecha del contrato. Transcurridos esos tres años, se prescribe necesariamente, sea que se haya estipulado un plazo más largo o ninguno.

SECCION II

DEL PACTO DE MEJOR COMPRADOR

1742.- Si se pacta que, presentándose dentro de cierto tiempo otra persona que mejore la compra, se resuelva el contrato, se cumplirá lo pactado; a menos que el comprador o la persona a quien éste hubiere enajenado la cosa, se allane a mejorar en los mismos términos la compra.

1743.- En ningún caso este pacto podrá exceder del término de seis meses.

1744.- La mejora ofrecida debe ser por la misma cosa como estaba cuando se vendió.

El vendedor debe hacer saber al comprador quién sea el mejor comprador y qué mejores ventajas le ofrece.

No habrá mejora por parte del nuevo comprador, cuando se propusiere adquirir la cosa por cualquier otro contrato que no fuese el de compraventa.

1745.- Cuando la venta sea hecha por dos o más vendedores en común o a dos o más compradores en común, ninguno de ellos podrá presentarse como mejor comprador.

1746.- El pacto de mejor comprador puede ser cedido y pasa a los herederos del vendedor.

Los acreedores del vendedor pueden ejercer ese derecho en caso de concurso. (*)

(*) *Ver: artículo 1749 de esta norma.*

1747.- La disposición del artículo 1430 se aplica al pacto de mejor comprador. (Artículos 1734, 1739 y 1752).

Resuelto el contrato, tendrán lugar las prestaciones mutuas, como en el pacto de retroventa.

SECCION III

DE LA RETROVENTA

1748.- Por el pacto de *retroventa* el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare o el precio de la compra.

1749.- Lo dispuesto en el artículo 1746 es aplicable al derecho que nace del pacto de retroventa.

1750.- Si el derecho ha pasado a dos o más herederos del vendedor o si la venta ha sido hecha conjuntamente por dos o más copropietarios de la cosa vendida, deben todos los interesados ponerse de acuerdo sobre recobrar aquélla por entero; y si así no lo hicieren, no puede el comprador ser obligado a consentir la retroventa parcial.

Se entenderá haber vendido dos o más conjuntamente una cosa, cuando lo hicieren en el mismo acto y por un solo precio.

1751.- Si el comprador ha dejado dos o más herederos, la acción del vendedor no puede ejercitarse contra cada uno, sino por su parte respectiva, bien se halle indivisa la cosa vendida o bien se haya distribuido entre los herederos.

Pero si se ha dividido la herencia y la cosa vendida se ha adjudicado a uno de los herederos, la acción del vendedor puede intentarse contra él por el todo.

1752.- El pacto de retroventa en sus efectos contra terceros se sujeta a lo dispuesto en el artículo 1430. (1734 y 1739).

1753.- El vendedor tendrá derecho a que el comprador le restituya la cosa con sus accesorios y a que le indemnice los deterioros imputables a su hecho o culpa.

A su vez el vendedor está obligado al pago de las expensas necesarias, pero no de las invertidas en mejoras útiles o voluptuarias que se hayan hecho sin su consentimiento.

Los frutos de la cosa vendida se compensarán con los intereses del precio de la venta.

1754.- El tiempo en que se podrá intentar la retroventa no pasará en ningún caso de tres años, contados desde la fecha del contrato.

Pero tendrá siempre derecho el comprador a que se le dé noticia anticipada que no bajará de noventa días para los bienes raíces ni de quince días para los objetos muebles; y si la cosa fuere fructífera y no diere frutos sino de tiempo en tiempo y a consecuencia de trabajos e inversiones preparatorias, no podrá exigirse la restitución demandada, sino después de la previa percepción de frutos.

CAPITULO VII

DE LA VENTA DE UNA COSA COMUN POR LICITACION
O SUBASTA

1755.- Si una cosa común a muchos no puede ser dividida cómodamente y sin menoscabo o si en una partición de bienes comunes se encuentra una cosa que ninguno de los copropietarios quiere o puede admitir por entero, se hará la venta *a martillo* o en subasta pública y el precio se repartirá entre los interesados. (Artículo 1136).

1756.- Cada uno de los copropietarios tiene derecho a reclamar que la venta se haga en subasta pública. Cuando alguno de ellos fuese ausente o menor habilitado o estuviere sujeto a tutela o curaduría, la venta se hará en la forma establecida por el artículo 396 de este Código.

CAPITULO VIII

DE LA CESION DE DERECHOS CREDITORIOS Y HEREDITARIOS

SECCION I

DE LA CESION DE CREDITOS

1757.- El cesionario no se considera dueño del crédito con respecto a terceras personas, mientras no denuncie o notifique la cesión al deudor. (Artículos 1473 y 1543).

La notificación deberá hacerse con exhibición del título (Artículo 768), que llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.774 de fecha 27 de setiembre de 1996, artículo 34, en la redacción dada por la Ley N° 17.202 de fecha 24 de setiembre de 1999, artículo 1.*

1758.- La cesión de un crédito es ineficaz en cuanto al deudor, mientras no se le notifique y la consienta o renueve su obligación en favor del cesionario.

Cualquiera de ambas diligencias liga al deudor con el nuevo acreedor y le impide que pague lícitamente a otra persona. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.774 de fecha 27 de setiembre de 1996, artículo 34, en la redacción dada por la Ley N° 17.202 de fecha 24 de setiembre de 1999, artículo 1.*

1759.- El deudor que no quiere reconocer al cesionario como acreedor y que se proponga deducir excepción que no resulte de la misma naturaleza del crédito, debe hacer conocer su negativa de aceptación dentro de tres días, contados desde la notificación que se le haga de la cesión.

Pasados esos tres días, se supone que consiente la cesión. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.774 de fecha 27 de setiembre de 1996, artículo 34, en la redacción dada por la Ley N° 17.202 de fecha 24 de setiembre de 1999, artículo 1.*

1760.- Siempre que el deudor no haya consentido la cesión o verificado novación, puede oponer al cesionario todas las excepciones que habría podido oponer al cedente, aun las meramente personales. (Artículo 1505). (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.774 de fecha 27 de setiembre de 1996, artículo 34, en la redacción dada por la Ley N° 17.202 de fecha 24 de setiembre de 1999, artículo 1.*

1761.- La venta o cesión de un crédito comprende sus accesorios, como las fianzas, prendas, hipotecas o privilegios.

1762.- El cedente de buena fe responde de la existencia y legitimidad del crédito a su favor, al tiempo de cederlo, a no ser que lo haya cedido como dudoso; pero no responde de la solvencia del deudor o de sus fiadores, a menos de haberse estipulado expresamente o que la insolvencia fuese anterior y pública.

Aun en estos dos casos, sólo responderá del precio recibido y de los gastos del contrato.

El cedente de mala fe responde siempre de la solvencia, de todos los gastos, daños y perjuicios.

1763.- Cuando se ha garantido convencionalmente la solvencia del deudor, esa garantía se refiere a la solvencia actual y nunca se extiende a la futura, a no ser que se haya pactado expresamente.

En todos los casos cesa la garantía de solvencia, si por el hecho o culpa del cesionario, hubiese perecido el crédito o las seguridades que lo garantían.

1764.- La persona contra quien se ha cedido un crédito litigioso, podrá *mientras dure el litis*, compeler al cesionario a que le libere, abonándole el precio verdadero de la cesión con los intereses, desde el día en que se efectuó el pago y el importe de todos los gastos que se le hubieren ocasionado.

Se considera litigioso un crédito, desde que hay demanda y contestación sobre el fondo del derecho. (*)

(*) *Ver: artículo 1765 de esta norma.*

1765.- La disposición del artículo precedente cesa:

1º.- Si la cesión ha tenido lugar entre coherederos o comuneros del *crédito cedido*.

2º.- Si ha sido hecha a un acreedor del cedente en pago de su deuda.

1766.- Las disposiciones de esta sección no se aplicarán a las letras, pagarés a la orden, acciones al portador y otras especies de transmisión que se rigen por la ley comercial.

Los sueldos, dietas, pensiones, jubilaciones y retiros que paga el Estado, las pensiones alimenticias, los sueldos de los empleados de empresas industriales, comerciales o de particulares, los jornales y salarios de los obreros y criados, no podrán cederse a ningún título, no estando vencidos; si estuvieren vencidos, podrán enajenarse hasta la tercera parte de su monto.

Los actos o contratos en que directa o indirectamente se contravenga a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y sin ningún valor.

SECCION II

DE LA CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS (ARTICULO 1664)

1767.- El que vende o cede a título oneroso un derecho de herencia sin especificar los efectos de que se compone, sólo es responsable de su calidad de heredero.

1768.- Si el heredero se había aprovechado ya de los frutos o percibido créditos o vendido efectos hereditarios, deberá reembolsar su valor al cesionario, a no ser que expresamente se los haya reservado en el contrato.

El cesionario deberá por su parte satisfacer al heredero todo lo que éste haya pagado por las deudas y cargas de la herencia y sus propios créditos contra la misma, salvo si se hubiere pactado lo contrario.

La cuota o cuotas hereditarias, que por el derecho de acrecer sobrevinieren al heredero, se entenderán comprendidas en la cesión, salvo que se haya estipulado otra cosa.

TITULO III

DE LA PERMUTA O CAMBIO

1769.- La permuta o cambio es un contrato por el cual los contrayentes se obligan a dar una cosa por otra.

1770.- La permuta se perfecciona por el mero consentimiento; salvo que una de las dos cosas que se permutan o ambas sean bienes raíces o derechos de sucesión hereditaria, en cuyo caso, para la perfección del contrato ante la ley será necesaria escritura pública. (Artículo 1664).

1771.- No pueden permutar los que no pueden comprar y vender.
No puede permutarse las cosas que no pueden venderse.

1772.- Si uno de los contratantes ha recibido ya la cosa que se le prometió en permuta y acredita que no era propia del que la dio, no puede ser obligado a entregar la que él ofreció en cambio y cumple con devolver la que recibió.

1773.- El contratante que sufre evicción de la cosa recibida en permuta podrá optar entre pedir su valor con daños y perjuicios o repetir la cosa que dio en cambio; pero si ella hubiese sido ya enajenada, sólo tendrá lugar el primer arbitrio.

1774.- Si una cosa cierta y determinada, prometida en cambio, perece sin culpa del que debía darla, deja de existir el contrato y la cosa que ya se hubiere entregado, será devuelta al que la hubiere dado.

1775.- En todo lo que no se halle especialmente determinado en este título, la permuta se rige por las disposiciones concernientes a la venta.

TÍTULO IV**DEL ARRENDAMIENTO (*)**

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Texto Ordenado Ley de Vivienda (TOLVI) aprobado por Decreto N° 76/998 de fecha 24 de marzo de 1998, Capítulo X, Sección 3, artículo 152.*

1776.- El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el uso o goce de una cosa, o a ejecutar una obra o a prestar un servicio y la otra a pagar por este uso, goce o servicio, un precio determinado.

El que recibe el precio es *arrendador* y el que lo paga *arrendatario*.

El arrendamiento se perfecciona por el mutuo consentimiento de las partes.

CAPITULO I**DEL ARRENDAMIENTO DE COSAS****SECCION I****DISPOSICIONES GENERALES**

1777.- El arrendamiento de cosas se rige por las normas de este Capítulo, sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales.

Pueden ser objeto del arrendamiento los bienes muebles no fungibles y todos los inmuebles. Exceptúanse aquellas cosas que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales como los de uso y habitación. (Artículo 549).

1778.- El precio puede consistir en dinero o en frutos naturales de la cosa arrendada y en este segundo caso puede fijarse una cantidad determinada o una cuota de los frutos de cada cosecha.

Llámase *renta*, cuando se paga periódicamente.

1779.- El precio podrá determinarse del mismo modo que en el contrato de venta. (Artículos 1666 y 1667).

1780.- Si se ha arrendado separadamente una misma cosa a dos personas,

será preferido el arrendatario a quien se haya entregado la cosa; y si a ninguno se ha entregado, prevalecerá el título anterior.

1781.- Los administradores de bienes ajenos no pueden tomarlos en arriendo sin consentimiento expreso de su dueño.

Los que están privados de ser adjudicatarios de ciertos bienes, no pueden ser arrendatarios de ellos ni con autorización judicial. (Artículo 1678).

1782.- El arrendamiento no podrá contratarse por más de quince años. El que se hiciere por más tiempo caducará a los quince años.

Exceptúase el arrendamiento de aquellos inmuebles que tengan como destino apoyar una presa o embalsar el agua, en cuyo caso el plazo máximo será de treinta años. El que se hiciere por un mayor tiempo caducará a los treinta años. El plazo del arrendamiento de los bienes hipotecados se regulará por lo establecido en el artículo 2328 incisos 2º y 3º.

Exceptúase asimismo, el arrendamiento de inmuebles con destino a forestación de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 5º de la Ley N° 15.939, de 28 de diciembre de 1987, cuyo plazo máximo será de treinta años. El que se hiciera por mayor tiempo caducará a los treinta años. (*)

(*) *El inciso final de este artículo fue agregado por Ley N° 17.555 de fecha 18 de setiembre de 2002, artículo 75.*

1783.- Los derechos y obligaciones que nacen del contrato de arrendamiento pasan a los herederos del arrendador y del arrendatario.

Tratándose de arrendamiento de inmuebles, los sucesores del arrendador a título de herederos o legatarios, tendrán los mismos derechos y obligaciones que aquél.

El plazo no obliga a los herederos del arrendatario.

1784.- Cuando se disputare sobre el precio del arrendamiento verbal que ya se hubiere comenzado a ejecutar y no exista recibo, se estará exclusivamente al juicio de peritos y los costos de esta operación se dividirán entre el arrendador y el arrendatario por partes iguales.

Esta disposición tendrá lugar, sea cual fuere el precio del arrendamiento.

1785.- Durante el término del contrato, no es lícito al arrendador retirar la cosa arrendada del poder del arrendatario, aunque alegue que la necesita para uso propio ni a éste devolverla al arrendador antes de concluirse el tiempo convenido, a no ser pagando el precio de todo el que falte para el vencimiento del contrato.

1786.- Los arrendamientos de fincas urbanas o de predios rústicos, no comprendidos en leyes especiales, en que no se haya establecido término para

la duración del contrato, no darán derecho al inquilino o arrendatario para oponerse al desalojo, sea cual fuere la razón que el dueño alegue para exigirlo.

En esta clase de arrendamientos, serán de ningún efecto las estipulaciones verbales sobre términos.

No se admitirá otra prueba de término establecido, que la que resulte de documento público o privado.

1787.- El arrendador de bienes inmuebles no podrá promover el desalojo sin dar al inquilino o arrendatario el plazo que corresponda. (*)

(*) *Ver: artículo 1793 de esta norma.*

1788.- Si el arrendamiento verbal o escrito fuese de bienes muebles y no se hubiese fijado término para la duración del contrato o el tiempo no estuviese determinado por el servicio especial a que se destina la cosa arrendada o por la costumbre, el arrendador que quisiere hacer cesar el contrato debe dar al arrendatario un plazo ajustado al período o medida del tiempo que regula los pagos. Así, arrendándose a tanto por día, semana o mes, el plazo será respectivamente de un día, semana o mes.

Dicho plazo se contará desde la intimación judicial. (*)

(*) *Ver: artículo 1793 de esta norma.*

1789.- No habiendo tiempo fijo para la duración del contrato conforme a lo dispuesto en los artículos precedentes, el arrendatario puede a su voluntad hacer cesar el arriendo.

1790.- Si vencido el término convencional del arrendamiento, el arrendatario permanece en el uso o goce de la cosa arrendada, no se entenderá que hay tácita reconducción, sino la continuación del arrendamiento concluido y bajo las mismas condiciones, hasta que el arrendador pida la devolución de la cosa; y podrá éste pedirla en cualquier tiempo, sea cual fuere el que el arrendatario hubiere continuado en el uso de la cosa.

Pero las fianzas como las prendas o hipotecas constituidas por terceros, no se extenderán a las obligaciones que resulten de la continuación del arriendo fenecido.

DEROGADO el inciso 3o. en virtud de las disposiciones de la Ley No. 8.153 de 16.12.27, sus modificativas y concordantes (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

1791.- El arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo.

Sin embargo, puede subarrendar para el mismo uso para que arrendó y dentro del plazo que tiene para sí, cuando no se le hubiere prohibido expresamente en el contrato.

La prohibición puede ser parcial o total; y esta cláusula se interpreta siempre estrictamente.

1792.- Si la cosa arrendada fuere enajenada, voluntaria o forzosamente, la persona que suceda en el derecho al propietario, estará obligada *personalmente* a cumplir el arriendo por el plazo convenido, siempre que el contrato conste por escritura pública o privada debidamente registrada.

Exceptúase el caso de haberse reservado expresamente el arrendador en el contrato de arriendo la facultad de enajenar. (*)

Si el contrato no estuviese inscripto, el adquirente no estará obligado a respetar el plazo y podrá dar al inquilino el desalojo como en los casos de arrendamiento sin plazo. (**)

(*) *Ver: artículo 1793 de esta norma.*

(**) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 59.*

1793.- En el caso del inciso segundo del artículo anterior, enajenada la cosa antes de cumplirse el plazo del arriendo, no se deberá indemnización de daños y perjuicios, a no ser que se hubiere pactado.

Si se hubiere estipulado indemnización, el arrendatario no podrá ser privado del uso y goce de la cosa sin que se le satisfaga por el arrendador o por el nuevo dueño los daños y perjuicios. (Artículo 1809).

El arrendatario gozará además del respectivo plazo legal según los artículos 1787 y 1788; y si el tiempo que resta del estipulado en el contrato fuese menor, se computará en aquél.

1794.- Los arrendamientos hechos por el cónyuge administrador extraordinario, por el tutor o curador de los bienes que tiene a su guarda y por el usufructuario de los que corresponden al usufructo, se regirán (en cuanto a su duración) por lo dispuesto en los respectivos Títulos del Código. (Artículos 406, 511 y 1983).

1795.- Los arrendamientos de bienes fiscales, municipales o de establecimientos públicos están sujetos a reglamentos particulares y en lo que no lo estuvieren, a las disposiciones de este Título.

SECCION II

DE LAS OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR

1796.- El arrendador es obligado:

1º.- A entregar la cosa arrendada.

2º.- A mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada.

3º.- A librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada.

1797.- El arrendador debe entregar la cosa al arrendatario con los accesorios que dependen de ella al tiempo del contrato en buen estado de reparaciones de toda clase, salvo si se conviniesen en que la entrega se verifique en el estado en que se halla la cosa.

Este convenio se presume cuando se arriendan edificios arruinados y cuando se entra en el goce de la cosa sin exigir reparaciones en ella.

1798.- La obligación de mantener la cosa en buen estado, consiste en hacer durante el arriendo todas las reparaciones necesarias a excepción de las locativas, las cuales corresponden generalmente al arrendatario.

El arrendador será obligado aun a las reparaciones locativas, si los deterioros que las han hecho necesarias provinieren de fuerza mayor o caso fortuito o de mala calidad de la cosa arrendada.

1799.- El arrendador, en virtud de la obligación de librar al arrendatario de toda turbación o embarazo, no podrá sin consentimiento de éste, mudar la forma de la cosa arrendada ni hacer en ella obras o trabajos algunos que puedan turbarle o embarazarle en su goce.

Con todo, si se trata de reparaciones indispensables que no puedan diferirse hasta la conclusión del arriendo, será el arrendatario obligado a tolerarlas, aunque le priven del goce de una parte de la cosa arrendada; pero tendrá derecho a que se le rebaje entretanto el precio o renta a proporción de la parte de que fuere privado.

Si las reparaciones recaen sobre tan grande parte de la cosa que el resto aparezca insuficiente para el objeto con que se arrendó, podrá el arrendatario dar por terminado el arrendamiento.

Lo mismo será cuando las reparaciones hayan de embarazar el goce de la cosa demasiado tiempo, de manera que no pueda subsistir el arriendo sin grave molestia o perjuicio del arrendatario.

También tendrá el arrendatario los derechos expresados, cuando el arrendador fuese obligado a sufrir trabajo del propietario vecino en las paredes divisorias o hacerlas éstas de nuevo. (*)

(*) *Ver: artículo 1800 de esta norma.*

1800.- Fuera de los casos previstos en el artículo precedente si el arrendatario es turbado en su goce por el arrendador o por cualquiera persona a quien éste pueda vedarlo, tendrá derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios.

1801.- El arrendador no está obligado a garantizar al arrendatario de las vías de hecho de terceros, que no pretendan derecho a la cosa arrendada. En este caso el arrendatario, a nombre propio, perseguirá a los autores del daño y aunque éstos *fuesen insolventes*, no tendrá acción contra el arrendador.

1802.- La acción de terceros que pretendan derecho a la cosa arrendada se dirigirá contra el arrendador.

El arrendatario será sólo obligado a notificarle la turbación o molestia que reciba de dichos terceros, por consecuencia de los derechos que aleguen y si lo omitiere o dilatare culpablemente, abonará los daños y perjuicios que de ellos se sigan al arrendador.

En cuanto al ejercicio de las acciones posesorias y la que se concede para el caso de violento despojo, se estará a lo dispuesto en el Capítulo II, Título V del Libro Segundo.

1803.- Si el arrendador fuese vencido en juicio sobre una parte de la cosa arrendada, podrá el arrendatario reclamar una disminución del precio o la rescisión del contrato, si la parte de que se le priva fuese una parte principal de la cosa o del objeto del arrendamiento y los daños y perjuicios que le sobrevinieren.

Sin embargo, el arrendatario no podrá pedir indemnización de daños y perjuicios, si al hacer el contrato, hubiese conocido el peligro de la evicción.

1804.- El arrendador responde de los vicios o defectos graves de la cosa

arrendada, que impidieran el uso de ella, aunque él no los hubiese conocido o hubiesen sobrevenido en el curso del arriendo y el arrendatario puede pedir la disminución del precio o la rescisión del contrato, salvo si hubiere conocido los vicios o defectos de la cosa.

Si el vicio o defecto era conocido del arrendador al tiempo del contrato o era tal que debiera por los antecedentes preverlo o por su profesión conocerlo, tendrá además derecho el arrendatario a que se le indemnicen los daños y perjuicios.

1805.- Si durante el contrato la cosa arrendada fuese destruida en su totalidad por caso fortuito o fuerza mayor, el contrato queda rescindido.

Si ella es destruida sólo en parte, puede el arrendatario pedir la disminución de precio o la rescisión del contrato, según fuese la importancia de la parte destruida.

Si la cosa fuese solamente deteriorada, el contrato subsistirá, pero el arrendador es obligado a reparar el deterioro hasta poner la cosa en buen estado.

En los casos de este artículo, no ha lugar a la indemnización de daños y perjuicios.

1806.- Si por caso fortuito o fuerza mayor, el arrendatario es obligado a no usar o gozar de la cosa o que ésta no pueda servir para el objeto de la convención, el arrendatario podrá pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa.

Pero si el caso fortuito o de fuerza mayor no afecta a la cosa misma, las obligaciones del arrendatario continuarán como antes.

1807.- El arrendador es obligado a reembolsar al arrendatario el costo de las reparaciones indispensables, no locativas, que el arrendatario hiciere en la cosa arrendada, siempre que éste no las haya hecho necesarias por su culpa y que haya dado pronta noticia al arrendador para que las hiciese por su cuenta. Si la noticia no pudo darse en tiempo o si el arrendador no trató de hacer oportunamente las reparaciones, se abonará al arrendatario el costo razonable, probada la necesidad.

1808.- El arrendador no es obligado a reembolsar el costo de las mejoras útiles en que no ha consentido con la expresa condición de abonarlas; pero el

arrendatario podrá separar y llevarse los materiales, sin detrimento de la cosa arrendada, a menos que el arrendador esté dispuesto a abonarle lo que valdrían los materiales considerándolos separados.

1809.- En todos los casos en que se deba indemnización al arrendatario, no podrá éste ser expelido o privado de la cosa arrendada sin que previamente se le pague o asegure el importe por el arrendador.

Esta regla no se extiende al caso de extinción involuntaria del derecho del arrendador sobre la cosa arrendada.

1810.- El arrendador es obligado a pagar las cargas y contribuciones sobre la cosa arrendada.

SECCION III

DE LAS OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO

1811.- Las principales obligaciones del arrendatario son:

1°.- Usar de la cosa según los términos o espíritu del contrato.

2°.- Emplear en la conservación de la cosa el cuidado de un buen padre de familia.

3°.- Pagar el precio o renta.

1812.- No podrá el arrendatario destinar la cosa a otros objetos que los convenidos o a falta de convención expresa, a aquellos a que la cosa es naturalmente destinada o que deben presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país.

Si el arrendatario contraviniere a esta regla, podrá el arrendador reclamar la rescisión del contrato con indemnización de daños y perjuicios o limitarse a esta indemnización dejando subsistir el arriendo.

1813.- Si el arrendatario no usare de la cosa como un buen padre de familia, responderá de los daños y perjuicios y aun tendrá derecho el arrendador para demandar la rescisión del arrendamiento en el caso de un grave y culpable descuido.

1814.- Será un goce abusivo en los predios rústicos arrancar árboles, hacer

cortes de montes, salvo si el arrendatario lo hiciera para sacar la madera necesaria para los trabajos del cultivo de la tierra o mejora del predio o a fin de proveerse de leña o carbón para el gasto de la casa.

1815.- El pago del precio o renta se hará en los plazos convenidos y a falta de convención, conforme a la costumbre del país.

1816.- Si se hubiese estipulado plazo y el arrendatario no abonase el alquiler o renta, previa la intimación correspondiente podrá demandarse la resolución del contrato con la sanción que establece el inciso 1º del artículo 1823, siempre que se adeuden dos períodos de alquiler o renta, si el pago es por períodos que no excedan de tres meses; pero si la paga fuese por períodos mayores, bastará que el arrendatario no pague uno solo para que se pueda pedir la resolución del contrato.

1817.- El arrendatario de predio rústico no tendrá derecho para pedir rebaja del precio o renta, alegando casos fortuitos extraordinarios que han deteriorado o destruido la cosecha.

Exceptúase el colono aparcerero, pues en virtud de la especie de sociedad que media entre el arrendador y él, toca al primero una parte proporcional de la pérdida que por caso fortuito sobrevenga al segundo, antes o después de percibirse los frutos, salvo que el accidente acaezca durante la mora del colono aparcerero en contribuir con su cuota de frutos al arrendador.

1818.- El arrendatario es obligado a las reparaciones locativas.

Se entiende por reparaciones locativas las que según la costumbre del lugar son de cargo del arrendatario y en general las de aquellas especies de deterioro que ordinariamente se producen por culpa del arrendatario o de sus dependientes.

1819.- Las reparaciones locativas a que es obligado el arrendatario o inquilino de una casa, se reducen a mantener el edificio en el estado en que lo recibió; pero no es responsable de los deterioros que provengan del tiempo y uso legítimo o de fuerza mayor o caso fortuito o de la mala calidad del edificio, por su vetustez, por la naturaleza del suelo o por defectos de construcción.

1820.- El inquilino será obligado especialmente:

1°.- A conservar la integridad interior de las paredes, azoteas, pavimentos y cañerías, reponiendo las paredes, revoques, baldosas o ladrillos que durante el arrendamiento se destruyan o se desencajen.

2°.- A reponer los cristales quebrados en las ventanas, puertas y tabiques.

3°.- A mantener en estado de servicio las puertas, ventanas y cerraduras.

4°.- A conservar las paredes, pavimentos y demás partes interiores del edificio medianamente aseados.

La negligencia grave bajo cualquiera de estos respectos, dará derecho al arrendador para pedir indemnización de daños y perjuicios y aun para demandar la rescisión del contrato.

1821.- El subarrendatario tiene respecto del arrendatario las mismas obligaciones que éste hacia el arrendador originario.

No está obligado respecto del arrendador originario sino hasta la suma concurrente del precio que adeuda del subarrendamiento al tiempo del embargo o de la intimación judicial que se le haga a nombre del arrendador originario.

1822.- El arrendatario es responsable no sólo de su propia culpa, sino de la de su familia, dependientes, huéspedes o subarrendatarios.

1823.- Cuando por culpa del arrendatario se rescinde el arrendamiento, estará obligado a la indemnización de daños y perjuicios y especialmente al pago del precio o renta por el tiempo que falte para vencerse el término del contrato.

Sin embargo, podrá eximirse de este pago, proponiendo bajo su responsabilidad persona idónea que le sustituya por el tiempo que falta y prestando al efecto fianza u otra seguridad competente.

1824.- No siendo notorio el accidente de fuerza mayor o caso fortuito que motivó la pérdida o deterioro de la cosa arrendada, la prueba de haber ocurrido ese accidente incumbe al arrendatario. En defecto de prueba responderá de la pérdida o deterioro.

Si fuere notorio el accidente de fuerza mayor o caso fortuito o lo probase el arrendatario, la prueba de que hubo culpa por parte de éste, su

familia, dependientes, huéspedes o subarrendatarios corresponderá al arrendador. (*)

(*) *Ver: artículos 1825 y 1827 de esta norma.*

1825.- Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable al caso de incendiarse la cosa arrendada. El incendio será reputado caso fortuito hasta que el arrendador o el que fuere perjudicado, pruebe haber habido culpa por parte de las personas designadas en el citado artículo. (*)

(*) *Ver: artículo 1827 de esta norma.*

1826.- En el arrendamiento de fincas urbanas o rústicas corresponderá al arrendador aunque el contrato esté afianzado, acción ejecutiva para el cobro de los alquileres o rentas, requiriendo mandamiento de embargo sobre los bienes embargables del deudor.

1827.- Finalizado el contrato, debe el arrendatario devolver la cosa en el mismo estado en que se le entregó, tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimos.

Si en el contrato no se ha especificado el estado en que se encontraba al tiempo de la entrega, se presume que el arrendatario la ha recibido en buen estado de conservación y debe así devolverla, salvo la prueba en contrario.

En cuanto a los daños y pérdidas sobrevenidos durante su goce, deberá probar que no sobrevinieron por su culpa ni por culpa de las personas por quienes responde, salvo lo dispuesto en los artículos 1824 y 1825.

1828.- Si el arrendamiento hubiere sido de un predio rústico con animales de trabajo o de cría y no se previno en el contrato el modo de restituirlos, pertenecerán al arrendatario todas las utilidades de dichos animales y los animales mismos, con la obligación de dejar en el predio, al fin del arriendo, igual número de cabezas de las mismas edades y calidades.

1829.- La restitución de la cosa raíz se verificará desocupándola enteramente, poniéndola a disposición del arrendador y entregándole las llaves.

1830.- El arrendatario de bienes muebles será condenado al resarcimiento de daños y perjuicios y a lo demás que contra él compete como injusto

detentador, si, finalizado el término del arriendo, no restituye la cosa, siendo requerido por el arrendador.

Todo arrendatario constituido en mora será responsable de cualquier daño que sufra la cosa, aunque provenga de fuerza mayor o caso fortuito.

CAPITULO II

DEL ARRENDAMIENTO DE OBRAS

1831.- Habrá arrendamiento de obras cuando una de las partes se hubiere obligado a prestar un servicio y la otra a pagarle por ese servicio un precio en dinero.

1832.- Si una de las partes se hubiere obligado a prestar un servicio sin retribución o por una retribución que no sea un precio en dinero o se hubiere obligado a abstenerse de un hecho, estos contratos serán *innominados*; pero se regirán por las disposiciones de este capítulo en todo lo que fuere aplicable.

1833.- Toda especie de servicio o trabajo *material* o *inmaterial*, *mecánico* o *liberal* puede ser objeto de este contrato.

Aunque la retribución del servicio o trabajo tenga el nombre de *honorarios* o *derechos*, el contrato será arrendamiento de obras y no mandato, si no colocare a quien presta el servicio, respecto de tercero, como representante o mandatario de la persona a quien se hace el servicio.

En la disposición de este artículo están comprendidos los servicios profesionales de los abogados y aun de los procuradores, cuando funcionaren sin poder de las partes.

1834.- El que hiciere algún trabajo o prestase algún servicio a otro puede demandar el precio, aunque ningún precio o retribución se hubiese ajustado, siempre que el tal servicio o trabajo fuese de su profesión o modo de vivir *honesto*. En este caso se presumirá que los interesados ajustaron el precio de costumbre para ser determinado judicialmente, si hubiere duda.

Si el servicio o trabajo, aunque honesto, no fuere relativo a la profesión o modo de vivir del que lo hizo, sólo tendrá lugar lo dispuesto en el inciso anterior cuando, por las circunstancias, no se presumiere la intención de

beneficiar a la persona a quien el servicio se hacía. Esta intención se presume si el servicio no fue solicitado o si el que lo prestó habitaba en casa de la otra parte.

En los casos de este artículo, si ha habido ajuste sobre el precio o retribución, lo pactado se cumplirá, siendo entre personas capaces y no probándose que intervino fuerza, error, dolo o fraude.

1835.- El que hubiese criado alguna persona no puede ser obligado a pagarle sueldos por servicios prestados, hasta la edad de quince años cumplidos.

Tampoco serán obligados a pagar sueldos los tutores que conservaren en su compañía a los menores de quince años, por no poder darles acomodo.

1836.- Nadie puede obligar sus servicios personales, sino temporalmente o para obra determinada.

1837.- Los criados domésticos podrán ser despedidos y despedirse ellos mismos en todo tiempo sin expresión de causa.

Se observará, además, con respecto a patronos y sirvientes lo que determinen las disposiciones especiales.

1838.- Están igualmente sujetos a disposiciones especiales, las relaciones entre artesanos y aprendices y las de maestros y discípulos.

1839.- Los menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados por cierto término no pueden despedirse ni ser despedidos antes del cumplimiento del contrato sin justa causa.

El contraventor responderá de los daños y perjuicios.

1840.- Si se da a uno el encargo de hacer una obra, puede convenirse que pondrá sólo su industria o que suministrará también los materiales.

1841.- Si el obrero sólo pone su trabajo o industria, pereciendo la cosa, no responde sino de los efectos de su impericia.

Sin embargo, no puede reclamar ningún estipendio, si perece la cosa antes de haber sido entregada, a no ser que haya habido morosidad para recibirla o que la destrucción haya provenido de la mala calidad de los materiales, con tal que haya advertido oportunamente esta circunstancia al dueño.

1842.- Si el obrero pone también los materiales, son de su cuenta las pérdidas y deterioros de cualquiera manera que acaezcan, a no ser que el que mandó hacer la obra incurriere en mora de recibirla.

1843.- El obrero que, por impericia o ignorancia de su arte, inutiliza o deteriora alguna obra para la que hubiere recibido los materiales, está obligado a pagar el valor de éstos, guardando para sí la cosa inutilizada o deteriorada.

1844.- El arquitecto y el empresario de un edificio son responsables por espacio de diez años, si aquél se arruina en todo o en parte por vicio de la construcción o por vicio del suelo o por la mala calidad de los materiales, haya suministrado éstos o no el propietario y a pesar de cualquiera cláusula en contrario.

El término en que la acción puede nacer es de dichos diez años contados desde la entrega; pero una vez nacida la acción por haberse manifestado el vicio, dura el tiempo ordinario de las acciones personales.

La disposición del primer inciso se entiende salvo la prueba en contrario que haga el arquitecto o empresario. (Artículo 1327).

1845.- Cuando un empresario se ha encargado por un tanto de la ejecución de una obra conforme a un plan acordado, no puede reclamar aumento alguno de precio, ni bajo pretexto de la mano de obra o de los materiales ni de modificaciones hechas en el plan, a no ser que haya sido autorizado para éstas por escrito y por un precio convenido con el propietario.

1846.- Si la obra encomendada se hubiere ajustado por número o medida, sin determinar la cantidad cierta de número o medida, tanto el que mandó hacer la obra, como el empresario, pueden dar por concluido el contrato, pagándose el importe de la obra verificada.

1847.- El que encarga una obra para la que el obrero debe poner los materiales, puede a su arbitrio rescindir el contrato, aunque la obra ya esté empezada a ejecutar, indemnizando al obrero de todos los gastos y trabajos y de todo lo que hubiera podido ganar en la misma obra.

1848.- Concluida la obra conforme a la estipulación o en su defecto con arreglo al uso general, el que la encargó está obligado a recibirla; pero si creyere

que no está con la solidez y lucimiento estipulados o de uso, tiene derecho a que sea examinada por peritos nombrados por ambas partes.

Si resultare no haberse verificado la obra en la forma debida, tiene el obrero que ejecutarla de nuevo o devolver el precio que menos valiese, con indemnización de los perjuicios.

1849.- Cuando se ha encargado cierta obra a una persona por razón de sus cualidades personales, el contrato se rescinde por la muerte de esta persona, pero nunca por la muerte del que encargó la obra.

Sin embargo, éste debe abonar a los herederos a proporción del precio convenido el valor de la parte de la obra ejecutada y de los materiales preparados, siempre que de estos materiales reporte algún beneficio.

Lo mismo será, si el que contrató la obra no puede acabarla por alguna causa independiente de su voluntad.

1850.- El empresario de una obra responde de las faltas y omisiones de las personas que sirven bajo sus órdenes, salva su acción contra esas personas.

1851.- Los albañiles, carpinteros y demás obreros que han sido empleados por un empresario para la construcción de obra estipulada por un tanto, no tienen acción contra el propietario para quien se ejecuta la obra sino hasta la suma concurrente de lo que éste adeuda al empresario en el momento en que le hagan saber judicialmente la acción deducida.

1852.- Los carpinteros, herreros y demás obreros que hacen directamente obras por un tanto, en lo relativo a su especialidad, están sujetos a las reglas arriba prescriptas y son empresarios en la parte sobre que contratan.

1853.- El precio de la obra debe pagarse al hacerse la entrega, salvo pacto en contrario.

No pagándose el precio en el tiempo estipulado, correrán los intereses legales desde la interpelación judicial.

1854.- El que ha ejecutado una obra sobre cosa mueble, tiene el derecho de retenerla hasta que se le pague. (*)

(*) *Ver: artículo 2301 de esta norma.*

1855.- El servicio de los empresarios o agentes de transportes, tanto por tierra como por agua, así de personas como de cosas, se regirá por las disposiciones de la ley comercial.

TITULO V

DEL CENSO

CAPITULO I

DE LA NATURALEZA Y FORMA DEL CENSO

1856.- Se constituye un censo cuando una persona contrae la obligación de pagar a otra un rédito anual, reconociendo el capital correspondiente *que el acreedor no podrá exigir fuera de los casos determinados por la ley y gravando una finca suya con la responsabilidad del rédito y del capital.*

Este rédito se llama también *censo o cánon*; la persona que lo debe se dice *cenuario* y su acreedor *consualista*.

1857.- El censo puede constituirse por testamento, por donación, venta o de cualquier otro modo equivalente a éstos.

1858.- No podrá constituirse censo sino sobre predios urbanos o rústicos y con inclusión del suelo.

1859.- El capital deberá siempre consistir o estimarse en dinero. Sin este requisito, no habrá constitución de censo.

1860.- La constitución de un censo deberá siempre constar por escritura pública inscrita en el Registro correspondiente y sin este requisito no valdrá como constitución de censo, pero el obligado a pagar la pensión lo estará en los términos del testamento o contrato y la obligación será personal.

1861.- No podrá estipularse que el censo se pague en cierta cantidad de frutos. La infracción de esta regla viciará de nulidad la constitución del censo.

1862.- Todo censo, aun estipulado con la calidad de perpetuo, es redimible. Sin embargo, las partes pueden convenir en que la redención no se verifique antes de un plazo que no podrá exceder de diez años o sin haberse advertido al censualista con la antelación que se determine.

La cláusula de no poder el censuario redimir en un plazo que exceda de diez años, será reducida a ese plazo, subsistiendo en lo demás la constitución del censo.

1863.- No vale, en la constitución del censo, el pacto de no enajenar la finca acensuada ni otro alguno que imponga al censuario más cargas que las expresadas en este título.

1864.- El acreedor censualista, al tiempo de entregar el recibo de cualquier pensión o cánon, puede obligar al deudor a que le dé un resguardo en que conste haberse hecho el pago.

1865.- El censo se prescribe por treinta años, contados en conformidad a lo que se dispone en el artículo 1219.

Transcurrido ese tiempo, no se podrá demandar las pensiones devengadas ni el capital del censo.

CAPITULO II

DE LOS EFECTOS DEL CENSO

1866.- La obligación de pagar el censo sigue siempre al dominio de la finca acensuada, aun respecto de los cánones devengados antes de la adquisición de la finca; salvo siempre el derecho del censualista para dirigirse contra el censuario constituido en mora, aun cuando deje de poseer la finca y salva además la acción de saneamiento del nuevo poseedor de la finca contra quien haya lugar. (*)

(*) *Ver: artículo 1868 de esta norma.*

1867.- El censuario no es obligado al pago del capital ni de los cánones devengados antes de la adquisición de la finca acensuada, sino con esta misma finca; pero al pago de los cánones vencidos durante el tiempo que ha estado en posesión de la finca, es obligado con todos sus bienes. (*)

(*) *Ver: artículo 1868 de esta norma.*

1868.- Lo dispuesto en los artículos precedentes tendrá lugar aun cuando la finca hubiere perdido mucha parte de su valor o se hubiere hecho totalmente infructífera.

Pero el censuario se descargará de toda obligación, poniendo la finca, en el estado en que se hallare, a disposición del censalista y pagando los cánones vencidos según la regla del artículo precedente.

Con todo, si por dolo o culpa grave del censuario pereciere o se hiciere infructífera la finca, será responsable de los daños y perjuicios.

1869.- Siempre que la finca acensuada se divida por sucesión hereditaria, se entenderá dividido el censo en partes proporcionales a los valores de las hijuelas o nuevas fincas resultantes de la división.

Para la determinación de los valores de éstas, se tasarán y será aprobada la tasación por el Juez con audiencia del censalista.

El Juez mandará inscribir en el competente Registro, a costa de cada censuario, la providencia que fija la porción de capital con que haya de quedarse gravada la respectiva hijuela.

Quedarán así constituidos tantos censos distintos e independientes y separadamente redimibles, cuantas fuesen las hijuelas gravadas.

A falta de la inscripción antedicha, subsistirá el censo primitivo y cada hijuela quedará gravada con la responsabilidad de todo el censo.

Si de la división hubiese de resultar que toque a una hijuela menos de 500 unidades reajustables del primitivo capital, no podrá dividirse el censo y cada hijuela será responsable de todo él. (*)

(*) *Ver: artículo 1870 de esta norma.*

1870.- El capital impuesto sobre una finca podrá en todo caso reducirse a una parte determinada de ella o trasladarse a otra finca, con las formalidades y bajo las condiciones prescritas en el artículo precedente.

Será justo motivo para no aceptar esta traslación o reducción la insuficiencia de la nueva finca o hijuela para soportar el gravamen y se tendrá por insuficiente la finca o hijuela, cuando el total de los gravámenes que haya de soportar exceda de la mitad de su valor.

Se contarán en el gravamen los censos o hipotecas con que estuviere ya gravada la finca.

La traslación o reducción se hará con las formalidades indicadas arriba y a falta de ellas quedará subsistente el primitivo censo.

1871.- La redención del censo se verificará pagando al censalista o consignando en forma el capital y cánones atrasados, si los hubiere.

La declaración de estar redimido el censo se inscribirá en el competente registro.

1872.- No habiendo pacto en contrario, la redención no puede hacerse por partes.

1873.- El censalista no puede exigir el capital del censo u obligar al censuario a que lo redima, sino en caso de quiebra o insolvencia de éste o cuando hubiere dejado pasar tres períodos seguidos sin pagar el cánón y requerido judicialmente no pagase dentro de diez días contados desde el requerimiento.

1874.- El censo perece por la destrucción completa de la finca acensuada, entendiéndose por destrucción completa la que hace desaparecer totalmente el suelo.

Reapareciendo el suelo, aunque sólo en parte, revivirá todo el censo, pero nada se deberá por pensiones del tiempo intermedio.

TITULO VI

DE LAS COMPAÑÍAS O SOCIEDADES (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.858 de fecha 3 de setiembre de 1997, artículo 19.*

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

1875.- La compañía o sociedad es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartirse entre sí los beneficios que de ello provengan. (Artículo 1922).

1876.- La simple comunidad de bienes o de intereses, aun resultantes de un hecho voluntario de las partes, no constituye una sociedad.

1877.- Es de esencia de toda sociedad que cada socio ponga en ella alguna

parte de capital, ya consista en dinero, créditos o efectos, ya en una industria, servicio o trabajo apreciable en dinero.

1878.- Es nula la convención por la cual se estipulare que la totalidad de las ganancias haya de pertenecer a uno solo de los asociados; así como la que estableciere que alguno de los socios no haya de tener parte en los beneficios.

No se entiende por beneficio el puramente moral, no apreciable en dinero.

1879.- Es igualmente nula la estipulación por la que quedasen exonerados de toda contribución en las pérdidas las sumas o efectos aportados al fondo social por uno o más de los socios. (Artículo 1892, número 3°).

1880.- Se prohíbe toda sociedad a título universal, sea de bienes presentes o futuros o de unos y otros.

Se prohíbe asimismo toda sociedad de ganancias a título universal, excepto lo que se dispone acerca de los esposos en el título respectivo.

Puede con todo ponerse en sociedad cuantos bienes se quiera, especificándolos.

1881.- Si se formare de hecho una sociedad que no pueda existir legalmente ni como sociedad ni como donación ni como contrato alguno, cada socio tendrá la facultad de pedir que se liquiden las operaciones anteriores y de sacar sus aportes.

Esta disposición no se aplicará a las sociedades que son nulas por lo ilícito de la causa u objeto, las cuales se registrarán por la ley penal.

1882.- La nulidad del contrato de sociedad no perjudica a las acciones que corresponden a terceros de buena fe contra todos y cada uno de los asociados por las operaciones de la sociedad, si existiere de hecho.

1883.- La existencia del contrato de sociedad, se probará con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo II, Título IV, Parte Primera de este Libro.

1884.- El valor del contrato será el de todo el fondo social para la tasa de la ley.

1885.- Las reglas de este Título no son aplicables a las compañías o sociedades

de comercio, sino en los puntos que en nada se opongan a las disposiciones de la legislación comercial.

1886.- Podrá estipularse que la sociedad que se contrae, aunque civil por su naturaleza, se sujete a las reglas de la sociedad comercial.

CAPITULO II

DE LAS PRINCIPALES CLAUSULAS DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

1887.- No expresándose plazo o condición para que tenga principio la sociedad, se entenderá contraída desde el momento mismo de la celebración del contrato.

Si no se expresare plazo o condición para que tenga fin, se entenderá contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de renuncia.

Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durase el negocio.

1888.- A falta de estipulación expresa, las ganancias y pérdidas se dividen entre los socios a prorrata de sus respectivos capitales.

Si habiéndose expresado la parte de ganancias, no se hizo mención de las pérdidas, se dividirán éstas como se habrían dividido aquéllas y al contrario. No habiéndose determinado en el contrato de sociedad la parte que en las ganancias deberá llevar el socio *mere* industrial, sacará éste una parte igual a la del socio que introdujo menos capital.

Si hubiere un solo socio de capital y otro u otros de industria, las ganancias, a falta de pacto especial, se dividirán por partes iguales.

En cuanto a las pérdidas, no se incluirá en el repartimiento de ellas al industrial, a menos que por pacto expreso se hubiere éste constituido partícipe. (*)

(*) *Ver: artículo 1889 de esta norma.*

1889.- Si los socios se han convenido en confiar a un tercero la designación de la parte de cada uno en las ganancias y pérdidas, solamente podrá ser impugnada la designación hecha por él, cuando evidentemente haya faltado a la equidad; y ni aun con este motivo podrá reclamar el socio que haya principiado

a ejecutar la decisión del tercero o que no la haya impugnado en el término de tres meses contados desde que le fue conocida.

A ninguno de los socios puede cometerse esta designación.

Si el tercero a quien se ha cometido fallece antes de cumplir su encargo o por otra causa cualquiera no lo cumple y la sociedad hubiere marchado sin designación, se aplicará el artículo anterior.

1890.- La distribución de beneficios y pérdidas no podrá hacerse en consideración a la gestión de cada socio ni respecto de cada negocio en particular.

Los negocios en que la sociedad sufre pérdidas deberán compensarse con aquellos en que reporta ganancias y las cuotas estipuladas recaerán sobre el resultado definitivo de las operaciones sociales.

1891.- La mayoría de los socios, si no hay estipulación en contrario, no tiene facultad de variar ni modificar las convenciones sociales ni puede entrar en operaciones diversas de las determinadas en el contrato, sin el consentimiento unánime de todos los socios.

En los demás casos, todos los negocios sociales serán decididos por el voto de la mayoría.

Los votos se computan en proporción de los capitales, contándose el menor capital por un voto y fijándose el número de votos de cada uno por la multiplicación del capital menor. El socio industrial tendrá un voto.

1892.- Se prohíben las estipulaciones siguientes:

1°.- Que ninguno de los socios pueda renunciar a la sociedad, aunque haya justa causa.

2°.- Que cualquiera de los socios pueda retirar lo que tuviere en la sociedad, cuando quisiera.

3°.- Que al socio o socios capitalistas se les ha de restituir sus partes con un premio designado o con sus frutos o con una cantidad adicional, haya o no ganancias.

4°.- Asegurar al socio capitalista su capital o las ganancias eventuales.

5°.- Estipular en favor del socio industrial una retribución fija por su trabajo, haya o no ganancias.

CAPITULO III**DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD**

1893.- La administración de la sociedad puede confiarse a uno o más de los socios, sea por el contrato de sociedad, sea por acto posterior unánimemente acordado.

En el primer caso, las facultades administrativas del socio o socios hacen parte de las condiciones esenciales de la sociedad, a menos de expresarse otra cosa por el contrato.

1894.- El socio constituido administrador por el contrato social, no puede renunciar su cargo, sino por causa prevista en el acto constitutivo o unánimemente aceptada.

Tampoco podrá ser removido de su cargo, sino en los casos previstos o por causa grave y se tendrá por tal la que lo haga indigno de la confianza o incapaz de administrar útilmente. Cualquiera de los socios podrá exigir la remoción, justificando la causa.

Faltando alguna de las causas antedichas, la renuncia o remoción pone fin a la sociedad.

1895.- En el caso de justa renuncia o justa remoción del socio administrador designado en el acto constitutivo, podrá continuar la sociedad, siempre que todos los socios convengan en ello y en la designación de un nuevo administrador o en que la administración pertenezca en común a todos los socios.

Habiendo varios socios administradores designados en el acto constitutivo, podrá también continuar la sociedad, acordándose unánimemente que ejerzan la administración los que restan.

1896.- Si la administración se confiere por acto posterior al contrato, puede renunciarse y revocarse por mayoría de los socios, según las reglas del mandato ordinario.

1897.- El socio encargado de la administración por cláusula especial del contrato, puede a pesar de la oposición de sus compañeros, ejercer todos los actos que dependan de su administración, con tal que sea sin fraude. (Artículo 1920).

1898.- Cuando se encarga a varios socios de la administración, sin que se determinen sus funciones y sin que se exprese que no podrá el uno obrar sin el otro, puede cada uno ejercer todos los actos de la administración.

Si se ha estipulado que nada pueda hacer el uno sin el otro, ninguno puede sin nueva convención, obrar en ausencia del compañero, aun en el caso de que éste se hallara en la imposibilidad personal de concurrir a los actos de la administración.

1899.- El socio o socios administradores deben ceñirse a los términos de su mandato y en lo que éste callare se entenderá que no les está permitido contraer a nombre de la sociedad otras obligaciones ni hacer otras adquisiciones o enajenaciones que las comprendidas en el giro ordinario de ella.

1900.- Corresponde al socio administrador cuidar de la reparación y mejora de los objetos que constituyen el capital fijo de la sociedad; pero no podrá empeñarlos ni hipotecarlos ni alterar su forma, aunque las alteraciones le parezcan convenientes.

Con todo, si las reparaciones hubieren sido tan urgentes, que no le hayan dado tiempo para consultar a los asociados, se le considerará en cuanto a ellas como agente oficioso de la sociedad.

1901.- En todo lo que obre dentro de los límites legales o con poder especial de sus compañeros, obligará a la sociedad; obrando de otra manera, él sólo será responsable.

1902.- El socio administrador es obligado a dar cuenta de su gestión en los períodos designados al efecto por el acto que le ha conferido la administración y a falta de esta designación, anualmente.

1903.- La prohibición legal o convencional de la ingerencia de los socios en la administración de la sociedad, no priva que cualquiera de ellos examine el estado de los negocios sociales y exija a ese fin la presentación de los libros, documentos y papeles y haga las reclamaciones que juzgue convenientes.

1904.- Si no se ha confiado la administración a ninguno de los socios, se entiende que cada uno de ellos ha recibido de los otros el poder de administrar con las facultades expresadas en los artículos precedentes y sin perjuicio de las reglas que siguen:

1°.- Cualquier socio tendrá el derecho de oponerse a los actos administrativos de los otros, mientras esté pendiente su ejecución o no haya producido efectos legales.

2°.- Cada socio podrá servirse para su uso personal de las cosas pertenecientes al haber social, con tal que las emplee según su destino ordinario y sin perjuicio de la sociedad y del justo uso de los otros.

3°.- Cada socio tendrá el derecho de obligar a los otros a que hagan con él las expensas necesarias para la conservación de las cosas sociales.

4°.- Ninguno de los socios podrá hacer innovaciones en los inmuebles que dependan de la sociedad, sin el consentimiento de los otros.

CAPITULO IV

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS ENTRE SI Y CON RESPECTO A TERCEROS

SECCION I

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS ENTRE SI

1905.- Cada socio es deudor a la sociedad de lo que ha prometido aportar a ella.

En cuanto a las cosas ciertas y determinadas que haya aportado a la sociedad, es también obligado, en caso de evicción, al pleno saneamiento de los daños y perjuicios.

1906.- El socio que se ha obligado a aportar una suma de dinero y no lo ha cumplido, responde de los intereses, desde el día en que debió hacerlo, sin necesidad de interpelación judicial.

Esta disposición se aplica al socio que haya tomado dinero de la caja para uso propio.

En cualquiera de estos casos será además responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad.

1907.- No consistiendo en dinero el aporte ofrecido, el socio que aun por culpa leve retardare la entrega, resarcirá a la sociedad los daños y perjuicios que le haya ocasionado el retardo.

Comprende esta disposición al socio que retarda el cumplimiento del servicio industrial que ha ofrecido aportar.

1908.- Si se aporta la propiedad, el peligro de la cosa pertenece a la sociedad según las reglas generales y la sociedad quedará exenta de restituirla en especie.

Si sólo se aporta el uso o goce, la pérdida o deterioro de la cosa no imputable a culpa de la sociedad, pertenece al socio que hizo el aporte.

Si éste consiste en cosas fungibles, en cosas que se deterioran por el uso, en cosas tasadas o cuyo precio se ha fijado de común acuerdo, en materiales de fábrica o artículos de venta pertenecientes al negocio o giro de la sociedad, corresponderá la propiedad a ésta con la obligación de restituir al socio su valor.

Este valor será el que tuvieren las mismas cosas al tiempo del aporte; pero de las cosas que se hayan aportado apreciadas, se deberá la apreciación.

1909.- Si el aporte consistiere en créditos, la sociedad después de la tradición se considera cesionaria de ellos, bastando que la cesión conste del contrato social.

El aporte será el valor nominal de los créditos y los premios vencidos hasta el día de la cesión, si no hubiese convención expresa de que la cobranza fuere por cuenta del socio cedente.

Habiendo esta estipulación, el aporte será de lo que la sociedad cobrare efectivamente del capital y premios.

1910.- A ningún socio podrá exigirse aporte más considerable que aquel a que se haya obligado.

Con todo, si por un cambio de circunstancias no pudiere obtenerse el objeto de la sociedad, sin aumentar los aportes, el socio que no consienta en ello podrá retirarse y deberá hacerlo, exigiéndolo sus compañeros.

1911.- Ningún socio, aun ejerciendo las más amplias facultades administrativas, puede incorporar a un tercero en la sociedad sin el consentimiento unánime de sus consocios; pero puede sin este consentimiento asociarle a sí mismo y se formará entonces entre él y el tercero una sociedad particular, que sólo será relativa a la parte del socio antiguo en la primera sociedad.

1912.- Todo socio debe responder a la sociedad de los daños y perjuicios que por su culpa le haya causado; y no puede compensarlos con los beneficios que por su industria le haya proporcionado en otros negocios.

1913.- El socio industrial debe a la sociedad las ganancias que durante ella haya obtenido en el ramo de industria que sirve de objeto a la compañía.

1914.- Cuando un socio autorizado para administrar cobra una cantidad que le era debida particularmente de una persona que debe a la sociedad otra cantidad también exigible, debe imputarse lo cobrado a los dos créditos, a proporción de su importe, aunque hubiese dado el recibo por cuenta de su crédito particular.

Si el socio hubiere dado el recibo por cuenta del crédito de la sociedad, todo se imputará a ésta.

Las reglas precedentes se entenderán sin perjuicio del derecho que tiene el deudor para hacer la imputación al crédito más gravoso.

1915.- Si uno de los socios hubiere cobrado su cuota en un crédito social y sus consocios no pudiesen después obtener sus respectivas cuotas del mismo crédito, por insolvencia del deudor u otro motivo, deberá el primero comunicar con los segundos los que haya recibido, aunque no exceda a la cuota y aunque en la carta de pago lo haya imputado a ella.

1916.- Cada socio tendrá derecho a que los demás le indemnicen a prorrata de su interés social, las sumas que hubiere adelantado con consentimiento de la sociedad por obligaciones que para los negocios sociales hubiere contraído legítimamente y de buena fe; y los perjuicios que los peligros inseparables de su gestión le hayan ocasionado.

En el caso de este artículo la parte del socio insolvente se reparte a prorrata entre todos.

1917.- Los socios tienen entre sí el beneficio de competencia por sus deudas a la sociedad. (Artículo 1495).

SECCION II

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS RESPECTO DE TERCEROS

1918.- Los socios, en cuanto a sus obligaciones respecto de terceros, deberán considerarse como si entre ellos no existiese sociedad. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.858 de fecha 3 de setiembre de 1997, artículo 19.*

1919.- No se entenderá que el socio contrata a nombre de la sociedad, sino cuando lo expresa en el contrato o las circunstancias lo manifiestan de un modo inequívoco. En caso de duda, se entenderá que contrató a su nombre particular. (*)

(*) *Ver: artículo 1920 de esta norma.*

1920.- Si el socio contrata a nombre de la sociedad, pero sin poder suficiente, no la obliga a terceros sino en subsidio y hasta concurrencia del beneficio que ella hubiere reportado del negocio.

Si contrata a su nombre propio, no la obliga respecto de tercero ni aun en razón de este beneficio y el acreedor sólo podrá intentar contra la sociedad las acciones que contra ella correspondan al socio deudor.

Las disposiciones de este artículo y del anterior, comprenden aun al socio exclusivamente encargado de la administración. (*)

(*) *Ver: artículo 1922 de esta norma.*

1921.- Siendo obligada la sociedad respecto de terceros, responderán los socios por partes iguales, aunque su interés en aquéllas sea desigual; pero serán responsables entre sí en proporción a su interés social.

No se entenderá que los socios son obligados solidariamente, sino cuando así se exprese en el título de la obligación y ésta se haya contraído por todos los socios o con poder especial de éstos.

1922.- Los acreedores de un socio no tienen acción sobre los bienes sociales, sino en razón de hipoteca constituida por el socio que aportó el inmueble hipotecado.

Podrán, sin embargo, pedir que se embarguen a su favor las

asignaciones que se hagan a su deudor por cuenta de los beneficios sociales o de sus aportes.

También podrán intentar contra la sociedad las acciones indirectas y subsidiarias que se les conceden por el artículo 1920.

CAPITULO V

DE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD

1923.- La sociedad se disuelve por la terminación del plazo o por el evento de la condición que se haya prefijado para que tenga fin.

Podrá sin embargo prorrogarse por unánime consentimiento de los socios.

La prórroga sólo puede probarse por los medios que se prueba el contrato de sociedad.

Los codeudores de la sociedad no serán responsables de los actos que inicie durante la prórroga si no hubieren accedido a ella.

1924.- La sociedad se disuelve por la consumación del negocio para que fue contraída.

Pero si se ha prefijado un día cierto para que termine la sociedad y llegado ese día antes de finalizarse no se prorroga, se disuelve la sociedad.

1925.- La sociedad se disuelve asimismo por su insolvencia y por la extinción completa de la cosa o cosas que forman su objeto.

Si la extinción es parcial, continuará la sociedad, salvo el derecho de los socios para exigir su disolución, si en la parte que resta no pudiese continuar útilmente y sin perjuicio de lo prevenido en el artículo siguiente.

1926.- Si cualquiera de los socios por su hecho o culpa deja de poner en común las cosas o la industria a que se ha obligado en el contrato, los otros tendrán derecho para dar la sociedad por disuelta.

1927.- Si un socio ha aportado la propiedad de una cosa, subsiste la sociedad aunque esta cosa perezca, a menos que sin ella no pueda continuar útilmente.

Si sólo se ha aportado el uso o goce, la pérdida de la cosa disuelve la

sociedad, a menos que el socio que la hubiere aportado la reponga a satisfacción de sus consocios o que éstos determinen continuar la sociedad sin ella.

1928.- Disuélvese asimismo la sociedad, por la muerte de cualquiera de los socios, menos cuando por ley o pacto especial haya de continuar entre los socios sobrevivientes con los herederos del difunto o sin ellos.

Sin embargo, en todo caso se entenderá continuar la sociedad, mientras los socios administradores no reciban noticia de la muerte; y aun recibida por éstos la noticia, las operaciones iniciadas por el difunto que no supongan una aptitud peculiar a éste, deberán llevarse a cabo.

1929.- La estipulación de continuar la sociedad con los herederos del difunto se subentiende en las que se forman para el arrendamiento de un inmueble o para el laboreo de minas.

1930.- Si la sociedad sólo hubiere de continuar entre los sobrevivientes, los herederos del difunto no podrán reclamar sino lo que tocara a su autor, según el estado de los negocios sociales al tiempo de saberse la muerte; y no participarán de los emolumentos y pérdidas posteriores, sino en cuanto fueren consecuencia de las operaciones que, al tiempo de saberse la muerte, estaban ya iniciadas.

1931.- También expira la sociedad por la incapacidad sobreviniente o la insolvencia de uno de los socios.

Sin embargo, podrá continuar la sociedad con el incapaz o el fallido y en tal caso el representante legal o los acreedores ejercerán sus derechos en las operaciones sociales.

1932.- La sociedad podrá expirar en cualquier tiempo por el consentimiento unánime de los socios.

1933.- La sociedad puede expirar también por la renuncia que haga uno de los socios de buena fe y en tiempo oportuno.

Pero si la sociedad se ha contratado por tiempo fijo o para negocio de duración limitada, no tendrá efecto la renuncia si por el contrato de sociedad no hubiere facultad de hacerla o si no ocurriese algún motivo grave, como la inejecución de las obligaciones de otro socio, la pérdida de un administrador

inteligente que no pueda reemplazarse entre los socios, enfermedad habitual del renunciante que lo inutilice para las funciones sociales, mal estado de los negocios por circunstancias imprevistas u otros de igual importancia.

1934.- La renuncia de un socio no produce efecto alguno sino en virtud de su notificación a todos los demás.

La notificación al socio o socios que exclusivamente administran se entenderá hecha a todos.

Aquellos de los socios a quienes no se hubiese notificado la renuncia, podrán aceptarla después, si lo creyeren conveniente o dar por subsistente la sociedad en el tiempo intermedio.

1935.- El socio que renuncia de mala fe o intempestivamente, queda obligado a los daños y perjuicios que causare su separación.

Renuncia de mala fe el socio que lo hace para apropiarse de una ganancia que debe pertenecer a la sociedad.

Es intempestiva la renuncia, cuando al hacerse no se hallan las cosas íntegras y la sociedad está interesada en que la disolución se dilate.

La disposición del primer inciso, comprende al socio que de hecho se retira de la sociedad sin renuncia.

1936.- La disolución de la sociedad no podrá alegarse contra terceros, sino en los casos siguientes:

1º.- Cuando la sociedad ha expirado por la llegada del día prefijado para la terminación del contrato.

2º.- Cuando se ha dado aviso de la disolución por medio de las publicaciones legales.

3º.- Cuando se prueba que el tercero ha tenido oportunamente noticia de ella por cualesquiera medios.

1937.- Disuelta la sociedad se procederá a la división de los objetos que componen su haber.

Las reglas relativas a la partición de bienes hereditarios y a las obligaciones entre coherederos, se aplicarán a la división del caudal social y a las obligaciones entre los miembros de la sociedad disuelta, salvo en cuanto se opongán a las disposiciones de este Título.

TÍTULO VII**DE LA SOCIEDAD CONYUGAL**

Ajustado a los artículos 1o. y 2o. Ley 10.783 del 18.9.46 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

CAPITULO I**DISPOSICIONES GENERALES**

1938.- Antes de la celebración del matrimonio, los esposos pueden hacer las convenciones especiales que juzguen convenientes, con tal que no se opongan a las buenas costumbres y se conformen a las disposiciones establecidas en los artículos siguientes.

La ley, sólo a falta de convenciones especiales, rige la asociación conyugal en cuanto a los bienes.

1939.- Los esposos no pueden derogar a los derechos conferidos por el Título *De la patria potestad* ni a las disposiciones prohibitivas de este Código. (Artículo 188).

1940.- No pueden hacer convenciones ni renunciación alguna que tenga por objeto trastornar el orden legal de las sucesiones, sea con relación a sí mismos, en la sucesión de los descendientes, sea con relación a sus hijos entre sí.

La disposición precedente se entiende sin perjuicio de las donaciones entre vivos o para después de su muerte, que pueden hacer según las formas y en los casos determinados en este Código.

1941.- A falta de estipulaciones especiales que modifiquen la sociedad conyugal, las reglas establecidas en el capítulo siguiente formarán el derecho común de la República.

1942.- Las convenciones matrimoniales se deberán hacer antes de celebrarse

el matrimonio, so pena de nulidad; pero podrán comprender los bienes que los cónyuges adquieran después de celebrado.

1943.- Las convenciones matrimoniales deben hacerse en escritura pública, so pena de nulidad, si el valor de los bienes aportados por cualquiera de los esposos pasare de 500 unidades reajustables o si es constituyeren derechos sobre bienes raíces.

Fuera de los dos casos expresados, bastará para la validez que las convenciones matrimoniales consten por escritura privada firmada por las partes y tres testigos domiciliados en el Departamento.

No surtirán efecto contra terceros mientras no sean inscriptas en el correspondiente Registro. (*)

(*) *Ver: artículo 1945 de esta norma.*

1944.- Desde el día de la celebración del matrimonio, se entenderán irrevocablemente otorgadas las convenciones matrimoniales.

No podrán después modificarse, alterarse o destruirse ni aun con el consentimiento de las personas que intervinieron en el contrato de matrimonio.

1945.- No se admitirán en juicio escrituras que alteren o adicionen las convenciones matrimoniales, a no ser que se hayan otorgado antes del matrimonio y con las mismas solemnidades que las capitulaciones primitivas.

Ni valdrán contra terceros las adiciones o alteraciones que se hagan en ellas, aun cuando se hayan otorgado en el tiempo y con los requisitos debidos; a menos que se ponga un extracto o minuta de las escrituras posteriores, al margen del protocolo de la primera escritura y se inscriban en el Registro respectivo, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 1943, a los efectos allí indicados. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 39 nral. 3°.*

1946.- El menor hábil para contraer matrimonio, tiene habilidad para consentir todas las convenciones de que el contrato es susceptible; y son válidas las convenciones y donaciones hechas, con tal que le hayan asistido en el contrato aquellas personas cuyo consentimiento es necesario para contraer matrimonio.

1947.- La escritura de capitulaciones matrimoniales deberá contener:

1º.- La designación de los bienes que los esposos aportaren al matrimonio, con expresión de su valor.

2º.- Una razón circunstanciada de las deudas de cada uno.

Las omisiones o inexactitudes que a ese respecto hubiere, no producirán nulidad, pero el escribano o funcionario que autorizare la escritura, incurrirá en la multa de 100 unidades reajustables, si no advirtiere a las partes la precedente disposición e hiciere constar en la escritura esta advertencia. (*)

(*) *Ver: artículo 2008 de esta norma.*

1948.- La sociedad conyugal, sea legal o modificada por pacto escrito, empezará desde el día de la celebración del matrimonio. No puede estipularse que empiece en otra época.

1949.- Esta sociedad sólo puede tener lugar entre personas capaces de contraer válidamente matrimonio.

Sin embargo, la buena fe de uno de los contrayentes atribuye efectos civiles a su enlace, aunque éste no sea válido, y se verifica la sociedad conyugal entre aquéllos. (Artículo 211).

CAPITULO II

DE LA SOCIEDAD LEGAL

1950.- La sociedad que se verifica por el simple hecho del matrimonio, queda sometida a las reglas establecidas en las secciones siguientes.

También se gobierna por las reglas del contrato de sociedad, en cuanto no se opongan a lo que está expresamente determinado en este Capítulo.

SECCION I

DEL CAPITAL RESPECTIVO DE LOS CONYUGES Y HABER DE LA SOCIEDAD

1951.- Son bienes propios de los cónyuges, los que constituyen el capital de cada uno.

1952.- El que dona capital al marido o a la mujer, no queda sujeto a evicción sino en caso de fraude y en el del artículo 1629.

1953.- Los bienes donados o dejados en testamento a los cónyuges conjuntamente, con designación de parte determinada, pertenecen a cada uno como capital propio en la proporción determinada por el donante o testador y a falta de designación por mitad a cada uno de ellos, salvo lo dispuesto en el artículo 1655.

1954.- Si las donaciones fuesen onerosas, se deducirá de los bienes del donatario, marido o mujer, el importe de las cargas que hayan sido soportadas por la sociedad.

1955.- Son bienes gananciales:

1º.- Los adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad o para uno solo de ellos.

2º.- Los obtenidos por la industria, profesión, empleo, oficio o cargo de los cónyuges o de cualquiera de ellos.

3º.- Los adquiridos por hechos fortuitos, como lotería, juego, apuesta, etc.

4º.- Los frutos, rentas e intereses percibidos o devengados durante el matrimonio, sean procedentes de los bienes comunes o de los propios de cada uno de los cónyuges.

5º.- Lo que recibiere alguno de los cónyuges por el usufructo de los bienes de los hijos de otro matrimonio.

6º.- El aumento *de valor* en los bienes propios de cualquiera de los cónyuges por anticipaciones de la sociedad o por la industria del marido o de la mujer.

Será también ganancial el edificio construido durante el matrimonio, en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al cónyuge a quien pertenecía.

1956.- La propiedad de las cosas que uno de los cónyuges poseía con otra persona *pro indiviso* y de que durante el matrimonio se hiciera dueño por cualquier título oneroso, pertenecerá *pro indiviso* a dicho cónyuge y a la sociedad, en proporción a las respectivas cuotas.

1957.- No es ganancial el inmueble subrogado debidamente a otro inmueble propio de alguno de los cónyuges.

Tampoco lo serán las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges, destinados a este objeto en las capitulaciones matrimoniales o en la donación hecha a uno de ellos. (*)

(*) *Ver: artículo 1958 de esta norma.*

1958.- Para que un inmueble se entienda subrogado a otro inmueble de uno de los cónyuges, es necesario que el segundo se haya permutado por el primero; o que, vendido el segundo durante el matrimonio, se haya comprado con su precio el primero; y que en la escritura de permuta o en las escrituras de venta y de compra, se exprese el ánimo de subrogar.

Puede también subrogarse un inmueble a valores propios de uno de los cónyuges y que no consistan en bienes raíces; mas para que valga la subrogación será necesario que los valores hayan sido destinados a ello, en conformidad al inciso 2º del artículo anterior y que en la escritura de compra del inmueble aparezca la inversión de dichos valores y el ánimo de subrogar. (*)

(*) *Ver: artículo 1968 de esta norma.*

1959.- Si se subroga una finca a otra y el precio de venta de la antigua finca excediere el precio de compra de la nueva, la sociedad deberá este exceso al cónyuge subrogante y si por el contrario el precio de compra de la nueva finca excediese el precio de venta de la antigua, el cónyuge subrogante deberá este exceso a la sociedad.

Si permutándose dos fincas, resulta un saldo en dinero, la sociedad deberá este saldo al cónyuge subrogante; y si por el contrario se pagara un saldo, lo deberá dicho cónyuge a la sociedad.

La misma regla se aplicará en caso de subrogarse un inmueble a valores.

Pero no se entenderá haber subrogación, cuando el saldo en favor o en contra de la sociedad excediere a la mitad del precio de la finca que se recibe, la cual pertenecerá entonces al haber social; quedando la sociedad obligada al cónyuge por el precio de la finca enajenada o por los valores invertidos y conservando éste el derecho de llevar a efecto la subrogación, comprando otra finca.

1960.- DEROGADO en virtud del art. 1o. de la Ley 10.783 de 18.9.46 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

1961.- No se reputará ganancial la especie adquirida durante el matrimonio, aun a título oneroso, cuando la causa o título de la adquisición ha precedido a él. Por consiguiente:

1º.- No pertenecerá a los bienes gananciales la propiedad de las especies que uno de los cónyuges poseía a título de dominio antes de la sociedad, aunque la prescripción o transacción con que las haya hecho verdaderamente suyas se complete o verifique durante ella.

2º.- Ni los bienes que poseía antes del matrimonio por un título vicioso, pero cuyo vicio se ha purgado durante él, por la ratificación o por otro medio legal.

3º.- Ni los bienes que vuelvan a uno de los cónyuges por la nulidad o la resolución de un contrato o por haberse revocado una donación.

4º.- Ni los bienes litigiosos y de que durante la sociedad ha adquirido uno de los cónyuges la posesión pacífica.

5º.- Tampoco pertenecerá a la sociedad el derecho de usufructo que se consolida con la propiedad que pertenece al mismo cónyuge; los frutos sólo pertenecerán a la sociedad.

6º.- Lo que se paga a cualquiera de los cónyuges por capitales de créditos constituidos antes del matrimonio pertenecerá al cónyuge acreedor. Lo mismo se aplicará a los intereses devengados por uno de los cónyuges, antes del matrimonio y pagados después.

1962.- Se reputarán adquiridos durante el matrimonio los bienes que durante él debieron adquirirse por uno de los cónyuges y que de hecho no se adquirieron sino después de disuelta la sociedad, por no haberse tenido noticias de ellos o por haberse embarazado injustamente su adquisición o goce.

1963.- Cuando el capital propio de cada uno de los cónyuges se componga, en todo o en parte, de ganados que existan al tiempo de la disolución de la sociedad, se reputarán gananciales las cabezas que excedan de las aportadas al matrimonio.

1964.- Se reputarán gananciales todos los bienes existentes en poder de cualquiera de los cónyuges al tiempo de disolverse la sociedad, si no se prueba que pertenecían privativamente al marido o a la mujer, a la celebración del matrimonio o que los adquirió después por herencia, legado o donación.

SECCION II

DE LAS CARGAS Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD LEGAL

1965.- Son de cargo de la sociedad legal:

1°.- Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges.

2°.- Los atrasos o réditos devengados, durante el matrimonio, de las obligaciones a que estuvieren afectos así los bienes propios de los cónyuges, como los gananciales.

3°.- Los reparos menores o de simple conservación ejecutados durante el matrimonio en los bienes propios del marido o de la mujer. Los reparos mayores no son de cargo de la sociedad.

4°.- Los reparos mayores o menores de los bienes gananciales.

5°.- El mantenimiento de la familia y educación de los hijos comunes y también de los hijos legítimos de uno solo de los cónyuges.

Asimismo se tendrá como carga de la familia los alimentos que uno de los cónyuges está por ley obligado a dar a sus ascendientes.

6°.- Lo que se diere o gastare en la colocación de los hijos o hijas del matrimonio. (*)

7°.- Lo perdido por hechos fortuitos, como lotería, juego, apuestas, etc.

(*) *Ver: artículo 1972 de esta norma.*

1966.- Las deudas contraídas por el marido o la mujer antes del matrimonio, no son de cargo de la sociedad.

Tampoco lo son las multas y condenaciones pecuniarias que se les impusieren.

DEROGADO el inc. 3o. en virtud del art. 4o. Ley 10.783 de 18.9.46 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

1967.- Lo ya gastado o satisfecho y aun lo disipado durante el matrimonio por alguno de los cónyuges, no disminuye su parte respectiva de gananciales.

1968.- La sociedad debe el precio en unidades reajustables de cualquiera cosa del marido o de la mujer, que se haya vendido, siempre que no se haya invertido en subrogarla por otra propiedad (artículo 1958) o en un negocio personal del cónyuge cuya era la cosa vendida. (*)

(*) *Ver: artículo 2391-1 de esta norma.*

1969.- Se debe compensar a la sociedad, siempre que se tome de los gananciales alguna suma, sea para pagar deudas u obligaciones personales de uno de los cónyuges, como el precio o parte del precio de cosas que le pertenezcan o la redención de servidumbres, sea para la cobranza de sus bienes propios; y en general, siempre que alguno de los cónyuges, saca provecho personal de los bienes de la sociedad.

Cada cónyuge deberá asimismo compensar a la sociedad los daños y perjuicios que le hubiere causado con dolo o culpa grave.

El provecho personal y los daños y perjuicios a que refiere este artículo se calcularán en unidades reajustables al tiempo de obtener el provecho o causar el daño. (*)

(*) *Ver: artículo 2391-1 de esta norma.*

SECCION III

DE LA ADMINISTRACION ORDINARIA DE LA SOCIEDAD LEGAL

1970.- Cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios, de sus frutos, del producto de sus actividades y de los bienes que pueda adquirir, sin perjuicio de lo que se dispone en los artículos siguientes.

1971.- Los inmuebles de carácter ganancial adquiridos a nombre de uno de los cónyuges o de la comunidad, no podrán ser enajenados ni afectados por derechos reales sin la conformidad expresa de ambos cónyuges.

Esta misma conformidad deberá expresarse cuando se trate de enajenar una casa de comercio, un establecimiento agrícola o ganadero o una explotación industrial o fabril, de carácter ganancial.

Cuando esa conformidad se otorgue por mandatario, éste deberá actuar con facultad expresa para ese género de operaciones. (*)

(*) *Ver: artículo 1981 de esta norma.*

1972.- Cualquiera de los cónyuges podrá disponer de los bienes gananciales que administra para los fines expresados en el artículo 1965, número 6º; y también podrá durante el matrimonio, hacer donaciones módicas para objetos de piedad o beneficencia.

1973.- Ninguno de los cónyuges puede disponer por testamento sino de su mitad de gananciales.

Si uno de los cónyuges ha legado una especie que pertenece a la sociedad, no puede el legatario reclamarla, a no ser que por la partición, dicha especie caiga en el lote de los herederos. Si no cayere, se abonará al legatario el valor de la especie con la parte de gananciales correspondiente al testador y con los bienes particulares de éste.

1974.- Toda enajenación o convenio que sobre bienes gananciales haga cualquiera de los cónyuges en contravención de la ley o en fraude del otro, no perjudicará a éste ni a sus herederos. (*)

(*) *Ver: artículo 2003 de esta norma.*

1975.- Durante la vigencia de la sociedad conyugal, los acreedores de un cónyuge podrán hacer efectivos sus derechos sólo contra sus bienes propios y los gananciales cuya administración le corresponda por ley o por capitulación matrimonial; sin perjuicio de los abonos o compensaciones que a consecuencia de ello deba el cónyuge a la sociedad o la sociedad al cónyuge. (*)

(*) *Ver: artículo 2014 de esta norma.*

1976.- Ninguno de los cónyuges puede obligar los bienes gananciales cuya administración le corresponde al otro, sin el consentimiento de éste.

Se exceptúan de esta regla los casos previstos en la Sección siguiente.

1977.- DEROGADO en virtud del art. 2o. Ley 10.783 de 18.9.46 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

1978.- El cónyuge que ejecuta actos de administración autorizado por el Juez

por impedimento accidental del otro y respecto a los bienes administrados por éste, lo obliga como si el acto hubiera sido hecho por él.

SECCION IV

DE LA ADMINISTRACION EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD CONYUGAL

1979.- La administración de los bienes del matrimonio se confiere exclusivamente a uno de los cónyuges:

1º.- Siempre que sea curador del otro con arreglo al artículo 441.

2º.- Cuando se oponga a la declaración de ausencia del otro, según lo dispuesto en el artículo 62.

El Juez conferirá también la administración a uno de los cónyuges, con las limitaciones que estime convenientes, de los bienes propios y gananciales cuya administración corresponda al otro, si hallándose éste absolutamente impedido, no hubiere proveído sobre la administración. (*)

(*) *Ver: artículo 1980 de esta norma.*

1980.- El cónyuge en quien recaiga la administración extraordinaria de la sociedad, quedará sometido a lo que se dispone en el inciso último del artículo anterior y en los siguientes.

1981.- No podrá sin autorización especial del Juez, previo conocimiento de causa, enajenar ni gravar los bienes raíces de su cónyuge ni los gananciales cuya administración le correspondía ni aceptar sin beneficio de inventario la herencia deferida al otro cónyuge ni ejecutar los actos previstos en el artículo 1971.

Todo acto en contravención a estas restricciones lo hará responsable con sus bienes, de la misma manera que en la administración ordinaria se responde del abuso de las facultades administrativas. (*)

(*) *Ver: artículo 1982 de esta norma.*

1982.- Todos los actos y contratos del cónyuge administrador extraordinario que no le estuviesen vedados por el artículo precedente, se mirarán como actos

y contratos del otro cónyuge y obligarán en consecuencia a éste y a la sociedad; salvo en cuanto apareciere que dichos actos y contratos se hicieron en negocio personal del administrador.

1983.- El cónyuge en que recaiga la administración extraordinaria no podrá dar en arriendo los bienes rústicos que pertenecen al otro por más de cinco años ni los urbanos por más de tres. (Artículos 1794 y 406).

1984.- Cesando la incapacidad o impedimento del cónyuge o declarándose la presunción de su muerte (artículo 68), cesará también la administración extraordinaria.

SECCION V

DE LA SEPARACION JUDICIAL DE BIENES DURANTE EL MATRIMONIO

1985.- En todo momento, cualquiera de los cónyuges o ambos de conformidad, podrán pedir, sin expresión de causa, la disolución y liquidación de la sociedad conyugal.

El Juez deberá decretarla sin más trámite y ordenará la inscripción de la sentencia en el correspondiente Registro. Mientras la sentencia no sea inscripta no surtirá efecto contra terceros.

Dispondrá además la citación por edictos de los que tuvieren interés, para que comparezcan dentro del término de sesenta días.

Los interesados que no comparecieren dentro del término sólo tendrán acción contra los bienes del cónyuge deudor. (*)

(*) *Ver: artículo 1993 de esta norma.*

1986.- Ninguno de los cónyuges podrá renunciar, en las capitulaciones matrimoniales, la facultad de pedir la separación de bienes, a que le dan derecho las leyes.

1987.- Para que el cónyuge menor de edad pueda pedir la separación de bienes, se requiere que sea autorizado por un curador especial, sin perjuicio de la intervención que deberá darse al Ministerio Público.

1988.- DEROGADO en virtud del art. 6o. Ley 10.783 de 18.9.46 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

1989.- Deducida la acción de separación y aun antes de ella si hubiere peligro en la demora, podrá el Juez a petición de parte o de oficio dictar las providencias que estime convenientes, aplicándose lo preceptuado en el artículo 157.

1990.- DEROGADO en virtud del art. 6o. Ley 10.783 de 18.9.46 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

1991.- Cualquiera de los cónyuges podrá argüir de fraude cualquier acto o contrato del otro, anterior a la demanda de separación de bienes, en conformidad a lo que está dispuesto acerca de los hechos en fraude de los acreedores. (Artículo 1296).

1992.- Decretada la separación de bienes, se dividirán los gananciales, si los hubiere, siguiéndose las mismas reglas que en el caso de disolución de matrimonio.

Desde entonces, ninguno de los cónyuges tendrá parte en las ganancias que hiciera el otro.

1993.- La separación de bienes no perjudica los derechos adquiridos con anterioridad por los acreedores, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 1985.

1994.- En el estado de separación, el marido y la mujer deben contribuir a su propio mantenimiento y a los alimentos y educación de los hijos, a proporción de sus respectivas facultades.

El Juez, en caso necesario, reglará la contribución.

1995.- Para el cónyuge menor de edad subsistirá su incapacidad para los actos comprendidos en el artículo 310.

1996.- La separación judicial de bienes sólo podrá cesar por decreto del Juez a petición de ambos cónyuges.

Sin embargo, el cese de la separación no surtirá efectos contra terceros, sino a partir de su inscripción en el Registro correspondiente.

El restablecimiento de la sociedad conyugal restituye las cosas al estado anterior como si la separación de bienes no hubiese tenido lugar, sin perjuicio de los actos ejecutados legítimamente por cualquiera de los cónyuges durante el intervalo de la separación. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 39 nral. 3°.*

1997.- DEROGADO en virtud del art. 2o. Ley 10.783 de 18.9.46 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

SECCION VI

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

1998.- La sociedad conyugal se disuelve:

1°.- Por la disolución del matrimonio.

2°.- Por la sentencia de separación de cuerpos.

3°.- Por la separación judicial de bienes.

4°.- Por la declaración de ausencia, en conformidad a lo dispuesto en el Capítulo III, Título IV del Libro Primero.

5°.- Por la declaración de nulidad del matrimonio.

En este último caso, el cónyuge que hubiere obrado con mala fe, no tendrá parte en los gananciales.

1999.- Disuelta la sociedad, se procederá, si se solicitare, a la confección de un inventario solemne y tasación de todos los bienes del matrimonio, como se dispone para la sucesión por causa de muerte.

2000.- El inventario y tasación que se hubiere hecho sin solemnidad judicial,

no tendrá valor en juicio sino contra el cónyuge, sus herederos o los acreedores que lo hubieren debidamente aprobado y firmado.

2001.- DEROGADO en virtud de los arts. 1o. y 2o. Ley 10.783 de 18.9.46 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

2002.- Aquel de los cónyuges o sus herederos que dolosamente hubiere ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma cosa y será obligado a restituirla doblada.

2003.- El inventario comprenderá numéricamente y se traerán a colación determinadas en unidades reajustables, las cantidades que, habiendo sido satisfechas por la sociedad, sean rebajables del capital de la mujer y del marido.

También se traerá a colación, en unidades reajustables, el importe de las donaciones y enajenaciones que deban considerarse ilegales o fraudulentas con arreglo al artículo 1974. Exceptúanse los casos en que proceda la colación real. (*)

(*) *Ver: artículo 2391-1 de esta norma.*

2004.- No se incluirán en el inventario los efectos que compusieren el lecho de que usaban ordinariamente los esposos y se entregarán libremente al que de ellos sobreviviere.

También se entregará libremente a la viuda su vestido ordinario.

2005.- DEROGADO en virtud de los arts. 1o. y 2o. Ley 10.783 de 18.9.46 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

2006.- Se liquidarán y pagarán los capitales de los cónyuges y las deudas, cargas y obligaciones de la sociedad.

Cuando el caudal no alcanzare para cumplir todo lo dispuesto en este

artículo, se observará lo determinado sobre *los créditos privilegiados y graduación de acreedores*.

2007.- DEROGADO por Ley 16.603 de 19.10.94 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986. La referencia se entiende realizada a la Ley N° 16.603 de fecha 19 de octubre de 1994, artículo 3.*

2008.- Hechas las reducciones determinadas en los artículos anteriores, el resto del caudal compondrá el fondo de gananciales.

Las pérdidas o deterioros ocurridos en las especies o cuerpos ciertos, pertenecientes a cualquiera de los cónyuges, deberá sufrirlas el dueño, salvo que procedan de dolo o culpa grave del otro cónyuge, en cuyo caso deberá éste resarcirlas.

Los bienes propios existentes, muebles o inmuebles, los conservará cada cónyuge en el estado en que se hallaren.

Si durante el matrimonio hubiesen sido enajenados, se restituirá el precio en unidades reajustables que se les dio al tiempo de ser aportados; y si entonces no se estimaron, se entregará el precio en unidades reajustables de enajenación. (Artículo 1947). (*)

A falta de convenio de los interesados los créditos de los capitales propios deberán pagarse siempre en dinero. Las restituciones que deban hacerse en dinero, si éste no existe, se harán en el término de seis meses, vencidos los cuales empezarán a deberse los intereses de ley.

(*) *Ver: artículos 2009 y 2391-1 de esta norma.*

2009.- Los frutos pendientes al tiempo de disolverse la sociedad se prorratarán, dividiéndolos entre todos los días del año y aplicando a la sociedad lo correspondiente a los días que ella hubiere durado en el último año, el cual se empezará a contar desde el aniversario de la celebración del matrimonio.

La restitución de bienes fungibles se hará con otro tanto de las mismas especies o su valor, con arreglo al inciso 4° del artículo anterior.

2010.- El fondo líquido de gananciales se dividirá por mitad entre marido y mujer o sus respectivos herederos.

2011.- Del haber del marido se sacarán los gastos del luto de la viuda. (Artículo 2369, número 2°).

2012.- No se imputará a la mitad de gananciales del cónyuge sobreviviente el legado que le haya hecho el otro cónyuge difunto, a menos que éste lo haya así ordenado; pero en tal caso podrá el cónyuge sobreviviente repudiar el legado, si prefiere atenerse a lo que le toque por la partición.

2013.- La división de los bienes sociales se sujetará a las reglas dadas para la partición de los bienes hereditarios.

2014.- Ninguno de los cónyuges es responsable de las deudas de la sociedad contraídas por el otro sino hasta la concurrencia de su mitad de gananciales. (Artículo 1975).

Mas, para gozar de este beneficio, deberá probar el exceso de la contribución que se le exige sobre su mitad de gananciales, sea por el inventario y tasación, sea por otros documentos auténticos. (*)

(*) *Ver: artículo 2015 de esta norma.*

2015.- Cada cónyuge es responsable del total de las deudas de la sociedad contraídas por él, salva su acción contra el otro cónyuge para el reintegro de la mitad de estas deudas, según el artículo precedente.

2016.- Aquel de los cónyuges que por efecto de una hipoteca o prenda sobre una especie que le ha cabido en la división de la masa, paga una deuda de la sociedad, tendrá acción contra el otro cónyuge para el reintegro de la mitad de lo que pagare; y pagando una deuda del otro cónyuge, tendrá acción contra él para el reintegro de todo lo que pagare.

2017.- Los herederos de cada cónyuge gozan de los mismos derechos y están sujetos a las mismas acciones que el cónyuge que representan.

2018.- (Disposición Especial)

Declárase derogada desde la vigencia de la Ley N° 10.783 de 18 de setiembre de 1946, la Sección VII del presente Capítulo II del Título VII Parte Segunda del Libro IV.

Las renunciaciones de gananciales efectuadas con posterioridad a dicha

ley y hasta la vigencia de la presente disposición, son válidas siempre que no hubiera recaído sentencia ejecutoriada en contrario. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 45 nral. 9°.*

2019 a 2050.-

DEROGADOS los arts. 2019 a 2050 por las Leyes 10.783 de 18.9.46 y 16.603 de 19.10.94 (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

TITULO VIII

DEL MANDATO (*)

CAPITULO I

DE LA NATURALEZA, EFECTOS Y ESPECIES DEL MANDATO

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 17.011 de fecha 25 de setiembre de 1998, artículo 91.*

2051.- El mandato es un contrato por el cual una de las partes confiere a otra, que lo acepta, el poder para representarla en la gestión de uno o más negocios por cuenta y riesgo de la primera.

Los negocios ilícitos o contrarios a las buenas costumbres, no pueden ser objeto del mandato.

2052.- El mandato puede ser gratuito u oneroso.

Se presumirá que es gratuito, cuando no se hubiere convenido que el mandatario perciba una retribución por su trabajo.

Se presumirá que es oneroso, cuando consista en atribuciones o

funciones conferidas a alguno por la ley y cuando consiste en trabajos propios de la profesión lucrativa del mandatario o de su modo de vivir.

2053.- El mandato puede ser expreso o tácito.

El expreso puede otorgarse por escritura pública o privada, por carta o correspondencia y aun verbalmente.

El tácito tiene lugar cuando el dueño del negocio está presente o sabe la gestión que otro hace por él y calla o no lo contradice.

Con todo, no se admitirá en juicio la prueba testimonial sino en conformidad a las reglas establecidas en los artículos 1594 y siguientes ni la escritura privada cuando las leyes requieran un instrumento público.

La escritura, sea pública o privada, que contenga revocación, sustitución, ampliación, limitación, suspensión o renuncia de un mandato, deberá además ser inscrita en el Registro correspondiente, para que surta efecto legal con relación a terceros.

DEROGADO parcialmente el inc. 5o. por el art. 254 de la Ley 13.640 de 26.12.67, que suprimió la inscripción del mandato (*)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

2054.- El mandato es *general* o *especial*.

Si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama *especial*; si se da para todos los negocios del mandante es *general*; y lo será igualmente, si se da para todos con una o más excepciones determinadas.

2055.- El mandato especial puede ser absoluto, esto es, tal que se deje al mandatario obrar como le parezca o limitado prescribiéndole reglas bajo las que deba dirigirse.

Cuando en el poder se hace referencia a las reglas o instrucciones, se considera éstas como incorporadas en aquél.

2056.- El mandato concebido en términos generales no comprende más que los actos de administración, aunque el mandante declare que no se reserva poder alguno y que el mandatario puede hacer todo lo que juzgue conveniente o aunque el mandato contenga la cláusula de *general y libre administración*.

Para transigir, enajenar, hipotecar o hacer cualquier acto de riguroso dominio, se requiere poder expreso.

La facultad de transigir no encierra la de comprometer ni *viceversa*.

2057.- El mandatario no puede traspasar los límites del mandato.

No se consideran traspasados los límites del mandato, en cuanto ha sido cumplido de una manera más ventajosa para el mandante, que la señalada por éste. (*)

(*) *Ver: artículo 2076 de esta norma.*

2058.- El mandato no se perfecciona hasta la aceptación del mandatario.

La aceptación puede ser tácita, que es la que resulta de haberse empezado a ejecutar el encargo por el mandatario.

2059.- Las personas que por su oficio, profesión o modo de vivir se encargan de negocios ajenos, están obligados a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace y transcurrido un término razonable, su silencio se mirará como aceptación.

Aun cuando se excusen del encargo, deberán tomar las providencias conservativas urgentes que requiera el negocio que se les encomienda.

2060.- El mandato puede tener por objeto un negocio del interés exclusivo del mandante o del interés común del mandante y mandatario o del interés común del mandante y de terceros o del interés exclusivo de un tercero; pero no puede tener por objeto el interés exclusivo del mandatario.

El encargo que interese exclusivamente al mandatario es un mero consejo que no produce obligación alguna, sino cuando se ha hecho de mala fe y en este caso obliga a la indemnización de los daños y perjuicios que causare.

2061.- Puede haber uno o más mandantes y uno o más mandatarios.

Si se constituye dos o más mandatarios y el mandante no ha dividido la gestión, podrán dividirla entre sí los mandatarios; pero si se les ha prohibido obrar separadamente, lo que hicieren de este modo, será nulo.

2062.- Si se constituye mandatario a un menor no habilitado de edad, los actos ejecutados por el mandatario serán válidos respecto de terceros, en cuanto obliguen a éstos y al mandante; pero las obligaciones del mandatario para con el mandante y terceros, no podrán tener efecto sino según las reglas relativas a los menores.

2063.- El mandato es judicial o extrajudicial. De aquél se ocupa la ley procesal.

CAPITULO II

DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDATARIO

2064.- El mandatario queda obligado por la aceptación a cumplir el mandato y responde de los daños y perjuicios que se ocasionare al mandante por la inejecución total o parcial del mandato.

2065.- El mandatario responde no sólo del dolo, sino de las omisiones o negligencias que cometa en la administración del mandato.

La responsabilidad relativa a las culpas se aplica con menos rigor al mandato gratuito que al retribuido. (Artículo 1342). (*)

(*) *Ver: artículo 2251 de esta norma.*

2066.- El mandatario está obligado a poner en conocimiento del mandante los hechos que sean de tal naturaleza, que puedan influir para revocar el mandato.

Debe abstenerse de cumplirlo, cuando la ejecución sea manifiestamente dañosa al mandante.

2067.- El mandatario puede nombrar sustituto, con tal que el mandante no se lo haya prohibido; pero responde de los actos del sustituto:

1º.- Cuando no se le hubiera dado facultad de sustituir.

2º.- Cuando esa facultad le hubiese sido conferida sin designar persona y él hubiese elegido una notoriamente incapaz e insolvente.

En ambos casos, puede también el mandante dirigir su acción contra el sustituto.

Lo hecho por el sustituto nombrado contra la prohibición del mandante, será nulo.

2068.- El mandatario puede en el ejercicio de su cargo contratar a nombre propio o al del mandante: si contrata a su propio nombre, no obliga respecto de terceros al mandante.

2069.- Cuando un mandato ha sido dado a dos o más personas conjuntamente, no hay solidaridad entre ellas, a menos de una convención en contrario. (Artículo 2085).

2070.- No podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona, comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuese con su aprobación expresa.

2071.- Si fuese encargado de tomar dinero prestado, podrá prestarlo él mismo al interés corriente; pero facultado para colocar dinero a interés, no podrá tomar lo prestado para sí, sin aprobación del mandante.

2072.- No podrá el mandatario colocar a interés dineros del mandante sin expresa autorización.

Si los colocare a mayor interés que el designado por el mandante, debe abonárselo íntegramente, a menos que se le haya autorizado para apropiarse del resto.

2073.- El mandatario debe intereses de las cantidades que aplicó a usos propios, desde el día que lo hizo y de lo que reste a deber fenecido el mandato, desde que se ha constituido en mora. (*)

(*) *Ver: artículo 2258 de esta norma.*

2074.- El mandatario está obligado a dar cuenta de su administración entregando los documentos relativos y a abonar al mandante lo que haya recibido en virtud del mandato, aun en el caso de que lo que hubiese recibido no le fuese debido al mandante.

La relevación de rendir cuentas no exonera al mandatario de los cargos que contra él justifique el mandante.

2075.- El mandatario que obra bajo este concepto no es responsable a la otra parte, sino cuando se obliga expresamente a ello o cuando traspasa los límites del mandato, sin darle conocimiento de sus poderes.

CAPITULO III

DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDANTE

2076.- El mandante responde por todos los actos del mandatario, siempre

que sea dentro de los términos del mandato. (Artículo 2057, inciso 2°).

No está obligado por lo que se ha hecho excediendo el mandato, sino en cuanto lo haya ratificado expresa o tácitamente.

2077.- El que encarga cierto negocio se entiende que faculta para todos los actos que son indispensables para ejecutarlo, aun cuando no se expresen al conferir el mandato.

Si la ejecución se deja al arbitrio del mandatario, queda obligado el mandante a cuanto aquél prudentemente hiciere con el fin de consumir su encargo.

2078.- Si el mandante y el mandatario contratan sobre un mismo objeto con dos diferentes personas, la fecha decidirá cuál de los dos contratos deba subsistir; en caso de duda, subsistirá el del mandatario. (Artículo 1680).

En el caso de este artículo, si el mandatario hubiese contratado de buena fe, el mandante será responsable del perjuicio causado al tercero cuyo contrato no subsista. Si hubiese contratado de mala fe, es decir, estando prevenido por el mandante, él sólo será responsable de tal perjuicio.

2079.- El mandante debe anticipar al mandatario, si éste lo pidiere, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato.

2080.- El mandante que no cumple por su parte aquello a que es obligado, autoriza al mandatario para desistir de su encargo.

2081.- El mandante debe abonar al mandatario todos los gastos que haya tenido para llenar su encargo, indemnizándole de las anticipaciones que haya hecho y de las pérdidas que haya sufrido, procedentes de sus gestiones y pagándole la remuneración estipulada o la que fuere de uso, a menos que el mandato sea gratuito.

Si no hay culpa imputable al mandatario, no puede el mandante excusarse de hacer ese abono aun cuando el negocio hubiese dado malos resultados ni pedir la reducción del importe, alegando que pudiera haberse gastado menos.

2082.- El interés de las anticipaciones hechas para el cumplimiento del mandato,

se debe por el mandante, desde el día de esas anticipaciones debidamente justificadas.

2083.- El mandatario no está obligado a esperar la presentación de sus cuentas o el entero cumplimiento del mandato para exigir las anticipaciones o gastos que hubiere hecho.

2084.- El mandatario podrá retener en su poder, de los bienes o valores que se hallen a su disposición, cuanto baste para el pago de sus adelantos y gastos y de la remuneración o salario.

2085.- Si dos o más personas han nombrado un mandatario para un negocio común, le quedan obligados *in solidum* para todos los efectos del mandato. (Artículo 2069).

CAPITULO IV

DEL MODO DE ACABARSE EL MANDATO

2086.- El mandato se acaba:

1°.- Por el desempeño del encargo para que fue constituido.

2°.- Por la expiración del tiempo o por el evento de la condición prefijados para que termine el mandato.

3°.- Por la revocación del mandato.

4°.- Por la renuncia del mandatario.

5°.- Por la muerte del mandante o del mandatario.

6°.- Por la quiebra o insolvencia del uno o del otro.

7°.- Por la incapacidad sobreviniente del uno o del otro.

8°.- **DEROGADO por el art. 1o. Ley 10.783 de 18.9.46 (*)**

9°.- Por la cesación de las funciones del mandante, si el mandato ha sido dado en ejercicio de ellas. (**)

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

(**) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 41 nral. 6° y Decreto N° 99/998 de fecha 21 de abril de 1998, artículo 35.*

2087.- El mandante puede revocar el mandato cuando le parezca y obligar al mandatario, si fuere necesario, a que le devuelva el instrumento que encierra la prueba del mandato.

2088.- La revocación del mandato puede ser expresa o tácita.

En uno y otro caso, la revocación produce su efecto desde el día que el mandatario ha tenido conocimiento de ella; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2101.

2089.- El nombramiento de nuevo mandatario para el mismo negocio, importa revocación del primero.

Si el primer mandato es general y el segundo especial, subsiste aquél para los negocios no comprendidos en éste.

2090.- Interviniendo el mandante directamente en el negocio encomendado al mandatario y poniéndose en relación con los terceros, queda revocado el mandato, si él expresamente no manifestare que su intención no es revocar el mandato.

2091.- El mandato que constituye un nuevo mandatario, revocará al primero, aunque no produzca efecto por el fallecimiento o incapacidad del segundo mandatario o aunque no lo acepte o aunque el instrumento del mandato sea nulo por falta o vicio de forma.

2092.- Cuando el mandato fue constituido por dos o más mandantes para un negocio común, cada uno de ellos, sin dependencia de los otros, puede revocarlo por su parte.

2093.- La renuncia del mandatario no pondrá fin a sus obligaciones, sino después de transcurrido el tiempo razonable para que el mandante pueda proveer a los negocios encomendados.

De otro modo, deberá indemnizar al mandante, si es perjudicado; a menos que él se halle en la imposibilidad de administrar por enfermedad u otra causa o sin grave perjuicio de sus intereses propios.

2094.- Sabida la muerte del mandante, cesará el mandatario en sus funciones; pero si de suspenderlas se sigue perjuicio a los herederos del mandante, será obligado a finalizar la gestión principiada.

2095.- En caso de muerte del mandatario, sus herederos que fueren hábiles para la administración de sus bienes, deberán hacer saber al mandante el fallecimiento y mientras reciban nuevas órdenes, cuidarán de los intereses de éste y concluirán los actos de gestión empezados por el mandatario, si de la demora pudiera resultar daño al mandante.

La misma obligación tienen los albaceas, los representantes legales y todos aquellos que suceden en la administración de los bienes del mandatario que ha fallecido o se ha hecho incapaz.

2096.- No se extingue por la muerte del mandante el mandato destinado a ejecutarse después de ella.

Tendrá lugar esta disposición, aunque los herederos fueren menores o incapaces.

2097.- Cualquier mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante, será nulo, si no puede valer como disposición de última voluntad.

2098.- También continúa subsistiendo el mandato aun después de la muerte del mandante, cuando ha sido dado en el interés común de éste y del mandatario o en el interés de un tercero.

2099.- DEROGADO por el art. 1o. Ley 10.783 de 18.9.46 (*)

() Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

2100.- Si son dos o más mandatarios y por la constitución del mandato están obligados a obrar conjuntamente, la muerte o incapacidad de cualquiera de ellos pondrá fin al mandato.

2101.- En general, todas las veces que el mandato expira por una causa ignorada del mandatario, lo que éste haya hecho en ejecución del mandato será válido y dará derecho a terceros de buena fe contra el mandante.

Este quedará también obligado, como si subsistiera el mandato, a lo que el mandatario, sabedor de la causa que lo haya hecho expirar, hubiere pactado con terceros de buena fe; pero tendrá derecho a que el mandatario le indemnice.

Cuando el hecho que ha dado causa a la expiración del mandato hubiere sido notificado al público por los periódicos y en los casos en que no pareciere probable la ignorancia de tercero, podrá el Juez, en su prudencia, absolver al mandante. (*)

(*) *Ver: artículo 2106 de esta norma.*

TITULO IX

DE LA FIANZA

CAPITULO I

DE LA NATURALEZA Y EXTENSION DE LA FIANZA

2102.- Fianza es la obligación de pagar o cumplir por un tercero en el caso de que éste no lo haga.

La fianza puede constituirse, no sólo a favor del principal deudor, sino de otro fiador.

Si el fiador se obligare solidariamente con el deudor principal, se observará lo dispuesto en el Capítulo II del Título II, Parte Primera de este Libro.

2103.- La fianza puede ser convencional, legal o judicial.

La primera es constituida por contrato, la segunda es ordenada por la ley, la tercera por decreto del Juez.

La fianza legal y la judicial se sujetarán a las mismas reglas de la convencional, salvo en cuanto la ley disponga otra cosa.

2104.- La fianza también puede ser gratuita o a título oneroso.

2105.- La fianza no puede existir sin que acceda a una obligación civil o natural.

2106.- Puede afianzarse no sólo una obligación pura y simple, sino condicional o a plazo.

Podrá también afianzarse una obligación futura; y en este caso podrá el fiador retractarse mientras la obligación principal no exista, quedando sin embargo responsable al acreedor y terceros de buena fe, como el mandante en los casos del artículo 2101.

2107.- La fianza, no mediando confesión de parte, sólo puede probarse por escrito, aunque su valor no exceda de 100 unidades reajustables. (Artículo 1595).

La fianza no puede extenderse fuera de los límites en que se contrajo.

Sin embargo, la fianza simple o indefinida de una obligación principal comprenderá todos los accesorios de la deuda.

2108.- El fiador no puede obligarse a más ni en términos más gravosos que el deudor principal, tanto en la cantidad como respecto al tiempo, al lugar, a la condición, al modo de pago o a la pena impuesta por la inejecución del contrato a que acceda la fianza; pero puede obligarse a menos o en términos menos gravosos.

La fianza que exceda bajo cualquiera de los respectos indicados, deberá reducirse a los términos de la obligación principal.

En caso de duda, se adoptará la interpretación más favorable a la conformidad de las dos obligaciones principal y accesoria. (*)

(*) *Ver: artículo 2109 de esta norma.*

2109.- Lo dispuesto en el artículo anterior no impide que el fiador pueda obligarse de un modo más eficaz, por ejemplo, con una hipoteca, aunque la obligación principal no la tenga.

Afianzándose un hecho ajeno, se afianza sólo la indemnización en que el hecho por su inejecución se resuelva.

2110.- Se puede afianzar sin orden y aun sin noticia y contra la voluntad del principal deudor.

2111.- La fianza no puede ser sustituida por una prenda o hipoteca y recíprocamente, contra la voluntad del acreedor.

La disposición anterior no rige en caso de ser la fianza de ley o judicial.

Los Jueces pueden admitir en lugar de ésta, prendas o hipotecas suficientes. (Artículos 368, inciso 2º, 514, número 2º, 2118, número 6º).

2112.- El obligado a dar fiador debe presentar por tal a persona que sea capaz de obligarse, que tenga bienes suficientes para responder de la obligación y que esté domiciliado en la jurisdicción del Juez a quien correspondería el conocimiento del negocio.

Para calificar la suficiencia de los bienes, sólo se tomarán en cuenta los raíces; excepto en materia comercial o cuando la deuda afianzada es módica.

Pero no se tendrá en cuenta los bienes raíces embargados o litigiosos ni los bienes que no existan en el territorio del Estado o que se hallen sujetos a hipotecas gravosas o a condiciones resolutorias.

Si el deudor estuviere recargado de deudas que pongan en peligro aun los inmuebles no hipotecados a ellas, tampoco se contará con éstos. (*)

(*) *Ver: artículo 2113 de esta norma.*

2113.- Si el fiador, aceptado por el acreedor espontánea o judicialmente, llega a estado de insolvencia, debe darse otro que reúna las cualidades exigidas en el artículo anterior, si no prefiere pagar la deuda.

Exceptúase el caso de haber exigido y pactado el acreedor, que se le diera por fiador una persona determinada.

2114.- En las obligaciones a plazo o de tracto sucesivo, el acreedor que no exige fianzas al celebrar el contrato, podrá exigir las, si después de celebrado se temiese fundadamente la ausencia del deudor del territorio del Estado, con ánimo de establecerse en otra parte, sin dejar bienes suficientes para la seguridad de sus obligaciones.

2115.- Los derechos y obligaciones de los fiadores son transmisibles a sus herederos.

2116.- El menor habilitado no puede ser fiador, aun con venia judicial ni por cantidad menor de 500 unidades reajustables. (Artículos 283 y 310).

CAPITULO II

DE LOS EFECTOS DE LA FIANZA

SECCION I

DE LOS EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE EL FIADOR Y EL ACREEDOR

2117.- El fiador no puede ser reconvenido sin previa excusión de todos los bienes del deudor.

2118.- La excusión no tiene lugar:

1°.- Cuando el fiador renunció expresamente este beneficio.

2°.- Cuando se obligó solidariamente con el deudor.

3°.- En el caso de quiebra o concurso del deudor.

4°.- Si el deudor no puede ser demandado judicialmente dentro del Estado.

5°.- Si la obligación afianzada fuese puramente natural.

6°.- Si la fianza fuese judicial.

2119.- El subfiador goza del beneficio de excusión tanto respecto del fiador como del deudor principal y no se entiende que lo renuncia, aunque lo haya renunciado el fiador.

2120.- No se tomará en cuenta para la excusión:

1°.- Los bienes existentes fuera del territorio del Estado.

2°.- Los bienes embargados o litigiosos o los créditos de dudoso o difícil cobro.

3°.- Los bienes cuyo dominio esté sujeto a una condición resolutoria.

4°.- Los hipotecados a favor de deudas preferentes, en la parte que pareciere necesaria para el pago completo de éstas.

2121.- Aunque el fiador no sea reconvenido, podrá requerir al acreedor, desde que sea exigible la deuda, para que proceda contra el deudor principal; y si el acreedor no lo hiciere, el fiador no será responsable por la insolvencia del deudor sobrevenida durante el retardo.

2122.- Cuando varios deudores principales se han obligado solidariamente y

uno de ellos ha dado fianza, el fiador reconvenido tendrá derecho para que se excutan, no sólo los bienes de este deudor, sino los de sus codeudores.

2123.- Se entenderá que el fiador reconvenido para el pago renuncia el beneficio de excusión, si no lo reclamase expresamente, designando bienes del deudor dentro del término señalado por la ley procesal para la admisión de las excepciones previas.

2124.- Si los bienes excutidos no produjeren más que un pago parcial de la deuda, será sin embargo el acreedor obligado a aceptarlo y no podrá reconvenir al fiador, sino por la parte insoluta.

Si reclamada por el fiador la excusión, el acreedor es omiso o negligente en ella y el deudor cae entre tanto en insolvencia, cesa la responsabilidad del fiador.

2125.- El fiador puede oponer al acreedor todas las excepciones resultantes del contrato principal y las que él mismo tenga, pero no las puramente personales al deudor. (Artículos 1241 y 1503).

2126.- La transacción hecha por el fiador con el acreedor no surte efecto para con el deudor principal.

La hecha por éste, tampoco surte efecto para con el fiador contra su voluntad. (Artículo 1524). (*)

(*) *Ver: artículo 2157 de esta norma.*

2127.- Si hubiere dos o más fiadores de una misma deuda, que no se hayan obligado solidariamente al pago, se entenderá dividida la deuda entre ellos por partes iguales y no podrá el acreedor exigir a ninguno de ellos sino la cuota que le corresponda. Es aplicable, en este caso, a los fiadores lo dispuesto por el artículo 1379.

SECCION II

DE LOS EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE EL DEUDOR Y EL FIADOR Y ENTRE VARIOS FIADORES

2128.- El fiador tendrá derecho para que el deudor principal le obtenga el

relevo o le caucione las resultas de la fianza o consigne medios de pago, en los casos siguientes:

1°.- Cuando el fiador es judicialmente demandado para el pago.

2°.- Cuando vencida la deuda, el deudor no la pagase.

3°.- Cuando el deudor dispusese sus bienes o los diese en seguridad de otras obligaciones.

4°.- Cuando el deudor se obligó a relevarlo de la fianza en un tiempo determinado y éste ha vencido.

5°.- Si hay temor fundado de que el deudor principal se ausente fuera de la República, no dejando bienes raíces suficientes para el pago de la deuda.

6°.- Si hubiesen transcurrido cinco años desde el otorgamiento de la fianza, a menos que la obligación principal fuese de tal naturaleza que no esté sujeta a extinguirse en tiempo determinado o que ella se hubiere contraído por un tiempo más largo. (*)

(*) *Ver: artículo 2129 de esta norma.*

2129.- Si el fiador cobra retribución por haber prestado la fianza, no puede pedir aplicación del número 6° del artículo precedente.

Tampoco se extienden al que afianzó contra la voluntad del deudor, los derechos concedidos al fiador por el mismo artículo.

2130.- Si el deudor quebrare antes de pagar la deuda afianzada, el fiador tendrá derecho para ser admitido preventivamente en el pasivo de la masa concursada.

2131.- El fiador que ha pagado por el deudor debe ser indemnizado por éste.

La indemnización comprende:

1°.- La cantidad pagada por la deuda.

2°.- Los intereses legales desde que se hizo saber el pago al deudor.

3°.- Los gastos ocasionados al fiador y lealmente hechos por éste, después de haber puesto en noticia del deudor que se le requería para el pago.

4°.- Los daños y perjuicios, cuando procedan según las reglas generales.

La disposición de este artículo tiene lugar aun cuando se haya dado la fianza, ignorándolo el deudor. (*)

(*) *Ver: artículos 2132 y 2134 de esta norma.*

2132.- El fiador con derecho a ser indemnizado según el precedente artículo, queda subrogado en todos los derechos que el acreedor tenía contra el deudor principal.

Sin embargo, si el fiador ha transigido con el acreedor, no puede pedir al deudor más de lo que realmente haya pagado, a no ser que el acreedor le haya hecho cesión expresa del resto.

2133.- El fiador a quien el acreedor ha condonado la deuda en todo o en parte, no podrá repetir contra el deudor por la cantidad condonada, a menos que el acreedor le haya cedido la acción al efecto.

2134.- Las acciones concedidas por el artículo 2131 no tendrán lugar:

1º.- Cuando el fiador se obligó contra la voluntad del deudor.

2º.- Cuando no fue válido el pago hecho por el fiador.

3º.- Cuando la obligación del principal deudor es puramente natural y no se ha validado por la ratificación o por el transcurso del tiempo.

2135.- Si la obligación principal era a plazo y el fiador la pagó antes de su vencimiento, no podrá reconvenir al deudor, sino después de vencido el plazo.

2136.- El deudor que paga sin avisar al fiador, será responsable para con éste de lo que, ignorando la extinción de la deuda, pagare de nuevo; pero tendrá acción contra el acreedor por el pago indebido.

Si el fiador pagó sin ser demandado y sin haber avisado al deudor, podrá éste oponerle todas las excepciones de que hubiera podido servirse contra el acreedor al tiempo del pago.

Si el deudor, ignorando, por falta de aviso, la extinción de la deuda, pagare de nuevo, no tendrá el fiador recurso contra él; pero podrá intentar contra el acreedor la acción de pago indebido que corresponde al deudor.

2137.- El deudor no está obligado a abonar al fiador lo que éste hubiese pagado, si sabiendo que aquél tenía alguna excepción, que opuesta, destruiría la acción del acreedor, no la dedujo.

No comprende esta disposición las excepciones que son meramente personales al deudor o al mismo fiador.

2138.- Cuando existen varios deudores principales y solidarios de una misma

deuda, el fiador que ha afianzado a todos tiene acción contra cada uno de ellos por el todo.

El fiador particular de uno de ellos, sólo contra él podrá repetir por el todo; y no tendrá contra los socios sino las acciones que le correspondan como subrogado en las del deudor a quien ha afianzado.

2139.- El cofiador que paga la deuda afianzada, queda subrogado en todos los derechos del acreedor contra los otros cofiadores, para cobrar a cada uno de éstos la parte que le corresponda.

El cofiador que pagó más de lo que proporcionalmente le corresponde, es subrogado por el exceso en los derechos del acreedor contra los cofiadores, en los términos del inciso anterior.

2140.- Al fiador que hubiese hecho el pago, podrán los otros cofiadores oponer las mismas excepciones que habrían correspondido al deudor principal contra el acreedor y que no fuesen puramente personales del mismo deudor.

Tampoco podrán oponer al cofiador que ha pagado, las excepciones puramente personales que corresponden a éste contra el acreedor y de que no quiso valerse.

2141.- El subfiador, en caso de insolvencia del fiador por quien se obligó, queda responsable a los otros cofiadores en los mismos términos que lo estaba el fiador.

CAPITULO III

DE LOS MODOS DE ACABARSE LA FIANZA

2142.- La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones. (Artículos 1513, 1523, 1539 y 1544).

2143.- La confusión que se verifica en la persona del deudor y fiador, cuando uno de ellos hereda al otro, no extingue la obligación del subfiador.

2144.- Los fiadores, aunque sean solidarios, quedan libres de su obligación,

siempre que por hecho o culpa del acreedor, no pueden quedar subrogados en los derechos, hipotecas y privilegios del mismo.

No se extiende esta disposición a las seguridades o privilegios constituidos después del otorgamiento de la fianza.

2145.- Si el acreedor aceptó voluntariamente del deudor principal, en descargo de la deuda, un objeto distinto del que éste era obligado a darle, queda irrevocablemente libre el fiador, aunque después sobrevenga evicción del objeto.

2146.- En cuanto a la simple prórroga de plazo concedida por el acreedor, se estará a lo que dispone el artículo 1542.

TITULO X

DE LA TRANSACCION

2147.- La transacción es un contrato por el cual, haciéndose recíprocas concesiones, terminan los contrayentes un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.

Cualquiera que sea la entidad del objeto u objetos sobre que verse la transacción, se requiere para su validez que conste por acto judicial o por escritura pública o privada.

2148.- No puede transigir el que no puede disponer de los objetos que se abandonan por la transacción.

2149.- No puede transigir una persona en nombre de otra, sino con su poder especial en el que deben mencionarse los derechos y bienes sobre que ha de recaer la transacción.

2150.- El tutor y curador no pueden transigir en nombre de la persona que tienen en su guarda, sino en la forma prescrita en el artículo 401.

Se observará además, lo dispuesto en el artículo 426.

Los padres pueden transigir sobre los bienes del hijo que tienen bajo

su potestad; pero si la transacción recayere sobre bienes raíces o sobre un objeto de valor de más de 500 unidades reajustables, la transacción no surtirá efecto sin la aprobación judicial.

2151.- DEROGADO por el art. 2o. de Ley 10.783 de 18.9.46 (*)

() Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

2152.- Las personas jurídicas sólo pueden transigir en conformidad a las leyes o reglamentos especiales que les conciernen.

2153.- La transacción puede recaer sobre la acción civil que nace de un delito, pero no sobre la acción criminal que corresponda, sea a la parte ofendida, sea al Ministerio Público.

2154.- No se puede transigir sobre el estado civil de las personas.

Pero valdrá la transacción sobre intereses puramente pecuniarios subordinados al estado de una persona, aunque éste sea objeto de contestación, con tal que al mismo tiempo la transacción no verse sobre el estado de ella.

2155.- La transacción sobre alimentos futuros no surtirá efectos, sino después de ser aprobada judicialmente.

2156.- La transacción no perjudica ni aprovecha sino a los contratantes.

2157.- Cuando haya fiador de las obligaciones sobre que se transige, se observará lo dispuesto en el artículo 2126.

2158.- Las diferentes cláusulas de una transacción son indivisibles, a menos que las partes declaren expresamente lo contrario.

2159.- Las transacciones deben interpretarse estrictamente.

La transacción no comprende sino los objetos expresados general o específicamente en ella o que por una inducción necesaria de sus palabras, deben reputarse comprendidos.

La renuncia general de derechos no se extiende a otros que a los que tienen relación con el objeto o los objetos sobre que se transige.

2160.- Por la transacción no se transmiten sino que se declaran o reconocen los derechos que hacen el objeto de las diferencias sobre que ella recae. (Artículo 1702).

La declaración o reconocimiento de esos derechos no obliga al que lo hace a garantizarlos ni le impone responsabilidad alguna en caso de evicción ni importa un título propio en qué fundar la prescripción.

2161.- La transacción, en cuanto extingue los derechos y obligaciones que las partes hubiesen renunciado, tiene respecto de ellas toda la autoridad de la cosa juzgada.

2162.- La transacción en que intervenga error, dolo, violencia o falsedad de documentos, está sujeta a lo dispuesto en el artículo 1269 y siguientes.

Sin embargo, no podrá una de las partes oponer el error de hecho a la otra, siempre que ésta se haya apartado por la transacción de un pleito comenzado o haya desistido de intentarlo, si podía hacerlo sin temeridad.

2163.- El descubrimiento de nuevos documentos no es causa para anular o rescindir la transacción, si no ha habido mala fe.

2164.- Es anulable la transacción sobre un pleito que estuviese ya decidido por sentencia ejecutoriada y no susceptible de reforma por los medios ordinarios, en caso que la parte que pidiera la rescisión de la transacción hubiese ignorado la existencia de la ejecutoria.

2165.- Si se ha estipulado una pena contra el que deje de ejecutar la transacción, habrá lugar a la pena, sin perjuicio de llevarse a efecto la transacción en todas sus partes.

2166.- Si una de las partes ha renunciado el derecho que le correspondía por un título y después adquiere otro título sobre el mismo objeto, la transacción no le priva del derecho posteriormente adquirido.

TITULO XI**DE LOS CONTRATOS ALEATORIOS**

2167.- Los principales contratos aleatorios son:

1°.- El contrato de seguros.

2°.- El préstamo a la gruesa.

3°.- El juego, apuesta o suerte.

4°.- La constitución de renta vitalicia.

Los dos primeros pertenecen a la ley comercial.

CAPITULO I**DEL JUEGO, APUESTA Y SUERTE**

2168.- El contrato de juego tendrá lugar, cuando dos o más personas poniéndose a jugar, se obligan a pagar a la que ganare, una suma de dinero u otro objeto determinado.

Habrá apuesta cuando dos personas, que son de opinión contraria sobre cualquier materia, convienen que aquella cuya opinión resulte fundada, recibirá de la otra una suma de dinero o cualquier otro objeto determinado.

Se aplicará a la suerte las disposiciones de este capítulo, si a ella se recurre como apuesta o como juego.

2169.- La ley no acuerda acción alguna para reclamar lo ganado al juego o en apuesta.

Exceptúanse los casos previstos en el artículo 2178.

2170.- La deuda de juego o apuesta no puede compensarse ni ser convertida por novación en una obligación civilmente eficaz. (*)

(*) *Ver: artículo 2171 de esta norma.*

2171.- El que hubiere firmado una obligación que tenía en realidad por causa una deuda de juego o de apuesta, conserva, a pesar de la indicación de otra causa civilmente eficaz, la excepción concedida por el artículo anterior y puede probar por todos los medios, la causa real de la obligación.

2172.- Si una obligación de juego o apuesta hubiere sido revestida como título a la orden, el que la suscribió debe pagarlo al portador de buena fe; pero tendrá acción para repetir el importe al que recibió el billete. La entrega de éste no equivaldrá a pago que hubiese hecho. (Artículo 2176).

2173.- Tampoco hay acción alguna para reclamar el reembolso del dinero prestado a sabiendas para jugar o para apostar.

2174.- El que ha recibido y ejecutado el mandato de pagar sumas perdidas en el juego o apuesta, puede exigir del mandante el reembolso de ellas; pero si el mandato hubiese sido de jugar por cuenta del mandante o en sociedad de éste con el mandatario, no puede exigirse del mandante el reembolso de lo anticipado por el mandatario.

2175.- El tercero que, sin mandato, hubiese pagado una deuda de juego o apuesta, no goza de acción alguna contra aquel por quien hizo el pago.

2176.- El que ha pagado voluntariamente deudas de juego o de apuestas no puede repetir lo pagado, a menos que hubiese dolo o fraude de parte del ganancioso. (Artículos 1313 y 1445).

Habrá dolo en el juego o apuesta, cuando el que ganó tenía certeza del resultado o empleó algún artificio para conseguirlo.

2177.- Lo pagado por las personas que no tienen la libre administración de sus bienes, podrá repetirse en todos los casos por sus representantes legales, no sólo de aquellos que ganaron, sino también de aquellos en cuya casa tuvo lugar el juego, siendo unos y otros considerados como deudores solidarios.

2178.- Las disposiciones precedentes no comprenden las deudas de juego o de apuesta que provengan de ejercicio de fuerza, destreza de armas, carreras y otros juegos o apuestas semejantes, los cuales producen acción civilmente eficaz, con tal que en ellos no se haya contravenido a alguna ley o reglamento de Policía.

En caso de contravención, desechará el Juez la demanda en el todo.

2179.- Cuando las personas se sirvieren del medio de la suerte, no como apuesta o juego, sino para dividir cosas comunes o terminar alguna cuestión,

producirá, en el primer caso, los efectos de una partición; y en el segundo, los de una transacción, con tal que el convenio *conste de un modo legal*.

2180.- Lo dispuesto en este capítulo, se entiende que es sin perjuicio de lo que sobre el juego prescriba la ley penal.

2181.- Las loterías y rifas, cuando se permitan, serán regidas por disposiciones especiales o por los reglamentos de Policía.

CAPITULO II

DE LA CONSTITUCION DE RENTA VITALICIA

2182.- El contrato de renta vitalicia es un contrato aleatorio, en que una persona se obliga, a título oneroso, a pagar a otra una renta o pensión periódica, durante la vida de cualquiera de estas dos personas o de un tercero.

Cuando la renta vitalicia se constituye gratuitamente, no hay contrato aleatorio y se sujetará a las reglas de las donaciones y legados, sin perjuicio de regirse por las de este capítulo, en lo que fueren aplicables.

2183.- El contrato de renta vitalicia deberá otorgarse, pena de nulidad, por escritura pública y no se perfeccionará sino por la entrega del precio.

2184.- El precio de la renta vitalicia o lo que se paga por el derecho de percibirla, puede consistir en dinero o en cosas raíces o muebles.

La pensión no puede ser sino en dinero.

2185.- Será nula toda cláusula de no poder el acreedor enajenar su derecho a percibir la renta.

2186.- Una renta vitalicia puede constituirse sobre la vida del que da el precio o sobre la de una tercera persona y aun sobre la del deudor o sobre varias vidas. Ella puede ser creada a favor de una sola persona o de muchas, sea conjuntamente o sea sucesivamente.

2187.- Es nulo el contrato, si antes de perfeccionarse, muere la persona de

cuya existencia pende la duración de la renta o al tiempo del contrato adolecía de una enfermedad que le haya causado la muerte dentro de los treinta días subsiguientes, aunque las partes tuviesen conocimiento de la enfermedad.

2188.- Cuando la renta vitalicia fuese constituida a favor de dos o más personas para que la perciban simultáneamente, se debe declarar la parte que corresponde a cada uno de los pensionistas y si el que de éstos sobrevive, tiene o no derecho de acrecer. A falta de declaración, se entenderá que la renta les corresponde por partes iguales y que cesa, en relación a cada uno de los pensionistas que falleciere.

2189.- Si la renta vitalicia es constituida sobre dos o más vidas a favor del que da el precio o de un tercero, la renta se deberá íntegra hasta la muerte de todos aquellos sobre cuya vida fue constituida.

2190.- Si el deudor no presta las seguridades estipuladas, podrá el acreedor pedir que se anule el contrato.

2191.- El acreedor no podrá pedir resolución del contrato aun en el caso de no pagársele la pensión ni podrá pedirla el deudor aun ofreciendo restituir el precio y abonar o condonar las pensiones devengadas, salvo que los contratantes hayan estipulado otra cosa.

2192.- En caso de no pagarse la pensión, podrá procederse contra los bienes del deudor para el pago de lo atrasado y obligarle a prestar seguridades para el pago futuro.

2193.- Para exigir el pago de la renta vitalicia será necesario probar la existencia de la persona de cuya vida depende.

2194.- Si el tercero de cuya existencia pende la duración de la renta sobrevive al acreedor, pasará el derecho de éste a sus herederos hasta la muerte del tercero.

2195.- Muerta la persona sobre cuya existencia fue constituida la renta vitalicia, se deberá la de todo el año corriente, si en el contrato se ha estipulado que se pague con anticipación; y a falta de esta estipulación, se deberá solamente la parte que corresponda al número de días corridos.

TÍTULO XII**DEL PRESTAMO**

2196.- Hay dos clases de préstamo: el de las cosas fungibles y el de las cosas no fungibles.

El primero se llama *mutuo o préstamo de consumo*; y el segundo *comodato o préstamo de uso*.

CAPÍTULO I**DEL MUTUO O PRESTAMO DE CONSUMO**

2197.- El *mutuo o préstamo de consumo*, es un contrato por el cual se da dinero u otra cosa de las fungibles, con cargo de volver otro tanto de la misma especie y calidad.

2198.- El mutuuario se hace dueño de la cosa mutuada, la cual perece para él, de cualquier manera que se pierda.

2199.- La obligación que resulta de un préstamo de dinero nunca es mayor que la suma numérica enunciada en el contrato. Si hay alza o baja de la moneda antes del pago, el deudor cumple, no habiendo estipulación contraria, con devolver la suma numérica prestada en la moneda corriente al tiempo en que deba verificarse el pago.

2200.- El que habiendo firmado un documento por dinero prestado, oponga la excepción de dinero no contado, tendrá que probarla como cualquiera de las otras excepciones y sea cual fuere el tiempo en que la oponga.

2201.- Si se han prestado cosas fungibles que no sean dinero, se deberá devolver igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad, sea que el precio de ellas haya bajado o subido en el intervalo; y si esto no fuese posible o no lo exigiere el acreedor, deberá el mutuuario pagar lo que valgan en el tiempo y lugar en que ha debido hacerse el pago.

2202.- El mutuario está obligado a devolver la cosa mutuada en el plazo y lugar estipulados.

Si nada se ha estipulado acerca del plazo y lugar en que debe hacerse la devolución, debe verificarse luego que la reclame el mutuante, pasados diez días de la celebración del contrato y en el domicilio del deudor. (Artículo 1440).

2203.- Si se ha convenido expresamente que el mutuario pagaría cuando pudiese o cuando tuviese medios de hacerlo y las partes no llegasen a ponerse de acuerdo sobre la época del pago, fijará el Juez según las circunstancias, el tiempo en que deba hacerse aquél.

2204.- El mutuante es responsable de los perjuicios que sufra el mutuario por la mala calidad o vicios ocultos de la cosa prestada. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 17.250 de fecha 11 de agosto de 2000, artículo 34.*

2205.- El mutuo puede ser gratuito y puede también intervenir en él la obligación de pagar interés por la cosa prestada.

Se puede estipular interés en dinero o cosas fungibles.

No será válida la estipulación sobre intereses, si no constase por escrito.

Los intereses deberán ser especificados documentalmente en forma expresa, con mención concreta de valores numéricos. Es nula toda estipulación en contrario.

No obstante, podrá establecerse una tasa variable referida a plazas o promedios determinados. (*)

(*) *Ver: artículo 2208 de esta norma.*

2206.- El interés convencional no tiene más tasa que la que se fija en el contrato, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y legales.

2207.- El interés legal o sea el que la misma ley impone en determinados casos, es el de *doce* por ciento al año.

En los casos en que sean de aplicación los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto Ley 14.500 de 8 de marzo de 1976, la tasa fijada en el inciso precedente será del seis por ciento anual.

2208.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2205, en toda estipulación de intereses que no determine la cuota o el tiempo en que empezarán a correr,

se presume que las partes se han sujetado a los intereses legales desde el tiempo en que debió satisfacerse el capital.

2209.- Si se ha pagado intereses aunque no estipulados, no podrán repetirse ni imputarse al capital.

2210.- Si se ha estipulado intereses y el mutuante ha dado carta de pago por el capital sin reservar expresamente los intereses, se presumirán pagados.

2211.- El recibo de intereses posteriormente vencidos, dado sin condición ni reserva, hace presumir el pago de los anteriores.

2212.- La estipulación sobre pago de intereses durante el plazo prefijado para que el deudor goce de la cosa prestada, se entiende prorrogada después de transcurrido aquél, por el tiempo que se demore la devolución del capital.

2213.- En los casos en que la ley no hace correr expresamente los intereses o cuando éstos no están estipulados en el contrato, la tardanza en el cumplimiento de la obligación hace que corran los intereses desde el día de la demanda, aunque ésta excediera el importe del crédito y aunque el acreedor no justifique pérdida o perjuicio alguno y el obligado creyese de buena fe no ser deudor.

2214.- En las deudas ilíquidas, los intereses corren desde la demanda judicial por la suma del crédito que resulte de la liquidación.

2215.- Los intereses no pueden producir intereses sino por una convención especial.

CAPITULO II

DEL COMODATO O PRESTAMO DE USO

SECCION I

DE LA NATURALEZA DEL COMODATO

2216.- El comodato o préstamo de uso es un contrato por el cual una de las

partes entrega a la otra alguna cosa no fungible, mueble o raíz, para que use de ella gratuitamente y se la devuelva en especie.

Este contrato podrá probarse por testigos, cualquiera que sea el valor de la cosa prestada.

2217.- Es prohibido prestar cualquiera cosa para un uso contrario a las leyes o buenas costumbres o prestar cosas que están fuera del comercio por nocivas al bien público.

2218.- El comodante conserva la posesión y la propiedad o el derecho en cuya virtud hace el comodato: el comodatario adquiere la mera tenencia y el uso, pero no los frutos; si interviene algún emolumento pagable por el que recibe la cosa para usar de ella, la convención dejará de ser comodato.

2219.- Las obligaciones y derechos que nacen del contrato pasan a los herederos de ambos contratantes, a menos que por las circunstancias aparezca que se han hecho en contemplación a sólo la persona del comodatario, en cuyo caso los herederos de éste no tienen derecho a continuar en el uso de la cosa. (Artículo 2233). (*)

(*) *Ver: artículo 2225 de esta norma.*

SECCION II

DE LAS OBLIGACIONES DEL COMODATARIO

2220.- El comodatario está obligado a velar como un buen padre de familia en la conservación de la cosa prestada. El no puede servirse de ella sino para el uso convenido o a falta de convención, para el uso ordinario de las cosas de su clase.

En caso de contravención podrá el comodante exigir el abono de los daños y perjuicios y la restitución inmediata de la cosa prestada, aunque para la restitución se haya estipulado plazo.

2221.- Si por culpa del comodatario la cosa prestada sufre un deterioro tal que no sea ya susceptible de emplearla en su uso ordinario, podrá el

comodante exigir el precio anterior de ella, abandonando su propiedad al comodatario.

2222.- El comodatario no responde de los casos fortuitos o de fuerza mayor, si no es:

1º.- Cuando el accidente ha sido precedido de alguna culpa suya, sin la cual el daño en la cosa prestada no hubiera tenido lugar.

2º.- Cuando la cosa prestada no ha perecido por caso fortuito o fuerza mayor, sino porque el comodatario la empleó en otro uso o porque la empleó por un tiempo más largo que el designado en el contrato.

3º.- Cuando ha podido garantizar del accidente la cosa prestada, empleando su propia cosa y no se ha servido de ésta; o si no pudiendo conservar más que una de las dos, ha preferido la suya.

2223.- El comodatario no responde de los deterioros en la cosa prestada por efecto del uso legítimo de ella o cuando la cosa se ha deteriorado por su propia calidad, vicio o defecto.

2224.- Si después de haber pagado el comodatario el valor de la cosa que se había perdido y de la cual debía responder, la recuperase el mismo comodatario o el comodante, no tendrá derecho aquél para repetir el precio pagado y obligar a éste a recibirla.

Pero el comodante tendrá derecho para exigir la restitución de la cosa y obligar al comodatario a recibir el precio pagado.

2225.- El comodatario es obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo convenido o a falta de convención, después del servicio para que ha sido prestada, salvo lo dispuesto en los artículos 2219 y 2234.

La restitución deberá hacerse al comodante o a la persona que tenga derecho para recibirla a su nombre, según las reglas generales.

2226.- El comodatario no puede retener la cosa prestada a pretexto de lo que el comodante le debe, aunque sea por razón de expensas. (Artículos 1500 y 1509).

2227.- El comodatario no tendrá derecho para suspender la restitución, alegando que la cosa prestada no pertenece al comodante; salvo que haya sido

perdida, hurtada o robada a su dueño o que se embargue judicialmente en manos del comodatario.

Si se ha prestado una cosa perdida, hurtada o robada, el comodatario que lo sabe y no lo denuncia al dueño, dándole un plazo razonable para reclamarla, se hará responsable de los daños y perjuicios que de la restitución se sigan al dueño.

Y si el dueño no la reclamare oportunamente, podrá hacerse la restitución al comodante.

El dueño por su parte tampoco podrá exigir la restitución, sin el consentimiento del comodante o sin decreto del Juez. (*)

(*) *Ver: artículos 2261 y 2303 de esta norma.*

2228.- Cesa la obligación de restituir, desde que el comodatario descubre que él es el verdadero dueño de la cosa prestada.

Pero si el comodante le disputa el dominio, deberá restituir, a no ser que se halle en estado de probar, breve y sumariamente, que la cosa prestada le pertenece. (*)

(*) *Ver: artículo 2261 de esta norma.*

2229.- Si los herederos del comodatario, con conocimiento del préstamo, hubiesen enajenado la cosa prestada, deberán pagar todo el valor de ella y resarcir los daños y perjuicios; y aun podrán ser perseguidos criminalmente por abuso de confianza.

Si los herederos no tuvieron conocimiento del préstamo, el comodante podrá, a su arbitrio, ejercer la acción reivindicatoria de la cosa o exigir de los herederos el precio recibido o que le cedan las acciones que en virtud de la enajenación les competan.

2230.- Si la cosa no perteneciere al comodante y el dueño la reclamare antes de terminar el comodato, no tendrá el comodatario acción de daños y perjuicios contra el comodante, salvo que éste haya sabido que la cosa era ajena y no lo haya advertido el comodatario.

2231.- Todos los comodatarios a quienes se presta conjuntamente una cosa, responden solidariamente por la restitución o daño sufrido en ella.

2232.- Los gastos hechos por el comodatario para servirse de la cosa que tomó prestada, no puede repetirlos.

SECCION III

DE LAS OBLIGACIONES DEL COMODANTE

2233.- El comodante debe dejar al comodatario o a sus herederos el uso de la cosa prestada durante el tiempo convenido o hasta que el servicio para que se prestó fuese hecho; salvo la excepción contenida en el artículo 2219 y la que se va a expresar en el siguiente.

2234.- Si antes de llegado el plazo o de concluirse el uso para que se prestó la cosa, sobreviene al comodante alguna imprevista y urgente necesidad de la misma cosa, podrá exigir del comodatario su restitución.

2235.- El comodante debe abonar las expensas extraordinarias causadas durante el contrato para la conservación de la cosa prestada, siempre que el comodatario lo ponga en su conocimiento antes de hacerlas, salvo cuando fueren tan urgentes que no pueda anticipar el aviso sin grave peligro.

2236.- El comodante que conociendo los vicios o defectos ocultos de la cosa prestada no previno de ellos al comodatario, responde a éste de los daños que por esa causa sufre.

2237.- El comodato toma el nombre de *precario*, si el comodante se reserva la facultad de pedir la restitución de la cosa prestada en cualquier tiempo.

2238.- Se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija tiempo para su restitución.

Constituye también precario la tenencia de una cosa ajena, sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño.

TÍTULO XIII**DEL DEPOSITO (*)**

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 17.228 de fecha 7 de enero de 2000, artículo 2.*

CAPITULO I**DEL DEPOSITO EN GENERAL Y DE SUS DIVERSAS ESPECIES**

2239.- El depósito en general es un acto (Artículo 2287, inciso 3°) por el cual alguno recibe una cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla en especie.

La cosa depositada se llama también depósito.

2240.- El depósito es de dos maneras: el depósito propiamente dicho y el secuestro.

El primero es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del depositante.

2241.- Pueden ser objeto del depósito las cosas muebles o raíces, aunque, por lo general, sólo se verifica en las primeras.

2242.- El depósito es ordinariamente gratuito; pero puede intervenir salario, sin que el contrato degenera.

2243.- No se transfiere por el depósito la propiedad de la cosa, que, con todos los derechos que de ella emanan, permanece en el depositante.

2244.- El depósito propiamente dicho es voluntario o necesario.

CAPITULO II**DEL DEPOSITO VOLUNTARIO****SECCION I****DE LA NATURALEZA DEL DEPOSITO VOLUNTARIO**

2245.- El depósito voluntario se forma por el consentimiento recíproco del depositante y depositario, sin que dé ocasión a él una calamidad.

2246.- La prueba del depósito voluntario se regirá por lo dispuesto en los artículos 1594 y siguientes.

2247.- Cuando, según los mencionados artículos, deba otorgarse el contrato por escrito y se hubiere omitido esta formalidad, será creído el depositario por su declaración, tanto sobre el hecho mismo del depósito, como sobre la cosa que formaba su objeto y sobre su restitución.

2248.- No habiendo contestación sobre el hecho del depósito y sólo sí sobre su autor, podrá probarse esto por testigos.

2249.- El error acerca de la sustancia, calidad o cantidad de la cosa depositada, no invalida el contrato.

El depositario, sin embargo, descubriendo que la guarda de la cosa depositada le acarrea peligro, podrá restituir inmediatamente el depósito.

2250.- El depósito voluntario no puede tener pleno efecto sino entre personas capaces de contratar.

Si no lo fuera el depositante, el depositario, sin embargo, contraerá todas las obligaciones de tal.

Y si no lo fuere el depositario, el depositante tendrá sólo acción para reclamar la cosa depositada mientras esté en poder del depositario y a falta de esta circunstancia, tendrá sólo acción personal contra el depositario hasta concurrencia de aquello en que por el depósito se hubiese hecho más rico; quedándole a salvo el derecho que tuviere contra terceros poseedores y sin perjuicio de la pena que las leyes impongan al depositario en caso de dolo.

SECCION II

DE LAS OBLIGACIONES DEL DEPOSITARIO

2251.- El depositario está obligado a guardar la cosa y restituirla al depositante siempre que se la pidiere: su responsabilidad, en cuanto a la guarda y pérdida de la cosa, se regirá por lo dispuesto en el Capítulo I, Título II, Parte Primera de este Libro.

Es aplicable al depósito, la diferencia que establece el inciso 2º del artículo 2065.

2252.- Es obligación del depositario dar aviso al depositante de las medidas y gastos que sean de necesidad para la conservación de la cosa y de hacer aquellos gastos que tengan el carácter de urgentes, los que serán a cuenta del depositante.

Faltando a estas obligaciones, será responsable de los daños y perjuicios que su omisión causare. (*)

(*) *Ver: artículo 2271 de esta norma.*

2253.- El depositario no puede servirse de la cosa depositada, sin permiso expreso del depositante.

En caso contrario, responderá de los daños y perjuicios.

2254.- Cuando el depositario tiene permiso de servirse o usar de la cosa depositada, el contrato cambia de naturaleza y ya no es depósito, sino préstamo o comodato.

No se presumirá concedido este permiso en ningún caso, si no consta expresamente.

2255.- Cuando las cosas depositadas se entregan cerradas y selladas, debe restituirlas el depositario en la misma forma y responderá de los daños y perjuicios si ha sido forzado el sello o cerradura por su culpa, en cuyo caso se estará a la declaración del depositante en cuanto al valor de lo depositado.

Si esto acaeció sin culpa del depositario, incumbe al depositante la prueba del valor de lo depositado.

En todo caso de fractura o forzamiento, se presumirá culpa en el depositario, salva a éste la prueba de que no la hubo.

2256.- El depositario no debe violar el secreto de un depósito de confianza ni podrá ser obligado a revelarlo.

2257.- El depositario debe devolver la cosa en el estado en que se halla al tiempo de la restitución. Los deterioros que no provengan de culpa suya, son de cuenta del depositante.

2258.- La cosa depositada ha de ser devuelta con todos sus frutos y accesiones.

Consistiendo el depósito en dinero, se aplicará al depositario lo dispuesto para con el mandatario en el artículo 2073.

2259.- Cuando el depositario no sea responsable del caso fortuito o fuerza mayor, si a consecuencia de accidente, recibe el precio de la cosa depositada u otra en lugar de ella, es obligado a restituir al depositante lo que se le haya dado.

2260.- El heredero del depositario, cuando ha vendido con buena fe la cosa mueble que no sabía fuese depositada, cumple con entregar el precio que hubiese recibido o ceder su acción contra el comprador, si aun no la hubiere pagado.

Lo cual se entenderá sin perjuicio de la acción reivindicatoria que corresponda al depositante.

2261.- Las reglas de los artículos 2227 y 2228 son aplicables al depósito. (*)

(*) *Ver: artículo 2268 de esta norma.*

2262.- El depositario no debe restituir la cosa sino al que se la entregó o a aquel en cuyo nombre se hizo el depósito o fue designado para recibirla.

2263.- En caso de haber muerto el depositante, la devolución deberá hacerse a su heredero, aunque al constituirse el depósito se hubiere indicado un tercero para la devolución.

Si hay dos o más herederos y no se ha hecho la partición, deberán ponerse de acuerdo sobre la devolución del depósito; después de la partición, será devuelto al que, según la misma, resulte tener derecho.

2264.- Si son dos o más los depositantes y no se ha indicado el que haya de recibir el depósito, deberán ponerse de acuerdo sobre el particular.

A falta de ese acuerdo, el depositario deberá poner la cosa depositada a la orden del Juez.

2265.- Si el depositante ha mudado de estado, por ejemplo, siendo mayor de edad ha sido puesto bajo curaduría, sólo debe entregarse el depósito al que tiene la administración de los bienes y derechos del depositante.

2266.- Si el depósito ha sido hecho por un tutor u otro administrador cualquiera de negocios ajenos, en una de esas calidades, sólo puede ser devuelto a la persona a quien representaba ese tutor o administrador, si su representación ha concluido.

2267.- Si el contrato de depósito designa el lugar en que debe hacerse la devolución, los gastos de transporte son de cuenta del depositante.

Si el contrato no designa el lugar para la devolución, debe hacerse donde se verificó el depósito o donde la cosa se halla, sin dolo por parte del depositario.

2268.- El depósito debe ser restituido al depositante cuando quiera que lo reclame, aunque en el contrato se haya fijado un plazo o tiempo determinado para la restitución.

Esta disposición se entiende sin perjuicio de lo que se prescribe en el artículo 2261.

2269.- El depositario que tiene justos motivos para descargarse de la guarda de la cosa, podrá, aun antes del término designado en el contrato, restituirla al depositante; y si éste lo resiste, podrá obtener del Juez su consignación.

2270.- El depositario no puede compensar la obligación de devolver el depósito con ningún crédito suyo ni por otro depósito que él hubiese hecho al depositante, aunque fuese de mayor suma o de cosa de más valor.

2271.- El depositario podrá retener la cosa depositada en razón de las expensas que haya hecho para la conservación de la cosa (artículo 2252); pero no por el pago del salario que se hubiere estipulado ni por perjuicios que el depósito le hubiere causado ni por ninguna otra causa extraña al depósito.

SECCION III

DE LAS OBLIGACIONES DEL DEPOSITANTE

2272.- El depositante está obligado a reembolsar al depositario todos los gastos que hubiese hecho para la conservación de la cosa depositada y a

indemnizarle de todos los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el depósito.

CAPITULO III

DEL DEPOSITO NECESARIO

2273.- Depósito *necesario*, que también se llama *miserable*, es el que se hace por ocasión de alguna calamidad, como incendio, ruina, saqueo, naufragio u otras semejantes.

2274.- En el depósito necesario se admite la prueba por testigos, aunque se trate de cantidad de 100 unidades reajustables o más. (Artículo 1599, número 2). (*)

(*) *Ver: artículo 2277 de esta norma.*

2275.- Si una persona adulta que no tiene la libre administración de sus bienes, pero que está en su sana razón, se hace cargo de un depósito necesario, responderá de él aunque para recibirlo no haya sido autorizada por su representante legal. (*)

(*) *Ver: artículo 2277 de esta norma.*

2276.- En todo lo demás, el depósito necesario se registrará por las reglas del voluntario. (*)

(*) *Ver: artículo 2277 de esta norma.*

2277.- Los equipajes que los transeúntes o viajeros introducen en una posada, con conocimiento del posadero o de sus dependientes, se miran como depositados bajo la custodia del dueño del establecimiento. Este depósito se asemeja al necesario y se le aplican los artículos 2274 y siguientes.

2278.- El posadero es responsable de todo daño que se cause a dichos equipajes por culpa suya o de sus dependientes o de los extraños que visiten la posada y hasta de los hurtos y robos; pero no responde de fuerza mayor o caso fortuito, salvo que se le pueda imputar culpa o dolo.

2279.- El posadero es además obligado a la seguridad de los efectos que el

transeúnte o viajero conserva alrededor de sí. Bajo este respecto, es responsable del daño causado o del hurto o robo cometido por los mozos o sirvientes de la posada o por personas extrañas, que no sean familiares o visitantes del alojado.

2280.- El transeúnte o viajero que se queje de daño, hurto o robo, deberá probar el número, calidad y valor de los objetos desaparecidos.

El Juez estará autorizado para rechazar la prueba testimonial ofrecida por el demandante, cuando éste no le inspire confianza o las circunstancias le parezcan sospechosas.

2281.- El viajero que trajere consigo efectos de gran valor, de los que generalmente no llevan consigo los transeúntes o viajeros, deberá hacerlo saber al posadero y aun mostrarle dichos efectos, si lo exigiere, para que se emplee especial cuidado en su custodia; y de no hacerlo así, el posadero no será responsable de la pérdida.

2282.- Si el hecho fuere de algún modo imputable a negligencia del transeúnte o viajero, será absuelto el posadero.

2283.- El posadero no se eximirá de la responsabilidad que le imponen los artículos precedentes, por medio de sus reglamentos, programas o avisos que pusiere, anunciando que no responde de los efectos introducidos en la posada ni de otro modo alguno que no sea por una convención especial, firmada por las partes.

2284.- Lo dispuesto por los artículos anteriores se aplica a los administradores de fondas, hoteles, cafés, casas de billar y otros establecimientos, cualquiera que sea su denominación, en que se dé alojamiento a los transeúntes o viajeros.

CAPITULO IV

DEL SECUESTRO

2285.- El *secuestro* es el depósito de una cosa que se disputan dos o más

individuos, en manos de otro que se obliga a restituirla, concluido el pleito, al que según la sentencia deba obtenerla.

El depositario se llama secuestre.

2286.- El secuestro se gobierna por las reglas del depósito voluntario, salvo las que se expresan en los artículos siguientes y lo que disponga la ley procesal.

2287.- El secuestro es convencional o judicial.

El convencional se constituye por el solo consentimiento de los litigantes.

El judicial se constituye por decreto del Juez y no ha menester otra prueba.

2288.- Los depositantes contraen para con el secuestre las mismas obligaciones que el depositante respecto del depositario, por lo que toca a los gastos y daños que le haya causado el secuestro.

2289.- Si el secuestre perdiere la tenencia de la cosa, podrá reclamarla contra toda persona, incluso cualquiera de los depositantes que la haya tomado sin consentimiento del otro o sin decreto del Juez, según el caso fuere.

2290.- El secuestre de un inmueble tiene, relativamente a su administración, las facultades y deberes de mandatario y deberá dar cuenta de sus actos al futuro adjudicatario.

2291.- Mientras no recaiga sentencia de adjudicación pasada en autoridad de cosa juzgada, no podrá el secuestre exonerarse de su cargo sino por una necesidad imperiosa, de que dará aviso a los depositantes, si el secuestro fuere convencional o al Juez, en el caso contrario, para que dispongan su relevo.

Podrá también cesar, antes de dicha sentencia, por voluntad unánime de las partes, si el secuestro fuere convencional o por decreto del Juez, en el caso contrario.

TÍTULO XIV**DEL CONTRATO DE PRENDA (*)**

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 17.228 de fecha 7 de enero de 2000, artículo 1.*

2292.- Por el contrato de prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito.

La cosa entregada se llama *prenda*.

El acreedor que la toma se llama acreedor *prendario*.

2293.- El contrato de prenda supone siempre una obligación principal a que accede.

2294.- Puede dar prenda legalmente, el que tiene derecho de enajenar la cosa. (*)

Vale sin embargo, la prenda de cosa ajena, cuando el dueño, capaz de contratar, presta su ratificación o estando delante calla y no contradice.

(*) *Ver: artículo 2351 de esta norma.*

2295.- La prenda puede ser constituida por una deuda eventual o condicional, siendo a cargo del acreedor la prueba de haberse cumplido la condición.

2296.- La prenda puede constituirse no sólo por el deudor, sino por un tercero cualquiera que hace este servicio al deudor.

2297.- La prenda confiere al acreedor el derecho de hacerse pago en la cosa dada en prenda, con preferencia a los demás acreedores en caso de concurso, con tal que medien las circunstancias requeridas en el Título *De la graduación de acreedores*.

Pero entre acreedor y deudor o no tratándose de preferencia respecto de tercero, la prueba del contrato de prenda seguirá las reglas generales.

2298.- Se puede dar en prenda un crédito entregando el título; pero será necesario que el acreedor lo notifique al deudor del crédito consignado en el título, prohibiéndole que lo pague en otras manos.

El acreedor a quien se haya dado crédito en prenda podrá cobrarlo en juicio o fuera de él, en la misma forma en que podría verificarlo el que lo empeñó.

2299.- El acreedor a quien se ha prometido prenda, tiene derecho de exigir al deudor que se la entregue y no pudiendo verificarlo por haberla enajenado o perdido, estará obligado a dar otra en su lugar.

2300.- En todos los casos, el acreedor no adquiere el derecho de prenda, sino en cuanto la cosa ha sido entregada y ha permanecido en su poder o en el del tercero en quien las partes convinieron o que fue designado por el Juez.

2301.- Nadie puede apoderarse por autoridad propia de la cosa de su deudor por vía de prenda, a no ser que expresamente se le hubiere conferido esa facultad por el deudor.

Tampoco se puede retener una cosa del deudor en seguridad de la deuda sin su consentimiento, excepto en los casos que las leyes expresamente designan. (Artículo 1854).

2302.- El acreedor que pierde la tenencia de la prenda, tendrá acción para reclamarla contra cualquiera persona, sin exceptuar al deudor, mientras estuviere pendiente el pago de la deuda.

2303.- Si la cosa dada en prenda no pertenece al deudor sino a un tercero que no ha consentido en el empeño, subsiste sin embargo el contrato mientras no la reclama su dueño; a menos que el acreedor sepa haber sido perdida, hurtada o robada, en cuyo caso se aplicará a la prenda lo dispuesto en el artículo 2227.

Si el dueño reclama la cosa empeñada sin su consentimiento y se verificare la restitución, el acreedor podrá exigir que se le entregue otra prenda de igual valor o se le otorgue otra caución competente; y en defecto de una y de otra, se le pague inmediatamente su crédito, aunque haya plazo estipulado para el pago. (*)

(*) *Ver: artículo 2320 de esta norma.*

2304.- El acreedor es obligado a guardar y conservar la prenda como buen padre de familia y responde de los deterioros que la prenda haya sufrido por su hecho o culpa.

No puede servirse de la prenda en manera alguna, si el deudor no le ha concedido expresamente el derecho de hacerlo. Bajo este respecto, sus obligaciones son las mismas que las del depositario.

2305.- El deudor no podrá reclamar la restitución de la prenda en todo o en parte, mientras no haya pagado la totalidad de la deuda en capital e intereses y en su caso las expensas de conservación de la prenda: si el acreedor abusare de ésta, se pondrá en secuestro.

2306.- En los contratos de préstamo se considerará como legal todo lo que en ellos dispongan las partes contratantes, excepto cuando por sus disposiciones se afecte la moral y el orden público.

Es nula toda cláusula que prive al acreedor de la facultad de pedir la venta de la cosa dada en prenda.

2307.- Vencido el término estipulado en el contrato, podrá el acreedor solicitar la venta en subasta pública o la adjudicación por el precio mínimo admisible a un tercero.

Si no hay término estipulado, podrá solicitar la venta transcurridos diez días después de la interpelación hecha al deudor para que cumpla la obligación.

2308.- En el caso de haberse pactado entre acreedor y deudor prendario, que si al vencimiento de la obligación ésta no fuese satisfecha, podrá el acreedor realizar extrajudicialmente la prenda; si ésta es de un valor de Bolsa, cualquiera que sea su especie, se entregará a un corredor de número para su venta; y tratándose de cualquier otra clase de bienes muebles, a un rematador público al mismo fin. (*)

(*) *Ver: artículo 2309 de esta norma.*

Ver en Apéndice Normativo: Decretos Nos. 253/998 de fecha 16 de setiembre de 1998, artículo 3 y 254/998 de fecha 16 de setiembre de 1998, artículo 4.

2309.- La cuenta de venta del rematador público y el boleto del corredor de número serán los comprobantes exigibles para certificar el resultado de las operaciones a que se refiere el artículo anterior.

2310.- Con el producto de la venta realizada se cubrirá el acreedor de su crédito sin intervención del deudor y le entregará a éste el excedente, si lo hubiese; si el deudor se rehusase a recibirlo, lo consignará en la norma establecida para las consignaciones en general. (*)

(*) *Ver: artículo 2311 de esta norma.*

2311.- Contra el procedimiento establecido en el artículo anterior, no se admitirá recurso alguno judicial de efecto suspensivo; y el deudor que algo tuviese que reclamar, sólo podrá hacerlo en vía ordinaria.

2312.- Mientras no se ha consumado la venta o la adjudicación prevenida en los artículos anteriores, podrá el deudor pagar la deuda, con tal que sea completo el pago, incluyéndose los gastos que la venta o la adjudicación hubiesen ya ocasionado.

2313.- En el caso de venta judicial, si el valor de la prenda no excediere de 100 unidades reajustables, podrá el Juez, a petición del acreedor, adjudicársela por su tasación sin que se proceda a subastarla.

2314.- Si vendida o adjudicada la prenda, su precio no alcanzare a cubrir la deuda, se imputará primero a los intereses y gastos y el resto al capital; observándose en caso de ser dos o más las deudas, lo dispuesto en el Título *De los modos de extinguirse las obligaciones, Capítulo I, Sección III De la imputación de la paga.*

2315.- Una vez satisfecho el crédito en todas sus partes, deberá restituirse la prenda; pero el acreedor podrá retenerla si tuviere contra el mismo deudor otros créditos que reúnan los requisitos siguientes:

1º.- Que sean líquidos y ciertos.

2º.- Que se hayan contraído después que la obligación para la cual se constituyó la prenda.

3º.- Que se hayan hecho exigibles antes del pago de esta obligación.

2316.- La restitución de la prenda deberá hacerse con los aumentos que haya recibido de la naturaleza o del tiempo y si ha dado frutos, podrá imputarlos el acreedor al pago de la deuda, dando cuenta de ellos.

2317.- La prenda es indivisible, aunque la deuda se divida entre los herederos del deudor o del acreedor.

En consecuencia, el heredero del deudor que ha pagado su parte de la deuda, no puede reclamar la restitución de la prenda, mientras la deuda no esté completamente pagada; y recíprocamente, el heredero del acreedor que ha recibido parte de la deuda, no puede entregar la prenda en todo o en parte, con perjuicio de los herederos que no han sido pagados.

2318.- Ofreciéndose el deudor a redimir la prenda, pagando toda la deuda con arreglo a lo dispuesto en este Título o consignando su importe total en juicio, está obligado el acreedor, so pena de daños y perjuicios, a la entrega inmediata de la cosa.

2319.- El acreedor prendario que de cualquier modo enajenare o negociare la cosa dada en prenda, sin observar las formas establecidas en el presente Título, incurrirá en la pena del delito de apropiación indebida, sin perjuicio de la indemnización del daño.

2320.- Se extingue el derecho de prenda por la destrucción completa de la cosa; por haber pasado su propiedad al acreedor; y cuando en virtud de una condición resolutoria, pierde su dominio el que la había dado en empeño; pero en este caso, el acreedor de buena fe tiene el mismo derecho que en el caso de haberse empeñado una cosa ajena que se restituye. (Artículo 2303).

2321.- Respecto de los montes de piedad y demás establecimientos autorizados para prestar sobre prendas, se observarán las leyes y reglamentos que les conciernan y subsidiariamente las disposiciones de este Título.

Los contratos previstos en las leyes 5.649 de 21 de marzo de 1918, 8.292 de 24 de setiembre de 1928 y 12.367 de 8 de enero de 1957, quedan sujetos a las normas respectivas.

TÍTULO XV

DE LA HIPOTECA (*)

(*) *Ver: artículo 2380 de esta norma.*

2322.- La hipoteca es un derecho de prenda constituido por convención y con las formalidades de la ley, sobre determinados bienes raíces, que no por eso dejan de permanecer en poder del deudor. (*)

(*) *Ver: artículo 2330 de esta norma.*

2323.- La hipoteca deberá otorgarse por escritura pública e inscribirse además en el Registro respectivo, sin cuyos requisitos no tendrá valor alguno ni se contará su fecha sino desde la inscripción.

2324.- Los contratos hipotecarios celebrados en país extranjero producirán hipoteca sobre los bienes situados en la República, con tal que se inscriban en el competente Registro.

2325.- Si la constitución de la hipoteca adolece de nulidad relativa y después se valida por el transcurso del tiempo o la ratificación, la fecha de la hipoteca será siempre la fecha de la inscripción.

2326.- La hipoteca podrá otorgarse bajo condición y desde o hasta cierto día. Otorgada bajo condición suspensiva o desde cierto día, no valdrá sino desde que se cumpla la condición o desde que llegue el día; pero cumplida la condición o llegado el día, será su fecha la misma de la inscripción.

Podrá asimismo otorgarse en cualquier tiempo, antes o después de los contratos a que acceda y correrá desde que se inscriba.

2327.- No podrá constituirse hipoteca sino por la persona que sea capaz de enajenar o en caso de incapacidad, con los requisitos necesarios para la enajenación.

Pueden obligarse hipotecariamente los bienes propios para la seguridad de una obligación ajena; pero no habrá acción personal contra el dueño, si éste no se ha sometido expresamente a ello.

2328.- El dueño de los bienes hipotecados podrá siempre enajenarlos, haya o no pacto en contrario.

Podrá también arrendarlo o darlo en anticresis sin consentimiento del respectivo acreedor hipotecario, cuando el plazo del arriendo o anticresis o exceda de cuatro años. Los contratos que realice con violación de esta disposición serán nulos.

Sólo el acreedor hipotecario o quien lo suceda en sus derechos, podrá solicitar esa anulación. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 59.*

2329.- Los que no tienen en la cosa sino un derecho eventual, limitado o

rescindible, sólo pueden constituir hipoteca sujeta a las mismas condiciones o limitaciones a que lo estaba el derecho del constituyente.

Si el derecho está sujeto a una condición resolutoria, se observará lo dispuesto en el artículo 1430. (*)

(*) *Ver: artículo 2331 de esta norma.*

2330.- El comunero puede hipotecar su cuota antes de la división de la cosa común; pero verificada la división, la hipoteca afectará solamente los bienes que en razón de dicha cuota se adjudiquen si fueren hipotecables; si no lo fueren, caducará la hipoteca. (Artículos 1151, 2334 número 3 y 2322).

Sin embargo, podrá subsistir la hipoteca sobre los bienes adjudicados a los otros partícipes, si éstos consintieren en ello y así constare por escritura pública, de que se tome razón al margen de la inscripción hipotecaria.

2331.- La hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces que se posean en propiedad o usufructo y sobre naves, aeronaves o diques flotantes. (Artículo 2329).

Las reglas particulares relativas a la hipoteca de naves, aeronaves o de los diques flotantes se establecen en las leyes correspondientes.

2332.- Los bienes futuros no pueden hipotecarse.

2333.- No puede hipotecarse, para seguridad de una deuda, bienes por más valor que el del duplo del importe conocido o estimativo de la obligación, cuyo importe se determinará en la escritura inequívocamente.

2334.- La inscripción de la hipoteca deberá contener:

1º.- El nombre, apellido y domicilio del acreedor y las mismas designaciones relativamente al deudor y a los que en representación del uno o del otro requieran la inscripción.

2º.- La fecha y la naturaleza del contrato a que acceda la hipoteca y el archivo en que se encuentre.

3º.- La situación de la finca hipotecada y sus linderos o si es nave, aeronave o dique flotante, las designaciones específicas de ella.

4º.- La suma determinada a que se extiende la hipoteca.

5º.- La fecha de la inscripción y la firma del Escribano encargado del registro respectivo.

2335.- La hipoteca de una cosa se extiende a todos los accesorios y mejoras que le sobrevengan. También se extiende a la indemnización debida por los aseguradores de la cosa hipotecada.

Afecta, asimismo, los frutos de cualquiera especie pendientes al tiempo de ejercer el acreedor sus derechos hipotecarios.

2336.- La hipoteca es indivisible.

En consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada parte de ellas, son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella.

2337.- El acreedor hipotecario, cuando haya llegado el tiempo del pago, tiene derecho a hacer vender judicialmente la cosa hipotecada en subasta pública o a que se le adjudique a falta de postura legalmente admisible, por el precio mínimo en que un tercero habría podido rematarla con arreglo a la ley.

2338.- Es nula toda cláusula que autorice al acreedor a apropiarse la cosa hipotecada o a disponer de ella privadamente.

Es también nula la que prive al acreedor de la facultad de pedir la venta de la cosa, aun cuando el crédito sea líquido y exigible.

2339.- Si la finca se perdiese o deteriorase en términos de no ser suficiente para la seguridad de la deuda, tendrá derecho el acreedor a que se mejore la hipoteca, a no ser que consienta que se le dé otra seguridad equivalente; y en defecto de ambas cosas, podrá demandar el pago inmediato de la deuda, aunque no esté cumplido el plazo.

2340.- La hipoteca da derecho al acreedor de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuese el que la posea y a cualquier título que la haya adquirido.

Sin embargo, esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido los bienes hipotecados en subasta judicial, practicada con citación personal de los acreedores que tengan constituidas hipotecas sobre la misma finca. (*)

(*) *Ver: artículo 2347 de esta norma.*

2341.- El tercer poseedor reconvenido para el pago de la hipoteca, constituida

sobre la finca que después pasó a sus manos con este gravamen, no tendrá en ningún caso el beneficio de excusión.

Haciendo el pago el tercer poseedor, se subroga plenamente en los derechos del acreedor.

Si fuere desposeído de la finca, será plenamente indemnizado por el deudor con inclusión de las mejoras que haya hecho. (*)

(*) *Ver: artículo 2343 de esta norma.*

2342.- Es facultativo de las partes contratantes establecer en la escritura de hipoteca el precio del inmueble hipotecado para el caso de la ejecución y la renuncia de los trámites del juicio ejecutivo. En tal caso, si la renuncia estuviera acompañada de la fijación del precio del inmueble, la almoneda podrá verificarse, por las dos terceras partes del precio fijado en la escritura, aun cuando el inmueble hipotecado haya adquirido mayor valor con el tiempo.

2343.- Si el mayor valor proviene de las mejoras hechas por el deudor o su causa-habiente con anuencia del acreedor, el importe de las mejoras se unirá al precio fijado en la escritura al celebrarse la almoneda. Si las mejoras se han hecho sin anuencia del acreedor, no tendrá derecho el deudor o su causa-habiente a que el importe de las mejoras se tome en cuenta para la almoneda ni el causa-habiente, en el caso del artículo 2341, inciso 3º, podrá pretender indemnización por dichas mejoras.

2344.- Si la renuncia de los trámites del juicio ejecutivo no está acompañada de la fijación del precio del inmueble, se establecerá éste por tasación, con arreglo a la ley procesal.

2345.- Si en la escritura de obligación las partes hubiesen convenido que la venta se verifique al mejor postor, se hará así.

2346.- Realizada la almoneda, en el caso de renuncia de los trámites del juicio ejecutivo, según los artículos anteriores, el deudor podrá hacer valer en juicio ordinario los derechos que le asistan a causa de la ejecución, pero sin que por eso deje de quedar firme y subsistente la venta del inmueble hecha en almoneda a favor de un tercero.

2347.- La hipoteca se extingue con la obligación principal y por todos los medios por que se extinguen las demás obligaciones.

Se extingue, asimismo, por la resolución del derecho del constituyente; por la llegada del día hasta el cual fue constituida; y en el caso excepcional del artículo 2340, inciso 2°.

Se extingue además por la cancelación que el acreedor otorgare por escritura pública, de que se tome razón al margen de la inscripción hipotecaria.

Todo interesado en obtener la cancelación de inscripción de hipotecas, que se encuentre imposibilitado para lograrlo por la vía extrajudicial, podrá solicitarlo en la vía judicial. Se consideran casos de imposibilidad respecto del acreedor, entre otros, los de fallecimiento, resistencia, ausencia, concurso, quiebra, incapacidad y similares.

2348.- La prescripción para que se extinga la hipoteca, ha de ser de treinta años, en cualquiera mano que estén los bienes hipotecados.

TÍTULO XVI

DE LA ANTICRESIS

2349.- La anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor una cosa raíz para que se pague con sus frutos.

2350.- La anticresis no produce efecto, si no consta por escritura pública.

2351.- Es aplicable a la anticresis lo que respecto de la prenda se dispone en el artículo 2294, inciso 1°.

2352.- El acreedor anticrético no adquiere derecho real sobre la cosa ni vale la anticresis contra los derechos reales ni en perjuicio de los arrendamientos constituidos anteriormente en la finca.

Pero serán obligados a respetar el derecho del acreedor anticrético, todos aquellos a quienes se transfiera el derecho del dueño de la cosa con posterioridad a la constitución de la anticresis, siempre que ésta se haya inscrito en el Registro correspondiente.

2353.- Podrá darse al acreedor en anticresis el inmueble anteriormente hipotecado al mismo acreedor; y podrá asimismo hipotecarse al acreedor con las formalidades y efectos legales, el inmueble que se le ha dado en anticresis.

2354.- El acreedor anticrético goza de los mismos derechos que el arrendatario para el abono de las mejoras, perjuicios y gastos; y está sujeto a las mismas obligaciones relativamente a la conservación de la cosa.

2355.- El acreedor no se hace dueño del inmueble por la sola falta de pago; ni tendrán preferencia en él sobre los otros acreedores, sino la que le diere el contrato accesorio de hipoteca, si lo hubiere. Toda estipulación en contrario es nula, salvo lo dispuesto por la ley procesal para el caso de ejecución.

2356.- Si el crédito produjere intereses, tendrá derecho el acreedor para que la imputación de los frutos se haga primeramente a ellos.

2357.- Se puede estipular que los frutos se compensen con los intereses en su totalidad o hasta cierto valor.

2358.- El deudor no podrá pedir la restitución de la cosa sino después de la extinción total de la deuda; pero el acreedor podrá restituirla en cualquier tiempo y perseguir el pago de su crédito por los otros medios legales, sin perjuicio de lo que se hubiere estipulado en contrario.

TITULO XVII

DE LA CESION DE BIENES

2359.- La *cesión de bienes* es el abandono voluntario que el deudor hace de todos los suyos al acreedor o acreedores cuando, a consecuencia de accidentes inevitables, no se halle en estado de pagar sus deudas.

2360.- Esta cesión de bienes será admitida por el Juez con conocimiento de causa y el deudor podrá implorarla no obstante cualquiera estipulación en contrario.

2361.- Para obtener la cesión, deberá el deudor probar su inculpabilidad en el mal estado de sus negocios, siempre que lo exigiere alguno de los acreedores.

2362.- Los acreedores serán obligados a aceptar la cesión, excepto en los casos siguientes:

1°.- Si el deudor ha sido condenado por hurto, robo, falsificación o quiebra fraudulenta.

2°.- Si ha obtenido quitas o esperas de sus acreedores.

3°.- Si ha dilapidado sus bienes.

4°.- Si no ha hecho una exposición circunstanciada y verídica del estado de sus negocios o se ha valido de cualquier otro medio fraudulento, para perjudicar a sus acreedores.

2363.- El deudor no está obligado a comprender en los bienes que cede, aquellos que no son embargables para el pago por acción ejecutiva.

No son embargables:

1°.- Las remuneraciones por cualquier concepto, de los empleados públicos y privados y las pensiones, jubilaciones y retiros.

Cuando se tratare de deudas por tributos, de pensiones alimenticias decretadas judicialmente, podrán embargarse hasta la tercera parte; en los casos de pensiones alimenticias en favor de menores e incapaces servidas por sus ascendientes, serán embargables hasta la mitad.

2°.- Las prendas de uso personal del deudor y de su familia y los muebles y útiles contenidos en su casa habitación, salvo que la deuda provenga de la adquisición de los mismos muebles o de alquileres de la casa; se exceptúan de la inembargabilidad, los bienes suntuarios de alto valor.

3°.- Los libros relativos a la actividad laboral del deudor.

4°.- Las máquinas e instrumentos de que se sirva el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte o para el ejercicio de su oficio o profesión, salvo el caso de bienes prendados para garantizar el precio de la adquisición.

5°.- Los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado.

6°.- Los utensilios del deudor, artesano o trabajador del campo, necesarios para su trabajo individual. Tratándose del trabajador del campo, además: un arado, una sembradora, una cortadora, una rastra, un vehículo, una yunta de caballos con los arneses correspondientes, una yunta de bueyes, una vaca, dos cerdos, los animales menores y aves para el consumo de la familia

durante un año y la semilla de la cosecha anual próxima en una cantidad que no exceda de la necesaria para el cultivo de una chacra de cincuenta hectáreas.

El beneficio que acuerda este inciso no podrá invocarse contra el vendedor en su reclamación del precio de las cosas que se declaran inembargables.

7°.- Los alimentos y combustibles que existan en poder del deudor, hasta la concurrencia de lo necesario para el consumo de su familia durante tres meses.

8°.- Los derechos cuyo ejercicio es meramente personal, como los de uso y habitación.

9°.- Los bienes raíces donados o legados con la expresión de no embargables, siempre que se haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega, por tasación aprobada judicialmente; pero podrán embargarse por el valor adicional que después adquiriesen.

10°.- Las propiedades y rentas públicas y municipales, sin perjuicio de lo establecido en la ley procesal.

11°.- Las cosas sagradas y religiosas y los bienes afectados al culto de cualquier religión.

12°.- Los derechos funerarios.

13°.- El derecho de propiedad literaria y artística del autor y de sus herederos.

Ningunos otros bienes se considerarán exceptuados, salvo lo que declare una ley especial; con todo, no podrá impedirse que funcionen, mientras permanezcan embargados, los telégrafos, ferrocarriles, tranvías, diques y toda otra empresa de utilidad pública, así como las cosas afectadas a un servicio público. (*)

(*) *Ver: artículo 2372 de esta norma.*

2364.- La cesión de bienes produce los efectos siguientes:

1°.- El cedente no puede ser reconvenido judicialmente por ninguno de los acreedores, mientras no se resuelva acerca de ella.

2°.- Admitida que sea, da a los acreedores la facultad de disponer de los bienes y de sus frutos hasta pagarse de sus créditos, pero no les transfiere la propiedad.

3°.- Los créditos se extinguen hasta la cantidad en que *sean satisfechos*.

4°.- El deudor que después de la cesión adquiere bienes, goza del beneficio de competencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1494.

2365.- Podrá el deudor arrepentirse de la cesión antes de la venta de los bienes o de cualquiera parte de ellos y recobrar los que existan, pagando a sus acreedores.

2366.- Hecha la cesión de bienes, podrán los acreedores dejar al deudor la administración de ellos y hacer con él los arreglos que tuvieren por conveniente, siempre que en ello se conformare la mayoría de los acreedores concurrentes.

El acuerdo de la mayoría obtenido en la forma prescripta por la ley procesal, es obligatorio para todos los acreedores que hayan sido citados, según se prescriba en la misma.

Pero los acreedores privilegiados, prendarios o hipotecarios, no serán perjudicados por la resolución de la mayoría, si se hubieren abstenido de votar.

2367.- La cesión de los bienes de un deudor no aprovecha a sus codeudores solidarios ni a los fiadores, sino hasta el importe de los pagos hechos con los bienes cedidos.

Tampoco aprovecha a los herederos del que hizo la cesión, si han aceptado la herencia sin beneficio de inventario.

TITULO XVIII

DE LOS CREDITOS PRIVILEGIADOS

2368.- Privilegio es un favor especial con que la ley mira ciertos créditos personales en concurso de acreedores, sin que por eso pasen en caso alguno contra terceros poseedores.

2369.- La primera clase de créditos personales privilegiados comprende los que nacen de las causas que aquí se enumeran:

1a. Las costas y costos judiciales en el interés común de los acreedores y los gastos de administración durante el concurso.

2a. Las expensas funerales del deudor difunto.

3a. Los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor.

4a. El honorario del abogado, procurador y médico y los salarios de los dependientes y criados por lo que se les adeuda en todo el año anterior a la

declaración del concurso, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1224 a 1226.

Para los efectos del privilegio, el honorario del abogado y procurador será regulado en la forma establecida por la ley procesal y con prescindencia de toda iguala o contrato que se invoque por el interesado. (**)

5a. Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante el último año.

El Juez, a petición de los acreedores, tendrá la facultad de tasar este cargo, si le pareciere excesivo.

6a. Los atrasos de impuestos públicos o municipales.

7a. Las sumas que los despachantes de Aduana pagan a ésta por los derechos correspondientes a las mercaderías cuyo derecho se les encomienda y las abonadas por concepto de derechos fiscales de Aduana, eslingaje, almacenaje, acarreo y demás gastos correspondientes a las mercaderías hasta llegar a su destino.

8a. El precio de venta de la uva adquirida para vinificar. (*)

(*) *Ver: artículo 2376 de esta norma.*

(**) *Ver en Apéndice Normativo: Texto Ordenado de las Normas Legales y Reglamentarias Vigentes en Materia de Funcionarios Públicos (TOFUP), aprobado por Decreto N° 200/997 de fecha 18 de junio de 1997, Título VIII, Capítulo I, artículo 381.*

2370.- A la segunda clase de créditos personales privilegiados corresponde:

1º.- El precio del transporte, sobre los efectos transportados.

2º.- El haber de los posaderos por razón de hospedaje, sobre los efectos existentes en la posada.

3º.- Las semillas, su importe, gastos de cultivo, recolección y conservación, anticipados al deudor y los créditos de fomento agrario concedidos por el Banco de la República sobre las cosechas del último año.

4º.- Los alquileres y rentas de bienes raíces, sobre los bienes muebles propios del arrendatario y que éste tiene dentro de la finca arrendada; y también sobre la cosecha del año, tratándose de heredades.

A la misma clase pertenecen los privilegios especiales establecidos expresamente a favor de ciertos créditos por la ley comercial. (*)

(*) *Ver: artículo 2377 de esta norma.*

2371.- La tercera clase de créditos personales privilegiados comprende:

1º.- Los del Fisco contra los recaudadores y administradores de bienes fiscales.

2°.- Los de los establecimientos nacionales de caridad o de educación y los de las municipalidades, iglesias y comunidades religiosas, contra los recaudadores y administradores de sus fondos.

3°.- **DEROGADO por el art. 2o. de Ley 10.783 de 18.9.46 (*)**

4°.- Los de los hijos, por los bienes de su propiedad no existentes en especie, que fueron administrados por sus padres, sobre los bienes de éstos.

5°.- Los de las personas que están bajo tutela o curaduría, contra los respectivos tutores o curadores y fiadores de éstos.

6°.- **DEROGADO. Ver nota a los artículos 294 y 332 (*) (**)**

(*) *Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

(**) *Ver: artículo 2378 de esta norma.*

TÍTULO XIX

DE LA GRADUACION DE ACREEDORES Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES EN CONCURSO

2372.- Los bienes todos del deudor, exceptuándose los no embargables (artículo 2363), son la garantía común de sus acreedores y el precio de ellos se distribuye entre éstos a prorrata, a no ser que haya causas legítimas de preferencia. (Artículo 1295).

La ley no reconoce otras causas de preferencia que la prenda, la hipoteca y los privilegios.

2373.- Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas por razón de dominio y existan en poder del deudor insolvente, conservarán sus derechos los respectivos dueños; sin perjuicio de los derechos reales que sobre ellos competan al deudor como usufructuario o prendario o del derecho de retención que le concedan las leyes, en todos los cuales podrán subrogarse los acreedores.

2374.- Son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente a

los bienes de que ha hecho cesión o de que se ha abierto concurso a los acreedores.

2375.- Los diversos créditos contra el deudor concursado se pagarán según el orden de precedencia y sobre los bienes que se les asignan en los grados siguientes.

2376.- El primer grado comprende los créditos enumerados en el artículo 2369.

Estos créditos afectan todos los bienes del deudor, salvo lo dispuesto por los artículos 2380 y 2383 y no habiendo lo necesario para cubrirlos íntegramente, preferirán unos a otros en el orden de su numeración en el citado artículo 2369, cualquiera que sea su fecha; y los comprendidos en cada número concurrirán a prorrata. (*)

(*) *Ver: artículo 2377 de esta norma.*

2377.- El segundo grado comprende los créditos enumerados en el artículo 2370 y los indicados en el mismo con referencia a la ley comercial.

Estos créditos son pagados con el producto de los bienes en que tienen su respectivo privilegio; y en el caso de concurrir algunos contra la misma especie, se pagarán a prorrata.

Afectando a una misma especie créditos del primer grado y del segundo, excluirán éstos a aquéllos; pero si fuesen insuficientes los demás bienes para cubrir los créditos del primer grado, tendrán éstos la preferencia en cuanto al *déficit* y concurrirán en dicha especie en el orden y forma que se expresa en el artículo anterior.

2378.- El tercer grado comprende los privilegios enumerados en el artículo 2371.

Estos créditos prefieren indistintamente unos a otros, según las fechas de las causas, es a saber:

La fecha del nombramiento de administradores y recaudadores, respecto de los créditos de los números primero y segundo del citado artículo 2371.

La del nacimiento del hijo, en los del número cuarto del referido artículo.

La del discernimiento de la tutela o curatela, en los del número quinto del mismo artículo.

2379.- Las preferencias de los créditos del tercer grado afectan todos los bienes del deudor; pero no dan derecho contra terceros poseedores y sólo tienen lugar después de cubiertos los créditos de los dos primeros grados, de cualquiera fecha que éstos sean.

2380.- Son acreedores hipotecarios los que tienen garantidos sus créditos con hipoteca convencional, especial y registrada, según lo dispuesto en el Título XV, Parte Segunda de este Libro; y los demás a quienes se reconoce esa calidad en el artículo 2383.

Prendarios, son los que tienen sus créditos garantidos con prenda de que se encuentren en posesión y con tal que el contrato conste por escritura pública o por documento privado, cuya fecha resulte comprobada con arreglo al artículo 1587.

Todos los demás acreedores que no tienen algunas de las causas expresadas de preferencia, son simples o quirografarios. (*)

(*) *Ver: artículo 2381 de esta norma.*

2381.- Los acreedores hipotecarios y prendarios a que se refiere el artículo anterior, no están obligados a aguardar a las resultas del concurso general para proceder a ejercitar sus acciones contra los respectivos inmuebles o muebles hipotecados o dados en prenda.

La acción se ejercerá con completa independencia del concurso general; y éste sólo tendrá derecho a percibir el saldo que deje la ejecución, después de cubierto el crédito hipotecario o prendario y las costas y costos del juicio. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Texto Ordenado de Dirección General Impositiva, aprobado por Decreto N° 338/996 de fecha 28 de agosto de 1996, Título I, Sección IV, Capítulo II, artículo 105.*

2382.- A cada propiedad raíz gravada con hipoteca, podrá abrirse a petición de los respectivos acreedores o de cualquiera de ellos, un concurso particular para que se les pague inmediatamente según el orden de las respectivas inscripciones.

En este concurso se pagarán ante todo, las costas y costos judiciales causados en él.

2383.- Para los efectos de la prelación en este concurso particular de acreedores hipotecarios, se considerarán también como hipoteca:

1°.- Los censos debidamente inscriptos.

2º.- Los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa, siempre que el contrato de construcción o las deudas, hayan sido inscriptos en el registro respectivo.

Estos créditos concurrirán indistintamente entre sí y con las hipotecas, estableciéndose la prelación según las fechas de las respectivas inscripciones. (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Ley N° 16.871 de fecha 28 de setiembre de 1997, artículo 17 nral. 4º.*

2384.- El concurso, con autorización del Juez, puede levantar la hipoteca o retirar la prenda, pagando el importe de la deuda.

En tal caso, la cosa hipotecada o dada en prenda, vuelve a la masa concursada.

2385.- Las preferencias del primer grado a que estaban afectos los bienes del deudor difunto, afectarán de la misma manera los bienes del heredero, salvo que éste haya aceptado la herencia con beneficio de inventario o que los acreedores gocen del beneficio de separación, pues en ambos casos afectarán solamente los bienes inventariados o separados.

2386.- La misma regla se aplica a los créditos del tercer grado, los cuales conservarán su fecha sobre todos los bienes del heredero, cuando no tengan lugar los beneficios de inventario o separación y sólo la conservarán en los bienes inventariados o separados, cuando tengan lugar los respectivos beneficios.

2387.- El cuarto y último grado comprende los créditos que no gozan de preferencia. Estos créditos se pagarán a prorrata sobre el sobrante de la masa concursada, sin consideración a su fecha.

2388.- Los créditos preferentes que no puedan cubrirse en su totalidad por los medios indicados en los artículos anteriores, pasarán por el *déficit* a la lista de los créditos de cuarto grado, con los cuales concurrirán a prorrata.

2389.- Los intereses seguirán hasta la extinción de la deuda y se cubrirán con la preferencia que corresponda a sus respectivos capitales.

TITULO FINAL**DE LA OBSERVANCIA DE ESTE CODIGO**

2390.- Quedan absolutamente derogadas todas las leyes y costumbres que han regido hasta aquí sobre las materias que forman el objeto del presente Código.

Las leyes relativas a materias extrañas al Código y de que sólo se ocupa incidentalmente, no se considerarán derogadas, sino en cuanto se opongan a las prescripciones del mismo.

2391.- Todos los asuntos pendientes en que no haya recaído una sentencia sobre el fondo, a la época en que este Código se hizo obligatorio, serán juzgados por sus disposiciones, *a no ser que en el mismo Código se encuentre prescripción expresa en contrario.*

Aunque haya mediado sentencia, si ésta no se funda en ley o jurisprudencia práctica en los términos del artículo 1187 y no causa ejecutoria, prevalecerán también las disposiciones del Código.

2391-1.- Las modificaciones incorporadas al texto del Código, se regirán, en cuanto a su vigencia, por las leyes respectivas.

Los artículos 1108 inciso 1º, 871, 889 inciso 2º, 1968, 1969 inciso 3º, 2003 y 2008 inciso 4º, en la redacción dada por la presente ley, se aplicarán a las sucesiones que se abran y las sociedades conyugales que se disuelvan con posterioridad a la vigencia de ésta.

Se exceptúan los casos en los que resulte de aplicación el artículo 1112, siempre que la enajenación del donatario haya tenido lugar con anterioridad a esa fecha.

2392.- Todos los Tribunales o Jueces tienen el deber de aplicar las disposiciones de este Código a los casos ocurrientes, haciendo mención expresa de la prescripción aplicada.

APENDICE DEL TITULO FINAL DE ESTE CODIGO (*)

(*) *Ver en Apéndice Normativo: Resolución N° 652/998 de fecha 17 de agosto de 1998, artículo 2.*

2393.- El estado y la capacidad de las personas se rigen por la ley de su domicilio.

2394.- La existencia y capacidad de la persona jurídica se rige por la ley del Estado en el cual ha sido reconocido como tal. Mas para el ejercicio habitual en el territorio nacional, de actos comprendidos en el objeto especial de su institución, se ajustará a las condiciones prescritas por nuestras leyes.

2395.- La ley del lugar de la celebración del matrimonio rige la capacidad de las personas para contraerlo y la forma, existencia y validez del acto matrimonial.

2396.- La ley del domicilio matrimonial rige las relaciones personales de los cónyuges, la separación de cuerpos y el divorcio y las de los padres con sus hijos.

2397.- Las relaciones de bienes entre los esposos se determinan por la ley del Estado del primer domicilio matrimonial en todo lo que no esté prohibido por la ley del lugar de la situación de los bienes, sobre materia de estricto carácter real.

2398.- Los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar en que se encuentran, en cuanto a su calidad, a su posesión, a su enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de derecho de carácter real de que son susceptibles.

2399.- Los actos jurídicos se rigen, en cuanto a su existencia, naturaleza, validez y efectos, por la ley del lugar de su cumplimiento, de conformidad, por otra parte, con las reglas de interpretación contenidas en los artículos 34 a 38 inclusive del Tratado de Derecho Civil de 1889.

2400.- La ley del lugar de la situación de los bienes hereditarios al tiempo del fallecimiento de la persona de cuya sucesión se trate, rige todo lo relativo a la sucesión legítima o testamentaria.

2401.- Son competentes para conocer en los juicios a que dan lugar las relaciones jurídicas internacionales, los jueces del Estado a cuya ley corresponde el conocimiento de tales relaciones. Tratándose de acciones personales patrimoniales, éstas también pueden ser ejercidas, a opción del demandante, ante los jueces del país del domicilio del demandado.

2402.- Las formas del procedimiento se rigen por la ley del lugar en que se radica el juicio.

2403.- Las reglas de competencia legislativa y judicial determinadas en este Título, no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. Esta sólo podrá actuar dentro del margen que le confiera la ley competente.

2404.- No se aplicarán en nuestro país, en ningún caso, las leyes extranjeras que contraríen manifiestamente los principios esenciales del orden público internacional en los que la República asienta su individualidad jurídica.

2405.- SUPRIMIDO por la Ley 16.603 de 19.10.94 (*)

() Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración del Código Civil actualizado, por Ley N° 15.821 de fecha 14 de agosto de 1986.*

***APÉNDICE
NORMATIVO***

CÓDIGO DE COMERCIO

DECRETO-LEY N° 817

26 de mayo de 1865

LIBRO SEGUNDO - DE LOS CONTRATOS DE COMERCIO
TÍTULO XVI - DEL MODO DE EXTINGUIRSE LAS OBLIGACIONES
CAPÍTULO VII - DE LA PRESCRIPCIÓN

Artículo 1026.- La prescripción se interrumpe por cualquiera de las maneras siguientes:

1° Por el reconocimiento que el deudor hace del derecho de aquél contra quien prescribía.

2° Por medio de emplazamiento judicial notificado al prescribiente. El emplazamiento judicial interrumpe la prescripción, aunque sea decretado por Juez incompetente.

3° Por medio de intimación judicial, practicada personalmente al deudor, o por edictos al ausente cuyo domicilio se ignorase.

4° Por la admisión de una pretensión concursal deducida por el deudor.

La prescripción interrumpida comienza a correr de nuevo: en el primer caso, desde la fecha del reconocimiento; en el segundo, desde la fecha de la última diligencia judicial que se practicare en consecuencia del emplazamiento; en el tercero, desde la fecha de la intimación o de la última publicación en el Diario Oficial; en el caso del numeral 4°, comienza a correr de nuevo, una vez concluido el proceso concursal.

En materia de títulos valores cuando haya recaído sentencia de condena se aplicará lo dispuesto por los artículos 1216 y 1220 del Código Civil. (*)

(*) *La redacción de este artículo fue dada por Ley N° 17.292 de fecha 25 de enero de 2001, artículo 27.*

CÓDIGO DEL NIÑO

LEY N° 9.342

6 de abril de 1934

CAPÍTULO XII - DEL JUZGADO LETRADO DE MENORES SECCIÓN I - COMPETENCIA - ATRIBUCIONES - SUBROGACIÓN

Artículo 114.1.- En todos los procedimientos en que se atribuya a menores de dieciocho años la comisión de actos descriptos como delitos o faltas por la ley penal, la resolución que determine las medidas a aplicar será precedida de audiencia indagatoria que deberá cumplirse con la presencia del Defensor y del Ministerio Público, debiéndose interrogar a los representantes legales del menor y a los testigos.

En esta audiencia el Ministerio Público y el Defensor podrán solicitar la ampliación de aquellas diligencias, tendientes al esclarecimiento de los hechos y a la protección de los derechos, rigiendo en esta materia lo establecido en el artículo 16 de la Constitución de la República.

De no estar incluida en autos, se dispondrá la inmediata agregación de testimonio de la partida de nacimiento del menor o medios sustitutivos para la acreditación de la edad (artículo 44 del Código Civil y 130 de este Código).

Culminada la indagatoria, constatando en autos la existencia de una infracción, y siempre que existan elementos de convicción suficientes para juzgar que el menor tuvo participación en la misma, se procederá a dictar la resolución debidamente fundada, o con exposición de los hechos acreditados en que presuntamente intervino el menor y los pertinentes fundamentos de derecho. (*)

(*) *La redacción de este artículo fue dada por Ley N° 16.707 de fecha 12 de julio de 1995, artículo 25.*

LEY N° 16.713

3 de setiembre de 1995

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL

TÍTULO III - DEL PRIMER NIVEL

CAPÍTULO V - DE LAS PENSIONES DE SOBREVIVENCIA

Artículo 25.- (Beneficiarios).- Son beneficiarios con derecho a pensión:

- A) Las personas viudas.
- B) Los hijos solteros menores de veintiún años de edad y los hijos solteros mayores de veintiún años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo.
- C) Los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo.
- D) Las personas divorciadas.

Las referencias a padres e hijos comprenden el parentesco legítimo, natural o por adopción.

El derecho a pensión de los hijos, se configurará en el caso de que su padre o madre no tengan derecho a pensión, o cuando éstos, en el goce del beneficio, fallezcan o pierdan el derecho por cualquiera de los impedimentos establecidos legalmente.

Artículo 26.- (Condiciones del derecho y términos de la prestación). En el caso del viudo, los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo y las personas divorciadas, deberán acreditar conforme a la reglamentación que se dicte, la dependencia económica del causante o la carencia de ingresos suficientes.

Tratándose de las viudas, tendrán derecho al beneficio siempre que sus ingresos mensuales no superen la suma de \$ 15.000 (quince mil pesos uruguayos).

En el caso de los beneficiarios señalados en el literal D) del artículo anterior, deberán justificar que gozaban de pensión alimenticia servida por su ex cónyuge, decretada u homologada judicialmente. En estos casos, el

monto de la pensión o la cuota parte, si concurriere con otros beneficiarios, no podrá exceder el de la pensión alimenticia.

Los hijos adoptivos y los padres adoptantes, en todo caso, deberán probar que han integrado, de hecho, un hogar común con el causante, conviviendo en su morada y constituyendo con el mismo una unidad moral y económica similar a la de la familia, siempre que esta situación fuese notoria y preexistente en cinco años por lo menos, a la fecha de configurar la causal pensionaria, aun cuando el cumplimiento de las formalidades legales de adopción fuese más reciente.

Cuando la causal pensionaria se opere antes que el adoptado haya cumplido los diez años de edad, se exigirá que el beneficiario haya convivido con el causante la mitad de su edad a dicha fecha.

El goce de esta pensión es incompatible con el de la causada por vínculo de consanguinidad, pudiendo optar el interesado por una otra.

Tratándose de beneficiarias viudas que tengan cuarenta o más años de edad a la fecha de fallecimiento del causante, o que cumplan esa edad gozando del beneficio de la pensión, la misma se servirá durante toda su vida. Los restantes beneficiarios mencionados en los literales A) y D) del artículo anterior que cumplan con los requisitos establecidos en este inciso, gozarán igualmente de la pensión durante toda su vida, salvo que se configuren respecto de los mismos las causales de término de la prestación que se establecen en este artículo.

En el caso que los beneficiarios mencionados en los literales A) y D) del artículo 25 de la presente ley tengan entre treinta y treinta y nueve años de edad a la fecha del fallecimiento del causante, la pensión se servirá por el término de cinco años y por el término de dos años, cuando los mencionados beneficiarios sean menores de treinta años de edad a dicha fecha.

Los períodos de prestación de la pensión a que hace referencia el inciso anterior no serán de aplicación en los casos que:

- A) El beneficiario estuviese total y absolutamente incapacitado para todo trabajo.
- B) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros menores de veintiún años de edad, en cuyo caso la pensión se servirá hasta que éstos alcancen la mayoría de edad.

Apéndice Normativo

C) Integren el núcleo familiar hijos solteros mayores de veintiún años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo.

El derecho a pensión se pierde:

A) Por contraer matrimonio en el caso del viudo y personas divorciadas.

B) Por el cumplimiento de veintiún años de edad en el caso de los hijos solteros.

C) Por hallarse el beneficiario al momento del fallecimiento del causante en algunas de las situaciones de desheredación o indignidad previstas en los artículos 842, 899, 900 y 901 del Código Civil.

D) Por recuperar su capacidad antes de los cuarenta y cinco años de edad los beneficiarios mencionados en los literales B) y C) del artículo 25 de la presente ley.

E) Por mejorar la fortuna de los beneficiarios.

LEY N° 16.719

11 de octubre de 1995

MAYORÍA DE EDAD

Artículo 3.- Las disposiciones de los artículos anteriores no modifican el derecho de los menores de veintiún años a recibir alimentos, excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

LEY N° 16.774

27 de setiembre de 1996

LEY DE FONDOS DE INVERSIÓN

TÍTULO V - DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y LA SECURITIZACIÓN DE ACTIVOS

CAPÍTULO II - DE LA TRANSFERENCIA DE LOS CRÉDITOS Y DE LAS GARANTÍAS

Artículo 34 .- (Notificación al cedido).- Los deudores de los créditos integrados al fondo podrán ser notificados por telegrama colacionado o cualquier

Apéndice Normativo

otro medio hábil, con la designación de la sociedad administradora del fondo y del cedente, sin requerirse la exhibición del título a que refiere el inciso segundo del artículo 1757 del Código Civil. La fecha de las notificaciones se podrá probar por todos los medios de prueba admitidos por nuestra legislación.

La notificación al cedido no será necesaria cuando el deudor haya renunciado anticipada y expresamente a los derechos que le otorgan los artículos 1758, 1759 y 1760 del Código Civil y los artículos 563, 564 y 565 del Código de Comercio, según corresponda. En estos casos el deudor cedido paga lícitamente si lo hace al cedente y las cesiones de crédito, pudiéndose probar su fecha por todos los medios de prueba admitidos por nuestra legislación.

En los casos en que no exista la renuncia a que refiere el inciso anterior, la cesión de créditos que no se notifique al cedido será oponible a terceros desde su perfeccionamiento con excepción del cedido. (*)

(*) *Este artículo fue incorporado por Ley N° 17.202 de fecha 24 de setiembre de 1999, artículo 1.*

LEY N° 16.858

3 de setiembre de 1997

DECLÁRASE DE INTERÉS GENERAL EL RIEGO
CON DESTINO AGRARIO, SIN PERJUICIO DE
LOS OTROS USOS LEGÍTIMOS

CAPÍTULO III - DE LAS SOCIEDADES AGRARIAS DE RIEGO

Artículo 19.- (Legislación supletoria).- En todo lo no previsto en la presente ley respecto a las Sociedades Agrarias de Riego, se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones del Título VI del Libro IV Parte II del Código Civil. No obstante, la muerte o incapacidad de alguno de sus miembros no provocará la disolución de las mismas.

No será aplicable lo dispuesto por el artículo 1918 del Código Civil ni las disposiciones de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

LEY N° 16.871

28 de setiembre de 1997

SE ORGANIZAN LOS REGISTROS PÚBLICOS, LOS QUE
CONSTITUYEN EN CONJUNTO UN SERVICIO
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO SOMETIDO A JERARQUÍA
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, POR
INTERMEDIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS (*)

(*) *La entrada en vigencia de esta ley fue prorrogada hasta el 1° de mayo de 1998, por Ley N° 16.901 de 26 de diciembre de 1997, artículo 1.*

CAPÍTULO II - REGISTRO DE LA PROPIEDAD

2.1. - SECCIÓN INMOBILIARIA

Artículo 17.- (Actos inscribibles).- Se inscribirán en la Sección Inmobiliaria del Registro de la Propiedad:

- 1) Los instrumentos públicos en los que se constituya, reconozca, modifique, transfiera, declare o extinga el dominio, usufructo, uso, habitación, derecho de superficie, servidumbre, cualquier desmembramiento del dominio, hipoteca, censo y demás derechos reales establecidos por la ley sobre bienes inmuebles.
- 2) Las promesas a que refiere la Ley N° 8.733, de 17 de junio de 1931, y sus modificaciones, siempre que las partes hayan acordado someterse al régimen de dicha ley. Se exceptúan del pacto de sujeción a la referida ley las promesas respecto de las cuales el régimen especial citado es obligatorio.
- 3) Las anticresis.
- 4) Los contratos de construcción, así como los adeudos provenientes de la mejora o conservación del inmueble (artículos 2383 del Código Civil y 25 de la Ley N° 10.751, de 25 de junio de 1946).
- 5) Los reglamentos de copropiedad.
- 6) Los certificados de resultancias de autos sucesorios, con el contenido que determine el decreto reglamentario.
- 7) Los instrumentos públicos de cesiones de derechos posesorios.
- 8) Las demandas y sentencias ejecutoriadas que tengan por objeto el reconocimiento de derechos en relación con bienes inmuebles, que afecten o puedan afectar los derechos registrados o que se registren en el futuro.

- 9) Los embargos específicos y demás medidas cautelares que dispongan los Jueces, siempre que tengan relación con bienes de naturaleza inmueble.
- 10) Los convenios sobre adjudicación de unidades relativas a sociedades civiles de propiedad horizontal.
- 11) Las declaraciones de monumentos históricos conforme a la Ley N° 14.040, de 20 de octubre de 1971.
- 12) Las resoluciones de designación del inmueble sujeto a expropiación que dicten el Poder Ejecutivo, los Municipios y todo Ente de derecho público con atribuciones para ello.
Las resoluciones administrativas que determinen restricciones o limitaciones al derecho de propiedad de un predio determinado y las comunicaciones preceptuadas por el artículo 12 del Código de Aguas.
- 13) Las constituciones de bien de familia. En el caso de que se constituya por testamento se hará constar en el certificado de resultancias de autos respectivo.
- 14) Todo acto o hecho que afecte el estado catastral de bienes inmuebles que se inscriba en la Dirección Nacional de Catastro o en sus oficinas, deberá ser comunicado por éstas al Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente, en la forma que establezca la reglamentación.
- 15) Los arrendamientos, subarrendamientos, aparcerías y subaparcerías conforme a las leyes que regulan esas materias.
- 16) Los contratos de crédito de uso regulados por la Ley N° 16.072, de 9 de octubre de 1989, y modificativas.
- 17) Las solicitudes de reserva de prioridad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la presente ley.
- 18) Los títulos mineros expedidos según el Código de Minería sobre bienes del dominio privado, extinciones, afectaciones y gravámenes sobre dichos títulos; las servidumbres que los títulos mineros impongan sobre los predios afectados y la reserva minera decretada por el Poder Ejecutivo.
- 19) Las segundas o ulteriores copias de escrituras, certificados, testimonios, aun cuando hubieren sido registrados antes de extraviarse, expedidos según las leyes que regulan la materia.
- 20) Las cesiones, modificaciones, rescisiones y cancelaciones de derechos inscritos.

CAPÍTULO III - REGISTRO NACIONAL DE ACTOS PERSONALES

3.1.- SECCIÓN INTERDICIONES

Artículo 35.- (Actos inscribibles).- En esta Sección se inscribirán:

- 1) Las interdicciones, limitaciones generales a la facultad de disposición y demás medidas cautelares relativas a la persona natural o jurídica decretadas por los Jueces, en los casos, formas y con el alcance previstos por la ley.
- 2) Los embargos generales de derechos.
- 3) La pérdida, suspensión, limitación y restitución de la patria potestad, y los convenios de los padres sobre la administración de los bienes de sus hijos bajo su patria potestad.
- 4) Las pretensiones de prescindencia de la personalidad jurídica de una sociedad a las que hace referencia el artículo 191 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989.
- 5) Los actos referidos en el artículo 437 del Código Civil.
- 6) Las reinscripciones, modificaciones y cancelaciones de las inscripciones vigentes.

3.2.- SECCIÓN REGÍMENES MATRIMONIALES

Artículo 39.- (Actos inscribibles).- En esta Sección se inscribirán:

- 1) Las capitulaciones matrimoniales.
- 2) Los casos de disolución de la sociedad conyugal, con excepción de la muerte de uno de los cónyuges.
- 3) Las modificaciones y cancelaciones (artículos 1945 y 1996 del Código Civil).

3.3.- SECCIÓN MANDATOS Y PODERES

Artículo 41.- (Actos inscribibles).- Se inscribirán en esta Sección los siguientes actos, cuando refieran a mandatos, mandatos institorios y poderes, estén o no inscritos:

- 1) Revocación.
- 2) Renuncia.
- 3) Sustitución.
- 4) Suspensión.

- 5) Limitación.
- 6) Extinción (numerales 5º, 6º, 7º y 9º del artículo 2086 del Código Civil).
- 7) Las modificaciones y rectificaciones de relevancia registral de los actos enumerados precedentemente.

No se inscribirán los mandatos y poderes, los submandatos, ni las ampliaciones de mandato.

Cuando el mandato se acabe por las causales establecidas en los numerales 5º, 6º, 7º y 9º del artículo 2086, del Código Civil, la persona a quien le interese registrar la extinción de aquél deberá solicitarlo por escrito, acompañando la documentación fehaciente que lo acredite.

El decreto reglamentario determinará los demás datos que deberá contener la inscripción de los actos a que refiere este artículo.

3.4.- SECCIÓN UNIVERSALIDADES

Artículo 45.- (Actos inscribibles).- Se inscribirán en esta Sección los siguientes actos:

- 1) La cesión de derechos hereditarios.
- 2) La cesión de derechos a los bienes que se mantengan pro-indiviso de la disuelta sociedad conyugal.
- 3) La demanda de petición de herencia y toda otra acción reivindicatoria a título universal.
- 4) El abandono de los bienes y derechos del cónyuge supérstite que opta por la porción conyugal íntegra, otorgado con las formalidades previstas en el artículo 1664 del Código Civil (artículo 880 del Código Civil).
- 5) El abandono de los bienes del heredero beneficiario a sus acreedores y legatarios, otorgado con las formalidades previstas en el artículo 1664 del Código Civil (artículo 1097 del Código Civil).
- 6) La repudiación expresa o tácita de la herencia (artículo 1075 y 1070, inciso tercero, del Código Civil), la que tendrá los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 1051 del Código Civil.
- 7) La acción pauliana y la dispuesta por el artículo 1066 del Código Civil, cuando tengan por objeto la rescisión o revocación de enajenaciones del todo o parte de una universalidad jurídica. El plazo para inscribir estas acciones caducará en el término de un año, a partir de la fecha de inscripción del acto impugnado.

- 8) Las demandas de investigación de filiación, las que sólo podrán verificarse contra la sucesión del respectivo causante, sea éste varón o mujer, entablada conjuntamente con la petición de herencia. Los efectos de la inscripción de esta demanda serán los determinados por las Leyes Nos. 5.391, de 25 de enero de 1916; 5.547, de 29 de diciembre de 1916; 8.278, de 27 de agosto de 1928, y por el inciso final del artículo 241 del Código Civil.
- 9) Las renunciaciones de gananciales a que hace referencia el inciso segundo del artículo 2018 del Código Civil en la redacción dada por la Ley N° 16.603, de 19 de octubre de 1994, que aún no hubieran sido inscritas, las que deberán presentarse para su registración en el plazo de ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente ley.
- 10) Las modificaciones, declaratorias, rectificaciones, distractos y cancelaciones de derechos inscritos.

CAPÍTULO V - EFECTOS DE LA PUBLICIDAD REGISTRAL

Artículo 56.- (Publicidad noticia).- La inscripción de los actos referidos en los numerales 11), 12) y 14) del artículo 17 de la presente ley sólo produce efectos informativos.

Declárase que las cesaciones de condominio cuando éstas tengan origen contractual se registrarán por lo dispuesto por la Sección III del Capítulo V, del Título VI del Libro III del Código Civil.

Artículo 59.- (Prioridad).- La prioridad entre dos o más inscripciones se establecerá por la fecha y hora de presentación de los actos, negocios jurídicos y decisiones judiciales y administrativas al Registro competente. Si la prioridad refiere a una misma oficina registral y no pudiere resolverse conforme al principio antes referido, se estará al número ordinal de entrada.

En el caso del artículo 55 de la presente ley se estará a lo que allí se dispone. La prioridad que se reconoce prefiere de pleno derecho a todos los actos registrados con posterioridad y ampara también a los actos que se deriven o importen sucesión directa del acto protegido por dicha prioridad.

Cuando la inscripción de un arrendamiento, subarrendamiento, aparcería o subparcería, quede postergada como consecuencia del

Apéndice Normativo

principio de prioridad se estará a lo previsto por el artículo 1792 del Código Civil, en la redacción dada por la Ley N° 16.603, de 19 de octubre de 1994.

Los contratos de arrendamiento o anticresis de un bien gravado con hipoteca, celebrados por el deudor o sus causahabientes, se regirán por lo dispuesto en el artículo 2328 del Código Civil en la redacción dada por la Ley N° 16.603, de 19 de octubre de 1994.

CAPÍTULO X - FORMAS DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS A REGISTRAR FORMAS REGISTRALES

Artículo 91.- (Documentos extranjeros).- El documento público o privado proveniente del extranjero deberá sujetarse a los siguientes requisitos previos:

- 1) Si estuviere en otro idioma deberá estar traducido al idioma español por traductor público nacional. Si viniere traducido de origen un traductor público nacional certificará la correspondencia de la traducción con el original.
- 2) Legalizarse en forma.
- 3) Tratándose de bienes inmuebles ubicados en el país deberán protocolizarse el documento y su traducción. La protocolización tendrá carácter de matriz a los efectos previstos por los artículos 1591 y siguientes del Código Civil.

LEY N° 17.011 ***25 de setiembre de 1998***

LEY DE MARCAS

CAPÍTULO XV - DE LA ACTUACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 91.- Los agentes de la propiedad industrial tendrán las mismas obligaciones y responsabilidades que los mandatarios, de acuerdo con las disposiciones de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Título VIII del Código Civil. (*)

Apéndice Normativo

CAPÍTULO XVI- DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 97 .- Los agentes de la propiedad industrial serán responsables por los hechos de sus empleados, conforme a lo dispuesto por el inciso primero del artículo 1324 del Código Civil. (*)

() Esta Ley fue reglamentada por Decreto N° 34/999 de fecha 3 de febrero de 1999.*

LEY N° 17.066 ***24 de diciembre de 1998***

ALOJAMIENTOS PRIVADOS PARA ADULTOS MAYORES

CAPÍTULO II - DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Artículo 6.- (De los servicios de inserción familiar).- Los "servicios de inserción familiar" para adultos mayores son los ofrecidos por un grupo familiar que alberga en su vivienda a personas mayores autoválidas, en número no superior a tres, no incluyendo aquéllas a quienes se deben obligaciones alimentarias (artículos 118 a 120 del Código Civil).

Para brindar este servicio las familias deberán operar como núcleo familiar continente, estar dotadas de sólidas condiciones morales y estabilidad, procurando el desarrollo de la vida del adulto mayor con salud y bienestar.

LEY N° 17.163 ***1° de setiembre de 1999***

FUNDACIONES

CAPÍTULO IV.- PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN

Artículo 12.- (Aportes por acto entre vivos).- Los aportes realizados por el fundador en el caso de constitución por acto entre vivos serán

considerados como donaciones puras y simples, sujetas a la condición suspensiva de que se obtenga el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación. Obtenido el referido reconocimiento, se considerarán aceptadas todas las donaciones efectuadas, procediéndose a la entrega de los bienes y a la realización de las inscripciones en los Registros Públicos que correspondan.

Serán aplicables en la especie las disposiciones contenidas en el Título I de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil relativas a donaciones simples, con excepción del artículo 1634.

Artículo 13.- (Aportes realizados por disposición testamentaria).- En los casos en que los aportes se realicen por disposición testamentaria se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil.

Si a la fecha de fallecimiento del testador -si se trata de testamento abierto- o al efectuarse la apertura del testamento cerrado la autoridad competente no ha reconocido la personalidad jurídica de la fundación beneficiaria, los bienes aportados quedarán bajo la custodia de la o las personas designadas por el testador a tales efectos o en ausencia de designación del albacea o a falta de éste, de los herederos o legatarios, hasta tanto se obtenga el reconocimiento referido.

Las personas mencionadas en el inciso anterior, cuando tengan la custodia de los bienes aportados a la fundación futura, serán responsables por la conservación de los mismos y por su inmediata entrega con sus frutos y accesorios, una vez que se obtenga el reconocimiento requerido.

Artículo 16.- (Responsabilidad).- Si se diera la situación prevista en el inciso segundo del artículo anterior, las personas que tengan la custodia de los bienes aportados a fundaciones futuras, los albaceas, los herederos y los legatarios, tengan éstos la tenencia de los bienes o no, quedarán comprendidos en lo previsto en el artículo 842 del Código Civil, sin perjuicio de las acciones que correspondan contra el o los responsables de la no obtención del reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación.

Lo dispuesto en el inciso precedente no será de aplicación cuando los albaceas, herederos o legatarios demuestren que han intentado cumplir con sus obligaciones respecto a la entrega de los bienes y que la misma les ha resultado imposible.

LEY N° 17.228
7 de enero de 2000

LEY DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

CAPÍTULO I - NORMAS GENERALES

Artículo 1.- Los contratos de prendas sin desplazamiento quedan sujetos a las siguientes disposiciones, a las del Código Civil y al Decreto-Ley N° 14.701, de 12 de setiembre de 1977, (Títulos Valores) en cuanto no se opongan a la presente ley.

Artículo 2.- El dador conservará la tenencia de la cosa objeto de la prenda en nombre del acreedor. Sus deberes y responsabilidades civiles se regirán por las disposiciones del Título XIII de la parte 2da. del Libro 4° del Código Civil, sin perjuicio de lo que disponen los artículos de la presente ley.

LEY N° 17.243
29 de junio de 2000

LEY DE URGENCIA

CAPÍTULO VIII - MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN 3ª - SISTEMA INFORMÁTICO DEL ESTADO

Artículo 27.- Los actos administrativos y las órdenes de compra que adjudiquen la contratación de bienes o servicios, deberán estar acompañados de una constancia emitida por el Sistema Integrado de Información Financiera del Estado, que certifique la existencia de crédito suficiente para atender la erogación resultante. El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá las formalidades requeridas para la emisión de la constancia.

El acto administrativo o la orden de compra deberán hacer referencia a la existencia de la referida constancia, debiendo incluir los datos identificatorios de la misma.

Apéndice Normativo

Los proveedores adjudicatarios, previo a la entrega de los bienes o a la prestación de los servicios, deberán exigir a la Administración la vía correspondiente de la constancia de existencia de crédito suficiente.

Las contrataciones que contravengan esta disposición son nulas (artículo 8° del Código Civil).

Las disposiciones de este artículo comprenden las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por las unidades ejecutoras de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional por montos superiores al límite de la contratación directa. Facúltase al Poder Ejecutivo a extender este régimen a las contrataciones efectuadas al amparo de lo dispuesto por el numeral 2) del inciso segundo del artículo 33 del TOCAF. (*)

() Este artículo fue reglamentado por Decreto N° 295/000 de fecha 11 de octubre de 2000, artículo 9.*

LEY N° 17.250 ***11 de agosto de 2000***

LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - LEY DE RELACIONES DE CONSUMO

CAPÍTULO XIII - RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

Artículo 34.- Si el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio resulta un daño al consumidor, será responsable el proveedor de conformidad con el régimen dispuesto en el Código Civil.

El comerciante o distribuidor sólo responderá cuando el importador y fabricante no pudieran ser identificados. De la misma forma serán responsables si el daño se produce como consecuencia de una inadecuada conservación del producto o cuando altere sus condiciones originales. (*)

() Esta Ley fue reglamentada por Decreto N° 244/000 de fecha 23 de agosto de 2000.*

DECRETO N° 139/985

16 de abril de 1985

PASAPORTES

PASAPORTE DIPLOMÁTICO – PASAPORTE OFICIAL

Artículo 4.- Tienen igualmente derecho al Pasaporte Diplomático:

a) Los cónyuges, hijas solteras e hijos menores de 18 años que estén a cargo de las personas mencionadas en los literales a), b), c), e i), del artículo 2; así como los hijos menores de 18 años e hijas solteras de sus cónyuges, en las mismas circunstancias; (*)

b) Los ascendientes y los ascendientes de los cónyuges de las personas a que refieren los i), k) y l) del artículo 2º, siempre que estuvieren a su cargo y mientras residan con ellos en el exterior;

c) Los cónyuges, hijas solteras e hijos menores de 18 años a cargo de las personas mencionadas en los literales d), e), f), g), h), j), k) m) del artículo 2 del presente decreto; cuando acompañen a éstas en el cumplimiento de las misiones o comisiones encomendadas y las hijas solteras e hijos menores de 18 años de sus cónyuges, en las mismas condiciones; (*)

d) Los cónyuges supérstites de las personas aludidas en los literales b) y n) del artículo 2 de este decreto, mientras no contraigan nuevas nupcias.

La validez de estos Pasaportes, se regirá por el artículo 3º, salvo los casos previstos en el literal c) de este artículo, que se expedirán el tiempo que dure la misión o comisión.

(*) *La redacción de los literales a) y c) fue dada por Decreto N° 306/996 de fecha 30 de julio de 1996, artículos 1 y 2.*

Artículo 6.- Tienen igualmente derecho al Oficial:

a) Los cónyuges, hijas solteras e hijos menores de 18 años a cargo de las personas aludidas en el literal a) del artículo 5 del presente decreto, cuando

acompañen a éstas en el cumplimiento de las misiones o comisiones encomendadas, y las hijas solteras e hijos menores de 18 años de sus cónyuges, en las mismas condiciones; (*)

b) Los cónyuges, hijas solteras e hijos menores de 18 años y ascendientes a cargo de las personas mencionadas en el literal b) del artículo anterior, siempre que residan con el titular en el exterior; igual derecho tienen las hijas solteras e hijos menores de 18 años de los cónyuges, en las mismas condiciones; (*)

c) Los cónyuges ciudadanos uruguayos; y las hijas solteras e hijos menores de 18 años a cargo de las personas a que refiere el literal c) del artículo anterior, siempre que residan en el exterior con el titular. (*)

(*) *La redacción de los literales a), b) y c) fue dada por Decreto N° 306/996 de fecha 30 de julio de 1996, artículos 3, 4 y 5.*

DECRETO N° 359/995

21 de setiembre de 1995

RÉGIMEN PENSIONARIO

Artículo 11.- (De la pérdida del derecho a la pensión).

El derecho a la pensión se pierde:

- A) Por contraer matrimonio en el caso del viudo y personas divorciadas.
- B) Por el cumplimiento de veintiún años de edad en el caso de los hijos solteros.

No obstante, tales beneficiarios podrán continuar en el goce de la pensión, si al término del período de la prestación acreditan encontrarse absolutamente incapacitados para todo trabajo.

- C) Por hallarse el beneficiario al momento del fallecimiento del causante en algunas de las situaciones de desheredación o indignidad previstas en los artículos 842, 899, 900 y 901 del Código Civil.
- D) Por recuperar su capacidad antes de los cuarenta y cinco años de edad los hijos solteros mayores de veintiún años y los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo.

E) Por la mejora de fortuna de las personas viudas, divorciadas y los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo.

La mejora de fortuna de los viudos, personas divorciadas y padres absolutamente incapacitados para todo trabajo, se entenderá configurada cuando desaparezcan los supuestos económicos que dieron lugar al otorgamiento de la pensión, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9, Literal A, Inciso 5°.

Tratándose de la viuda, la mejora de fortuna se entenderá configurada cuando el promedio mensual actualizado de sus ingresos personales correspondientes a los últimos doce meses supere la suma de \$ 15.000 (pesos uruguayos quince mil).

El Banco de Previsión Social determinará los mecanismos y procedimientos de control a los efectos del cumplimiento de lo previsto en este artículo.

DECRETO N° 338/996

28 de agosto de 1996

TEXTO ORDENADO DE NORMAS TRIBUTARIAS DE
COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

TÍTULO I - NORMAS GENERALES DE DERECHO TRIBUTARIO NACIONAL
SECCIÓN IV - DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO
CAPÍTULO II - MEDIDAS CAUTELARES Y JUICIO EJECUTIVO FISCAL

Artículo 105.- Cuando los agentes de retención o percepción de tributos recaudados por la Dirección General Impositiva se encuentren en situación de concordato, quiebra, concurso o moratoria o de liquidación judicial de sociedad anónima, la Dirección General Impositiva no estará obligada a aguardar sus resultados para ejercer las acciones tendientes al cobro o aseguramiento de los créditos de naturaleza tributaria emergentes de las obligaciones como agente de retención o de percepción (artículos 1737° del Código de Comercio y 2381° del Código Civil).

Fuente: Decreto-Ley N° 15.646 de 11 de octubre de 1984, artículo 31°.

DECRETO N° 123/997

12 de marzo de 1997

SEGURIDAD SOCIAL - VIVIENDAS

Artículo 5°.- Todas las erogaciones por administración y reparaciones mayores (artículo 523 del Código Civil) de los inmuebles, serán cubiertos con los recursos provenientes de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 15.900 de 21 de octubre de 1987.

Anualmente el Banco de Previsión Social comunicará al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la estimación del monto que corresponda afectar por este concepto, el cual hasta que el Poder Ejecutivo determine lo contrario, no podrá superar el 3% de la recaudación afectada a esta finalidad en cada ejercicio.

Sin perjuicio de ello, cuando dichos gastos se originen por culpa de los ocupantes de las viviendas, el Banco de Previsión Social deberá efectuar las reclamaciones del caso contra el pasivo ocupante usufructuario. Las sumas así recuperadas serán destinadas a otras erogaciones de la misma naturaleza.

El usufructuario estará obligado a destinar el inmueble para vivienda propia, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7° y 8° del presente decreto, así como a realizar los reparos menores y de simple conservación (artículo 523 del Código Civil).

DECRETO N° 194/997

10 de junio de 1997

TEXTO ORDENADO DE CONTABILIDAD Y
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y NORMAS
CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS (TOCAF)

**TÍTULO I - DE LOS RECURSOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y
GASTOS DEL ESTADO**

**CAPÍTULO III - DE LA COMPETENCIA PARA GASTAR Y PAGAR
DE LAS FORMAS DE CONTRATAR**

SECCIÓN II - DE LOS CONTRATOS DEL ESTADO

Artículo 33.- Todo contrato se celebrará mediante el procedimiento de la

Apéndice Normativo

licitación pública, cuando del mismo se deriven gastos de funcionamiento o de inversión o salidas para el Estado, y por remate o licitación pública cuando se deriven entradas o recursos.

No obstante podrá contratarse:

1) Por licitación abreviada cuando el monto de la operación no exceda de \$ 700.000 (pesos uruguayos setecientos mil).¹

2) Directamente cuando el monto de la operación no exceda de \$ 35.000 (pesos uruguayos treinta y cinco mil).

3) Directamente o por el procedimiento que el ordenador determine por razones de buena administración, en los siguientes casos de excepción:

A) Entre organismos o dependencias del Estado o con personas públicas no estatales;

B) Cuando la licitación pública, abreviada o remate resultaren desiertos, o no se presentaren ofertas válidas o admisibles, o que las mismas sean manifiestamente inconvenientes.

La contratación deberá hacerse con bases y especificaciones idénticas a las del procedimiento fracasado y, en su caso, con invitación a los oferentes originales, además de los que estime necesarios la Administración;

C) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que sólo sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por elementos similares. La marca de fábrica no constituye por sí causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre que no hay sustitutos convenientes. De todas estas circunstancias de dejará constancia en el expediente respectivo;

D) Para adquirir, ejecutar o restaurar obras de arte, científicas o históricas, cuando no sea posible el concurso de méritos o antecedentes o deban confiarse a empresas o personas especializadas o de probada competencia;

E) Las adquisiciones de bienes que no se produzcan o suministren en el país y que convenga efectuar por intermedio de organismos internacionales a los que esté adherida la Nación;

F) Las reparaciones de maquinarias, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo resulte oneroso en caso de llamarse a licitación. Esta excepción no podrá aplicarse a las reparaciones comunes de mantenimiento, periódicas, normales o previsibles;

Apéndice Normativo

G) Los contratos que deban celebrarse necesariamente en países extranjeros;

H) Cuando las circunstancias exijan que la operación deba mantenerse en secreto;

I) Cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación o remate público, o su realización resienta seriamente el servicio;

J) Cuando exista notoria escasez de los bienes o servicios a contratar;

K) La adquisición de bienes que se realicen en remates públicos. El precio máximo a pagar será el que surja de la tasación previamente efectuada;

L) La compra de semovientes por selección, cuando se trate de ejemplares de características especiales;

M) La venta de productos destinados al fomento económico o a la satisfacción de necesidades sanitarias, siempre que la misma se efectúe directamente a los usuarios o consumidores;

N) La adquisición de material docente o bibliográfico del exterior cuando el mismo se efectúe a editoriales o empresas especializadas en la materia;

Ñ) La adquisición de víveres frescos existentes en mercados, ferias o directamente a los productores;

O) La adquisición en el exterior de petróleo crudo y sus derivados, aceites básicos, aditivos para lubricantes y sus respectivos fletes;

P) Las adquisiciones que se realicen en el marco de acuerdos intergubernamentales o con entidades estatales extranjeras que involucren un intercambio compensado con productos nacionales de exportación.

Las contrataciones directas indicadas en las excepciones precedentes deberán ser autorizadas por los ordenadores primarios quienes podrán delegar en los ordenadores secundarios dicha competencia en los casos que determinen fundadamente.

Las contrataciones referidas en el literal A) no podrán incluir la participación, directa o indirecta de empresas privadas. Las realizadas al amparo del literal I), deberán contar con la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas tanto de la configuración de los extremos que habilitan la causal, como los precios y condiciones que corresponden al mercado.

Para el Poder Judicial y Universidad de la República e Intendencias Municipales, dicha certificación la realizará el Tribunal de Cuentas.

Apéndice Normativo

Las contrataciones que contravengan esta disposición son nulas (artículo 8° del Código Civil).

Fuente: Ley N° 15.903 de 10/nov/987, artículo 482 con la redacción dada por el artículo 653 de la Ley N° 16.170 de 28/dic/990 y por el artículo 738 de la Ley N° 16.736 de 5/ene/996.

¹ Los montos fueron establecidos por Resolución del Instituto Nacional de Estadística, vigencia setiembre-diciembre de 1996.

Artículo 39.- Las donaciones, de acuerdo con su monto, deberán ser aceptadas por el ordenador competente. El mismo deberá verificar la posibilidad y legalidad de las condiciones o modos que eventualmente se impongan en la donación, además de la conveniencia con respecto a los intereses del Estado.

Exceptúanse las pequeñas donaciones de objetos o elementos cuyo justiprecio no exceda el límite de las contrataciones directas, las que podrán ser aceptadas por la autoridad de la oficina o servicio respectivo.

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, en todos los casos en que el Estado o persona pública no estatal sea o haya sido gravada por un plazo, modo o condición establecida por voluntad testamentaria o por una donación onerosa, (artículos 947, 956 y 1615 del Código Civil), dicho gravamen podrá cumplirse en una forma razonablemente análoga a la prescripta por el testador o por el donante siempre que lo autorizare el Juzgado competente por motivos fundados de interés público, a petición del organismo beneficiario y con audiencia de quienes pudieren tener derecho a oponerse.

La pretensión se tramitará en la forma establecida para el proceso extraordinario (art. 346 y concordantes del Código General del Proceso). Lo previsto en este artículo se aplicará aún si el modo contiene cláusula resolutoria (art. 958 del Código Civil).

En los casos a que se refiere esta disposición, siempre que no se hubiere obtenido la autorización judicial prevista anteriormente, la acción para exigir el cumplimiento del plazo, condición o modo caducará a los cuatro años de la apertura legal de la sucesión o de la fecha del contrato de donación.

El Estado o cualquier otra persona pública estatal podrá disponer por acto administrativo la venta de los inmuebles habidos por donación o legado sujetos a modo o condición, luego de transcurridos treinta años.

En este caso el acto administrativo que disponga la enajenación del inmueble se notificará mediante publicación realizada durante diez días en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional a los efectos del debido conocimiento de los interesados.

Fuente: Ley N° 15.903 de 10/nov/987, artículo 516 con la redacción dada por el artículo 653 de la Ley N° 16.170 de 28/dic/990.

**TÍTULO II- DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
CAPÍTULO I - DE LOS BIENES DEL ESTADO**

Artículo 68.- Integran el patrimonio del Estado el derecho de dominio y los demás derechos reales sobre los bienes inmuebles, muebles y semovientes así como los derechos personales que, por institución expresa de la ley o por haber sido adquiridos por sus organismos y entes, son de propiedad nacional en los términos de los artículos 477 y 478 del Código Civil.

Su administración estará a cargo:

- 1) Del organismo que los tenga asignados o los haya adquirido para su uso, o de cada Ministerio en el Poder Ejecutivo.
- 2) Del Ministerio de Economía y Finanzas los que no estén asignados a un servicio determinado.

Respecto de los bienes nacionales de uso público, la acción del Estado será sólo de conservación y vigilancia.

Fuente: Ley N° 15.903 de 10/nov/987, artículo 526.

Artículo 72.- Todos los bienes del Estado formarán parte del “Inventario General de Bienes del Estado”, que deberá mantenerse actualizado en cada organismo público y sus dependencias y centralizarse, debidamente valuados, en la Contaduría General de la Nación.

Los bienes nacionales de uso público (artículo 478 del Código Civil), que por no haber sido adquiridos o construídos por el Estado, o por su carácter natural, no resultasen susceptibles de valuación cuantitativa, no formarán parte del inventario. La caracterización de bienes para su exclusión del inventario será determinada por el Poder Ejecutivo.

Los títulos de los bienes inmuebles y de aquellos bienes muebles que deban tener título por disposición legal, serán depositados en custodia en las oficinas centrales de los respectivos órganos u organismos de administración financiero-patrimonial.

Fuente: Ley N° 15.903 de 10/nov/987, artículo 530.

DECRETO N° 200/997

18 de junio de 1997

TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS LEGALES Y
REGLAMENTARIAS VIGENTES EN MATERIA
DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS (TOFUP)

**TÍTULO VIII - DERECHO AL SEGURO POR ACCIDENTES
DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
CAPÍTULO I - DERECHO AL SEGURO POR
ACCIDENTES DEL TRABAJO**

Artículo 381.- Liquidación. Naturaleza Jurídica

Las liquidaciones que practique el Banco de Seguros del Estado por capitales necesarios para servicios de rentas, indemnizaciones temporarias, gastos de asistencia médica, primas de pólizas y adicionales, multas y cualquier otro crédito contra el patrono generado por la aplicación del presente Capítulo, constituirán título ejecutivo de acuerdo a lo establecido en el artículo 353 del Código General del Proceso y se reajustarán de acuerdo al Decreto-Ley 14.500, de 8 de marzo de 1976.

Los créditos de la víctima o de los derecho-habientes contra patronos no asegurados, gozarán del privilegio del numeral 4° del artículo 2369 del Código Civil y numeral 4° del artículo 1732 del Código de Comercio.

Fuente: Ley N° 16.074 de 10/oct/989, artículo 57.

Texto ajustado.

**TÍTULO XXIV - BENEFICIOS SOCIALES
CAPÍTULO IV - ASIGNACIONES FAMILIARES**

Artículo 1045.- Situaciones especiales

Cuando el funcionario público, sostén del hogar fuera uno de los hijos será atributivo de la asignación, considerándose a sus hermanos como si fueran hijos suyos, será también atributivo el funcionario casado, viudo o divorciado o soltero jefe de familia de uno u otro sexo que llenando las condiciones legales, tenga totalmente a su cargo con carácter permanente y en forma debidamente comprobada, uno o ambos menores, y sean estos parientes por consanguinidad, hijastros, huérfanos o abandonados, considerándose a estos menores como si fueran hijos suyos. (artículo 120 del Código Civil).

Se hace extensivo este beneficio a los menores a cargo de divorciados, cuando se compruebe fehacientemente que los tengan a su cargo desde fecha anterior a la disolución del vínculo matrimonial, y a la que se encuentren a cargo de solteros cuando los ligen a estos vínculos de parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado inclusive.

Fuente: Ley N° 12.801 de 30/nov/960, artículo 50 con la redacción dada por el artículo 29 de la Ley N° 13.317 de 28/dic/964.

DECRETO N° 76/998

24 de marzo de 1998

TEXTO ORDENADO LEY DE VIVIENDA (TOLVI)

**CAPÍTULO X - DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA
SECCIÓN 3 - DE LOS USUARIOS**

Artículo 152.- Se aplicarán, en todo lo que no se oponga a la ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, las disposiciones del Código Civil relativas al arrendamiento, para regular las relaciones entre la cooperativa y los usuarios.

Fuente: Artículo 160, Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

DECRETO N° 99/998

21 de abril de 1998

REGISTROS PÚBLICOS

**CAPÍTULO III - REGISTRO NACIONAL DE ACTOS PERSONALES
SECCIÓN MANDATOS Y PODERES**

Artículo 35.- Contenido del asiento. El asiento consignará y la documentación presentada a inscribir deberá contener, además de los datos referidos en el artículo 31 del presente, respecto del mandato original: lugar y fecha de su otorgamiento, nombre del profesional actuante e individualización del mandante y mandatario.

En los casos de extinción previstos en los numerales 5, 6, 7 y 9 del artículo 2086 del Código Civil, se presentará a inscribir el testimonio de la partida de defunción u oficios judiciales, según corresponda, acompañados de un certificado notarial que consignará los datos referidos en el inciso anterior.

DECRETO N° 252/998

16 de setiembre de 1998

IMPUESTO A LAS TRASMISIONES PATRIMONIALES

CAPÍTULO II – ACTO ENTRE VIVOS

Artículo 6.- Derechos comprendidos en el hecho generador.- Los derechos de usufructo, nuda propiedad, uso y habitación a que se refiere el literal A) del Artículo 1° del Título que se reglamenta, son aquellos regulados por los Artículos 493 y siguientes del Código Civil.

No se encuentran comprendidos en el hecho generador, los demás derechos concedidos por el propietario, aún cuando se consideren de naturaleza real.

Apéndice Normativo

Tampoco se encuentran comprendidos en el hecho generador, la adquisición del derecho del mejor postor en remate, o la cesión de dicho derecho.

CAPÍTULO III.- TRASMISIONES POR CAUSA DE MUERTE Y DE AUSENCIA.

Artículo 12.- Hecho generador.- Este impuesto será aplicado a las sucesiones y ausencias cuya apertura legal fuera posterior al 31 de diciembre de 1992 y a las sentencias que acuerden la posesión definitiva de los bienes del ausente, posteriores a la indicada fecha.

El hecho generador a que refiere el literal E) del Artículo 1º del Título que se reglamenta, sólo comprende la transmisión de la propiedad plena de los inmuebles por el modo sucesión. Por consiguiente, no se comprenden en el mismo la transmisión del dominio desmembrado, la consolidación del dominio por la muerte del usufructuario, y la transmisión de derechos posesorios.

En el caso de que el derecho real de habitación previsto en el Artículo 881.1 del Código Civil afectara a un inmueble, urbano o rural, que además de hogar conyugal tuviera otros destinos, los interesados deberán declarar a los efectos de la determinación de la materia imponible cuál es el porcentaje no destinado a vivienda, a fin de prorratear el valor real actualizado.

Cuando el heredero acepta la herencia o legado deferida a su causante, de acuerdo con el derecho que le confiere el Artículo 1040 del Código Civil, se verifican dos hechos generadores, en virtud de existir una doble transmisión sucesoria.

DECRETO N° 253/998

16 de setiembre de 1998

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS - GARANTÍA PRENDARIA

Artículo 3.- Para la percepción de créditos impagos, la Dirección Nacional de Aduanas podrá realizar extrajudicialmente los depósitos, los que serán registrados por la División Escribanía del Instituto bajo la forma de garantía prendaria, siempre que se haya pactado esa facultad conforme al artículo 2308 del Código Civil.

DECRETO N° 254/998

16 de setiembre de 1998

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS - GARANTÍA PRENDARIA

Artículo 4.- Para la percepción de créditos impagos, la Dirección Nacional de Aduanas podrá realizar extrajudicialmente los depósitos, los que serán registrados por la División Escribanía del Instituto bajo la forma de garantía prendaria, siempre que se haya pactado esa facultad conforme al artículo 2308 del Código Civil.

DECRETO N° 107/999

13 de abril de 1999

REGISTROS PÚBLICOS – BIENES INMUEBLES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo, 13 de abril de 1999

VISTO: La facultad del Poder Ejecutivo de establecer excepciones a la prohibición de inscribir documentos referidos a inmuebles empadronados en mayor área, prevista en el numeral 1) del artículo 9 de la ley No. 16.871, de 28 de setiembre de 1997,

RESULTANDO: Que la norma mencionada impide la inscripción y la matriculación de los referidos inmuebles, salvo las excepciones que estableciere la reglamentación,

CONSIDERANDO: I) Que es necesario habilitar la posibilidad de inscribir actos y negocios jurídicos que refieran a bienes inmuebles que no posean padrón individual o que formen parte de otros bienes, a fin de asegurar la información más certera, no obstante la imposibilidad de matriculación de los mismos,

II) Que las hipótesis previstas son las mismas contempladas por los artículos 7 a 10 del Decreto 364/95 de 3 de octubre de 1995,

Apéndice Normativo

ATENTO: A lo dispuesto por los artículos 477 y 478 del Código Civil, 9, numeral 1 de la Ley No. 16.871, de 28 de setiembre de 1997, 12 del Decreto 99/98, de 21 de abril de 1998, 7 a 10 del Decreto 364/95, de 3 de octubre de 1995,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA

Artículo 1.- La Sección Inmobiliaria del Registro de la Propiedad, de la Dirección General de Registros, procederá a inscribir los actos y negocios jurídicos que refieran a bienes que se encuentren en las siguientes situaciones:

A) Aquellos adquiridos por el Estado o los Gobiernos Departamentales para ser destinados al uso público.

B) Los que se deslinden de un predio para ser anexados a otro predio lindero de diferente propietario.

C) Los remanentes de fracciones expropiadas por el Estado o los Gobiernos Departamentales para ser enajenados a titulares de predios linderos.

D) Los destinados a la formación de embalses de aguas, de propiedad pública o privada.

E) Los que estuvieren empadronados en mayor área como consecuencia de fusiones realizadas por promitentes compradores, a efectos de dar cumplimiento a las promesas de compraventa o enajenación inscriptas con anterioridad a la vigencia de la ley No. 16.462, de 11 de enero de 1994.

F) Los que establezca la Dirección General de Catastro por resolución expresa acerca de la imposibilidad de empadronar en forma individual.

Artículo 2.- Comuníquese, publíquese, etc.

SANGUINETTI - YAMANDU FAU

DECRETO N° 320/999

1° de octubre de 1999

**REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS ALOJAMIENTOS
PRIVADOS PARA ADULTOS MAYORES**

CAPÍTULO II

Artículo 6°.- (De los servicios de inserción familiar).- Los "servicios de

Apéndice Normativo

inserción familiar" para adultos mayores son los ofrecidos por un grupo familiar que alberga en su vivienda a personas mayores autoválidas, en número no superior a tres, no incluyendo aquéllas a quienes se deben obligaciones alimentarias (artículo 118 a 120 del Código Civil).

Para brindar este servicio las familias deberán operar como núcleo familiar continente, estar dotadas de sólidas condiciones morales y estabilidad, procurando el desarrollo de la vida del adulto mayor con salud y bienestar.

DECRETO N° 82/000

29 de febrero de 2000

REGLAMENTACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LA
POBLACIÓN Y LOS DENOMINADOS “ANIMALES DOMÉSTICOS”
Y OTROS EN GENERAL

Artículo 6.- Todo tenedor de un animal que lo abandone voluntariamente será responsable del mismo y de los perjuicios que pudiere ocasionar a terceros de acuerdo al régimen del Código Civil pudiendo, además, ser sancionado administrativamente en los términos establecidos en la ley 5657.

DECRETO N° 134/001

24 de abril de 2001

EMPRESAS Y PRESTADORES PRIVADOS DE SEGURIDAD

MINISTERIO DEL INTERIOR

Montevideo, 24 de abril de 2001

VISTO: que por Resolución del Poder Ejecutivo se hizo lugar a los recursos de revocación interpuestos por diversas empresas de seguridad y de alarmas contra el literal C) del apartado 3 del artículo 6to. del Decreto N° 275/99 de 14 de setiembre de 1999.

RESULTANDO: que lo resuelto se fundamenta en el hecho que la responsabilidad solidaria impuesta por la disposición antes citada no puede establecerse por norma de inferior jerarquía a la ley;

ATENTO: a lo antes expuesto y a lo preceptuado en el artículo 1391 del Código Civil.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

Artículo 1.- Derógase el literal C) del apartado 3 del artículo 6to. del Decreto N° 275/99 de 14 de setiembre de 1999.

Artículo 2.- Pase al Registro Nacional de Empresas Prestadoras de Servicios de Seguridad, Vigilancia y Afines para su conocimiento y demás efectos. Oportunamente, archívese.

HIERRO LOPEZ, GUILLERMO STIRLING.

DECRETO N° 454/001

21 de noviembre de 2001

**EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN QUE REALIZAN
PRESTACIONES DE ASISTENCIA MÉDICA U ODONTOLÓGICA**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Montevideo, 21 de noviembre de 2001

VISTO: la necesidad de diferenciar la tipología de la actividad de las empresas de intermediación que realizan prestaciones de asistencia médica u odontológica, respecto de las restantes previstas en el artículo 3° del Decreto Ley N. 15.181 de 21 de agosto de 1981;

RESULTANDO: I) que, el Decreto 350/994 de 9 de agosto de 1994 considera empresas de intermediación financiera en la prestación de asistencia médica u odontológica a aquellas que mediante una cuota de prepago otorgan a sus afiliados asistencia médica u odontológica a través de servicios contratados a terceros;

Apéndice Normativo

II) que, según la normativa citada, para estar comprendidas en dicha denominación, bastará que los servicios contratados representen un porcentaje superior al 50% (cincuenta por ciento) del monto promedial mensual de los egresos que efectivamente devenguen o que se estime han de realizar las mismas cuando comiencen su actividad;

CONSIDERANDO: I) que, la definición consagrada lleva a confusión en cuanto prevé la posibilidad de prestaciones de asistencia médica u odontológica con servicios propios, que resultan naturalmente ajenos a la figura de la intermediación;

II) que, resulta menester distinguir la intermediación en la prestación de asistencia médica u odontológica, cuyo régimen legal encuadra en la previsión del artículo 1.257 del Código Civil, de aquel previsto para las instituciones de asistencia médica particular de cobertura parcial, regidas por el artículo 3 del Decreto Ley 15.181 de 21 de agosto de 1981 y Decreto 495/989 de 31 de octubre de 1989;

III) que, a tal efecto procede redefinir el concepto de intermediación previsto en el Decreto 350/994 de 9 de agosto de 1994, adecuándolo a la naturaleza jurídica pertinente y separándolo nítidamente de los denominados seguros parciales o totales;

ATENCIÓN: a lo precedentemente expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

Artículo 1.- Modifícase el artículo 1° del Decreto del Poder Ejecutivo N° 350/994 del 9 de agosto de 1994, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 1°.- Se consideran empresas de intermediación en la prestación de asistencia médica u odontológica a aquéllas que mediante una cuota de prepago otorgan a sus afiliados asistencia médica u odontológica, a través de servicios contratados a terceros, sin que ello excluya la prestación de servicios no lucrativos.

Estas empresas no estarán comprendidas en el régimen establecido por el Decreto Ley N° 15.322 de 14 de setiembre de 1982".

Apéndice Normativo

Artículo 2.- Las empresas de intermediación financiera en la prestación de asistencia médica u odontológica registradas hasta la fecha, pasarán a denominarse Empresas de Intermediación en la Prestación de Asistencia Médica u Odontológica.

Artículo 3.- Otórgase un plazo de 180 días para que las empresas comprendidas en el Resultando II de esta disposición adecuen su naturaleza jurídica, mediante la realización de los trámites pertinentes.

Artículo 4.- Comuníquese. Publíquese.

BATLLE, LUIS FRASCHINI.

DECRETO N° 455/001

22 de noviembre de 2001

MARCO REGULATORIO DE LA ASISTENCIA MÉDICA COLECTIVA

Artículo 190°.- Deber de informar.- El médico debe informar adecuadamente al enfermo respecto a cuanto este le consulte, con veracidad y objetividad atendiendo a las circunstancias del caso.

Al respecto, procurará obtener el "libre consentimiento informado" del enfermo o sus representantes legales antes de realizar las acciones médicas necesarias, teniendo en cuenta que no pueden emitir consentimiento válido los menores de 18 años de edad (Artículo 280 numeral 2° del Código Civil) y demás incapaces, salvo las excepciones legalmente previstas.

DECRETO N° 78/002

6 de marzo de 2002

CONTRATOS DE TARJETAS DE CRÉDITOS

Artículo 3.- El régimen general sobre la carga de la prueba, que es de

Apéndice Normativo

orden público (artículo 1573° del Código Civil y 139° del Código General del Proceso) será el aplicable a todas las situaciones de diferendo que se planteen durante la relación contractual.-

Artículo 6.- Las eximentes de responsabilidades deben ser las previstas en el régimen general de la responsabilidad contractual (artículos 1342° y 1343° del Código Civil) y el artículo 33° de la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000.-

RESOLUCIÓN N° 652/998

17 de agosto de 1998

CÓDIGO CIVIL - GRUPO DE TRABAJO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo, 17 de agosto de 1998

VISTO: el Apéndice del Título Final del Código Civil de la República, aprobado por la Ley N° 10084 de 3 de diciembre de 1941 y que regula cuestiones relativas al Derecho Internacional Privado;

RESULTANDO: que durante el prolongado período transcurrido luego de la aprobación de la citada norma, se han producido sucesivos y variados avances en el tratamiento jurídico doctrinario del derecho internacional privado;

CONSIDERANDO: I) que es necesario actualizar la normativa de derecho civil;

II) que a esos efectos es pertinente conformar un grupo de trabajo integrado por juristas de reconocida experiencia en la materia;

ATENTO: a lo antes expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:

Artículo 1.- Créase un Grupo de Trabajo integrado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Prof. Dr. Didier Operti Badan, quien lo presidirá, el señor Prof. Dr. Ronald Herbert, la señora Directora de Asuntos de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores Prof. Dra. Berta Feder, quien ejercerá la secretaría, el señor Director de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia del Ministerio de Educación y Cultura, Prof. Dr. Eduardo Tellechea Bergman, el señor Prof. Dr. Marcelo Solari y la señora Prof. Dra. Cecilia Fresnedo.

Artículo 2.- Dicho Grupo de Trabajo elaborará, dentro de un plazo de 90 días a partir de la fecha de la presente, un anteproyecto de Ley de Derecho Internacional Privado substitutivo del Apéndice del Título Final del Código Civil de la República.

Artículo 3.- Comuníquese, notifíquese, etc.

SANGUINETTI, DIDIER OPERTTI, SAMUEL LICHTENSZTEJN

***INDICE
GENERAL***

Indice General

INDICE GENERAL

PROLOGO	1
DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SANCION DEL CODIGO CIVIL Y SUS MODIFICACIONES	5
EXPOSICION DE MOTIVOS	57
LEY N° 16.603 19/10/994	95
RESOLUCION N° 1.222 21/11/995	103
 CODIGO CIVIL	
TITULO PRELIMINAR.- DE LAS LEYES	
Artículos 1 a 20	105
LIBRO PRIMERO.- DE LAS PERSONAS	
TITULO I.- DE LAS DIFERENTES PERSONAS CIVILES	
Artículos 21 a 23	108
TITULO II.- DEL DOMICILIO DE LAS PERSONAS	
Artículos 24 a 38	108
TITULO III.- DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	
Artículos 39 a 49	110
TITULO IV.- DE LOS AUSENTES	
CAPITULO I.- DE LA PRESUNCION DE AUSENCIA	
Artículos 50 a 54	112
CAPITULO II.- DE LA DECLARACION DE AUSENCIA	
Artículos 55 a 60	113
CAPITULO III.- DE LOS EFECTOS DE LA AUSENCIA	
SECCION I.- De los efectos de la ausencia, relativamente a los bienes que el ausente poseía	
Artículos 61 a 73	115

Indice General

SECCION II.- De los efectos de la ausencia, con relación a los derechos eventuales que pueden competir al ausente	
Artículos 74 a 77	117
SECCION III.- De los efectos de la ausencia, relativamente al matrimonio	
Artículos 78 a 80	118
TITULO V.- DEL MATRIMONIO	
CAPITULO I.- DE LOS ESPONSALES	
Artículos 81 y 82	119
CAPITULO II.- DE LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO	
Artículos 83 a 104	119
CAPITULO III.- DE LOS REQUISITOS CIVILES PREVIOS AL MATRIMONIO EN GENERAL	
Artículos 105 a 115	124
CAPITULO IV.- DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO	
SECCION I.- De los deberes de los esposos para con sus hijos y de su obligación y la de otros parientes a prestarse recíprocamente alimentos	
Artículos 116 a 126	127
SECCION II.- De los derechos y obligaciones entre marido y mujer	
Artículos 127 a 144	129
CAPITULO V.- DE LA SEPARACION DE CUERPOS Y DE LA DISOLUCION DEL MATRIMONIO (Artículos 145 a 147)	
SECCION I.- De la separación de cuerpos	
Artículos 148 a 153	131
SECCION II.- De las medidas provisionales a que puede dar lugar la demanda	
Artículos 154 a 159	132
SECCION III.- De las excepciones a la acción de separación, pruebas y recursos	
Artículos 160 a 169	133
SECCION IV.- Efectos de la separación de cuerpos	
Artículos 170 a 185	135
SECCION V.- De la disolución del matrimonio	
Artículos 186 a 197	138
CAPITULO VI.-	
SECCION I.- De la nulidad del matrimonio	
Artículos 198 a 206	141
SECCION II.- Efectos de la declaración de nulidad	
Artículos 207 a 212	143

Indice General

TITULO VI.- DE LA PATERNIDAD Y FILIACION	
CAPITULO I.- DE LOS HIJOS LEGITIMOS	
Artículos 213 a 226	144
CAPITULO II.- DE LOS HIJOS NATURALES	
SECCION I.- De la legitimación de los hijos naturales	
Artículos 227 a 232	147
SECCION II.- Del reconocimiento de los hijos naturales y de la investigación de la filiación natural	
Artículos 233 a 242	148
TITULO VII.- DE LA ADOPCION	
Artículos 243 a 251	152
TITULO VIII.- DE LA PATRIA POTESTAD	
CAPITULO I.- DE LA PATRIA POTESTAD EN LOS HIJOS LEGITIMOS	
Artículos 252 a 274	154
CAPITULO II.- DE LA PATRIA POTESTAD EN LOS HIJOS NATURALES	
Artículos 275 a 279	159
CAPITULO III.- DE LOS MODOS DE ACABARSE, PERDERSE O SUSPENDERSE LA PATRIA POTESTAD	
Artículos 280 a 301	160
TITULO IX.- DE LA HABILITACION DE EDAD	
Artículos 302 a 312	166
TITULO X.- DE LA TUTELA	
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES	
Artículos 313 a 320	168
CAPITULO II.- DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE TUTELA	
SECCION I.- De la tutela testamentaria	
Artículos 321 a 327	169
SECCION II.- De la tutela legítima	
Artículos 328 a 332	170
SECCION III.- De la tutela dativa	
Artículos 333 y 334	171
SECCION IV.- De la organización de la tutela en casos de pérdida de la patria potestad	
Artículos 335 a 338	171
SECCION V.- De la organización de la tutela de los menores desamparados o sin padres conocidos	
Artículos 339 a 344	172
SECCION VI.- De los menores infractores y abandonados	
Artículos 345 a 348	173

Indice General

SECCION VII.- De la tutela de los hijos naturales	
Artículos 349 a 351	176
CAPITULO III.- DE LAS INCAPACIDADES PARA LA TUTELA Y DE LAS CAUSAS DE EXCUSA Y REMOCION DE LOS TUTORES	
SECCION I.- De las causas de incapacidad y de excusa	
Artículos 352 a 359	177
SECCION II.- De la remoción de la tutela	
Artículos 360 a 365	179
CAPITULO IV.- DE LAS DILIGENCIAS Y FORMALIDADES QUE DEBEN PRECEDER AL EJERCICIO DE LA TUTELA	
Artículos 366 a 381	181
CAPITULO V.- DE LA ADMINISTRACION DE LA TUTELA	
Artículos 382 a 414	183
CAPITULO VI.- DE LAS CUENTAS DE LA TUTELA	
Artículos 415 a 430	189
TITULO XI.- DE LA CURADURIA O CURATELA	
CAPITULO I.- DE LA CURADURIA GENERAL	
Artículos 431 a 450	192
CAPITULO II.- CURADURIA DE LOS BIENES	
Artículos 451 a 457	195
CAPITULO III.- CURADURIAS ESPECIALES	
Artículos 458 y 459	196
LIBRO SEGUNDO.- DE LOS BIENES Y DEL DOMINIO O PROPIEDAD	
TITULO I.- DE LA DIVISION DE LOS BIENES	
CAPITULO I.- DE LOS BIENES CONSIDERADOS EN SI MISMOS (Artículo 460) ...	197
SECCION I.- De los bienes corporales	
Artículos 461 a 470	198
SECCION II.- De los bienes incorporales	
Artículos 471 a 475	199
CAPITULO II.- DE LOS BIENES CON RELACION A LAS PERSONAS	
Artículos 476 a 485	200
TITULO II.- DEL DOMINIO	
Artículos 486 a 492	202
TITULO III.- DEL USUFRUCTO, USO Y HABITACION	
CAPITULO I.- DEL USUFRUCTO (Artículos 493 y 494)	203

Indice General

SECCION I.- De los modos de constituirse el usufructo	
Artículos 495 a 501	204
SECCION II.- De los derechos y obligaciones del usufructuario	
1°.- De los derechos del usufructuario	
Artículos 502 a 513	205
2°.- De las obligaciones del usufructuario	
Artículos 514 a 532	207
SECCION III.- De los derechos y obligaciones del propietario	
Artículos 533 a 536	211
SECCION IV.- De los modos de extinguirse el usufructo	
Artículos 537 a 540	211
CAPITULO II.- DEL USO Y DE LA HABITACION	
Artículos 541 a 549	212
TITULO IV.- DE LAS SERVIDUMBRES	
CAPITULO I.- DE LAS SERVIDUMBRES EN GENERAL	
Artículos 550 a 557	214
CAPITULO II.- DE LAS SERVIDUMBRES LEGALES	
SECCION I.- De las servidumbres de aguas	
Artículos 558 a 580	215
SECCION II.- De la servidumbre de paso	
Artículos 581 a 588	216
SECCION III.- Servidumbres de demarcación, cerramiento y medianería	
Artículos 589 a 611	217
SECCION IV.- De la distancia y obras intermedias que se requieren para ciertas construcciones y plantaciones	
Artículos 612 a 615	221
SECCION V.- De las luces y vistas en la pared del vecino	
Artículos 616 a 618	222
SECCION VI.- Del desagüe de los edificios	
Artículo 619	222
SECCION VII.- De la obligación de prevenir un daño que amenaza	
Artículo 620	222
CAPITULO III.- DE LAS SERVIDUMBRES VOLUNTARIAS	
SECCION I.- De los que pueden constituir servidumbres	
Artículos 621 a 630	223
SECCION II.- Como se constituyen las servidumbres	
Artículos 631 a 637	224
SECCION III.- Derechos y obligaciones de los dueños de predios dominantes y sirvientes	
Artículos 638 a 642	225

Indice General

SECCION IV.- Como se extinguen las servidumbres	
Artículos 643 a 645	226
TITULO V.- DE LA POSESION	
CAPITULO I.- DE LA NATURALEZA DE LA POSESION Y DE SUS EFECTOS Y VICIOS	
Artículos 646 a 657	227
CAPITULO II.- DE LAS ACCIONES POSESORIAS	
Artículos 658 a 675	229
TITULO VI.- DE LA REIVINDICACION	
CAPITULO I.- DE LA NATURALEZA Y CONDICIONES DE LA REIVINDICACION Y DE LOS EFECTOS QUE PRODUCE	
Artículos 676 a 687	232
CAPITULO II.- DE LA RESTITUCION DE LA COSA REIVINDICADA	
Artículos 688 a 704	234
LIBRO TERCERO.- DE LOS MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO (Artículo 705)	237
TITULO I.- DE LA OCUPACION (Artículos 706 y 707)	238
CAPITULO I.- DE LA CAZA Y DE LA PESCA	
Artículos 708 a 716	238
CAPITULO II.- DEL HALLAZGO O INVENCION	
Artículos 717 a 730	239
TITULO II.- DE LA ACCESION (Artículo 731)	241
CAPITULO I.- DE LA ACCESION RESPECTO DEL PRODUCTO DE LAS COSAS	
Artículos 732 a 735	242
CAPITULO II.- DE LA ACCESION RESPECTO DE LAS COSAS MUEBLES (Artículo 736)	242
SECCION I.- De la adjunción	
Artículos 737 a 739	242
SECCION II.- De la especificación	
Artículos 740 y 741	243
SECCION III.- De la conmixtión	
Artículos 742 y 743	244
SECCION IV.- Reglas comunes a las tres especies de accesión en cosas muebles	
Artículos 744 a 747	244
CAPITULO III.- DE LA ACCESION RESPECTO DE LAS COSAS INMUEBLES	
Artículos 748 a 757	245

Indice General

TITULO III.- DE LA TRADICION (Artículo 758)	246
CAPITULO I.- DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE TRADICION (Artículo 759)	247
SECCION I.- De la tradición real	
Artículos 760 a 762	247
SECCION II.- De la tradición ficta	
Artículos 763 a 768	247
CAPITULO II.- DE LAS CALIDADES QUE SE REQUIEREN PARA ADQUIRIR EL DOMINIO POR LA TRADICION Y DEL EFECTO DE LA TRADICION	
Artículos 769 a 775	249
TITULO IV.- DE LA SUCESION TESTAMENTARIA (Artículos 776 a 778)	250
CAPITULO I.- DEL TESTAMENTO	
SECCION I.- De la naturaleza y efectos del testamento	
Artículos 779 a 792	251
SECCION II.- Del testamento solemne	
Artículos 793 a 810	253
SECCION III.- Del testamento menos solemne o especial	
Artículos 811 a 827	257
SECCION IV.- Del testamento otorgado por el oriental en país extranjero	
Artículos 828 y 829	261
Disposición común a las tres secciones anteriores	
Artículo 830	262
CAPITULO II.- DE LA CAPACIDAD PARA DISPONER Y ADQUIRIR POR TESTAMENTO	
Artículos 831 a 852	262
CAPITULO III.- DE LA INSTITUCION DE HEREDERO	
SECCION I.- De la institución de heredero	
Artículos 853 a 857	267
SECCION II.- De la sustitución	
Artículos 858 a 869	268
CAPITULO IV.- DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS (Artículo 870)	270
SECCION I.- De las asignaciones alimenticias	
Artículos 871 a 873	270
SECCION II.- De la porción conyugal	
Artículos 874 a 883	271
SECCION III.- De las legítimas	
Artículos 884 a 895	274
CAPITULO V.- DE LA DESHEREDACION	
Artículos 896 a 904	277
CAPITULO VI.- DE LAS MANDAS O LEGADOS	
Artículos 905 a 946	279

Indice General

CAPITULO VII.- DE LAS CONDICIONES, PLAZOS Y OBJETO O FIN DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS	
Artículos 947 a 963	285
CAPITULO VIII.- DE LOS ALBACEAS	
Artículos 964 a 997	288
CAPITULO IX.- DE LA REVOCACION Y REFORMA DEL TESTAMENTO	
SECCION I.- De la revocación del testamento	
Artículos 998 a 1005	293
SECCION II.- De la reforma del testamento	
Artículos 1006 a 1010	294
TITULO V.- LA SUCESION INTESTADA	
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES	
Artículos 1011 a 1024	295
CAPITULO II.- DEL ORDEN DE LLAMAMIENTO	
Artículos 1025 a 1036	298
TITULO VI.- DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LA SUCESION TESTADA O INTESTADA	
CAPITULO I.- DE LA SUCESION Y DE LOS DERECHOS DE LOS HEREDEROS	
Artículos 1037 a 1043	300
CAPITULO II.- DEL DERECHO DE ACRECER	
Artículos 1044 a 1050	301
CAPITULO III.- DE LA ACEPTACION Y REPUDIACION DE LA HERENCIA	
Artículos 1051 a 1077	302
CAPITULO IV.- DEL BENEFICIO DE INVENTARIO	
Artículos 1078 a 1099	306
CAPITULO V.- DE LA COLACION Y PARTICION	
SECCION I.- De la colación	
Artículos 1100 a 1114	310
SECCION II.- De la partición	
Artículos 1115 a 1150	312
SECCION III.- De los efectos de la partición	
Artículos 1151 a 1158	318
SECCION IV.- De la nulidad o rescisión de la partición	
Artículos 1159 a 1167	319
SECCION V.- Del pago de las deudas hereditarias	
Artículos 1168 a 1180	320
SECCION VI.- Del beneficio de separación	
Artículos 1181 a 1186	323

Indice General

Disposición transitoria	
Artículo 1187	324

TITULO VII.- DE LA PRESCRIPCION

CAPITULO I.- DE LA PRESCRIPCION EN GENERAL

Artículos 1188 a 1203	324
-----------------------------	-----

CAPITULO II.- DE LA PRESCRIPCION CONSIDERADA COMO MEDIO DE ADQUIRIR

SECCION I.- De la prescripción adquisitiva de los bienes inmuebles

1°.- De la prescripción de diez y veinte años

Artículos 1204 a 1210	327
-----------------------------	-----

2°.- De la prescripción de treinta años

Artículo 1211	328
---------------------	-----

SECCION II.- De la prescripción adquisitiva de bienes muebles

Artículos 1212 a 1214	328
-----------------------------	-----

CAPITULO III.- DE LA PRESCRIPCION CONSIDERADA COMO MEDIO DE EXTINGUIR LOS DERECHOS

SECCION I.- De las prescripciones de treinta, veinte y diez años

Artículos 1215 a 1220	329
-----------------------------	-----

SECCION II.- De algunas prescripciones más cortas

Artículos 1221 a 1227	330
-----------------------------	-----

SECCION III.- Disposiciones generales

Artículos 1228 a 1231	332
-----------------------------	-----

CAPITULO IV.- DE LAS CAUSAS QUE INTERRUMPEN LA PRESCRIPCION O SUSPENDEN SU CURSO

SECCION I.- De las causas que interrumpen la prescripción

Artículos 1232 a 1241	333
-----------------------------	-----

SECCION II.- De las causas que suspenden el curso de la prescripción

Artículos 1242 a 1244	335
-----------------------------	-----

LIBRO CUARTO.- DE LAS OBLIGACIONES

PRIMERA PARTE.- DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL

TITULO I.- DE LAS CAUSAS EFICIENTES DE

LAS OBLIGACIONES (Artículos 1245 y 1246)	336
------------------------------------------------	-----

CAPITULO I.- DE LOS CONTRATOS EN GENERAL

SECCION I.- Disposiciones preliminares

Artículos 1247 a 1260	336
-----------------------------	-----

SECCION II.- De los requisitos esenciales para la validez de los contratos

Artículo 1261	339
---------------------	-----

1°.- Del consentimiento

Artículos 1262 a 1277	339
-----------------------------	-----

Indice General

2°- De la capacidad de los contrayentes	
Artículos 1278 a 1281	342
3°- Del objeto de los contratos	
Artículos 1282 a 1286	343
4°- De la causa para obligarse en los contratos	
Artículos 1287 a 1290	344
SECCION III.- De los efectos jurídicos de los contratos	
Artículos 1291 a 1296	344
SECCION IV.- De la interpretación de los contratos	
Artículos 1297 a 1307	345
CAPITULO II.- DE LOS CUASICONTRATOS, DELITOS Y CUASIDELITOS	
SECCION I.- De los cuasicontratos	
Artículos 1308 a 1318	347
SECCION II.- De los delitos y cuasidelitos	
Artículos 1319 a 1332	349
TITULO II.- DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE OBLIGACIONES	
CAPITULO I.- DE LAS OBLIGACIONES CON RELACION A SU OBJETO	
SECCION I.- De la obligación de dar	
Artículos 1333 a 1337	352
SECCION II.- De la obligación de hacer o de no hacer	
Artículos 1338 a 1340	353
SECCION III.- De los daños y perjuicios	
Artículos 1341 a 1348	354
SECCION IV.- De las obligaciones alternativas	
Artículos 1349 a 1356	356
SECCION V.- De las obligaciones facultativas	
Artículos 1357 a 1359	357
SECCION VI.- De las obligaciones de género	
Artículos 1360 a 1362	358
SECCION VII.- De las obligaciones con cláusula penal	
Artículos 1363 a 1374	358
SECCION VIII.- De las obligaciones divisibles e indivisibles	
Artículos 1375 a 1377	360
1°- De los efectos de la obligación divisible	
Artículos 1378 a 1383	360
2°- De los efectos de la obligación indivisible	
Artículos 1384 a 1387	362
CAPITULO II.- DE LAS OBLIGACIONES CON RELACION	
A LAS PERSONAS (Artículos 1388 y 1389)	363
SECCION UNICA.- De las obligaciones solidarias	
1°- Disposiciones generales	
Artículos 1390 a 1395	363

Indice General

2º- De los efectos de la solidaridad activa	
Artículos 1396 y 1397	364
3º- De los efectos de la solidaridad pasiva	
Artículos 1398 a 1405	365
CAPITULO III.- DE LAS OBLIGACIONES CON RESPECTO AL MODO DE CONTRAERSE	
SECCION I.- De las obligaciones condicionales	
1º- Disposiciones generales	
Artículos 1406 a 1423	367
2º- De la condición suspensiva	
Artículos 1424 a 1426	370
3º- De la condición resolutoria	
Artículos 1427 a 1432	371
SECCION II.- De las obligaciones a plazo	
Artículos 1433 a 1440	372
CAPITULO IV.- DE LAS OBLIGACIONES CON RELACION A SUS EFECTOS	
SECCION UNICA.- De las obligaciones civiles y de las meramente naturales	
Artículos 1441 a 1446	373
TITULO III.- DE LOS MODOS DE EXTINGUIRSE	
LAS OBLIGACIONES (Artículo 1447)	375
CAPITULO I.- DE LA PAGA EN GENERAL	
SECCION I.- De la paga	
Artículos 1448 a 1467	375
SECCION II.- De la subrogación	
Artículos 1468 a 1474	378
SECCION III.- De la imputación de la paga	
Artículos 1475 a 1480	380
SECCION IV.- De la oblación y consignación	
Artículos 1481 a 1489	381
SECCION V.- De la paga por entrega de bienes	
Artículos 1490 a 1493	384
SECCION VI.- De la paga con beneficio de competencia	
Artículos 1494 a 1496	385
CAPITULO II.- DE LA COMPENSACION	
Artículos 1497 a 1514	385
CAPITULO III.- DE LA REMISION	
Artículos 1515 a 1524	388
CAPITULO IV.- DE LA NOVACION	
Artículos 1525 a 1543	390
CAPITULO V.- DE LA CONFUSION	
Artículos 1544 a 1548	393

Indice General

CAPITULO VI.- DE LA IMPOSIBILIDAD DEL PAGO	
Artículos 1549 a 1558	394
CAPITULO VII.- DE LA ANULACION O DECLARACION DE NULIDAD	
Artículos 1559 a 1572	396
TITULO IV.- DEL MODO DE PROBAR LAS OBLIGACIONES	
Y LIBERACIONES (Artículo 1573)	398
CAPITULO I.- DE LA PRUEBA INSTRUMENTAL	
SECCION I.- De los instrumentos públicos	
Artículos 1574 a 1580	399
SECCION II.- De los instrumentos privados	
Artículos 1581 a 1590	400
SECCION III.- De las copias de escrituras públicas	
Artículos 1591 a 1593	402
CAPITULO II.- DE LA PRUEBA TESTIMONIAL	
Artículos 1594 a 1599	403
CAPITULO III.- DE LAS PRESUNCIONES	
Artículos 1600 a 1605	405
CAPITULO IV.- DE LA CONFESION DE PARTE	
Artículos 1606 a 1610	406
CAPITULO V.- DEL JURAMENTO JUDICIAL	
Artículos 1611 y 1612	406
SEGUNDA PARTE.- DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DE LOS CONTRATOS	
TITULO I.- DE LAS DONACIONES	
CAPITULO I.- DE LA NATURALEZA DE LA DONACION Y DE SUS	
DIFERENTES ESPECIES	
Artículos 1613 a 1618	407
CAPITULO II.- DEL MODO DE HACERSE LAS DONACIONES	
Artículos 1619 a 1624	408
CAPITULO III.- DE LOS LIMITES Y EFECTOS DE LA DONACION	
Artículos 1625 a 1630	409
CAPITULO IV.- DE LA RESCISION, REVOCACION Y REDUCCION DE LAS	
DONACIONES	
Artículos 1631 a 1643	410
CAPITULO V.- DE LAS DONACIONES POR CAUSA DE MATRIMONIO	
SECCION I.- Disposiciones generales	
Artículos 1644 a 1650	413
SECCION II.- De las donaciones por causa de matrimonio hechas para	
después de la muerte del donante	
Artículos 1651 a 1655	414

Indice General

SECCION III.- De las donaciones matrimoniales de un esposo a otro	
Artículos 1656 a 1660	415
TITULO II.- DE LA COMPRAVENTA	
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES	
Artículos 1661 a 1674	415
CAPITULO II.- DE LAS INCAPACIDADES ESPECIALMENTE RELATIVAS AL CONTRATO DE COMPRAVENTA	
Artículos 1675 a 1679	418
CAPITULO III.- DE LOS EFECTOS INMEDIATOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA	
Artículos 1680 a 1685	419
CAPITULO IV.- DE LAS OBLIGACIONES DEL VENDEDOR (Artículo 1686)	420
SECCION I.- De la entrega de la cosa vendida	
Artículos 1687 a 1695	420
SECCION II.- Del saneamiento	
Artículo 1696	423
1º.- Del saneamiento en caso de evicción	
Artículos 1697 a 1717	423
2º.- Del saneamiento por defectos o vicios redhibitorios	
Artículos 1718 a 1727	427
CAPITULO V.- DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPRADOR	
Artículos 1728 a 1735	429
CAPITULO VI.- DE LOS PACTOS ACCESORIOS AL CONTRATO DE VENTA (Artículo 1736)	431
SECCION I.- Del pacto comisorio	
Artículos 1737 a 1741	431
SECCION II.- Del pacto de mejor comprador	
Artículos 1742 a 1747	432
SECCION III.- De la retroventa	
Artículos 1748 a 1754	432
CAPITULO VII.- DE LA VENTA DE UNA COSA COMUN POR LICITACION O SUBASTA	
Artículos 1755 y 1756	434
CAPITULO VIII.- DE LA CESION DE DERECHOS CREDITARIOS Y HEREDITARIOS	
SECCION I.- De la cesión de créditos	
Artículos 1757 a 1766	434
SECCION II.- De la cesión de derechos hereditarios (Artículo 1664)	
Artículos 1767 y 1768	436

Indice General

TITULO III.- DE LA PERMUTA O CAMBIO	
Artículos 1769 a 1775	437
TITULO IV.- DEL ARRENDAMIENTO	
Artículo 1776	438
CAPITULO I.- DEL ARRENDAMIENTO DE COSAS	
SECCION I.- Disposiciones generales	
Artículos 1777 a 1795	438
SECCION II.- De las obligaciones del arrendador	
Artículos 1796 a 1810	442
SECCION III.- De las obligaciones del arrendatario	
Artículos 1811 a 1830	445
CAPITULO II.- DEL ARRENDAMIENTO DE OBRAS	
Artículos 1831 a 1855	449
TITULO V.- DEL CENSO	
CAPITULO I.- DE LA NATURALEZA Y FORMA DEL CENSO	
Artículos 1856 a 1865	453
CAPITULO II.- DE LOS EFECTOS DEL CENSO	
Artículos 1866 a 1874	454
TITULO VI.- DE LAS COMPAÑIAS O SOCIEDADES	
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES	
Artículos 1875 a 1886	456
CAPITULO II.- DE LAS PRINCIPALES CLAUSULAS DEL CONTRATO DE SOCIEDAD	
Artículos 1887 a 1892	458
CAPITULO III.- DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD	
Artículos 1893 a 1904	460
CAPITULO IV.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS ENTRE SI Y CON RESPECTO A TERCEROS	
SECCION I.- De las obligaciones de los socios entre sí	
Artículos 1905 a 1917	462
SECCION II.- De las obligaciones de los socios respecto de terceros	
Artículos 1918 a 1922	465
CAPITULO V.- DE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD	
Artículos 1923 a 1937	466
TITULO VII.- DE LA SOCIEDAD CONYUGAL	
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES	
Artículos 1938 a 1949	469
CAPITULO II.- DE LA SOCIEDAD LEGAL (Artículo 1950)	471
SECCION I.- Del capital respectivo de los cónyuges y haber de la sociedad	
Artículos 1951 a 1964	471

Indice General

SECCION II.- De las cargas y obligaciones de la sociedad legal	
Artículos 1965 a 1969	475
SECCION III.- De la administración ordinaria de la sociedad legal	
Artículos 1970 a 1978	476
SECCION IV.- De la administración extraordinaria de la sociedad conyugal	
Artículos 1979 a 1984	478
SECCION V.- De la separación judicial de bienes durante el matrimonio	
Artículos 1985 a 1997	479
SECCION VI.- De la disolución y liquidación de la sociedad	
Artículos 1998 a 2050	481
TITULO VIII.- DEL MANDATO	
CAPITULO I.- DE LA NATURALEZA, EFECTOS Y ESPECIES DEL MANDATO	
Artículos 2051 a 2063	485
CAPITULO II.- DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDATARIO	
Artículos 2064 a 2075	488
CAPITULO III.- DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDANTE	
Artículos 2076 a 2085	489
CAPITULO IV.- DEL MODO DE ACABARSE EL MANDATO	
Artículos 2086 a 2101	491
TITULO IX.- DE LA FIANZA	
CAPITULO I.- DE LA NATURALEZA Y EXTENSION DE LA FIANZA	
Artículos 2102 a 2116	494
CAPITULO II.- DE LOS EFECTOS DE LA FIANZA	
SECCION I.- De los efectos de la fianza entre el fiador y el acreedor	
Artículos 2117 a 2127	497
SECCION II.- De los efectos de la fianza entre el deudor y el fiador y entre varios fiadores	
Artículos 2128 a 2141	498
CAPITULO III.- DE LOS MODOS DE ACABARSE LA FIANZA	
Artículos 2142 a 2146	501
TITULO X.- DE LA TRANSACCION	
Artículos 2147 a 2166	502
TITULO XI.- DE LOS CONTRATOS ALEATORIOS (Artículo 2167)	505
CAPITULO I.- DEL JUEGO, APUESTA Y SUERTE	
Artículos 2168 a 2181	505
CAPITULO II.- DE LA CONSTITUCION DE RENTA VITALICIA	
Artículos 2182 a 2195	507

Indice General

TITULO XII.- DEL PRESTAMO (Artículo 2196)	509
CAPITULO I.- DEL MUTUO O PRESTAMO DE CONSUMO	
Artículos 2197 a 2215	509
CAPITULO II.- DEL COMODATO O PRESTAMO DE USO	
SECCION I.- De la naturaleza del comodato	
Artículos 2216 a 2219	511
SECCION II.- De las obligaciones del comodatario	
Artículos 2220 a 2232	512
SECCION III.- De las obligaciones del comodante	
Artículos 2233 a 2238	515
TITULO XIII.- DEL DEPOSITO	
CAPITULO I.- DEL DEPOSITO EN GENERAL Y DE SUS DIVERSAS ESPECIES	
Artículos 2239 a 2244	516
CAPITULO II.- DEL DEPOSITO VOLUNTARIO	
SECCION I.- De la naturaleza del depósito voluntario	
Artículos 2245 a 2250	516
SECCION II.- De las obligaciones del depositario	
Artículos 2251 a 2271	517
SECCION III.- De las obligaciones del depositante	
Artículo 2272	520
CAPITULO III.- DEL DEPOSITO NECESARIO	
Artículos 2273 a 2284	521
CAPITULO IV.- DEL SECUESTRO	
Artículos 2285 a 2291	522
TITULO XIV.- DEL CONTRATO DE PRENDA	
Artículos 2292 a 2321	524
TITULO XV.- DE LA HIPOTECA	
Artículos 2322 a 2348	528
TITULO XVI.- DE LA ANTICRESIS	
Artículos 2349 a 2358	533
TITULO XVII.- DE LA CESION DE BIENES	
Artículos 2359 a 2367	534
TITULO XVIII.- DE LOS CREDITOS PRIVILEGIADOS	
Artículos 2368 a 2371	537

Indice General

TITULO XIX.- DE LA GRADUACION DE ACREEDORES Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES EN CONCURSO

Artículos 2372 a 2389 539

TITULO FINAL.- DE LA OBSERVANCIA DE ESTE CODIGO

Artículos 2390 a 2392 543

APENDICE DEL TITULO FINAL DE ESTE CODIGO

Artículos 2393 a 2405 544

APENDICE NORMATIVO 547

Decreto-Ley N° 817 26/5/1865 - Código de Comercio 549

Ley N° 9.342 6/4/1934 - Código del Niño 550

Ley N° 16.713 3/9/1995 - Ley de Seguridad Social 551

Ley N° 16.719 11/10/1995 - Mayoría de Edad 553

Ley N° 16.774 27/9/1996 - Ley de Fondos de Inversión 553

Ley N° 16.858 3/9/1997 - Declárase de interés general el riego con destino agrario, sin perjuicio de los otros usos legítimos 554

Ley N° 16.871 28/9/1997 - Se organizan los Registros Públicos, los que constituyen en conjunto un servicio técnico-administrativo sometido a jerarquía del Ministerio de Educación y Cultura, por intermedio de la Dirección General de Registros 555

Ley N° 17.011 25/9/1998 - Ley de Marcas 560

Ley N° 17.066 24/12/1998 - Alojamientos Privados para Adultos Mayores 561

Ley N° 17.163 1/9/1999 - Fundaciones 561

Ley N° 17.228 7/1/2000 - Ley de Prenda sin Desplazamiento 563

Ley N° 17.243 29/6/2000 - Ley de Urgencia 563

Ley N° 17.250 11/8/2000 - Ley de Defensa del Consumidor - Ley de Relaciones de Consumo 564

Decreto N° 139/985 16/4/1985 - Pasaportes 565

Decreto N° 359/995 21/9/1995 - Régimen Pensionario 566

Decreto N° 338/996 28/8/1996 - Texto Ordenado de normas tributarias de Competencia de la Dirección General Impositiva 567

Decreto N° 123/997 12/3/1997 - Seguridad Social - Viviendas 568

Decreto N° 194/997 10/6/1997 - Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera y normas concordantes y complementarias (TOCAF) 568

Decreto N° 200/997 18/6/1997 - Texto Ordenado de las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de Funcionarios Públicos (TOFUP) 573

Decreto N° 76/998 24/3/1998 - Texto Ordenado Ley de Vivienda (TOLVI) 574

Decreto N° 99/998 21/4/1998 - Registros Públicos 575

Decreto N° 252/998 16/9/1998 - Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales 575

Indice General

Decreto N° 253/998 16/9/1998 - Dirección Nacional de Aduanas - Garantía Prendaria	576
Decreto N° 254/998 16/9/1998 - Dirección Nacional de Aduanas - Garantía Prendaria	577
Decreto N° 107/999 13/4/1999 - Registros Públicos - Bienes inmuebles	577
Decreto N° 320/999 1/10/1999 - Reglamentación Técnica de los Alojamientos Privados para Adultos Mayores	578
Decreto N° 82/000 29/2/2000 - Reglamentación de las relaciones entre la población y los denominados "animales domésticos" y otros en general	579
Decreto N° 134/001 24/4/2001 - Empresas y prestadores privados de seguridad	579
Decreto N° 454/001 21/11/2001 - Empresas de intermediación que realizan prestaciones de asistencia médica u odontológica	580
Decreto N° 455/001 22/11/2001 - Marco Regulatorio de la Asistencia Médica Colectiva	582
Decreto N° 78/002 6/3/2002 - Contratos de tarjetas de créditos	582
Resolución N° 652/998 17/8/1998 - Código Civil - Grupo de trabajo	583

ACTUALIZACIONES

(a partir del 4/11/03)

LEY N° 17.703 (*)**27 de octubre de 2003**

APRUÉBASE LA LEY DE FIDEICOMISO.
DERÓGASE EL ARTÍCULO 865 Y
MODIFÍCASE EL ARTÍCULO 866 DEL CÓDIGO CIVIL

PODER LEGISLATIVO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN**CAPITULO I****Concepto y principios generales**

Artículo 1°.- (Definición).- El fideicomiso es el negocio jurídico por medio del cual se constituye la propiedad fiduciaria de un conjunto de derechos de propiedad u otros derechos reales o personales que son transmitidos por el fideicomitente al fiduciario para que los administre o ejerza de conformidad con las instrucciones contenidas en el fideicomiso, en beneficio de una persona (beneficiario), que es designada en el mismo, y la restituya al cumplimiento del plazo o condición al fideicomitente o la transmita al beneficiario.

Podrá haber pluralidad de fideicomitentes y de beneficiarios.

Artículo 2°.- (Constitución).- El fideicomiso puede ser constituido por acto entre vivos o por testamento.

El fideicomiso por acto entre vivos es un contrato innominado que deberá otorgarse por escrito so pena de nulidad, cualquiera sea el objeto sobre el que recaiga, requiriéndose la escritura pública en los casos en que dicha solemnidad es exigida por la ley. La publicidad frente a terceros se registrará por lo dispuesto en la ley de Registros Públicos.

() Ver en página 269: artículos 865 y 866 de este CÓDIGO CIVIL.*

El fideicomiso por acto entre vivos es título hábil para producir la transferencia de la propiedad o de la titularidad de los derechos reales o personales que constituyen su objeto.

El fideicomiso testamentario podrá constituirse por testamento abierto o cerrado. En el certificado sucesorio se hará constar la constitución de la propiedad fiduciaria, debiendo inscribirse en los casos que así lo disponga la ley de Registros Públicos.

El fideicomiso testamentario confiere al fiduciario derecho personal a reclamar de los herederos la entrega de los bienes y derechos que constituyan su objeto, excepto en caso de recaer sobre una especie cierta.

En tal caso, el fiduciario adquiere la propiedad de la misma desde la muerte del causante, conforme a los artículos 937 y 938 del Código Civil. El fiduciario heredero sucede conforme a los principios generales.

Artículo 3°.- (Habilitación de inversiones).- Cuando el fideicomiso tenga por fin la realización de una obra pública municipal, las Intendencias Municipales podrán constituirlo mediante la cesión de derechos de créditos de tributos departamentales, dándose cuenta a la Junta Departamental.

La Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional podrán invertir en fideicomisos, siempre que su objeto refiera a actividades desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados económicamente en la República, así como créditos originados en exportaciones realizadas desde el Uruguay.

Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional podrán instrumentar a través de fideicomisos las inversiones previstas en el literal E) del artículo 123 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, y las que realicen en fideicomisos financieros se considerarán en el literal D) de dicha norma.

Artículo 4°.- (Estipulaciones del instrumento constitutivo del fideicomiso).- Sin perjuicio de la incorporación de otras estipulaciones, el instrumento de fideicomiso también deberá contener:

- a) La individualización de los bienes objeto del fideicomiso. En caso de no resultar posible tal individualización a la fecha de la celebración del fideicomiso, constará la descripción de los requisitos y características que deberán reunir los bienes.
- b) La determinación del procedimiento en que los bienes podrán ser incorporados al fideicomiso.
- c) El plazo o condición a que se sujeta la propiedad fiduciaria.
- d) El destino de los bienes a la finalización del fideicomiso.

- e) Los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo si éste cesare.

Artículo 5°.- (Objeto).- El fideicomiso por acto entre vivos puede ser constituido sobre bienes o derechos de cualquier naturaleza presentes o futuros, incluyéndose las universalidades de bienes.

El fideicomiso testamentario podrá recaer sobre toda la herencia o una cuota parte de la misma, o sobre bienes, derechos, universalidades de bienes, y demás relaciones jurídicas activas que compongan el patrimonio sucesorio.

Artículo 6°.- (Propiedad Fiduciaria).- Los bienes y derechos fideicomitados constituyen un patrimonio de afectación, separado e independiente de los patrimonios del fideicomitente, del fiduciario y del beneficiario.

El conjunto de bienes y derechos fideicomitados deberá individualizarse en el instrumento que los determine. El mismo deberá ser inscripto en la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura.

El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura, determinará las regulaciones que organicen la inscripción y demás condiciones registrales de los fideicomisos, dando cumplimiento a la Ley N° 16.871, de 28 de setiembre de 1997, y sus modificativas y concordantes.

Si el fiduciario fuera una persona casada bajo el régimen legal de sociedad conyugal, los bienes y derechos fideicomitados, no ingresarán a la masa de gananciales, rigiéndose a todos los efectos por las normas que regulan los bienes propios. La retribución que el fiduciario casado perciba por su actividad se rige por los principios generales.

Artículo 7°.- (Derecho de Persecución de los Acreedores).- Los bienes fideicomitados quedarán exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario.

Los acreedores del beneficiario no podrán perseguir los bienes fideicomitados mientras éstos se encuentran en el patrimonio del fiduciario, pero podrán perseguir para la satisfacción de sus créditos los frutos que dichos bienes generen, pudiendo asimismo subrogarse en los derechos de aquél.

Habiéndose constituido el fideicomiso por acto entre vivos, los acreedores del fideicomitente no podrán perseguir los bienes fideicomitados, pudiendo ejercer tan solo las acciones por fraude previstas por la ley. A los efectos del ejercicio de la acción pauliana, a los acreedores les bastará con acreditar el fraude del fideicomitente, salvo en casos en los que deba excluirse el ánimo de liberalidad directo o indirecto del fideicomitente.

Si el fideicomiso testamentario diera origen a una sucesión a título particular, el fiduciario responderá frente a los acreedores hereditarios sólo con los bienes fideicomitados, en los casos y en la forma en que responden los legatarios (artículos 1175 y 1178 del Código Civil). No obstante ello, si los herederos comunicaran personalmente en forma fehaciente o por vía judicial al acreedor hereditario su intención de cumplir el fideicomiso testamentario, y éstos no se opusieran al cumplimiento dentro de los diez días inmediatos siguientes, hasta tanto no se le pague o garantice su crédito, perderán su acción contra los bienes fideicomitados.

Si el fideicomiso testamentario diera origen a una sucesión a título universal, el fiduciario responderá con el patrimonio fideicomitado. En todos los casos tendrá la carga de realizar un inventario solemne y completo del patrimonio o cuota patrimonial fideicomitado, citando a los acreedores hereditarios.

Decláranse aplicables a la propiedad fiduciaria las disposiciones contenidas en los artículos 189, 190 y 191 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, en lo pertinente.

El ejercicio de las acciones previstas en los incisos tercero y sexto del presente artículo no podrá afectar los derechos de los titulares adquirentes de buena fe de certificados de participación en el dominio fiduciario, de títulos representativos de deuda garantizados con bienes que integren el fideicomiso, o de títulos que otorguen derechos de crédito y derechos de participación sobre el remanente, siempre que cualesquiera de dichos valores sean o hayan sido objeto de oferta pública en los términos previstos en el artículo 28 de la presente ley.

Artículo 8°.- (Alcance de la responsabilidad).- Los bienes del fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que sólo serán satisfechas con los bienes fideicomitados. La insuficiencia de los bienes fideicomitados para atender a estas obligaciones, no dará lugar a la declaración de quiebra, concurso o liquidación judicial. En tal supuesto y a falta de otros recursos provistos por el fideicomitente o el beneficiario según disposiciones contractuales, procederá su liquidación privada, la que estará a cargo del fiduciario, quien deberá enajenar los bienes que lo integren y entregará el producido a los acreedores conforme al orden de privilegios previstos para la quiebra.

Si se tratase de fideicomiso financiero regirán en lo pertinente las normas de los artículos 31 y 32 de la presente ley. En los casos de conflicto entre las partes y si se tratase de fideicomiso financiero se recurrirá al proceso arbitral previsto en los artículos 472 y siguientes del Código General del Proceso y si se tratase de fideicomiso no financiero, se podrá recurrir al proceso arbitral citado o a la vía judicial, siguiéndose el trámite del proceso extraordinario previsto en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 9º.- (Prohibiciones).- Quedan prohibidos, siendo absolutamente nulos:

- a) Los fideicomisos testamentarios en los que se designen diversos beneficiarios en forma sucesiva, procediendo la sustitución a la muerte del beneficiario anterior.
- b) El fideicomiso en el cual se designe beneficiario al fiduciario salvo en los casos de fideicomiso en garantía constituidos a favor de una entidad de intermediación financiera.

Artículo 10.- Los fideicomisos testamentarios no afectarán el carácter intangible de la legítima (artículo 894 del Código Civil), ni perjudicarán el derecho de los restantes asignatarios forzosos.

Si se vulnerara el derecho de los legitimarios, del porcionero, o del beneficiario de los derechos reales de habitación y de uso, el asignatario forzoso cuyo derecho fuera lesionado podrá ejercer la acción de reforma de testamento conforme a los artículos 1006 y siguientes del Código Civil.

El heredero forzoso que fuera beneficiario de un fideicomiso por acto entre vivos deberá colacionar el valor de los bienes que le hayan sido transmitidos por fideicomiso, excepto en caso de haber sido dispensado de colación (artículos 1100 y siguientes del Código Civil). Respecto de los frutos rige el artículo 1111 del Código Civil.

CAPITULO II

Del fiduciario

Artículo 11.- (Requisitos del Fiduciario).- Podrá ser fiduciario cualquier persona física o jurídica. La persona física deberá tener la capacidad legal exigida para ejercer el comercio.

Sin perjuicio de los requisitos establecidos para los fiduciarios de los fideicomisos financieros en el Capítulo IV de la presente ley, las entidades de intermediación financiera y los fiduciarios profesionales sólo podrán actuar como fiduciarios en forma habitual y profesional.

Artículo 12.- (Registro Público de Fiduciarios).- Créase en el Banco Central del Uruguay un registro público de fiduciarios profesionales, personas físicas o jurídicas. La información registrada en él será de libre acceso para cualquier interesado. El funcionamiento del Registro y los mecanismos a través de los que los fiduciarios darán cumplimiento a las obligaciones dispuestas por este artículo serán dispuestos por la reglamentación. En los casos en que el fiduciario no sea una persona física, los socios o accionistas, administradores o directores

deberán determinarse precisamente. Tratándose de sociedades anónimas, éstas deberán emitir acciones nominativas o escriturales. En todos los casos se inscribirá la responsabilidad patrimonial de los fiduciarios, sus socios o accionistas, administradores y directores. Los fiduciarios inscriptos deberán actualizar la información proporcionada al registro con la periodicidad que establezca la reglamentación, así como inmediatamente de producida cualquier modificación en la información registrada. Los fiduciarios inscriptos serán responsables de la información original y las actualizaciones proporcionadas.

El incumplimiento de las obligaciones de registración y de información establecidas en este artículo será sancionado conforme a lo dispuesto por los artículos 20 a 24 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Artículo 13.- (Actuación sucesiva).- En caso que el fideicomitente designe varios fiduciarios para que sucesivamente desempeñen el fideicomiso, deberá establecer el orden y las condiciones en que hayan de sustituirse.

Artículo 14.- (Sustitución).- En el instrumento de fideicomiso, el fideicomitente podrá designar uno o más sustitutos para que reemplacen al fiduciario que no acepte o cese en sus funciones. Podrá también reservarse el fideicomitente, en dicho negocio, esta facultad de sustitución para ser ejercida en cualquier momento.

Artículo 15.- (Acciones).- El fiduciario está obligado a ejercer todas las acciones que correspondan para la defensa de los bienes fideicomitados, tanto contra terceros como contra el beneficiario.

El Juez podrá autorizar al fideicomitente o al beneficiario a ejercer acciones en sustitución del fiduciario, cuando éste no lo hiciere en violación de sus obligaciones.

Artículo 16.- (Responsabilidad interna).- El fiduciario deberá desarrollar sus cometidos y cumplir las obligaciones impuestas por la ley y el negocio de fideicomiso, con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en él.

Si faltare a sus obligaciones será responsable frente al fideicomitente y al beneficiario, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión.

En ningún caso podrá exonerarse de responsabilidad al fiduciario por los daños provocados por su dolo o culpa grave, así como por aquellos causados por el de sus dependientes.

Artículo 17.- (Relación externa).- El fideicomiso que haya sido inscripto en el Registro Público correspondiente, de conformidad a lo previsto en los artículos 2° y 6° de la presente ley, será oponible a terceros conforme a los principios

generales. En consecuencia, los actos y contratos celebrados por el fiduciario en infracción de las restricciones dispuestas o excediendo sus facultades, serán inoponibles en perjuicio del fideicomitente y del beneficiario.

Tratándose de fideicomisos no inscritos, las restricciones a las facultades del fiduciario no serán oponibles a terceros, salvo que los actos realizados por éste sean notoriamente extraños a la finalidad del fideicomiso o que el tercero tenga conocimiento de la infracción.

Cuando el fiduciario celebre un acto que es inoponible al fideicomitente o al beneficiario en su caso, el interesado podrá solicitar ante el Juez competente la revocación del acto.

Artículo 18.- (Rendición de Cuentas).- En el negocio de fideicomiso no se podrá dispensar al fiduciario de la obligación de rendir cuentas, la que podrá ser solicitada por el fideicomitente o el beneficiario, con las formalidades que se establezcan en el instrumento de fideicomiso y en la reglamentación respectiva.

En todos los casos el fiduciario deberá rendir cuentas al beneficiario con una periodicidad no mayor a un año, sin perjuicio de lo dispuesto en el fideicomiso.

Si no se objetaren las cuentas en el plazo establecido en el instrumento de fideicomiso y, a falta de ello, dentro del plazo de noventa días desde la notificación fehaciente, las cuentas se tendrán como tácitamente aprobadas, salvo que se hubiera incurrido en falsedad u ocultamiento doloso.

Aprobadas las cuentas en forma expresa o tácita, el fiduciario quedará libre de toda responsabilidad, frente a los beneficiarios presentes o futuros y a todos los demás ante los que se hubieran rendido cuentas, por todos los actos ocurridos durante el período de la cuenta y el instrumento de fideicomiso.

Artículo 19.- (Obligaciones del fiduciario).- Además de las previstas en el negocio constitutivo y en los artículos precedentes, son obligaciones del fiduciario:

- a) Mantener un inventario y una contabilidad separada de los bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio fiduciario. En caso que sea fiduciario en varios negocios de fideicomiso, deberá llevar contabilidad separada de cada uno de ellos. En todos los casos la contabilidad deberá estar basada en normas adecuadas.
- b) Transferir los bienes del patrimonio fiduciario al fideicomitente o al beneficiario al concluir el fideicomiso o al fiduciario subrogante en caso de sustitución o cese.
- c) Guardar reserva respecto de las operaciones, actos, contratos, documentos e información que se relacione con el fideicomiso.

Artículo 20.- (Prohibiciones del fiduciario).- Estará prohibido al fiduciario:

- a) Afianzar, avalar o garantizar de algún modo al fideicomitente o al beneficiario el resultado del fideicomiso o las operaciones, actos y contratos que realice con los bienes fideicomitados.
- b) Realizar operaciones, actos o contratos con los bienes fideicomitados, en beneficio propio, de sus directores o personal superior, de sus parientes directos o de las personas jurídicas donde éstos tengan una posición de dirección o control.
- c) Realizar cualquier otro acto o negocio jurídico con los bienes fideicomitados respecto del cual tenga un interés" propio, salvo autorización conjunta y expresa del fideicomitente y del beneficiario.

Artículo 21.- (Derechos del fiduciario).- Salvo estipulación en contrario, el fiduciario tendrá derecho al reembolso de los gastos incurridos en beneficio del patrimonio que integra su dominio fiduciario y a una remuneración. Si ésta no hubiere sido fijada en el contrato, la fijará el Juez teniendo en consideración la naturaleza del fideicomiso encomendado y la importancia del patrimonio fiduciario.

Artículo 22.- (Cese del fiduciario).- El fiduciario cesará en el ejercicio de su cargo en los siguientes casos:

- a) Por muerte o incapacidad judicialmente declarada, así como por la pérdida de alguna de las condiciones exigidas para el ejercicio del comercio. En estos casos, la propiedad fiduciaria se transmitirá de pleno derecho de acuerdo con lo estipulado en el instrumento de constitución del fideicomiso.
- b) Por disolución, quiebra, concurso o liquidación judicial.
- c) Por remoción por el fideicomitente, cuando éste se hubiera reservado dicha facultad en el negocio constitutivo.
- d) Por remoción judicial, a instancia del fideicomitente o del beneficiario, en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley o por el negocio constitutivo. También procederá la remoción judicial, por las mismas causales, a instancia de los acreedores que representen más del 50% (cincuenta por ciento) de los créditos.
- e) Por renuncia, cuando sea autorizada en el negocio constitutivo y por las causas en éste establecidas. Cuando el negocio constitutivo nada establezca, sólo podrá renunciar en caso de negativa del beneficiario a recibir las prestaciones o en caso de insuficiencia del producto del fideicomiso para el pago de su remuneración y siempre que el fideicomitente o el beneficiario se nieguen a pagarla. La renuncia tendrá efecto después de la transferencia del patrimonio objeto del fideicomiso al fiduciario sustituto.

- f) Por la cancelación de la inscripción en el registro dispuesta por el Banco Central del Uruguay, de acuerdo con lo previsto por el artículo 12 de la presente ley.

Producida una causa de cesación de las enunciadas en esta disposición se procederá conforme lo establece el artículo 14 de la presente ley.

CAPITULO III

Del beneficiario

Artículo 23.- (Beneficiario).- El acto constitutivo del fideicomiso, deberá designar al beneficiario quien podrá ser una persona física o jurídica.

En caso de fideicomiso testamentario rigen los principios del Código Civil (artículos 1038, 835, 841).

El beneficiario puede ser una persona futura que no exista al tiempo del otorgamiento del fideicomiso contractual, en cuyo caso deberá establecerse con precisión las características que permitan su identificación futura. El fideicomiso contractual quedará en tal caso, sujeto a la condición suspensiva de existencia de la persona beneficiaria y quedará sin efecto de no verificarse la misma dentro del plazo del año a partir del otorgamiento.

Artículo 24.- (Designación conjunta o sucesiva).- Se podrá designar dos o más beneficiarios que gocen de sus derechos en forma conjunta o sucesiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el literal a) del artículo 9° de la presente ley. En caso de designación conjunta, salvo disposición en contrario, se repartirán los beneficios obtenidos por partes iguales.

Para el caso que alguno de los beneficiarios designados en forma conjunta no acepte, no llegue a existir o no pueda ser determinado, los beneficios que éstos debieran percibir se repartirán por partes iguales entre los demás beneficiarios, salvo que otra cosa se dijere en el instrumento de fideicomiso.

Pueden también designarse beneficiarios sustitutos para el caso de no aceptación.

CAPITULO IV

Fideicomiso financiero

Artículo 25.- (Concepto).- El fideicomiso financiero es aquel negocio de fideicomiso cuyos beneficiarios sean titulares de certificados de participación en el dominio fiduciario, de títulos representativos de deuda garantizados con los bienes que integran el fideicomiso, o de títulos mixtos que otorguen derechos de crédito y derechos de participación sobre el remanente. Los certificados de

participación y títulos de deuda se registrarán por el Decreto-Ley N° 14.701, de 12 de setiembre de 1977, en lo pertinente.

El fideicomiso financiero podrá constituirse por acto unilateral, en el cual coincidan las personas del fideicomitente y del fiduciario, cuando se solicite autorización para ofrecer públicamente (artículo 28 de la presente ley) los certificados de participación, los títulos representativos de deudas o los títulos mixtos a los que refiere el inciso precedente.

Artículo 26.- (Fiduciarios).- Solamente podrán ser fiduciarios en un fideicomiso financiero las entidades de intermediación financiera o las sociedades administradoras de fondos de inversión. De acuerdo con los fideicomisos de que se trate y las modalidades de sociedades fiduciarias, la reglamentación podrá autorizar a estas últimas a actuar como fiduciarios en fideicomisos financieros. A los efectos de la presente disposición, no regirá la limitación del objeto de las sociedades administradoras de fondos de inversión dispuesta por la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996. Las instituciones de intermediación financiera regidas por el Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y sus modificativas, el Banco de la República Oriental del Uruguay y el Banco Hipotecario del Uruguay, podrán constituir o integrar, como accionistas, sociedades fiduciarias de acuerdo con el régimen de la presente ley.

Artículo 27.- (Títulos valores).- Los certificados de participación y títulos de deuda serán considerados títulos valores.

Artículo 28.- (Oferta pública).- La oferta pública de los certificados de participación, de los títulos de deuda y de los títulos mixtos a los que refiere el artículo precedente se regirá por las disposiciones de la Ley N° 16.749, de 30 de mayo de 1996.

Artículo 29.- (Regulación y sanciones).- La reglamentación podrá dictar normas a las que deberán sujetarse el fideicomiso y los fiduciarios financieros. También podrá requerir el establecimiento de garantías respecto de determinados fideicomisos financieros.

El Banco Central del Uruguay tendrá respecto de los fiduciarios financieros las facultades que le confiere el Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y sus modificativas.

En los casos en que se constaten transgresiones a la presente ley por parte de los fiduciarios financieros serán de aplicación, en lo pertinente, los artículos 20 a 24 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y sus modificativas.

Artículo 30.- (Transferencia de créditos).- En la transferencia de créditos que se integren a un fideicomiso financiero, será de aplicación, en lo que corresponda, lo dispuesto por los artículos 33 y 34 de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996, con la redacción dada por la Ley N° 17.202, de 24 de setiembre de 1999.

Artículo 31.- (Insuficiencia patrimonial).- En el caso de insuficiencia del patrimonio del fideicomiso financiero para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el fiduciario frente a terceros, o en el caso de otras contingencias que pudieran afectar dicho cumplimiento, el fiduciario citará a los tenedores de títulos de deuda a los efectos de que, reunidos en asamblea resuelvan sobre la forma de administración y liquidación del patrimonio.

La convocatoria de la asamblea de tenedores de títulos de deuda, se registrará por las normas de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, en cuanto a la convocatoria de asambleas de sociedades anónimas, en lo pertinente.

Artículo 32.- (Facultades de la Asamblea).- La asamblea de tenedores de títulos de deuda, por el voto conforme de tenedores de esos títulos, que representen por lo menos la mayoría absoluta del valor nominal de los títulos emitidos y en circulación, podrá resolver:

- a) Transferir el patrimonio fiduciario como unidad a otro fiduciario.
- b) Modificar el contrato de emisión, que podrá comprender la remisión de parte de las deudas o la modificación de los plazos o condiciones iniciales.
- c) Continuar la administración de los bienes fideicomitidos hasta la terminación del fideicomiso.
- d) Consagrar la forma de enajenación de los bienes del patrimonio fiduciario.
- e) Designar a la persona que tendrá a su cargo la enajenación del patrimonio como unidad de los bienes que lo conforman.
- f) Disponer cualquier otro tema relativo a la administración o liquidación del patrimonio fiduciario.
- g) La extinción del fideicomiso en los casos previstos en el artículo 31 de la presente ley.

Lo resuelto por la asamblea de tenedores de títulos de deuda será oponible al fideicomitente, fiduciario, beneficiario, y a los restantes tenedores de deuda que no hubieran adherido a la resolución.

Las asambleas de tenedores de títulos de deuda se registrarán por las disposiciones de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, en materia de asambleas de accionistas, en lo pertinente.

CAPITULO V

De la extinción del fideicomiso

Artículo 33.- (Causas de extinción).- Serán causas de extinción del fideicomiso:

- a) El cumplimiento total de sus fines o la imposibilidad absoluta de cumplirlos.
- b) El cumplimiento del plazo o condición resolutoria a que se hubiese sometido. En caso de no haberse dispuesto plazo alguno, el máximo legal será de treinta años. Toda condición resolutoria de que penda la restitución de los bienes fideicomitados que tarde más de treinta años en cumplirse, se tendrá por verificada llegado dicho plazo.
- c) El acuerdo entre fideicomitente y beneficiario, sin perjuicio de los derechos del fiduciario.
- d) La cesación en el pago de sus obligaciones, salvo el caso del fideicomiso financiero.
- e) La revocación del fideicomitente si se hubiere reservado expresamente esa facultad en el negocio de fideicomiso.
- f) Por resolución de la asamblea de tenedores de títulos de deuda, adoptada en los términos y condiciones establecidas en el artículo 32 de la presente ley.
- g) Por muerte o incapacidad judicialmente declarada del fiduciario, salvo que en el instrumento de constitución del fideicomiso se haya designado fiduciario sustituto.
- h) Por cualquier otra causa establecida expresamente en el instrumento de fideicomiso.

Producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario estará obligado a entregar los bienes fideicomitados al fideicomitente o a sus sucesores, salvo que otra cosa se hubiera establecido en el negocio constitutivo. En el caso de cese del fiduciario y si no se hubiere designado sustituto, dicha entrega operará de pleno derecho. Queda excluida de esta situación el caso de terminación del fideicomiso por cesación de pagos.

En ningún caso el fiduciario podrá adjudicarse, en forma definitiva, los bienes recibidos en fideicomiso.

Artículo 34.- (Derogación).- Se deroga el artículo 865 del Código Civil.

Artículo 35.- Sustitúyese el artículo 866 del Código Civil, que quedará redactado en los siguientes términos:

"866.- Serán nulas en la sustitución fideicomisaria las cláusulas que dispongan:
1°. Declarar inalienable todo o parte de la herencia.

- 2°. Llamar a un tercero al todo o parte de los que reste de la herencia al morir el heredero.
- 3°. La que, sin cumplir los requisitos previstos por la ley de fideicomiso, tenga por objeto dejar a uno el todo o parte de los bienes hereditarios, para que los aplique o invierta según las instrucciones que le hubiere comunicado el testador (artículo 783)".

CAPITULO VI

Disposiciones tributarias

Artículo 36.- (Sujeto Pasivo).- El fideicomiso será contribuyente de todos los tributos que gravan a las sociedades personales, en tanto se verifiquen a su respecto los restantes aspectos del hecho generador de los respectivos tributos.

El fideicomiso tendrá asimismo la calidad de responsable en iguales condiciones que las sociedades personales, siempre que se cumplan las hipótesis que dan origen a dicha responsabilidad.

Artículo 37.- (Igualdad de tratamiento).- Los fideicomisos del exterior, que no actúen en el país mediante sucursal, agencia o establecimiento, tendrán el mismo tratamiento tributario que el aplicable a los fideicomisos locales.

Artículo 38.- (Remuneración de los fiduciarios).- Los ingresos que obtengan los fiduciarios como remuneración de su actividad tendrán el mismo tratamiento tributario que el asignado a las sociedades administradoras de fondos de inversión.

Artículo 39.- (Fideicomisos financieros).- A los efectos de fomentar el crédito destinado a la inversión, otórgase a los fideicomisos financieros cuyos certificados de participación en el dominio fiduciario, de deuda o títulos mixtos, se emitan mediante oferta pública, los siguientes beneficios:

- a) Exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales a la parte enajenante y a la parte adquirente, por las transmisiones de bienes realizadas en cumplimiento del fideicomiso.
- b) Exoneración de los Impuestos al Valor Agregado, de Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social y Específico Interno, a las enajenaciones de bienes y derechos realizadas en virtud del referido cumplimiento.

El Poder Ejecutivo establecerá la forma en que habrá de hacerse efectiva la oferta pública a efectos de gozar de la exoneración y de lo dispuesto en el artículo 41 de la presente ley.

Artículo 40.- (Fideicomisos financieros).- Los fideicomisos financieros cuyo objeto específico de inversión consista en conjuntos homogéneos o análogos de derechos de crédito cuya titularidad sea transferida al fideicomiso, tendrán el tratamiento tributario establecido para los fondos de inversión cerrados de crédito.

El Poder Ejecutivo podrá fijar tasas diferenciales del Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias en relación a aquellos créditos que no hubieran estado gravados por dicho impuesto antes de su cesión al fideicomiso.

Artículo 41.- (Certificados de participación y títulos de deuda).- Los certificados de participación y títulos de deuda emitidos mediante oferta pública, tendrán a efectos fiscales el mismo tratamiento respectivamente que las acciones que cotizan en Bolsa y que las obligaciones emitidas mediante suscripción pública y cotización bursátil.

Artículo 42.- (Fideicomisos de garantía).- Exonérase del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales a las transmisiones de bienes gravadas realizadas en cumplimiento de un fideicomiso de garantía.

Dicha exoneración se aplicará a la parte enajenante y a la parte adquirente, tanto en la transmisión original de los bienes al fideicomiso, como en la transmisión posterior al fiduciante.

Artículo 43.- (Exoneraciones a los fideicomisos en general).- No será aplicable a los fideicomisos el Impuesto de Control a que refiere el Título 16 del Texto Ordenado 1996, ni el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio correspondiente al hecho generador a que refiere el literal D) del artículo 2° del Título 4 del Texto Ordenado 1996.

Facúltase al Poder Ejecutivo a:

- a) Otorgar a los fideicomisos que no cumplan con la condición de oferta pública a que refiere el artículo 39 de la presente ley, los beneficios fiscales establecidos en los literales a) y b) de dicho artículo. Esta facultad será otorgada en relación a actividades productivas por sectores específicos.
- b) Exonerar de tributos a los fideicomisos cuyos beneficiarios sean los Fondos de Ahorro Previsional, la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. En este caso se requerirá que los títulos de participación en el dominio fiduciario, de deuda o mixtos, sean nominativos y la exoneración se aplicará durante el período en que el fondo de ahorro previsional o las Cajas antes dichas sean titulares de los mismos y en la proporción que guarden con el monto total de títulos emitidos, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

- c) Exonerar de tributos en iguales condiciones que las establecidas en el literal anterior a los fideicomisos cuyos beneficiarios sean entidades aseguradoras, siempre que los títulos nominativos de participación en el dominio fiduciario, de deuda o mixtos, integren los activos respaldantes de las obligaciones previsionales a que refieren los artículos 54 y siguientes de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

Artículo 44.- (Responsabilidad tributaria).- El fiduciario responderá por las obligaciones tributarias del fideicomiso, en los términos del artículo 21 del Código Tributario.

Artículo 45.- Se declara que las citas a las disposiciones del Texto Ordenado 1996 se refieren a las normas legales que le dan origen.

Artículo 46.- La presente ley entrará en vigencia a los treinta días de su promulgación.

En el mismo plazo el Poder Ejecutivo procederá a reglamentarla.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de octubre de 2003. JORGE CHAPPER, Presidente; HORACIO D. CATALURDA, Secretario.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 27 de octubre de 2003

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

BATTLE, ISAAC ALFIE, LEONARDO GUZMAN, SANTIAGO PEREZ DEL CASTILLO.

LEY N° 17.823**7 de setiembre de 2004**

APRUÉBASE EL CÓDIGO DE
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.
DERÓGANSE Y MODIFÍCANSE
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL

CAPITULO VII**I -De la filiación**

ARTICULO 23°.- (Derecho a la filiación).- Todo niño y adolescente tiene derecho a conocer quiénes son sus padres.

ARTICULO 24°.- (Derecho a la protección).- Todo niño y adolescente tiene derecho, hasta la mayoría de edad, a recibir de sus padres y responsables la protección y cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral y es deber de éstos el proporcionárselos.

ARTICULO 25°.- (Derecho a la identidad).- Sin perjuicio de las normas del Registro de Estado Civil, el recién nacido deberá ser identificado mediante las impresiones plantar y digital acompañadas por la impresión digital de la madre.

Todas las maternidades públicas y privadas deberán llevar un registro para cumplir con lo dispuesto en el inciso anterior, al momento de realizarse el parto. Se le otorgará copia a la madre y se enviará otra al Registro de Estado Civil.

Los médicos o parteros que asistan nacimientos fuera de la maternidad, deberán realizar el registro de igual forma y, en caso de imposibilidad, anotarlo en la historia clínica.

En este último caso y fuera de las hipótesis señaladas anteriormente, las impresiones digital y plantar del recién nacido se tomarán al momento de hacerse la inscripción en el Registro de Estado Civil.

ARTICULO 26°.- (Derecho al nombre y apellidos familiares).- Todo niño tiene derecho, desde su nacimiento, a ser inscripto con nombre y apellido.

ARTICULO 27°.- (Del nombre).-

- 1) El hijo habido dentro del matrimonio llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre.
- 2) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por ambos padres, llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre.
- 3) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por su padre llevará como primer apellido el de éste y como segundo el de la mujer que surja acreditada como su madre.
- 4) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por su madre llevará los dos apellidos de ésta. Si la madre no tuviere segundo apellido el niño llevará como primero el de su madre biológica seguido de uno de uso común.
- 5) El hijo habido fuera del matrimonio que no es inscripto por su padre ni por su madre, llevará igualmente en segundo lugar el apellido de su madre, en caso de ser ésta conocida y en primer lugar uno de uso común.
- 6) El hijo habido fuera del matrimonio cuyos padres se desconocen, inscripto de oficio, llevará dos apellidos de uso común seleccionados por el Oficial del Registro de Estado Civil interviniente.
- 7) Los apellidos de uso común serán sustituidos por el del padre o la madre que reconozca a su hijo o sean declarados tales por sentencia, debiendo recabarse a tales efectos la voluntad del reconocido que haya cumplido los trece años de edad (artículo 32°).
- 8) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por un familiar del niño, llevará dos apellidos, como primer apellido uno de uso común, seleccionado por el familiar interviniente y en segundo lugar el de la madre conocida.
- 9) En los casos de legitimación adoptiva, el hijo llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre legitimantes. La sentencia que autorice la legitimación adoptiva dispondrá el o los nombres de pila con que será inscripto el legitimado.
- 10) En los casos de adopción simple realizada por un matrimonio, el o los apellidos del adoptado serán sustituidos por el del padre y madre adoptantes. Si la adopción simple fuere realizada por un hombre, el adoptado sustituirá su primer apellido por el del adoptante. Si la adopción simple fuere realizada por una mujer, el adoptado sustituirá

su segundo apellido por el de la adoptante. No obstante, si se tratare de la adopción de un adolescente, podrá convenir con el o los adoptantes si mantendrá sus apellidos de origen o sustituirá alguno de ellos por el del o de los adoptantes.

En la sentencia deberá dejarse constancia de la decisión respecto de los apellidos del adoptado, la que será anotada al margen de la partida de nacimiento.

ARTICULO 28°.- (Derecho y deber a reconocer los hijos propios).- Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuere su estado civil, de reconocer a sus hijos.

Derógase el inciso tercero del artículo 227 del Código Civil.

Modifícase la redacción del inciso cuarto del artículo 227 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma: "No se admitirá el reconocimiento de hijos naturales, aún después de disuelto el matrimonio, cuando ese reconocimiento se pretenda hacer a favor de una persona que tenga la posesión notoria de hijo legítimo, sin perjuicio de las acciones que, legalmente, se admiten para contestar esa filiación".

Entiéndese, en todo el ordenamiento jurídico, las expresiones "hijo legítimo" e "hijo natural" como "hijo habido dentro del matrimonio" e "hijo habido fuera del matrimonio", respectivamente.

ARTICULO 29°.- Sustitúyense los artículos 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 y 221 del Código Civil, los que quedarán redactados de la siguiente manera: "ARTICULO 214.- Viviendo los cónyuges de consuno, y sin perjuicio de la prueba en contrario, la ley considera al marido padre de la criatura concebida por su esposa durante el matrimonio.

Las personas legitimadas por la ley, podrán destruir esta presunción acreditando que el vínculo biológico de paternidad no existe.

ARTICULO 215.- Se considera concebida dentro del matrimonio, a la criatura nacida fuera de los ciento ochenta días después de contraído éste y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución. Esta presunción es relativa.

ARTICULO 216.- Se considera, asimismo, al marido padre de la criatura nacida de su mujer, dentro de los ciento ochenta días siguientes al matrimonio, siempre que aquél haya conocido el embarazo antes de contraer matrimonio o haya admitido su paternidad expresa o tácitamente por cualquier medio

inequívoco. Fuera de estos casos, bastará al marido con negar judicialmente la paternidad de la criatura habida por su mujer, de lo que se le dará conocimiento a ésta. Si la madre se opusiera surgirá el contradictorio.

ARTICULO 217.- La presunción de paternidad del marido que se configura conforme a lo dispuesto por los artículos 214, 215 y 216 de este Código, podrá ser libremente impugnada por el marido, el hijo o los herederos de uno u otro, dentro de los plazos y en las condiciones que se dispone en los artículos siguientes.

ARTICULO 218.- El marido podrá ejercer la acción de desconocimiento de paternidad a efectos de impugnar la presunción de legitimidad que hubiera surgido, dentro del plazo de un año contado desde que tomó conocimiento del nacimiento de la criatura cuya paternidad la ley le atribuye. Sus herederos podrán continuar la acción intentada por éste, o iniciar la misma, si el marido hubiera muerto dentro del plazo hábil para deducirla. Los herederos dispondrán del plazo de un año a contar desde el fallecimiento del marido.

ARTICULO 219.- Hallándose el hijo en posesión del estado filiatorio legítimo, tenga o no su título, podrá impugnar la presunción de paternidad, actuando debidamente representado por un curador "ad litem", dentro del plazo de un año a contar desde el nacimiento. Si la acción no hubiera sido intentada durante la menor edad del hijo, podrá ejercerla éste dentro del plazo de un año a partir de su mayoría. En caso de fallecer el hijo dentro del plazo hábil para interponer la demanda de impugnación de la paternidad o durante su minoría de edad sin haberla interpuesto, la acción podrá ser ejercida por los herederos de éste dentro del plazo que aquél contaba.

ARTICULO 220.- De faltar la posesión de estado de filiación legítima aun cuando exista su título, la acción de desconocimiento de paternidad podrá ser intentada indistintamente por la madre, por un curador "ad litem" que actúe en representación del hijo, por el padre biológico que manifieste su ánimo de reconocerlo o por el hijo al llegar a la mayoría de edad. La madre y el padre biológico no podrán accionar una vez que su hijo haya llegado a la mayoría de edad. En ausencia de posesión de estado de filiación legítima, la acción será imprescriptible para el hijo.

En los casos en que este artículo, el precedente y el inciso cuarto del artículo 227 se refieren a posesión de estado, no se requiere el transcurso del tiempo reclamado por el artículo 47 de este Código.

El acogimiento de la acción deducida por la madre o por el padre biológico, dejará al hijo emplazado en el estado civil de hijo natural del demandante.

ARTICULO 221.- El proceso no será válidamente entablado si no intervienen en el mismo, en calidad de sujetos activos o pasivos, en su caso, el marido, la madre y el hijo de ésta".

ARTICULO 30°.- (Capacidad de los padres para reconocer a sus hijos).- Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuere su estado civil y edad, a reconocer a su hijo.

No obstante, las mujeres menores de doce años y los varones menores de catorce no podrán realizar reconocimientos válidos sin aprobación judicial, previa vista del Ministerio Público.

En los casos de padres niños o adolescentes no casados, el Juez decidirá a quién se le atribuyen los derechos y deberes inherentes a la tutela, otorgando preferencia a los abuelos que convivan con el padre que reconoce y el reconocido.

Previo a todas las decisiones a que refiere el inciso anterior que requieran autorización judicial, se deberá oír al padre o a la madre que haya reconocido al hijo y que aún no tenga dieciocho años cumplidos de edad.

La patria potestad será ejercida en forma plena por ambos padres, a partir de que éstos cumplan dieciocho años.

ARTICULO 31°.- (Formalidades del reconocimiento).- El reconocimiento puede tener lugar:

- 1) Por la simple declaración formulada ante el Oficial del Registro de Estado Civil por el padre o la madre biológicos en oportunidad de la inscripción del nacimiento del hijo, como hijo habido fuera del matrimonio, suponiendo la sola inscripción reconocimiento expreso.
- 2) Por testamento, en cuyo caso el reconocimiento podrá ser expreso o implícito.
- 3) Por escritura pública.

ARTICULO 32°.- (Voluntad del hijo).- Cuando el hijo fuere reconocido luego de haber cumplido trece años de edad, tiene derecho a expresar en forma ante el Oficial del Registro de Estado Civil su voluntad de seguir usando los apellidos con los que hasta entonces era identificado. Dicha expresión de voluntad será anotada al margen de su partida de nacimiento.

ARTICULO 33°.- (Inscripción tardía).- El derecho consagrado en el artículo anterior, también rige para los supuestos de inscripciones tardías de hijos mayores de trece años.

Tratándose de inscripción tardía de hijos habidos dentro del matrimonio, basta con la presencia de uno o de ambos padres, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes.

II -De la tenencia del niño y adolescente

ARTICULO 34°.- (Tenencia por los padres).-

- 1) Cuando los padres estén separados, se determinará de común acuerdo cómo se ejercerá la tenencia (artículo 177 del Código Civil).
- 2) De no existir acuerdo de los padres, la tenencia la resolverá el Juez de Familia, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento.

ARTICULO 35°.- (Facultades del Juez de Familia).- En caso de no existir acuerdo de los padres, el Juez resolverá, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

- A) El hijo deberá permanecer con el padre o la madre con quien convivió el mayor tiempo, siempre que lo favorezca.
- B) Preferir a la madre cuando el niño sea menor de dos años, siempre que no sea perjudicial para él.
- C) Bajo su más seria responsabilidad funcional, el Juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente.

ARTICULO 36°.- (Tenencia por terceros).-

- 1) Cualquier interesado puede solicitar la tenencia de un niño o adolescente siempre que ello tenga como finalidad el interés superior de éste. El Juez competente, bajo la más seria responsabilidad funcional, deberá evaluar el entorno familiar ofrecido por el interesado.
- 2) La persona que ejerce la tenencia de un niño o adolescente está obligada a brindarle la protección y cuidados necesarios para su desarrollo integral.
- 3) La persona que no se sienta capacitada para proseguir con la tenencia, deberá ponerlo en conocimiento del Juez de Familia, quien resolverá la situación del niño o adolescente.

ARTICULO 37°.- (Procedimiento).- Todas las pretensiones relativas a la tenencia, recuperación de tenencia o guarda de los niños o adolescentes, se

regularán por el procedimiento extraordinario consagrado en los artículos 346, 347, 349 y 350 del Código General del Proceso. La ratificación de tenencia se tramitará por el procedimiento voluntario (artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso). Es Juez competente para conocer en dichas pretensiones, el del domicilio del niño o adolescente.

III - Visitas

ARTICULO 38°.- (Principio general).- Todo niño y adolescente tiene derecho a mantener el vínculo, en orden preferencial, con sus padres, abuelos y demás familiares y consecuentemente, a un régimen de visitas con los mismos. Sin perjuicio que el Juez competente basado en el interés superior del niño o adolescente, incluya a otras personas con las que aquél haya mantenido vínculos afectivos estables.

ARTICULO 39°.- (Determinación de las visitas).-

- 1) La determinación de las visitas se fijará de común acuerdo entre las partes.
- 2) A falta de acuerdo, o que se impida o limite el ejercicio del derecho mencionado, el Juez de Familia fijará el mismo. Se garantizará el derecho del niño o adolescente a ser oído, teniendo en cuenta su opinión, la cual se recabará en un ámbito adecuado.

ARTICULO 40°.- (Incumplimiento en permitir las visitas).- La parte que está obligada a permitir las visitas o entregar al niño o adolescente de acuerdo al régimen establecido, y se negara en forma inmotivada, habilitará a que la otra parte acuda personalmente ante el Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces en donde este no exista, el cual dispondrá de inmediato la comparecencia de la parte incumplidora, siendo notificada por la Policía. En caso de incomparecencia, podrá ser conducida por la fuerza pública, si así lo dispusiere el Juez.

El Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces, escuchará a ambas partes y de ser inmotivada la reticencia de la parte obligada a permitir las visitas, dispondrá -apreciando las circunstancias del caso, la edad y especialmente los intereses del niño o adolescente- la entrega del mismo a la parte que lo reclama, la cual deberá reintegrarlo según lo acordado, salvo que el Juez de Familia entienda que deberá conservarlo el solicitante, hasta tanto resuelva el Juez de la causa.

ARTICULO 41°.- (Régimen de visitas definitivo).- El día hábil inmediato siguiente, el Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces en donde este no exista dará cuenta al Juez de Familia que intervino en la fijación del régimen de visitas, remitiéndole los antecedentes, quien resolverá en definitiva sobre el mantenimiento o no del régimen fijado.

A tales efectos, deberá convocar a las partes a una audiencia, la cual deberá celebrarse en un plazo no mayor a los tres días hábiles de recibidos los antecedentes. En dicha audiencia será preceptiva la presencia del Ministerio Público y Fiscal, así como la asistencia letrada.

ARTICULO 42°.- (Incumplimiento en realizar las visitas).- Si la parte a cuyo favor se establece un régimen de visitas, no cumpliere con el mismo, podrá la otra parte acudir al Juez de Familia competente, explicando la situación y la repercusión que la falta de cumplimiento por parte del obligado tiene sobre sus hijos.

En tal caso se aplicará lo dispuesto en el inciso primero del artículo 40 y el artículo 41.

ARTICULO 43°.- (Sanción por incumplimiento).- El incumplimiento grave o reiterado del régimen de visitas homologado o fijado judicialmente podrá originar la variación de la tenencia si ello no perjudicara el interés del niño o adolescente, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que fije el Juez a instancia de parte o de oficio, cuyo producido será en beneficio de aquél.

El Juez deberá hacer saber a la parte incumplidora que el desatender las necesidades afectivas de los hijos puede dar lugar a la pérdida de la patria potestad y al delito previsto en el artículo 279 B del Código Penal.

ARTICULO 44°.- (Principio general de procedimiento).- Todas las pretensiones que conciernen al régimen de visitas, se regularán por el procedimiento extraordinario consagrado en los artículos 346, 347, 349 y 350 del Código General del Proceso.

Es Juez competente para conocer en dichas pretensiones, el del domicilio del niño o adolescente.

CAPITULO VIII DE LOS ALIMENTOS

ARTICULO 45°.- (Concepto de deber de asistencia familiar).- El deber

de asistencia familiar está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma.

Bajo la denominación de alimentos, se alude en este Código a la asistencia material.

ARTICULO 46°.- (Concepto de alimentos).- Los alimentos están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y recreación.

También se consideran alimentos los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del posparto.

Las prestaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades de los beneficiarios.

ARTICULO 47°.- (Forma de prestación de los alimentos).- Las prestaciones alimentarias serán servidas en dinero o en especie, o de ambas formas, en atención a las circunstancias de cada caso.

Todas las prestaciones se servirán en forma periódica y anticipada.

El obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para los beneficiarios.

El Juez apreciará si corresponde dar trámite a la solicitud de rendición de cuentas.

ARTICULO 48°.- (De la vigencia de la prestación alimentaria).- La prestación alimentaria se debe desde la interposición de la demanda.

Tratándose de aumento o reducción de la prestación, la misma surtirá efecto desde la interposición de la demanda, salvo que el Juez, apreciando las circunstancias del caso, disponga que se aplique desde que la sentencia quede ejecutoriada.

La convenida extrajudicialmente, se debe desde la fecha pactada.

ARTICULO 49°.- (Alimentos provisionales).- El Juez al proveer sobre la demanda, y atendidas las circunstancias invocadas, fijará alimentos provisionales.

ARTICULO 50°.- (Beneficiarios de la obligación alimentaria).- Son acreedores de la obligación alimentaria los niños y adolescentes así como los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno que no dispongan -en el último caso- de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

ARTICULO 51°.- (Personas obligadas a prestar alimentos y orden de preferencia).- Los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o los adoptantes. Para el caso de imposibilidad o insuficiencia del servicio pensionario, se prestarán subsidiariamente de acuerdo al siguiente orden:

- 1) Los ascendientes más próximos, con preferencia los del progenitor obligado.
- 2) El cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto conviva con el beneficiario.
- 3) El concubino o la concubina, en relación al o los hijos del otro integrante de la pareja, que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos conformando una familia de hecho.
- 4) Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de doble vínculo sobre los de vínculo simple.

En los casos previstos en los numerales 1) y 4), si concurrieren varias personas en el mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a la posibilidad de cada obligado.

ARTICULO 52°.- (Caracteres de la obligación alimentaria).-

- 1) Intrasmisibilidad e irrenunciabilidad. El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni renunciarse, ni venderse o cederse de modo alguno.
- 2) Inembargabilidad e incompensabilidad. Las pensiones alimenticias no son embargables.

El deudor de alimentos no puede oponer al demandante, en compensación, lo que el demandante le deba, excepto que lo adeudado refiera a la pensión alimenticia objeto del litigio.

- 3) Imprescriptibilidad.

El derecho a pedir alimentos es imprescriptible.

ARTICULO 53°.- (Pensiones alimenticias atrasadas).- No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas

podrán renunciarse, y el derecho a demandarlas, podrá transmitirse por causa de muerte.

ARTICULO 54°.- (Transacción sobre alimentos futuros).- La transacción sobre alimentos futuros no surtirá efectos sino después de ser aprobada judicialmente.

ARTICULO 55°.- (Modificación de la obligación alimentaria).- Los alimentos podrán ser objeto de aumento o de reducción, si se modifica la situación económica del deudor o las necesidades del acreedor. Se tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

ARTICULO 56°.- (Extinción de la obligación alimentaria).- La obligación de alimentos se extingue y su cese debe ser judicialmente decretado en los siguientes casos:

- 1) Cuando se dejen de cumplir los supuestos establecidos en el artículo 50.
- 2) Cuando el deudor se halla en imposibilidad de servirlos.
- 3) Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de la asignación forzosa que grava la masa de la herencia.
- 4) Cuando fallece el alimentario, en cuyo caso la obligación se extiende a los gastos funerarios, siempre que no puedan cubrirse de otra manera.

En el caso previsto en el numeral 1) cuando se trate de un beneficiario que cumpla veintiún años de edad, bastará que el alimentante se presente ante el Juez Letrado de Familia que intervino en la fijación de alimentos solicitando el cese de la pensión, agregando la partida de nacimiento del beneficiario, y sustanciándose con traslado a la contraparte por el plazo perentorio de veinte días.

Transcurrido el plazo sin que se evacue el traslado, se decretará el cese de la pensión alimenticia, notificando a la otra parte.

Si se dedujere oposición se tramitará por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Los casos de los numerales 2) a 4) se tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

ARTICULO 57°.- (Omisión injustificada de los alimentos).- Cuando el obligado judicialmente a servir alimentos de acuerdo a las disposiciones

de este Código que, habiendo sido intimado judicialmente, omitiera prestarlos sin causa justificada, el Juez de Familia dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo Penal que corresponda, a los efectos previstos por el artículo 279 A. del Código Penal.

El Juez Letrado en lo Penal deberá comunicar al Juez de Familia las resultancias de las actuaciones llevadas a cabo por dicha sede.

ARTICULO 58°.- (Concepto de ingresos).- A los efectos de este Código, se entiende por sueldo o haberes, todo ingreso de cualquier naturaleza, periódico o no, que se origine en la relación laboral, arrendamiento de obras o de servicios o derive de la seguridad social. No se computarán por ingresos, a los efectos de la pensión alimenticia, lo que perciba el obligado a la prestación por concepto de viáticos sujetos a rendición de cuentas. Cuando los viáticos no estén sujetos a rendición de cuentas se computarán a efectos de la pensión alimenticia en un 35% (treinta y cinco por ciento).

Quedan asimilados a lo dispuesto en el inciso anterior, los ingresos provenientes de retiros periódicos por concepto de utilidades, beneficios o ganancias, cobro de intereses o dividendos. En general, todo lo que perciba el deudor de alimentos por su trabajo o su capital.

ARTICULO 59°.- (Límite de la retención por alimentos).- Podrá retenerse mensualmente hasta un 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos cuando así lo justifique el número de hijos y las necesidades de los mismos. La resolución del Juez deberá ser fundada y será apelable sin efecto suspensivo.

ARTICULO 60°.- (Medidas asegurativas de la prestación alimentaria).- En el caso de prestar el alimentante servicios retribuidos por particulares o empresas, éstas tendrán la obligación de informar a la Sede que así lo solicite todo lo relativo a los ingresos de aquél dentro del plazo de quince días de recibido el oficio por el que se le reclama. El incumplimiento de esta obligación hará pasibles a los particulares o empresas a la condena en astreintes. La obligación de informar existe aún cuando el alimentante no integre los cuadros funcionales o planilla de trabajo, pero tuviese con la empresa o particular cualquier relación patrimonial o beneficio económico. Cuando el alimentante prestase servicios retribuidos por particulares o empresas y se negare a cumplir la obligación de alimentos,

se ordenará a aquellos que efectúen la retención correspondiente a los sueldos o haberes respectivos.

Para hacer efectiva la contribución señalada por el Juez, bastará la orden librada por oficio al habilitado en la oficina en que preste servicios el alimentante, y la empresa o el patrón responderán personal, solidaria e ilimitadamente del pago, si injustificadamente no cumplieran la orden recibida.

ARTICULO 61°.- (Obstáculos al cumplimiento de la obligación alimentaria).- El empleador o empresario que intencionalmente ocultare, total o parcialmente los ingresos, sueldos o haberes del obligado, será considerado incurso en el delito de estafa.

En el mismo delito incurrirá todo aquel que obstaculizare o impidiere el correcto servicio de la obligación alimentaria dispuesta judicialmente, o simulare créditos contra el obligado, o de cualquier manera colaborare intencional y fraudulentamente, en la reducción del patrimonio efectivo del alimentante.

El Juez de Familia dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo Penal que corresponda.

ARTICULO 62°.- (Prohibición al alimentante de ausentarse del país sin dejar garantías suficientes).- Iniciado el juicio de alimentos, el demandado no podrá ausentarse del país sin dejar garantías suficientes, siempre que así lo solicitare el actor.

ARTICULO 63°.- (Procedimiento).- El proceso de alimentos se rige por las normas previstas para el proceso extraordinario en el Código General del Proceso (artículos 346 y 347, numeral 2) del artículo 349 y artículo 350 del Código General del Proceso).

ARTICULO 64°.- (Competencia).- El Juez competente para conocer en el juicio por alimentos, es el del domicilio del niño o adolescente o el del demandado, a elección del actor .

CAPITULO XI LEGITIMACION ADOPTIVA

ARTICULO 144°.- (Adoptados).-

1) Se permite la legitimación adoptiva a favor de:

A) Los niños o adolescentes abandonados o huérfanos de padre y madre, o pupilos del Estado, o hijos de padres desconocidos o del hijo o hijos reconocidos por uno de los adoptantes.

B) Los niños o adolescentes abandonados por uno de sus progenitores legítimos, cuando fuere solicitada por el padre o madre que haya mantenido la patria potestad, conjuntamente con el cónyuge con el que contrajo nuevo matrimonio.

La legitimación adoptiva prevista en este literal sólo podrá llevarse a cabo una sola vez, respecto al niño o adolescente.

- 2) Cuando la legitimación adoptiva se pretendiere para dos o más niños o adolescentes simultáneamente, no será obstáculo la circunstancia de que mediasen menos de ciento ochenta días entre sus respectivos nacimientos.
- 3) En caso de existir hermanos en situación de abandono, se propenderá a su integración conjunta en una familia adoptiva.

En todos los casos previstos en este Código, la condición de abandono se acreditará únicamente por sentencia ejecutoriada, debiendo seguirse los procedimientos establecidos en el artículo 133 y concordantes.

ARTICULO 145°.- (Adoptantes).- Pueden solicitar la legitimación adoptiva:

- 1) Los cónyuges, mayores de veinticinco años, con quince años más que el niño o adolescente y que lo hubieran tenido bajo su guarda o tenencia por un término no inferior a un año, que computen por lo menos cuatro años de matrimonio, pudiéndose considerar en su caso el tiempo de concubinato previo al mismo, siempre que éste hubiera sido estable, singular y público, compartiendo la vida en común.

Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgarla aun cuando alguno de los cónyuges o ambos no alcanzaren tal diferencia de edad con el adoptado reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste puede ser hijo de los adoptantes o, en casos excepcionales, y si no mediare oposición del Ministerio Público, a pesar de que uno o los dos cónyuges no fueren mayores de veinticinco años de edad o no completaren los cuatro años de matrimonio a que refiere el inciso anterior.

- 2) El viudo o viuda y los esposos divorciados siempre que medie la conformidad de ambos y cuando la guarda o tenencia del niño o adolescente hubiera comenzado durante el matrimonio y se completara después de la disolución de éste.

- 3) No es obstáculo para la legitimación adoptiva la existencia de una previa adopción simple realizada por los mismos peticionantes.

ARTICULO 146°.- (Procedimiento).-

- 1) La legitimación adoptiva deberá ser promovida ante el Juzgado Letrado de Familia del domicilio del adoptante.

Se seguirá el procedimiento voluntario previsto en los artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso, notificándose al Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

- 2) En caso de oposición a la legitimación adoptiva el proceso será contencioso. Se aplicarán las normas del Código General del Proceso referidas al proceso extraordinario (artículos 346 y siguientes).

El Juez diligenciará las pruebas ofrecidas y las que juzgue convenientes interrogando a los peticionantes y al niño o adolescente en su caso.

- 3) La tramitación será reservada en cuanto a terceros, no así respecto al niño o adolescente interesado quien tendrá derecho a acceder al expediente y a sus antecedentes cuando tuviere dieciocho años de edad.
- 4) Previamente al dictado de la sentencia, será oído preceptivamente el Ministerio Público.

ARTICULO 147°.- (Procedencia).- La legitimación adoptiva sólo se otorgará por justos motivos y existiendo conveniencia para el niño o adolescente.

Cuando el niño o adolescente tuviere derechos cuyo dominio se acredite por documento público o privado, el Juez dispondrá que el Actuario inserte en el mismo constancia breve que exprese el cambio de nombre del titular, de lo que tomará nota el Registro respectivo cuando correspondiere.

ARTICULO 148°.- (Sentencia).- Con el testimonio de la sentencia ejecutoriada que autorice la legitimación adoptiva, la parte solicitante efectuará la inscripción del niño o adolescente en la Dirección General del Registro de Estado Civil como hijo legítimo inscripto fuera de término.

En la partida correspondiente no se hará mención alguna del juicio y su texto será el corriente en dicho instrumento.

Se realizará también la anotación pertinente en la libreta de organización de la familia de modo idéntico a la de los hijos habidos dentro del matrimonio.

El testimonio de la sentencia se archivará en forma, dejándose constancia de haberse efectuado la inscripción mencionada.

Toda la tramitación y la expedición de partidas será gratuita.

ARTICULO 149°.- (Efectos).-

1) Realizada la legitimación adoptiva, caducarán los vínculos de filiación anterior del niño o adolescente a todos sus efectos, con excepción de los impedimentos previstos en el artículo 91 del Código Civil.

Deberá hacerse constar dicha caducidad en el acta de inscripción original del niño o adolescente.

2) La legitimación adoptiva es irrevocable, aunque posteriormente nazcan hijos propios de uno o de ambos legitimantes.

La legitimación adoptiva tendrá efectos constitutivos sobre el estado civil del niño o adolescente objeto de la misma, quien se reputará en adelante, con los mismos derechos y deberes que si hubiera nacido del matrimonio legitimante.

ADOPCION INTERNACIONAL

ARTICULO 150°.- (Principio general).- En defecto de convenios internacionales ratificados por la República, las adopciones internacionales se regularán por las disposiciones de este Capítulo.

Se considera adopción internacional a la que se lleva a cabo por matrimonios con domicilio o residencia habitual en el extranjero, con relación a niños o adolescentes con domicilio o residencia habitual en la República.

ARTICULO 151°.- (Preferencia).- El Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y las demás autoridades con competencia en materia de adopción, deberán dar preferencia a la ubicación de los niños o adolescentes adoptables en familias u hogares que los requieran y vivan dentro del territorio nacional.

ARTICULO 152°.- (Requisitos).- Las adopciones internacionales se constituirán con la intervención preceptiva del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), quien una vez obtenidos todos los antecedentes presentará en el plazo de sesenta días un informe pormenorizado, teniendo asimismo los demás requisitos previstos en los artículos 133, 145 y 154 de este Código.

El no pronunciamiento en plazo se tendrá por aceptación.

ARTICULO 153°.- (Residencia).- La adopción internacional tendrá el mismo efecto que la legitimación adoptiva, pudiendo acceder a ella cónyuges cuya unión matrimonial no sea inferior a cuatro años.

Sólo se realizará con aquellos países cuyas normas en materia de adopción y protección de niños y adolescentes tengan una razonable equivalencia con las de nuestro país.

Los adoptantes deberán residir y convivir con el niño o adolescente en el territorio nacional, aun en forma alternada, por un plazo de seis meses. Por razones fundadas y teniendo en cuenta el interés superior del niño, el plazo podrá ser reducido por el Juez competente.

ARTICULO 154°.- (Documentos necesarios).- Con la solicitud de la adopción se deberá presentar la documentación justificativa de las condiciones físicas, morales, económicas y familiares de los solicitantes. Los informes y documentos al respecto deberán tramitarse por medio de las autoridades centrales del país de los adoptantes y de la República.

ARTICULO 155°.- (Competencia).- Serán competentes para el otorgamiento de la adopción internacional los Jueces de Familia del domicilio del adoptado, quienes procederán de acuerdo a los trámites del juicio extraordinario del Código General del Proceso (artículo 346). La apelación se regirá por la misma normativa (artículo 347).

Los solicitantes deberán comparecer a la audiencia preliminar en forma personal, preceptivamente. También deberán hacerlo cuando el Tribunal, en forma fundada, lo considere conveniente.

El impedimento fundado de los solicitantes a concurrir personalmente a la audiencia hará que el Juzgado fije otra, pero en ningún caso se permitirá la representación por apoderado.

Hasta tanto no haya recaído sentencia firme, para que el niño o adolescente pueda salir del país deberá hacerlo en compañía de uno de los solicitantes, contando con autorización judicial, la que no podrá concederse sin intervención preceptiva del Ministerio Público, si fundadamente se probare la integración del niño.

ARTICULO 156°.- (Juicios de anulación).- Corresponde a los Jueces de Familia que autorizaron la adopción, la tramitación de los juicios de anulación, los que serán resueltos teniendo en cuenta el interés superior del niño o adolescente. El trámite se regirá por el procedimiento extraordinario del Código General del Proceso (artículos 346 y 347).

ARTICULO 157°.- (Nacionalidad).- Los niños y adolescentes de nacionalidad

oriental adoptados por extranjeros domiciliados en el exterior mantienen su nacionalidad, sin perjuicio de adquirir, además, la de los adoptantes.

CONTROL ESTATAL DE LAS ADOPCIONES

ARTICULO 158°.- (Control).- El Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), a través de sus servicios especializados, es el organismo encargado de proponer, ejecutar y fiscalizar la política a seguir en materia de adopciones.

Para el desarrollo de programas de adopción, el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) podrá autorizar el funcionamiento de instituciones privadas con personalidad jurídica y especialización en la materia.

ARTICULO 159°.- (Cometidos del equipo técnico).- Todos los servicios e instituciones que desarrollen programas de adopción deberán contar con equipo técnico interdisciplinario que tendrá como cometidos:

- A) Asesorar a los interesados en adoptar niños o adolescentes y analizar los motivos de su solicitud.
- B) Evaluar las condiciones de salud, psíquicas, sociales y jurídicas de los solicitantes y las posibilidades de convivencia.
- C) Llevar un Registro de Interesados en Adoptar, ordenado cronológicamente según fecha de solicitud, en el que conste el informe técnico a que refiere el literal anterior.
- D) Seleccionar de dicho Registro respetando estrictamente el orden de inscripción, los posibles padres adoptivos, ante la solicitud formulada por el Juzgado competente, en el caso de un niño o adolescente en condiciones de ser adoptado.

El orden sólo podrá ser alterado por las necesidades del niño o adolescente, debidamente fundadas. En todos los casos el niño o adolescente deberá ser oído preceptivamente.

- E) Orientar y acompañar el proceso de integración familiar.
- F) Asesorar al Juez toda vez que le sea requerido su informe.

DEL REGISTRO DE ADOPCIONES

ARTICULO 160°.- (Registro General de Adopciones).- El Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) llevará un registro reservado donde constarán los datos identificatorios de:

- 1) El niño o adolescente.
- 2) Los adoptantes: nombre, nacionalidad, domicilio y estado civil e institución nacional o extranjera que lo patrocinó, cuando corresponda.
- 3) Juzgado en que se tramitó el proceso respectivo.

CAPITULO XII TRABAJO

ARTICULO 161°.- (Principio general).- El estatuto de los adolescentes que trabajan se regulará conforme a las normas de este Código, leyes especiales, tratados, convenciones y convenios internacionales ratificados por el país.

ARTICULO 162°.- (Edad de admisión).- Fíjase en quince años la edad mínima que se admitirá en los adolescentes que trabajen en empleos públicos o privados, en todos los sectores de la actividad económica, salvo las excepciones especialmente establecidas en los artículos siguientes, y aquellas que, teniendo en cuenta el interés superior del niño o adolescente, conceda el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Cuando el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) no las otorgue de oficio, las excepciones deberán ser gestionadas por los padres o quien acredite la tutoría legal y establecer como mínimo el nombre del representante legal del menor, la naturaleza de la actividad y la jornada diaria.

ARTICULO 163°.- (Obligación de protección).- Para el caso de que los niños o adolescentes trabajen, el Estado está obligado a protegerlos contra toda forma de explotación económica y contra el desempeño de cualquier tipo de trabajo peligroso, nocivo para su salud o para su desarrollo físico, espiritual, moral o social.

Prohíbese todo trabajo que no le permita gozar de bienestar en compañía de su familia o responsables o entorpezca su formación educativa.

ARTICULO 164°.- (Tareas y condiciones nocivas de trabajo).- El Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) establecerá con carácter de urgente el listado de tareas a incluir dentro de la categoría de trabajo peligroso o nocivo para la salud o para su desarrollo físico, espiritual o moral, los que estarán terminantemente prohibidos, cualquiera fuere la edad del que pretenda trabajar o ya se encuentre en relación de trabajo.

Asimismo, el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) ante la presunción de la existencia de condiciones de trabajo peligrosas o nocivas para la salud o el desarrollo físico, espiritual o moral de los adolescentes solicitará la intervención de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la que se pronunciará, en un plazo no mayor a los veinte días corridos, sobre el carácter peligroso o nocivo de la actividad.

ARTICULO 165°.- (Situaciones especiales).- El Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) revisará las autorizaciones que ha prestado respecto al empleo de niños y adolescentes entre los trece y los quince años. Sólo serán permitidos trabajos ligeros, que por su naturaleza o por las condiciones en que se prestan no perjudican el desarrollo físico, mental o social de los mismos, ni obstan a su escolaridad.

ARTICULO 166°.- (Prevención, educación e información).- El Estado promoverá programas de apoyo integral para desalentar y eliminar paulatinamente el trabajo de estos niños y adolescentes.

La sociedad civil deberá prestar su concurso en las campañas preventivas, educativas e informativas que se desarrollen a fin de asegurar el bienestar del niño y adolescente.

Se consideran programas de educación en el trabajo, aquellos que, realizados por el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) o por instituciones sin fines de lucro, tienen exigencias pedagógicas relativas al desarrollo personal y social del alumno, que prevalecen sobre los aspectos productivos. En consecuencia, la remuneración que recibe el alumno por el trabajo realizado o por la participación en la venta de productos de su trabajo, no desvirtúa la naturaleza educativa de la relación.

ARTICULO 167°.- (Carné de habilitación).- Para trabajar, los adolescentes deberán contar con carné de habilitación tramitado gratuitamente ante el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), en el que deberá constar:

- A) Nombre.
- B) Fecha y lugar de nacimiento.
- C) Domicilio.
- D) Consentimiento para trabajar del adolescente y sus responsables.
- E) Constancia del examen médico que lo declare apto para el trabajo.
- F) Constancia de haber completado el ciclo de enseñanza obligatoria o el nivel alcanzado.

Si el examen médico fuera impugnado por la persona legalmente responsable del adolescente podrá, a su requerimiento, realizarse un nuevo examen.

ARTICULO 168°.- (Renovación).- Anualmente, todos los menores de dieciocho años que trabajen serán sometidos obligatoriamente a examen médico, a fin de comprobar si la tarea que realizan es superior a su capacidad física. En caso afirmativo deberán abandonar el trabajo por otro más adecuado.

La división técnica del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) podrá otorgar autorizaciones por períodos más breves, a los efectos de exigir la repetición del examen médico en todos aquellos casos que a su juicio sean necesarios para garantizar una vigilancia eficaz, en relación con los riesgos que presenta el trabajo o el estado de salud del niño o adolescente.

El responsable del niño o adolescente podrá impugnar el examen y requerir otro.

ARTICULO 169°.- (Jornada de trabajo).- Los adolescentes mayores de quince años no podrán trabajar más de seis horas diarias, equivalentes a treinta y seis horas semanales y disfrutar de un día de descanso semanal, preferentemente en domingo. El Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) podrá excepcionalmente autorizar a los adolescentes entre dieciséis y dieciocho años a trabajar ocho horas diarias, correspondiéndoles dos días continuos de descanso preferentemente uno en domingo, por cada cinco días de trabajo, previa evaluación técnica individual, estudio del lugar y puesto de trabajo teniendo en cuenta el interés superior del niño.

ARTICULO 170°.- (Descansos).- El descanso intermedio en la jornada de trabajo de los niños y adolescentes tendrá una duración de media hora, que deberá ser gozada en la mitad de la jornada y tendrá carácter remunerado. No se admitirá la jornada discontinua de trabajo ni horarios rotativos durante el ciclo lectivo. En todos los casos deberán mediar como mínimo doce horas entre el fin de la jornada y el comienzo de la siguiente.

ARTICULO 171°.- (Horarios especiales).- El Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) podrá otorgar permisos con carácter excepcional a adolescentes mayores de quince años para desempeñarse en horarios especiales, durante períodos zafrales o

estacionales, siempre que la actividad no interfiera con el ciclo educativo y que las condiciones de trabajo no sean nocivas o peligrosas. El descanso deberá ser concedido en la mitad de la jornada de trabajo.

El período de excepción podrá ser de hasta un máximo de tres meses.

ARTICULO 172°.- (Trabajo nocturno).- Los adolescentes no podrán ser empleados ni trabajar en horario nocturno, entendiéndose por tal a los efectos de este Código, el período comprendido entre las veintidós y las seis horas del día siguiente.

No obstante, el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) podrá autorizarlo excepcionalmente, teniendo en cuenta su interés superior.

ARTICULO 173°.- (Fiscalización y sanciones).- El Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) tendrá autoridad y responsabilidad en la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones específicas en materia de sus competencias respecto al trabajo de los menores de edad y sancionar la infracción a las mismas, sin perjuicio del contralor general del cumplimiento de las normas por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Las empresas o los particulares que no cumplan las obligaciones impuestas, serán sancionados por el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) con una multa de hasta 2.000 UR (dos mil unidades reajustables).

El producido de las multas será destinado al Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

ARTICULO 174°.- (Competencia).- Serán competentes para entender en las infracciones previstas en el artículo anterior, los Jueces Letrados de Familia de la capital, y en el interior del país los que la Suprema Corte de Justicia determine según su superintendencia constitucional, quienes actuarán siguiendo el procedimiento extraordinario previsto en el Código General del Proceso.

Será oído preceptivamente el Ministerio Público.

ARTICULO 175°.- (Recurribilidad).- La sentencia podrá ser apelada ante el Tribunal de Familia respectivo, cuya decisión hará cosa juzgada.

ARTICULO 176°.- (Responsabilidad de los padres o responsables).- Los padres o responsables de los niños y adolescentes que permitan o favorezcan que estos trabajen violando las normas prohibitivas consagradas en este Código, incurrirán en el delito previsto por el artículo 279 B. del Código Penal.

Constatada la infracción, el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) o cualquier persona responsable, formulará la denuncia al Juez Letrado en lo Penal que corresponda.

ARTICULO 177°.- (De la documentación).- El Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) determinará los documentos que el empleador deberá llevar y tener a disposición de la autoridad competente.

Estos documentos deberán indicar el nombre y apellido, fecha de nacimiento debidamente certificada, fecha de ingreso, tarea, categoría, horario, descansos intermedios y semanal y fecha de egreso, de todas las personas menores de dieciocho años empleadas por él o que trabajen para él.

ARTICULO 178°.- (Peculio profesional o industrial).- Todo adolescente que trabaje tendrá derecho de acuerdo a lo prescripto por los artículos 266 y siguientes del Código Civil, a la administración exclusiva del salario o remuneración que perciba, la que deberá serle abonada directamente, siendo válido el recibo que el empleador otorgue por tal concepto. Cualquier constancia en el recibo o fuera de él que pudiera implicar renuncia del adolescente a sus derechos, será nula.

ARTICULO 179°.- (Remuneración).- La remuneración del adolescente trabajador se registrará por lo dispuesto en las leyes, decretos, laudos o convenios colectivos de la actividad correspondiente.

ARTICULO 180°.- (Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).- En caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de un adolescente trabajador, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) investigarán las causas del mismo de acuerdo con las competencias específicas de cada organismo. Asimismo se verificará la realización de tareas prohibidas o el hecho de encontrarse el menor de edad en sitio en el que esté prohibida su presencia, en cuyo caso se considerará culpa grave del empleador, con las consecuencias previstas por el artículo 7° de la Ley N° 16.074, de 10 de octubre de 1989.

El empleador podrá eximirse de esta responsabilidad si prueba fehacientemente que el joven se encontraba circunstancialmente en el lugar y sin conocimiento de la persona habilitada para permitirle el acceso.

CAPITULO XV**DE LA INVESTIGACION DE LA
PATERNIDAD O MATERNIDAD**

ARTICULO 197°.- (Principio general).- Las acciones de investigación de la paternidad o maternidad se regularán exclusivamente por las disposiciones contenidas en este Capítulo.

La paternidad o maternidad declaradas asegurarán al niño y adolescente todos los derechos correspondientes a la filiación natural, en especial, los derechos hereditarios inherentes a la misma, así como los alimentos necesarios para su desarrollo y bienestar y el derecho a llevar los apellidos de quienes resulten declarados como sus padres.

ARTICULO 198°.- (Accionantes).- Podrán iniciar la acción:

- 1) El hijo, hasta los veinticinco años de edad. Durante la menor edad solamente podrá ser deducida la acción por la madre, el padre, o su representante legal, según correspondiere.
- 2) La madre o el padre, desde que se constata la gravidez, hasta que el hijo cumpla dieciocho años.

Si el padre o la madre fuere menor de edad, se le nombrará -curador "ad litem".

Si el padre o la madre menor de edad estuviere internado en el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), éste deberá solicitar al Juez Letrado de Familia, el nombramiento de curador "ad litem".

- 3) El Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), de oficio, cuando tenga conocimiento que el niño ha sido inscripto como hijo de padres desconocidos, o que ingrese al establecimiento un niño o adolescente sin filiación paterna o materna, o cuando un niño o adolescente lo solicite.

A efectos de esta acción, los Oficiales de la Dirección General del Registro de Estado Civil, darán cuenta, en el primer caso, de dicha inscripción.

El Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) requerirá de las oficinas respectivas un informe semestral de estas situaciones.

- 4) Cuando el presunto hijo o su representante legal ejercite conjuntamente con la acción de investigación de paternidad o maternidad la de petición de herencia, el Actuario, bajo su más seria

responsabilidad funcional, lo comunicará dentro de quince días al registro correspondiente para su inscripción que producirá los efectos enunciados en el artículo 685 de Código Civil. Si entre los demandados hubiese herederos testamentarios, o de los llamados a la herencia por el artículo 1025 del Código Civil, o cónyuge con derecho a gananciales o porción conyugal, cualquiera de ellos podrá obtener que se limite la interdicción a un bien o lote de bienes hereditarios cuyo valor cubra ampliamente la legítima del actor, el que sólo sobre ese bien o lote podrá perseguir el pago de su haber hereditario cuando le sea reconocida la filiación invocada y sin perjuicio de la acción personal que le corresponda por restitución de frutos.

ARTICULO 199°.- (Emplazamiento).- En los casos previstos por el numeral 3) del artículo 198, el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) iniciará los procedimientos judiciales ante el Juez de Familia competente, para que emplace al presunto padre o a la presunta madre del niño o adolescente con domicilio conocido.

Si no se conociera el domicilio, se le emplazará por edictos, según lo establecido por el Código General del Proceso.

ARTICULO 200°.- (Acción del presunto padre o la presunta madre).- Si el presunto padre o la presunta madre comparece dentro del término y expresa su voluntad de iniciar por sí mismo la investigación, lo hará ajustándose al procedimiento fijado por este Capítulo.

ARTICULO 201°.- (No comparecencia).- Si citado por segunda vez y bajo apercibimiento, el presunto padre o la presunta madre no comparece en autos, el Juez competente pondrá esta circunstancia en conocimiento del Ministerio Público quien podrá proponer dos o más personas idóneas para que entre ellos se elija el curador "ad litem" del menor, quien instaurará y proseguirá la acción.

Las citaciones previstas en el inciso anterior serán con plazo de diez días.

ARTICULO 202°.- (Administrador legal).- El Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) será el administrador legal de la pensión alimentaria

que se obtenga como consecuencia de la acción, a la vez que será responsable del bienestar, salud y educación del niño o adolescente internado en sus dependencias.

ARTICULO 203°.- (Procedimientos).- Las pretensiones que conciernen a las cuestiones de investigación de la paternidad o maternidad a que refiere este Capítulo, se tramitarán por el procedimiento ordinario previsto en el Código General del Proceso.

ARTICULO 204°.- (Admisión de pruebas).- En esta clase de juicios serán admisibles todas las clases de prueba. La no colaboración para su diligenciamiento sin causa justificada, será tenida como una presunción simple en su contra.

La excepción de mala conducta no tiene eficacia perentoria.

Deberá oírse preceptivamente al Ministerio Público.

ARTICULO 205°.- (Maniobras artificiosas).- Cuando de la denuncia sobre paternidad o maternidad, resultase el empleo de maniobras artificiosas, se pasarán los antecedentes al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Turno en la fecha que se invocó el engaño.

CAPITULO XVI

DE LA PERDIDA, LIMITACION, SUSPENSION O REHABILITACION DE LA PATRIA POTESTAD

ARTICULO 206°.- (Competencia).- Es Juez competente para conocer en los juicios de pérdida, limitación, suspensión o rehabilitación de la patria potestad, en los casos previstos en los artículos 285, 286, 295 y 296 del Código Civil, aunque la patria potestad sea ejercida de acuerdo con el artículo 177 del mismo Código, el Juez Letrado de Familia en Montevideo y los Jueces Letrados Departamentales del domicilio de los padres, y cuando el domicilio no sea conocido, el de la residencia del niño o adolescente.

ARTICULO 207°.- (Responsabilidad del Ministerio Público).- La demanda deberá ser deducida por el Ministerio Público siempre que tenga conocimiento de alguno de los hechos que puedan dar lugar a la pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad.

Cuando el Juez de Familia reciba información fehaciente que aconseje la separación de un niño o adolescente de su familia de origen, previo asesoramiento técnico, deberá dar cuenta al Ministerio Público a fin de que éste determine si ejerce la facultad conferida en el inciso anterior.

En todos los casos, deberá aplicarse lo dispuesto en el literal C) del artículo 35 de este Código.

Lo dispuesto en este artículo no modifica la posibilidad de deducir la demanda por quienes asimismo poseen legitimación activa (artículo 289 del Código Civil).

ARTICULO 208°.- (Procedimiento).- Las pretensiones que conciernen a las cuestiones de limitación, pérdida, suspensión o rehabilitación de la patria potestad, se tramitarán por el proceso extraordinario previsto en el Código General del Proceso (numeral 3) del artículo 349, y artículos 346, 347 y 350).

ARTICULO 209°.- (Administración de los bienes).- El Juez Letrado de Familia o los Jueces Letrados Departamentales, cuando lo consideren conveniente, podrán entregar la administración de los bienes del niño o adolescente a instituciones bancarias de notoria responsabilidad.

ARTICULO 210°.- (Reserva).- No serán de conocimiento público las situaciones previstas en los artículos 285, 286, 295 y 296 del Código Civil.

No obstante, el Tribunal podrá decidir la publicidad del proceso siempre que las partes consintieran en ello (artículo 8° de la Ley N° 16.699, de 25 de abril de 1995).